



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGEO)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS**

ANDRÉS FELIPE BERNAL RESTREPO

**GEOGRAFIAS DO DESPOJO EM “ESTADOS DE GUERRA”: PARADOXOS
DA REPARAÇÃO TERRITORIAL DE CAMPESinOS E INDÍGENAS NA SERRA
NEVADA DE SANTA MARTA - CARIBE COLOMBIANO**

**Recife
2021**

ANDRÉS FELIPE BERNAL RESTREPO

**GEOGRAFIAS DO DESPOJO EM “ESTADOS DE GUERRA”: PARADOXOS
DA REPARAÇÃO TERRITORIAL DE CAMPESINOS E INDÍGENAS NA SERRA
NEVADA DE SANTA MARTA - CARIBE COLOMBIANO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito para a obtenção do título de Mestre em geografia.

Área de concentração: Regionalização e Análise Regional

Orientador: Prof. Dr. Claudio Ubiratan Gonçalves
Coorientador: Prof. Dr. Fredy Paez Castro

**Recife
2021**

Catálogo na fonte
Bibliotecária Maria do Carmo de Paiva, CRB4-1291

B517g Bernal Restrepo, Andrés Felipe.
Geografias do despojo em “estados de guerra” : paradoxos da reparação territorial de campesinos e indígenas na Serra Nevada de Santa Marta – Caribe colombiano / Andrés Felipe Bernal Restrepo. – 2021.
338 f. : il.; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Ubiratan Gonçalves.
Coorientador: Prof. Dr. Fredy Paez Castro.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH.
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Recife, 2021.
Inclui referências e apêndice.

1. Geografia. 2. Territorialidade. 3. Camponeses. 4. Indígenas. 5. Nevada de Santa Marta, Serra (Colômbia). I. Gonçalves, Cláudio Ubiratan (Orientador). II. Paez Castro, Fredy (Coorientador). III. Título.

910 CDD (22. ed.)

UFPE (BCFCH2021-228)

ANDRÉS FELIPE BERNAL RESTREPO

GEOGRAFIAS DO DESPOJO EM “ESTADOS DE GUERRA”: paradoxos da reparação territorial de camponeses e indígenas na Serra Nevada de Santa Marta - Caribe Colombiano

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em geografia. Área de concentração: regionalização e análise regional.

Aprovada em: 25/01/2021.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Claudio Ubiratan Goncalves (Orientador)

Universidade Federal de Pernambuco

Prof^a. Dr^a. Juliana Grasiéli Bueno Mota (Examinadora Externa)

Universidade Federal da Grande Dourados

Prof. Dr. Fabio Mura (Examinador Externo)

Universidade Federal de Pernambuco

AGRADECIMENTOS.

Me permito hacer estos agradecimientos en mi lengua materna, español, pues siento así que puedo expresar mejor la gratitud que me dejan estos años de maestría.

Comienzo por el principio: enaltecer y reconocer la fuerza de Eliza Restrepo, mi madre, una mujer bogotana, madre soltera, que, pese al contexto patriarcal y machista de los noventa, decidió emprender un camino propio con sus dos hijas e hijo. A ella mis agradecimientos infinitos porque sin el apoyo, la fuerza y el amor que me ha brindado, no hubieran conseguido cumplir este sueño de estudiar en Brasil.

A mis queridas y luchadoras hermanas Liliana y Paola, y a mis 4 sobrinas, les agradezco por darme esa maravillosa oportunidad de crecer y reaprender mi masculinidad a través de diferentes generaciones de mujeres. Mis gratitudes a las 7 son insuficientes.

A Alonso, que partió felizmente antes de vivir la pandemia.

A los campesinos y campesinas con las que conversé las historias de dolor y dignidad durante los 3 años que participé en la oficina de Restitución de tierras de Santa Marta. Este trabajo fue un intento por rescatar y registrar esas memorias muchas veces silenciadas en las maneras de narrar y desear la Sierra Nevada de Santa Marta.

A esos campesinos y campesinas porque a pesar de la interiorización del miedo y el terror, tuvieron el coraje y la dignidad de denunciar.

Por el amor, la paciencia y lo aprendido, a Viviana. Sus aportes profesionales y personales fueron fundamentales en este proceso.

Por su amistad durante esos años en el Magdalena y por nuestros extensos debates sobre la Sierra y las paradojas de la restitución de tierras, a Jesús. Gran parte de nuestras conversaciones motivaron esta investigación.

A Oscar Antonio por las andanzas por la Sierra, siempre acompañadas de importantes reflexiones que aún guardo.

A mis colegas de la Unidad de Restitución de Tierras por sus aportes, opiniones y discusiones en defensa de la vida de las comunidades víctimas de abandono y despojo de tierras.

También agradezco a aquellos y aquellas que me abrieron las puertas para conocer sus experiencias en la ejecución de la política de reparación y restitución de tierras para campesinos e indígenas en el Magdalena.

A la amada Toncel por las complicidades, amistades y coincidencias espaciales. No sé qué hubiera sido de esos primeros meses de este *cachaco* en la Samaria, si ella y Lau no me hubieran abierto las puertas de su hogar.

A la vieja Liliana. Sin ella estas letras no hubieran sido posible.

A Jainer, el ‘*Guajaro*’, por su incondicional apoyo en lo cartográfico y topográfico, además por abrirme su hogar en Santa Marta durante el trabajo de campo.

Al *panita* de infancia y de fútbol, Pira, por estar ahí en la distancia durante esta pandemia, por su amistad y escucha paciente, y darme una mano con el diseño de infogramas, mapas y otras piezas informativas.

A mis profesores del pregrado en antropología en Bogotá, Mauricio Pardo Rojas, mi orientador, y Diana Bocarejo Suescún. Al primero, por trasmitirme el gusto por hacer etnografía en el Caribe Colombiano, y a Diana, por abrirme la cabeza en ese momento con los debates epistemológicos de las salas de aula y en las visitas de campo sobre la crítica al multiculturalismo colombiano.

Al Laboratorio de Estudios y Pesquisas sobre Espacio Agrario y Campesinado LEPEC, del Programa de Posgrado en Geografía (PPGEO) de la Universidad Federal de Pernambuco por abrirme sus puertas para formarme y conocer de cerca las realidades de los conflictos agrarios del nordeste brasileiro. A mi orientador Claudio Ubiratan Gonçalves: gracias por servir de puente para conocer personas maravillosas.

No puedo dejar pasar este espacio sin agradecer al sistema de educación superior público y gratuito brasileiro que me permitió a través de una beca del CNPq adelantar mis estudios de maestría. Esto en un momento crítico para la educación superior en Brasil que desde 2019 viene siendo desmontada por parte de este desgobierno xenófobo, misógino y racista que no sólo ha amenazado la política educativa y los recursos fundamentales para su funcionamiento, sino toda la estabilidad social, política y económica de todo un país que había ganado un cierto liderazgo en Latino América años atrás.

A mi amiga Mercedes por haber sido desde el comienzo de esta historia el puente que me trajo a Brasil, un sueño trabajado por 10 años. Le agradezco por todos los apoyos afectivos y académicos, enseñanzas y pensamientos libertarios.

A Su, Nachito y Hermano por hacerse mi familia en mis primeras andanzas en Recife. ¡Y claro! Por presentarme el carnaval de Olinda.

A los colegas del LEPEC, gracias por escucharme pacientemente y por enseñarme a través de sus temas de investigación.

A los camaradas con los que construí complicidades en las noches de La Varzea, Las Olindas y el centro de Recife. La querida Luana, Diego, Judson, Rosana, Anderson, Xando, quienes además de colegas, fueron familia y vecinos de barrio.

A Thiago por su sabiduría, por las conversas futboleras y por darle una leída a un texto lleno de españolismos.

A Carol por su conocimiento y agudeza que fueron determinantes en la etapa final de la escrita.

A Giba por creer en mí.

A Taíse por su camaradería y por haber propuesto un campo metodológico en *Salinas das Margarida*, en el *Reconcavo Bahiano*, que me permitió conocer un grupo de mujeres marisqueiras y pescadoras que lideran una importante lucha en sus territorios. A ellas mis agradecimientos por recibirnos y alimentarnos con ese universo culinario único de la cocina bahiana.

A la profesora Juliana Grasieli del programa de geografía de la *Universidade Federal de Grande Dourados* y el profesor Fabio Mura del programa de Antropología de la *Universidade Federal da Paraíba*, por tener la disposición del tiempo y la paciencia para leer mi texto como parte de la banca de defensa de disertación. Agradezco sus comentarios, críticas y sugerencias.

Al viejo Fredy Páez, por transmitirme sus claridades políticas frente a lo agrario en Colombia y, por sus aportes como coorientador.

A los indígenas *Pankararú*, *Xucurú*, *Karirí*, *Karirí-Xocó* por recibirnos en sus tierras, ofrecernos su alimento y compartir la palabra. Esos encuentros en campo fueron fundamentales en mi proceso de investigación.

A mi compañera, Olivia, por la complicidad y el afecto durante de los caminos andados. Por escuchar mis fracasos e inseguridades, y por siempre alimentar mí esperanza. Sin su amor, no hubiera sobrevivido a la pandemia y a la escrita de esta investigación.

A la señora Olivia por acogerme como un hijo más aquí en Brasil.

RESUMO

A formação regional do Caribe Colombiano se deu num contexto de interações e relações étnico-rurais, numa estrutura desigual de concentração e mercantilização da terra, resultado da instauração do desenvolvimento do modelo primário exportador neocolonial. Na Colômbia e em vários países latino-americanos, a alternativa de superação da crise das Repúblicas de finais dos anos oitenta e começo dos noventa, causada pelo saque histórico do comércio internacional, se baseio numa ideia de um Estado multicultural do tipo neoliberal. A nova concepção redentora buscou a inclusão legal e política dos grupos tradicionalmente marginalizados dos processos de formação da nação. Na Colômbia isto se materializou na formulação de um amplo catálogo de direitos e mecanismos diferenciais étnicos para sua proteção, mas, ao mesmo tempo, configurou uma série de conflitos e hierarquizações paradoxais entre os diversos grupos e culturas do campo historicamente subalternizados, que favoreceram a consolidação do modelo agrário baseado no latifúndio e a agroindústria definida por uma política econômica neoliberal. Esses paradoxos se agudizariam no complexo cenário de luta pela terra em territórios voláteis pelo conflito armado entre grupos guerrilheiros, traficantes, mercenários contra insurgentes e as forças armadas do Estado. Através de minha experiência como funcionário público no Escritório de Terras do Departamento de Magdalena, das conversas com campesinos/as, indígenas e funcionários/as do escritório, analiso como a reconfiguração do espaço e do sujeito campesino das áreas serranas dos municípios de Fundación e Aracataca na Serra Nevada de Santa Marta (SNSM), resultado dos anos da guerra contra insurgente de meados dos anos noventa, se deu paralelo ao auge de políticas e programas estatais e de organizações internacionais fundamentados nos blocos de direitos diferenciais étnicos do Estado multicultural. Isto facilitou a visibilidade das agendas das demandas territoriais indígenas através da criação de povos indígenas e a compra de terras, mas, paradoxalmente, sobre as realidades das geografias marginalizadas e precárias de famílias campesinas espoliadas e deslocadas forçadamente, em territórios de continuas atualizações da violência nas que os dispositivos da memória da guerra se ativam como papel aniquilador tanto do subjetivo como do coletivo e organizativo. Ditas consequências políticas do não reconhecimento campesino como sujeito especial de direitos que contrastam com o sistema de direitos diferenciais étnicos promovidos pela Constituição Política da Colômbia de 1991, aparecessem no decorrer da política de reparação e restituição de direitos territoriais da Lei 1448 de 2011, estruturando imagens contrapostas entre indígenas e campesinos na SNSM fundamentadas no

multiculturalismo neoliberal, que terminaram, por uma parte, negando a reparação territorial e a restituição das terras a um significativo número de famílias campesinas das localidades montanhosas dos municípios de Fundación e Aracataca; e, por outra parte, favorecendo o modelo fundiário de acumulação e concentração da propriedade.

Palavras-chave: Formação regional; territórios campesinos; geografias do despojo; estados de guerra; Estados multiculturais; conflitos interculturais; política de reparação territorial.

RESUMEN

La formación regional del Caribe colombiano se dio en un contexto de interacciones y relaciones de diversos grupos étnico-rurales, en una estructura desigual de concentración y mercantilización de la tierra, resultado de la instauración del desarrollo de un modelo primario exportador neocolonial. En Colombia y latino américa, la alternativa de superación de la crisis de las Repúblicas de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, causada por el saqueo histórico del comercio internacional, se basó en la idea de un Estado multicultural de corte neoliberal. La nueva concepción redentora buscó la inclusión legal y política de los grupos tradicionalmente marginalizados de los procesos formación de la nación. En Colombia, esto se materializó en la formulación de un amplio catálogo de derechos y mecanismos diferenciales étnicos para su protección que, al mismo tiempo, configuró una serie de conflictos y jerarquizaciones paradójicas entre los diversos grupos étnicos y rurales históricamente subalternizados, que terminaron favoreciendo en últimas, la consolidación del modelo agrario basado en la concentración de la tierra y la agroindustria, definida por unas políticas económicas de corte neoliberal. Estas paradojas se agudizarían en el complejo contexto de la lucha por la tierra en territorios volátiles como consecuencia del conflicto armado entre grupos armados de guerrillas, traficantes, mercenarios contrainsurgentes y fuerzas armadas del Estado. A través de mi experiencia como funcionario público de la Oficina de Restitución de Tierras del Departamento del Magdalena y de las charlas con campesinos/as, indígenas, funcionarios/as, analizo como la reconfiguración del espacio y del sujeto campesino de la sierra en los municipios de Fundación y Aracataca, resultado de los años de la guerra contrainsurgente de mediados de los años noventa, se dio paralelo al auge de políticas y programa estatales, así como agendas de organizaciones internacionales, fundamentados en los bloques de derechos diferenciales étnicos del Estado multicultural neoliberal. Lo anterior permitió posicionar las demandas territoriales indígenas a través de la creación de pueblos indígenas y las compras de tierras, paradójicamente, sobre las realidades marginalizadas y precarizadas de las familias campesinas despojadas y desplazadas forzosamente, en territorios de continuas actualizaciones de la violencia en las que los dispositivos de la memoria de la guerra se activan como papel aniquilador tanto de lo subjetivo como en lo colectivo y organizativo. Estas consecuencias políticas del no reconocimiento campesino como sujeto especial de derechos que contrastan con el sistema de derechos diferenciales étnicos promovidos por la Constitución Política de

Colombia de 1991, aparecen en el decorrer de la política de reparación y restitución de derechos territoriales de la Ley 1448 de 2011 que terminaría por reforzar esas imágenes contrapuestas entre indígenas y campesinos en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) que terminaron, por una parte, negando la restitución de un significativo número de las tierras campesinas; pero, por otra, favoreciendo el modelo y la lógica de acumulación y concentración de la propiedad de las elites locales.

Palabras clave: Formación regional; territorios campesinos; geografías del despojo; estados de guerra; Estados multiculturales; conflictos interculturales; política de reparación territorial.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fotografía Rua principal, povoado San Pedro de la Sierra, SNSM.....	18
Figura 2 - Fotografías Exposición “Las gentes del Magdalena” Museo del Oro Tairona Casa de la Aduana. Santa Marta, Magdalena.	22
Figura 3 – Fotografía da cara ocidental da SNSM e planícies dos municípios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca e Fundación	106
Quadro 1 - Aracataca e Fundación: beneficiários de terras da União em extensões maiores a 150 hectares 1961-1994	106
Figura 4 - Fotografía desde os territorios campesinos da cara ocidental da SNSM.....	119
Figura 5 - Fotografía trilhas das areas campesinas da cara ocidental da SNSM.....	123
Figura 6 - Fotografía casa de família de campesinos da vertente ocidental da Serra.....	125
Figura 7 - Fotografía povoado Kogui, corregimiento de Palmor, cara ocidental da SNSM.	127
Figura 8 - Imagem da imprensa nacional sobre a "marihuana costeña".....	142
Figura 9 - Imagen de imprensa “Inseguridad en la Costa, La guerra de la marimba”	144
Figura 10 - Imágem de jornal da cidade de Barranquilla sobre ações militares contra a cannabis na SNSM	146
Figura 11 - Imagen de jornal de circulação nacional sobre a guerra contra a guerrilha das FARC –EP.	185
Quadro 2 Figuras jurídicas de reconhecimentos legais dos territórios indígenas na SNSM - 1974 – 1999.....	148
Figura 12 - Fotografía de casa campesina nos territorios campesinos da cara ocidental da SNSM ...	212
Figura 13 – Foto povoado Kankawarma. Projeto "Plan de vida en comunidad Arhuaca de Kankawarwa" da Universidad del Magdalena.....	223
Figura 14 - Imagem jornal local Opinión Caribe. ¿Qué es la línea negra?	240
Quadro 3 - Proposta de ampliação dos resguardos indígenas da SNSM.....	232
Figura 15 - Fotografía de um periódico local de la ciudad de Santa Marta	259
Figura 16 - Presencia de actores armados nos cinco municipios do norte do departamento de Magdalena (2020).....	262
Figura 17 - Fotografía trabajador campesino sem terra da SMSM	302

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Departamento do Magdalena: área de terra da União titulada por sub-região (1961-2011)	114
Tabela 2	Convênios recursos para compra de terras do Programa Famílias Guardabosques Corazón del Mundo (FGBCM) (2009-2011)	227

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANT	Agencia Nacional de Tierras
AUC	Autodefensas Unidas de Colômbia
CAMGSNSM	Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira SNSM
CATSNSM	Programa Cordón Ambiental e Tradicional da SNSM
CCC	Corte Constitucional Colombiana
CCJ	Comisión Colombiana de Juristas
CGSM	Ciénaga Grande de Santa Marta
CIDH	Comissão Interamericana de Direitos Humanos
CIT	Confederación Indígena Tayrona
CNMH	Centro Nacional de Memória Histórica
CNMH	Centro Nacional de Memória Histórica
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
COIA	Consejo y Organización Indígena Arhuaca
CORPAMAG	Corporación Autónoma Regional del Magdalena
CORPOCESAR	Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOGUAJIRA	Corporación Autónoma Regional de La Guajira
CP91	Constitución Política de Colombia de 1991
CTBSNSM	Conselho Territorial de Cabildos da SNSM
DAE	Direção de Assuntos Étnicos
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DPS	Departamento de Prosperidad Social
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FGCM	Familias Guardabosques, Corazón de Mundo
FGN	Fiscalía general de la Nación
FNC	Federación Nacional de Cafeteros
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCODER	Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

INCORA	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MPC	Mesa Permanente de Concertación Nacional
OGT	Organización Gonawindúa Tayrona
OIK	Organización Indígena Kankuama
OWYBT	Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona
PNN	Parques Nacionales Naturales
PNNSNSM	Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta
PNNT	Parque Nacional Natural de los Tayronas
PNT	Parque Nacional Tayrona
RTDAF	Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
SGP	Sistema General de Participaciones
SNPS	Secretariado Nacional de Pastoral Social
SNSM	Serra Nevada de Santa Marta
UFPE	Universidad Federal de Pernambuco
URT	Unidad de Restitución de Tierras
ZRC	Zonas de Reserva Campesinas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS A UMA HISTÓRIA DOS COLONOS CAMPELINOS NA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA.	33
2.1	PROBLEMA AGRÁRIO, COLONIZAÇÃO E FRONTEIRA AGRÁRIA	34
2.2	TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES CAMPELINAS.	37
2.2.1	Território:	37
2.2.2	Territorialidade:	43
2.3	CONFLITOS E CONFLITUALIDADES EM TERRITÓRIOS DO CAPITAL	47
2.3.1	A desterritorialização entre as redes e os aglomerados de exclusão	48
2.3.2	Geografias do despojo em “estados de guerra”	52
2.3.3	Pretextos verdes e despojo	56
2.4	CONFLITOS INTERÉTNICOS E INTERCULTURAIS NOS BASTIDORES DA GLOBALIZAÇÃO DOS ESTADOS NEOLIBERAIS E MULTICULTURAIS	58
2.4.1	A jurisprudência multicultural na Latino América.	70
2.4.2	Multiculturalismo Operativo Na Colômbia	71
2.4.3	Hierarquização das populações rurais e o paradoxo dos campestinos	74
2.4.4	Estão as campestinas e os campestinos das bacias dos rios Fundación e Aracataca na Serra imersos num sistema de competição Inter-étnica?	78
2.5	APROXIMAÇÕES METODOLÓGICAS E PLANO DA DISSERTAÇÃO	88
3	CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DA SUB-REGIÃO NORTE DO DEPARTAMENTO do MAGDALENA (1940 – 1974).	101
3.1	LATIFÚNDIO E CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE: CONTEXTO DO MERCADO INTERNACIONAL NAS TERRAS FÉRTIS DAS PLANÍCIES DA CARRA OCIDENTAL DA SERRA	101
3.2	TERRAS DA UNIÃO, CLASSES AGRÁRIAS E A ESTRUTURA DE DOMÍNIO: CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA AGRÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ARACATACA E FUNDACIÓN	109
3.3	MIGRAÇÕES E OCUPAÇÕES DE COLONOS CAMPELINOS EM ÁREAS DE PRETENSÃO INDÍGENA: FORMAÇÃO SOCIOTERRITORIAL NAS GEOGRAFIAS DA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA	119
3.3.1	Fazendas de Café, empresários locais e estrangeiros	118
3.3.2	Povoamento, migração e processo de colonização campestina nas áreas de estudo	123
3.3.3	Campestinato e mercado mundial de machona: fluxos de capitais americanos e territorialização das economias ilegais (1975-1985).	132
3.4	CONCLUSÃO	135
4	RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL NO CONTEXTO DA GUERRA CONTRA INSURGENTE: MEDO E DOMINAÇÃO NOS TERRITÓRIOS SERRANOS	138
4.1	DE COMO A VIOLÊNCIA SE ENGENDROU: COMBOS MARIMBEROS E GUERRILHAS NO CONTEXTO DE UMA ECONOMIA CAMPELINA QUEBRADA (1982 – 1995)	139
4.1.1	Problema agrário, expansão dos cultivos de cannabis e violência	139
4.1.2	Guerrilhas e narco-mercenários na configuração socioespacial da Serra: cotidianidades das populações do campo	145

4.2	QUESTÃO AGRÁRIA E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS NO MARCO DA EMERGÊNCIA DOS CONFLITOS INTERCULTURAIS NA SNSM	155
4.3	ESCALAMENTO DA VIOLÊNCIA: AUGE E A CONSOLIDAÇÃO PARAMILITAR: (1996 – 2006).....	161
4.3.1	Fontes objetivas de mobilização contra insurgente: dominação política e propriedade	164
4.3.1.1	<i>Domínio da estrutura política institucionalizada e das práticas políticas</i>	166
4.3.1.2	<i>A custódia da propriedade: interesse e justiça</i>	171
4.3.2	oder contra insurgente: estrutura e organização.....	175
4.3.3	Definição política do inimigo	181
4.4	EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA CONTRA INSURGENTE: RECONFIGURAÇÃO SÓCIO ESPACIAL E ESCALAMENTO DA VIOLÊNCIA EM FUNDAÇÃO E ARACATACA.....	184
4.5	CONCLUSÃO	198
5	“ESTADO DE GUERRA”, “GEOGRAFIAS DO DESPOJO” E “HISTÓRIAS DA DIFERENÇA” NA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLÔMBIA	201
5.1	O TEMPO DA GUERRA COMO ESTADO: INTERIORIZAÇÃO DO MEDO E ORDEM NAS GEOGRAFIAS DO DESPOJO	203
5.2	DESENHAR FRONTEIRAS: HISTÓRIAS DA DIFERENÇA EM TERRITÓRIOS AMBIENTAIS INDÍGENAS E TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO CAMPESINO	214
5.3	PROGRAMA CORDÓN AMBIENTAL E TRADICIONAL DE LA SNSM .EM ANOS DA MILITARIZAÇÃO DA SERRA E AQUISIÇÃO DE TERRAS CAMPESINOS	218
5.4	MERCADO DE TERRAS DESDE A PERSPECTIVA DOS SOLICITANTES CAMPESINOS E CAMPESINAS DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS	229
5.5	COMO INTERPRETAR O MERCADO DE TERRAS NA SERRA?.....	235
5.6	CONFLITOS E TENSÕES INTER-ÉTNICAS NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS ESTATAIS E DE ORGANIZAÇÕES NÃO GUBERNAMENTAIS.	246
5.7	CONCLUSÕES	251
6	ESCRITÓRIO DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS NA TERRITORIAL MAGDALENA (2012-2019).	255
6.1	RESTITUIR DIREITOS TERRITORIAIS EM “ESTADO DE GUERRA”	259
6.2	NASCIMENTO DA EQUIPE ÉTNICA NO ESCRITÓRIO MAGDALENA: METAS E SUPERPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO DE CAMPESINOS EM RESGUARDOS E ÁREAS DE PRETENSÃO TERRITORIAL ÉTNICA	264
6.3	“TIERRITA CAMPESINA” VERSUS “DERECHOS TERRITORIALES ÉTNICOS”: PARADOXOS NAS NARRATIVAS DE FUNCIONARIOS E FUNCIONARIAS DA RESTITUIÇÃO DE TERRAS.....	270
6.4	BUROCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS E DIRETRIZES PARA TRAMITAR CASOS DE SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO CAMPESINA EM ÁREAS DO RESGUARDO ARHUACO E ZONAS DE AMPLIAÇÃO TERRITORIAL INDÍGENA.....	274
6.5	NEGAÇÕES DE DIREITOS DE REPARAÇÃO TERRITORIAL DE CAMPESINOS E CAMPESINAS DA SERRA: FRAGMENTAÇÕES TERRITORIAIS NO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO SOBRE TERRITÓRIOS INTERCULTURAIS.	285
6.6	CONCLUSÕES FINAIS: O PARADOXO CAMPESINO, SEM RESTITUIÇÃO E DESLOCADO.	304
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.	311
7.1	QUAIS SÃO OS CONTEXTOS AGRÁRIOS REGIONAIS EM QUE SURGIRAM OS CONFLITOS TERRITORIAIS QUE EXISTEM ENTRE AS COMUNIDADES CAMPESINOS E OS POVOS INDÍGENAS DA SNSM?	312
7.2.	QUE TIPOS DE SUJEITOS E DE ESPAÇOS AGRÁRIOS RESULTARAM DO SURGIMENTO DO CONFLITO ARMADO E EM PARTICULAR DOS ANOS DA VIOLÊNCIA CONTRA INSURGENTE NA SNSM?	314

7.3	QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E TERRITORIAIS DOS CONFLITOS TERRITORIAIS ENTRE AS COMUNIDADES CAMPELINOS E OS POVOS INDÍGENAS NO MULTICULTURALISMO OPERATIVO NA SNSM NO CONTEXTO DE DESLOCAMENTOS FORZADOS E AS GEOGRAFIAS DO DESPOJO?	319
7.4	QUE IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E TERRITORIAIS TIVERAM AS DIFERENCIAÇÕES ÉTNICAS DO MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL EM COLÔMBIA DURANTE OS ANOS DA INTERVENÇÃO DA POLÍTICA DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS, LEVANDO-SE EM CONTA O CONTEXTO ATUAL DA REGIÃO?	324
	REFERÊNCIAS	327
	APÊNDICE A - ENTREVISTAS	338

1 INTRODUÇÃO

Era a primeira vez que eu visitava o povoado campesino de San Pedro, na vertente ocidental da Serra Nevada de Santa Marta (SNSM) no Caribe Colombiano. Foi no meio de uma atividade de campo planejada no escritório da Unidade de Restituição de Terras (URT) do departamento de Magdalena, onde trabalhei como antropólogo da área social entre 2015 e 2018. Majoritariamente habitado por famílias campesinas, San Pedro também tinha algumas poucas moradias de indígenas Koguis. A curta estrada que atravessava o pequeno povoado era o cenário de uma das principais atividades dos campesinos da Serra em várias lojas onde se pesa e se compra café. Chegamos cedo e a atividade central desse dia girava em torno da comercialização de café. É agosto, temporada de colheita.

Figura 1 - Fotografia Rua principal, povoado *San Pedro de la Sierra*, SNSM



Fonte: Semana rural, agosto de 2018. Ver <https://semanarural.com/web/articulo/millennials-descubran-como-pueden-salvar-a-los-caficultores-de-la-sierra-nevada/618>

Nesse momento, tinha visitado outros povoados da parte norte da Serra mais focados no turismo, mas que guardavam algumas semelhanças com San Pedro. Eram áreas de famílias campesinas onde transitavam nos caminhos de entrada a essas *veredas* famílias indígenas que subiam e desciam desde as partes montanhosas mais altas. Particularmente em San Pedro, onde é relativamente nulo o turismo, viam-se umas poucas casas de famílias indígenas que pouco ou nada se relacionavam com os campesinos. As famílias de indígenas nos olhavam timidamente

enquanto chegávamos aos sítios que íamos visitar junto com famílias camponesas, outros funcionários da área social e o Exército Colombiano, quem acompanhava as jornadas de visita no marco da política de restituição de terras.

Minha experiência como funcionário do escritório da URT, a principal atividade desenvolvida consistia em analisar as solicitações de restituição para planejar as metodologias que seriam utilizadas durante os trabalhos comunitários com as comunidades vítimas de deslocamento forçado e despojo (espoliação) de terras; organizar as informações coletadas; análises de arquivo; e a construção de um documento de contexto para acompanhar e documentar as demandas de solicitações de restituição.

Sempre me gerou muita perplexidade a ausência dos relatos das populações indígenas em nossos trabalhos de campo como órgão estadual nas áreas onde conviviam tanto camponeses como indígenas. Era pouco o que sabíamos como equipe sobre esses vizinhos indígenas; não era nossa competência. Ao mesmo tempo em que entrei nesse órgão e começava meu trabalho na área social, criava-se um grupo interdisciplinar para trabalhar exclusivamente com as populações étnicas. Apesar de compartilhar o escritório com profissionais dedicados à questão étnica, a equipe da qual eu fazia parte estava apenas para reconstruir as dinâmicas de abandono e despojo¹ das populações camponesas; uma vez que, para os vizinhos indígenas, foram designadas outras equipes que eram especializadas no direito étnico.

Pensava naquilo que a Bocarejo (2015) falava sobre como não era claro como as representações da Serra Nevada no turismo, na antropologia, nos livros da escola, nos museus, e incluso, nas mesmas diretrizes do escritório onde eu trabalhava para reparar direitos territoriais, eram focadas hegemonicamente nos indígenas ocultando e silenciando as histórias de marginalidade das famílias camponesas com a quais tinha trabalhado durante anos no escritório. A frustração era tal que não conseguia compreender como algumas destas representações terminavam incidindo de maneiras diferenciais nas decisões de restituição de

¹ A categoria de despojo refere inicialmente à expropriação, espoliação ou roubo de uma terra no contexto do conflito armado e militar. O termo começou a ser utilizado na Colômbia com mais frequência pelas organizações sociais, as entidades da justiça transicional e a academia a partir da definição que deu a Lei de vítimas e restituição de terras no ano 2011. Embora, como mostrarei a profundidade no terceiro e quarto capítulo, o despojo, de acordo com Ojeda (2020), é entendido não apenas como o roubo ou retirada forçada de uma terra de famílias ou coletividades, mas como uma categoria que abrange multiplex dimensões de espoliação dos tecidos sociais, comunitários, organizativos, políticos, econômicos, culturais e sociais. Em português o termo despejo refere mais a uma ação específica pelo proprietário de um imóvel que está alugado de desocupar o bem pelo dono para retomar posse total. Embora a palavra despejo não é suficiente para caracterizar o que eu quero caracterizar em meu análise. Nesse sentido, considero mais pertinente a categoria despojo pois caracteriza a ação de espoliação de retirar não apenas uma terra ou um bem, mas da retirada de multiplex coisas dos sujeitos e as territorialidades agrárias e seus projetos de vida. Nesta dissertação utilizo principalmente o termo despojo dado que na Colômbia dita categoria tem um tradição mais ampla no marco das expropriações causadas no contexto do conflito armado.

terras e territórios das populações étnico-rurais numa complexa configuração regional fundada no modelo primário exportador neocolonial (SOLÁ, 2017). Contudo, com o passar dos anos, ficou compreendido que aquela situação era uma das representações mais explícitas, claras e violentas de como o Estado e diferentes atores têm entendido as realidades e as cotidianidades rurais em Colômbia e em territórios abertos à reprodução de capital nos que historicamente tem interagido com as comunidades do campo.

Como aponta Bocarejo (2015), estas observações são parte de um longo repertório de diferentes atores institucionais, organizações não governamentais (ong), livros, escritos de antropólogos e antropólogas, sentenças das cortes, textos jurídicos, entre outros; sobre as representações das realidades rurais da vida cotidiana das populações indígenas e camponeses na Colômbia. Repertórios que, como assegura Bocarejo, não são um conjunto de enunciações discursivas vazias e isoladas, pois “muitas delas se montam entre as práticas sociais que se distribuem e sedimentam de maneira desigual na vida cotidiana de milhões de habitantes das áreas rurais como urbanas do país” (BOCAREJO 2015, 23).

Esta pesquisa nasce dessa experiência derivada desse trabalho que realizei como funcionário da área social do escritório da URT no norte do país. No decorrer do tempo, o conhecimento da realidade local e regional, da interação com as vítimas, assim como as realidades das dinâmicas do escritório de restituição de terras; permitiu-me conhecer algumas das dinâmicas sociais e dos conflitos locais e regionais entre as populações rurais pela terra e territórios pouco abordados nos trabalhos acadêmicos. Também observar de perto como essas representações que sobre a Serra aparecem no dia a dia em relação às práticas e os discursos da política de restituição de terras, em grande parte fundamentada numa perspectiva problematicamente territorial do ordenamento jurídico e político da sociedade nacional contido na Constituição Política da Colômbia, promulgada em 1991.

Durante a minha permanência no escritório, presencie alguns conflitos por causa da disputa entre indígenas e camponeses pela terra. Eram evidentes nas reuniões de camponeses a existência de uma disputa pelo controle da propriedade da terra e pela imposição de visões socioculturais num contexto regional de concentração fundiária e pobreza generalizada, e que ligavam problemas agrários do passado com problemas territoriais contemporâneos como o saneamento ou de intrusão do *resguardo*² indígena; a expansão do *resguardo* em áreas

² Os “resguardos” são instituições políticas e administrativas dos povos indígenas herança da colônia que foram cancelados na primeira metade do século XX pelo governo republicano. Depois de várias lutas do movimento indígena para sua reconstituição, essa figura territorial ganhou uma nova visibilidade com a ampliação e constituição jurídica dos “resguardos” com a Constituição Política de 1991. No caso dos “resguardos” indígenas, os povos são os proprietários da parcela do espaço, além de estabelecer a comunidade e a autoridade sobre aquele

campesinas; a constituição de programas e planos de gerenciamento do território com ênfase nas comunidades indígenas; e o acesso à reparação territorial no marco da política de restituição de terras.

Esta dissertação parte de uma asseveração geral em que se entende que o campesinato se constitui historicamente (Instituto Colombiano de Antropología e História, 2018), declaração que surge num contexto de perda, em diferentes campos, do reconhecimento histórico destes sujeitos na SNSM. Basta lembrar da visita ao *Museo del Oro Tairona* na casa da Aduana no centro da cidade de Santa Marta, capital do Departamento do Magdalena, à exposição “*La gente del Magdalena*”. Pendurado numa das paredes da primeira sala, um mapa representava “*la gente de rio*”, “*gente de sabana*”, “*gente mar*” e “*gente de la Sierra*”; cada uma correspondente às sub-regiões ambientais e ecossistêmicas do Magdalena. No último grupo, “*gentes de la Sierra*”, era manifesto como esse espaço era representado como lugar dos povos indígenas, em negação às territorialidades campesinas. Um explícito esquecimento, como se não existissem. Era um claro exemplo das representações e concepções contraditórias que se constroem sobre a Serra Nevada de Santa Marta e o *subordinado* papel que as comunidades campesinas, cuja representação se reduz nas diferentes salas do museu a dois pequenos parágrafos de letra minúscula e sem foto numa parede da última sala da exposição, que contrastava com a majestade das peças culturais (fotos, roupas, artefatos cerimoniais, etc.) das tradições dos quatro povos indígenas que ali habitam: arruados (ou ijka como eles se autoreconhecem), koguis, kankuamos e wiwas.

território. Ao longo deste documento, dado que a tradução da palavra do espanhol para o português não tem o mesmo significado, para o frente vai-se utilizar a palavra *resguardo* em itálica, conservando o significado do espanhol.

Figura 2 - Fotografias Exposição “*Las gentes del Magdalena*” Museo del Oro Tairona Casa de la Aduana. Santa Marta, Magdalena.



Fonte: Fotografias próprias tomadas durante trabalho de campo em fevereiro de 2019.



Fonte: Fotografias próprias tomadas durante trabalho de campo em fevereiro de 2019.



En las estribaciones serranas, hasta los 1.500 msnm, altitud máxima del cultivo del café, viven también comunidades campesinas. Descienden de familias que llegaron de Puerto Rico, traídas por los dueños de las haciendas cafeteras a finales del siglo XIX, y de campesinos del Tolima, Santander y otras regiones que a mediados del siglo XX buscaron tierras para sembrar cultivos importantes para la economía nacional, como el café y la caña de azúcar.

Los campesinos de sectores como Minca, La Tigrera, Campano y La Tagua, cerca de Santa Marta, viven de cultivos de pancoger y de la cosecha de productos de temporada para el mercado: en noviembre recolectan los granos maduros de café y en junio, aguacates y mangos.

Fonte: Fotografias próprias tomadas durante trabalho de campo em fevereiro de 2019.

Logo depois da sanção da Constituição de 1991 e do reconhecimento dos direitos étnico-territoriais para os povos indígenas e as comunidades afro colombianas, as reivindicações sobre o espaço fizeram-se ainda mais fortes, confundindo-se com os velhos conflitos da luta pela terra e a violência sociopolítica que teriam na SNSM implicações políticas muito dissimiles entre as comunidades étnico-rurais do campo Colombiano. A confusão dos corroidos problemas agrários e novas reivindicações sociais e políticas das populações indígenas para ser reconhecidas pelo Estado Colombiano gerou novos conflitos de caráter territorial ligados aos históricos problemas agrários e os problemas próprios do desenvolvimento econômico e

territorial (RINCON, 2013). Contudo, o desenvolvimento e a implementação dos estatutos contidos na Constituição de 1991 geraram novos conflitos entre indígenas, camponeses e afrodescendentes pelo acesso à terra e pelo reconhecimento estatal, em territórios abertos a acumulação do capital e a concentração fundiária.

A inclusão das comunidades indígenas no ordenamento político e jurídico do Estado, através dos sistemas de direitos diferenciais, desencadeou nas realidades territoriais uma multiplicidade de fenômenos e conflitos que mais que ser interpretados como um conflito entre classes sociais, são parte de uma perspectiva dos conflitos interculturais. As mudanças sociopolíticas foram manifestas. Apesar de que se assumiu a presença histórica das comunidades étnicas como parte da sociedade Colombiana contemporânea, fato que por mais de 500 anos tinha sido negado; as comunidades que não tiveram o mesmo reconhecimento de direitos baseados no critério étnico ficaram excluídas e, às vezes, hegemonizadas pelas organizações étnico-territoriais (RINCÓN, 2013; DUARTE, 2015).

Como fala Duarte (2015), uma perspectiva no que se privilegia o olhar das relações interculturais e seus conflitos num processo de interação histórica entre as culturas do campo, busca complementar conceitualmente as leituras do território, com tipologias que condensem as diferentes visões para enriquecer as análises e a caracterização territorial com a função de facilitar ações mediadoras entre os atores étnico-rurais. Acordos territoriais coletivos, para se pensar e refletir estrategicamente nas relações com os territórios, as instituições e demais atores do campo (DUARTE, 2015).

Tanto no campo Colombiano como latino-americano, num momento de desgastados governos reacionários e autoritários de ultra direita, enfrentei o desafio da atual realidade de pandemia que se espalhou em escala mundial no primeiro semestre do ano 2020 e, em decorrência disso, vivenciamos o aprofundamento da desigualdade histórica das comunidades étnico-rurais e populações das periferias urbanas frente ao acesso à saúde, à educação, a serviços básicos; o aprofundamento do velho problema agrário; a reconfiguração do ordem global; e o estabelecimento dos Estados de exceção com maiores controles sociais baixo a forma de violação dos direitos, de militarização de territórios, de repressão dos setores mais vulneráveis. Como foi falado nos vários artigos, documentos, pasquines, escritos que têm circulado nestes 5 meses, torna-se difícil pensar neste mundo anterior à grande pandemia atual fosse um mundo “sólido”, em termos do sistema econômico e social. O vírus atual nos leva a perguntar como pensar a sociedade daqui em diante; como sair da crise? É o Estado o caminho

para essas mudanças? Que tipo de Estado precisamos? Trata-se de pensar o futuro civilizatório à beira do colapso sistêmico.

A disputa por um novo ordenamento social produtivo do território e o desafio da interculturalidade aponta que nossos países do sul aparecem como processo que se enfoca no relacionamento, na interação e os acordos entre as culturas do campo, nas que se privilegiam as diversas visões que têm sobre os usos e a conservação da terra em regiões que historicamente têm se privilegiado expressões globais e nacionais do capitalismo rural. (DUARTE 2015).

Alguns dos campos realizados durante o meu mestrado no departamento de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) justificam esses desafios. No primeiro ano, visitei povoados das margens do rio San Francisco, no interior nordestino, realidades do campo onde também convivem os sonhos de populações indígenas, campesinas, posseiros e quilombolas em territórios abertos à territorialização do capital que datam dos tempos da colônia. Em demarcações como as dos indígenas Pankararus, por exemplo, os conflitos territoriais entre indígenas e posseiros surgiam nas falas dos primeiros, mas não eram problematizados nos exercícios cartográficos e de mapeamento de algumas pesquisas (ANDRADE *et. Al*, 2016), como nas discussões metodológicas entre o grupo que participamos do campo da disciplina Metodologia dos Estudos sobre Espaço Agrário e Campesinato.

Mesmo que rigoroso, o exercício histórico e de mapeamento dos Pankararus no território demarcado, aspecto fundamental nas lutas pelo reconhecimento territorial destas comunidades, este não problematiza o conflito entre as comunidades indígenas e os posseiros como ferramenta para a constituição de acordos de manejo e planejamento estratégico desses territórios abertamente interculturais. A simples vista, às cisternas localizadas em frente das casas dos “intrusos” posseiros –como são denominados pelos indígenas-, essas comunidades também recebem recursos do estado através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Anos depois, falaria com algum dos filhos desses posseiros desinstruídos que relataria sua frustração por ter sido deslocado das terras nas que historicamente tinha morado sua família por que sua avó, “por burro”, não se autoreconhecem como Pankararú.

Num dos textos sugeridos para o campo chamado “Etnomapeamento da Terra Indígena Entre Serras Pankararu” (2016), no mapa sobre as principais ameaças, junto como as torres eólicas, a antena de comunicações, o corte ilegal de madeira, e o lixão, apareciam os posseiros. Me pergunto sobre quais são os relatos das histórias dos posseiros? Por que não têm voz em toda a publicação, se quando estávamos em campo passávamos em frente de suas casas? Que tipo de responsabilidade cabe na academia silenciar estas vozes? Que consequências políticas

têm esses caminhos metodológicos? Qual é a historicidade das relações interculturais territoriais entre indígenas e posseiros?

Uma das certezas com que voltei do campo dessa aula metodológica de 2018 durante meu mestrado na UFPE, era que apenas tínhamos escutado os relatos dos Pankararus, relatos que não julgo, a princípio, como certos ou não certos, como melhores ou piores, mas que ao tempo silenciam essas outras territorialidades que compartilham com eles essa condição de subalternidade frente a estrutura agrária latifundiária.

São também os conflitos que se apresentam entre os indígenas Pataxó e os assentamentos do MST na disputa por três áreas de terra em Prado, na Bahia, onde coloca-se a questão de como são construídas identidades diferenciadas e opostas (Pataxó/' sem-terra'), marcando limites entre agentes sociais que compartilham redes de parentesco e de compadrio comuns. Estes limites estão marcados por valores étnicos e de classe, entendendo que muitos destes são colocados pelas formas jurídicas do estado nação (CAETANO, 2003). Justamente se problematiza como a diferença legal de acesso a terras gera conflitos entre os "despossuídos" de modo general com consequências políticas na luta.

Um olhar crítico sobre as constituições nacionais de finais dos anos oitenta e começo dos noventa (com a abertura para o reconhecimento de direitos territoriais e de participação política historicamente negados às comunidades indígenas e afrodescendentes) não desconhece como esse período foi resultado da acumulação de vários anos de processos de lutas, resistências e organização popular em Latino América. A discussão planteada desde uma lente dos conflitos interculturais não nega as reclamações históricas territoriais, políticas, sociais e culturais de longa data dos povos indígenas e afro colombianos, que sofreram desde a implantação do genocídio, o desenraizamento e a escravização pelo colonialismo europeu.

No entanto, o dinamismo do território sobre a consolidação de um modelo fundiário que privilegiou a concentração das melhores e mais produtivas terras em poucos derivou em que a pouca terra disponível nas margens agrárias e menos produtivas, fosse disputada entre essas comunidades aborígenes e as populações mestiças que se configuraram através de práticas campestres, também marginalizadas, sem acesso a terras e com uma continua condição de deslocamento. Com a implementação da Constituição Política de 1991 na Colômbia, os problemas do passado se juntaram com os problemas do presente. Ao passo que se abriram espaços de reconhecimento de direitos territoriais diferenciados, também surgiram consequências políticas e sociais daqueles não marcados pelas diferenças étnicas. Mesmo que o tipo de Estado instituído a partir do modelo multicultural da Constituição de 1991 promoveu

direitos, participação política e autonomias dos grupos étnicos limitou a participação de outras comunidades não marcadas etnicamente.

O interesse da análise desta dissertação é como esse modelo multicultural configurou, finalmente, diferentes conflitos entre os vizinhos subalternos que pouco mexeram com o modelo agrário latifundista e, pelo contrário, aumentou as fragmentações entre as populações étnico-campezinas que variam em seus confrontos dependendo das histórias locais.

Desse modo, não pretendo criticar, a princípio, as pretensões territoriais dos indígenas, mas sim mostrar a manipulação do multiculturalismo neoliberal que termina confrontando os subalternos sem afetar as verdadeiras estruturas do poder econômico e política de escala local e nacional.

Como falei antes, não julgo, a princípio, como certos ou não certos, como melhores ou piores as demandas territoriais de um ou outro povo do campo. Meu interesse maior é evidenciar e analisar os silenciamentos que também se apresentam nos cenários do modelo de gestão das diferenças culturais na nação colombiana, que ao que à medida que dão umas “aberturas democráticas” para esses “outros”, também silenciam outras territorialidades que compartilham essa condição de subalternidade e dominação frente à estrutura agrária latifundiária e de poder político, resultado da história colonial. Trata-se de desnudar as aparentes virtudes do Estado multicultural-neoliberal para repensar os caminhos de governanças territoriais locais.

Acho que um dos desafios da atualidade é responder a uma pergunta feita pela revista *Controvérsia* sobre interculturalidade, convenções e governanças territoriais: como tornar efetivos os direitos territoriais das populações rurais na Colômbia? Pergunta que também cabe para o resto da América Latina. Esse desafio que as organizações étnico-campezinas e o Estado Colombiano enfrentam, além de resolver o histórico problema agrário, é a provocação de construir ordenamentos territoriais que fortaleçam espaços de convivência social e produtiva (DUARTE, NEIRA, 2015).

A conciliação entre os diferentes atores do campo se alinha como única forma possível de proceder diante das aspirações territoriais dos distintos grupos; como caminho para dotar de ferramentas epistemológicas para repensar as alianças e as estratégias coletivas de luta em contraposição ao modelo econômico extrativo hegemônico. A relevância atual da interculturalidade em Colômbia emerge associada a um modelo multicultural que, “entregou valor ao étnico, mas, de algum jeito, seccionou a população rural desde a diferenciação” (DUARTE 2015, 18).

Esta circunstância, relacionada com a ausência de um exercício de ordenamento territorial interétnico e intercultural que integre as diferentes visões frente ao território (CRISTANCHO, 2016), tem causado numerosos conflitos pela terra e pela igualdade de direitos entre os atores subalternos rurais que convivem no campo. Depois do pacto constitucional de 1991, as políticas de inserção e acesso a direitos diferenciados para as minorias relacionadas às lógicas multiculturais tiveram implicações sociopolíticas e territoriais daquelas populações que não se autoreconhecem com critérios étnicos, que são pobremente incluídos nas prerrogativas estatais (DUARTE 2015), aspectos que chegam inclusive, a estar presentes nas práticas e discursos das funcionárias e funcionários encarregados da implementação da política de reparação territorial no marco da justiça transicional com efeitos devastadores nas demandas territoriais campesinas.

Precisamente, esta pesquisa é escrita num período em que é preciso realizar um aporte fundamental à reflexão que o país deve fazer sobre o balanço que deixa as ações no marco da política de restituição de terras, que permita projetar qual será a perspectiva futura desta política adiada até agosto de 2030 em que se contemple a compreensão ao debate dos conflitos interculturais e interétnicos que resultaram da implementação de quase 30 anos das formações políticas diferentes a partir do processo constituinte de inícios dos anos noventa em Colômbia, mas que ainda tem implicações no cenário da justiça transicional e de reparação territorial das vítimas de deslocamento forçado e despojo de terras em Colômbia.

Tendo em consideração estes aspectos, por meio de uma análise local com perspectiva regional, estudei os conflitos territoriais desenvolvidos entre comunidades rurais indígenas e campesinas das áreas montanhosas dos rios Aracataca e Fundación com a promulgação da Constituição Política de Colômbia de 1991 até hoje. Particularmente, intento caracterizar e explicar as consequências sociopolíticas nas iniciativas territoriais dos campesinos solicitantes de restituição de terras desses setores no escopo da implementação da política de reparação territorial dessa sub-região, a partir do confronto entre as representações fixas entre o que significa ser indígena e o que significa ser campesino na Serra. O foco do trabalho está nas disputas territoriais num ambiente intercultural de interações históricas entre as comunidades étnico-rurais, procurando responder as seguintes questões:

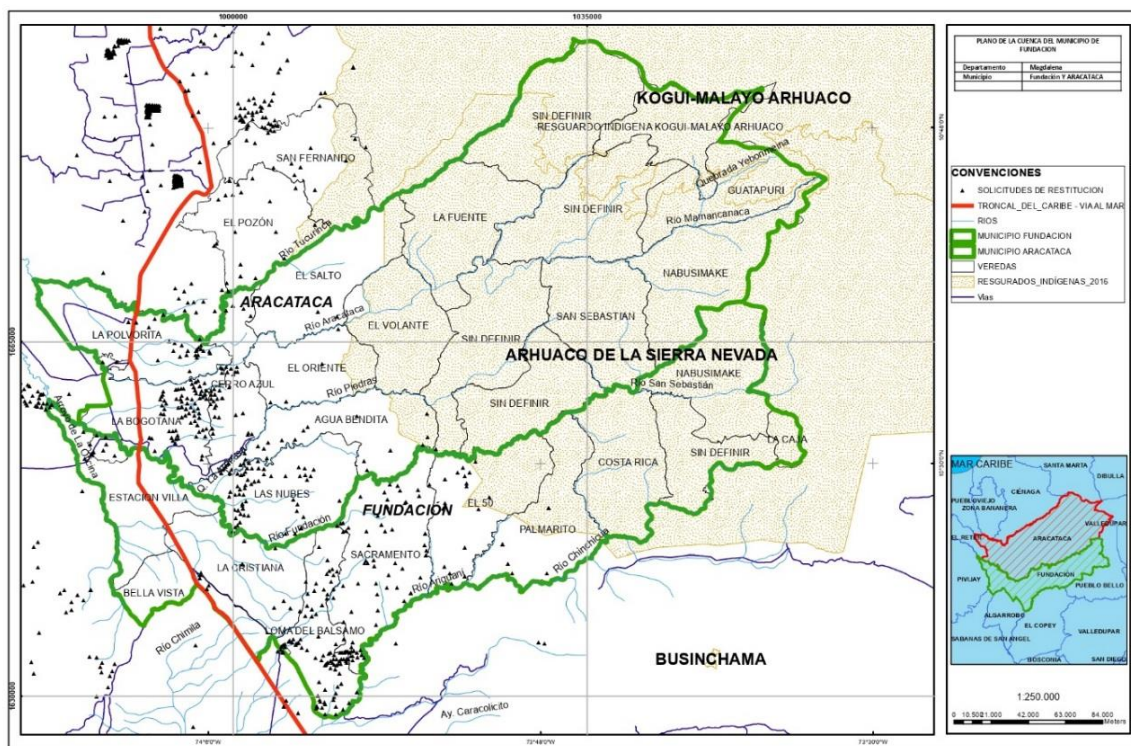
- Quais são os contextos agrários regionais em que surgiram os conflitos territoriais que existem entre as comunidades campesinas e os povos indígenas da SNSM?

- Que tipos de sujeitos de organizações e de espaços agrários resultaram do surgimento do conflito armado e geopolítico e particularmente dos anos da violência contra insurgente na SNSM?
- Quais são as implicações sociais, políticas e territoriais dos conflitos territoriais entre as comunidades campesinas e os povos indígenas do multiculturalismo operativo na SNSM no contexto de deslocamentos forçado e nas geografias do despojo?
- Que implicações políticas e territoriais tiveram as diferenciações étnicas do multiculturalismo neoliberal em Colômbia durante os anos da intervenção da política de restituição de terras, levando-se em conta o contexto atual da região?

A marginação da memória das trajetórias campesinas frente à exacerbada produção acadêmica sobre os indígenas da Serra, coloca meu foco nas histórias das famílias campesinas deslocadas pela violência que solicitaram ao escritório da URT a restituição de suas terras localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Aracataca e Fundación, em áreas das reservas do *Resguardo Arhuaco da Sierra* e *Resguardo Kogui Malayo Arhuaco*; áreas de pretensão territorial indígena (Mapa 1); zonas de Reserva florestal; e zonas de solicitação do povo arhuaco da restituição de seus direitos territoriais no marco do decreto étnico da lei de vítimas.

Durante os anos no órgão encarregado da restituição no departamento do Magdalena, trabalhei com vítimas campesinas de outros setores da Serra nos que conheci em menor medida às tensões e conflitos que surgiram durante a intervenção nas que existiam justaposições de solicitações de restituição de terras campesinas (pontos pretos) em áreas dos resguardos indígenas e áreas de ampliação deste (Mapa 1). Essa situação se apresentava em maior intensidade nos setores serranos Aracataca e Fundación tal como escutava e discutia com vários de meus colegas. Por tal razão, esta pesquisa explica esse tipo de conflitos a partir das trajetórias das famílias campesinas, e as experiências relatadas pelos funcionários e funcionárias que participaram das fases da intervenção da política de restituição nesses setores.

Mapa 1 - Localização das zonas de estudo. Terras campesinas solicitadas em restituição justapostas com resguardos indígenas e áreas de pretensão territorial indígena em Aracataca e Fundación



Fonte: Mapa feito junto com funcionário da URT territorial Magdalena durante a entrevista em trabalho de campo. 2019

Nesse sentido, esta dissertação tem dois grandes blocos de análises: o primeiro, onde descrevo a formação social dos territórios campesinos da Serra relacionadas com o processo de acumulação do capital regional nos contornos difusos do legal e ilegal, mostrando, por uma parte, o processo de chegada e ocupação campesina da Serra (1940 – 1975); e por outra, a territorialização da violência no Caribe Colombiano e essas localidades da Serra, reproduzindo umas geografias do deslocamento forçado e do despojo de terras que continuamente se atualizam (1976 – 2002).

O segundo bloco, focalizo a atenção na discussão sobre como, depois da sanção da Constituição de 1991 e do reconhecimento dos direitos étnico-territoriais para os povos indígenas e as comunidades afro Colombianas, as reivindicações sobre o espaço fizeram-se ainda mais fortes, confundindo-se com os velhos conflitos da luta pela terra e a violência sociopolítica que teriam resultados e implicações políticas e territoriais muito dissimiles entre os grupos étnico-campesinos do campo Colombiano. A mistura dos corroídos problemas agrários e novas reivindicações sociais e políticas das populações indígenas para ser reconhecidas pelo Estado Colombiano, gerou novos conflitos de caráter territorial ligados aos

históricos problemas agrários e os problemas próprios do desenvolvimento econômico e territorial (RINCON, 2013).

Como aponta Bocarejo (2015), para “entender as formações políticas que o multiculturalismo permite, proíbe ou impede é necessário levar a cabo um análises histórico que tenha em conta especificidades temporais e espaciais” (BOCAREJO 2015, 34). Desde essa perspectiva, a discussão da segunda parte da dissertação se foca no que Bocarejo propõe respeito às implicações políticas dos campesinos e campesinas da Serra durante o processo da construção dos indígenas como *outros* etnicamente distintos, em temas que vão desde as práticas de uso e posse da terra, até as formas de conceber, narrar e desejar um lugar, processo denominado por Bocarejo como *articulações espaciais de indianidade* (BOCAREJO, 2015).

Analiso essas *articulações espaciais de indianidade* das que fala Bocarejo, em dois momentos particulares: i) um, o período de escalamento do conflito armado, a hegemonia e desmobilização das forças paramilitares no Magdalena, num contexto de um mercado regional de compra e venda de terras, que para a Serra, significou um número importante destas em que o comprador foi o Resguardo Arhuaco da Serra e o vendedor, famílias de campesinos e campesinas deslocadas forçadamente das parte altas dos rios Aracataca e Fundación (2002 – 2011). Sobre este paradoxo, o segundo período de análises na segunda parte da dissertação, é o momento da implementação da política de restituição de terras nas partes altas dos rios Aracataca e Fundación (2011-2019).

Fecho esta introdução me desculpando com o público leitor em português sobre algo que certamente vocês já perceberam nestas primeiras linhas: os constantes espanholismos que vão encontrar ao longo texto. Espero e desejo que em que pese as minhas limitações gramaticais e ortográficas no português, não se perca a essência das ideias de fundo com as que quero contribuir no debate sobre os estudos territoriais no Brasil, na Colômbia e em geral, em Latino América.

2 APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS A UMA HISTÓRIA DOS COLONOS CAMPELINOS NA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA.

Nesta secção abordarei alguns elementos teóricos que acompanham as discussões das duas partes propostas para desenvolver esta pesquisa.

Começarei abordando alguns conceitos da geografia sobre território campesino (CRISTANCHO, 2016) e territorialidades campesinas (RAFFESTIN, 1980), que ajudam na compreensão destas populações rurais da SNSM, constituídas historicamente a partir de relações não apenas com as tendências de acumulação do capital e a produção agropecuária, mas também com os processos de relacionamento e interação histórica com as diferentes culturas do campo.

Posteriormente, analiso alguns dos paradoxos do multiculturalismo neoliberal e as formações de alteridade, advertindo as consequências políticas que emergem nestes cenários. Com autores e autoras da antropologia como Briones (2005), Rincón (2013), Duarte (2015), Bocarejo (2015) caracterizo a produção do lugar dos “outros” nas políticas estatais, a partir de processos de diferenciação e desigualdade social que se alimentam de complexas configurações espaciais as quais acolhe um amplo espectro de dispositivos que vão desde o uso e tenência da terra até as formas de imaginar um lugar (BOCAREJO, 2015, pág. 40).

Esta discussão questiona às exclusivas associações históricas da Serra baseadas em categorias e critérios de identificação e classificação étnica (BRIONES, 2005), e propõe entender e pensar essas ruralidades montanhosas a partir de um olhar interétnico e intercultural dos territórios, resultado das múltiplas histórias das redes dos povos subalternizados desde o colonialismo europeia em que primou o modelo agrário de concentração da propriedade. Com a constituição de 1991 na Colômbia, as interações históricas interétnicas e interculturais do contexto local da SNSM e regional do Caribe Colombiano, entraram em novos conflitos pelo acesso e uso da terra, com multiplex implicações políticas e territoriais desiguais entre indígenas, campesinos e afrodescendentes.

As histórias da SNSM constituíram-se numa série de relações e disjunções (RAFFESTIN, 1980) entre indígenas e campesinos, que, no marco da construção de um estado multicultural, significou evidentes consequências políticas para os grupos campesinos dessas localidades Serranas, em complexos contextos sociopolíticos, reconfigurados pelo terror e pela violência que produziram uns territórios e uns sujeitos específicos.

Por fim, na última parte da discussão teórica analiso desde uma perspectiva da etnografia de estado (GUPTA, GARCIA, 2015), como este sistema de direitos diferenciais

promovidos desde a Constituição de 1991, estão implícitos nas práticas e discursos dos profissionais que participaram das ações durante a política de restituição de terras, com evidentes consequências para a reparação dos direitos territoriais das populações camponesas que terminaram deslocados e expropriados de suas terras, com fracos processos organizativos e políticos de resistência que refletem na consolidação de demandas territoriais pela permanência nos territórios. Neste ponto, aponto um olhar além das tipologias camponesas de resistências e formas de luta no campo.

2.1 PROBLEMA AGRÁRIO, COLONIZAÇÃO E FRONTEIRA AGRÁRIA

Colômbia é um país com um problema agrário de ordem estrutural. O acesso à posse e o uso da terra está ligado às várias guerras civis nacionais e regionais, que se deram nos passados 200 anos e que motivaram uma grande mobilidade populacional no país (FAJARDO, 2006; PALACIOS, 2011; ILSA, 2013). As confrontações tem estado relacionadas a acumulação da terra e o modelo de desenvolvimento econômico, fatores estreitamente ligados à concentração fundiária e o papel do rural. A estrutura agrária na sub-região da SNSM, o Caribe e o território nacional se constituiu através da concentração de terras por meios ilícitos, como a usurpação, em complexos contextos de guerras civis e com a aquiescência e a tolerância das autoridades, “*quines mediante lá gestión de rábulas y leguleyos, han cohonestado el despojo, lo cual es una herencia colonial*” (Patiño, 2002, 109). (ILSA, 2013, p. 5).

Desde os começos do período colonial, conta o professor Dario Fajardo (2002), o regime agrário gerou uma dinâmica que levou a concentração do controle da terra, primeiro pela igreja e depois pelas incipientes elites regionais, nacionais e estrangeiras, que consolidaram grandes fazendas e latifúndios, ao tempo que fizeram as “*reducciones*” de comunidades indígenas

... mediante todas las cuales se configuró un sistema dirigido al arrinconamiento de las poblaciones indígenas, de los mestizos y “blancos pobres”, a quienes se restringió el acceso a los mercados y se forzó entregar su fuerza de trabajo a las grandes y mediana haciendas, los obrajes y las minas. (FAJARDO, 2002, p. 77).

Entre os séculos XVII e XVIII, em regiões como o Caribe e o Pacífico Colombiano, os escravos fugitivos, “cimarrones”, índios e mestiços fugiram a zonas de difíceis acesso e criaram “palanques” ou “quilombos”, como é chamado no Brasil, “*en donde reconstruyeron sus comunidades y se mantuvieron a raya durante décadas a las tropas y assaltantes al servicio de las autoridades coloniales*” (FAJARDO, 2002, p. 78).

Já a meados do século XX, camponeses deslocados pela Violência em algumas zonas de departamentos do Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Huila, Valle del Cauca migrariam para o norte do país, num processo desorganizado a escala nacional de colonizações e ocupações de famílias camponesas sem terras e deslocadas do interior do país, configurando regiões de colonização camponesa como as de a SNSM, no Caribe Colombiano.

Era obvio que em algum momento os intensos fluxos populacionais de camponeses sem terras em procura delas, iram se encontrar com as comunidades indígenas e afrodescendentes que tinham resistido em seus territórios reduzidos, aos embates dos processos de configuração agrária a partir do modelo de acumulação e concentração do latifúndio executado pelas classes dirigentes e fundamentado pelo regime do comercio internacional. A formação dos territorios – como mostra Fajardo (2002), se aconteceu

...por parte de comunidades camponesas de diferentes perfiles étnicos (indígenas, colonos mestizos, y afrocolombianos), las cuales han emprendido caminos alternativos a los que imponen la implantación de las grandes propiedades, y que, sin excepción, contemplan procesos de violencia, ya sea a través de la imposición de rentas, o mediante el simple expediente de la expulsión forzada de tierras. (FAJARDO, 2002, p. 95).

A dinâmica populacional nas diferentes regiões do país se dava a num complexo cenário de negociações entre o Estado (e os interesses que representava), e distintas forças sociais como são as comunidades, as empresas nacionais e estrangeiras ligadas ao avanço do capital sobre a natureza e exploração de bens naturais (MITIDIERO, 2016). A contínua expansão da fronteira agrícola, incentivada pelos deslocamentos forçados que deixou a época da violência dos anos cinquenta, configurou umas regiões interétnicas e interculturais de grupos indígenas, negros e camponeses mestiços. Com o avanço da acumulação da propriedade, as reivindicações territoriais de cada grupo começaram a colidir dado a muita terra concentrada em poucos proprietários, geralmente ligados às elites regionais constituídas durante o avanço colonial. Dito processo aconteceu numa inoperância e ilegitimidade do Estado que “*se expresa, de manera protuberante, en el contraste entre una abundante legislación sobre baldíos, reservas forestales, parques, santuarios, etc.*” (FAJARDO, 2002, p. 96).

Por outra parte, os problemas e conflitos agrários na Colômbia seguem vigentes mesmo os intentos redistributivos que, desde a Lei 200 de 1936 até a Lei 160 de 1994, foram propostos para resolver os problemas agrários e cancelar a dívida histórica do Estado frente aos problemas do minifúndio, as lutas pela terra, e a violência estatal. (PALACIOS, 2011). Estes assuntos foram retomados no recente Acordo de Paz (2016) assinado entre o Estado Colombiano e a ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionarias de Colômbia – Exército do

Povo (FARC – EP), sem que até agora se resolva o acordado no ponto 1 sobre a questão agrária. Como fala Fajardo (2002), a política de terras em seus diferentes ciclos,

...se ha orientado entonces, más que a racionalizar el uso de las mismas en la frontera agraria, a su expansión a través de la titulación de baldíos, a costa de las reservas forestales. Esta política, además de mantener alejados del acceso a las tierras a los sectores mencionados, han generado ingentes problemas en los bordes de la frontera, debido a la reconocida debilidad de la presencia estatal”. (FAJARDO, 2002, p. 78).

É evidente como, a formação territorial através das formas da acumulação por espoliação (HARVEY, 2005), se sustentou numa legislação voltada à defesa da propriedade privada e as políticas de desenvolvimento do modelo moderno/colonial que promoveu a expansão do capital em América Latina (SOLÁ, 2017), em países onde as fortunas territoriais são, até agora, o centro do poder de prestígio social e da riqueza da nação (PALACIOS, 2011). Os padrões históricos da posse de terra, assim como os efeitos do modelo de desenvolvimento assumido pelos dirigentes nacionais, têm se traduzido numa elevada concentração da propriedade conjugada com um modesto desenvolvimento produtivo, centrado fundamentalmente na média e pequena propriedade (FAJARDO, 2002).

À impronta dos arquétipos da concentração da propriedade agrária resultado de cinco séculos de saque-o, se somou nos anos setentas, a afluência dos recursos do narcotráfico que entraram em diferentes regiões como novos latifundistas ou narco-latifundistas (FAJARDO (2002). Os novos empresários encontraram na aquisição massiva de terras um espaço para sua legalização e um marco para o afinamento de seu poder político, reproduzindo, de passo, novos cenários para o conflito agrário onde os setores mais fracos, foram forçados a repassar suas terras a baixos preço e a procurar novas terras para ocupar nos bordes da fronteira agraria, numas condições de precariedade e pobreza que tem facilitado a implantação de cultivos ilícitos, o deterioro ambiental e a facilidade para o controle de grupos armados.

Uno de estos conflictos lo constituye [...] los patrones de concentración de la propiedad [...] con lo cual los sectores más débiles de este campesinado transfieren a muy bajos precios la valorización de sus tierras (vía venta de mejoras) a los nuevos terratenientes y han de internarse en los bordes de las colonizaciones para abrir nuevos fundos y con ellos reproducir sucesivamente el ciclo. Las precarias condiciones económicas, sociales y políticas en las que ocurre la ampliación de la frontera han facilitado, la implantación de cultivos ilícitos, el deterioro ambiental y la ampliación de escenarios para la insurgencia armada. (FAJARDO, 2002, p. 79).

A centralidade do problema da ampliação da fronteira agrária, que se recicla no tempo e gera novas violências no campo, significou a reprodução, durante todo o século anterior e parte deste, de iniciativas políticas e econômicas que acarretaram o empobrecimento do campesinato, a industrialização da produção agroalimentar e o ímpeto do latifúndio ganadeiro.

As regiões formaram-se com a violência como método dos diferentes processos de acumulação do capital e do despojo (espoliação) da terra. A “contrarreforma agrária” como forma típica de economia política de utilizar a violência para acumular direitos sobre a terra (PALACIOS, 2011). Dito fenômeno histórico, produziria grandes câmbios no Caribe Colombiano e em outras regiões durante a expansão do paramilitarismo em conivência com latifundiários, narco-latifundiários e agentes de Estado, com a implementação de uma estratégia de Segurança Nacional fundamentada na guerra contra insurgente (FRANCO, 2009), que exacerbou o histórico problema agrário de pobreza e marginalização do campo Colombiano.

Como insiste Palacios (2011), a partir de 1940, a história da acumulação nas fronteiras agrárias das regiões, se deu em grande parte pelo roubo das terras aos posseiros ou colonos por parte de nascentes latifundiários regionais, com estratégias ilegais de grilagem que vincularam as autoridades locais e nacionais com as elites, que continuamente se atualiza.

Asistimos a una veloz y creciente concentración de la propiedad (incluida la de la tierra), del poder plutocrático y del poder local. La ausencia de un catastro técnico y confiable (asociado al sistema registral) que garantice la seguridad jurídica y la publicidad de los títulos de propiedad han facilitado la concentración. Este fenómeno fue de la mano de La Violencia y más recientemente, de las formaciones paramilitares, de la corrupción judicial y administrativa de la viscosidad político-electoral (PALACIOS, 2011, p. 30).

2.2 TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES CAMPESINAS.

2.2.1 Território:

Depois de apontar alguns dos problemas agrários Colombianos, passarei a explicar, desde uma perspectiva da geografia crítica, algumas noções do território.

A primeira destas ideias é entender o território a partir das relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório de desenvolvimento desigual das forças produtivas que configuraram historicamente o território (OLIVEIRA, 1999, p. 74 por CRISTANCHO, 94). Desde esta perspectiva, o território se compõe pela contradição do desenvolvimento do modo capitalista de produção gerado pelo processo de produção (reprodução ampliada do capital, extração da mais-valia, produção do capital, extração da renda da terra), circulação, reprodução da força de trabalho, o qual, de acordo com Oliveira (1999, p. 75) constrói e destrói formações territoriais ou faz que frações de uma mesma formação territorial tenham processos desiguais de valorização, produção e reprodução do capital conformando regiões. Isto articulado as “mediações supra estruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.) em que o Estado desempenha a função de regulação” (OLIVERIA, A., 1999, p. 74).

A contradição da lógica do desenvolvimento do modo capitalista proposta por Oliveira (1999, 2004) se explica nas transformações territoriais do campo, pela produção do capital e sua reprodução ampliada, e pela maneira como se articulam com a propriedade da terra, através dos mecanismos ou processos denominados “territorialização do capital monopolista” e “monopolização do território pelo capital” (CRISTANCHO, 2016, P. 95). As formações territoriais e as regiões como totalidades históricas constituídas por meio da espacialização contraditória do capital e suas articulações com a propriedade fundiária (OLIVEIRA, 1999, p. 75), geralmente se expressam na interligação que se produz entre a guerra e os conflitos pela apropriação da riqueza (FRANCO, 2011).

Por uma parte, “a territorialização do capital monopolista” ocorre quando o capitalista da indústria, o proprietário de terra e o capitalista da agricultura são uma mesma pessoa ou empresa, como é frequente na consolidação da monocultura. Ou seja, o capitalista torna-se também proprietário da terra através da agricultura e a indústria como mesmo processo produtivo, enquanto os camponeses tendem a ser assalariados do campo e a serem expropriados (CRISTANCHO, 2016, p. 95).

Com o processo capitalista andando, o capitalista/proprietário da terra ganha simultaneamente o lucro da atividade industrial ou agrícola (banana, palma de dendê, gado estendido) e a renda gerada por essa atividade agrícola (OLIVEIRA, 1999, p. 105-106). Por outra parte, na “monopolização do território pelo capital”, por sua vez, o capital não precisa se territorializar, “mas, ao tempo que subordina a produção camponesa, domina a renda da terra produzida pelos camponeses a sua lógica [a do capital], pelo que ocorre a renda da terra em capital, e se constitui, em sentido estrito, um processo de produção do capital que nunca é produzido pelas relações capitalistas (OLIVEIRA, 1999, p. 106; OLIVEIRA, 2007, p. 11). O capital não se territorializa com os proprietários da terra, mas subordina a produção que é realizada nela a o seu controle via monopólio da circulação, situação que comporta a possibilidade de criação e reprodução camponeses e de formas de cultivo mais diversificadas (OLIVEIRA, 1999, p. 105-106).

Desde a mirada de Oliveira, a formação da estrutura de acesso, posse e uso da terra tornou-se depois de décadas de economia extrativa (em particular a bananeira desde finais do século XIX na sub-região da zona norte do Departamento de Magdalena) e dos câmbios na dinâmica populacional que ela estimulou (VILORIA, 2014) com a aparição de camponeses trabalhadores sem-terra, em uns territórios nos que “coexistem a riqueza, que se exhibe em veículos novos ou na tecnologia de seus latifúndios, com a pobreza não vinculada ao negócio

verde e o entorno”; uma região onde “um polo é acumulação de riqueza, e em o polo contrário [...] acumulação de miséria [...]” (MARX, 157).

Esta concepção do território desde as relações contraditórias da ampliação do capital, evidentemente, na lógica de produto-mercadoria, o compreende como “lugar de formação de renda (...); representa um modo de produção do território enquanto lugar de reprodução das relações capitalistas” (Magnaghi, 1976, p. 18) (grifos do autor). Esta mirada do território baseada nas relações capitalistas internacionais de produção agrícola, explicam a lógica que definiu as partes planas do Caribe Colombiano, e que determinou também, a importância geoestratégica das partes altas da SNSM não pela qualidade de suas terras, que são menos produtivas que as das planícies cujos solos se alimentam dos rios da SNSM (IGAC, 2012); mas sim pela água e suas generosidades na interconexão desde uma perspectiva geopolítica (SACK, 1986) com o grande Caribe.

O caráter histórico das formações sócio territoriais campesinas na Serra se daria nesse marco das relações capitalistas de produção agrícola que definiu a estrutura agrária das partes baixas e algumas áreas da Serra que sofreria uma mudança a meados do século XX com o processo de ocupação espontânea de colonos campesinos sem-terra do interior do país nas terras medias e altas da Serra.

No entanto, as concepções sobre o território desde o econômico e político, dialogam também com o campo simbólico (HASESBAERT, 2007). Desde esta perspectiva, como afirma Raffestin (1993), o território é compreendido como uma “dimensão de uma malha [...] aleatória, pois cristaliza todo um conjunto de fatores, dos quais uns são físicos, outros humanos: econômicos, políticos, sociais e/ou culturais” (RAFFESTIN, 1993, p. 155).

Nesse sentido, Saquet explica o conceito do território como

...produto socioespacial, de relações sociais que são econômicas, políticas e culturais de ligações de redes internas e externas. O Estado e o mercado têm centralidade [...] o território significa apropriação, infraestrutura, redes de comunicação e circulação; obras e relações sociais, mobilidade; transformações socioespaciais historicamente condicionadas, enfim, uma construção *material* inerente à vida em sociedade. (SAQUET, 2013, p. 81, 83).

Uma das características do território que servem de análise nesta pesquisa é a condição multidimensional e multiescalar, nunca restringido ao espaço uniescalar (HAESBAERT, 2007). O caráter do território pode ser interpretado como uma “relação de dominação político econômica e de apropriação simbólico-cultural; [que] é multifuncional e multiescalar (redes e fluxos)”. (SAQUET, 2013, p. 126). Nesse sentido, uma mirada heterogênea do território, deve

estar construída com base nas relações entre sociedade e natureza, política, economia e cultura; materialidade e idealidade, numa complexa relação tempo – espaço.

Esse parecer não desconhece as especificidades de sua definição segundo os contextos históricos e geográficos nos quais ele é produzido. Haesbaert junta as noções de territórios em três categorias:

Política: referida às relações espaço-poder em geral; ou jurídico-política, relativa também a todas as relações entre espaço e poder institucionalizadas. A mais difundida é aquela onde o território é definido como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder; na maioria das vezes, mas não exclusivamente, relacionado ao poder político do Estado;

Cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, na qual o território é visto, sobretudo, como produto da apropriação (propriedade) e recuperação simbólica de um grupo em relação com o seu espaço vivido;

Econômica: (muitas vezes economicista) menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas; o território como fonte de recursos e/ou incorporado na luta de classes sociais e na relação capital-trabalho como produto da divisão territorial do trabalho (Tomado de RINCON, 2013, p. 32);

Outra noção sobre território que acho pertinente trazer na discussão é aquela que observa as relações de poder que em ele acontecem. O território é entendido como uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, natureza); e também em sua dimensão mais subjetiva (LIMONAD, HASESBAERT, 2007, p. 42).

Como Haesbaert coloca, o território é atingido “a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações da ordem mais estritamente cultural [...] o poder a partir das formas com que é exercido e/ou que ele produz/é” (HAESBAERT, 2009). Para ele, é fundamental uma abordagem múltipla e (i)material de compreensão do território sobre a base das relações de poder. Para ele,

...há o domínio social, econômico, político e cultural do espaço. Posteriormente, juntamente com Limonad (1999), incorpora a dimensão atual, com *base* e *materialidade* do espaço. A natureza é dominada e apropriada por um certo grupo social, na produção do território. Dessa maneira, eles sinalizam para uma abordagem múltipla e (i)material: econômico-político-cultural (subjetivo e simbólico). Na compreensão do território sempre acontecem relações de poder, desde as estabelecidas pelo Estado-Nação, até a multidimensionalidade das relações sociais. São as relações de força que condicionam e constituem o território. (SAQUET, p. 124).

O território resulta da interação das múltiplas dimensões do poder:

Desde sua natureza mais estritamente política até seu caráter mais propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política. Em certos casos, como de grandes conflitos territoriais de fundo étnico e religioso, a dimensão simbólica cultural do poder, impõe-se com muita força. (HAESBAERT, 2007, pág. 93).

Nesse mesmo sentido, Saquet (2013) argumenta como no próprio movimento de circulação e reprodução do capital, há territorialidades e territorialização. Para ele, o território é resultado determinante desta unidade,

...inscrevendo-se num *campo de forças*, de relações socioespaciais. O território é produto e condição da territorialização. Os territórios são produzidos espaços-temporalmente pelo exercício do poder por determinado grupo ou classe social, ou seja, pelas territorialidades cotidianas. As territorialidades são, simultaneamente, resultado, condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território. (SAQUET, 2013, p. 127).

Por outra parte, mesmo que não me aprofundo nesse conceito, acho importante trazer nesta dissertação a contribuição de Haesbaert (1995 e 1997) sobre o processo de produção do espaço que envolve sempre, simultaneamente, a desterritorialização e a reterritorialização. Esta conceptualização permite compreender tanto os processos de territorialização campesinas e indígenas, como de despojo e desapropriação das terras nas áreas estudadas exclusivamente resultado das dinâmicas do capital. Desde a proposta de Haesbaert, são “dimensões sociais da desterritorialização, a econômica e a política, e de territorialização, a política e a cultural” (SAQUET, 2013, p. 125).

Entretanto, se a territorialização é sobretudo enraizado rã, promovendo a coesão [...] é claro que ela vai estar ligada muito mais as iniciativas político-culturais de apropriação e domínio do que a dinâmica do capital, cujo caráter é intrinsecamente desterritorializador e ‘sem pátria’. (Haesbaert, 1995, p. 178 ou 1997, p. 116). (SAQUET, 2013, p. 125).

Há uma separação entre os fatores determinantes da territorialização, assegura Saquet (2013): por uma parte, o território significa coesão e identidade, e ao mesmo tempo, apropriação e ordenamento político- Por outra parte, as redes envolvidas pela circulação do capital tem um caráter predominante desterritorializador, condicionando a perda do território (SAQUET, 2013). Sobre esta dimensão da desterritorialização, me focarei com maior profundidade quando conceitue sobre as geografias do despojo.

Em suma, tanto Haesbaert como Saquet propõem compreender que o território se constrói pelo domínio político e econômico estruturado (dimensão mais concreta) dos complexos agroindustriais capitalistas, mas também, por uma apropriação simbólico-

indenitária, determinados por ações de certos grupos sociais sobre o espaço de vida que se revela mais nítida a escala local, em termos de território, e regional, em termos de rede (HAESBAERT, 1997).

Para eles, a desterritorialização é a desintegração dos antigos territórios em rede desses grupos sociais. A (ré)territorialização, é a constituição de novos territórios como novos tipos de apropriações. Dita explicação estaria vinculada com as logicas locais sub-regionais da SNSM de desterritorialização e (re)territorialização de grupos sociais étnico-rurais (indígenas, camponeses, afrodescendentes), resultado das diversas dinâmicas do controle histórico dos grupos armados de guerrilhas, paramilitares, Força Pública, narcotraficantes. Para Saquet, a desterritorialização

... está diretamente vinculada a modernização e a globalização, processos eminentemente dinâmicos, de mobilidade e inerentes ao período técnico-científico do pós-1960. Sucintamente, a desterritorialização significa a destruição de antigos territórios e/ou desintegração de *novos* espaços, em rede; a (ré)territorialização, por sua vez, corresponde a constituição de *novos* territórios com uma *nova* apropriação política e/ou simbólica do espaço, também, incluindo redes. (SAQUET, 2013, p. 126).

Outra perspectiva para entender o território é olhar deste como resultado das relações sociedade-natureza e condição para a reprodução social; “*campo* de forças que envolvem obras e relações sociais (econômicas-políticas-culturais), historicamente determinadas (SAQUET, 2000)”. Cabe-se perguntar qual foi o processo dessas comunidades de camponeses da SNSM envolvidos nesse campo de forças e relações sociais historicamente determinadas, tanto com os outros camponeses, as comunidades étnicas, os atores hegemônicos no político e econômico, os atores armados, o Estado?

Saquet propõe alguns elementos teórico-metodológicos para uma abordagem geográfica do território relacional, processual e (i)material que ligam o tempo, o espaço e o território, em suas dimensões política-econômica-cultural, e suas entranhas históricas. O processo de territorialização-desterritorialização-reterritorialização, é um movimento historicamente determinado, sobre as forças das três dimensões política-econômica-cultural. Para Saquet, sua abordagem é uma perspectiva de compreensão território-rede-lugar para avançar no entendimento dos fatores e características multiformes da vida cotidiana tanto no campo como na cidade. É uma abordagem (i)material histórica e multiescalar.

...tentei elaborar de maneira mais organizada as bases para uma abordagem que articule, concomitantemente, o tempo, o espaço e o território, e aspectos da economia, da política, e da cultura ([i]materialidade), na abordagem geográfica do território e do desenvolvimento econômico. O espaço e o território são vistos como ligados e indissociáveis. O processo de territorialização é um movimento historicamente determinado; é um dos produtos socioespaciais do movimento e das contradições sociais, sob as forças econômicas, políticas e culturais, que determinam as diferentes

territorialidades, no tempo e no espaço, as próprias desterritorialidades e as reterritorialidades. (SAQUET, 2013, p. 127).

Sucintamente, há uma abordagem (i)material, histórica e multiescalar do desenvolvimento e do território, da desterritorialização e territorialização, reconhecendo descontinuidades, desigualdades, ritmos, temporalidades e territorialidades [...] numa perspectiva de compreensão território-rede-lugar, que tenta avançar minimamente no entendimento dos fatos e das características da vida cotidiana, no *campo* e na cidade, no rural e no urbano. (SAQUET, 2013, p. 131).

Para Saquet, essa abordagem (i)material do território e das territorialidades, no intuito de subsidiar a elaboração de propostas e ações que possam significar iniciativas de construção de identidades e territorialidades com a participação de diferentes sujeitos que possam significar tentativas de produção e gestão da unidade na diversidade e da diversidade na unidade (SAQUET, 2013).

2.2.2 Territorialidade:

O conceito de territorialidade aparece na relação do espaço territorial com o problema de exercício e configuração das relações de poder. Esse conceito, desde a geografia, fala principalmente da materialidade do território (HAEBART, 2007).

A constituição campesina como territorialidade na SNSM, configurou-se a partir da construção dos tecidos das relações sociais entre familiares e vizinhos campesinos colonos materializados no-espaço-tempo (RAFFESTIN, 1980). Eram áreas serranas em que grupos de indígenas se deslocaram para se resguardar do avanço colonizador e da violência dos anos da formação do que se conhece como a república. Compreender o conceito de territorialidade, desde a perspectiva de Raffestin (1980), é considerar aquilo que a constrói, os lugares em que ela se desenvolve e os ritmos que ela implica. Nesse sentido, importante trazer a ideia de como a territorialidade se constitui a partir de vizinhanças, acessos, convergências, mas também disjunções, rupturas e distanciamentos entre os grupos.

[...] a territorialidade aparece como constituída de relações [...] simétricas ou dissimétricas com a exterioridade. A territorialidade se inscreve num quadro da produção, da troca e do consumo das coisas. Cada sistema territorial cria vizinhanças, acessos, convergências, mas também disjunções, rupturas e distanciamentos que os indivíduos e os grupos devem assumir. Cada sistema segrega sua própria territorialidade, que os indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais. A territorialidade é a face vivida, da face agida do poder. (RAFFESTIN, 1993, pág. 161).

Para Raffestin, a territorialidade reflete a multidimensionalidade do vivido pelos integrantes de uma coletividade. Desde sua perspectiva, os sujeitos acham-se ao mesmo tempo no processo territorial e o produto territorial num conjunto de relações existências e/ou

produtivas, configurando-se em relações de poder, pois todos os atores procuram modificar tanto as relações com a natureza como as relações sociais (RAFFESTIIN, 1993). Existe uma condição sócio histórica das territorialidades num espaço-tempo em que acontecem as relações reais de poder. Saquet (2013) aponta que a construção do território é relacionar entre:

Relações de poder, redes de circulação e comunicação, dominação de recursos naturais, entre outros componentes que indicam relações sociais entre sujeitos e entre esses com seu lugar de vida, tanto econômica como política e culturalmente. (SAQUET, 2013, p. 77).

Baseado em Dematteis (1985), Saquet (2013) assegura que não há território sem uma *trama* de relações sociais, ou de territorialidades que o determinam, que ocorrem entre o local e o global.

O território é um lugar substantivo por essas relações ou territorialidades e é constituído histórica e geograficamente. Nessa trama, há interações entre a *Terra-território*, através da representação e do estudo da vida cotidiana, na qual é possível se apreender a fluidez do tempo, os conflitos e os sujeitos que estão presentes nas relações que ocorrem entre o local e o global. (SAQUET, 2013, p. 81).

A territorialidade “é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no espaço de trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola, etc.” (SAQUET, 2013, p. 127) O acontecer das realidades camponesas e indígenas na SNSM, são resultado do processo de produção dessas territorialidades serranas. Esse processo de produção de cada território, de cada lugar: “é múltipla, e por isso, [...] revelando a complexidade social e, ao mesmo tempo, as relações de dominação de indivíduos ou grupos sociais com parcela do espaço geográfico, outros indivíduos, objetos, relações” (SAQUET, 2013, p. 129).

Por outra parte, estas perspectivas apontam também a necessidade de diferenciar as características da territorialidade do poder em escalas diferentes (ELIAS, 1995). Fenômenos localizados, por exemplo na SNSM, inseridos numa engrenagem de uma escala regional do Caribe Colombiano e de ordem global, geralmente ligado ao mercado internacional. Como diz Solá (2017), o rápido salto de escalas permite identificar que a escala local possibilita a compreensão de que diversas escalas são possíveis e também demonstra que estão entrelaçadas (SOLA, 2017, p. 20). Esta pesquisa prioriza as dinâmicas locais e regionais para compreender os conflitos interculturais entre grupos étnico-camponeses da SNSM. Precisamente é a escala local a que nos permite a multidimensionalidade do território e as sobreposições de escalas nelas mesmas.

Até aqui, três pressupostos podem então ser estabelecidos: 1) não há escala mais ou menos válida, a realidade está contida em todas elas; a escala da percepção é sempre ao nível do fenômeno percebido e concebido [...] 3) a escala não fragmenta o real, apenas permite a sua apreensão (ELIAS, 1995, p. 132).

Uma abordagem histórica e transescalar deve procurar considerar as dimensões sociais e naturais, “centrada no conceito de *milieu* (lugar). É um processo que requer, evidentemente, uma abordagem geográfica específica, capaz de evidenciar potencialidades particulares para a efetivação de projetos coletivos de desenvolvimento local” (SAQUET, 2013, p. 109). Mesmo que não utilize essa categoria de lugar de maneira sistemática, ela tem uma centralidade e constitui uma qualidade da experiência humana, onde se efetivam os processos históricos multiescalar, que acontecem na experiência do lugar fundamental na reprodução de identidades *coletivas e individuais*.

A experiência do lugar tem um papel fundamental na reprodução da vida em sociedade e na construção da identidade. Mesmo com o avanço da tecnologia e transporte, estamos sempre situados no mundo, em um lugar, numa *realidade objetiva e subjetiva* que tem um significado existencial para os indivíduos [...] O lugar pode ser compreendido como um *contexto*, mediação entre o *particular* e o *universal* e como componente de nosso sentido de identidade; como território e territorialidade construídos historicamente e geograficamente, pela relação efetivada entre os sujeitos e destes como o ambiente de vida cotidiana. Nesse sentido, podemos afirmar que é no lugar que os processos se efetivam, através do *acontecer*, como argumentara Santos (1996 e 1997). Há uma unidade entre as processualidades históricas e multiescalar, nutrido o pretérito, o *ser* e o *viver a ser*, em cada lugar, cotidianamente (SAQUET, 2013, p. 109).

Por outra parte, alguns autores como Rincón (2013), associam a territorialidade desde a perspectiva biológica, como o instinto animal do ser humano. No entanto, a territorialidade é ligada regularmente a ocorrências políticas e socioculturais, tais como a identidade social, a qual refere-se necessariamente ao território. A territorialidade figura, portanto, mais ao plano simbólico-cultural, “ou, em outras palavras, à dimensão idealista do território, compondo uma dupla com o território, que em entendimento e análise, não pode ser separada” (RINCÓN, 2013, p. 34). A territorialidade permite evidenciar as qualidades simbólicas e culturais do território, estudar e compreender a significação do espaço, isto é, a apropriação e representação simbólica e cultural através da atividade humana, do trabalho, da guerra, da economia e da política, igualmente dos processos de identificação territorial (RINCÓN, 2013).

Conforme os grupos sociais e as relações e conflitos econômicos, políticos e culturais estabelecidos entre eles e o espaço, poderia existir uma diversidade territorial, ou em palavras de Haesbaert, uma multiterritorialidade, a qual implicaria em diversos graus de acesso e controle das pessoas, os recursos, as coisas e as relações no território (HAESBAERT, 2007; SACK, 1983; 1986). Várias perguntas da discussão desta dissertação são resultado do descontentamento durante anos como funcionário público do Estado frente à falta de reconhecimento das territorialidades campesinas no marco do multiculturalismo étnico na Serra Nevada com complexos efeitos políticos tanto para os indígenas como para campesinos. Parte

da dificuldade radica em não outorgar às territorialidades campesinas na Serra o caráter de serem “resultados, condicionantes e caracterizadoras da territorialização e do território” (SAQUET, *apud* CRISTANCHO, 2016, P, 96), num processo de interação histórica com outras culturas do campo como indígenas, negros e campesinos das sub-regiões ao redor da SNSM. O território é produto e condição da territorialização que sobre ele exerce as diferentes territorialidades entre as que estão além dos indígenas, as campesinas; marginadas e silenciadas como analisaremos em muitos cenários oficiais, acadêmicos, organizativos, jurídicos, etc.

O território, a partir do que propõe Marcelo Lopes de Souza (1995), é essencialmente um instrumento de exercício de poder. Para ele, a pergunta a ser respondida é quem domina ou influencia o espaço? E como domina ou influencia esse espaço? Questões que cabem para ser feitas em contextos do despojo (espoliação) e o deslocamento forçado abordados nesta pesquisa, que resultaram da guerra contra insurgente que escalou a meados dos anos noventa nas sub-regiões da vertente ocidental da SNSM. Para Lopes de Sousa (1995), ao abordar de outra forma a territorialidade³, entende o território como “um *campo de forças*, uma *teia* ou *rede de relações sociais* que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um *limite*, uma *alteridade*: a diferença entre “nos” (o grupo, os membros da coletividade ou “comunidade”, os *incides*) e os “outros” (os de fora, os estranhos, os *outsiders*)”. (LÓPES, 1995, p. 86).

A proposta desta dissertação é superar as leituras e interpretações das Serra apenas desde uma das territorialidades que desde a implementação da Constituição de 1991 na Colômbia, tem tido um protagonismo e um foco fundamental para a Serra: os grupos indígenas. Compreender então os campesinos e campesinas da SNSM como produtos e produtores históricos específicos, “implica, ao mesmo tempo, conceber seus multiplex e diversos origens, assim como suas trajetórias variáveis e diferenciadas” (Instituto Colombiano de Antropología e História 2018, 17); em relação com as tendências da produção agrícola, os processos políticos, o papel da violência, e a presença de multiplex atores no campo (Instituto Colombiano de Antropología e História 2018).

Territorialidades campesinas que se constituíram também através das relações cotidianamente de trabalho na produção café nas grandes fazendas e nas terras que ocupavam com as redes familiares que chegavam (MOLANO, 1988; VILORIA, 1998) e se materializavam numa relação especial de trabalho com a terra na produção de alimentos (SADE, 2018).

³ Segundo Lópes de Souza, nos anos 80 e 90 a antropologia urbana fez várias contribuições ao estudo da territorialidade (GASPAR, 1985; ZALUAR, 1985 (especialmente pp. 174 e segs); PERLONGHER, 1987; ZALUAR, 1994).

Por fim, destaca-se que o conceito de território campesino entende “como o espaço de vida do campesino, os lugares onde uma enorme diversidade das culturas campesinas constrói sua existência [...] em várias escalas, desde a referência da unidade familiar, uma vereda, uma localidade, até a referência relativa de uma região” (CRISTANCHO, 2016, pág. 15).

2.3 CONFLITOS E CONFLITUALIDADES EM TERRITÓRIOS DO CAPITAL.

Dois dos conceitos que também são trabalhados nesta dissertação, são o conceito de conflito e de conflitividade social e política do território. Para Fernandes (2008),

... a transformação do espaço em território acontece por intermédio da conflitualidade, definida pelo estado permanente de conflitos no **enfrentamento entre as forças políticas que procuram criar, conquistar e controlar** seus territórios. (FERNANDES, 2008, p. 386).

Por uma parte, a permanente necessidade de expansão do capital a partir das políticas de desenvolvimento, terminaram em conflitos territoriais materializados na disputa pelas formas de uso, controle e ocupação entre povos rurais, empresas, latifundiários e Estado. (SOLÁ, 2017).

Por outra parte, como fala Sóla (2017), a construção territorial a partir das políticas de desenvolvimento do modelo primário exportador neocolonial em Latino América, acabam interferindo na escala local, o que denota a multidimensionalidade do território (SOLÁ, 2017). Esses processos nas geografias ou espaços globalizados do capital como os territórios do que hoje é Suape, na mata sul de Pernambuco, Brasil, por exemplo, acontecem paralelamente a configuração de estratégias contínuas de resistir. Ou seja, desde esta perspectiva, é preciso entender o território a partir dos conflitos-conflitividades, mas também desde as r-existências históricas.

Por isso, propomos a seguir transitar pela construção territorial do que hoje é Suape a partir dos conflitos, mas também das r-existências históricas. É a história longa que nos possibilita identificar não somente aquela história contada do predomínio de cana de açúcar, mas também a r-existência da policultura, da diversidade dos sujeitos agrários (SÓLA, 2017).

Processos de conflitos, lutas, e re-existências de campesinos/as como os de Suape em Brasil, ou os campesinos/as da Zona de Reserva Campesinas -VRC na Colômbia, se constroem desde a ideia de que, assim como existem traços comuns na reprodução do capital na lógica do sistema mundo moderno/colonial, também existem entre os sujeitos agrários que lutam pela terra e pelos territórios (SOLÁ, 2017).

Embora, meu foco não analisa os processos de r-existências históricas de luta pela terra pelos sujeitos agrários na SNSM. Também não analiso apenas os conflitos territoriais resultado das políticas desenvolvimentistas de reprodução do capital; mas observo a franja de conflitos interétnicos e interculturais que acontecem entre os povos subalternizados historicamente pelo acesso à terra nos limites do capital, em territórios com estruturais padrões agrários de concentração fundiária. Mas, como conceituar este tipo de conflitos no marco do que eu denomino como territorialização da violência nas cotidianidades étnico-rurais e o padrão de deslocamento forçado das formações das territorialidades campesinas na SNSM?

2.3.1 A desterritorialização entre as redes e os aglomerados de exclusão

Já falei acima como, nesta pesquisa, trago uns dos debates sobre as abordagens geográficas referidas aos estudos do território introduzido por Haesbaert (1995) sobre a discussão da questão das redes e a desterritorialização como fundamento para compreender os territórios da SNSM.

Em geral, para Haesbaert as redes, ao estimularem os fluxos, “encontram-se a serviço da desterritorialização, principalmente no que se refere a sua articulação com os circuitos de “fluidez” do capital internacional” (HAESBAERT, 1995, p. 180); que acontecem também, numa dinâmica reterritorializante das redes de solidariedade (HAESBAERT, 1995). Para o autor, um processo de desterritorialização como destruição, pode ser tanto simbólico, quanto material, em escalas de difusão espaciais e temporais.

O processo de desterritorialização pode ser tanto simbólico, com a destruição de símbolos, marcos históricos, identidades, quanto concreto, material – político e/ou econômico, pela destruição de antigos laços/fronteiras econômico-políticas de integração. É muito importante também distinguir as escalas de difusão da desterritorialização, tanto espaciais quanto temporais (longa, média ou de curta duração, nos termos de Braudel) (HAESBAERT, 1995, p. 181).

Em parte, para Haesbaert (1995), as redes se tornam tanto mais desterritorializantes quanto mais elas são:

...instrumentais e vinculadas a lógica padronizadora da economia do mercado, uma lógica contábil que tudo classifica e quantifica, retirando todo conteúdo simbólico e qualitativo; [e] ilegais ou clandestinas, pois neste sentido encontram-se a margem dos controles politicamente dominantes, podendo acentuar a insurgência e a violência. (HAESBAERT, 1995, 183).

Frente a esta última condição, as redes ilegais – muitas vezes articulando máfias a escala mundial – podem ser vistas ao mesmo tempo como produtos “à margem do sistema “ilegal”, impondo-se como forma de sobrevivência de grupos excluídos; e como produtoras da

desterritorialização; ao promoverem a instabilidade e a violência” (HAESBAERT, 1995, p. 183). Proliferam crescentemente como exemplo dessas redes ilegais, informais e/ou clandestinas, simultâneas ao aumento da exclusão, mas que se vinculam com os fluxos e as redes internacionais do capital “oficiais” (HAESBAERT, 1995, p. 183).

Segundo Haesbaert, em territórios com o enfraquecimento crescente do Estado como agente de intervenção, possibilitou a que muitas destas redes ilegais tivessem suas próprias configurações territoriais, “muitas vezes como modo de substituir o Estado, como ocorre com o narcotráfico nas favelas latino-americanas” (HAESBAERT, 1995, p. 184). Haesbaert descreve essas redes nos territórios a partir da “clandestinidade”, que

...acaba alimentado a insegurança, a violência e a exclusão frente aos circuitos ditos legais da economia e da política. Muitos, mergulhados na confusão de redes e territórios ou totalmente deles excluídos, acabam por partilhar da desterritorialização mais radical, a dos “aglomerados” de exclusão. (HAESBAERT, 1995, p. 184).

A desterritorialização e os aglomerados de exclusão são para Haesbaert (1995) “conjuntos, agrupamentos” quanto um tipo elementos “ajuntados confusamente”. Assim, o aglomerado humano de exclusão se associa, então, ao “não regulado/ordenado, “onde a imprevisibilidade é uma condição essencial e fica difícil conviver [...] com a lógica da geografia das redes e territórios” (HAESBAERT, 1995, p. 185). Num sentido mais abstrato, “o aglomerado compreenderia os grupos marginais no sentido de exclusão social de fato, o que significa a própria exclusão do circuito capitalismo explorador, típica desterritorialização que as redes das classes sociais hegemônicas promovem no espaço dos miseráveis (HAESBAERT, 1995, p 185). Assim,

... o aglomerado, mais do que um espaço “a parte”, excluído e amorfo, deve sua desordem principalmente ao fato de que nele se cruzam uma multiplicidade de redes e territórios [...] num mundo tão complexo, de imbricações e superposições, onde as vezes tudo parece estar em todas as escalas, definir espacialmente os aglomerados é sempre difícil [...] a afluência dos aglomerados se daria basicamente através do “caos” e da desorganização, pelo volume e o crescimento desordenado que eles envolvem (HAESBAERT, 1995, p. 186).

A proliferação arrasadora de aglomerados miseráveis de Haesbaert, parece servir para compreender as realidades de centos de campesinos vítimas, deslocados forçadamente que abandonaram suas terras no marco da exclusão do circuito capitalismo explorador, e das histórias da violência que tanto as redes legais como ilegais exerceram sobre o Caribe Colombiano. Nesse sentido, o caráter da desterritorialização dos aglomerados miseráveis que se situam no nível mais agudo desse complexo processo de exclusão, acontece dentro de processos tanto simbólicos, como concretos e materiais em escalas de difusão tanto espaciais quanto temporais (HAESBAERT, 1995).

A exclusão de milhões de habitantes das comunidades étnico-rurais subalternizadas na região Caribe e nas diferentes sub-regiões latino-americanas, muitas delas deslocadas forçadamente de seus territórios de vida, ocupam as periferias dos povoados e a cidades, acrescentando o “lumpen” urbanos (HAESBAERT, 1995). Como mostrarei nesta dissertação, essas desigualdades chegam a se manifestar de maneiras contraditórias entre as populações étnico-rurais em meio de uma total insegurança e fragilidade onde prevalece a luta pela sobrevivência física cotidiana.

A concepção de “aglomerados de exclusão” flutuantes, dispersos, “desordenados”, que mergulha no limiar dos territórios altamente controlados,

... pode nos dar é a de questionar e complexificar a relação rede – território que vem dominando nas análises geográficas, enfatizando que tão fundamentais quanto os processos relativamente ordenados manifestados pelo espaço geográfico através de territórios e as redes, são os processos mais propriamente “desordenados” e aparentemente sem lógica, produto da crescente exclusão económica, política e cultural do mundo contemporâneo. (HAESBAERT, 1995, p. 196)

Caberia retomar a ideia de “lumpemproletariado” que Marx [...] desenvolve no *18 Brumário de Luís Boanaparte* como “o lixo de todas as classes”, uma massa desintegrada” que reúne “indivíduos arruinados e aventureiros egressos da burguesia, vagabundos, soldados desmobilizados, malfeitores recém-saídos da cadeia (...) batedores de carteira, rufões, mendigos, etc.”. (*Apud* BOTTOMORE; 1988:223) (HAESBAERT, 1995, p. 191-192).

A ideia de “aglomerados de exclusão” da que fala Haesbaert, são marcados então pela desterritorialização extrema caracterizada pela instabilidade e a insegurança constantes, principalmente em termos de condições materiais de sobrevivência, pela violência frequente e pela mobilidade destruidora de identidades (HAESBAERT, 1995). Para o autor, estes espaços sobre os quais os grupos sociais dispõem de menor controle e segurança, material e simbólica.

Agora, paralelo à desterritorialização, como aponte antes, nesse processo de desterritorialização acontecem também o que Haesbaert denomina territorialismos, que enfrentam os embates desses aglomerados de exclusão caracterizados pelo deslocamento. Desde a perspectiva do campesinato, por exemplo, como CRISTANCHO (2016) assegura, isto “não se recria só pela lógica do capital, mas também a traves da estratégia da criação política do campesinato” (CRISTANCHO, 2016, p. 96). É o que Solá (2017) denomina como territórios de re-existências.

Desde a perspectiva de Cristancho, “as relações distintas criam territórios diferentes. Os territórios que efetivam as relações sociais são construções eminentemente políticas, por elo, dão conta da dinâmica conflitual da reprodução social” (CRISTANCHO, 2016, p. 96).

Agora, a “estratégia da criação política do campesinato” como outra forma de recreação destes grupos além do capital, para ela é compreendida na luta pela terra (FERNANDES, 2008), pela reforma agrária e pela ampliação de sua autonomia, o campesinato cria um tipo de território específico: o território campesino (CRISTANCHO, 2016, p. 96).

A questão anterior responde à discussão sobre a questão agrária que ressurgiu nos anos noventa em relação da renovação da luta dos movimentos sociais do campo latino-americano, como resistência ao projeto neoliberal (ZIBECHI, 2007). A via campesina, por exemplo, reúne várias organizações e movimentos campesinos, nos que se incorporam novas reivindicações do modo de vida campesino e a produção agroecológica.

Embora que importantes, acredito que ditas perspectivas que analisam variadas realidades sobre a reivindicações do modo de vida campesino e da luta política dos sujeitos do campo, terminaram por esquecer algumas miradas que criaram uma espécie de “tipologia do campesino” que, não necessariamente, responde a todos os contextos sócio históricos das variadas culturas campesinas colombianas e Latino Americanas.

Minha proposta é estudar as configurações campesinas que ainda têm fortes fraturas em suas territorialidades que afeta os aspectos organizativos e de coesão social; resultado da “desterritorialização arrasadora dos aglomerados excludente que produz assim o anonimato, a anulação e a ausência total de autonomia de seus habitantes. Como diz Baudrillard, “todas as tentativas para fazer [da massa] um sujeito (real ou mítico) deparam com uma espantosa impossibilidade de tomada de consciência autônoma”. (1985:29) (HAESBAERT, 1995, p. 193).

É manifesto na Colômbia como, enquanto existem realidades campesinas – ou territorialismos conforme a visão de Haesbaert - nas que se identificam potenciais para garantir a existência nas zonas de colonização, com figuras jurídicas para seus territórios através da mobilização campesina pelo acesso à terra e como possibilidade de desencadear processos de desenvolvimento alternativos àqueles impostos pelo modelo de desenvolvimento dominante; a constituição histórica do sujeito campesinos na Serra se estabelece com difusas formas organizativas em função de se pensar coletivamente projetos de território. As formas características de entender os campesinos como portadores de uma ação coletiva da luta pela terra, não é suficiente para estudar as territorialidades destes grupos na SNSM.

Como mostrarei, os impactos da violência da guerra contra insurgente e a forte estigmatização que aconteceu nesses anos contra as populações campesinas, distou dessa ideia de territorialíssimos que fala Haesbaert (1995) ou territórios de re-existências (Solá, 2017) com

os que se caracterizam outras sub-regiões do país. Uma destas diferenciações dos tipos de camponeses nas regiões colombianas, surgiu como consequência, não só de exclusão econômica, mas também cultural (o que será aprofundado pelo modelo multicultural de direitos diferenciais) diante do “vazio de significado” dominante, que se presta tanto a violência indiscriminada e “sem sentido”, quanto ao aparecimento dos fundamentalismos.

Na SNSM, o anterior ocorre em contraste com o ímpeto da organização e o movimento indígena através de um processo consolidado de várias organizações como a Confederação Indígena Tayrona (CIT), que representa a etnia ijkú ou arhuaco, com um forte reconhecimento político transnacional. Foi evidente como nas entrevistas que realizei com solicitantes de restituição de terras e funcionários de diferentes entidades, não foram reconhecidos movimentos ou organizações camponesas consolidadas, com longos processos de luta pela terra, como acontece em outras regiões como o Cauca, Nariño, Montes da Maria, ou Perija, que apontem a essa construção de demandas territoriais.

2.3.2 Geografias do despojo em “estados de guerra”

A partir do final dos anos noventa, o Caribe colombiano sofreu uma transformação como consequência da difusão, consolidação e post-desmobilização das forças irregulares de paramilitares na região numa ordem que ainda se mantém de novas formas nos territórios no que habitam populações étnico-rurais. Sustentado numa política de Segurança Nacional fundamentada na guerra contrainsurgente, se aprofundou então o poder paramilitar com a anuência estatal e em benefício dos poderes locais e nacionais com formas cruéis de violências que teve consequências dramáticas sobre o uso e o controle dos recursos. Mas também sobre processos autônomos das comunidades, que resultou numa contrarreforma agrária sem precedentes no país e na região onde se acumulam as histórias de despojo, expropriação e deslocamentos forçados.

A anterior abordagem exposta sobre a desterritorialização guarda relações com uma das categorias centrais nesta dissertação para compreender a contínua (re)configuração sócio territorial no marco de cruéis cenários de violência: a categoria de despojo, também associada à expropriação ou espoliação. A noção do despojo, como explica Diana Ojeda (2016), tem ganhado muita relevância na Colômbia nos últimos tempos nos circuitos acadêmicos, governamentais e das organizações sociais, graças a aparição da Lei de vítimas e restituição de terras 1448 de 2011, em cuja execução participei como funcionário da área social num escritório ligado ao Ministério de Agricultura cujo objetivo é adiantar os processos administrativos,

jurídicos e sociais das solicitações de restituição que existiam na parte norte do departamento de Magdalena.

Em Instituições como na que eu trabalhei, a Unidade de Restituição de Terras (URT), a Unidade para as Vítimas e a Fiscalía General da Nación, o despojo em grande medida se compreende como perturbação à pose em situações de violência. Na lei de vítimas, lê-se:

Se entende por despojo a ação por meio da qual, aproveitando-se de uma situação de violência, se priva arbitrariamente a uma pessoa de sua propriedade, posse, ou ocupação, seja de fato, mediante negócio jurídico, ato administrativo, sentença ou mediante a comissão de delitos associados à situação de violência (Lei 1448 de 2011, artículo 74). Ação de despojo se relaciona com ao abandono forçado ainda que se diferencie deste, que se define como “[...] a situação temporal ou permanente à que uma pessoa é forçada a deslocar-se, razão pela qual se vê impedida para exercer a administração, exploração, e o contato direto com as terras que devi-o desatender em seu deslocamento [...]” (Lei 1448 de 2011, artículo 74).

Outros usos do conceito são os dos organismos multilaterais. A *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura* FAO (2012), algumas ONG e movimentos internacionais, e instituições que emergiram na mesma Lei de Vítimas e Restituição de Terras 1448 de 2011 como Centro Nacional de Memória Histórica (CNMH), encarregado de preservar a memória do conflito armado Colombiano, são algum dos exemplos de compreensão do despojo.

Como Ojeda (2016) indica, os entendimentos destes organismos multilaterais e ONGs são fundamentais no debate porque denunciam a expropriação e espoliação de terras como algo além da simples perda de um bem, entendendo-o como o despojo da água, mata, pesca e comida. Nesse sentido, vários movimentos e organizações sociais e líderes comunitários na Colômbia, problematizam o despojo como “a privação do território, a identidade e a vida mesma” (OJEDA, 2016, p. 22). Organizações como o Cinep (2012; 2019), a CCJ (2011, 2017; 2019), ILSA (2014) e a Corporação Gira Castro têm contribuído na compreensão e denúncia do despojo em sub-regiões do sul do departamento do Magdalena e da zona bananeira (BECERRA, OYAGA, 2011; CCJ, 2017, 2019, CINEP, 2019). Estes trabalhos consideram o despojo não apenas como ações ilegais de atores armados; mas como expropriação violenta dos territórios das populações camponesas, indígenas e afrodescendentes pelos setores do poder econômico e político do local para se apropriar dos recursos (OJEDA, 2016, p. 23).

Por sua vez, o CNMH em seu texto “*El despojo de tierras y territorios*” entende o despojo como uma complexa dinâmica de interação nas dinâmicas do conflito armado com o problema agrário e com a configuração das relações socioculturais, políticas, econômicas e ambientais das comunidades étnico-rurais nas amplias regiões do país (CNMH 2009, p. 15). Alguns desses trabalhos abordam estas problemáticas do despojo em várias localidades da

região Caribe que incluem casos nas planícies dos departamentos de Magdalena, Goajira e Cesar (CNMH, 2016; 2017; 2017).

Como complemento a esses olhares, Ojeda propõe entender o despojo não só como privação, acumulação e concentração de recursos de uma ação que aconteceu no passado. Para a autora, o despojo deve se perguntar não apenas pelas perdas por meios violentos das posses ilegais de um bem por parte de atores armados, como comumente entendem desde a narrativa oficial e mediática da lei de restituição de terras; mas também por como se “disputam as diversas formas de uso, acesso, controle e representação dos recursos [...] [para compreender] as formas contínuas, ordinárias e legitimadas do despojo” (OJEDA, 2016, p. 20, 22).

Cabe dizer desde esta perspectiva que, mesmo os significativos aportes para entender os processos históricos que estão por trás dos meios e fins do despojo, leituras como as dos organismos internacionais, ONGs e movimentos sociais, equiparam violência, deslocamento forçado e despojo, leituras nas que a “dimensão espacial ocupa um lugar marginal nas análises” (OJEDA, 2016, p. 23). Justamente, é neste sentido que esta dissertação tenta fazer alguns aportes para estudar as outras formas inesperadas do despojo das que fala Ojeda, relatos que comumente são silenciados numa continua (re)produção dos espaços socio territoriais da Serra.

Parte dos questionamentos desta dissertação são explicados a partir dos estudos antes citados, dada sua relevância para compreender o papel central do despojo, a desapropriação e o deslocamento forçado no marco do conflito pela terra e outros recursos na Colômbia. O despojo como parte das formas históricas do velho conflito agrário que explicam as profundas desigualdades no país, numa continua reconfiguração de relações sociais e do poder. Embora, vale a pena se-perguntar como Ojeda (2016) propõe: como ocorre o despojo? que fatores o possibilitam? como se traduz (ou não) em dinâmicas particulares de acumulação de capital? quais são suas características generalizáveis e concretas para cada caso?

Uma das questões relevantes para a autora é observar os novos espaços e espacialidades que são forjadas nessas geografias ou paisagens do despojo, olhar para elas não apenas desde a violência utilizada e a força física, mas também desde as formas ordinárias do despojo que se inscrevem na vida diária, através de formas menos visíveis de violência. Para Ojeda,

... se assume que todo despojo implica um desalojo, o qual contradisse as experiências de diversas comunidades locais, e também se assume que a violência utilizada para despojar a uma comunidade é sinônimo de coação, o que deixa por fora formas ordinárias (Das, 2006) e menos visíveis de violência (Nizon, 2011), que se inscrevem na vida diária e que não necessariamente implicam o uso da força física”. (OJEDA, 2016; p. 24).

A discussão de Ojeda relaciona-se às teorizações marxistas sobre a acumulação primitiva e compreensão do despojo (expropriação, espoliação) como a separação violenta das pessoas dos meios de produção. Trabalhos como os de Harvey examinam como o capital, em sua necessidade de reprodução, deve recorrer a um processo de permanente despojo – a acumulação por despojo ou acumulação por expropriação (HARVEY, 2003). Se refere então, ao caráter predatório da natureza capitalismo, que se reflete em processos de mercantilização e privatização da terra, de acumulação de bens comuns, e de expulsão violentas e comunidades campesinas. (OJEDA, 2016).

Embora, a crítica de Ojeda (2016), aponta a mostrar como vários estudos têm documentado a acumulação de recursos e suas consequências, no entanto, apesar de sua importância em termos da memória histórica e denúncia da desapropriação, eles esquecem “a transformação das dinâmicas locais nos processos graduais do despojo” (OJEDA, 2016, p. 25). Para ela, na América Latina e o Caribe, o conceito de despojo têm sido utilizado para descrever “processos de expansão da agroindústria, mineração, exploração de hidrocarbonetos [...] embora, alguns estudos baseados na fórmula de ‘despojo, então acumulação do capital’ se apressaram a seguir a narrativa teológica do capital e passa por alto as histórias e geografias específicas do despojo, assim como sua relação com outras formas de produção da desigualdade e da subordinação (Edelman y León 2014; Hart 2006; Kelly 2011; Mollet, 2016). Algumas destas ideias teóricas da Ojeda aportam na proposta analítica desta dissertação.

Ela propõe três linhas de abordagem do conceito a partir de algumas pesquisas que aportam à discussão entrando a analisar as complexidades do despojo em contextos concretos:

- i) Aquela que trata sobre os estudos acerca do papel do Estado nos processos de despojo de recursos naturais em várias regiões do país. A confluência da violência estatal e paraestatal, as políticas de desenvolvimento e a acumulação de recursos naturais.
- ii) A linha que analisa a compreensão de modalidades paulatinas e menos visíveis do despojo. É relevante estudar o despojo e as transformações socioespaciais que resultam destes. Por exemplo, os efeitos da agroindústria palmeira sobre as vidas cotidianas das mulheres na região dos Montes de Maria, no departamento de Bolívar.
- iii) Por último, as pesquisas que revelam os processos de despojo em nome da natureza. Estudos como o de Roosbelinda Cárdenas (2012); Carlos de Cairo e Ivan Montenegro (2015) no departamento de Guaviare; e Maria Camila

Gonzalez (2014) no Parque Tayrona, prestam atenção a como as políticas da conservação, o ecoturismo e a expansão de monocultura para a produção de agro combustíveis tem se traduzido na expropriação e a exclusão de comunidades locais (OJEDA, 2016, p, 26).

2.3.3 Pretextos verdes e despojo

Esta pesquisa aponta a estudar as cotidianidades e as trajetórias das relações entre camponeses e indígenas na SNSM constituídas em espaços atravessados pela violência, e pela forma extrema e brutal do poder (RAFFESTIN, 1980, pág. 163) que recrudescer no período da guerra contra insurgente com a multiplicação do poder paramilitar de finais dos noventa.

Partindo do olhar crítico ao conceito de despojo trabalhado por Ojeda, analiso os períodos e os ciclos da dinâmica do conflito armado inserido nas vidas dos habitantes da região norte através de um processo reconfiguração violenta do espaço a traves de distintos mecanismos de despojo de terras (OJEDA, 2016). Exemplos como o Parque Nacional Tayrona (PNT) na cara norte da SNSM ilustram a “maneira como estes lugares e seus espaços tem sido forjados a partir de dinâmicas de desapropriação que se materializam na vida diária” (OJEDA, 2016, p. 27).

Desde esta perspectiva, o território é fruto dessa lógica local da desterritorialização, do despojo violento e da espoliação que atende às manifestações mais subjetivas das comunidades étnico-rurais, mas também respondem as dimensões mais estruturais da economia política regional. Os antigos conflitos e conflitividades do problema agrário resultado do modelo de desenvolvimento nas sub-regiões da Serra Nevada se deu numa larga história de disputas em torno ao uso e a conservação dos recursos, somado a o fato de ser territórios-redes do ilegal que os formou como uma das principais vias de saída de maconha e coca, cultivadas na zona, para o exterior do país (OJEDA, 2016).

Alguns estudos, informes acadêmicos, de ONG e de órgãos estatais, abordaram o avanço das forças paramilitares no Caribe e no Magdalena com a anuência do Estado, perpetrando assassinatos, massacres, violações sexuais, ameaças e deslocamentos forçados contra líderes comunitários, defensores de direitos humanos, ambientalistas e populações rurais associadas como guerrilheiras ou seu contrário paramilitares; ataques que se traduziram na expropriação de seus meios de sustento e formas de vida (SNPS e DEFENSORIA, 2006; CNRR, 2010; BECERRA; OYAGA, 2011; MANTILLA VALBUENA, 2011; SILVA, 2012; CNMH, 2014; GUTIERREZ, 2014).

Ojeda assegura que “a violência paramilitar foi usada para implantar uma ordem socioespacial onde a proliferação do medo foi entendida e incluso celebrada como pacificação” (OJEDA, 2016, p. 27), afirmação que mantém uma ligação com o que Franco (2009) denominou como “estado de guerra”. Para Franco, este “estado de guerra” é uma ordem territorial estabelecida pelos atores armados através da interiorização do terror e medo que disciplinou às comunidades vítimas, que se atualiza e se reproduz ao longo do tempo com manifestas consequências nos processos organizativos e políticos das populações do campo. Estas duas perspectivas serviram para que se implantara uma ordem local e regional caracterizada pelo medo e o terror.

Dita ordem na SNSM, se caracterizou para Ojeda pela “recuperação” dos lugares agora seguros e prontos para a ampliação de projetos de desenvolvimento e conservação. Desde os anos dos mil, o Parque Nacional Tayrona (PNT) e a sub região do sul de departamento de Bolívar, conhecida como Montes de Maria, tem sido produzido desde o Estado, a empresa privada e os meios de comunicação como lugares para inversão e o desenvolvimento associados ao turismo, a conservação ambiental e a agroindústria de palma de dendê (OJEDA, 2016).

Como mostra Ojeda, a implementação de programas estatais conjugou a militarização e a promoção turística da região norte na SNSM (OJEDA, 2016). Mas, qual foi o processo que aconteceu nas localidades do sul da Serra, nas bacias dos percursos dos rios Fundación e Aracataca? Dita aproximação de Ojeda sobre a ligação entre militarização e conservação ajuda a observar como, em anos mais recentes, também existiu no sul da SNSM, estratégias estatais dessa ordem, acompanhadas de uma alta aquisição por parte de indígenas arhuacos, de terras pertencentes a famílias campesinas deslocadas forçosamente durante a desmobilização das organizações irregulares e a reconfiguração do controle territorial pelos neo-paramilitares (REYES, 2012), em anos de dinamismo e ativação das organizações indígenas resultado dos próprios processos da luta indígena e do contextos do multiculturalismo operativo na Colômbia que estruturou uma série de direitos diferenciais étnicos.

Me baseio nas questões que Ojeda desenvolve em sua proposta sobre o despojo para pensar as realidades dos campesinos e campesinas da Serra onde o conceito de despojo e o deslocamento forçado trabalhado desde os labirintos da implementação da política de restituição, tem multiplex maneiras de ser abordado. Nesse sentido, uma das perguntas a ser resolvidas é como entender o despojo em territórios étnico-rurais no marco dos sistemas de direitos diferenciais baseados nas políticas multiculturais estabelecidas a partir da Constituição de 1991? Que efeitos tem o despojo nas comunidades étnico-rurais além dos “evidentes” efeitos

da acumulação da propriedade por setores econômicos e políticos? Que tratos têm as noções de despojo ou da espoliação no interior das práticas do escritório de restituição de terras onde trabalhamos? Como se relaciona o despojo com os conflitos interculturais e interétnicos na SNSM?

Com base na proposta de Ojeda, sugere-se que o mito do pós-conflito na narrativa estatal desses anos de escalamento do conflito armado, utilizou a ideia de “um novo amanhecer do Caribe”, como eufemismo para olhar a região não mais como sinônimo de atraso, violência e corrupção. O estado “assume o pós-conflito como um fato cumprido, apesar das alarmantes cifras de violência, sobre todo contra líderes campesinos e reclamantes de terras na região” (OJEDA, 2016, p. 28) Para a autora, é um erro reduzir o despojo à acumulação de terras, pois perde de vista outras modalidades menos visíveis do despojo.

...ainda que a reconfiguração violenta do acesso aos recursos ocorreu por meio do “rifle e o título” (Gajales 2011), é um erro reduzir a expropriação aos fatos da acumulação de terras. Como exponho [...] a expropriação das comunidades locais no Tayrona e Montes de Maria, tem se dado de maneira permanente a través de modalidades menos visíveis, mas também violentas (OJEDA, 2016, p. 28).

De fato, a articulação entre violência e conservação (BOCAREJO, OJEDA, 2016) terminou apagando e silenciando as histórias de despojo de centenas de campesinos e campesinas da SNSM, silencio em nome do ambiente, a seguridade e o desenvolvimento, que em parte são ideias postas desde o multiculturalismo operativo que promoveu às diferenças indenitárias locais a partir das tendências jurídicas globais.

...é claro que os discursos e as práticas de conservação na zona têm se traduzido em formas violentas de despojo mediante a apagamento das comunidades locais de campesinos, assim como de pescadores por parte de ações estatais executadas em nome do ambiente, a seguridade e desenvolvimento. O apagamento tem incluído sua criminalização, expulsão, ameaças de morte e assassinatos, assim como o deterioro de suas estratégias de sustento. Isto há contribuído a que principalmente os campesinos apareçam no discurso público como depredadores ambientais, invasores da área protegida e como dano colateral das fumigações dos cultivos ilícitos nas imediações do Parque Nacional Tayrona. (OJEDA, 2016, p. 29).

2.4 CONFLITOS INTERÉTNICOS E INTERCULTURAIS NOS BASTIDORES DA GLOBALIZAÇÃO DOS ESTADOS NEOLIBERAIS E MULTICULTURAIS.

A composição étnica no país, como mostra Fajardo (2002), evidencia variações perceptíveis de raízes históricas. Do lado da população branca-mestiça, disseminada nos espaços de maior desenvolvimento socioeconômico e que representa a maior parte da sociedade nacional,

...los demás grupos étnicos que configuran el país corresponden a las comunidades amerindias, con una porción del 1,7%, y los afroamericanos y raizales, con participación aproximada del 10% del total nacional. Con excepción de algunos pequeños grupos de recolectores de los bosques de galería en la Orinoquia (nukak-

“makú) y en la Amazonia (piaora, makú) las comunidades mestizas, amerindias, afroamericanas y raizales corresponden en su organización social y económica a modalidades campesinas, con articulaciones sostenidas a los mercados y variadas formas de control de la tierra. (FAJARDO, 2002, p. 101).

Nessa complexa e ampla diversidade, a formação do campesinato na Colômbia ocorre com os fluxos de migração de população sem-terra de meados do século XX que foi abrindo a fronteira agrária aos limites das florestas nas que habitavam populações indígenas e afrodescendentes que sobreviveram a séculos de dominação. A distribuição da população ameríndia na Colômbia é resumida por Fajardo da seguinte forma:

...con grandes diferencias en sus patrones de organización social-territorial cuentan con núcleos numéricamente importantes en el norte del país (etnias wayú, kogui, ijka [arhuacos], [wiwas y kankuamos] y zenú de la península guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y la llanura caribe) que ascienden a poco más de ciento cincuenta mil personas; en el noroccidente, las étnicas cuna, ember, y catío, con cien mil personas; al suroccidente del país, dentro de las cordilleras andinas, poco más de doscientas setenta mil nasa, guambiano, yanacona, kuaiker, natagaima y coyaina; en la Amazonía, las comunidades del pie de monte (awa-siona) y de la planicie selvática (yacuna, cubeo, tucano, desana, barasan y cerca de cincuenta étnicas más) con cerca de sesenta mil personas, y finalmente, en las llanuras de la Orinoquia (etnias sikuaní, cuiva, nukak-makú) que totalizan aproximadamente treinta mil individuos. (Correa, 1990), para un agregado superior a los seiscientos mil. (FAJARDO, 2002, p. 101).

Por sua vez, as populações negras y *raizales* chegaram através do tráfico de escravos e ocuparam principalmente o litoral Pacífico e menor quantidade, nas planícies e o litoral Caribe, e as ilhas do arquipélago de San Andrés y providencia. Sua população ascende acerca de três milhões de pessoas (FAJARDO, 2002, p. 101).

No censo populacional nacional de 2005, o percentual da população indígena é de 3,43%, a afrodescendente de 10,4% (negros, afro colombianos, *raizales* e *palenqueros*), e a cigana ou *Rom* de 0.01%. (DANE, 2005). Para o censo de 2018, apesar das dificuldades de acesso às informações e dados brutos no site do Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)⁴, a participação da população indígena no total nacional é de 4,4% aumentando um ponto percentual, passando em 2005 de 1.392.623 a 1.905.617 pessoas que se autoreconhecem como indígenas em 2018 (DANE, 2018). O censo identificou população que informa pertencer a 115 povos indígenas, entanto que no censo de 2005 tinham se identificado

⁴ Os sites oficiais dos órgãos estatais encarregados de tratar e analisar os dados demográficos e população, assim como os sites de sistematização dos fatos relacionados com as tipologias do conflito armado mudaram no atual governo de ultradireita. À dificuldade na navegação, se soma a quantidade de infográficos que mais que informar desinformam, embora que não permitem acessar às bases de dados brutos. Por exemplo, acontece com os resultados da população afrodescendente do Censo 2018, nas que os resultados do estudo estadístico é um pdf sem possibilidade de acesso a informação em bruto. Também, a falta de acesso se dá nas bases de dados brutos onde anos atrás se contabilizavam as tipologias dos delitos relacionados com o conflito armado interno por município e por ano, tipologias como deslocamentos forçados, assassinatos, massacres, ameaças, e desaparecimentos, entre outros.

93 povos. Os 22 povos adicionais de 2018 correspondem a novos reconhecimentos étnicos em zonas de fronteira (SALAZAR, 2020).

Frente aos dados da população negra, o censo de 2018 mostrou uma redução em comparação com o censo 2005 pois nesses anos, o 10,4% do total nacional correspondia a esse grupo étnico, e treze anos depois, a cifra do DANE foi de 7,34%. Segundo o DANE, o que diminuiu não foi a população, mas sim o auto reconhecimento (SALAZAR, 2020). Embora, as essas comunidades negras se engaram a aceitar tal argumento e depois das reuniões entre diretivos do órgão e integrantes do Espaço Nacional de Consulta Previa (os delegados das comunidades negras ante o governo nacional), a cifra se ajustou para um 9,34% (4.506.783 afrodescendentes) (DANE, 2021) que se auto reconheceram como negros, *raizales* e *palenqueros* (SALAZAR, 2020).

Nos contextos de uma peculiar economia de uso da violência para acumular direitos sobre a terra, onde mais que a transição do feudalismo ao capitalismo se deu um processo de incremento das rendas e controle político territorial das elites regionais sem o aumento da produtividade e em desmedro da sociedade e o Estado, em territórios de uma interação histórica entre os povos do campo; emergiram na Colômbia uma série de conflitos territoriais interculturais (campesinos-indígenas) e interétnicos (indígenas-indígenas e afrodescendentes-indígenas) que tem acrescentado nos últimos anos de aprofundamento do modelo multicultural (DUARTE, 2015).

Longe da distribuição equitativa da propriedade agrária através do fortalecimento do latifúndio, em territórios onde o estigma social e político, e o abandono de políticas setoriais agrárias continuam sendo problemas nacionais da maior importância (PALACIOS, 2011); as relações étnico-rurais tornou-se mais complexas com a aparição da carta constitucional de 1991, baseada no multiculturalismo neoliberal.

No começo, a formulação da Constituição de 1991 foi dada como uma saída institucional ante a convergência de conflitos que atravessava Colômbia respeito às relações entre os distintos interesses sociais em torno à terra, alguns de velha data e outros de génesis mais recentes. Esta foi apresentada

...como resultado del elevado número de homicidios, desplazamientos masivos de gentes del campo, empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres y, como resultado político, la pérdida de la institucionalidad de la vida social en amplias regiones del país (FAJARDO, 2002, p. 97).

De acordo com Fajardo (2002), por uma parte, boa parte da população se sumia nas confrontações resultado do modelo de desenvolvimento baseado na acumulação histórica da

propriedade das terras com maior vocação produtiva, o poder político e o status social, que se relacionam

...de una u otra manera, con el control de los recursos, sean ellos la tierra, recursos del subsuelo, bienes producidos en determinados espacios o el propio control territorial con sus connotaciones políticas. La irrupción y coincidencia de estos conflictos hace evidente, de otra parte, la precariedad del Estado y sus limitaciones tanto en términos de capacidad para regular las confrontaciones como de controlar el propio territorio, lo cual ha generado incluso el desbordamiento de los conflictos a regiones limítrofes del país. (FAJARDO, 2002, p. 99).

No entanto, por outra parte, no meio destes conflitos causados pelo modelo de desenvolvimento baseado na acumulação da propriedade, tomaram corpo várias manifestações de identidade étnica baseadas na defesa de um território através de meios políticos que estavam crescendo e ganhando reconhecimento naquela época a nível nacional que determinou novas dinâmicas e novos conflitos territoriais entre os povos do campo. Nos bastidores da aparição da Constituição Política de Colômbia em 1991, por exemplo, as propostas para a organização das comunidades em torno à tenência da terra, se deu num marco de dinâmicas desiguais entre as populações étnico-rurais. Para Fajardo,

...estas propuestas para la organización de las comunidades en torno a la tenencia de la tierra han tenido desarrollos desiguales: sus primeras manifestaciones son los resguardos indígenas, de raigambre colonial, y posteriormente han comenzado a tomar cuerpo las referidas a las comunidades negras y raizales; al tiempo con ellos; comienzan a abrirse paso algunas soluciones a los conflictos generados por el establecimiento vertical de Parques Naturales Nacionales por parte del Estado, sin tener en cuenta a las comunidades establecidas en esas áreas. (FAJARDO, 2002, p. 98).

Alguns estudos relacionaram o desenvolvimento econômico aos conflitos territoriais desde uma perspectiva de direitos culturais (sem falar da multiculturalidade), mas considerando-a referência logo após a aprovação da Constituição Política de 1991 (RINCON; 1998; MARTINEZ, 2007). A abordagem geográfica de Rincón (2011), aponta a explicar como na Colômbia existem áreas de intenso contato interétnico nos que se observar uma tendência ao relaxamento do conflito entre indígenas e colonos; em tanto que em outras áreas se fomentou a polarização entre as comunidades. Em algumas regiões, existiu uma

...aberta cooperación interétnicas entre esses grupos para resolver asuntos prácticos e para confrontar relações com o Estado [...] [que] baseado no presente reconhecimento a diversidade étnica e cultural [...] terminaria por se converter num elemento que fomentava a polarização entre indígenas e colonos, questionando as alianças que estes grupos tinham estabelecido nos seu dia a dia. (CHAVES, 1998, p. 274. Tradução nossa). (RINCON, 2011, p. 49).

Para Rincón (2011), os conflitos entre indígenas e campesinos colonos com o reconhecimento da Constituição de 1991 de direitos territoriais para uns e não para outros, causou uma marginalização no caso dos campesinos colonos.

Segundo Chaves, os direitos territoriais dos indígenas têm se fundamentado numa representação de ancestralidade e permanência nos territórios, mesmo na administração ou gerência da natureza pelos indígenas. Este argumento é empregado para negar os direitos territoriais de outros setores da população, principalmente dos campesinos colonos (CHAVES, 1998; 2001).

Para Solá (2017), é manifesta “a assimetria entre o reconhecimento territorial dos povos indígenas, comunidades campesinas e comunidades negras, sendo que os campesinos/as não têm reconhecimento político” (SÓLA, 2017, p. 185). Precisamente, esta pesquisa parte daquele panorama de confrontações as que se juntou à escalada do conflito armado que ganhava protagonismo nessa década dos noventa. Analiso não apenas os conflitos territoriais produzidos pelo modelo de desenvolvimento extrativista neocolonial. Sack (1986) distingue que podemos afirmar que desde a expansão do capitalismo resultaram uns efeitos territoriais como uma “*complexa teia* de relações que envolve o Estado e o capital, que ocorre, por exemplo, na criação de territórios locais que fragmenta e divide as consciências dos subalternos. (SAQUET, 2013, p. 85). Para ele, as localidades concorrerão entre si para conseguir os escassos recursos, ao invés de confrontar aos ricos. Este papel passivo dos territórios locais é ideologicamente justificado como encantador de nossa liberdade de escolha e movimento; o território se torna uma ferramenta dos ricos para explorar as massas.

Nesse sentido de Sack, me interesso por dita fragmentação das consciências dos subalternos nos territórios locais com a implantação das novas constituições ao tempo da implantação do projeto neoliberal e a abertura econômica dos anos de 1990. Como fala Solá (2017), assim como no caso brasileiro com a Constituição Federal do Brasil de 1988, na Colômbia a Constituição Política de 1991 foi instituída na lógica do multiculturalismo neoliberal. Ao tempo que se reconhece legalmente a diversidade e a diferença de sujeitos e povos, se aplicam com maior intensidade políticas neoliberais de desenvolvimento rural que nos noventa foram cruciais para entrada de grandes empresas transnacionais que concretizaram seus projetos de instalação de empresas nas regiões.

Sobre a implantação do projeto neoliberal e a abertura econômica, com a anuência do Estado, Oliveira e Santos asseguram o seguinte:

O contexto de abertura econômica e a consequente entrada de novos atores no cenário [regional] [...] promoveu uma revalorização de determinadas áreas, em função destas vantagens comparativas, que possibilitam uma elevada produtividade e, com isso, uma redução do tempo de giro do capital, intensificando o processo de acumulação e reprodução ampliada do capital. Tudo isso sob o apoio condicional do Estado em seus

diferentes estratos de governo, nos aspectos financeiros, técnicos e jurídicos, bem como na condução das estratégias de convencimento das populações locais para aprovação dos projetos de introdução, desenvolvimento e expansão dos monocultivos. (OLIVEIRIA; SANTOS, 2016, Pág. 37).

Solá (2017) descreve o paradoxo de começos dos noventa com a sanção da Constituição Política na Colômbia entre a construção do Estado em dois sentidos: um Estado Social de Direito e um Estado Neoliberal.

A Assembleia Nacional Constituinte que deu lugar a nova Constituição de 1991 encaminhou a construção do Estado em dois sentidos: de um lado, o Estado Social de Direito com uma clara inspiração social derivada das lutas proletárias, camponesas, indígenas e populares; e de outro, o Estado Neoliberal que tinha concentrados seus interesses em afiançar o crescimento econômico com base em um sistema progressivo de privatizações em marcha desde os anos de 1980 e uma abertura econômica que permitisse firmar no país os interesses dos grandes investidores multinacionais. A velha estrutura da propriedade privada não só continuou o curso na Constituição de 1991, mas se afiançou como o passar dos anos, mediante os Planos Nacional de Desenvolvimento, a legislação mineira, agrária, ambiental e os Tratados de Livre Comércio, entre outras, a pesar do amplo catálogo de direitos que permitiram a reivindicação da diversidade social, cultural e territorial Colombiana com a consagração da figura plasmada no art. 58 constitucionais da função social da propriedade. (CASTRO PAEZ, 2015 *apud* SOLÁ, 2017, p. 184).

A formação sócio territorial camponesa da Serra é compreendida através de uma perspectiva da interação/conflito com indígenas arhuacos, koguis, wiwas e kankuamos, relações que se transformam de maneiras desiguais com a aparição do modelo multicultural implementado depois de 1991. Esta situação longe de promover contextos de diálogo, equidade e propender pela sustentabilidade local da Serra, parece acomodar-se simbioticamente com as lógicas das geografias do despojo cotidiano, “*y más preocupante aún, parecen replicar sus repertórios de actuación a las expresiones de la sociedad civil*” (DUARTE, 2015, p. 20).

Desde esta perspectiva da crítica ao multiculturalismo colombiano estudado pela antropologia, analiso as maneiras como as configurações legais que definem o marco jurídico atual do multiculturalismo, chegam a ter implicações políticas particularmente para aqueles sujeitos “não marcados” etnicamente, como são camponeses das áreas montanhosas das bacias dos rios Aracataca e Fundación na SNSM.

Os municípios de Aracataca e Fundación compartilham uma área de 93.270 há, com uma população total de 91.036 habitantes, dos quais 3.41% se autoreconhecem como indígenas e 8,94% como população negra, enquanto 86,9% não se identifica em nenhuma destas categorias étnicas (DANE, 2005).

De acordo com os poucos dados públicos do Censo de 2018, o *Resguardo Arhuaco de la Sierra*, conta na *cabecera, centro poblado y rural disperso* com um total de 43.089 indígenas nos departamentos de Magdalena e Cesar (no sul da Serra), nos municípios de Aracataca (2556),

Fundación (5610), Ciénaga (761), e Pueblo Bello (14.433) e Valledupar (19.729) (DANE, 2018). Como se observa, os três municípios do lado ocidental da Serra no Magdalena, existem menor população indígena em comparação com a cara suroriental do lado do departamento do Cesar.

Quanto às outras reservas indígenas nas outras vertentes da SNSM, o Kogui-Malayo-Arhuaco, localizado na sub-região norte da Serra⁵, tem uma população total de 81.434 indígenas divididos entre: koguis (10.710), wiwas (9.061), não indígena (4.315), arhuaco (3.748), chimila (64), wayuu (24), kankuamo (18) (DANE, 2018). Aqui chama atenção a categoria “não indígena” que seguramente é o censo a população campesina localizada dentro da reserva.

Por sua vez, o resguardo Kankuamo localizado em Valledupar, departamento do Cesar, tem um total de 23.327 indígenas onde o 87,9% (7.642) pertencem ao povo kankuamo⁶ (DANE, 2018).

Nos Censos de 2005 e 2018, com exceção da categoria “não indígena”, as maneiras de reconhecimento populacional na SNSM não contemplam aos campesinos como grupo populacional, reflexo isto da sua ausência dentro do modelo do Estado multicultural (DUARTE, 2015).

Desde a chegada massiva à Serra em meados do século XX de gerações de campesinos e campesinas pobres e sem terras do interior do país num processo de ampliação da fronteira agrária, constituíram-se tessituras, nodosidades e redes que criaram vizinhanças, acessos, convergências, mas também disjunções, rupturas e distanciamentos (RAFFESTIN, 1980) entre eles e principalmente com as populações indígenas pelo uso e posse da terra. Se estabeleceram assim desde a época da ampliação da fronteira agrária desenvolvida pelas famílias de colonos campesinos, relações espaciais determinadas por inclusões e/ou exclusões, disjunções, rupturas e distanciamentos entre campesinos e indígenas arhuacos na parte sul do sistema montanhoso do Caribe colombiano.

Assim “o campesino [como] um sujeito intercultural em sua configuração histórica” (Instituto Colombiano de Antropología e História 2018, 19), está envolvido em processos de relacionamento e interação entre culturas com diferentes visões sobre usos e conservação da terra (DUARTE, 2015),

⁵ Os municípios do Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco são: Valledupar (18.473) no departamento do Cesar; Dibulla (11.528), Rioacha (11.528), San Juan del Cesar (8.486) no departamento da Guajira; e Aracataca (886), Ciénaga (2.082) e Santa Marta (7.809), no departamento de Magdalena (DANE, 2018).

⁶ O 22% restante das populações que se encontram dentro do Resguardo Kankuamo são: não indígenas (495), wiwas (234), Koguis (167), arhuaco (132) e wayuu (27) (DANE, 2018).

Neste cenário, como Bocarejo (2015) explica, as formações de categorias e critérios de identificação/classificação e de administração das hierarquizações socioculturais constituídos desde os dispositivos legais de Estado depois de 1991, é um espaço de regulação determinante das condições de existências diferenciais das comunidades étnico-rurais colombianas (BOCAREJO, 2015). Ditas relações espaciais que, determinadas por inclusões e/ou exclusões, disjunções, rupturas e distanciamentos entre as comunidades, fazem parte do que Briones (2005) denominou *geografias estatais de inclusão e exclusão*; isto é, “as articulações historicamente situadas e cambiantes mediante as quais níveis alojados do estado ponderam e situam no tempo e no espaço “sua diversidade interior” (BRIONES, 2005, 17).

Algumas compreensões e discussões sobre o conflito na geografia, entendem o conflito como “o estado de confrontação de forças opostas, relações sociais distintas, em condições políticas adversas, que busca superar-se através da negociação, a manifestação, a luta popular, o diálogo, etc. (FERNANDES, 2008b, p200). No entanto, é a conflitualidade, como propriedade do conflito que não se resolve, permanece latente e não se resolve justamente, “porque resulta das contradições produzidas pelas relações sociais de classes, grupos sociais e instituições que cream espaços e territórios heterogêneos, que entram em disputa por projetos de desenvolvimento e sociedade” (CRISTANCHO, 2016, p. 93-94).

Embora, algumas visões da questão agrária entendem que “a conflitualidade é inerente ao processo de formação do capitalismo e do campesinato por causa do paradoxo gerado pela contradição estrutural”. (FERNANDES, 2009, p. 6). No entanto, não é suficiente apenas estudar as consequências agrárias e territoriais resultados do modelo de desenvolvimento neocolonial, mas também o que Barth (1976) denominou como a emergência e a persistência dos grupos étnicos como unidades diferenças e, portanto, identificáveis, a partir da continuidade de uma fronteira a partir da dicotomia entre “membros” e “não membros”, num contexto econômico e agrário baseado na acumulação, espoliação e capitalização da terra. Para Duarte,

Os rasgos culturais que servem para marcar a fronteira podem cambiar e as características culturais dos membros do grupo podem também transformar-se; de fato, a forma organizativa do grupo também pode mudar; sem embargo, a dicotomia entre “membros” e “não membros” será mantida, na medida em que permite especificar a natureza da continuidade (DUARTE, 2015, pág. 46).

Nos anos noventa na Colômbia, paralelo à neoliberalização dos mercados nacionais, e o surgimento do sistema de direitos diferenciais étnicos, a Lei 160 de 1994 foi aprovada no congresso como mecanismo de distribuição da propriedade rural não através do estado, mas através da modalidade “*del mercado asistido de tierras*” (HOLLINKER, 1999) cujas experiências deixaram um elevado valor da transações “*que ha gravitado negativamente las*

posibilidades de desarrollo de los proyectos productivos en las fincas negociadas”. (FAJARDO, 2002, p. 79).

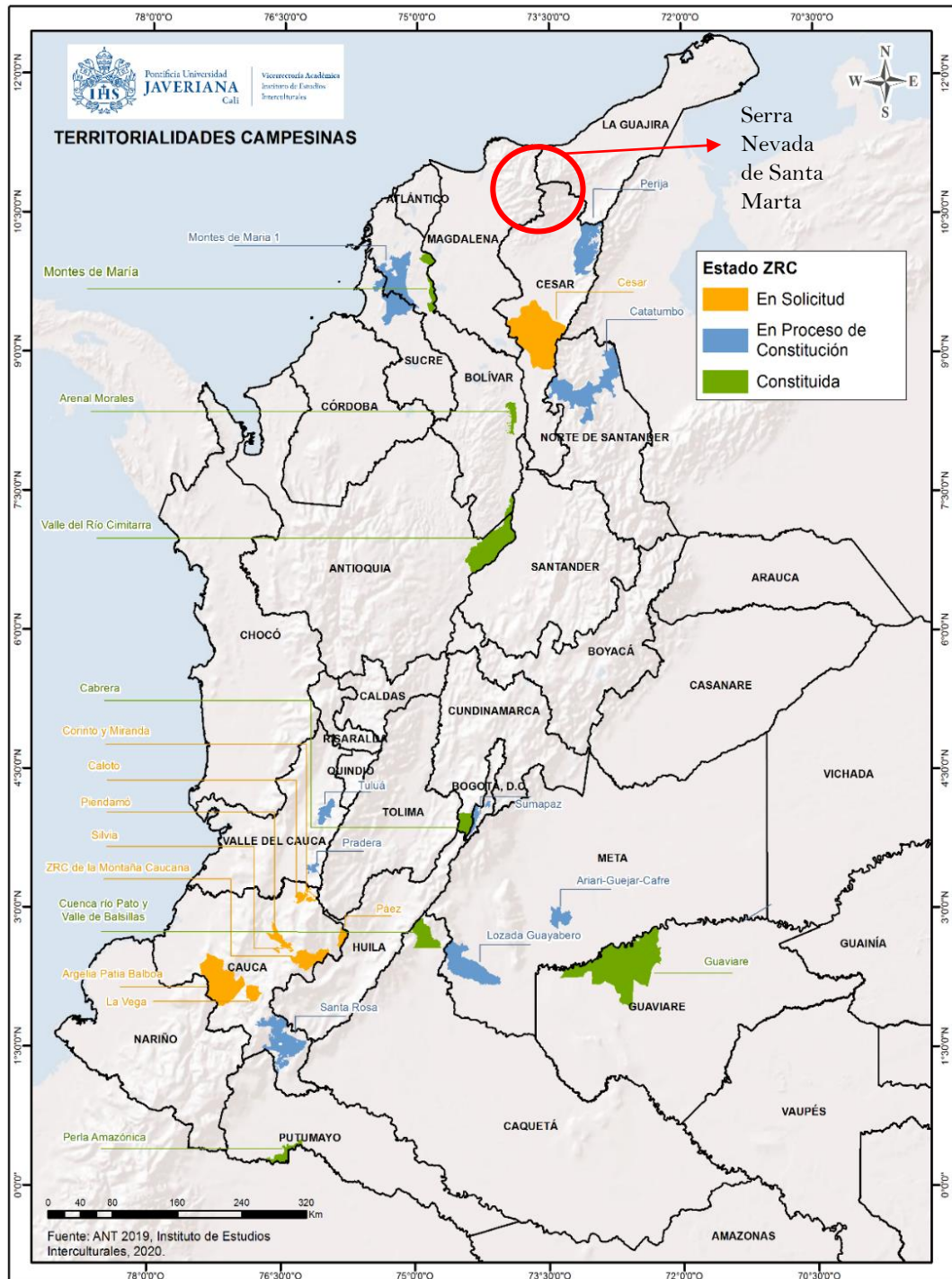
Pese aos limitados mecanismos do mercado assistido de terras, a Lei 160 de 1994 significou uma esperança de reforma agrária que incluiria aos camponeses como atores fundamentais. Além dos parágrafos referidos aos grupos étnicos (como explicaremos na continuação), foi incluída a proposta do capítulo XIII com a denominação de “*Zonas de Reserva Campesina*” resultado das mobilizações de finais dos oitentas produto do mal-estar social que deixou a sobre oferta da produção de coca em regiões de colonos camponeses do sul de país nos departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá e sul de Bolívar, que trabalhavam na organização de propostas de ordenamento territorial autônomo camponeses das denominadas *Zonas de Reserva Campesinas* (ZRC) (MOLANO, 1987, 2016; FAJARDO, 2002).

... [las ZRC] pueden ser comprendidas como parte de una larga tradición de búsqueda de espacios de consolidación campesina en los bordes de las fronteras agrarias del país. Estas búsquedas han sido generadas por los procesos de expansión de la frontera agrícola que han producido la remoción de las economías a manos de la ganadería extensiva, ocasionalmente de cultivos comerciales, y sin excepción, en medio de conflictos sociales que expresan una baja capacidad del Estado para legitimarse en esos espacios. (FAJARDO, 2002, p. 82).

...las ZRC en áreas de colonización o en donde predominen los baldíos trasciende el marco de proyectos individuales, de “fincas” que tradicionalmente ha correspondido a las acciones de reforma agraria. En la legislación previa, los beneficiarios se ubican en unidades de explotación individuales afectadas por la intervención directa del Instituto de la Reforma Agraria, Incora, por adquisición por parte de los mismos camponeses (mercado de tierras). En las ZRC se trata de espacios más amplios, que facilitan escalas mayores de operación, más eficientes en términos del ordenamiento territorial, de la realización de proyectos ambientales de impacto (como lo puede ser la preservación o recuperación de micro cuencas o cuencas, la reforestación o la protección de un recurso determinado), de la dotación de infraestructura para el desarrollo y de la agregación de la oferta de los productos. (FAJARDO, 2002, p. 85),

Os processos de ZRC movido pelo articulado da Lei 160 de 1994 se ativaram no Sul, centro e outras regiões de colonização camponesas em tudo o país, como parte das propostas territoriais de manejo e ordenamento territorial autônomo desses assentamentos localizados na fronteira agrária, em ecossistemas frágeis y de baixo potencial produtivo é particularmente crítico (FAJARDO, 2002). No entanto, nas regiões de colonização camponesa da SNSM outros seriam os processos territoriais muito além dos princípios organizativos e políticos da autonomia camponesa das ZRC promovida pela Lei 160 de 1994 que se experimentam em várias regiões da Colômbia, como se observa no seguinte mapa, em que se identificam as ZRC em processo de solicitação, em processo de constituição e aquela já constituídas.

Mapa 2 - Territorialidades campesinas das Zonas de Reservas Campesinas



Fonte: Agencia Nacional de Tierras (ANT), Instituto de Estudios Interculturales (IEI), da Pontificia Universidad Javeriana, Sede Cali, 2020.

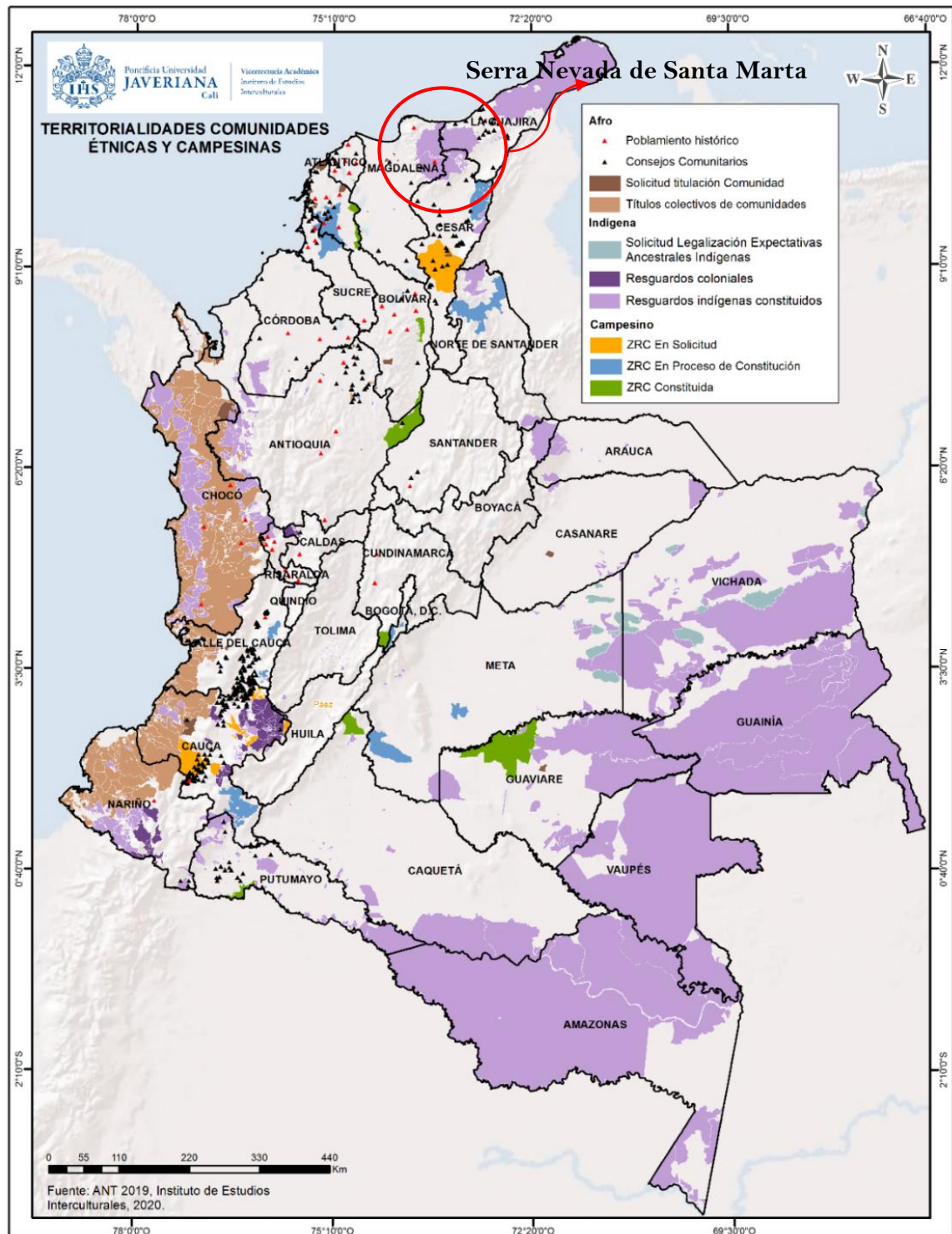
O panorama nacional mostra que, para a década de 1990 com a emergência do sistema multicultural, seriam manifestas as pressões territoriais entre as comunidades étnico-rurais pelo

acesso às terras no padrão agrário constituído a partir da acumulação e a concentração da propriedade. Estas pressões na Serra se expressariam e desenvolveriam de maneiras diferentes.

Apesar de que compartilhariam os problemas da fronteira agraria comuns com outras regiões do país, *“por cuanto la decisión de estos núcleos humanos de ocupar aquellos espacios no obedeció a razón distinta de la búsqueda de un refugio para defender la vida, reconstruir las economías y los vínculos sociales destruidos en los lugares de origen por la violencia política o económica”* (FAJARDO, 2002, p. 83); as territorialidades campesinas da Serra se constituíram numas geografias ou paisagens cotidianas do despojo e a espoliação, com implicações políticas inesperáveis para elas em contextos instáveis.

O seguinte mapa sintetiza os processos territoriais indígenas, negros e campesinos no marco do reconhecimento territorial na Colômbia. Como se observa, a realidade na SNSM destaca exclusivamente a figura das reservas indígenas constituídas, sem que se evidenciem processos territoriais campesinos consolidados ou com pretensões territoriais de reconhecimento jurídico. (MAPA, 3).

Mapa 3 - Figuras jurídicas e pretensões territoriais étnico-rurais em Colômbia.



Fonte: Agencia Nacional de Tierras (ANT), Instituto de Estudios Interculturales (IEI), da Pontificia Universidad Javeriana, Sede Cali, 2020.

2.4.1 A jurisprudência multicultural em Latino américa.

A tradição do multiculturalismo latino-americano se inspira nos Estados liberais e as teorias sociais anglo-saxônicas para referir-se à diversidade étnica, de gênero, sexual e religiosa (BOCAREJO, 2015). Como afirma Bocarejo, sendo uma visão liberal, ela concebe o multiculturalismo como uma doutrina política que procura o reconhecimento das diferenças sociais expressadas em termos étnicos ou diferenciais. Esta visão da diferença, no contexto da globalização e o multiculturalismo, nasce no cenário norte-americano e europeu, com a composição de sistemas jurídicos que buscavam a inclusão de grupos sociais que não tinham acesso nem reconhecimento dos Estados (BOCAREJO, 2015).

Ditas doutrinas apareceram também como necessidade de conceber estratégias estatais para atender populações migrantes ou minorias étnicas que tinham um reduzido tamanho em comparação com outros grupos populacionais (DUARTE, 2015).

A teoria do multiculturalismo parte da ideia da falta de reconhecimento ou de acesso ao reconhecimento das particularidades culturais dessas populações pelo caminho da democracia representativa, através das reformas legais inspiradas desde baixo, por grupos dos “terceiros mundos”, imigrantes, camponeses, indígenas, mulheres pobres, colonos ilegais, trabalhadores das maquilas e em geral os que tem sofrido algum tipo de discriminação local (SOUZA, RODRIGUEZ, 2007). O fundamento deste tipo de experimentação institucional das bases sociais populares, é focar nas potencialidades das lutas políticas contra hegemônicas, no contexto da globalização. (SOUZA; RODRÍGUEZ, 2007. Pág. 10). Para Duarte (2015), dita ideologias multiculturais,

Apresenta a redefinição do alcance na intervenção estatal em termos de espaços públicos e privados, assim como a ampliação dos direitos liberais, que se desdobra aos direitos coletivos e as políticas diferenciais que procuram afirmar as possibilidades de subsistências de um grupo humano dentro de um Estado nacional construído segundo uma especificidade cultural diferente. (DUARTE, 2015, pág. 29. Tradução própria).

Na América Latina, a renovação dos sistemas jurídicos das fraturadas Repúblicas que emergiam com a renovação e reconfiguração do colonialismo, não só se reinventou como projeto civilizatório de Estado moderno em relação com a dominação econômica, mas também com as formas legais e políticas de reconhecer as populações tradicionais que faziam presença nos territórios colonizados. Como fala Bocarejo (2015), a ideia de um reconhecimento multicultural como processo político começou na América Latina como aposta redentora das crises do Estados nos anos oitentas do século XX: dívidas externas impagáveis, rendas concentradas pelas elites locais, acumulações de terras e regimes econômicos muito voláteis dominados pelas demandas

do capital internacional. Estados que, ao passo que serviam de meio para acrescentar a dominação das classes dirigentes sobre uma margem de oprimidos, homogeneizava os ideários nacionais, negando e subalternizando outras racionalidades de visões de mundo, saberes, linguagens, histórias locais, e de humanidades de populações colonizadas que foram violentadas, apagadas e expropriadas em sacrifício da ideia do progresso das diferentes fases da modernidade (MIGNOLO, 2008).

É manifesto como, no contexto da promoção dos direitos multiculturais como fórmula redentora das saqueadas repúblicas latino-americanas dos anos oitentas e noventas do século XX, foram essenciais a expressão das lutas dos processos da organização social e cultural desde perspectiva étnica, que persistiram e resistiram aos governos republicanos e pro-mestiços desde o século XIX. Ditos processos, como mostra Duarte,

se consolidaram com força a partir dos anos setenta do século XX e entraram decididamente [na emergência dessas constituições] como vectores de força local, regional e incluso no panorama político de seus respectivos países na década dos noventa. (DUARTE, 2015, pág. 30. Tradução própria).

O multiculturalismo representou então “uma abertura ideológica expressada em termos jurídicos que em seu momento significou o reconhecimento da configuração plural de suas populações” (DUARTE, 2015, pág. 29; tradução própria). Pode se afirmar, a aposta redentora destas ideias de estados multiculturais liberais, buscava a inclusão legal e política dos grupos tradicionalmente marginalizados, que no caso de Colômbia seriam as populações indígenas, negras, *palenqueras*, *raizales*, ciganas e rom. Esta visão otimista liberal, assevera Bocarejo (2015), fundada “[n]um “Estado de direito” se materializou na formulação de novas constituições nacionais e a criação de uns direitos minoritários diferenciais” (BOCAREJO, 2015, pág. 34. Tradução própria).

2.4.2 Multiculturalismo Operativo Na Colômbia

Para Bocarejo (2015) a implementação do marco multicultural supõe definir, localizar e justificar, num primeiro momento, aqueles grupos minoritários que iram se beneficiar dos direitos diferenciais. É o processo de delimitação e criação dos bordos daqueles grupos tradicionalmente marginados. A Corte Constitucional Colombiana (CCC) assumiu em 1991 o papel de nomear o sistema jurídico multicultural, quando se refere na lei às diferenças entre os grupos populacionais. Seriam três as categorias identificadas por alguns autores para alcunhar ditas populações: comunidades, grupos étnicos e povos indígenas e triviais (BOCAREJO, 2015; DUARTE, 2015).

O primeiro destes termos (comunidades) na constituição de 1991 se refere maioritariamente às populações indígenas e é utilizado para diferenciar os direitos de participação política (art. 171), conformação de entidades territoriais (art. 329) e autonomia de governança territorial de acordo aos usos e costumes indígenas (Art. 330) (DUARTE, 2015). Mas também, o artigo transitório 55 e o articulado da Lei 70 de 1993, o termo *comunidade* aparece como categoria predominante para se referir as populações negras ou afrodescendentes⁷.

Por sua vez, a categoria de *Grupo étnico* na Constituição é associada principalmente às populações indígenas além de referir também em alguns casos às populações negras. Ela é utilizada nos artigos que instituem a não apropriação, a inalienabilidade e a imprescritibilidade dos territórios comuns do resguardo (reserva) (Art. 63); além dos direitos da educação diferencial (Art. 68); os direitos especiais das populações étnicas respeito a riqueza arqueológica (Art. 72); e a participação de especial de indígenas na Câmara de Deputados o Senado (Art. 176) (CONSTITUICAO POLITICA DE COLÔMBIA, 1991)⁸.

Por seu lado, como indica Duarte (2015), a Lei 70 utiliza a denominação *grupo étnico* desde o artigo 1 onde se constitui que as comunidades negras são reconhecidas em ditos termos. Igual que com as populações indígenas, a Corte define o não embargo, a inalienabilidade e a imprescritibilidade dos territórios coletivos das comunidades negras e no artigo 15 onde nega as ocupações de pessoas não pertencentes ao grupo étnico negro sobre terras tituladas em propriedade coletiva reconhecidos como *consejos comunitários*. Ditos *consejos comunitários* é o que no Brasil é conhecido como quilombos.

A categoria de povos *indígenas e tribais*, por último, sobressaiu depois de 1991 como uma das referências mais comuns nos documentos do Estado e das organizações nacionais e órgãos multilaterais fundamentados na jurisprudência multicultural. Como analisa Duarte (2015), ela nasceu como crítica à noção de grupo étnico, mais comum antes do surgimento da Constituição de 1991, pois carecia de um exercício de contextualização histórica que tomara em conta “a força estruturante dos processos de dominação colonial baixo os quais se estabeleceram

⁷ O termo, assegura Duarte (2015), tem uma definição conceptual no artigo 2 que a define assim: “Comunidade Negra. É o conjunto de famílias de ascendência afro Colômbiana que tem uma cultura própria, compartilham uma história e tem suas próprias tradições e costumes dentro da relação campo-povoado, que revelam e conservam consciência de identidade que as distinguem de outros grupos étnicos” (DUARTE, 2015, pág. 31. Tradução própria).

⁸ “As circunscrições especiais asseguraram a participação na Câmara de Deputados dos *grupos étnicos* [...] mediante estas circunscrições serão elegidas quatro (4) Representantes distribuídos assim: dos (2) pela circunscrição das comunidades afrodescendentes, uno (1) pela circunscrição das comunidades indígenas [...]” (CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE COLÔMBIA, 1991).

as relações interculturais no contexto latino-americano” (DUARTE, 2015, pág. 36. Tradução própria).

A noção de *povos indígenas* emergiu posteriormente como uma conquista dos vários processos de negociações e reclamações ante o Estado pelos representantes de grupos indígenas. Logo depois se embrenhou nos âmbitos da jurisprudência transnacional e o direito internacional em organismos e instituições multilaterais como a OIT, a ONU (BRIONES, 2005; DUARTE, 2015).

Nessa perspectiva, no artigo 96, onde se define os nacionais Colombianos, e na Lei 21 de 1991 ratifica-se o Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas como principal instrumento do direito internacional para garantir os direitos indígenas. Para a OIT, o território e a consciência da identidade aparecem com critérios fundamentais para determinar os grupos indígenas e triviais aos que se aplicam as disposições desse Convênio, se convertendo num dos paradigmas internacionais mais usados para pensar as questões indígenas em diferentes âmbitos. Como expõe Duarte (2015), na guia de aplicação deste se define um povo indígena em termos objetivos tanto como subjetivos:

Os elementos objetivos incluem: I) continuidade histórica (sociedades que descendem de grupos anteriores a conquista a colonização); II) conexão territorial (território de país ou região habitada por seus antepassados) y III) instituições sociais, econômicas, culturais e políticas distintivas e específicas próprias, que se conservam em todo ou em parte. E o elemento subjetivo correspondentes a auto identificação coletiva como povo indígena. (DUARTE, 2015, pág. 37. Tradução própria).

Por sua vez, organismos transnacionais como a ONU instituem os fatores relevantes para compreender o conceito de *povo indígena* nos que se prioriza –segundo Duarte (2015)- o tempo com respeito à ocupação e uso de um território específico; a perpetuação da especificidade cultural (língua, organização social, religião e valores espirituais, modos de produção, formas e instituições jurídicas, etc.); a auto identificação e reconhecimento como coletividade diferenciado; e experiências de subjugação, marginalização, expropriação, exclusão ou discriminação (DUARTE, 2015).

Duarte (2015) descreve como as populações negras, por sua vez, são reconhecidas pela Corte na Sentencia c-169 de 2001 a partir de uma dupla condição de “povos” e “povos triviais” sustentado no Convênio 169 da OIT, contemplando critérios de descendência histórica; identidade; elementos culturais únicos; e o direito à propriedade coletiva e seus usos tradicionais de produção (ONU, 2009).

Contudo, com base na jurisprudência da Corte Constitucional e no reconhecimento do Convênio 169 da OIT, a noção de “povo” é imperante para se referir juridicamente às populações indígenas e afrodescendentes que se auto reconhecem a partir de critérios étnicos.

Segundo Duarte (2015), dita categoria tornou-se numa importante ferramenta de defesa cultural e territorial em tanto reconhece o fato histórico de dominação e expropriação por parte da sociedade majoritária. Daquele modo, a categoria de “povo indígena e tribal” obriga aos Estados não apenas para tratar a ditas populações em condições de igualdade e a promover a plena efetividade de seus direitos sociais, econômicos e culturais, respeitando sua identidade social e cultural, seus costumes, tradições e instituições; mas também a ajudar a seus membros a eliminar as diferenças socioeconômicas que existam, de uma maneira compatível com suas aspirações e formas de vida (DUARTE, 2015).

2.4.3 Hierarquização das populações rurais e o paradoxo dos camponeses

O processo de definição, localização, justificação e criação de fronteiras de reconhecimento daqueles grupos minoritários na Constituição Colombiana de 1991, vinho acompanhado da transformação da luta indígena e afrodescendente que possibilitou a passagem destas populações de um apagamento e exclusão, a serem sujeitos do direito internacional que determinou para o caso dos indígenas a formação de uma indianidade a escala nacional, regional e local. Apesar da legalidade cosmopolita subalterna que fala Boaventura e Souza (2007) fundamentados em aspetos sócio jurídicos que permitiram a ação e o pensamento político encarnados na globalização contra hegemônica; autores como Uprimny e Garcia Villegas asseguram que o caso da Colômbia requiere um análisis cuidadoso com respeito a essa contra hegemonia: “...la experiencia constitucional colombiana es atípica y no parece tener mayor relación con lo contra-hegemónico” (UPRIMNY. GARCÍA VILLEGAS. 2004, p. 1).

Para os autores, o caso Colombiano nasce numa instituição do Estado Liberal capitalista, e opera ao mesmo tempo desde o direito, considerado como o instrumento mais essencial da dominação de dito modelo de Estado (UPRIMNY. GARCÍA VILLEGAS. 2004). Dito fenómeno têm derivado numa série de polémicas ao interior do movimento indígena:

El fortalecimiento de la lucha jurídica no ha dejado de suscitar controversias al interior del movimiento indígena (...) dos tendencias se enfrentan: por un lado están aquellos líderes, que asumiendo una actitud pragmática consideran que los intereses del movimiento resultan más favorecidos si se adopta una estrategia de negociación con el gobierno sin que ello implique ceder en materia fundamental (...) otros, en cambio, a partir de una posición que podríamos denominar integrista, desconfían de casi cualquier concesión que provenga de las instituciones y en tal sentido utilizan el derecho solo como una herramienta más de presión, sin que ello implique la aceptación del derecho de Estado (...) (UPRIMNY, GARCÍA VILLEGAS, 2004, P. 11).

No entanto, pese as mobilizações e demandas a multiescalares das populações étnicas, autoras como Briones propõem analisar em particular as transformações e os efeitos destes processos de criação de marcas dos grupos minoritários em dois tipos de processos: primeiro, os processos de internacionalização da retórica da diversidade como direito humano e valor, “ou seja a politização da cultura”, e segundo, a multiplicação de agências e campos na gestão da diversidade (agências multilaterais, organismos internacionais, estados, organizações e comunidades indígenas, ONG). Briones assegura a existência de uns processos contemporâneos de uma governabilidade neoliberal (BRIONES, 2005). Nesse marco, Briones refere que,

...si hasta hace no tanto tiempo las culturas indígenas eran vistas como lastre del desarrollo latinoamericano (Ribeiro, 2002), en la era de lo que Charles Hale define como “multiculturalismo neoliberal” (Hale, 2002) o lo que Donna Van Cott define como “multiculturalismo constitucional” (Van Cott, 2000) se las piensa y postula como derecho (Taylor, 1992), como capital social (Doménech, 2004), como recurso político (Turner, 1993) y/o como recurso económico (Yúdice, 2002) (BRIONES, 2005, pág. 12)

Desde esta perspectiva, nesta dissertação se destacam alguns dos paradoxos que resultaram dos processos de produção de etnicidades específicas com a constituição de 1991, a partir de marcações seletivamente racializadas que decisivamente produzem outras desigualdades através da invisibilidade e o silenciamento daqueles que não estão inclusos no que se define como “norma”. Para Briones, a aboriginalidade ou a diferenciação étnica enaltece as dinâmicas e os efeitos da relação colonial com distancias culturais, temporais e espaciais. Embora, também significou hierarquizar horizontal e verticalmente ao conjunto de cidadãos “normais” /normalizados e aos definidos como “outros” (em este caso, indígenas, aborígenes, índios, etc.). Para a antropóloga argentina, aquela hierarquização dos cidadãos tem se constituído em base a

...dispositivos de totalización e individuación que inscriben campos de visión diferenciados para cada cual (Corrian y Sayer, 1985), según estrategias de espacialización, temporalización y substancialización (Alonso, 1994), que atribuyen dispares consistencia, porosidades y fisuras a los contornos (auto) descriptivos tanto del "nosotros" desmarcado como de los contingentes sociales selectiva y explícitamente etnicizados y/o racializados. (BRIONES, 2005, págs. 15, 16).

Briones sugere que a questão é ver como se reproduz desigualdades internas —e renovam consensos em torno a essas desigualdades— tornando invisível certas divergências e tematizando outras, fixando umbrais de uniformidade e alteridade que permite classificar o que ao longo do tempo, resulta em “formações nacionais de alteridade”. No caso Colombiano, tais formações não só produzem categorias e critérios de identificação/classificação e pertinência,

mas, na administração das hierarquizações socioculturais, “regulam condições de existência diferenciais para os distintos tipos de outros internos que se reconhecem parte histórica ou recente da sociedade sobre a qual um determinado Estado-Nação estende sua soberania” (BRIONES, 2005, pág. 17).

O processo de criação de contornos de categorias (auto) descritivas das populações rurais por parte da Corte Constitucional colombiana em 1991, evidencia, como fala Duarte, as assimetrias do multiculturalismo operativo porquanto a população campesina não é denominada na constituição nem como *comunidade*, *grupo étnico* ou *povo tribal*.

Nessa perspectiva dos estudos críticos ao multiculturalismo, se identifica que no único sistema jurídico onde aparece a categoria de *comunidade* não relacionada como os grupos indígenas é na Lei 150 de 1994, que regula o *Sistema Nacional de Reforma Agraria e Desarrollo Rural campesino*⁹, “onde surge a denominação de comunidades rurais no contexto que não se refere somente às comunidades campesinas, mas que inclui as populações indígenas e afrodescendentes” (DUARTE, 2015, pág. 31).

Duarte mostra como, mesmo que o termo *comunidade* seja bem amplo em sua concepção para se referir às populações rurais, no articulado jurídico multicultural, a população mestiça campesinos não aparece reconhecida como grupo étnico,

na medida que se assume que suas práticas culturais e territoriais são as mesmas que as da sociedade majoritária; por esta razão, seus direitos e deveres não são diferenciados do resto da população colombiana. (DUARTE, 2015, pág. 34. Tradução própria).

Alguns estudos focam o olhar nas pugnas que vão do local e o global, e chegam a estar relacionados com o problema da diferença no contexto da globalização e o multiculturalismo. Por exemplo, a concepção de *grupo étnico*, assegura Barth (1976), são formas de organização social que de fato funcionam como categorias de atribuição e identificação que são utilizadas pelos atores mesmos e que tem, por tanto, a característica de organizar desde perspectivas globais a interação entre os indivíduos no local (BART, 1986).

Por isso, para Duarte, “a identidade étnica é sobretudo um processo de ligação subjetiva de identificação de status que se sobrepõe aos demais status e define suas constelações permissíveis” (DUARTE, 2015, pág. 34. Tradução própria), como é o caso do reconhecimento

⁹ Segundo o capítulo II, artículo 3: São atividades do *Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesinos*, a aquisição e titulação de terras para os fines previstos nesta lei e as destinadas a coadjuvar ou melhorar sua exploração, organizar as comunidades rurais, oferecer-lhes serviços sociais básicos e infraestrutura física, crédito, diversificação de cultivos, adequação de terras, seguridade social, transferência de tecnologia, comercialização, gestão empresarial e capacitação laboral.

constitucional Colombiano. Esta definição tem sido adoptada nos últimos 30 anos no âmbito internacional e na crescente jurisprudência multicultural baseada numa ideia de coletividade,

que se identifica a se mesma e que é identificada pelos demais conforme a critérios étnicos, é dizer, em função de certos elementos comuns tais como o idioma, a religião, a tribo, a nacionalidade, a raça ou uma combinação destes elementos, e que comparte um sentimento comum de identidade como outros membros do grupo (STAVENHAGEN, 1991) (DUARTE, 2015, pág. 34, Tradução própria)

O paradoxo do campesinato que promoveu o multiculturalismo operativo foi manifesto nos últimos anos na Colômbia. Nas agendas de várias organizações campesinas de diferentes regiões, aquelas de tradição organizativa das Zonas de Reserva Campesina (ZRC), começaram a expressar um incomodo frente a negação de suas expressões culturais como sujeitos rurais. De fato, estas acepções avaliadas e sustentadas na construção dos sistemas jurídicos diferenciados no processo de formação da alteridade, são assumidos desde diferentes atores institucionais, acadêmicos, de ONGs, etc., incluídas as próprias populações rurais, privilegiando as características culturais de umas populações e apagando outras, neste caso ao dos campesinos, insinuando uma ausência de um arcabouço cultural e de uma coletividade com certos elementos comuns tais como o idioma, a religião, a tribo, a nacionalidade, a raça ou uma combinação destes elementos, e que comparte um sentimento comum de identidade.

O debate tem sido pautado por algumas organizações campesinas do sul ocidente do país, argumentando pertencer a uma “cultura da colonização, que tem estado historicamente presente em todo o processo de constituição da nação colombiana por meio da ampliação da fronteira agrícola” (DUARTE, 2015, pág. 34)

Para Duarte, esta perspectiva da toma de consciência de uma “cultura do campesinato”, se fundamenta numas práticas diferenciadas e em um sentido de particularidade coletiva que difere da sociedade maioritariamente urbana, mas também das comunidades vizinhas de indígenas e afrodescendentes. Assim, o campesinato se constitui historicamente. Neste sentido, assegura Duarte, essa toma de consciência também “responde a presença já histórica de gerações de campesinos colonos em territórios considerados da União pelo Estado, mas com formas específicas de governos territorial, como a vereda ou as Juntas de Ação Comunal (JAC)” (DUARTE, 2015, pág. 35. Tradução própria).

No entanto, cabe lembrar que ditas demandas inspiradas em importantes processos organizativos campesinos do sul ocidente colombiano, contrastam notoriamente com as experiências dos sujeitos protagonistas desta pesquisa na SNSM. Nestes setores do Caribe Colombiano não se evidenciam processos organizativos de caráter político consolidados de

campesinos que se questionem os efeitos do multiculturalismo, em áreas onde os processos organizativos são muito frágeis resultado de uma história de violências que se reproduzem continuamente em contextos de “estados de guerra” (FRANCO, 2009) nas geografias do despojo cotidiano (OJEDA, 2016).

Como acima foi ressaltado, figuras regulamentadas na Lei 160 como as de Zonas de Reserva Campesina, ou a figura proposta pela *Assemble Nacional del CNA*, assim como as zonas interétnicas agroalimentares (DUARTE, 2015), estão longe de ser parte dos processos territoriais campesinos da SNSM, nos que não se identificam umas claras demandas territoriais que busquem contrapor aquelas contradições do multiculturalismo neoliberal e como veremos, da representação no processo de implementação de políticas de reparação territorial no marco da justiça transicional.

2.4.4 Estão as campesinas e os campesinos das bacias dos rios Fundación e Aracataca na Serra imersos num sistema de competição intercultural?

Para autores como Duarte, a noção de fronteira étnica é funcional em tanto que se afasta de posições essencialistas em referência aos processos de identidade e etnicidade, e se preocupa em debater “as formas em que os processos organizativos (tipos organizacionais) regulamentam a interação a través de uma série de proscições e prescrições em permanente negociação” (DUARTE, 2016, p. 46. Tradução própria). Como ele propõe, estes conceitos descobrem um campo de aplicação na transformação do panorama das problemáticas étnicas e culturais das políticas multiculturais no caso da ruralidade colombiana.

Nesse sentido, procuro observar as formas de desigualdade social no campo desde uma perspectiva das relações interculturais e os resultados territoriais dos conflitos entre indígenas e campesinos na Serra Nevada de Santa Marta. As articulações¹⁰ espaciais da indianidade das que fala Bocarejo (2015) ajudam a entender como a criação de sedimentações discursivas criam complexos efeitos políticos tanto para indígenas como para não indígenas. Assim, as formas de desigualdade social

se constroem em relação de atores heterogêneos que mobilizam formas de fazer e saber local os quais, configuram articulações diversas, e as vezes diferentes, entre ser indígena e viver, conceber e imaginar um lugar (BOCAREJO, 2015, p. 46 Tradução própria).

¹⁰ Para Bocarejo a noção de articulação é feita a partir de Stuar Hall (2010) quem coloca duas questões fundamentais do livro: a primeira é o caráter histórico de qualquer vínculo entre diferença e espaço. A segunda, que “su vínculo no es necesariamente determinado, absoluto y esencial” (Hall, 2010, 85).

Nesse sentido, é a partir da heterogeneidade que se pode superar a ideia romântica de homogeneidade, para “entender as contradições nas mobilizações políticas ao tempo que se abre a possibilidade de imaginarmos articulações espaciais menos excludentes (BOCAREJO, 2015, pág. 46). A aposta teórica e metodológica de Bocarejo mostra a importância de seguir o rastro das articulações espaciais de indianidade não só para entrever as implicações políticas do multiculturalismo, mas também para imaginar outras práticas de entendimento das heterogeneidades do campo colombiano. A mirada crítica da antropóloga colombiana aos sistemas multiculturais, ajuda

por lo menos a imaginar, otras formas posibles de acción política dentro y fuera del liberalismo legal contemporáneo. También creo que seguir alguna de las articulaciones espaciales de indianidad contemporáneas es una estrategia de análisis que rive para entrever las implicaciones políticas del multiculturalismo actual y dilucidar no sólo los conflictos, sino las posibilidades de reconfigurar nuevas prácticas de entendimiento de las heterogeneidades indígenas (BOCAREJO, 2015, p. 27).

Entender as consequências políticas destas relações iguais e assimétricas, resultado dos marcos jurídicos multiculturais do Estado neoliberal, apresenta importantes desafios teóricos e metodológicos. No mesmo sentido que Duarte (2015), Bocarejo lembra que as marcações étnicas “definem, por exemplo, os contornos políticos da relação entre indígenas e camponeses” (BOCAREJO, 2015, pág. 30). No meu caso, observar duas situações em concreto me permitem analisar estas consequências políticas destas relações simétricas e assimétricas do modelo multicultural na SNSM: i) as compras de terras nas partes altas dos rios Aracataca e Fundación a camponeses e camponesas deslocadas pela violência por parte do Resguardo Arhuaco da Serra, organização indígena; e ii) a implementação da lei de vítimas e restituição de terras 1448 de 2011, na que trabalhei como funcionário da área social.

Para o caso da Serra, o recorte temporal de análises da segunda parte desta dissertação é de pouco mais de dez anos. Começa com a consolidação das forças de grupos irregulares de mercenários e sua desmobilização, e os anos da implementação da restituição de terras. Observo como nesse período entre 2002 a 2019, se configuram como assegura Bocarejo, representações opostas sedimentadas denominadas como *articulações espaciais da diferença*, que

...se constroem através de dois imagens contrapostas do espaço: o espaço indígena se pensa como um repositório ambiental e o camponês, como um símbolo de desenvolvimento agrário [...] as formações tanto de sujeitos indígenas como de camponeses estão encorados em práticas e representações específicas de “seu” espaço. A partir de ditas práticas e representações se cream *articulações espaciais da diferença*, no marco das quais não só surgem e se debatem as construções étnicas indígenas, mas também as camponesas (BOCAREJO, 2015, pág. 30, Tradução própria).

Em complemento as *articulações espaciais da diferença* sustentadas em imagens sedimentas e opostas de indígenas e camponeses das que fala Bocarejo (2015), as quatro tipologias do Hoffmann (2001) citadas por Duarte, ajudam a compreender as especificidades dos conflitos étnicos e interculturais no campo Colombiano. Esta classificação está no caminho com interpretações que valorizam o relacionamento entre território e identidade, “*en cuanto el territorio es fuente de identificación y condición de existencia de individuos en la nación, dado que solamente se existe en colectivos sociales culturalmente significantes asociados a espacios concretos*” (DUARTE, 2015, p. 47). As quatro tipologias que ajudam a compreender os conflitos étnicos e interculturais para o caso Colombiano, se resumem em:

1. Conflitos no interior de um mesmo setor étnico, que comumente nascem das novas hierarquias que se dão entre habitantes que aspiram a um mesmo território coletivo e que participam na mobilização étnico-territorial.
2. Conflitos com vizinhos que, em certos casos, podem adquirir a matiz de conflito interétnico ou intercultural (entre indígenas, afrodescendentes e/ou mestiços), quando no fundo se trata de lutas pelo território.
3. Conflitos relacionados com o conflito armado e o controle de recursos, que revestem uma dimensão geopolítica evidente. Os atores da guerra precisam de territórios de maneira contínua ou temporal, para cultivar coca, transitar ou residir em eles numa temporada com certa segurança.
4. Conflitos entre grupos definidos étnica ou culturalmente e grandes setores econômicos, os quais nascem de ambições territoriais destes últimos. A concepção utilitarista e mercantil do espaço se impõe em lugares onde existem projetos de exploração capitalista e onde as teorias econômicas feitas sobre a renda ou os direitos de propriedade são mais adequadas para entender as dinâmicas atuais. (DUARTE, 2015, pág. 47 Tradução própria).

Mesmo que existem conflitos do tipo 1 (um) no caso da SNSM, neste estudo me concentro principalmente nos conflitos entre vizinhos; ou seja, os conflitos interculturais entre camponeses e indígenas (tipo dois). Mas também, a partir de uma abordagem regional, se observa a reconfiguração sócio territorial a partir dos conflitos relacionados com o conflito armado e o controle dos recursos (tipo 3); e os conflitos dos grupos étnico-rurais com grandes setores econômicos (tipo 4).

No entanto, neste sentido, como acima expliquei, não é suficiente analisar o *conflito territorial* apenas desde os resultados do modelo de desenvolvimento. Para Duarte (2015), essa expressão *conflito territorial* não é de grande ajuda para captar as dinâmicas e as lógicas em jogo na hora de se aproximar aos conflitos étnicos e culturais. É necessário desde um ponto de vista metodológico,

...indagar e entender que tipo de atores estão envolvidos, que interesses tem a curto e longo prazo, quais estratégias e com que recursos –econômicos, sociais, políticos ou militares- contam. Em outras palavras, identificar que significa para cada um o território [...] A partir da perspectiva de Hoffmann, ter presentes os conflitos resultam

muito útil para a análises, não apenas porque evidenciam concepções diferentes dos territórios e práticas espaciais distintas, mas também porque são relevantes na comparação dos interesses locais com os de grandes agentes econômicos numa perspectiva macrorregional. Em opinião de Hoffmann, não se trata de distinguir entre boas e malas concepções do território, mas sim de saber distingui-las para elaborar os instrumentos metodológicos e teóricos adequados a cada tipo de conflito (DUARTE, 2015, p. 47).

É relevante destacar no sentido exposto acima sobre as *articulações espaciais da indianidade* nas quais se constroem imagens contrapostas da Serra, como a tipologia proposta por Duarte (2015) para o sistema multicultural Colombiano, de fato presta atenção a esse acento à oposição entre as culturas e os grupos em contato, num cenário da dureza da fronteira étnica que resultam em conflitos manifestos a partir da classificação e identificação das populações.

Dito sistema deve permitir a elaboração de uma tipologia, de conformidade com a maior ou menor distância e oposição das culturas em conjunção e com a maior ou menor tensão e conflito entre os grupos étnicos em contato. Assim, essa cultura de contato pode ser [...] o conjunto de representações –que inclui os valores– que um grupo étnico constrói a partir da situação de contato no que está imerso, em términos do qual se classifica –identifica– a si mesmo e classifica aos outros (Cardoso 1992, 37). (DUARTE, 2015, pág. 48, Tradução própria).

Para Duarte, o estabelecimento de fronteiras étnicas e étnico culturais para o caso Colombiano, não está influenciado a penas pelas concepções diversas dos territórios ou pelos evidentes processos de concentração da terra produtiva pelos poderes locais e nacionais; mas também pelas aspirações, necessidades e direitos reconhecidos pelo Estado aos diferentes agentes étnicos e culturais, com referência ao acesso à terra e ao governo territorial. Para ele, “*las fronteras étnico-culturales se materializan en tres figuras estructurantes: resguardo indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes y zonas de reserva campesina*” (DUARTE, 2015, p. 49), estas últimas ausentes no caso da SNSM.

Nessa direção, os territórios Colombianos contem multiplex espaços habitados onde se vem consolidadas fronteiras interétnicas que desafiam o atual processo de ordenamento territorial implementado no marco do multiculturalismo Colombiano. Segundo Duarte - partindo da realidade do departamento de Cauca no sul ocidente do país - algumas dessas figuras ambíguas e/ou transitórias que subsistem que refletem as situações atuais de conflito e tensões interétnicas e interculturais, se podem mencionar:

i) las prediales transitorias, como los predios del FNA, individualizados para pobladores campesinos y colectivos para comunidades indígenas; ii) las inexistentes en el actual sistema de ordenamiento territorial, como las capitánías de comunidades negras; iii) las que están en proceso de legalización, como los predios ocupados — invadidos o recuperados, según se cuente la historia— por comunidades indígenas o campesinas, así como los resguardos de título colonial y republicano; iv) las comunidades rurales con existencia política pero sin territorio ni titulación colectiva, como es el caso de los consejos comunitarios de valles interandinos; y v) los territorios imaginados y validados con base en su legitimidad comunitaria pero que están fuera

del reconocimiento estatal, como las zonas de reserva campesina sin constitución oficial y operadas políticamente en sus territorios. En este panorama tienen lugar las actuales situaciones de conflicto y tensión interétnicas e interculturales en el suroccidente colombiano (DUARTE, 2015, p 49).

A partir destas perspectivas, cabe-se perguntar como entender o despojo (espoliação) e o deslocamento forçado em territórios étnico-rurais como os de a SNSM no marco dos sistemas de direitos diferenciados nas políticas multiculturais? Que efeitos tem o despojo nas comunidades étnico-rurais além dos “evidentes” efeitos da concentração da propriedade por setores econômicos e políticos? Que políticas territoriais se executaram sobre a SNSM nessas geografias do despojo? Como se configurou o mercado de terras nas partes altas da Serra nesses períodos da maior violência contra insurgente? Que tratos tem as noções de despojo no interior das práticas do escritório de restituição de terras onde trabalhei?

Partindo desses questionamentos busco problematizar em este estudo não apenas o conflito territorial resultado do modelo econômico e político, mas as situações de disputas e conflitos evidentes a partir da prática do multiculturalismo no contexto da guerra contra insurgente como parte do encerramento ou endurecimento da fronteira étnica e a oposição das culturas em contato.

Justamente estudo como nesse marco das fronteiras que resultam numas *articulações espaciais da indianidade* a partir da prática do multiculturalismo, acontece um mercado de terras que vai além da ideia da acumulação em função da concentração, fenômeno que de fato acontece maioritariamente nas planícies incentivadas pelas políticas neoliberais. No entanto, a dinâmica de compras de terras na Serra além de outras manifestações, se dá num marco das aspirações, necessidades e direitos reconhecidos pelo Estado para os diferentes agentes étnicos e culturais, com referência ao acesso à terra e ao governo territorial, num marco das figuras territoriais como resguardo indígena, áreas de ampliação indígena, Línea Negra, entre outras.

O discurso de *indianidade* ou a ideia do bom selvagem ecológico (ULLOA, 2004), serve como mecanismo controvertido de acesso às demandas territoriais destas comunidades durante o período do estabelecimento de umas políticas de guerra contra insurgente por parte do Estado e forças irregulares que teve consequências nos massivos deslocamentos forçados. Esta pesquisa estuda como em detrimento dos fracos e fraturados processos de territorialização campesinos, se constituíram povoados indígenas com o caráter de reserva ambiental.

No fundo, o debate se centra em mostrar a construção desses povoados denominados *pueblos talanquera* durante os períodos de consolidação e pós-desmobilização das forças paramilitares (2002 – 2011), num marco de um conflito intercultural surgido nas estelas das

políticas multiculturais frente à segmentação e hierarquização das populações respeito à construção dos sujeitos políticos na Serra e de suas demandas territoriais.

A partir destes variados contextos, estudo como nesses anos ganharam importância as demandas frente ao uso e posse indígena da terra no contexto dos direitos diferenciais, conseguindo assim vários convênios entre instituições estaduais para promover a ampliação; mas criando paradoxalmente ao mesmo tempo, um isolamento político das comunidades agrárias camponesas que abandonaram ou venderam seus sítios para outros camponeses, para o resguardo ou para o Estado, saindo deslocados forçadamente.

Lembro aqui quando reclamava com veemência um dos camponeses da Serra numa reunião que participei como funcionário de Estado frente ao fato de que o governo entregara terras aos indígenas e a eles não. Para ele, são as populações as principais vítimas do fenômeno de deslocamento forçado, da marginalização e do abandono governamental. Dita anedota se explica no que Duarte assegura sobre como, “nos últimos anos, têm se instalado com força uma sensação de oposição e diferença radical [dos camponeses] frente aos outros sujeitos rurais que sim são reconhecidos como grupos étnicos –comunidades negras e povos indígenas–” (DUARTE, 2015, pág. 35). Neste contexto, resultado de uma ruralidade estruturada pela acumulação da terra em poucos para a exploração a grande escala dos recursos, o que tem intensificado os conflitos pelo acesso a ela; se ativam não só tensões entre as populações étnico-rurais com o capital e seu modelo extrativo, mas também os conflitos interculturais entre elas pelo acesso à terra.

A noção de grupo étnico para Duarte (2015) está relacionada a três tipos de contextos no caso Colombiano: o primeiro, aos povos originários considerados como “minorias” devido a seu processo histórico de conquista e incorporação a colônia e a nação republicana. Mas, com a constituição de 1991, se configurou a segunda noção de grupo étnico para as comunidades indígenas e afrodescendentes rurais numa relação do tipo conceitual mais do Estado como garante dos direitos multiculturais para esses grupos étnicos. O terceiro, mesmo que algumas comunidades da ruralidade colombiana estão se começando ao reconhecer desde a ótica étnica o cultural do “camponês” (ZAMBRANO, 2002), para esta população estaríamos nos referindo a uma situação de tipo, não reconhecido pelo Estado como sujeitos que podem aceder aos sistemas diferenciais de direitos (DUARTE, 2015).

Nessa linha, neste contexto rural Colombiano, o camponês tem se convertido numa cidadania de terceira classe em comparação com as populações étnicas. Estas comunidades, longe de ter um reconhecimento similar, ficaram numa espécie de deficiência política e carência

de identidade em comparação aos povos indígenas (RINCÓN, 2013). Neste sentido, Duarte assegura que:

A partir do processo constitucional de 1991, a pirâmide da mestiçagem está invertida nos contextos rurais. Assim, enquanto aquelas populações estigmatizadas historicamente contam com importantes blocos de direitos diferenciais (Lei 21 e Lei 70), o sujeito mestiço-rural campesino construído como projeto do Estado liberal no longo do século XX para modernizar o campo e expandir as fronteiras da Nação, tem passado a converter-se no portador de uma cidadania rural de terceira classe em comparação com as populações étnicas (DUARTE, 2015, pág. 41, Tradução própria).

Certamente, este panorama em que se constituiu o marco do acesso diferencial a direitos políticos, sociais, e territoriais “tem induzido entre os grupos populacionais rurais –indígenas, afrodescendentes e campesinos- um processo de enfrentamento e competência” (DUARTE, 2015, pág. 41), que se materializa e concretiza nos territórios das regiões Colombianas com resultados desiguais dependendo a região da que se fale.

A participação indígena e afrodescendente em espaços democráticos e a construção de poderosas maquinarias eleitorais étnicas que acabou fagocitando às autoridades tradicionais; o ingresso progressivo e diferencial de setores indígenas na sociedade do mercado; o deslocamento forçado de importantes setores da população campesina para as cidades; a agravamento do conflito armado e sua relação com economias extrativas e ilegais, assim como a aceitação ou a invisibilidade estratégica da identidade étnica tem demonstrado até que ponto em Colômbia as contradições tem sido mais complexas e difusas do que o antigo modelo de fricção interétnicas alcançava a vislumbrar (DUARTE, 2015, pág. 41, Tradução própria).

Desde estas miragens, é fundamental problematizar as relações do campo colombiano consideradas a partir de um sistema social pluriétnico e multicultural; sistema que se compõe pela combinação de setores étnicos –povos indígenas, *raizales*, rom e comunidades afrodescendentes-, com quem historicamente tem sido denominado por uma sociedade mestiça dividida em classes sociais, que se expressa da maneira diferenciada em cada região.

O processo de mestiçagem praticado durante mais de dois séculos nesse momento do surgimento da Constituição de 1991, levou a tentação de entender as relações interculturais entre os diferentes grupos por meio de fronteiras identitárias fixas, sedimentadas e essencializadas (BRIONES, 2005; BOCAREJO, 2015; DUARTE, 2015). Nessa acepção, onde se entrelaçam elementos da dominação colonial mediante políticas indigenista e processos de mestiçagem fortemente enraizados, pode se distinguir as relações contemporâneas a partir de relações interétnicas, no caso das populações indígenas, negras, *raizales* rom; e interculturais para o caso das relações entre os sujeitos mestiços, e entre estes últimos com as comunidades reconhecidas segundos os critérios étnicos (DUARTE, 2015).

É importante lembrar que no contexto sócio político de finais dos anos oitenta e a década dos noventa, não apenas eram visíveis as demandas e lutas étnicas, mas um volátil reconfiguração na dinâmica do conflito armado. Logo depois dos falidos diálogos de paz entre o governo da Belisario Betancur e as Forças Armadas Revolucionarias de Colômbia, Exército do Povo (FARC-EP), se acrescentou a perseguição aos membros do partido político da União Patriótica (UP) que resultou dos diálogos de paz, num ambiente da expansão e criação de grupos narco-paramilitares em regiões como a região Caribe (MEDINA, 2010; SILVA; 2012), o que inaugurou uma nova fase crítica do conflito armado do país. Nesse marco, redundou em que tanto as guerrilhas (campesinas-agrarias) como importantes setores campesinos decidiram não convergir no processo constituinte. Ao tempo que se instaurava a Constituição de 1991, as Forças Armadas, representadas pelo Exército Nacional bombardeara “Casa Verde”, acampamento general do secretariado das FARC-EP (EL TIEMPO, 1990).

Assim, o processo constituinte de 1991 configurou um marco de direitos para reconhecer a diferença das populações indígenas e afrodescendente em termos de grupos étnicos minoritários, mas estabeleceu ao tempo uma escala diferencial de direitos com os não indígenas, esquema que tem se aprofundado nos territórios com fortes desigualdades frente ao acesso à terra. Duarte explica como este contexto das relações das populações étnico-rurais no campo tem se agravado instigando a emergência de numerosos conflitos pela terra e pela igualdade de direitos que se materializam em diferentes espaços que carecem de possibilidades de tramitação de acordos (DUARTE, 2015).

Ainda que os esforços do Estado Colombiano para reconhecer direitos territoriais de ditas comunidades indígenas ainda têm muitos paradoxos em sua materialização nos territórios - pois tem demandas de ampliação das reservas sem regularização ou pendentes de clarificação-, as políticas de direitos diferenciais motivaram a emergência de uma série de conflitos interculturais entre as comunidades étnico-rurais frente ao reconhecimento político e o acesso às rendas e as políticas do Estado. Enquanto as políticas multiculturais da constituição de 1991 fizeram parte dos processos de construção dos indígenas como outros etnicamente distintos, apelando a diversos fatores que vão desde o uso e tenência da terra até as formas de concepção de um lugar; estas radicalizaram a hierarquização da população rural de acordo com os critérios étnico culturais de indígenas, afrodescendentes e campesinos-mestiços. Isto teve claras consequências nas dinâmicas das demandas agrárias e territoriais para os campesinos frente aos indígenas, além da fragmentação na luta pela democratização da concentração da propriedade numas regiões abertas a exploração do capital internacional.

Para Briones (2005) o avanço do multiculturalismo em América Latina é explicado como um jogo histórico de sedimentações de marcas que vai construindo “formações nacionais de alteridade”. Precisamente, para a autora, é importante estudar os

...contextos e processos de formação de grupos alterizados com base as marcações seletivamente racializadas e etnizadas desde lugares de poder [...] que produzem desigualdades não apenas pela imbricação de várias clivagens, mas também pela invisibilidade daquelas definidas como “norma” (BRIONES, 2005, P.15).

Este jogo histórico de sedimentação de marcas, onde emergem as “formações nacionais de alteridade”, “resultam de – e evidenciam - complexas articulações entre sistemas econômicos, estruturas sociais, instituições jurídico-políticas e aparatos ideológicos prevaletentes nos respectivos países” (BRIONES, 2005, pág. 17). Para explorar a materialidade dos efeitos diferenciadores destes processos do multiculturalismo, Briones propõe não apenas temporizar, mas também espacializar as práticas que as estruturam e que ficam por elas estruturadas (BRIONES, 2005).

No caso Colombiano, a forma adotada pelo multiculturalismo foi a implementação de um sistema diferencial de direitos para garantir a integração dessas populações que nunca tiveram as mesmas oportunidades de emprego e de acesso a serviços básicos de saúde, educação, cultura e administração de justiça (DUARTE, 2015). Nos últimos 30 anos, a Colômbia passou de um modelo que desconhecia ou decifrava a população indígena como população a ser “civilizada” e que promulgava a dissolução das diferenças culturais mediante a mestiçagem e a assimilação cultural forçada, a um modelo que reconhece a diferença cultural com políticas multiculturais, através de uma série de blocos constitucionais “dirigidos a reconhecer abertamente a diversidade pluriétnica e multicultural da Nação colombiana (DUARTE, 2015, pág. 30).

Para Bocarejo, a implementação dos marcos multiculturais na Colômbia pode ser analisada a partir das articulações¹¹

...entre os processos de construção dos indígenas como outros etnicamente distintos e as maneiras de habitar um lugar, apelando a diversos fatores, que vão desde as práticas de uso e tenência da terra até as formas de conceber, narrar e anelar um lugar” (BOCAREJO, 2015, p. 25).

Como expliquei antes, estes processos são chamados pela autora como *articulações espaciais de indianidade* que “mais que uma aposta descritiva é uma análise das implicações políticas” (BOCAREJO, 2015, p. 25). Para ela, “*articulações espaciais de indianidade*” ou

¹¹ Para Bocarejo a noção de articulação é feita a partir de Stuart Hall (2010) quem coloca duas questões fundamentais do livro: a primeira é o caráter histórico de qualquer vínculo entre diferença e espaço. A segunda, que “su vínculo no es necesariamente determinado, absoluto y esencial” (Hall, 2010, 85).

“*processos de formação de indianidade*”, são “o conjunto de práticas e imaginários que constroem historicamente quem é o sujeito indígena, que características se lhe assignam e como se representa dito sujeito e suas comunidades em diversos contextos de enunciação” (BOCAREJO, 2015, p. 25, Tradução própria), que reforça as imagens contrapostas entre os indígenas e os não indígenas com implicações políticas.

No sentido de Bocarejo, estas articulações ou formações de indianidade se constroem e mobilizam ao utilizar ou silenciar as complexas relações que os indígenas têm com os lugares nos que habitam, com as outras comunidades rurais e com as pessoas que definem ativamente as possibilidades de uso e representação de ditos lugares. Este enfoque interessa nesta dissertação na medida que indaga por como estas representações e formas de habitar um lugar, tem ajudado a definir formações de indianidade ao nível nacional e regional (BOCAREJO, 2015).

No caso desta pesquisa me concentro nos contextos da jurisprudência e as instituições do Estado em relação a como tem construído estas representações e como são utilizadas na SNSM. Ainda que a mobilização no marco multicultural não é o único ou o fundamental processo por meio do qual se estabelecem as configurações do que é ser indígena em Colômbia, este é – como Diz Bocarejo- uma parte essencial de como o indígena é perceptível em contextos regionais, nacionais e internacionais (BOCAREJO, 2015). Seguindo o argumento da autora, essas articulações ou formações de indianidade criam sedimentações culturais, “é dizer, unidades de discurso que chegam a criar “fronteiras naturais e identidades coisificadas” (BOCAREJO, 2015, p. 29).

Duas destas articulações são, por uma parte, a correspondência que tem se tecido entre ser um indígena e viver em um “território indígena” (resguardos indígenas e áreas de ampliação); e por outra, a confluência de esta associação com o meio ambiente. Como mostrarei, ditas articulações guardam efeitos diferenciadores entre indígenas e campesinos na implementação da lei de restituição de terras nas partes altas dos rios Aracataca e Fundación.

As duas articulações têm se configurado a partir de uma ideia naturalizada na qual ser um indígena implica viver num lugar rural e além deve corresponder com uma estética visual de um lugar protegido ambientalmente como um paraíso natural e diverso. Dita linguagem, para Bocarejo, constitui em um dos problemas do multiculturalismo atual que tem um importante número de implicações políticas (BOCAREJO, 2015).

As consequências políticas destes sistemas são estudadas a partir de dois eixos de análises: um, nos cenários institucionais e não institucionais nas quais se criam programas de compras de terras de campesinos e campesinas deslocados pela violência por parte do Resguardo

Arhuaco da Serra como parte de sua retomada territorial; e dois, na implementação da reparação de direitos territoriais no marco da lei 1448 de 2011. De fato, nestas discussões se analisa como estas articulações se convertem

...em poderosas ferramentas que definem as possibilidades e formas de acesso aos recursos de Estado, as ONG e a cooperação internacional, assim como aos recursos naturais, tanto para os indígenas como para os camponeses que habitam a Serra. Em efeito, os direitos das minorias dirigidos aos grupos étnicos não só afetam diretamente a aqueles sujeitos “marcados”, mas também a aqueles sujeitos “não marcados” etnicamente (BOCAREJO, 2015, p. 29).

2.5 APROXIMAÇÕES METODOLÓGICAS E PLANO DA DISSERTAÇÃO

Una vez se escribe “Estado” en vez de “estado”, Leviatan y Behemoth ya estan proyectando sus enormes y opresivas sombras”. Shlomo Avineri

No vemos la racionalidad legal sobre la cual se fundan y operan nuestros estados en el presente cotidiano (TAUSSIG, 2002)

As histórias e reflexões desta pesquisa sobre as partes altas dos rios Fundación e Aracataca na SNSM no Caribe Colombiano, são resultado da minha experiência no dia-a-dia das práticas institucionais da implementação da denominada política de vítimas e restituição de terras, nas relações entre burocratas, vítimas, advogados (as), acadêmicos, despojadores, burocratas regionais, funcionários, policia, militares, etc. Grande parte das perguntas que orientam esta pesquisa emergiram dos anos em que participei como profissional da área social no escritório da Unidade de Restituição de Terras (URT) Magdalena, com profissionais de diferentes disciplinas¹², para responder as solicitações de restituição de populações camponesas, indígenas e afrodescendentes na sub-região da Serra Nevada de Santa Marta e, em geral, na parte norte do departamento de Magdalena.

A necessidade de entender os processos e as dinâmicas do despojo emerge do crescente uso nos últimos tempos da noção do despojo em Colômbia nos circuitos governamentais, as agências transnacionais, os espaços acadêmicos e das organizações sociais. O anterior com a aparição da lei de vítimas e restituição de terras 1448 de 2011 (OJEDA, 2016). Precisamente, esta dissertação busca contribuir em entender as práticas e discursos sobre o despojo que se constituem no processo de implementação da política de restituição de terras no Magdalena, e

¹² Os escritórios de restituição de terras se dividem em quatro áreas: i) área jurídica, ii) área social, iii) área catastral e iv) área administrativa. Os perfis dos profissionais em direito, geografia, contabilidade, administração, topografia, biologia, ecologia, sociologia, antropologia, ciência política, comunicadores, jornalistas. Eram funcionários tanto das localidades como funcionários do interior do país.

suas consequências para os camponeses em territórios onde a espoliação e a expropriação se atualizam continuamente.

Nessa linha, analiso como o multiculturalismo operativo na Colômbia está presente nas diretrizes que orientam a implementação da lei 1448 de 2011 na SNSM, com efeitos desiguais para as comunidades do campo e seus projetos de vida nessas ladeiras das partes altas dos rios Fundación e Aracataca. A partir da proposta de Ojeda (2016) de entender o despojo desde uma perspectiva etnográfica, perspectiva que entende o despojo além da perda de um bem, mas “através da maneira na que produz espaços e sujeitos concretos, [ao tempo que] [...] permite estudar as formas cotidianas que este se faz possível e se atualiza” (OJEDA, 2016, p.20); me perguntou como opera a lei terras nestas geografias do despojo e que consequências políticas têm para as populações que habitam essas áreas.

É importante esclarecer que não ignoro a relevância política e social para a sociedade colombiana e em particular para as milhões de vítimas do cruento conflito armado, da aparição da lei de vítimas e de terras no marco de diferentes iniciativas governamentais e legislativas baseadas na justiça transicional. Precisamente, antecedido de um trabalho das organizações humanitárias e da sociedade civil com as vítimas, com a lei 1448 de 2011 se abriram vários espaços institucionais para escutar e receber as milhões denúncias e relatos que deram a conhecer apenas uma parte da verdade sobre a crescente violência paramilitar, de agentes de estatais e guerrilheiros de finais dos noventa e suas decorrências nos deslocamentos forçados e a expropriação ou despojos de terras da população étnico - rural.

No entanto, considero que, apesar de suas intenções reparadoras, é interessante focar a atenção nos paradoxos e as contradições que trazem detrás a reparação da política de restituição de terras nas paisagens resultantes do despojo e a espoliação na SNSM. Através desta dissertação me proponho mostrar como estes processos de formação e sedimentação de hierarquias espaciais e étnicas na Serra estão presentes na cotidianidade da implementação da lei 1448 de 2011.

Entender os processos das *articulações espaciais da indianidade* ou das *formações nacionais da alteridade*, é um objeto de estudo amplo que apresenta retos importantes a níveis teóricos e metodológicos. Quero explicar nos seguintes parágrafos desde a perspectiva de Bocarejo (2015), as formas de abordar este estudo desde as práticas legais, para entender o avanço do multiculturalismo Colombiano, como as disputas e conflitos que podem surgir em dita prática (BOCAREJO, 2015) nos bastidores da implementação das políticas de restituição de terras na SNSM. Isto – no sentido que fala Bocarejo (2015) - com a intenção de entender

não apenas as sedimentações nas articulações espaciais de indianidade, mas seus processos de desarticulação e instabilidade.

Esta pesquisa apresenta um desafio importante visto que eram notórias as noções preconcebidas desde a formação pessoal, profissional e acadêmica das funcionárias e funcionários das equipes interdisciplinares sobre o que é “o Estado” e seu funcionamento. Como entendemos o estado? E como podemos aproximarmos para estudá-lo? Quais são as experiências das equipes de profissionais na aplicação de política públicas de justiça transicional na reparação dos direitos pela terra camponeses e indígena?

Quando se faz referência ao Estado (com E maiúscula) se acostuma a pensar em sua conceptualização clássica: a de Hobbes (1651), na qual se vê o “Estado” como um pacto social legítimo que permite aos homens finalizar os conflitos, ou a Weberiana, na qual se considera ao “Estado” como o monopólio legítimo da violência num território determinado.

A partir dessa situação, as ciências sociais têm se apropriado destas definições e se percebe ao “Estado” como um marco normativo, que tem o controle da justiça e o uso legítimo da força. Também se pensa e se estuda como um elemento que sempre tem estado em nossas sociedades modernas, como um ser superior unitário que tem poder por cima de todos os cidadãos sobre os quais exerce seus instrumentos (ABRAMS, 2015).

Alguns debates da antropologia de estado propõem superar a ideia deste como “um órgão superposto à sociedade”, coisificado e entendido como um objeto formal-abstrato por encima do tratamento deste como um agente “real e concreto” com vontade, poder e atividade própria” (ABRAMS, 2015; p. 39- 40. Tradução própria). Esta conceptualização do estado em minúscula, critica algumas perspectivas da sociologia política e alguns estudos marxistas nos que parecesse que as principais funções deste, não podem ser assignadas definitivamente a nenhum pessoal específico, aparatos ou instituições, mas que mais bem “flutuar” com as correntes do poder de classe” (ABRAMS, 2015, p. 48. Tradução própria). Para Abrams, o estado é entendido como um exercício de legitimação do que não se pode ver, do ocultamento das dominações.

Para ele “se supõe que o que se legitima é algo que, se se pudesse ver diretamente e tal como é, seria ilegítimo, uma dominação inaceitável” (ABRAMS, 2015, p. 54. Tradução própria). Deste jeito ele entende o estado como triunfo do ocultamento, com funções ideológicas:

...oculta a história e as relações de sujeição reais detrás de uma máscara sem história de legitimidade ilusória: ele consegue negar a existência de conexões e conflitos que, de ser reconhecida, seria incompatível com a autonomia

reclamada e a integração do estado” (ABRAMS, 2015, p. 55. Tradução própria).

Abrams se aleja de posiciones como la de Geertz, Bourdieu y Steinmetz, defendiendo la idea de dejar de lado el Estado para ocuparse de las relaciones que éste ocultaría. Se debe estudiar la resistencia y no el centro, los sujetos y no el Estado. Para Abrams, el Estado es, antes que nada, una ilusión, ideología, y mi representación de la dominación política y económica. El Estado es una máscara que debe ser puesta entre paréntesis para acceder a la práctica política. Así, la teoría del sociólogo –dice Abrams– es desmitificar para poner en evidencia la función ideológica del Estado. (SCHAVELZON, 2010, p. 90).

Na linha dos argumentos planteados por Abrams, alguns autores (HERZFELD, 1992; e GUPTA, 1995 e 2006) tem se colocado na tarefa de desmitificar o estado, estudando as questões esquecidas dele ou se acercando a este objeto de estudo deixando seu “halo” de superioridade. Um destes aportes tem sido realizado pelo antropólogo Michael Taussig quem em 1991 publicou seu ensaio *Maleficium: state fetishism* em que se centra em abordar um tema descuidado: a constituição cultural do Estado Moderno.

Para ele, o Estado Moderno tem uma qualidade de fetiche derivada da forma casual em que entendemos o “Estado” como se fosse um ser animado com vontade e mente própria (TAUSSIG, 1993). Para o autor, os atributos que têm sido assignados ao Estado moderno a partir de sua constituição, se encontram os conceitos como: “soberania”, razão ou “uso da razão”, “legitimidade”, “usos da força” e “legislação”, entre outros. No entanto, Taussig considera que a naturalização que a sociedade tem feito de todos estes conceitos nos afastam da possibilidade de ver que o poder não corresponde à figura de estado, mas ao poder que têm os indivíduos dentro do estado (políticos, magistrados, policias, votantes, etc.). Nesta ordem de ideias, ao naturalizar o “Estado” damos por desconhecido as propriedades culturais que têm seu poder e quem exerce estas relações.

Por isso, desde a lente de García (2016) devemos propender por um processo para desontologizar¹³ o poder e a ideia clássica de estado baseadas na ciência jurídica e a ciência política. É importante superar essa ideia do estado como ente sacralizado na que não se questiona o que é? É? Como tem chegado a ser? Sempre têm sido? Quais são suas margens? (GARCIA, 2016). Em outras palavras, se concebe o “Estado” como fonte da razão e a

¹³ Segundo García, “es pertinente advertir que los aportes epistemológicos para una desontologización del poder y del Estado no provienen exclusivamente de la antropología política. Para mencionar solo un ejemplo, el pensador político italiano Antonio Gramsci sostuvo sistemáticamente que en el Estado moderno el poder está aparentemente centralizado en las instituciones formales que lo constituyen, pero en realidad el poder descansa en las prácticas sociales cotidianas que reafirman la verdadera relación entre gobernantes y gobernados. Argumenta Gledhill que Gramsci define hegemonía “as a dynamic process of “establishment of unstable equilibria” which is shaped in significant ways by the actions and reactions of the subaltern classes” (Gledhill, 2000, p. 77)” (GARCÍA, 2016, p. 111).

legitimidade, mas não questionamos ou estudamos, por exemplo, seu acionar violento. Como o Taussig o apresenta:

Lo que es políticamente importante en mi noción de fetichismo estatal es que esta necesaria interpenetración institucional de la razón por la violencia, no solo disminuye las pretensiones de la razón, sino que la convierte en ideología, máscara y efecto del poder; sino que también es precisamente la unión de la razón y la violencia en el estado que crea -en un mundo moderno y secular- la grandeza de la gran E. No solo su aparente unidad y las ficciones de la voluntad y la mente así inspiradas, sino la calidad aurática y casi inmaculada de esa misma inspiración. Una cualidad que imputamos de buena gana a los antiguos Estados de China, Egipto y Perú, por ejemplo, o al absolutismo europeo, pero no al Estado legal-racional que ahora es el fundamento de nuestro ser como ciudadanos del mundo. (TAUSSIG, 1991; 116).

Estas noções de estado planteadas por Taussig e as recomendações de Abrams para se aproximar ao estudo de estado desde o interior mesmo, me permitem estudar e analisar as práticas estatais e as diferentes relações sociais que se entrecruzam no interior de uma instituição pública como o escritório de restituição de terras do Magdalena. O estado estudado como processo histórico, decifra essa aparente legitimidade (ABRAMS, 2006) alojada em seus mecanismos administrativos e jurídicos que se materializam em marcos históricos específicos de formas desiguais e diversas, na vida das populações no campo, em espaços constituídos contraditoriamente por intersecções de fenômenos locais, regionais, nacionais e transacionais (GUPTA, 2006).

Para Abrams, uma etnografia de estado deve buscar observar as práticas materiais e simbólicas dele (ABRAMS, 2006) que para o caso estudado compete as relações entre funcionários, vítimas, aparentes despojadores, instituições, negociantes de terras, entre outros, no marco da implementação desta lei 1448 de 2011. Mas, dado que o repertório por meio do qual se criam e recriam formações nacionais de alteridade é amplo, me enfoco num cenário específico de estudo: as práticas e os discursos de profissionais do escritório Magdalena para a implementação da citada Lei conhecida como Lei de terras ou Lei de restituição de terras entre 2012 e 2019.

Nesse sentido, busco aportar aos debates sobre a ação da restituição de terras nos diferentes escritórios regionais que levam a cabo a implementação da política em todo o país, para entender as práticas de estado dimensionadas em sua materialidade e em sua desagregação como a encarnação de práticas concretas exercidas pelos funcionários e funcionárias de escritórios e instituições (HANSEN, STEPPUTAT, 2001 tomado de GARCIA, 2016).

Uma etnografia do estado permite retratar as práticas cotidianas daqueles estados que guardam a diferença colonial em suas relações localizadas nas populações rurais e urbanas. A través deste caminho, é possível compreender as relações de poder em espaços pós-coloniais com intoleráveis desigualdades e instabilidades nas formas históricas se relacionar como os territórios (GARCIA, 2016).

Um dos objetivos é refletir sobre minha experiência na Unidade de Restituição de Terras e a de vários dos profissionais que participamos do dia a dia da implementação dessa política de reparação de direitos territoriais. Para isso, farei uma descrição detalhada sobre a forma em que se desenvolveu o trabalho no escritório com as comunidades de campesinos e indígenas das partes altas entre os rios Tukurinca e Aracataca, áreas de solicitações de restituição de terras campesinas nas veredas Agua Bendita, La Cristalina e La Fuente, e os povos indígenas Duanawimaku e Serankua (Figura 4); e entre os rios Fundación e Ariguani, veredas El Cincuenta, Santa Clara, Palmarito e áreas dos Povos Talanquera Kankwarwua e Kantinurua, que conectam com outros povos como Singuney, Gwamuni, Umuke, Yeiwn (Figura 5).

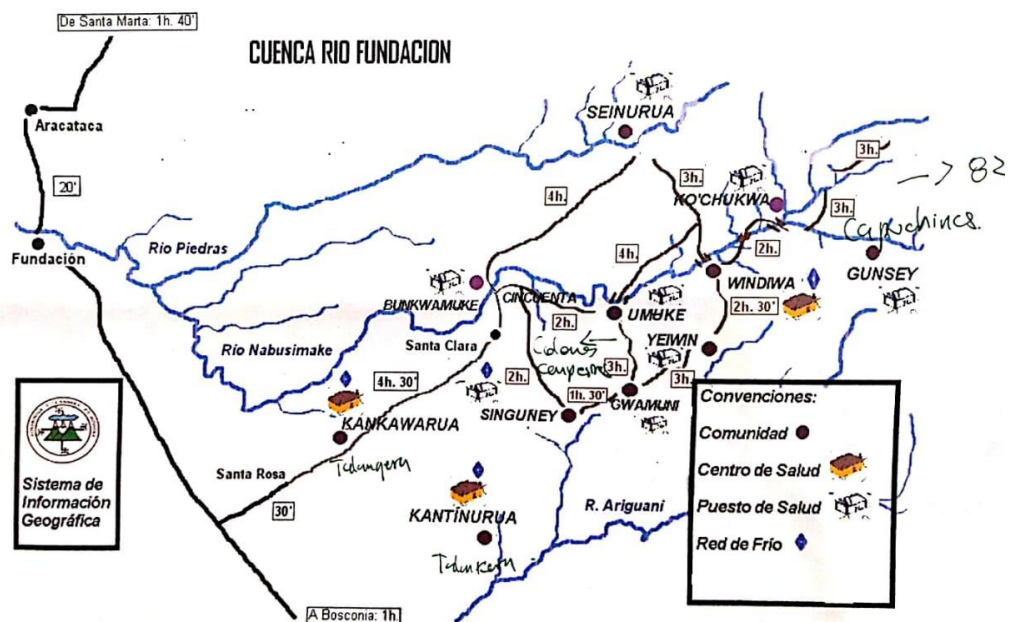
Os dois seguintes mapas foram realizados pelo Resguardo Arhuaco da Serra e eles não contemplam as áreas de presença campesinos. No entanto, em visita feita durante o trabalho de campo, a coordenadora de terras da reserva indígena, quem me providenciou os mapas, me indicou as áreas de campesinos onde a reserva está comprando terras (marcado no primeiro mapa com letra azul e no segundo com letra preta), como parte de suas pretensões territoriais dos indígenas. Esta dissertação foca sua atenção nestes territórios em que acontecem esses conflitos interculturais pelo acesso e uso da terra.

Mapa 4 - Povos indígenas arhuacos em áreas de compras de terras campesinas entre os Rios Tucurínca e Aracataca



Fonte: Resguardo Arhuaco Magdalena- Guajira. Colhido em entrevista durante o trabalho de campo 2019.

Mapa 5 - Povos indígenas arhuacos entre os Rios Fundación e Aracataca

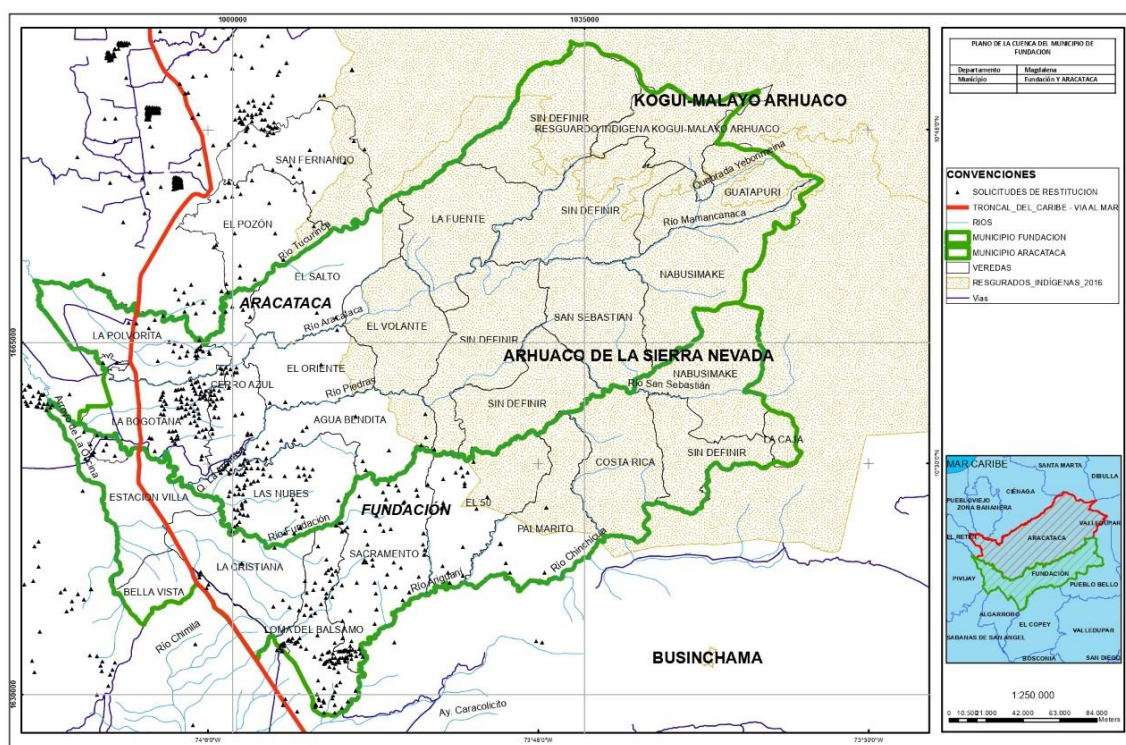


Fonte: Resguardo Arhuaco Magdalena- Guajira. Colhido em entrevista durante o trabalho de campo 2019.

Nestas localidades serranas se superpõem as fronteiras étnicas do Resguardo Arhuaco da Serra, áreas de pretensão territorial indígena chamadas zonas de ampliação do resguardo, áreas de reserva florestal, e de parque natural, com povoados de campesinos que saíram deslocados pela violência, alguns dos quais venderam suas terras aos indígenas representados pelo Cabildo Gobernador. O seguinte mapa mostra algumas das veredas estudadas nesta pesquisa, veredas nas que foram feitas solicitudes de restituição de terras (pontos negros) por campesinos e campesinas em áreas pretendidas pelo Resguardo Arhuaco da Serra.

Figura 6 Mapa: solicitudes de restituição de terras campesinas nos municípios de Aracataca e Fundación, Resguardo Arhuaco da Serra e, áreas de ampliação e veredas campesinas El 50, Palmarito, Sacramento, Cerro Azul, Las Nubes, La Fuente.

Mapa 6 - Solicitações de restituição de terras campesinas nos municípios de Aracataca e Fundación, Resguardo Arhuaco da Serra e, áreas de ampliação e veredas campesinas El 50, Palmarito, Sacramento, Cerro Azul, Las Nubes, La Fuente.



Fonte: Mapa realizado em entrevista com o pessoal da área cadastral. Trabalho de campo 2019.

Para estudar os conflitos e as tensões que se dão entre as comunidades étnico-rurais na implementação da restituição de terras, me propus entrevistar alguns solicitantes de restituição de terras campesinas e lideranças indígenas do Resguardo Arhuaco da Serra. Embora, cabe dizer que de 15 campesinos e campesinas solicitantes de restituição que procurei para conversar

apenas consegui falar com 8, todos/as agora deslocados em outras localidades do Caribe Colombiano e que pediram não falar sobre o processo de restituição de terras pelo temor que isso significa na atualidade. A maioria dos que contatei para entrevistar se negaram a ser entrevistados pela desconfiança que gera o tema de terras nessas localidades, a pesar de que alguns decidiram contar sobre seus processos de ocupação e chegada nesses setores serranos e a maneira como tiveram que sair deslocados pela crescente violência.

Cabe destacar que durante o trabalho de campo em algumas falas com pessoal que conheci na época de funcionário público que trabalham com as comunidades da SNSM e que pesquisam temas relacionados sobre o controle territorial dos atores armados na região, manifestou a presença de paramilitares reorganizados depois do período de pós desmobilização no 2006 do chamado Bloque Norte das Autodefesas Unidas de Colômbia (AUC) e que ao momento da escrita desta dissertação, se disputam essas áreas com outros grupos locais de paramilitares. Isto é corroborado pelo centro de pensamento UN Caribe da Universidade do Norte quem afirma que para o 2020 as Autodefesas Gaitanistas de Colômbia (AGC) (*Clan del Golfo*, segundo as autoridades), e as Autodefesas Conquistadores da Serra Nevada (ACSN) (antes *Los Pachenca*) fazem presença nas áreas estudadas nesta dissertação (TREJOS, BADILLO, 2020).

Dado as dificuldades na segurança para estudar os conflitos e as tensões do tipo intercultural na implementação da restituição de terras, decidi utilizar, por uma parte, as notas de campo que fiz durante meus anos como profissional da área social referentes às interações cotidianas dos funcionários do escritório. Em particular eu me concentrei nas notas das reuniões de análises de casos das solicitudes de restituição nas áreas altas das bacias do rio Fundación, assim como reuniões de capacitação nas diretrizes respeito a casos de justaposições de restituição de terras campesinas em áreas de resguardo arhuaco ou áreas de interesses de ampliação territorial indígena.

Também as notas das reuniões com campesinos e indígenas, e as notas de campo feitas depois dos trabalhos comunitários com a população vitima que deixavam muitas reflexões que decidia escrever sem saber que depois virariam em parte de meu material de análises durante a dissertação. Meu trabalho concreto, apesar de que participei de reuniões com comunidades indígenas e entrevistei algum deles, foi com casos de solicitações de restituição de terras individuais campesinas na Serra e em outros municípios diferentes aos trabalhados nesta dissertação, mas que compartilham as mesmas contradições resultado do modelo multicultural Colombiano.

Estas anotações são resultado de um contexto etnográfico que serve para seguir como sobre os lugares de justaposições de solicitações campesinas em terras com pretensão indígenas, se observam diversas interpretações que caracterizam ao sujeito indígena e ao sujeito campesino com formas particulares de habitar a Serra.

Por outra parte, para não estudar casos que eu havia trabalhado, decidi analisar particularmente os territórios campesinos dos arredores das bacias hidrográficas de Aracataca e Fundación. Era evidente como nesses setores havia uma demanda alta de trabalho com frequentes discussões que involucravam vários profissionais das equipes campesinas e da equipe indígena. Nas práticas de sedimentação da articulação espacial da indianidade participam largas cadeias de pessoas, envolvidos nos processos de interpretação, tradução e consolidação do direito. Decidi me concentrar nestas áreas para estudar esses processos particularmente nos funcionários e funcionárias do escritório de restituição de terras que atuaram na SNSM.

Para analisar estes processos dos dispositivos concretos de sedimentação (BOCAREJO, 2015), entrevistei estes profissionais encarregados dos casos campesinos e as equipes que trabalharam com indígenas arhuacos nesses setores no marco da Lei de restituição de terras. Assim mesmo entrevistei lideranças indígenas. Um dos interesses é mostrar as interpretações dos profissionais das equipes a partir das diretrizes fundamentadas no multiculturalismo operativo, das compras de terras por parte do Resguardo Arhuaco da Serra a campesinos deslocados pela violência.

Por último, se realizou trabalho de arquivo e documentos oficiais públicos como sentencias e informes de direitos humanos de instituições públicas. Também realizei um análises das diretrizes dadas para trabalhar os casos de justaposições de solicitações de restituição de terras campesinas em áreas de Resguardo ou áreas de pretensão territorial indígena.

Tanto no trabalho etnográfico como no trabalho de arquivo e nas entrevistas, me interessou entender as implicações políticas que têm os atos administrativos dos funcionários e funcionárias do escritório que desconhecem ou “negam” as expectativas de restituição e reparação territorial dos campesinos e campesinas, vítimas do deslocamento forçado e do despojo. Estes atos apelam às múltiplas fronteiras estatais que sobre a Serra existem, fundamentadas no multiculturalismo neoliberal da Constituição de 1991.

São analisadas tanto as práticas cotidianas locais, concretamente reuniões de análises de casos e reuniões de formação das diretrizes, do escritório de restituição de terras em

Magdalena, como a construção discursiva dos funcionários e funcionárias que atendem solicitações de restituição individual de terras campesinas e casos coletivos de restituição territorial de indígenas arhuacos nessas partes altas da Serra. Este enfoque parte da proposta de Gupta, em que se planteiam questões substantivas e metodológicas fundamentais sobre o estudo do estado respeito à trans localidade dos escritórios e instituições regionais e locais. Esta mirada,

substancialmente, permite desagregar o estado, centrando-se em diferentes burocracias sem prejudicar sobre sua unidade a coerência. Assim mesmo, nos permite problematizar a relação entre a trans localidade do “o estado” e os escritórios, instituições e práticas necessariamente localizadas pelas que este está exemplificado. Metodologicamente, gera uma inquietude sobre a forma em que aplicamos os métodos etnográficos quando o objetivo consiste em compreender os funcionamentos de uma instituição trans local que se faz evidente nas práticas localizadas (GUPTA, 2006, pág. 73. Tradução própria).

Esta proposta complementa os estudos territoriais da geografia, pois permite se questionar e revelar o que em nome do estado fazem em realidade os funcionários e funcionárias do nível mais baixo e as implicações territoriais que suas decisões têm sobre milhões de habitantes da Serra. Para Gupta, muitas pesquisas sobre o estado não contemplam “as práticas cotidianas dos burocratas que nos falam sobre os efeitos do estado na vida diária da população rural” (GUPTA, 2006, p. 76).

É inegável que durante os primeiros 5 anos de implementação da lei de vítimas e restituição de terras, aumentou o número de contratações do estado de profissionais de distintas disciplinas para trabalhar nos escritórios de restituição de terras, unidade de vítimas, centro de memória histórico, e organismos internacionais (ONU, OEA, USAID) em regiões como o Magdalena; em escritórios que se constituíram como lugares onde a população rural colombiana entrou em contato com “o Estado”¹⁴ para reclamar suas terras perdidas no contexto da violência.

Privilegiar a voz do pessoal das equipes interdisciplinares do escritório de restituição, além de aportar na reflexão de uma mirada crítica sobre nosso labor como servidores públicos, ajuda a evidenciar o silêncio de outras formas de despojo que se atualizam no comum dos processos de restituição que ainda repousam no escritório que até a data do trabalho de campo (fevereiro de 2019) com resultados discretos frente à expectativa de reparação dos campesinos solicitantes.

¹⁴ Aclaro que apesar das abordagens utilizadas nestas seções reflitem sobre as formas que escondem a diferença entre escrever “o Estado” ou estado, ao longo do texto irei manter a expressão clássica de “o Estado” para não gerar confusões nos leitores mesmo que coincido nas miradas críticas aqui expostas.

Em suma, tanto as diretrizes como as reuniões de análises de casos, e as entrevistas a profundidade realizadas, exemplificam o paradoxo do campesino das Serra frente à reparação de direitos territoriais. Este caso etnográfico que exploro não apenas desde uma leitura do conflito territorial pelo modelo de desenvolvimento, mas sim desde a lente dos conflitos interculturais pelo acesso ao território, mostra uma série de interpretações das marcas e a hierarquização das comunidades étnico-rurais no campo adotadas pelos funcionários locais com consequências na negação do início do processo ou da inscrição no registro de terras dos campesinos considerando que o direito étnico prevalece sobre os não marcados etnicamente.

Precisamente, como foi dito na introdução, este estudo surge do descontento frente ao silenciamento das trajetórias de uso e posse dos projetos de vida da população agrária campesinos que se viu interrompida pelos efeitos da violência da região evidente; que contrasta com um largo repertório de vozes que vão desde a antropologia, até as sentenças das cortes e textos jurídicos que aparecem nas práticas e discursos cotidianas do escritório de restituição de terra do Magdalena, que representam de maneira cotidiana o indígena em Colômbia. Não significa que neste período os indígenas tinham sido parte de um processo exitoso de restituição de terras, ou que tinham recebido resposta a suas demandas territoriais, mas sim de como o passo da unidade de terras e de várias instituições estatais complexou as desiguais relações interculturais nestes setores serranos.

É importante deixar em claro que não está em dúvida o fato histórico de que as populações indígenas têm sido marginadas e despojadas de seus territórios tradicionais desde o mesmo momento do processo colonizador-evangelizador e o período de surgimento da ideia eurocêntrica dos Estados-nação que resultou nossas formações socioterritoriais na América Latina. Frente a essa falta de atenção na regularização das terras ancestrais que Estados como o colombiano tem deixado de atender é natural que as comunidades e organizações procurem recuperar os territórios ancestrais. Mas, o que tento problematizar são as maneiras como na Serra Nevada de Santa Marta se realizam e acontecem essa retomada territorial indígena por sobre os territórios campesinos muitos deles deslocados no marco de extrema violência nos anos da guerra contra insurgente. Comunidades de famílias de colonos campesinos que também têm sido historicamente marginados das políticas agrárias.

Em suma, esta dissertação consta de duas partes: a primeira corresponde ao capítulo 3 em que abordo a configuração sub-regional e a formação socio territorial da Serra no marco do problema agrário. Nesse contexto, relato as formações territoriais campesinas da SNSM nos albores de um conflito territorial com as comunidades indígenas. No capítulo 4 analiso a história

da territorialização da violência no contexto de políticas de segurança nacional de uma guerra contra insurgente com efeitos catastróficos nos tecidos comunidades étnico-rurais.

A segunda parte, refere-se ao capítulo 5 em que analiso as compras de terras de campesinos deslocados pela violência por parte do resguardo arhuaco num contexto em que o multiculturalismo operativo sedimentou representações opostas que se criam entre indígenas e campesinos da Serra Nevada de Santa Marta, que não só constituem formas de diferenciação social, mas acesso diferenciais frente a reparação do Estado.

O sexto capítulo estuda como essas articulações espaciais sedimentadas estão presentes nas práticas e discursos da implementação da política de reparação territorial na lei de 1448 de 2011 de restituição de terras.

3 CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DA SUB-REGIÃO NORTE DO DEPARTAMENTO do MAGDALENA (1940 – 1974).

3.1 LATIFÚNDIO E CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE: CONTEXTO DO MERCADO INTERNACIONAL NAS TERRAS FÉRTES DAS PLANÍCIES DA CARA OCIDENTAL DA SERRA

A história dos colonos camponeses que se assentaram nos setores serranos se materializou no contexto da dinâmica da parte plana da face ocidental (oeste) da Serra. Caracterizado por uma concentração da propriedade em terras de grande extensão dedicadas ao cultivo de tabaco¹⁵, cacau e banana, além da exploração de madeira¹⁶ e de gado extensivo, estes territórios da planície tomariam sua forma atual desde o período que iniciou desde finais do século XIX e se estendeu até a entrada da década de 1940, fase da emergência da constituição política do presente através de uma série de *sistemas modernos de artifícios e mecanismos legais* (HARDT E NEGRI, 2005) que foram fundamentais para a continuidade da expansão econômica europeia e norte-americana, nas fases do trânsito do colonialismo à nascente República da Nova Granada, posterior república da Colômbia.

A herança da matriz moderna europeia implicou a *constituição de técnicas do direito e categorias jurídicas centrais* no marco da promoção da ideia dos Estados-nação (e o direito internacional subsequente) e seus “valores universais” de um ordem supranacional que têm chegado os ordenamentos internos (HARDT E NEGRI, 2005) que, entre outras, aperfeiçoou as maneiras em que os territórios foram articulados às atividades de exportação reguladas pela economia global que naquela época desenvolviam-se desde Europa e Estados Unidos, padrão que continua em curso na história atual, e se mantém com diversas e novas formas de ampliação do capital (MITIDIERO, 2016).

Apesar de que a inserção econômica internacional da região Caribe da Colômbia começou mais devagar que outros países latino-americanos como Argentina ou Brasil (VILORIA, 2014), é claro que um dos vetores fundacionais da região estudada nesta dissertação

¹⁵ Municipio de Aracataca, Magdalena. *Plan básico de ordenamiento territorial 2000-2009*, p. 3.

¹⁶ A madeira das florestas que cortavam para expandir a fronteira agrária com cultivos de banana que chegavam até Fundación e Pivijay nas primeiras três décadas do século XX se converteu em mercadoria, controlada por concessões que dava o Ministério da Agricultura a grupos de elites regionais. Relata Viloria que, “En 1920 el Ministerio de Agricultura autorizó a la Compañía de Maderas del Magdalena, de Teodosio Goenaga, Ramón Espina y César Riascos, la explotación de los bosques de Fundación, ubicados en jurisdicción de los municipios de Aracataca y Pivijay. Estos madereros pidieron al gobierno el nombramiento de dos guardabosques para que vigilaran el movimiento ilegal de maderas que estaba ocurriendo dentro de los bosques que ellos estaban explotando. La movilización de madera fue grande y creciente durante estos años, pues creció cerca de 120% en seis años, al pasar de 2.516 toneladas en 1915 a cerca de 6.000 toneladas en 1921” (Viloria, 2014: p. 117).

foi a “maturação do arranjo capitalista; redes de concentração e privatização da gestão do espaço” (RUI MOREIRA, 2012: p. 9).

A consolidação de várias empresas e o auge de outras durante os primeiros oitenta anos da República, se materializou no contexto de uma integração de territórios a partir da navegação, a ferrovia, o telégrafo e as primeiras estradas que articulam portos, cidades em formação, bens, capitais, pessoas (SANTOS, 1999). A navegação a vapor pelo rio Magdalena com a conformação da *Compañia de Vapores de Santa Marta*, a construção da ferroviária desde o município de Fundación até Santa Marta, e a estabilização do porto dessa cidade capital do departamento de Magdalena, abriram passo para a economia bananeira de exportação que teria seu pico nas primeiras três décadas do início do século XX.

As nascentes elites de comerciantes e empresários que arranjaram importantes quantidades de terras no território aberto à neocolonização no vale da margem direita da *Ciénaga* e zonas planas do litoral, se estabeleceram então em cidades como Santa Marta e alguns povoados capitais dos municípios como Ciénaga, Aracataca e Fundación, assim como na cidade de Barranquilla, capital do vizinho departamento de Atlântico. Consolidou-se desde então, uma classe hegemônica dominante em territórios de populações indígenas e populações subalternas que começaram a migrar como trabalho escravo para se assentar em essa sub-região.

A formação territorial através das formas da acumulação por espoliação (HARVEY, 2005), se sustentou numa legislação voltada à defesa da propriedade privada e às políticas de desenvolvimento do modelo moderno/colonial que promoveu a expansão do capital em América Latina (SOLÁ, 2017), em países onde as fortunas territoriais são, todavia o centro do poder, de prestígio social e da riqueza da nação (PALACIOS, 2011).

Os padrões históricos da posse de terra, assim como os efeitos do modelo de desenvolvimento assumido pelas dirigentes nacionais, têm se traduzido numa elevada concentração da propriedade, conjugada com um modesto desenvolvimento produtivo, centrado fundamentalmente na mediana e pequena propriedade (FAJARDO, 2002).

Como afirmam Hardt e Negri, “o capitalismo só triunfa quando chega a identificar-se como o Estado, quando é o Estado” (HARDT E NEGRI, 2005, p. 23. Tradução própria). De fato, a globalização da produção capitalista e seu mercado mundial foi articulado nas geografias dos países latino-americanos através do modelo anglo-saxão de constituição de Estado moderno harmonioso com o estabelecimento de capitais globais a través de agentes hegemônicos locais e transnacionais. Esse modelo de desenvolvimento extrativista neocolonial se expressou -por exemplo- nos 95 km da ferrovia do Magdalena construída entre 1889 – 1906 que ligou o porto

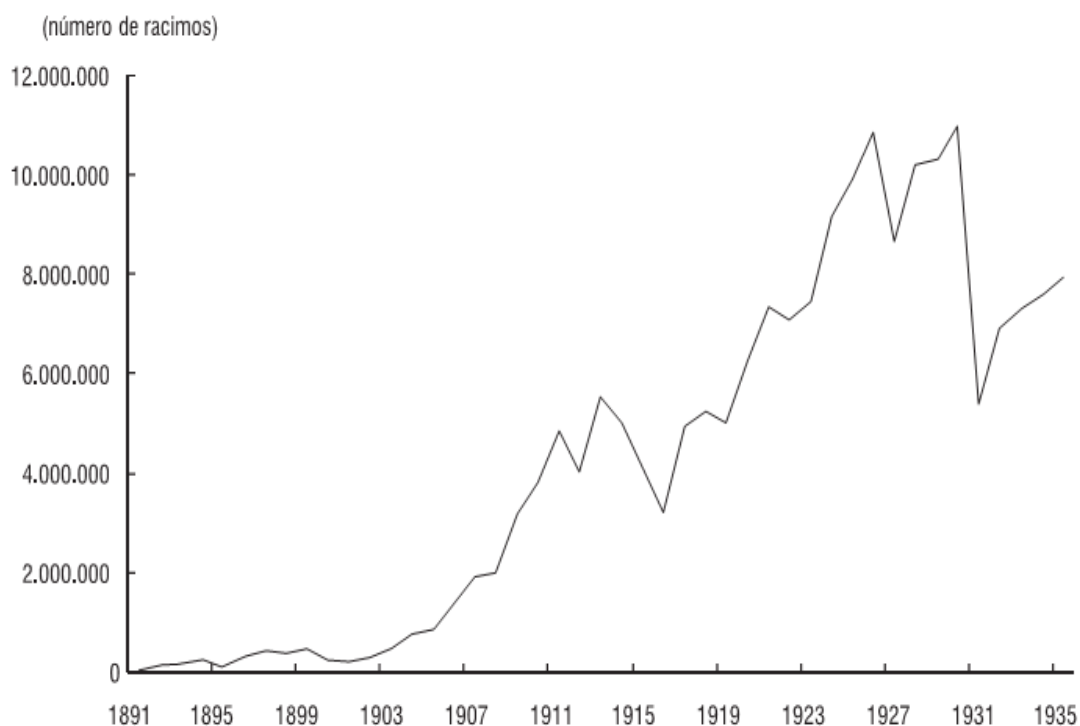
de Santa Marta com o caseiro (hoje município) de Fundación, através da concessão a empresários locais, e alguns estadunidenses e ingleses donos de empresas que operavam desde Nova York ou Londres, que foram contratados com dinheiros do Estado de Magdalena para construir, equipar e explorar uma via férrea, ao mesmo tempo que lhes entregavam terras dos arredores da ferrovia que tinham um grande potencial para o lucrativo negócio da banana que então já tinha um desenvolvimento importante em países da América Central e do Caribe (VILORIA, 2014; BUCHELI, 2013).

O primeiro século de vida republicana então só foi soberano para os investimentos do capital estrangeiro e a configuração de uma elite latifundiária que edificou a territorialização das bases do *modelo de autoridade imperial* que se apresentou depois da segunda Guerra Mundial (HARDT E NEGRI, 2005) nos países que sofreram a intervenção da empresa colonial.

O poder político local, desde então, garantiu a formação socio territorial na base da economia de exportação, não só com a concessão da construção de obras de transporte e da entrega de terras, mas também exonerando “de pagar direitos de importação, assim como outros impostos [...] esquema de liquidação [que] levou a que o Magdalena não recebera regalia alguma pela ferrovia no período 1906 - 1932” (VILORIA, 2014: p. 44. Tradução própria).

No contexto da transição “dos contrapontos comunitários ao modelo latifundista de sociedade” (MOREIRA, 2012) que se instituiu durante a fase de ocupação de territórios pós-coloniais, se assentou no vale ocidental da Serra a companhia estadunidense *United Fruit Company*, que monopolizou e concentrou os negócios bananeiros numa sub-região conhecida como *la zona bananera del Magdalena*, que na atualidade compõem os municípios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Aracataca, Fundación e Zona Bananera, este último município criado em 1999. “É a época da grande expansão do capitalismo estadunidense, principalmente na América Latina e o Caribe” (VILORIA, 2014: p. 98. Tradução própria).

Em pouco mais de três décadas, se consolidou a territorialização da agro exportação de banana que transformou as dinâmicas sócias, políticas, culturais e economias da região. “No Magdalena se configurou a primeira zona agrícola do país com inversão estadunidense” (VILORIA, 2014: p. 81. Tradução própria). O seguinte gráfico mostra o comportamento das exportações de banana na região conhecida como *zona bananera del Magdalena* desde finais do século XIX e começos do século XX.

Gráfico 1 Exportações de banana na zona bananera del Magdalena (1891-1935)

Fonte: Díaz (1996: 284-289; tomado de Viloria, 2005: 97)

A produção do espaço agrário e urbano desses primeiros anos do século XX ficou ligado às relações de produção capitalista numa estrutura agrária baseada na propriedade privada e a consolidação das políticas de terras em favor das elites e o investimento estrangeiro. Nessa fase do ciclo bananeiro se intensificou, através da figura de “*bonos territoriales*”, a política de concessão de terras a militares, comerciantes, famílias tradicionais de Santa Marta e Ciénaga, e cidadãos estrangeiros que reclamavam direitos de propriedade colonial apesar de que nunca exploraram essas terras (VILORIA, 2014). Desde então, na região Caribe se estruturou o padrão de parentesco e a endogamia como constituição de efetivas redes familiares de poder territorial “a partir de matrimônios, associações comerciais e alianças políticas” (VILORIA, 2014: p. 86. Tradução própria).

La United cresceu e se consolidou com incentivos para investimento estrangeiro outorgados pelo comerciante, militar e presidente conservador Rafael Reyes¹⁷. A empresa, conta Viloria, “comprou mais de 13.000 hectares nas cercanias de Aracataca e outros setores da *zona bananera*” (Viloria, 2014: p. 107. Tradução própria). Segundo este autor, seu monopólio alcançou a controlar o 50% da zona cultivada que chegou a ser de 30.800 hectares

¹⁷ Rafael Reyes Prieto que teve um mandato entre 7 de agosto de 1904 – 27 de julho de 1909.

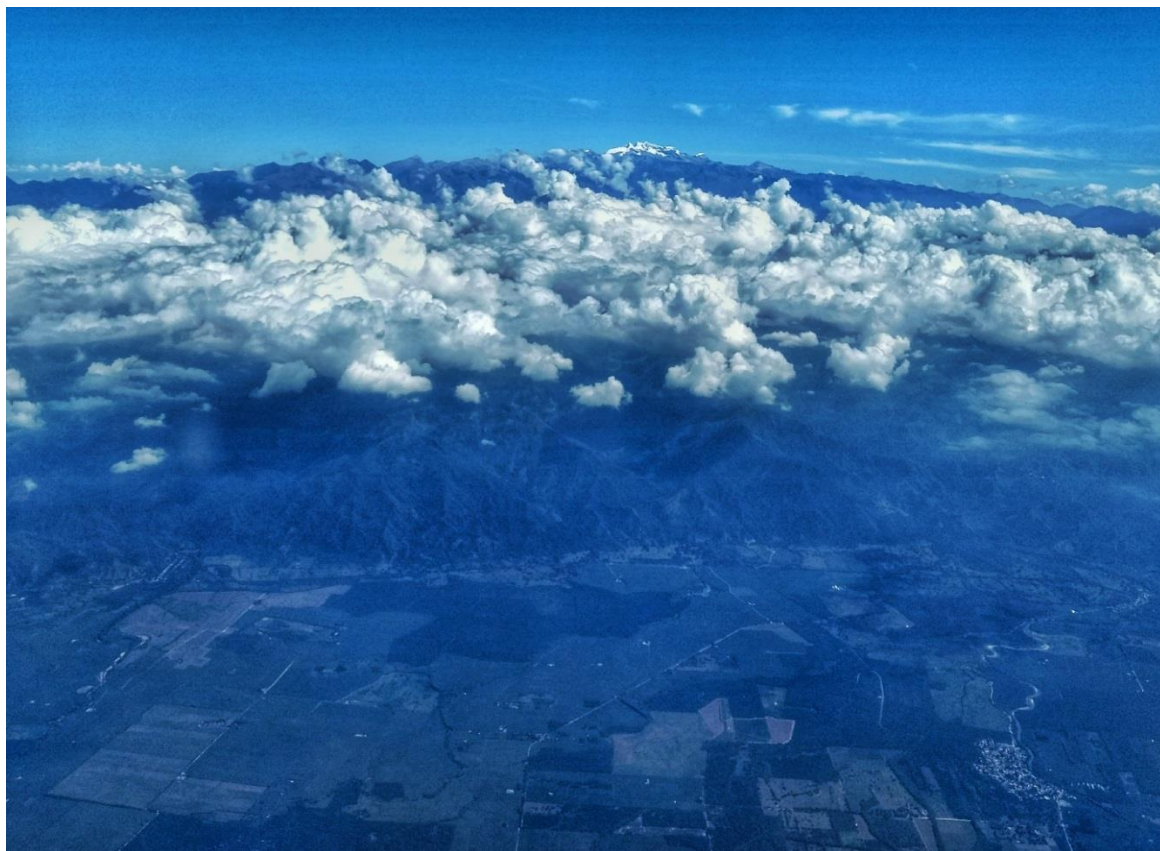
nas primeiras duas décadas, através da compra de chácaras e plantações de banana de pequenos e médios empresários, bem como de roubos de terras como mecanismo de concentração.

A territorialização da empresa estadunidense no norte do Magdalena era tal que, além de ser dona da terra e da produção de banana, a *United* controlava a frota de navios fluvial a vapor refrigerados, a ferrovia, o porto de Santa Marta, da venda da fruta ao comprador final no Estados Unidos e Europa, do serviço telegráfico, da telefonia, da energia elétrica e da fábrica de gelo de Santa Marta (VILORIA, 2014).

Claro, a qualidade dos solos das planícies onde se instaurou a geografia da acumulação capitalista (HARVEY, 2001), faz parte de um ecossistema alimentado pelas águas dos rios que nascem das partes altas da cara ocidental da Serra, em terras com uma alta capacidade produtiva que se diferenciam das áreas de montanha (IGAC, 2012). Os rios *Rio Frío, Orihueca, Sevilla, Tucurínca, Aracataca, Fundación e Ariguani*, descem das áreas que ascendem dos 4000 m.s.n.m. antes de chegar nas planícies que atravessa para chegar à reserva de flora e fauna da *Ciénaga Grande de Santa Marta* (CGSM). Esta formação sub-regional do norte do departamento do Magdalena se constitui como um conector chave entre os ecossistemas da Serra e a *Ciénaga*, reconhecidas como “*Reservas Mundiales de la Biosfera*” (PNUD, 2017)¹⁸ A característica dos solos das partes baixas determinou desde então a vocação de seu uso para atividades agrícolas de exportação (IGAG, 2012) modelo que se mantém desde então até a atualidade como se observa na fotografia em baixo nas que aparecem os contornos dos grandes latifúndios dessas áreas da parte norte do departamento de Magdalena. (Figura 3)

¹⁸ Maldonado Atencio (coord.) Perfil productivo. Municipio de Aracataca, PNUD, Ministerio del Trabajo, Red Ormet, p. 11. Disponible en <http://www.redormet.org/documento/perfil-productivo-aracataca/>

Figura 3 – Fotografia da cara ocidental da SNSM e planícies dos municípios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca e Fundación



Fonte: Fotografia de autoria própria tomada desde um avião antes de viajar para Brasil para realizar meu mestrado (2017).

A fase gradual da industrialização monopólica da economia bananeira no Magdalena significou uma apropriação prematura e perversa da água para a produção agrícola de exportação por parte de empresários locais e estrangeiros, com o Estado como regulador da entrega de terras que se dispuseram desde então como recurso de poder político, social, econômico e cultural. O capital estrangeiro se apropriou, desde então, da natureza aberta a uma nova fase de colonização que se espalhou nessa época nas terras baixas e férteis, bondade das águas de mais de 30 bacias em toda a Serra.

Só na vertente ocidental, segundo um estudo, “estimou que esses [rios] produziam em conjunto 30.000 litros por segundo (l/s) e se distribuem em 16 canais de irrigação, a maioria dos quais beneficiava os cultivos da companhia estadunidense [*United Fruit Company*]” (Quadro 25 - AGN, seção República: fundos baldios; Ministério de Fomento, L-59, t. 71-77, ano 1924. Tradução própria).

Cabe aclarar que, apesar de que as famílias das trabalhadoras e trabalhadores que migraram como força de trabalho para a economia bananeira da primeira metade do século XX

tiveram uma relação cotidiana com os rios; a copiosa água entrou desde a configuração territorial da região do início de século na matriz da mercadoria capitalista, com fracos processos de gestão das políticas desse recurso dentro do marco burocrático que excluiu historicamente as populações locais nos processos da governança da água (BOCAREJO, 2018).

Por outra parte, além da economia bananeira e sua apropriação das terras e por tanto dos recursos como a água, para o caso de Fundación particularmente a produção de gado se consolidou também desde finais dos anos vinte nessas partes baixas. A demanda de carne na zona bananeira incentivou a produção de tal jeito que o município se posicionou como centro de gado onde chegavam povoadores do sul do departamento de Magdalena de municípios como *Plato* até a província de *Padilla* (MOLANO, 1988).

Nos anos de 1930, campesinos trabalhadores das bananeiras que já estavam cultivando milho, foram deslocados pelas grandes fazendas que se localizaram ao longo da via entre Fundación, *la hoyra del Cesar* e *Plato* (MOLANO, 1988). Também se localizaram grandes fazendas na via Fundación-Pivijay na direção ao Rio Magdalena pois comercializavam o gado e os produtos que dele derivam como a leite e o queijo até Barranquilla através do rio. A produção de gado teve sua época de maior prosperidade na década dos sessentas (MOLANO, 1988), fato que se mantém até tempos mais recentes porquanto que esta atividade econômica ocupa o 25,85% da superfície total do território¹⁹.

A consolidação da economia bananeira de exportação sofreria um declínio na metade do século XX como consequência da saída da *United Fruit Company* do Magdalena à região do Urabá (BUCHELI, 2013), resultado dos ciclos de greves que resultou terminou no *massacre das bananeiras*²⁰. Mesmo assim, a concentração da terra e a articulação territorial da região ao mercado internacional se manteve.

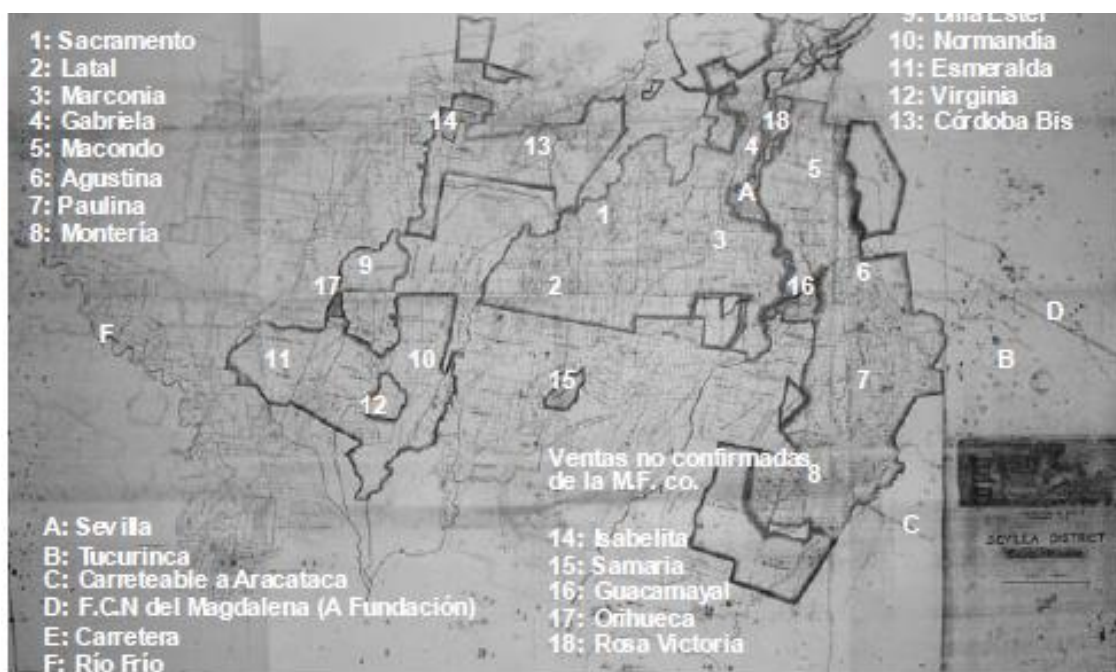
¹⁹ Municipio de Fundación, Magdalena. Plan básico de ordenamiento territorial 2000-2009.

²⁰ O período de finais do século XIX e a transição a primeira metade do XX esteve marcado pela greve dos anos vinte. Depois de este fato a UFC continuou com concessões na zona bananeira, mas ocorreu uma redução na extensão de seus cultivos o que causou um importante desemprego que motivou aos obreiros desempregados, agora convertidos em campesinos sem terra, a ocupar terras da empresa (Legrand, 1983: 245; Henríquez, 1939: 6). Um dos principais fatos deste período é que a dinâmica da territorialização da United na região motivou o surgimento de famílias campesinas sem-terra no contexto onde se constituíram fortes relações de poder econômico e político para a constante ampliação do capital nos territórios em que o Estado foi um dos principais sócios a través de suas políticas. Esta configuração desigual seria uma das principais problemáticas agrárias históricas nas diferentes regiões das planícies que de rodeiam as Serra Nevada. A chegada dos governos liberais colocou algumas reformas sociais e tentou controlar as atividades monopolistas da United no momento em que declínio do preço internacional da fruta. Diz Buchelli que o sindicalismo no Magdalena depois da Segunda Guerra Mundial se fortaleceu lograram ganhar a maioria dos conflitos laborais com a companhia, o que significou o final da United no Magdalena forçando sua saída para a região de Urabá a mediados dos de 1960. As terras da United ficaram abertas a ser ocupadas por campesinos em um desigual cenário frente às elites empresárias regionais que concentravam importantes extensões de terra.

Entre 1950 e finais de 1960, enquanto na Serra avançava o processo ativo de fluxos migrações de colonos campestres do interior –tema que explicarei mais na frente- a parte plana experimentava o nascimento de várias empresas bananeiras de capitais nacionais que deram um novo impulso à economia bananeira em um contexto de precárias condições laborais (VILORIA, 2014). O contexto desses anos, se foram formando e estabelecendo empresas nacionais que intentaram desafiar o monopólio da *United* que estava em declínio. Se fundaram assim a *Federación de Productores de Banano del Magdalena* e o *Consortio Bananera*, este último liderado por Alberto Pío Dávila Riascos, padre Alberto Francisco Dávila Diazgranados, quem chegou a ser presidente do grupo Daabon, um dos maiores grupos de dedicados a agricultura capitalista a grande escala do Magdalena.

Nos últimos anos da década de 1970 se produziram novas mudanças, particularmente na produção bananeira, mas mantendo a importância da terra como recurso do capital resultado do modelo fundamentado na mobilidade do capital, portando ávido por crescimento, que inventa e reinventa possibilidade reprodução ampliada (HARVEY, 2003).

Mapa 7 - Fincas bananeiras da Frutera de Sevilla em 1947



Fonte: ROMERO, Julio. *Documentos de trabajo sobre economía regional* no. 74, Banco de la República. 2006,

O anterior mapa mostra a consolidação de vários latifúndios bananeiros de empresários nacionais de meados do século XX que a finais dos anos sessentas manteriam a importância da terra como recurso de capital; e que nos anos noventa tomariam um novo estímulo determinado pela violência política em Urabá numa nova fase de apropriação de terras pela chegada de capitais procedentes do departamento de Antioquia.

3.2 TERRAS DA UNIÃO, CLASSES AGRÁRIAS E A ESTRUTURA DE DOMÍNIO: CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA AGRÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ARACATACA E FUNDACIÓN.

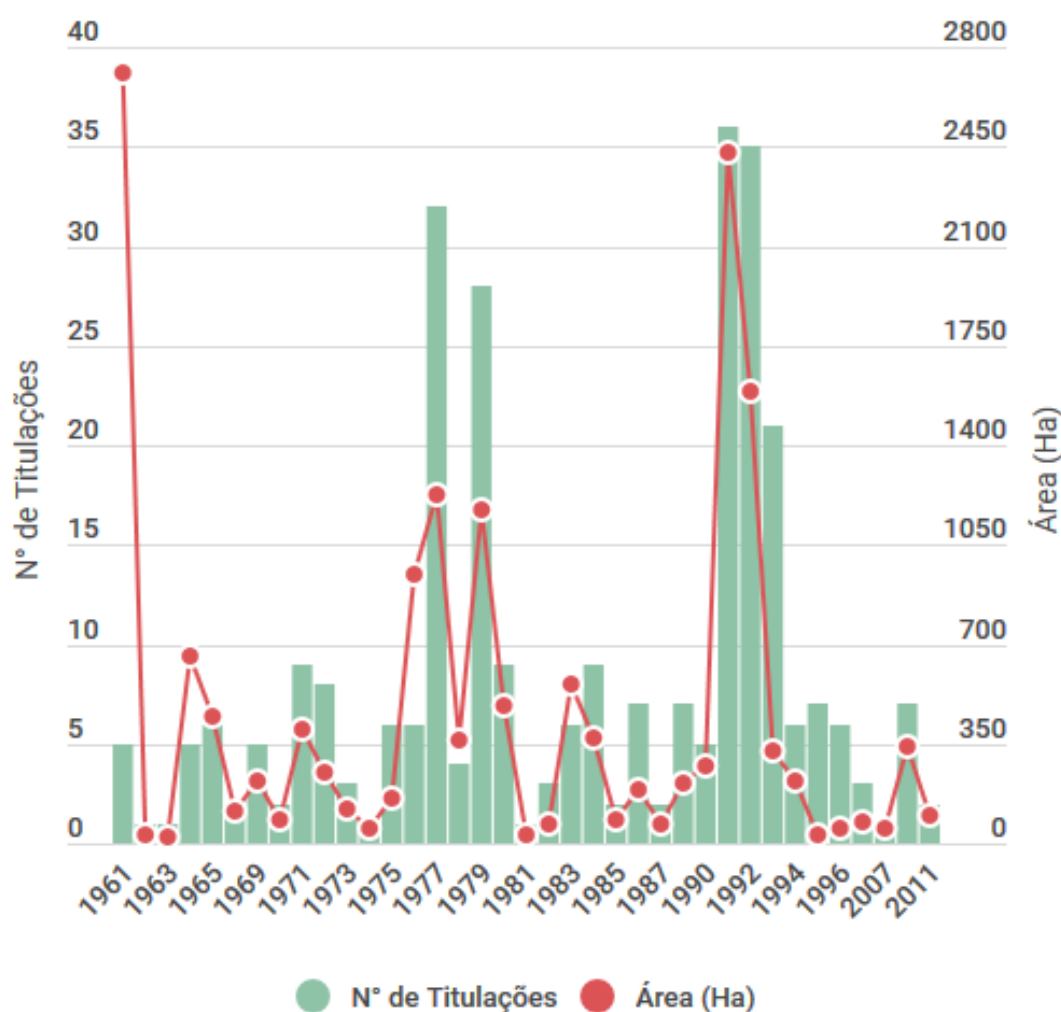
A desigual estrutura de posse da terra no departamento do Magdalena de começos dos anos 1970 era visível nos resultados do segundo Censo Nacional. Os dados permitiam estabelecer que o 34,8% (uma de cada três) das explorações agrícolas que se realizavam no departamento, eram feitas sobre a base de uma categoria de posse da terra distinta a de propriedade (DANE, 1974).

Esta desigual estrutura de tenência foi um dos fatores que estimulou o caráter conflitivo do intento do processo de reforma agrária de começos da década do sessenta do século XX. Para HÖLLINGER (1999), a concentração da terra implica também uma certa estrutura social associada à agricultura capitalista, à grande escala ou à fazenda ganadeira, tão comum nas planícies dos redores da vertente ocidental da Serra e outras áreas do Caribe Colombiano.

A reforma agrária sempre avoca um processo conflitivo, porque implica a redistribuição da renda da terra e um câmbio nas estruturas do poder político relacionados com ela (HÖLLINGER, 1999). Por isso, o saldo da intervenção do Estado, a ação coletiva dos movimentos e organizações campesinas para modificar a estrutura dominante até o primeiro quinquênio dos noventa, período em que entrou em vigência a lei 160 de 1994, significou para os municípios de Fundación e Aracataca resultados discretos em termos da extensão e a qualidade da terra entregue; o número de beneficiários (maioritariamente enfocados em campesinos dos setores planos)²¹; e o efeito sobre as estruturas sociais e de poder político próprias destes municípios.

²¹ De acordo com as entrevistas realizadas a funcionários e funcionárias da Unidade de Restituição de Terras, as terras solicitadas em restituição por campesinos que fizeram parte de processos de reforma agrária em Fundación e Aracataca, foram em sua maioria das áreas planas dos municípios. Mesmo assim, identificaram alguns poucos casos de terras campesinas solicitadas em restituição que faziam parte de titulações coletivas de reforma agrária nas veredas de Sacramento no município de Fundación. No entanto, durante o trabalho de campo pouca informação

Gráfico 2 Fundación: titulações de baldios ou terras da União 1961 – 2011



Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação de Desenvolvimento Rural -SIDER, Incoder (2012)²².

Desde o ponto de vista das titulações de terras da União, por exemplo, no tempo decorrido entre a lei 135 de 1961 até 2011²³, o Incora (depois INCODER e agora Agencia

conseguir coletar nesse sentido. Segundo a entrevista realizada um dos funcionários identificou apenas 6 chácaras como parte dos processos de titulação coletiva.

²² A base de dados sobre as titulações do sistema de Informação de Desenvolvimento Rural – SIDER, Incoder não tem informações do município de Fundación dos anos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.

²³ Este recorte temporal responde a que a Lei de 135 de 1961 como a Lei 160 de 1994 foram dois dos intentos mais lembrados de intervenção direta do Estado para a reforma agrária de distribuição da propriedade e de acesso a terra para camponeses na Colômbia com resultados marginais (CNMH, 2013). O ano de 2011 é mais pelas limitações dos dados da matriz de informações que eu tencolei durante os anos de trabalho na região sobre titulações de terras por município realizadas pelo Incoder, órgão de Estado encarregado dos temas agrários na Colômbia. O 2011 é o último ano de informações.

Nacional de Terras - ANT)²⁴, proferiu para Fundación 300 resoluções de titulação sobre um total de 17038,46 hectares entregadas por este meio a campesinos, mas também, a várias famílias de latifundiários (Gráfico 2).

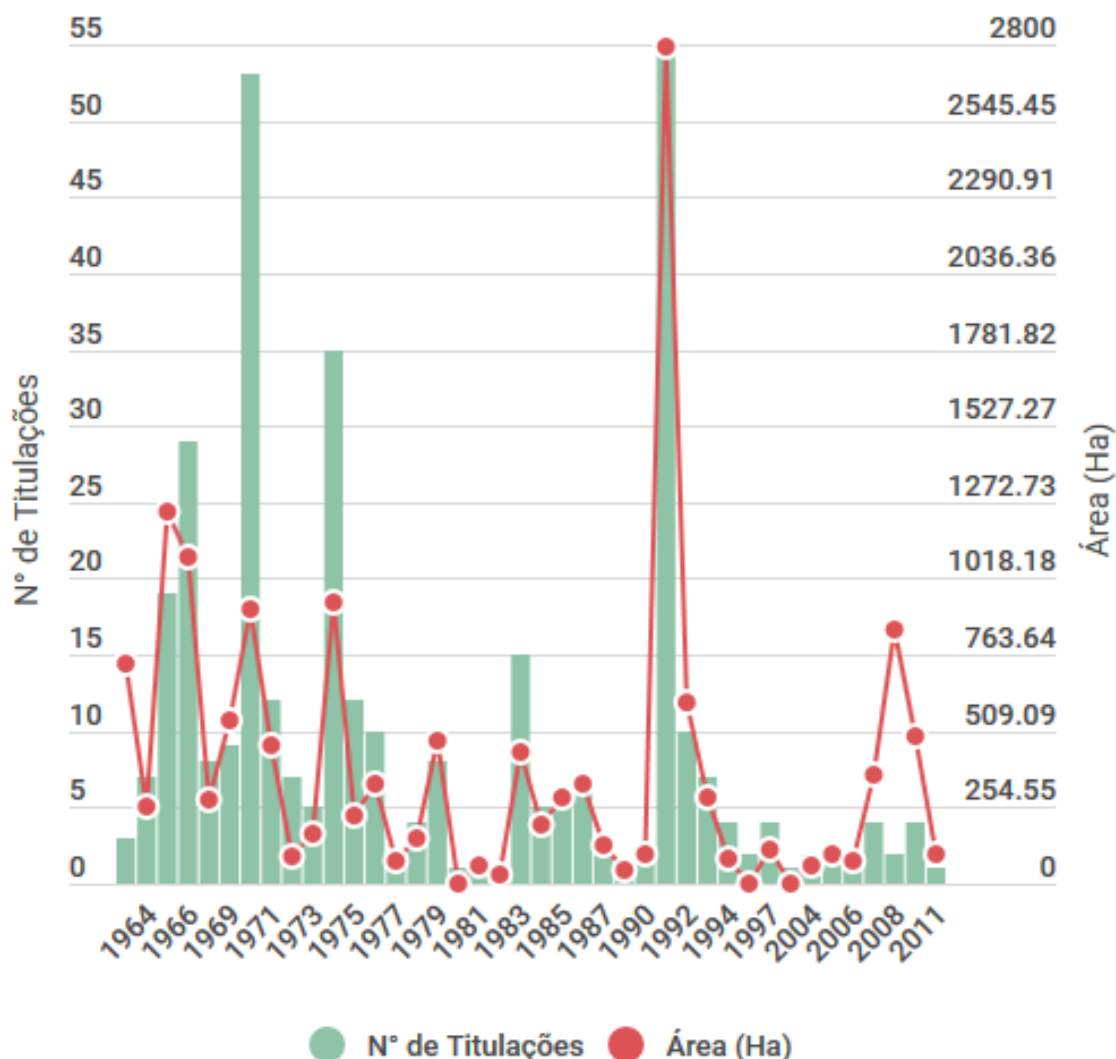
Conforme os dados do *Sistema de Información de Desarrollo Rural (SIDER)* do Incoder, em Fundación se evidencia um estancamento nas titulações durante o período reconhecido por Machado (2013) pelo impulso reformista da Lei 135 de 1961²⁵ ao *Pacto de Chicoral* e a Lei 4 de 1973. Além de ser claramente baixo o número de titulações, se revela o grau de concentração da propriedade motivada pelo órgão do Estado encarregado de administrar as terras da União pois para 1961 em apenas 5 resoluções se entregaram 2712 hectares, dos quais 73%. (2001 hás) foi para uma mesma família.

Depois deste período se evidencia uma certa ativação das titulações de terras nesse município, pese a que entre 1974 – 1988 é conhecido por Machado como o congelamento do processo reformista (CNMH, 2013). Esta dinâmica teria uma reativação temporal entre 1988 e 1993 já no marco do decreto 77 e a lei 30 de 1988, antecedente ao mercado de terras, “pausa definitiva da reforma” (CNMH, 2013).

²⁴ Esta entidade do Estado é a encarregada de promover e executar o acesso a propriedade rural e seu ordenamento social, ambiental e cultural, além de administrar a nome de Estado as terras baldias ou da União, titular e criar reservas, tomar ações para a extinção de domínio, administrar o *Fondo Nacional Agrario* entre outras funções.

²⁵ Segundo o *Centro Nacional de Memoria Histórica* em seu informe sobre a organização campesina da região centro do departamento do Magdalena, a lei 135 de 1961 o “*llamada Ley de Reforma Social Agraria fue expedida por el gobierno de Alberto Lleras Camargo, con el propósito de afectar la concentración de la propiedad contribuyendo a enfrentar la injusticia social y los desequilibrios económicos, fomentando a la vez la adecuada explotación de la propiedad. Se proponía evitar el fraccionamiento antieconómico de la propiedad y dotar de tierras a quien careciera de ella. También promover la función social de la propiedad y de cierta forma enfrentar la violencia en las zonas rurales del país. Para ello, promovió la creación de institucionalidad agraria, destacándose en Incora como una de las principales entidades, así como un cuerpo jurídico de normas para la implementación de la ley. Sin embargo, a finales de la década del sesenta, impulsados por la inoperancia de la ley y de la reforma agraria, los campesinos continuaron organizándose en Comités Campesinos para ocupar tierras a través de vías de hecho. Luego de creada la ANUC en el año 1971 ante la inoperancia de la ley y de la política de reforma agraria, promovieron la recuperación masiva de tierras en todo el país. Aún se sigue esperando la reforma agraria* (CNMH, 2017).

Gráfico 3 Aracataca: titulações de baldios ou terras da União 1961 – 2011



Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação de Desenvolvimento Rural -SIDER, Incoder (2012)²⁶.

Por seu lado, no município de Aracataca o Incora proferiu para o período de 1961 a 2011 um total de 376 resoluções de titulação de 14659,86 hectares entregadas a camponeses e latifundiários. (Gráfico 3). Uma boa proporção de titulações se conseguiu antes do “freio ao impulso reformista” da lei 135 de 1961, representado no mencionado *Pacto de Chicoral* e a execução da lei 4 de 1973 (CNMH, 2013).

Depois veio um período de relativo estancamento com pequenas oscilações nessa matéria que mostrou certa reativação da reforma no ano de 1992, resultado de uma série de

²⁶ Cabe aclarar que a base de dados sobre as titulações do sistema de Informação de Desenvolvimento Rural – SIDER, Incoder não tem informações do município de Aracataca dos anos 1989, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003.

titulações coletivas de terras de grande extensão a famílias camponesas, algumas que trabalharam na bananeira *United Fruit Company* e que instauraram seus lugares de moradia e exploração nas terras da multinacional quando esta saiu na metade do século XX para a região do Urabá, no noroeste do país nos limites com Panamá (BUCHELLI, 2013; TRIBUNAL SENTENCIA MANGONEZ, 2015).

Estas titulações foram resultado da ação coletiva do processo de recuperação de terras que se dava em várias regiões do país como surgimento do campesinato como sujeito coletivo²⁷, levadas a cabo nos setenta por vários líderes da *Asociación Nacional de usuarios Campesinos*, ANUC²⁸ Magdalena, com foco particular nas partes planas, no sopé dos caminhos de entrada à SNSM e em outras sub-regiões do Caribe Colombiano.

Comparado com outros municípios de outras sub-regiões do Magdalena, tanto em Fundación como Aracataca, a ação do Estado em termos da titulação de terras da União foi mais notória. No entanto, essa ação não foi suficiente para garantir o acesso à propriedade para o comum das famílias camponesas.

Quer dizer, em números absolutos, ao longo de cinquenta anos, a quantidade de resoluções proferidas e a área total de terra titulada nestes municípios foi menor que outros municípios da sub-região norte como Ciénaga, com quem comparte características como sua extensão e suas características agrícolas, e com outros municípios das outras sub-regiões do departamento Magdalena que são periféricos do centro de poder político e econômico como Pivijay, Ariguani e Santa Ana (Tabela 1).

²⁷ Como afirma el Centro Nacional de Memoria Histórica, “*Las recuperaciones no pueden ser analizadas solamente como luchas por el acceso a la tierra, pues si bien miles de campesinos en todo el territorio nacional pudieron tener tierra gracias a estas acciones, detrás de ello estaba la creación del campesinado Colombiano como sujeto político y actor transformador del sector rural del país*”. Grupo de Memoria Histórica. Pág. 202

²⁸ La ANUC nace entre el 7 y el 9 de julio de 1970, durante el Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, realizado en Bogotá, en el Capitolio Nacional de la República. El carácter masivo del evento es indiscutible.” (MUNERA, Leopoldo, 1998, p. 145, 246).

Tabela 1 Departamento do Magdalena: área de terra da União titulada por sub-região (1961-2011)

Subregión	Municipio	Resoluciones proferidas	Área (ha)	Subregión	Municipio	Resoluciones proferidas	Área (ha)
Santa Marta		1743	32571,0				
Norte	Ciénaga	1332	27752,9	Centro	Ariguaní	687	58685,2
	Fundación	300	17038,5		Plato	805	39069,6
	Aracataca	376	14659,9		Tenerife	254	10159,2
	Pueblo Viejo	61	5906,1		Chibolo	214	9242,3
	Zona Bananera	897	1251,1		Sabanas de San Ángel	89	575,8
	El Retén	57	953,3		Nueva Granada	71	238,3
	Algarrobo	26	160,4				
	Sub total	3049	67722,0		Sub total	2120	117970,4
Rio	Pivijay	1205	44220,8	Sur	Santa Ana	749	64890,0
	El Piñón	1368	19282,0		San Sebastián de Buenavista	713	36772,6
	Pedraza	629	12529,1		Guamal	1560	23906,4
	Siño Nuevo	597	5780,3		El Banco	1208	17631,7
	Salmina	180	2933,8		San Zenón	164	2745,7
	Remolino	147	1700,1		Pijiño del Carmen	35	841,1
	Cerro de San Antonio	64	1539,2		Santa Bárbara de Pinto	7	241,6
	Zapayán	8	154,0				
	Sub total	4198	88139,3		Sub total	4436	147029,0

Fonte: Elaboração pelo colega sociólogo Sandro Rodríguez com base em dados do Sistema de Informação de Desenvolvimento Rural -SIDER, Incoder (2012). *Municípios criados a partir de 1993.

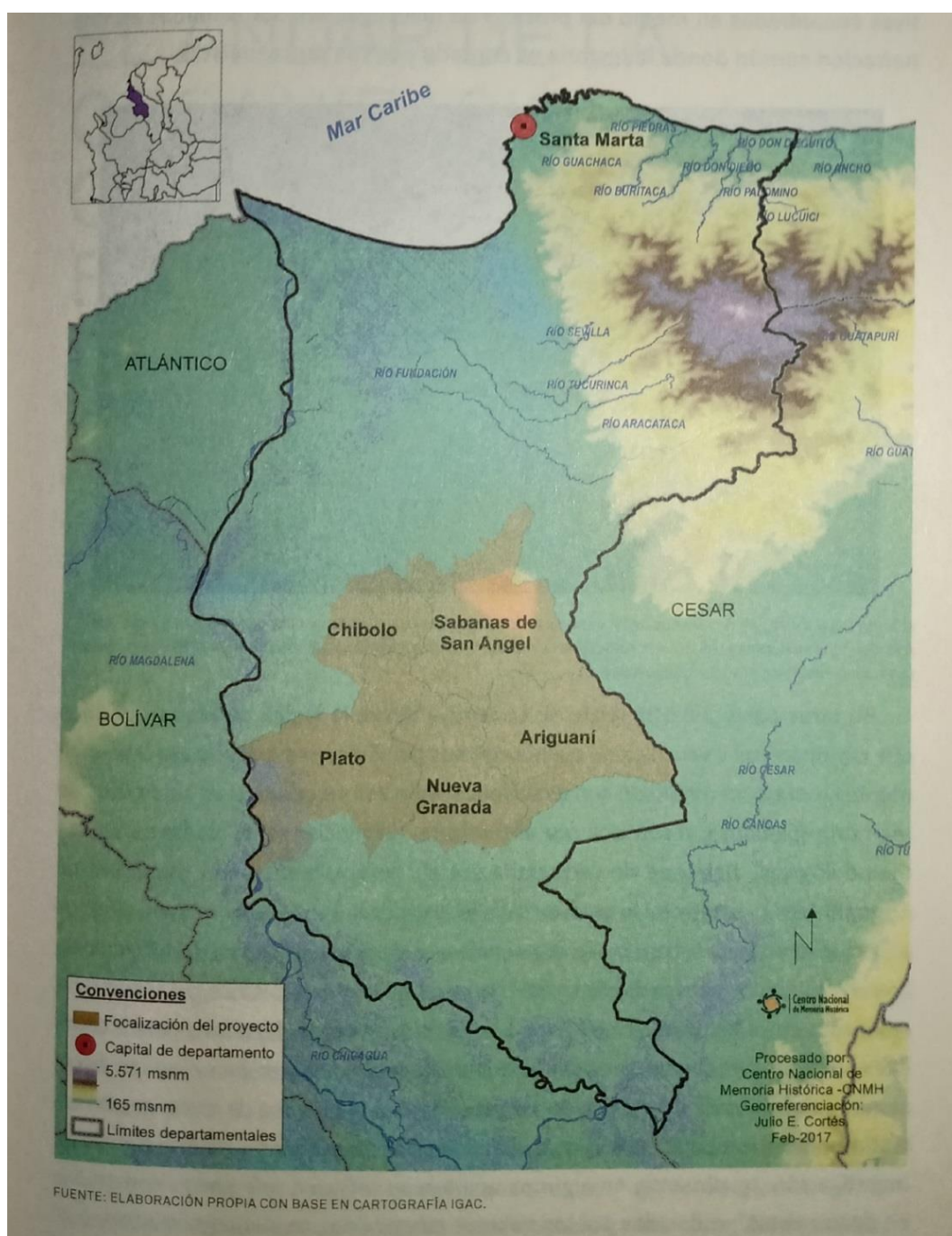
Nesse sentido, a restrição do acesso à propriedade para campesinos impulsionou a colonização de outras regiões mais afastadas nas planícies do Magdalena. Nessas áreas o Estado estimulou a titulação de terras da união, mas sem chegar a dotar as famílias campesinas de terras de boa qualidade; de uma boa infraestrutura técnica; e de recursos básicos para a manutenção das terras tituladas entre 1960 e 1980, titulações feitas marco da lei 135 de 1961 e a lei 4 de 1973. Em municípios da sub-região centro (Tabela 1), por exemplo, se promoveu a colonização e a ocupação de terras desde meados do século XX; que terminaram em titulações por parte do Incora em processos que começaram com as ocupações feitas por campesinos sem maior grau de organização, mas com redes comunitárias, e, posteriormente, por uma base organizativa a partir da qual se estruturaram po sindicatos, ligas campesinas e a ANUC (CNMH, 2017).

Eram os tempos em que se constituiu a organização no departamento do Magdalena a partir do apoio de líderes de outras zonas do país que se trasladaram a esse departamento da região Caribe a impulsionar a ANUC a partir da comissão de base, apoiando a ocupação de terras e ao mesmo tempo, solicitudes de titulação de terras da União (CNMH, 2017).

Como acima assinalei, estes processos de ocupações e de luta pela terra não chegaram a ter relevância nos setores serranos aqui estudados. O seguinte mapa localiza alguns dos processos organizativos mais relevantes do departamento de Magdalena que aconteceram

paralelamente ao processo de colonização da SNSM por outro tipo de sujeito campesino vindo do interior do país diferente daquele que tinha nascido no Caribe Colombiano, Estes processos das partes planas pouco influenciariam os processos territoriais dos campesinos que começavam a se assentar nas áreas serrana da parte norte do departamento do Magdalena (Mapa 8).

Mapa 8 - Localização dos municípios do centro do departamento do Magdalena em que moram os campesinos da pesquisa do Centro Nacional de Memória Histórica – CNMH



Fonte: Centro Nacional de Memória Histórica – CNMH. 2017.

Longe de conseguir a democratização da propriedade nas partes baixas de Fundación e Aracataca, a consequência da intervenção direta do Estado entre 1961 e 2011 foi a consolidação do latifúndio em terras destinadas à exploração agrícola, em sua maioria tituladas²⁹. Essa dinâmica se assemelha à formação regional do Caribe Colombiano onde os latifundiários foram beneficiados com importantes extensões de terras tituladas diretamente.

A esse uso do Estado para desenhar a estrutura da propriedade fundiária em benefício dos latifundiários, somou-se, por uma parte, a ampliação de suas propriedades aproveitando a informalidade da posse da terra, pressionando a compra e venda das terras dos colonos que já tinham seus cultivos, como aconteceu com latifundiários de gado extensivo em Fundación como mostra Molano (1988).

Por outra parte, foram também comuns as ocupações de campesinos organizadas e fomentadas pelos mesmos fazendeiros, às terras da União, nas que uma vez instituídos os direitos de propriedade, passavam formalmente as mãos destes. A colonização, como a *Comisión Histórica de Conflicto y sus Víctimas de la Mesa de Conversaciones de La Habana* aponta, torna-se “no processo de ampliação latifundiário da fronteira agrícola [pois] os colonos se convertem em profissionais da abertura de melhoras³⁰ cada vez mais afastadas” (CHCV, 2015, Pág. 35. Tradução própria).

Neste cenário, os resultados das políticas agrárias nos municípios aqui estudados foram restritos e desiguais frente ao acesso à propriedade. Por exemplo, juntando os dados do *Sistema de Información de Desarrollo Rural-SIDER* dos dois municípios, se observa que em nos primeiros 13 anos do período do intento redistributivo que começou com a lei 135 de 1961 até o “freno do impulso reformista” com o *Acuerdo de Chicoral* e a lei 4 de 1973, o 46,8% da terra titulada (5503,76 hás) foi entregue apenas a 17 pessoas naturais, enquanto que o 51,30% (6022 hás) restante foi distribuída em 199 titulações (1961–1973).

No período conhecido como a congelação do processo reformista (1974-1987), o número de titulações se manteve relativamente estável, com poucas resoluções e em geral, se distribuiu a terra de maneira equilibrada: o 15% (1435 hás) da terra entregue pelo Incora foi entregue ao 15%. No período da reativação temporal da reforma agrária (1988 – 1994) no marco da lei 30 de 1988, tem uma evidente dinâmica de titulações de terras da união pois em menos anos se adjudicaram quase a mesma quantidade de hectares que nos períodos anteriores (8701). Esta tendência tem uma reativação particular entre 1991 e 1992, momento em que se

²⁹ Município de Fundación, Magdalena. Plan básico de ordenamiento territorial 2000-2009.

³⁰ As melhoras são entendidas na Colômbia como o processo de desmatamento e de assentamento dos colonos numa terra da União através do cultivo para alimentação e a construção de uma vivenda.

entregaram o 71% das titulações feitas nesse período. De acordo com Höllinger, esta Lei 30 de aquisição direta e negociação voluntária de terras, manteve o poder monopsônico do Incora no mercado de terras e seu papel preponderante na negociação e a compra de terras privadas o que terminou beneficiando mais aos fazendeiros que às comunidades sem terras (HÖLLINGER, 1999).

Ainda que formalmente o governo desde nível central era encarregado da entrega de terras, na prática no âmbito local os latifundiários e as famílias tradicionais determinaram a configuração da autoridade local, razão pela qual conseguiram incidir nas instituições estatais para se apropriar das terras desde finais do século XIX até a metade do XX. Nessa segunda metade do século XX em Aracataca e Fundación entre 1961 e 1994, apenas em chácaras que superavam a extensão de cento e cinquenta hectares (150) (mediana e grande propriedade)³¹, pouco mais de 30 pessoas naturais tiveram reconhecidos direitos de propriedade sobre 9826 dos 29889 (Quadro 1). Quer dizer que aos 5% dos beneficiários das titulações foram entregues o 32,8% da terra destes municípios através do Incora.

Em suma, é possível afirmar que a concentração da propriedade a partir do agir do Estado nas que primaram umas políticas de reforma agrária bem discretas na distribuição da terra, se converteu no padrão da estrutura de poder político, social e econômico dos municípios de Aracataca e Fundación, e em geral no departamento do Magdalena, fato que ainda se mantém na atualidade.

Isto é possível ser constatado nos dados do Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - pois o índice de concentração da propriedade rural no ano de 2009 com base no Gini, mostra que para os municípios da Aracataca e Fundación existe uma desigualdade na concentração que oscila entre 65,7% e 71,9%, demonstrando que a maior quantidade de terras se concentra em poucos proprietários. No geral para o departamento do Magdalena, o IGAC sustenta que “dito fenômeno evidencia, não só que uns poucos proprietários têm vários prédios, mas que a terra de melhor qualidade é a mais concentrada. A distribuição de terra do Magdalena permaneceu relativamente estável ao longo do período” (IGAC, 2012, p. 298. Tradução própria).

³¹ A Lei 135 de 1961 em seu artigo 29 estabeleceu que, com algumas exceções, as titulações de terras da União só podem fazer a favor de pessoas naturais e por extensões maiores de 450 hectares. Se toma como base de cálculo as 150 há por equivaler a um tercio de dito limite.

Quadro 1 - Aracataca e Fundación: beneficiários de terras da União em extensões maiores a 150 hectares 1961-1994

No	Beneficiario	AREA_PREDIO	NUMERO_RESOLUCION	FECHA_RESOLUCION	ID_PREDIO	MUNICIPIO
1	NUEVO GANADERIA	212,67	000330	1961-06-01	053943-000330053	ARACATACA
2	FELIX PINILLA	500,03	000376	1961-07-01	053937-000376053	ARACATACA
3	GENITO ANDRADE	518,12	000154	1961-03-01	053723-000154288	FUNDACIÓN
4	TORIBIO ANDRADE	528,97	000273	1961-05-01	053692-000273288	FUNDACIÓN
5	LEONARDO DURAN	164,43	000120	1961-02-01	053720-000120288	FUNDACIÓN
6	CARDENIO ANDRADE	954,12	000272	1961-05-01	053681-000272288	FUNDACIÓN
7	HORTENSIA BERMUDEZ	546,61	000164	1961-03-01	053719-000164288	FUNDACIÓN
8	ISMAEL NOGUERA	160	000057	1963-02-01	061230-000057053	ARACATACA
9	BERNARDO TORO	399,5	000089	1964-07-01	128550-000089288	FUNDACIÓN
10	CELINA VECINO	166,37	000022	1964-04-01	128493-000022288	FUNDACIÓN
11	JULIO JARAMILLO	297,36	000598	1965-09-01	127874-000598053	ARACATACA
12	BENEDICTO HERNANDEZ	198	000325	1965-04-01	127726-000325288	FUNDACIÓN
13	VICTOR RINCONES	190	000455	1965-07-01	127796-000455053	ARACATACA
14	A CORREA	185	000433	1965-06-01	105610-000433053	ARACATACA
15	LEONILA ORTIZ	195	000468	1965-07-01	099368-000468053	ARACATACA
16	CRISTOBAL LIZCANO	151	008960	1967-07-01	110989-008960053	ARACATACA
17	PABLO PENA	198,25	005353	1969-04-01	160814-005353053	ARACATACA
18	LUIS PARRA	151	003198	1969-05-01	110989-003198053	ARACATACA
19	MARIA PARODI	449,59	000584	1976-07-01	240507-000584288	FUNDACIÓN
20	EMILIA AMBROSIO	218,38	000320	1976-04-01	236430-000320288	FUNDACIÓN
21	GONZA GUTIERREZ	228,8	000769	1978-08-01	592115-000769288	FUNDACIÓN
22	PEDRO PABON	155,13	000173	1979-04-01	340667-000173053	ARACATACA
23	ELIAS DUARTE	383,5	000999	1983-11-01	308627-000999288	FUNDACIÓN
24	ROJANO	157,76	002258	1990-12-01	374773-002258288	FUNDACIÓN
25	YAMIL ANDRADE	309,84	001845	1991-12-01	404583-001845288	FUNDACIÓN
26	REINALDO ACEVEDO	272,28	002026	1991-12-01	404705-002026288	FUNDACIÓN
27	JULIO VARGAS	159,04	000712	1991-06-01	404708-000712288	FUNDACIÓN
28	JOAQUIN MARIN	298,4	001486	1991-10-01	404492-001486053	ARACATACA
29	BLANCA VILLEGAS	217,63	001806	1991-12-01	404486-001806053	ARACATACA
30	SAMUEL MEJIA	155,22	000175	1992-03-01	404647-000175053	ARACATACA
31	PEDRO BELTRAN	151,8	000271	1992-03-01	404702-000271288	FUNDACIÓN
32	JOSE MARIN	156,6	000290	1992-04-01	404504-000290053	ARACATACA
33	PEDRO PENA	194,46	000581	1992-06-01	404701-000581288	FUNDACIÓN
34	PEDRO GAMARRA	362,05	001011	1992-08-01	404560-001011288	FUNDACIÓN
35	GUILLERMO GARCIA	239,86	000447	1993-05-01	404664-000447053	ARACATACA
Total		9826,77				

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informação de Desenvolvimento Rural -SIDER, Incoder (2012).

3.3 MIGRAÇÕES E OCUPAÇÕES DE COLONOS CAMPESINOS EM ÁREAS DE PRETENSÃO INDÍGENA: FORMAÇÃO SOCIOTERRITORIAL NAS GEOGRAFIAS DA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Figura 4 - Fotografia desde os territórios campesinos da cara ocidental da SNSM



Fonte: Foto de autoria própria tirada desde a cara ocidental da SNSM. No fundo se observam as planícies da sub-região norte do departamento de Magdalena (2017).

A formação dos territórios campesinos na Serra Nevada de Santa Marta se deu com a aceleração da chegada massiva de famílias de colonos desde 1940. Este processo aconteceu nesse contexto regional das formações territoriais das planícies do Caribe Colombiano que descrevi antes, baseadas numa estrutura domínio a partir da concentração das terras pelas elites regionais e a articulação da região aos mercados internacionais.

Este movimento espontâneo de colonização-ocupação de campesinos sem terras, ocorreu ao longo dos territórios de montanha nos que finalmente se localizaram os quatro povos indígenas (REICHEL-DOLMATOFF, 1953) que sobreviveram à primeira fase do que Mignolo (2011) chamou como a colonialidade da implantação do sistema moderno/colonial, sendo a “colonialidade o lado mais escuro da modernidade”, conforme expresso no título de um de seus artigos publicados na Revista Brasileira de Ciências Sociais.

A selva densa da Serra sempre foi um terreno difícil de colonizar. Desde a entrada da empresa colonial eurocêntrica e evangelizadora até a metade do século XX, os terrenos íngremes, os pisos térmicos e abundante fauna e vegetação dificultou a invasão de exploradores

estrangeiros que tentaram estabelecer domínios agrícolas para a exploração da Serra (VILORIA, 2014).

É o caso relatado pelo geógrafo anarquista Élisée Reclus em seu diário “Viagem à Sierra Nevada de Santa Marta. Paisagens tropicais” publicado em 1861 em que conta o fracasso de seu propósito de fazer uma colonização agrária na parte norte do maciço. Eram lugares inóspitos habitados por povos indígenas arhuacos (ijkú), koguis, wiwas e kankuamos que recuaram para essas áreas depois da guerra colonizadora e em onde dificilmente espanhóis, crioulos (filhos de espanhóis, mas nascidos na América), e outros estrangeiros, chegaram a colonizar, preferindo se assentar nas cidades-porto desde onde acumulavam os rendimentos do mercado internacional.

Mesmo as dificuldades, a Serra foi gradualmente ocupada com o passo do tempo, história que pode-se sintetizar em três momentos: i) a criação das grandes fazendas de café em Santa Marta e alguns lugares do município de Ciénaga desde finais do século XIX até 1940; ii) a ativação dos fluxos migratórios de colonos do interior do país paralelo à expansão da fazenda de café na Serra, no marco da emergência dos conflitos territoriais interculturais entre camponeses e indígenas pelo acesso à terra entre 1940 a 1975; e iii) a última fase a ocupação da Serra com a territorialização das economias ilegais a partir de 1975 em diante. Sobre este último ponto me aproximarei no seguinte capítulo.

3.3.1 Fazendas de Café, empresários locais e estrangeiros

A primeira fase da colonização da Serra transcorreu em função do cultivo de café para exportação entre 1890 e 1940 em localidades como Minca e Bonda, setores rurais das partes altas da cidade de Santa Marta. Os protagonistas seriam empresários estrangeiros que se apropriaram e receberam dos governos locais grandes extensões de terras no sopé e nas partes médias onde estabeleceram suas extensas fazendas de café durante um contexto nacional onde este produto se convertia num dos principais recursos que alimentavam a economia republicana (PALACIOS, 2009).

Mesmo que o cultivo de café na Serra não tivesse a mesma importância que nas áreas andinas do interior do país de departamentos como Huila, Tolima, Risaralda ou Antioquia, dado a regularidade do ciclo da coleta e do tipo de café, fazendas como *Jirocasaca*, *La Victoria*, *Cincinati*, *Onaca* entre outras, seriam reconhecidas na SNSM por sua produção e exportação de café cultivado em extensas áreas de terras serranas.

Pese a que não representava as mesmas utilidades que a comercialização de banana, a produção e a inserção do café ao mercado global cresceram substancialmente em vários setores da Serra. Estadunidenses, espanhóis, belgas e alguns empresários *samários*³² beneficiários da titulação de terras nas planícies da zona bananeira, monopolizaram a exportação de café pelos portos de Santa Marta e Barranquilla a través de casas comerciais que tinham seus escritórios nas principais cidades estadunidenses e europeias. Os mesmos empresários de café exportavam seu produto até os portos do norte global desde onde importavam “licores, grãos, conservas [...] e coros de gado” (VILORIA, 2014; 57. Tradução própria).

Desde o ponto de vista da capacidade produtiva do solo da SNSM partindo desde uma lógica da exploração agrícola, ela é limitada, pois sua rusticidade é de fraca produtividade, além de uma pronunciada inclinação do terreno, o que dificulta a coleta e o transporte de produtos (IGAC, 2012; VILORIA, 2014). De acordo com o estudo general dos solos e bonificação de terras do *Instituto Geográfico Agustín Codazzi* - IGAC, enquanto a planície e o vale aluvial posem uma fertilidade muito alta, no sentido da Serra, prevalece o uso do solo do tipo Florestal Protetor Produto (FPP) em terras sobre relevos moderadamente escarpados com pendentes pronunciadas de um 50% a 75%, o que dificulta os labores agrícolas coletoras, em terras acidas e de fertilidade com tendência baixa que conforme ganha em altura diminui as capacidades férteis. Nestas áreas, segundo o IGAC, o efeito protetor do bosque, bem seja natural ou plantado, deve prevalecer em benefício dos demais recursos naturais (IGAC, 2009).³³

Embora, mesmo sua importância como reserva ecológica de fauna e flora (IGAC, 2012), os interesses de empresários para que o Estado entregara territórios da SNSM para a plantação não se concentrou apenas no cultivo de café, mas também em outros produtos como o cacau, além da zona de pastagem de gado que começava a se desenvolver na vertente norte entre Santa Marta e Riohacha, o que seria o começo das repercussões e efeitos ambientais negativos em seus ecossistemas.

Para esse primeiro período, as fazendas de café e outras propriedades na Serra, também se converteram em lugares de descanso e recreio que dava status social as elites *samaritas*, *barranquilleras* e estrangeiras, muitas das quais tinham também propriedades em Santa Marta ou na prospera zona bananeira das planícies fluviais. O clima frio da Serra e suas abundantes cachoeiras colocou a Serra como lugar de descanso das elites do intenso calor das planícies;

³² Gentílico das pessoas nascidas na cidade de Santa Marta.

³³ De acordo com o IGAC os solos dos setores serranos estudados nesta pesquisa oscilam entre “*suelos de clima templado muy húmedo, de filas y vigas, relieve moderado a fuertemente escarpado; originados de rocas ígneas y metamórficas; son profundos y superficiales, bien drenados, de texturas medias y gruesas, reacción moderada a fuertemente ácida y fertilidade alta y baja*” (IGAC, 2009, sem página).

mas também como áreas para o turismo ecológico e de lugar de pesquisas de universidades estadunidenses sobre aves e vegetação (VILORIA, 2014). Isso explica em parte a presença precoce de estrangeiros na Serra associada aos projetos ambientais de interesse transacional como atores que até atualidade aparecem na paisagem da Serra.

Estes processos iniciais de ocupação se focalizaram sobretudo na esquina noroeste e foram-se expandindo com menor intensidade em municípios como Ciénaga. Apesar destes movimentos descritos até aqui, para esse momento o maciço montanhoso estava ainda aberto a ampliação da fronteira agrária e a colonização.

Por outro lado, foram também importantes nesse processo os trabalhadores migrantes (alguns deles de Centro América e outros do interior do país) que ofereceram sua mão de obra nas prosperas fazendas de café e se instalaram em parcelas de terra que ocupavam de maneira desorganizada e sem nenhum tipo de regularização estatal. Assim, ao tempo que o Estado projetou políticas que favoreceram a expansão do capital e a concentração da propriedade, começou um paulatino processo de migrações e fluxos de pessoas do interior do país como padrão de ocupação espontânea e não regularizada nas franjas baixas e intermedias das 3 vertentes montanhosas.

Ainda que aos poucos e com uns fluxos muito incipientes, instaurou-se desde esse momento o padrão de colonização que seria replicado nas duas fases seguintes nas diferentes vertentes Serranas do tipo: colonos campesinos sem terras, que abriam a fronteira agrária desmatado sozinhos ou com suas famílias e compadres que iam chegando do interior do país e de outras áreas circunvizinhas da costa do Caribe, a trabalhar nas grandes fazendas de café, propriedade de prestantes famílias da região e do exterior, para estabelecer-se sua moradia e meios de subsistência nesses territórios serranos.

Por algumas falas com teve com campesinos das áreas de estudo e de outras áreas da SNSM, o padrão agrário que se configurou nessa primeira fase de ocupação era que durante a semana trabalhavam para a fazenda e no final de semana, se dedicavam a abrir mata dentro da montanha para estabelecer suas posses de terras, ampliando assim cada vez mais a fronteira agrária na SNSM derivando no inevitável encontro com os indígenas que tinham se assentado em várias áreas da Serra e cujo efeito foi o deslocamento destas para as áreas mais altas do maciço.

3.3.2 Povoamento, migração e processo de colonização campesina nas áreas de estudo

Figura 5 - Fotografia trilhas das áreas campesinas da cara ocidental da SNSM



Fonte: Fotografia do arquivo de Jesús David Huertas, colega da Unidade de Restituição de Terras (2017).

A segunda fase da história da colonização de campesinos sem-terra especificamente na vertente ocidental da Serra, se remonta a meados do século XX e se escreve no marco dos fluxos demográficos resultado da chamada violência bipartidista, período conhecido como *La Violencia*³⁴ de finais de 1940. Esta fase se intensificou no interior do país nos departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Huila e Tolima (MOLANO, 1988). É para esse período que começaria o processo de formação socio territorial das áreas campesinas da SNSM como as conhecemos hoje.

Como mostrou Molano, o campesino que participou deste processo de colonização da Serra, não surgiu dos conflitos laborais da zona bananeira nas planícies aluviais pois “nunca afetaram demograficamente a região. A idiossincrasia, altos salários e condições laborais, os trabalhadores bananeiros, mensal ou por contrato, jamais se interessaram em colonizar ou ser peões das fazendas na Serra” (MOLANO, 1988: p. 42. Tradução própria).

É assim como se constituíram diferenças entre o campesino *costeño*³⁵ de rio e dos vales fluviais, as populações pesqueiras do litoral e os campesinos da Serra. De fato, como foi dito no estado da arte, “os campesinos são produtos históricos específicos, o que implica, ao mesmo tempo, conceber suas origens comunitárias multiplex e diversos, assim como suas trajetórias variáveis e diferenciadas” (Instituto Colombiano de Antropología e História 2018, 17. Tradução própria). É assim que os campesinos *costeños* e as populações pesqueiras do litoral se constituíram principalmente no marco dos conflitos territoriais resultantes do modelo agrário exportador, da luta pelo acesso à terra, em territórios altamente concentrados e no caso das famílias pesqueiras, associados as dinâmicas portuárias. Já os campesinos da Serra se formaram a partir da idiossincrasia dos campesinos das áreas andinas do interior do país de onde provinham. Em alguns casos excepcionais, famílias de *costeños* ocuparam maioritariamente as áreas mais baixas, como era evidente em algumas das visitas de campo nos anos como funcionário do escritório de restituição de terras.

Depois dos anos quarenta o desenvolvimento da atividade do café a grande escala na Serra nos setores de Santa Marta e o município de Ciénaga, impulsionou a migração de mais e mais colonos para trabalhar nas fazendas de empresários agrícolas *samários* e *barranquilleros*³⁶ com latifúndios na zona bananeira e bens nas cidades porto, com poder não apenas econômico, mas também político. Buscavam negócios agrícolas a través do café na Serra onde tinham seus

³⁴ Violência entre os Partidos Conservador e Liberal que gerou movimentos migratórios para outras regiões do país.

³⁵ Gentílico de como é conhecido a população da Costa Caribe Colômbiana.

³⁶ É o gentílico utilizado para pessoas Oriundos da cidade de Barranquilla.

lugares de recreio e descanso. Foram eles que propagaram a semente. Segundo conta o professor Molano,

o café se propagou por toda a região transformando estas fazendas de recreio em unidades produtivas muito rentáveis. [Na zona de San Pedro] em 1947 já tinha pelo menos 20 dessas fazendas. Segundo os colonos, a semente de café saiu do El Platanal com destino as posses que os trabalhadores das grandes fazendas faziam os finais de semana (MOLANO, 1988: p. 44. Tradução própria).

Para então, o café produzido nessas grandes fazendas, “se vendia em Santa Marta e abastecia o mercado regional (ou litoral atlântico); o resto se vendia aos contrabandistas y saía do país a Venezuela, as Antilhas e Europa” (MOLANO, 1988: p. 45. Tradução própria). O café das parcelas campesinos começou a ser vendido a Federação Nacional de Cafeteiros (FNC) que ajudava a comercializar dentro de uma cadeia desigual de exportação internacional de café. As territorialidades campesinas se constituíram cotidianamente através das relações de trabalho na produção café nas grandes fazendas e nas terras que ocupavam; ao tempo que se estabeleciam redes familiares, de vizinhança e comunitárias de populações – a maioria -deslocadas pela violência do interior da Colômbia, que se materializavam numa relação especial de trabalho com a terra na produção de alimentos.

Figura 6 - Fotografia casa de família de campesinos da vertente ocidental da Serra



Fonte: foto arquivo de Jesús David Huertas, colega da Unidade de Restituição de Terras (2017).

Foi a partir de 1948 que aumentou consideravelmente a migração de *cachaços*³⁷ e *costeños* na Serra como resultado da violência bipartidista³⁸ que se experimentou em diferentes regiões do interior do país que motivou uma grande mobilidade populacional na Colômbia inteira (ILSA, 2013). Nessa metade do século XX o norte da Colômbia e os contrafortes da SNSM sofreriam uma reconfiguração importante em sua geografia. Este colono, como Molano, eram de

regiões assoladas, primeiro, desde finais dos quarentas, pela *policía chulavita*³⁹; logo pela divisão de quadrilhas liberais nos cinquentas, e depois finalmente pelos redutos destas quadrilhas que até meados da década do sessenta, desataram uma das piores ondas de violência que tem vivido o país (MOLANO, 1988: p. 62. Tradução própria).

O campesinato da Serra se formou ligado aos processos políticos de ordem nacional que motivou a migração dos colonos do interior do país para a região Caribe, muitos deles liberais, mas não exclusivamente. Além disso, este formou-se em relação com as tendências da produção agrícola do café e a comercialização de alguns produtos alimentícios nas cidadezinhas e povoados baixos das sub-regiões de cada umas das 3 vertentes.

Da mesma forma, o papel da violência associada à concentração da terra e o controle territorial, definiu este campesino da Serra; num contexto de interação histórica e territorial com outras culturas do campo e grupos domésticos indígenas dos quatro povos que habitam na SNSM. Mas também com negros e campesinos *costeños* das planícies e arredores que se configuraram através de vários conflitos pela terra resultante da forte concentração da propriedade e os conflitos trabalhistas que atravessavam precárias condições laborais nas empresas bananeiras.

Como conta Molano, apesar de que o Estado concedeu importantes quantidades de terras na Serra a empresários locais em áreas da jurisdição da cidade de Santa Marta, Ciénaga ou Valledupar (no departamento do Cesar), não existiu um conflito pela terra entre colonos pois para metade do século XX ainda haviam extensas áreas para desmatar e ampliar assim a fronteira agraria através da ocupação daqueles que chegavam com suas famílias. (MOLANO, 1988).

³⁷ É o nome de pessoas nascidas nos departamentos do interior do país como Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Tolima e Huila.

³⁸ Violência entre os Partidos Conservador e Liberal que gerou movimentos migratórios para outras regiões do país.

³⁹ Tipo de organização armada com práticas de violência política que tinha uma ideologia fundada no partido Conservador.

No entanto, um dos tipos de conflitos territoriais que começaram durante esse período foi um de caráter intercultural entre camponeses e indígenas pela tenência e o uso dela entre terra e os territórios, mesmo que ao tempo, se estabeleceram algumas relações em alguns locais particulares que ainda hoje se mantem. Dito conflito acrescentar ia-se na terceira e última fase do processo colonizador, durante o crescimento dos cultivos em áreas camponesas para a comercialização nacional e internacional de *cannabis*, tema que apresentarei na seguinte secção.

Assim o processo de formação sócio territorial camponesa na Serra Nevada se deu através das tessituras, nodosidades e redes que estabeleceram vizinhanças, acessos, convergências entre essas comunidades, “mas também disjunções, rupturas e distanciamentos” (RAFFESTIN, 1980, pág. 161) com as comunidades dos quatro povos indígenas que descenderam dos indígenas que resistiram e sobreviveram do período colonial, com povos os quais começa uma disputa pelo acesso e uso e representações sobre as terras e territórios.

Figura 7 - Fotografia povoado Kogui, corregimento de Palmor, cara ocidental da SNSM.



Fonte: RCN radio, marco de 2020. Ver. <https://www.rcnradio.com/Colômbia/sos-por-sierra-nevada-de-santa-marta-entre-el-deshielo-y-la-extincion-de-pueblos-indigenas>

Como relata Molano, para esse segundo ciclo de colonizações e ocupação da Serra existiam algumas relações de amizade entre os dois grupos que beneficiaram em alguns setores

em maior medida as intenções de terra dos colonos. O campesino comerciava sal, rom e outras mercancias para as comunidades indígenas que, segundo depoimentos obtidos por Molano, “indicam que, geralmente, os indígenas tiveram que pagar suas dívidas com terras” (MOLANO, 1988: p. 44. Tradução própria).

Os colonos também começaram a comprar os cultivos de macaxeira e banana de indígenas “por qualquer par de centavos” (MOLANO, 1988). De fato, uma das grandes pressões dos indígenas era o sistema de exploração conhecido como “*el endeude*” ou “a dívida”, como se conhece em português, através do qual roubavam as melhores terras (PRO-SIERRA, 1991).

Em algumas áreas a ampliação da fronteira agrária e da ocupação de terras por campesinos colonos significou em muitos casos o deslocamento dos indígenas a lugares mais altos do maciço (PRO-SIERRA, 1991). Casos como o povoado de San Pedro de la Sierra, foi fundado por ordens militares com a queima de uma terra indígena Kogui. Conta Molano que

...foi a violência do despojo o testificam [...] ao parecer por ordens do Coronel P. Monroy, se queimou San Andrés dos Koguis para em um futuro mais perto fundar San Pedro de la Sierra [Ciénaga] [...] alguns colonos e vários Koguis [manifestam que] fugiram pela pressão colonizadora e o perigo de morrer assassinados para *San Javier*” (MOLANO, 1988: P. 46).

Os acordos e negócios feitos de palavra ficaram desde o começo fora da órbita das instituições oficiais. A falta de títulos de propriedade e o alto nível de informalidade dos negócios jurídicos de compra e venda, aparecem como uns dos traços que caracteriza os territórios serranos enquanto a sua regularização fundiária. O Estado pós-colonial focou desde as entranhas de seu nascimento mais na defesa dos interesses e ampliação do capital e a concentração da propriedade em mãos das elites locais e nacionais das terras mais produtivas, que na regularização e mediação dos conflitos que emergiram durante o processo de migratório que por então estava acontecendo na Serra e em outras sub-regiões do Caribe Colombiano. Finalmente, as terras serranas não eram do interesse de latifundiários sendo áreas menos produtivas e aptas para a exploração, exceto pela importância na histórica apropriação da água da Serra nas planícies aluviais dos latifúndios e a grande propriedade.

Em suma, em pouco mais de 25 anos ocorreu a territorialização campesinos em todas as caras da Serra, com o desmatamento de novas terras cada vez mais adentradas na montanha, e a ocupação de grandes fazendas nas que chegava a trabalhar na coleta de café e nas localizavam suas posses de terras as vezes entregadas pelos latifundiários. Para esse período, conformaram-se vários povoados, interconectados através das *veredas*, que são as principais unidades territoriais da ordem local, interconectadas por trilhas e caminhos construídos no

processo de colonização que estabelecem as redes, ligações e nodosidades de uma territorialidade campesinos nas diferentes vertentes da SNSM.

Cabe destacar que formação dos territórios campesinos se estruturou principalmente a partir de três tipos de propriedade. Por uma parte, as grandes fazendas de café de empresários locais e estrangeiros. Por outra parte, as medianas propriedades de campesinos que viraram produtores cafeiteiros. Deste grupo também fazem parte as medianas propriedades da vertente norte dedicadas ao gado extensivo (MOLANO, 1988). E por último, unidades de minifúndios de posses de famílias campesinas que também cultivaram café e alimentos.

Particularmente, a história dos territórios campesinos estudados nesta dissertação formou-se a partir do aglutinamento da população campesinos em torno ao minifúndio e a pequena propriedade, dedicada ao cultivo de café e de alimentos. Este processo aconteceria entre as margens dos rios Tukurinca, Aracataca, Fundación e Ariguani. Ao longo da cara ocidental nasceram povoados como Sibéria, San Pedro da Serra, San Javier, Palmor (Município de Ciénaga), La Fuente, Cerro Azul, Las Nieves, El Oriente, Água Bendita (município de Aracataca), El Cincuenta, Palmarito, Sacramento, La Cristalina (Município de Fundación) entre outros, que pertencem ao departamento do Magdalena.

A história da formação campesina nas áreas desta pesquisa começa com a chegada de uma colônia *santandereana*⁴⁰ ao município de Fundación na década de 1950. Os primeiros migraram de Zapatoca ao sul do departamento de Santander, motivados pelas perspectivas de trabalho dado o desenvolvimento socioeconômico da área urbana localizada nas planícies, no que se construía a estrada que conecta com a cidade de Bucaramanga, capital do departamento de Santander, com a Costa Atlântica (MOLANO, 1988).

O primeiro em chegar foi Antônio Plata (1947) e com ele as famílias García, Serrano, Forero e Angarita, e Acevedo na década dos anos sessenta. Com aspirações de progresso, os de Zapatoca se dedicaram ao comercio de artículos, comidas, bebidas e conservas, além de atividade do transporte como empreiteiros desse município e outros. Essas famílias se posicionariam como proprietários de lojas de ferragens, postos de gasolina e fazendas de gado no sopé da Serra, impulsando estas atividades no centro onde confluía a estrada que comunicava o sul do departamento de Magdalena com a cidade porto de Santa Marta e a ferrovia construía na época do auge bananeiro (MOLANO, 1988). Enquanto a colônia de *Zapatocas* se instalaram na zona urbana de Fundación, outros santandereanos do norte do departamento foram expulsos durante a violência política. Eram famílias de *Ocaña*, *El Carmen*,

⁴⁰ Gentílico de gente do departamento de Santander.

Teorama e Concepción que “colonizaram a Serra Nevada de Santa Marta, localizando-se no que tem se denominado como a área cafeteira” (MOLANO, 1988: 77. Tradução própria).

Nas veredas que estudo nesta pesquisa (Santa Clara, Sacramento e El Cincuenta) chegaram também *tolimenses*⁴¹ e *vallunos*⁴² resultado da violência política. Alguns abriram mato, outros compraram posses dos colonos inaugurais nesse contexto de uma alta informalidade da posse em negócios que eram feitos de palavra. No município de Aracataca, por sua vez, na década dos anos cinquenta foram ocupadas as veredas Água Bendita, La Cristalina, Buenos Aires, Rio Piedras e La Arenosa (ENTREVISTA CAMPESINA 7). Como falei antes, para esses setores a propriedade campesinos que prevaleceu nas ocupações daqueles anos seriam as unidades de minifúndios de famílias campesinos.

Deste modo, na sub-região norte do departamento do Magdalena enquanto os latifúndios e a mediana propriedade se consolidaram como padrão agrário nas partes baixas; o minifúndio se constituiu como formação da propriedade rural das famílias de colonos campesinos, com uma altíssima informalidade da propriedade, péssimas vias de acesso e uma baixa presença do Estado (PREFEITURA DE FUNDACIÓN, 2009; PREFEITURA ARACATACA, 2009).

Por sua vez, o povo indígena arhuaco também chamado Ijkú e/ou Wintukua, estava regulado pela missão evangelizadora da ordem dos Capuchinos que haviam estabelecido desde 1916 um internado em Nabusímake, parte alta entre as caras sul ocidental e sul-oriental. O internado era considerado o principal centro deste grupo indígena, a quem foi imposto o controle social aos matrimônios entre indígenas de diferentes etnias e colonos de outros povoados, a proibição da língua, da vestimenta tradicional e a perseguição de crianças e jovens incorporados forçosamente ao orfanato, com fortes impactos sobre as formas de governo, controle político e o exercício da autonomia do povo arhuaco, ao tempo que gerou importantes perdas de territórios ancestrais e a capacidade de governança sobre eles (AJA, 2010). Até então, a tala e queima de bosques acrescentou-se como forma de adequação das terras destinadas ao cultivo de alimentos durante a segunda fase de colonização da SNSM, o que gerou manifestos impactos ambientais sobre os ecossistemas e biomas serranos.

Foi assim como sobre a base dos efeitos de 30 anos de continua ocupação dos colonos campesinos e da evangelização capuchinha, na primeira metade do ano 1970, um grupo de arhuacos começaram a trabalhar articuladamente na necessidade de proteger o território através

⁴¹ Gentílico dos povoadores oriundos do departamento de Tolima.

⁴² Gentílico dos povoadores oriundos do departamento do Valle del Cauca.

da construção de uns povoados na cara ocidental para a contenção da colonização campesina. Ditos povoados indígenas serviriam como referência anos depois para o limite do surgimento da zona de Reserva. Assim, na década do setenta surgiram três povoados na parte alta de Aracataca: Duanawimakú (1970), Umuke (1975) y Singuney (1975) (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

Como conclusão sobre a segunda fase da ocupação da Serra (1940 – 1975) é possível afirmar que a geografia que conhecemos atualmente da SNSM é produto e condição da territorialização que sobre ela exercem diferentes territorialidades constituídas com processos heterogêneos de populações subalternizadas dentro de um modelo moderno/colonial amplo, que coincidiram na metade do século XX, constituindo os territórios interculturais contraditórios, disjuntivos, com rupturas e distanciamentos (RAFFESTIN, 1980) que conhecemos hoje.

Esta formação sócio territorial dessa fase nos setores estudados, transcorreu num processo paralelo de ocupação de colonos sem-terra, algumas vítimas deslocadas à força dos seus locais de origem durante a Violência dos anos cinquenta, em territórios de pretensão de indígenas arhuacos.

Cabe destacar que ainda que em alguns setores onde o avanço da colonização desorganizada de campesinos motivou o deslocamento das populações indígenas às partes mais altas da Serra, nos setores estudados foi diferente pois de acordo ao que falaram algumas autoridades indígenas, até a primeiro quinquênio de 1970, essas áreas eram não habitáveis pelo que decidiram nesse momento fundar os povoados arhuacos como Duanawimaku e Umuke para conter à intensa migração campesina (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 1). Esses povoados indígenas anos depois marcariam o limite do surgimento da zona de Reserva Arhuaca (1974), o que hoje se reconhece como Resguardo Arhuaco da Serra (1983).

Termino aqui destacando que a partir do descrito até aqui, pode-se compreender a formação campesina na Serra desde uma perspectiva intercultural “em sua configuração histórica” (Instituto Colombiano de Antropología e História 2018, 19), envolvido em processos de relacionamento e interação entre culturas com diferentes visões sobre usos e conservação da terra (DUARTE, 2015), no contexto regional de monopolização e concentração da terra das partes planas.

3.3.3 Campesinato e mercado mundial de machona: fluxos de capitais americanos e territorialização das economias ilegais (1975-1985).

A terceira e última fase da formação dos territórios interculturais da SNSM durante o processo de colonização da Serra na segunda metade do século XX, ficou marcada pela territorialização do tráfico de *cannabis* e de cocaína entre 1975 a 1985, fase que transformaria as dinâmicas sociais e econômicas serrana durante esses dez anos. Ainda que sobre esse assunto pare no próximo capítulo com mais detalhes em que mostro as fases da violência e o controle territorial e das populações étnico-rurais por grupos organizados fora da lei, a seguir darei alguns pontos iniciais sobre a chegada desse fenômeno associado ao tráfico mundial de alucinógenos e que teve implicações no cotidiano do espaço agrário serrano desde então.

A possibilidade que brindou a localização da região Caribe de estar no mar aberto, afiançou a relação binária das práticas legais e ilegais em função da acumulação do capital. Para o tempo em que os campesinos e campesinas colonizaram as terras que desde sua perspectiva eram vistas como terras da União, mas que desde a lente indígena eram terras que tradicionalmente lhes pertenciam, se deu o estancamento da economia do café na década dos setenta com a expansão do cultivo e comercio de maconha Como conta Viloria,

el buen momento cafetero regional se [vio] frenado en la década de 1970, con la llegada de la marihuana a la Sierra Nevada como un cultivo comercial destinado a la exportación. Este fenómeno se extendió por las tres vertientes del Macizo montañoso, [...] la mayor parte de los cultivos se localizaron por debajo de los 1600 m.s.n.m., que servía también de cota superior al cinturón cafetero (VILORIA, 1997, p. 34).

Esta terceira fase se conheceu como a *bonanza marimbera*.⁴³ A força com a que o cultivo de maconha se disseminou na região deveu-se em parte ao declínio que a economia bananeira experimentou com a saída da *United Fruit Company* em 1966 da zona bananeira de Magdalena para muda-se para a região do Urabá, na fronteira com Panamá, no departamento de Antioquia. A crise bananeira da década dos sessenta com a saída da empresa estadunidense deixou a produção nas mãos dos empresários locais, concentrando-se em maior medida na exportação da fruta (BUCHELI, 2013). Com essa situação, as redes de circulação de capitais globais ficaram abertas a novos jeitos de ampliação da acumulação. O boom desse produto ocorreu principalmente nos departamentos da Guajira, Cesar e Magdalena, num momento de crise nas lavouras de algodão, banana e café.

⁴³ Marimba é uma das expressões locais para se referir a Maconha. Também tem; Marihuana, hierba.

Os primeiros “empresários”, como relata o professor Fábio Silva, foram integrantes dos corpos de paz que chegaram entre 1961 e 1981 à região Caribe, enviados pelo governo dos Estados Unidos através do conhecido programa anticomunista da “Aliança para o Progresso”. Numa das entrevistas a um dos campesinos, este assegura que nos primeiros anos “o negócio da maconha era praticamente administrado pelos gringos” (ENTREVISTA CAMPESINO 2. Tradução própria). Para esse momento, a trajetória do contrabando de café, uísque e cigarros na região Caribe serviu de infraestrutura para o intercâmbio entre os contrabandistas guajiros e compradores de maconha, uma rede de atores locais e internacionais.

Poucos anos depois o negócio passou às mãos das famílias sumárias e guajiras que atuavam como intermediárias entre os gringos e os campesinos que alugavam suas terras para cultivar a erva. Alguns estudos historiográficos recordam o surgimento de uma *cultura narco*, de tradição de várias famílias

que nasceram e se criaram nas vilas e aldeias da zona rural de La Guajira com poder económico, em armas e em homens [...] eram as famílias de marimberos da cidade que residiam em Santa Marta, Riohacha e Maicao, essas famílias se dedicavam ao contrabando de bebidas alcoólicas, eletrodomésticos, café e licor, eram donas de barquinhos⁴⁴ [...] num período em que se construiu uma cultura em torno do comércio ilegal de maconha em relação às formas de vestir, para agir (muitos deles legitimando a violência) e consumir. Por exemplo, os veículos eram um símbolo de poder, do Mercedes Benz ao Ford Ranger (SILVA, 2012, p. 23 – 60. Tradução própria).

Nesses anos, houve um terceiro ciclo de migrações de campesinos vindos do interior que chegaram ao sopé da SNSM para trabalhar na lavoura de maconha como plantadores, coletores, arrieiros, transportadores ou delegados. “Gente que não conhecia, que nunca tinha visto naquelas terras, eram do interior”, contam alguns dos campesinos que entrevistei. Entre 1974 e 1975 a chegada do cultivo ocorreu nos municípios serranos de Ciénaga, Aracataca e Fundación, assim como em outras regiões serranas, anos em que alguns estabeleceram relações comerciais com os marimberos através do aluguel de suas terras ocupadas, para a semeadura e colheita da pranta.

Em geral, os campesinos desses setores falam do deslocamento de cultivos comerciais e tradicionais, a ativação de novas correntes migratórias e o incremento da violência na região devido ao tráfico de estupefacientes e o interesse dos grupos armados no controle deste mercado (ENTREVISTA CAMPESINO 1). A exportação de maconha foi então outras das articulações

⁴⁴ Rafael Ebrat Cohen alias “pato”, José Alvarado Rivadeneira, Marcos Olarte Ortiz, José Molina Sevilla, Gabriel Rodríguez Cabas alias “capi black”, los hermanos William Salcedo y Fredy Salcedo, los Hermanos Euclides Duran alias “quille” y Carlos Duran alias “el gago”, Luis Pérez Quezada alias “lucho Barranquilla”, Rafael Aarón alias “maraca (SILVA, 2012).

territoriais de uma geografia desigual, ao mercado internacional, mas no contexto de economias de guerra. Conta Molano que

...marimba se cultivou onde era possível: na montanha, restolho, pastos, e tal vez cafezais [...] a maconha é um cultivo de uma só coleta (7-8 meses) [...] pelo o caráter ilegal do cultivo, as muitas e diferentes formas de contratação eram somente de palavra, o que proporcionou todos os abusos, roubos e assassinatos que aconteceram na chamada violência marimbera” (Molano, 1988: p. 49. Tradução própria).

Em consequência, as dinâmicas campesinas mudaram nas áreas de colonização: “abandono de cultivos de subsistência e de café, sequelas ecológicas da fumigação escassez, falta de mão-de-obra, proliferação de armas de todos os calibres, roubos, assassinatos e demais” (MOLANO, 1988; 62. Tradução própria). Naquela época, chegaram várias pessoas de outras regiões, também do interior em busca de fazer fortuna.

O papel dos colonos campesinos que haviam chegado durante a segunda fase do processo de colonização da SNSM era arrendar suas chácaras aos “empresários *marimberos*” ou administradores destes, para comercializar desde Ciénaga e Santa Marta maconha; eram famílias “dos melhores vínculos familiares e políticos”. (MOLANO, 1988. Tradução própria). Os administradores pagavam para desmatar, queimar e cultivar contratando a duas ou três pessoas. Relatam Molano e Viloría que enquanto que o salário de uma chácara cafeteira estava em \$300 pesos, os das chácaras *marimberas* era entre \$600 e \$1000 pesos Colombianos da época. “O quintal valia \$100.000 pesos e uma hectare pode produzir até 10 quintais (\$1.000.000)” (MOLANO, 1988: p. 49. Tradução própria).

Assim os campesinos passaram de transportar pelas trilhas serranas café ou alimentos, a alugar suas mulas “muito demandadas para subir dinheiro e alimentos ou baixar os produtos (até \$14,000)” (MOLANO, 1988: p. 49. Tradução própria). Nos nascentes povoados serranos do canto ocidental “se vendia em plena luz do dia e era usual pelas trilhas se-encontrar mulas carregadas com oito, dez sacos de bilhetes [...] a vida na serra se encareceu deixando cultivar comida” (MOLANO, 1988: p.50).

O anterior posicionou essa economia ilegal como uma das principais fontes de emprego na região, transformando, desde então, a dinâmica social dos colonos em torno do tráfico. Segundo Viloría e Silva, a queda da economia da produção de café,

...estuvo asociada directamente al incremento de salarios pagados por la económica marimbera, diferencia que en ocasiones llevo a ser diez veces mayor. Si el jornal establecido legalmente era de \$300 al día, un campesino vinculado a la economía de la marihuana podía ganar de \$3000 a \$4000 diarios [...] Para finales de la década de 1970 el quintal de marihuana se llegó a pagar hasta en \$110.000, mientras uno de café se vendía en \$47.000 y uno de frijol en \$20.000 (VILORIA, 1998, p. 35).

Los cultivos tradicionales fueron sustituidos por la siembra de marihuana, siendo el cultivo de café uno de los más afectados, debido a que muchas fincas cafeteras fueron taladas para sembrar la yerba, incluso algunos propietarios las abandonaron porque no encontraban personal para que hiciera la recolección del grano. El jornal de trabajo lo pagaba a trescientos pesos y los trabajadores de las fincas, preferían raspar marihuana que ordeñar y cuidar vacas o jornalear en la finca bananera. Muchos de estos trabajadores se dedicaron a talar, sembrar, recoger, transportar y custodiar marihuana, así las grandes fincas perdieron mucha producción de carne y leche e inclusive el contrabando de ganado hacia Venezuela disminuyó porque no se encontraban transportadores (SILVA, 2012, p. 16).

Por fim, a terceira fase da formação territorial da SNSM com a territorialização das economias ilegais teve uma forte aproximação e articulação dos colonos camponeses a estas formas de sobreviver (produção de espaço) que afetou em consequência a vocação agrária destes setores. O agrário entrou a competir em desigual medida com a expansão no território aos capitais globais ilegais que em pouco tempo passaram a ser controlados por algumas redes de famílias colonos, alguns empresários locais *Samários* e *Barranquilleros* –que conheciam e tinham a infraestrutura da economia bananeira- e redes traficantes estadunidenses (MOLANO, 1988; SILVA, 2011 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015).

Os “novos fazendeiros” que surgiram como uma “nova” classe agrária durante o tempo da bonança marimbera se estabeleceu através da força violenta e da compra de terras da parte baixa, com o controle da compra dos cultivos ilegais de maconha e logo de coca das unidades de minifúndios na Serra. O desenvolvimento do tráfico teve efeito nas estruturas social, de poder político e da propriedade rural no departamento do Magdalena (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015; SILVA, 2012; MEDINA, 2012). Uma proporção difícil de quantificar dos capitais acumulados pelo narcotráfico da maconha e cocaína, foi investida na compra de terras nas partes planas, em função da lógica do lavado de ativos e em parte, do controle das rotas do transporte e subministros para sua produção, distribuição e comercialização.

3.4 CONCLUSÃO

Nos municípios de Aracataca e Fundación, a política de entrega de terras da união ajudou à constituição de uma estrutura social e de domínio político ligada à posse das terras que se materializou primordialmente nas partes planas, encabeçada pelas famílias tradicionais que receberam por parte do Estado terras de importante extensão.

A condição e posição de classe dos proprietários, suas condições materiais de existência, mentalidade, e o grão de desenvolvimento das forças produtivas e disponibilidade de capitais, condicionaram o tipo de exploração econômica deu forma aos grandes latifúndios dedicados ao cultivo de banana para exportação e grandes fazendas para o gado extensivo. No

meio, ficaram os medianos proprietários e os camponeses sem-terra que se esforçaram por desenvolver atividades e modos de vida próprios da economia camponesa.

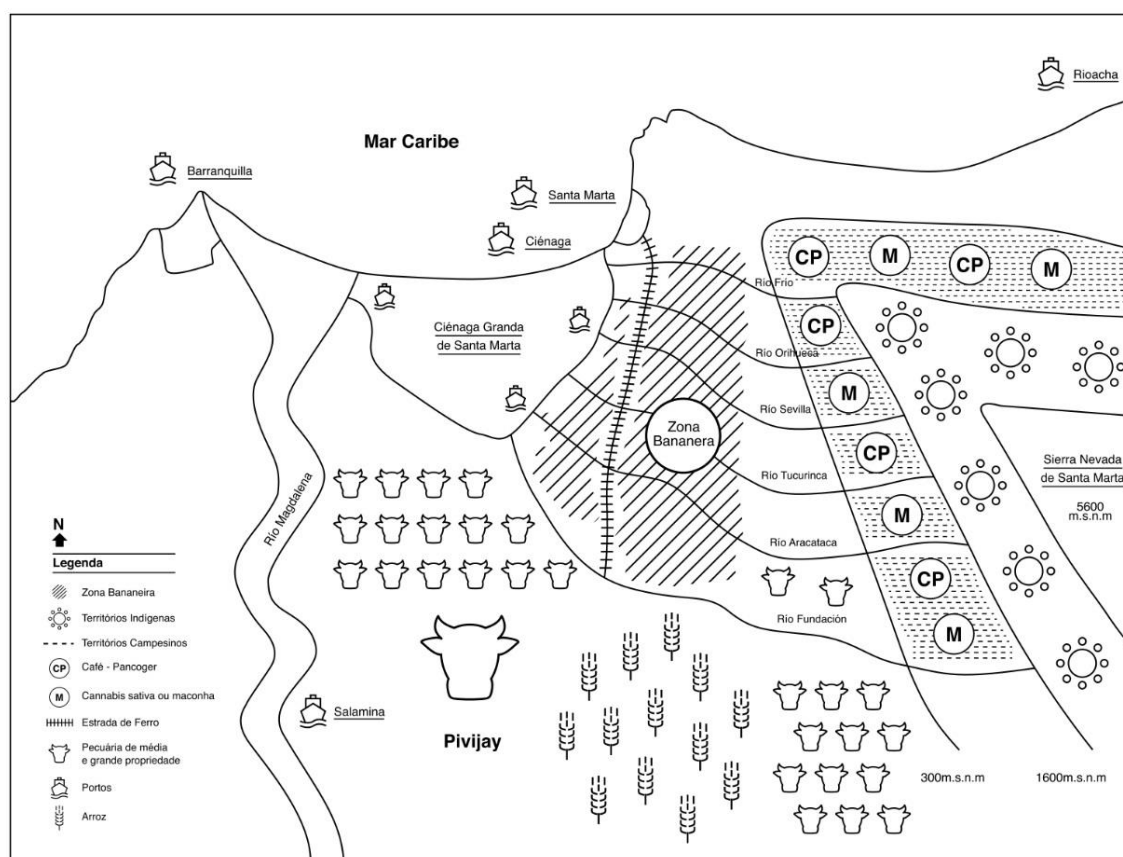
A intervenção do Estado nas diferentes fases da política agrária desde 1961 até 2011, mesmo que abriu uma oportunidade política para a ação coletiva das organizações camponesas que demandavam o acesso à terra nas planícies fluviais, teve uns resultados discretos na distribuição da terra beneficiando economicamente aos donos de grandes propriedades. Os poucos avanços das políticas agrárias se concentrariam majoritariamente sobre as áreas planas do departamento de Magdalena.

Por sua vez, na Serra Nevada de Santa Marta em terras de menor qualidade comparadas com as das planícies, mesmo que alguns dos latifundiários de essas áreas e empresários estrangeiros receberam terras por parte de Estado que se converteriam nas grandes fazendas de café; se estruturou um processo de colonização camponesa espontânea e desorganizada que sofreria uma mudança a meados do século XX.

Com a violência bipartidista que produz uma importante mobilidade no país, se daria início à formação socio territorial de camponeses do interior da Colômbia em áreas abertas à ampliação da fronteira agrária em territórios historicamente habitados por indígenas ou áreas de reivindicação territorial destas comunidades. Neste cenário, se configurariam os atuais conflitos interculturais entre camponeses e indígenas.

Em algumas zonas de montanha a condição e posição de classe dos proprietários possibilitou o tipo de exploração econômica, dando forma à grande fazenda de café. No entanto, dado a baixa qualidade das terras e as características do processo de colonização dos camponeses colonos, se privilegiou a mediana propriedade e majoritariamente os minifúndios de camponeses pobres, marginados e sem formalização e sem acesso às políticas agrárias em territórios de interação com outras comunidades étnicas do campo. Isto resultou na territorialização dos cultivos de maconha como caminho para afrontar economicamente dita marginalização.

Mapa 9 - Sub-região norte do departamento Magdalena, geografia econômica e formação sócio territorial da SNSM



Fonte: Construção própria a partir do Google Earth.

O mapa acima resume a configuração da formação do espaço econômico da sub-região norte do Magdalena e a formação sócio territorial da SNSM a partir da metade do século XX. Cabe destacar que mesmo que nas planícies da zona bananeira se estruturaram uma série de conflitos obreiro patronais e agrários em torno da luta pela terra entre latifundiários, e medianos e pequenos campesinos; o mapa abaixo retrata apenas a formação do espaço agrário da SNSM configurado pelas comunidades étnico-rurais das áreas da vertente ocidental estudadas nesta pesquisa.

4 RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL NO CONTEXTO DA GUERRA CONTRA INSURGENTE: MEDO E DOMINAÇÃO NOS TERRITÓRIOS SERRANOS

...la masacre se inscribe como una huella indeleble. Ésta se establece sobre todo en la memoria colectiva –no siempre narrada-, en la memoria de cada pueblo regional donde el pasado se actualiza una y otra vez para extirpar la voluntad de transformación o resistencia, para mantener la indignación silenciada, para garantizar el confinamiento en el mundo privado (FRANCO, 2009, p. 525).

O propósito do capítulo 4 está em enfatizar um dos atributos que mais prevalecem na história da formação das territorialidades da SNSM e da região do Caribe Colombiano: a violência. Desde a intensificação da migração e ocupação de meados do século XX, ela se forjou como mecanismo de poder e disputa entre atores armados legais e ilegais pelo controle do território e de suas populações, dada a importância geoestratégica de saída ao mar Caribe, as conexões com as zonas de fronteira com a Venezuela e sua excepcional geografia de montanha que serve de refúgio e esconderijo.

Uma das perguntas que me surgiram ao escrever esta dissertação foi se era ou não necessário escrever um capítulo particular sobre a violência. Ainda que no começo decidi fazer uma seção exclusiva para falar sobre a guerra na SNSM, não esperava que fosse a demorar tanto tempo para tentar resumir algo sobre o que eu achava já tinha claro. No final, terminei por fazer uma revisão exaustiva às causas e motivos da guerra na Serra para assim analisar seus efeitos na vida dos camponeses e indígenas. Isso me dará a base para analisar na segunda parte desta dissertação o paradoxal mercado de terras dos anos após a desmobilização dos grupos paramilitares. O capítulo divide-se em dois momentos ou ciclos:

i) O primeiro, a gênese da guerra como fator fundamental na produção do espaço agrário da Serra, em função de diferentes estratégias ideológicas e materiais, no contexto da formação das economias ilegais, os grupos de segurança privada e a aparição da insurgência como parte de sua estratégia territorial e política de expansão no Caribe Colombiano a começos dos anos oitenta.

ii) O segundo ciclo, a explicação do escalamento da violência no período de difusão e consolidação da guerra contra insurgente. O foco desta parte são as razões objetivas da guerra, as características da estrutura e da organização do poder contra insurgente, e as consequências e efeitos subjetivos e coletivos nas populações serranas, em particular as consequências nas comunidades camponeses deslocadas e despojadas forçadamente de suas terras. Baseio-me nas perspectivas que entendem que o despojo mais que um evento particular que ocorreu num

tempo específico passado, é o resultado de processos violentos de espoliação, exploração e exclusão que se acumulam no espaço e que entretencem múltiplas escalas espaciais e temporais (OJEDA, 2012) com multiplex e variados efeitos nas populações do campo que habitam localidades que são constituídas a partir da configuração do despojo e o deslocamento forçado.

No fim de contas, meu interesse principal nas seguintes linhas é mostrar o tipo de sujeitos e espaços resultantes da acumulação de anos de histórias de violência na SNSM que incidiram nas cotidianidades das populações étnico-rurais estudadas nesta dissertação.

4.1 DE COMO A VIOLÊNCIA SE ENGENDROU: COMBOS MARIMBEROS E GUERRILHAS NO CONTEXTO DE UMA ECONOMIA CAMPESSINA QUEBRADA (1982 – 1995)

4.1.1 Problema agrário, expansão dos cultivos de cannabis e violência

A violência mais recente⁴⁵ da SNSM e na região Caribe, iniciou-se com a aparição dos *combos marimberos* nos anos setentas. Os *combos*, como são conhecidos na região, representam as redes de famílias e compadres de colonos que arribaram na época do segundo ciclo de ocupação da Serra (1948 – 1975) e que se organizaram com o avanço dos cultivos de maconha para controlar os ganhos do tráfico. *Los Barbados, Los Zancudos, Los Brígidos, Los Barraganes*, entre muitos outros de nomes ribombantes e sonoros, inauguraram *combos* armados sobre a base do terror como meio para o controle dessa economia ilegal (SENTENCIA, 2015) numa região ligadas às redes históricas de contrabando do grande Caribe. Tanto nas partes planas como na Serra se formariam então divisões de labores rurais e urbanas relacionados com essa atividade ilegal.

Como Molano falou numa entrevista (2011), a indústria pesada e o modelo de importações que se vinha adotando na Colômbia desde os anos cinquenta tinha entrado em crise, aumentando assim nos anos setenta o desemprego urbano. Paralelamente, a reforma agrária havia fracassado em termos gerais em todo o país tendo suas implicações, como foi mostrado na seção 3.2, em municípios como Fundación e Aracataca e em geral no departamento

⁴⁵ Segundo o ILSA, a questão da terra na Colômbia tem estado presente de maneira medular na construção da república. Citando a Patiño (2002), o ILSA assegura que no país tem acontecido vinte e cinco (25) guerras nacionais e ao redor de sessenta (60) regionais, que se deram nos passados 193 anos e que geraram uma grande mobilidade populacional. Estas confrontações estiveram relacionadas com a conformação de esquemas de acumulação e desenvolvimento econômico diferentes, estreitamente relacionados com a concentração da terra. Nesse contexto de guerras civis em que se formou a república os processos de acumulação de terras por meios ilícitos, como a usurpação, foram comuns nas guerras civis, e se deram com a tolerância das autoridades quem “*mediante la gestión de rúbulas y leguleyos, han cohonestado el despojo, lo cual es una herencia colonial*” (Patiño, 2002)”. (ILSA, 2012, p. 7. Tradução própria).

do Magdalena e na região Caribe. A insípida reforma agrária que tinha começado timidamente nos anos sessenta acabaria definitivamente como o chamado *Pacto de Chicoral* em 1974 o que resultou nas ocupações de terras na Costa Atlântica e várias regiões do país se intensificaram notoriamente entre os anos sessenta e oitenta⁴⁶, processo que como mostrei, deu lugar à formação dos territórios campesinos serranos.

O colono ou ocupante é um sujeito deslocado. Tem um espírito libertário, assegura Molano (2011), que o impulsiona à aventura, a se adentrar e desmatar a selva virgem em procura de terras, sendo essa uma tarefa titânica. Os campesinos colonos tombavam a selva, o mato, e imediatamente queimavam para plantar milho em terras ainda pouco exploradas e muito boas para o cultivo. As primeiras coletas tinham bons resultados, sobressalentes, mas com o tempo a terra ia se secando com a prática de *tumba y queima* que consiste na deflorestação de um pedaço de terra onde se queima as árvores, arbustos e ervas com o objetivo de converti-lo num campo de cultivo em que as cinzas restantes se espalham e se utilizam como fertilizante. Ao longo do tempo essa prática teria consequências no rendimento da qualidade das terras.

Todo o capital que o colono precisava para trabalhar a terra na prática de *tumba y queima* como ferramentas que utilizava, sal, pólvora, gasolina, e diferentes mercancias, eram objetos que davam a crédito nos comércios dos povoados acumulando, portanto, uma dívida. Ao tempo que acumulava tal dívida, a terra ia produzindo menos. Em suma, esses dois elementos negativos se encontravam e o colono fracassava, instigando novamente, em alguns deles, a expansão da fronteira agrária em um ciclo que se repetia uma e outra vez, com consequências ambientais e territoriais em zonas que começaram a ser disputadas pelo acesso e uso da terra com as comunidades indígenas que tinham resistido e se deslocado a essas áreas afastadas durante o processo colonizador (MOLANO, 2011).

A fraca economia agrária na SNSM⁴⁷ produto de uma marginalização das políticas agrárias, num contexto regional de alta concentração da propriedade, motivou as famílias campesinas da

⁴⁶ Esse processo da colonização se concentrou no oriente, sobretudo no Piedemonte llanero, mas também no vale do rio Patia, no Magdalena Médio, em Urabá. Todas estas zonas que nos anos setenta experimentaram o crescimento da colonização (MOLANO, 2014).

⁴⁷ O café, ainda que posicionado como atividade econômica primordial dos colonos, não era tão bem pago como a *cannabis*, sem chegar a ter um desenvolvimento considerável em Aracataca e Fundación em comparação com povoados como Minca, La Tagua, El Campano (Santa Marta), El Mico, San Pedro de la Sierra (Ciénaga), Chimila, San Francisco, Pueblo Bello, Villa Germania y Manaure (Guajira), entre outros, que se posicionaram como importantes centros cafeeiros de la Sierra. Segundo o censo cafeeiro de 1970, o município de Ciénaga reportou 6559.5 hectares cultivadas e café do tipo *Pergamino Seco*, o que representou uma produção de 2.503.667 quilogramas do grão, posicionando-se junto com Santa Marta e Valledupar (Cesar) como os municípios dos 3 departamentos de maior produção durante esse ano, cifra que se mantém relativamente estável até o início de 1980. Em contraste, Aracataca e Fundación só reportam 347 hectares e 458 hectares plantados com café respectivamente, que representou uma produção apenas de 93.886 e 114.633 quilogramas (VILORIA, 1997).

Serra a se jogar à bonança da *cannabis*. Em geral, a linha de fronteira agrária ia aumentando em decorrência da crise da economia campestre de colonização. A ampliação da fronteira agrária e o encontro entre ocupantes e indígenas era a expressão da quebra da economia campestre (MOLANO, 2011). Como era de se esperar, as economias ilegais calharam fortemente nessas zonas de colonização ou ocupação, sendo a economia que impediu a quebra total das famílias campestres de colonos, tanto nas zonas aqui estudadas do Caribe Colombiano, como em zonas de colonização e ocupação de outras sub-regiões de Colômbia (FAJARDO, 2002).

Enquanto uns se organizaram para controlar e disputar o negócio com armas aproveitando às redes antiquíssimas herdadas do contrabando em Santa Marta e a Guajira (MOLANO, 1988; GONZÁLEZ, 2008)⁴⁸; a maioria de colonos entraram nessas atividades cultivando, alugando suas posses de terra, entregando sua mão de obra, e o transporte em mulas, entre muitas outras facetas (SILVA, 2012; TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015). Conforme alguns campestres e campestres me contaram e é resenhado por alguns autores, em Fundación e Aracataca, o ativo comércio de maconha, que deixava lucros suculentos, motivou aos campestres e campestres das áreas de montanha ao plantio, estimulados pelo apoio no financiamento dos cultivos por parte dos compradores não interessados na aquisição de terras, mas sim no produto, o que não afetou ou modificou a posse da terra dos minifúndios campestres (MOLANO, 1988; ENTREVISTA CAMPESTRE 2).

Assim, a *bonança marimbera* beneficiaria um setor da população campestre; no entanto, outros setores das classes populares, seriam vítimas do incremento do custo de vida pelo encarecimento dos artigos de primeira necessidade (MOLANO, 1988).

Por sua vez, alguns poucos indígenas koguis e arhuacos da parte alta da cara norte ingressaram com suas terras à nova economia ilegal da *cannabis* sendo roubados ou assassinados (MOLANO, 1988). No entanto, esta atividade econômica penetrou essencialmente nas populações campestres, impedindo para a maioria delas a quebra total de sua precária economia campestre, e para outros poucos, a possibilidade de se posicionar dentro

⁴⁸ Para uma história do contrabando no Caribe Colombiano a partir da experiência do departamento da Guajira que involucra a sub-região da Serra Nevada de Santa Marta, ver o livro de Santiago González (2008) “*Pasado y presente del contrabando en La Guajira aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región*”. Em ele estuda os diferentes períodos dessa dinâmica ilegal articulada à formação socioterritorial da região Caribe. Para ele, a história antiga do contrabando começa em 1500 e vai até 1886. O segundo período denominado “*Desde la república hasta el presente*”, o autor estuda o contrabando em La Guajira entre 1886 a 1940, e 1940 a 1980. Este último período coincidiu com a aparição da maconha, seu auge na década dos setenta e a potencialização do contrabando. Finalmente, o autor analisa em seu livro a ilegalidade e o contrabando em La Guajira entre 2000 – 2007 no marco do escalamento e difusão dos paramilitares na região (GONZÁLEZ, 2008).

do negócio do tráfico através da violência como meio para o controle dos territórios serranos. Em parte, umas das chaves sobre o conflito intercultural entre campesinos e indígenas estabeleceu-se nesses anos, dado o amplo desmatamento e o deslocamento forçado aos segundos pela pressão sobre a terra para o cultivo de maconha. Apesar de que as comunidades indígenas pouco se envolveram com os cultivos e a comercialização de maconha, o tráfico desta se realizou em trilhas e caminhos rurais que estas comunidades transitavam pois conectavam com muitos dos povoados indígenas nas diferentes vertentes da Serra.

Por uma parte, a maconha de Fundación era comercializada pelo povoado de Chimila ou por pequenas trilhas com destino a Santa Rosa. Em Pueblo Bello, circulou muita maconha cultivada em sítios afastados sete e oito horas do povoado. Nas zonas de Nuevo Colón, Montecristo, Costa Rica e Santa Tírsa existiram grandes cultivos comumente propriedade de campesinos colonos do interior do país que dominaram a comercialização (MOLANO, 1988). Por outra parte, em Aracataca as rotas da comercialização de maconha aproveitaram as rotas que emergiram para o tráfico de objetos saqueados por *guaqueros*⁴⁹ nas veredas estudadas, que geraram um monopólio e controle territorial, e que depois mudariam ao negócio de tráfico ilícito tanto de maconha como da economia cocaleira na região (FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA, 2009).

Figura 8 - Imagem da imprensa nacional sobre a "a maconha costeña"



Fonte: Blog spot, *La marihuana solo trajo tragédia al Magdalena*. Ver: <http://fundacionmagdalena.blogspot.com/2015/11/la-marihuana-solo-trajo-tragedia-al.html>

⁴⁹ A *guaqueria* feita por *guaqueros* é um tipo de atividade econômica ilegal de tráfico e comércio de artefatos arqueológicos de comunidades indígenas que foi comum na Serra Nevada de Santa Marta em diferentes períodos da formação da república.

Como consequência, ao tempo em que se expandiram os plantios da produção de maconha, a violência se espalhou como mecanismo de solução das vendetas entre os *combos* e como dispositivo de controle social dos territórios campestres e indígenas (SILVA, 2012; TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015). Na vertente ocidental e no Sul oriente, por exemplo, vários são os relatos das vendetas entre as redes de famílias constituídas como grupos de justiça privada, violência que recaiu sobre as comunidades como mecanismo de imposição no território para o controle do negócio em localidades como La Reserva, San Pedro de la Sierra, Palmor, Fundación, Aracataca, Pueblo Bello, Sabana de Crespo e Atanquez (MOLANO, 1988).

O caráter ilegal do cultivo e as diferentes e abundantes formas de contratação informais, propiciaram todos os atropelos, roubos e assassinatos das populações mais vulneráveis. Se tornaram mais comum as guerras entre as famílias envolvidas no tráfico, virando inimigas a morte, num cenário em que se desatou a emergência da proliferação geral da violência na região onde parte das autoridades oficiais participavam aliadas com um ou outro grupo armado (MOLANO, 1988). Os começos da territorialização da violência na Serra só em Palmor, por exemplo, evidencia um dado que retrata a realidade dessas localidades em meados dos anos oitenta: 6 das 134 pessoas enterradas no cemitério do povoado faleceram por morte natural, os demais (128) foram vítimas de um dos “combos armados” que então controlavam essas veredas das partes altas (MOLANO, 1988).

Figura 9 - Imagen de impresa “Inseguridad en la Costa, La guerra de la marimba”



Fonte: Blog spot, *La marihuana solo trajo tragédia al Magdalena*. Ver: <http://fundacionmagdalena.blogspot.com/2015/11/la-marihuana-solo-trajo-tragedia-al.html>

Respeito aos indígenas arhuacos que habitam os povoados das partes altas das bacias hidrográficas de Fundación e Aracataca, se conhecem mais os conflitos com os colonos dado o avanço da colonização e o desmatamento da natureza, mas não se identificam relatos de uma

violência seletiva contra o indígena a cargo de assassinos comprometidos com o cultivo de maconha pelas disputas de terras, como aconteceu no noroeste da Serra contra os indígenas wiwas (arsarios). Essa agressão chegou a gerar o assassinato massivo de 25 indígenas Wiwas ante sua negativa de entregar terras para o cultivo aos patrões da guerra: “*se les robô, golpeó, violó e mato sin compasión [...] lo que motivó su huida hacia zonas más alta de la Sierra*”. (MOLANO, 1988, p. 155 - 156).

A disputa entre os combos marimberos na que emergiu a territorialização da violência e que involucrou as cotidianidades das comunidades étnico-rurais dos diferentes setores da SNSM, se consolidaria com a caída dos cultivos de maconha e a mudança aos cultivos de coca que desde meados da década dos anos oitenta influiriam nas dinâmicas agrárias destes setores.

4.1.2 Guerrilhas e narco-mercenários na configuração socioespacial da Serra: cotidianidades das populações do campo

Os primeiros vinte anos do período da territorialização da violência recente no Caribe Colombiano começou a meados dos anos setenta e se estendeu até a metade dos noventa na disputa violenta pelo controle territorial da Serra por parte de atores armados de diferente índole. Ainda com uma baixa intensidade em comparação com a dinâmica da guerra contra insurgente de meados dos anos noventa, é desde esse período em que a guerra e a violência se entrelaçaram na formação cotidiana destas territorialidades das populações étnico-rurais da SNSM.

É durante esses anos (1975 – 1995) que se configurou a disputa geoestratégica da SNSM e arredores através da violência que se instalou como um dos traços fundamentais na compreensão da formação socio territorial das áreas estudadas nesta pesquisa, que afetou as populações étnico-rurais com efeitos na estrutura social, cultural, econômicas, e de poder político mesmo com matizes, lógicas próprias e efeitos diferenciados em cada localidade montanhosa. Em suma, acredito que não é possível falar da Serra sem compreender primeiro como a violência se estabeleceu no processo da formação territorial serrana, propósito que tentarei responder nas seguintes linhas.

Iniciada a década dos anos oitenta, as guerrilhas colombianas buscaram se expandir territorialmente do sul do país a outras zonas do centro e o norte da Colômbia. Naqueles anos, era o trânsito dos cultivos de maconha aos de coca num momento em que as populações lembram fumigações aéreas feitas pela Polícia Nacional para combater os cultivos de *cannabis*, com sequelas evidentes ecológicas e de saúde das populações, com a extinção de algumas

espécies de peixes, aves, gado intoxicado, frutais, cultivos de economia campesinos, problemas respiratórios, entre outros (MOLANO, 1988).

Figura 10 - Imagem de jornal da cidade de Barranquilla sobre ações militares contra a cannabis na SNSM



Fonte: EL Herald 1979, tomado de: <http://brayermi.blogspot.com/>

Em 1982 foram celebradas as conferências guerrilheiras que deram passo à criação em várias localidades da região Caribe de frentes subversivos das Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Povo (FARC - EP) e do Ejército de Liberación Nacional (ELN) (MEDINA, 2011). A estratégia militar e territorial consistiu em articular de oeste ao leste a região norte do país. Vários quadros guerrilheiros se espalharam desde os Montes de Maria no departamento de Bolívar e Sucre, áreas do Atlântico e as planícies do departamento de Magdalena, para conectar com a Serra Nevada de Santa Marta que a sua vez, dava a possibilidade de controlar a fronteira com a Venezuela nos departamentos de Cesar e Guajira, zonas estratégicas para a entrada e saída de armas no contexto de economias ilegais historicamente constituídas (GONZÁLEZ, 2008).

Para o caso das FARC –EP, a estratégia pactuada na VII Conferência, realizada na região de Guayabero no sul do país, foi expandir suas frentes por toda a Colômbia. Segundo o professor Medina Gallego,

Después de la séptima conferencia, el frente 4 gesta los frentes 24 y 19, y este último da nacimiento al 41. Desde el frente 5 que actuaba en el noroccidente del país se gesta el frente 18 que opera por Córdoba, este a su vez gesta el frente 35 y el frente 37 que actuarían posteriormente en Sucre y Bolívar, sobre todo en los Montes de María. Cabe aclarar que hasta el momento las FARC no se habían constituido en Bloques, esto se produce después de la octava conferencia en 1993. Al igual que el frente 19, el frente 35, 37 y 41 terminando los ochenta están en un proceso de conocimiento del área que empieza a copar (MEDINA, 2011, p 276 - 277).

A expansão no Caribe Colombiano dos grupos insurgentes buscava a incidência política e militar em dois assuntos principais: por uma parte, acompanhar os processos de ocupações de terras concentradas maioritariamente nas partes planas, como parte da entrega do latifúndio aos camponeses trabalhadores da terra; e por outra, interferir no conflito trabalhista na zona bananeira dinamizado em maior medida nos anos noventa, dado o crescimento de investimentos de capital nacional (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015). Para tais fins, a SNSM se converteu num lugar geoestratégico tanto desde o ponto de vista militar-territorial pois servia de retaguarda, como desde o ponto de vista político, com a criação de processos de base nas comunidades indígenas e camponesas.

É assim como entre 1982 e 1986, pequenos grupos de guerrilheiros adentraram-se nas montanhas para consolidar redes de apoio nas partes meias e altas da Serra que simultaneamente conectavam com células nas cidades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar e Riohacha, e alguns povoados das planícies. A estratégia traçada nas conferências guerrilheiras de começos dos anos oitenta buscava repetir as experiências de formação política da população como legitimação de base que tiveram durante a avançada de ocupação no sul do país nas décadas de sessenta e setenta (MOLANO, 2016)⁵⁰.

Entraram pelo sul da SNSM em localidades do departamento de Cesar como Pueblo Nuevo e Pueblo Colón (SILVA, 2012), desdobrando-se em várias direções, tanto nas áreas de colonização camponesa como nos setores mais elevados onde os povos indígenas se estabeleceram dada a pressão do processo de colonização de anos atrás. Assim, as guerrilhas começaram a chegar às áreas nas que anos atrás emergiram os *combos marimberos* constituído por redes de colonos para o controle territorial do tráfico de maconha e posteriormente de

⁵⁰ Sobre a história do processo de colonização e ocupação com o nascimento e auge da guerrilha das FARC no sul do país durante os anos sessenta nos departamentos de Huila, Caquetá, Guaviare, e outros, ver: Molano, Alfredo. “A Lomo de Mula. Viajes al corazón de las Farc”. Aguilar. Bogotá (2016).

cocaína. Isto inaugurou a disputa violenta entre atores armados com perspectivas ideológicas diferentes pelo controle tanto do território como das populações subalternas (campesinos, indígenas, opositores políticos, sindicalistas, entre outros), como um dos traços que constitui até agora o processo de produção e formação territorial serrana.

El Frente 19 José Prudêncio Padilla das FARC – EP - nome com o qual foi batizado o primeiro grupo guerrilheiro que entrou na SNSM - se propus, depois de sua primeira assembleia em 1983, recorrer várias veredas do sudeste, o norte e o oeste da Serra. Através delas, as pequenas companhias guerrilheiras se deslocaram, estabelecendo quadros ou grupos para a formação política em veredas como Pueblo Bello, Nuevo Colón, Tucurín, Ciénaga, Guachaca, La Tagua, San Pedro de la Sierra, Nueva Granada, Palmichal, El Páramo, San Javier y Palmor (MEDINA, 2011), algumas destas localidades pesquisadas nesta dissertação.

Os pequenos grupos se inseriram como militantes do Partido Comunista Colombiano (PCC). Contavam com o apoio de alguns campesinos conhecidos como membros do partido que ajudaram na criação de acampamentos em La Tagua (Santa Marta) e em La Reserva (Ciénaga) (GRANDA e SANTRICH, 2008), de onde “sairiam pequenos grupos guerrilheiros a explorar a Serra para consolidar corredores estratégicos de retaguarda e trânsito de armas” (SILVA, 2012, p. 373).

O propósito era afetar as dinâmicas agroindustriais da grande propriedade das terras planas através de sequestros de latifundiários e políticos regionais; além de articular com outras sub-regiões do Caribe Colombiano. Em Fundación, esse grupo insurgente instalou um acampamento na vereda Sacramento, sendo uma das primeiras ações o sequestro de dois fazendeiros e políticos da zona plana de distinguido sobrenomes da região (ENTREVISTA CAMPESINA 3).

No que concerne ao *Ejército de Liberación Nacional* (ELN), ainda que com menos incidência na Serra do que *El Frente 19* das FARC - EP, criou entre 1986 e 1987 a Frente Seis de Diciembre, posicionando-se em maior medida no sul da Serra em setores do departamento de Cesar, fazendo ações contra a infraestrutura de empresários e latifundiários dos municípios El Copey, Bosconia e Valledupar (OBSERVATÓRIO, 2005).

Contam os campesinos que depois de um tempo as duas guerrilhas acordaram estabelecer o rio Ariguani na vertente ocidental como fronteira natural entre seus territórios de controle. Do rio em direção sul ao César, corresponderia ao ELN; enquanto que o território do rio em direção norte até Ciénaga - compreendendo as veredas aqui estudadas - correspondia às FARC-EP (ENTREVISTA CAMPESINA 3).

Comandado por William Manjarrés Reales (EL TIEMPO, 1992)⁵¹, conhecido como Adán Izquierdo, a Frente 19 das FARC-EP fez sua aparição em reuniões e ataques armados. O interesse particular na Serra era agir, por uma parte, no apoio ao partido da Unión Patriótica (UP) que nasceu graças aos acordos de paz da Uribe no departamento do Meta, levado a cabo durante a presidência de Belisario Bentancur (1982-1986) (FUNDACIÓN PAZ & RECONCILIACIÓN, 2019). Seria um período em que nas veredas altas de Fundación, como em outros lugares da Serra, se misturaram por uma parte, as doutrinas marxistas com o proselitismo da igreja evangélica muito generalizada na região.⁵² E por outra, a declaração da guerra aos grupos de segurança privada do tráfico de maconha, ou *combos marimberos*, advertindo os excessos dos massacres e as perseguições sobre os povoadores da região (MOLANO, 1988; SILVA, 2012; ENTREVISTA CAMPESINO 1).

Um campesino das veredas estudadas do rio Aracataca relatou que os guerrilheiros percorriam chácara por chácara apresentando-se aos campesinos sem exigir nada e promovendo que todos trabalhassem e tivessem o que necessitava, procurando relações de simpatia (ENTREVISTA CAMPESINA 3). Outro deles, filho de um colono que ocupou uma terra nas veredas de Fundación relatou também que a UP chegava a realizar atos políticos e sensibilização eleitoral nas chácaras e veredas de Santa Clara, El Cincuenta, Chichinkua, Galáxia, Las Mercedes e Ariguani. A princípio, matavam vacas para dar comida a todo mundo, conta o morador dessas áreas serranas (ENTREVISTA CAMPESINO 8). De fato, isto respondia à fala de um dos insurgentes sobre a labor em reconhecer o terreno e contatar “*a personal de las áreas colonizadas por campesinos y los territorios habitados por los pueblos indígenas, para ir asegurando la retaguardia de nuestro asentamiento*” (GRANDA e SANTRICH, 2008). Deste modo, a população étnico-rural se posicionou como um dos atores de disputa nos interesses estratégicos dos atores armados.

Na prática, a guerrilha chegou numa região que os favorecia para ganhar a simpatia dos colonos campesinos e indígenas que atravessavam as estafas e os atos de violência que exerciam sobre eles os compradores de maconha, num contexto de precárias realidades agrárias. Um guerrilheiro oriundo da região dos *Llanos Orientales* no sul do país, se referiu ao contexto de crescente violência exercida pelos *combos de marimberos* como parte da configuração

⁵¹ Alias Adán Izquierdo, oriundo de Curumaní Cesar habría sido el comandante del Frente 19 de las FARC e, em 1992 foi enviado como comandante do Frente 21 no Tolima. Ali dirigiu ações militares como ataques à infraestrutura e ocupações de populações. era membro do Secretariado de las FARC en el Magdalena. El Tiempo. “*Fiscalía emplaza a jefes de las FARC*”. 6 de diciembre de 1993; El Tiempo. “*Se busca a Adán Izquierdo*” 11 de noviembre de 1992.

⁵² Sobre o fenômeno das igrejas evangélicas dos campesinos colonos da Serra, véase MOLANO, 1988.

territorial da Serra em função do tráfico. Para ele, era comum escutar rajadas de fuzil AR-15 ou encontrar nos caminhos cadáveres ainda quentes de arrieiros, amieiro ou cultivadores que eram assassinados por outras peças do negócio, que preferiam matar para evitar o pagamento de uma dívida (GRANDA e SANTRICH, 2008).

Enquanto a insurgência se espalhava em alguns setores da Serra procurando a simpatia e legitimidade na população étnico-rural, a violência entre os *combos* mudou-se e redefiniu-se em certa medida com o controle do tráfico majoritariamente em duas famílias de colonos do interior. Dois de seus membros - Hernán Giraldo Serna e Adán Rojas Ospino, o primeiro de Pacorá (Caldas) e o outro do departamento do Tolima - começaram como trabalhadores das fazendas de café, mas terminaram como reconhecidos patrões do narcotráfico com o controle de territórios tanto das planícies como da montanha. Os dois terminariam como chefes das estruturas criminosas hegemônicas que controlaram territorialmente o tráfico de *cannabis* e cocaína, acumulando um capital social e econômico que resultou na adesão de pequenos grupos *de combos* aos seus domínios (SILVA, 2012).

Para aquele momento, os reconhecidos patriarcas da máfia criaram grupos de mercenários com cobranças de extorsões em troca de serviços de segurança e “limpeza social” frente à presença de criminosos comuns, com apoios do Exército Nacional de armas e uniformes camuflados, e coalizões com comandantes, e de alguns latifundiários da zona bananeira e políticos de Santa Marta (MOLANO, 1988; SENTENCIA, 2015; SILVA, 2012). Estas primeiras e incipientes redes precederiam o que na seguinte seção denomino como o bloco de poder contra insurgente, que se desenvolveriam com maior intensidade desde meados dos anos noventa com a difusão e o escalamento dos grupos paramilitares tanto locais como extrarregionais.

Sem dúvida, uma das iniciativas que logo se atribuíram estas forças de mercenários ao serviço do tráfico foi combater as FARC-EP, a Unión Patriótica (UP) e o ELN. Para eles, as insurgências e suas bases políticas significavam um risco, tanto nos interesses do tráfico ilegal em territórios ideais para tal fim pois essas forças combatiam e perseguiam militarmente as redes de tráfico; como os interesses de acumulação da propriedade e do domínio político das elites regionais e do capital internacional.

A “limpeza” da zona dos redutos da violência *marimbera* por parte da insurgência significou o assassinato de membros dos grupos a serviço do tráfico e o estabelecimento de novas regras sobre os cultivos de maconha. Conta um campesino que “*llegaron a erradicar a*

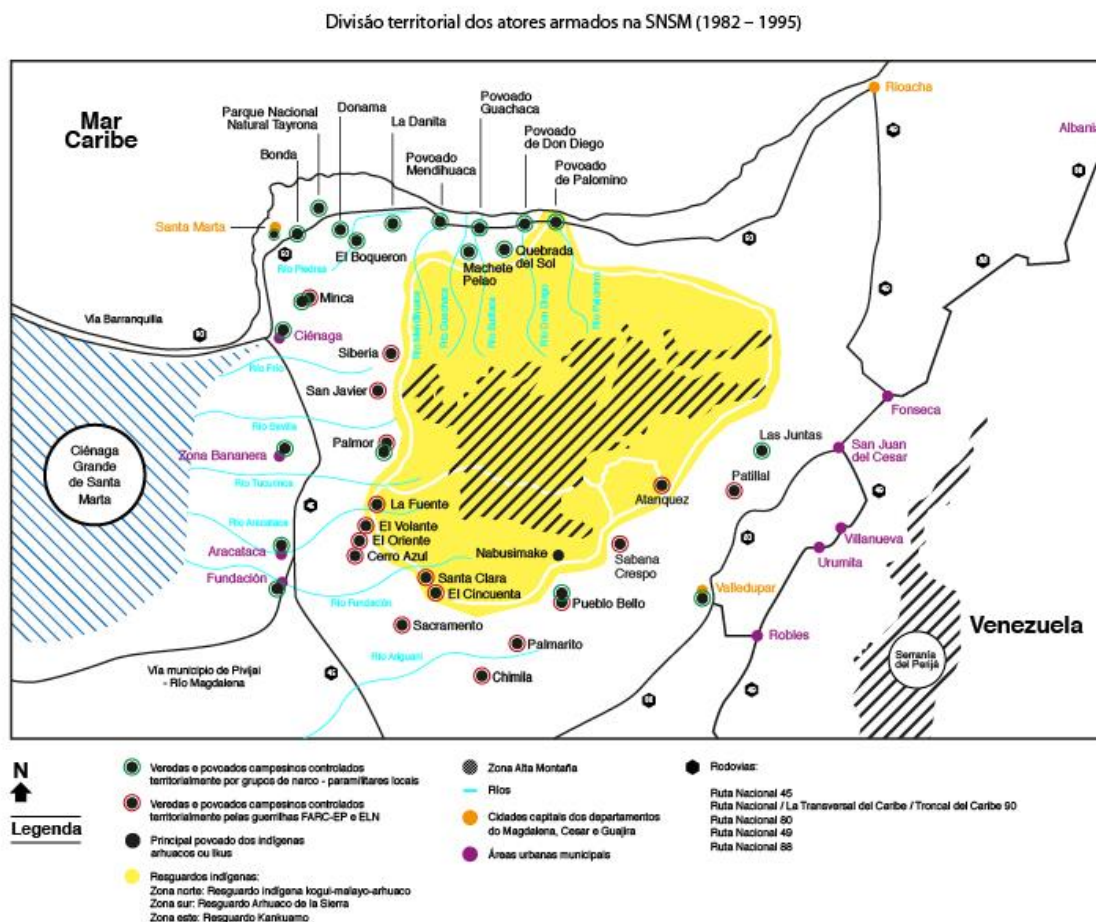
*los combos marimberos [...] nos decían que debíamos retornar a los cultivos de pancoger*⁵³ *porque la gente estaba cultivando mucha marihuana*” (ENTREVISTA CAMPESINO 8). Nesse sentido, na opinião de alguns campesinos e campesinas entrevistadas por Molano (1988), a presença da Frente 19 na Serra acabou com os homicídios, com os roubos e o *cuatreroismo*⁵⁴ (MOLANO, 1988), além de estabelecer um controle social com normas e regras impostas pelos comandantes guerrilheiros.

Como se mostra no seguinte mapa, a configuração territorial desde a perspectiva dos atores armados na Serra durante esse período (1982 – 1995) se organizou da seguinte maneira: na vertente norte, desde a cidade de Santa Marta, ao longo da estrada nacional até o povoado de Palomino, as redes de grupos armados comandados pelos patrões do tráfico que monopolizaram o negócio e que seriam o início de grupos de autodefesas locais. Na cara ocidental e oriental da Serra - sobre as quais se enfoca esta dissertação - as guerrilhas das FARC-EP e ELN, sendo a primeira a que se posicionaria nas veredas e caminhos das partes montanhosas de Fundación e Aracataca. Como se observa, em alguns povoados como Minca, Palmor ou Pueblo Bello, se apresentaram ao longo deste período disputas entre os atores armados pelo controle territorial destes povoados. Nas partes planas, aos arredores das terras mais produtivas e das vias nacionais, foram os grupos de corte paramilitar associados as economias ilegais os que tomariam o controle territorial.

⁵³ *Pancoger* se refere aos cultivos dedicados à alimentação das famílias campesinas.

⁵⁴ Expressão relacionada com o roubo de gado.

Mapa 10 - Divisão territorial dos atores armados na SNSM (1982 – 1995)



Fonte: elaboração do autor com base no livro “Contribución a una historia oral de la colonización de la SNSM”, Diagnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Fundación Pro Sierra Nevada. (MOLANO, 1988) e documento da Dirección De Acuerdos de La Verdad -DAV, Regional Magdalena. Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH. “Bloque Resistencia Tayrona (BRT)”. Sem ano⁵⁵.

Nas veredas estudadas nesta dissertação como *La Fuente*, *El Oriente*, *Cerro Azul*, *Santa Clara* e *El Cincuenta*, a estratégia da Frente 19 nessas zonas consistiu em capitalizar os abusos exercidos pelos grupos de justiça privada através de estabelecer relações com a população rural e fazer da cara ocidental da Serra zonas de retaguarda para reter os sequestrados, que em sua maioria eram latifundiários, empresários e políticos regionais. Conta Molano que

Entre tanto la guerrilla ha hecho su aparición en la región terminado con el pillaje y el cuatrismo que venía asolando a colonos, indígenas e grandes propietarios. Los cadáveres de reconocidos bandidos han sido encontrados en las partes altas [...] La guerrilla también ha prohibido los negocios leoninos y

⁵⁵ As informações do mapa se baseiam principalmente nos dados qualitativos das localidades dos departamentos de Magdalena e departamento do Cesar. Respeito às localidades serranas do departamento da Guajira, são poucos os dados encontrados nas fontes documentais utilizadas nesta dissertação.

la venta de chirinche que tenía duramente afectada a la población indígena. Tanto la presencia de los colonos organizados, como de la guerrilla, ha sido reconocido por los Arhuacos como una garantía de orden y seguridad en la región, que disminuyó los actos delictivos y las agresiones a los indígenas. Además, consideran que, con la presencia de las organizaciones de colonos, la tierra de esa parte del resguardo va a ser recupera. (MOLANO, 1988, p. 109)

Apesar de que no começo a guerrilha buscou ganhar a confiança dos campesinos, em pouco tempo as relações com a população se desgastaram. Alguns relatos manifestam que a guerrilha obrigava as comunidades a trabalhar para ela, ameaçando-os em caso de não colaborarem, declarados inimigos da insurgência, o que determinaria seu deslocamento forçado (ENTREVISTA CAMPESINA 7; ENTREVISTA CAMPESINO 8). Na mesma lógica, era obrigatório para as populações a participação nas mobilizações como a Grande Marcha Campesina dos povoados da cara ocidental da Serra de finais dos anos oitenta, que chegaria a Santa Marta pressionada pela Frente 19 (ENTREVISTA CAMPESINA 3; MOLANO, 1988).

Sobre essa questão, assomou outros dos atributos das formações territoriais campesinos de manter certa familiaridade desde a perspectiva do Exército, a Polícia e os grupos surgidos a partir das redes do tráfico de drogas, como colaboradores ou auxiliares da guerrilha, com impactos sobre sua segurança e permanência no território. Por exemplo, em Chimila, povoado próximo às partes altas de Fundación, Molano (1988) documentou a militarização e os grafites em várias paredes do centro que refletem a nascente estigmatização da população serrana: “*los profesores fulano y zutano son comunistas de las FARC*” (MOLANO, 1988, p. 87). Nesse contexto, um campesino vizinho das veredas de Sacramento, El Cincuenta e Galáxia, contou que membros do Exército Nacional acusavam as pessoas da Junta de Acción Comunal (JAC) de serem parte da guerrilha pelo fato de morarem nesses setores controlados pela insurgência (ENTREVISTA CAMPESINA 3).

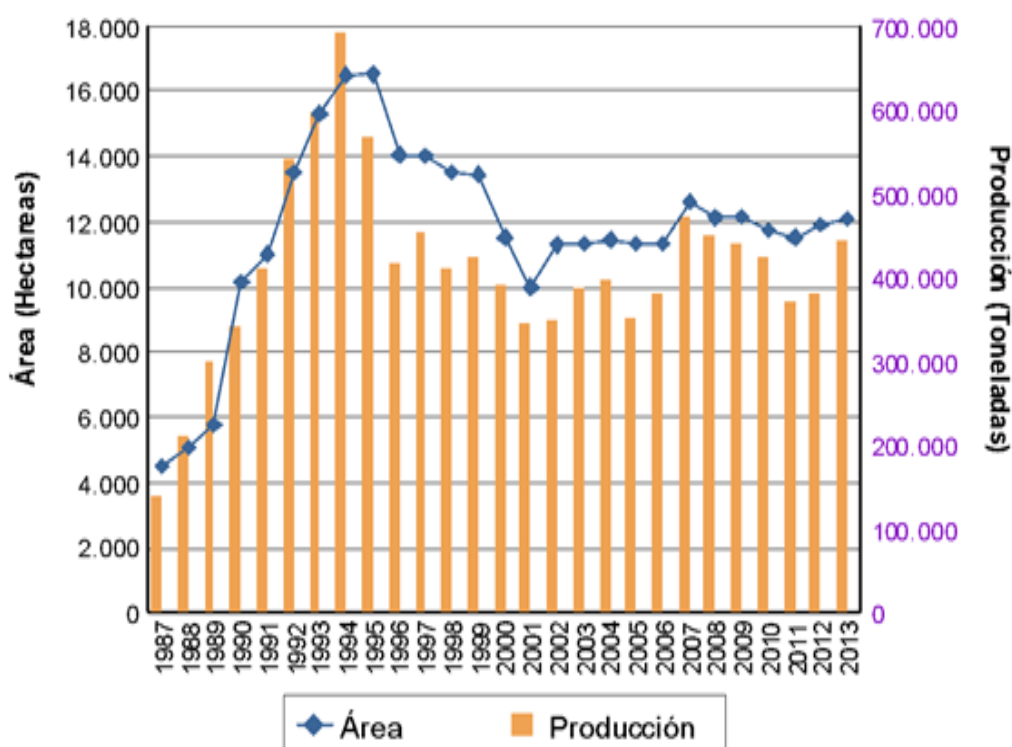
No entanto, as formas de exercer pressão sobre as comunidades foram escalando e viraram intoleráveis quando as FARC-EP passaram de convidar as populações para comporem seu projeto político de maneira voluntária, a recrutar jovens campesinos e indígenas. Uma campesina relatou que um dia a guerrilha chegou a sua terra ordenando que aquelas famílias que tinham quatro filhos tinham que entregar dois deles ao grupo armado, fossem homens ou mulher, o que motivou deslocamentos forçados precoces nessas zonas (ENTREVISTA CAMPESINA 7). Na vereda Rio Piedra de Aracataca, por exemplo, um campesino afirmou que a guerrilha não permitia que falasse com outras pessoas quando desciam a zona urbana na parte plana: “*Nos tenían vigilados*” (ENTREVISTA CAMPESINA 7) – conta uma delas – “*era muy difícil poder bajar al Pueblo a buscar comida*” (ENTREVISTA CAMPESINO 8), pois quando

retornavam à Serra onde estavam suas poses de terras lhes interrogavam para saber com quem estavam falando e sobre quais temas.

Finalmente, neste primeiro ciclo do contexto de territorialização da violência na Serra, o Exército Nacional apareceu com força nas áreas estudadas no primeiro quinquênio dos anos noventa. Para então, começou a se constituir a intervenção dos Estados Unidos na política de Segurança Nacional ao tempo que se dava a abertura neoliberal dos mercados com novos investimentos tanto no militar como no agrícola de exportação. Paradoxalmente a abertura que deu a constituição de 1991 frente à participação política e frente ao desenvolvimento de um sistema de direitos tanto étnicos como sociais, contrastou o escalamento da exacerbação da violência. Isto, sobre a base da perseguição contra insurgente e do estabelecimento de uma ordem hegemônica do poder político e econômico tanto local como nacional. Quanto a guerrilha, seu objetivo era afetar os empresários bananeiros, setor que estava reativando-se com a chegada de capitais nacionais de empresários de Medellín e Urabá, com investimentos em extensas compras de terras como recurso de capital, em tecnologia e infraestrutura nas partes planas (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015), como se evidencia no gráfico abaixo.

Gráfico 4 Produção de banana de exportação no departamento de Magdalena, 1986 – 2013.

Área colhida e produção



Fuente: Agronet, con base en las Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4.2 QUESTÃO AGRÁRIA E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS NO MARCO DA EMERGÊNCIA DOS CONFLITOS INTERCULTURAIS NA SNSM

Para não perder de vista a discussão central desta dissertação, antes de explicar questões relacionadas com os interesses objetivos do ciclo de escalamento e difusão da violência de metade dos anos noventa, vou dar uma olhada geral ao panorama agrário e aos emergentes conflitos interculturais entre camponeses e indígenas da SNSM, no contexto das disputas territoriais entre os grupos locais de traficantes, as guerrilhas e os agentes estatais. Esta pequena seção contextualiza os antecedentes históricos da discussão do segundo bloco desta pesquisa sobre os paradoxos do multiculturalismo operativo Colombiano.

O final da *bonanza marimbera* de meados dos anos oitenta deixou como consequências a degradação social e a decomposição dos valores das pessoas que se acostumaram a ganhar o dinheiro facilmente, numa dinâmica que mudava rapidamente para o cultivo de coca aproveitando as redes e a infraestrutura dos anos anteriores (MOLANO, 1988). Uma das principais sequelas agrárias foi o abandono dos cultivos de alimentos e a descapitalização da região, com poucos ou mínimos investimentos produtivos para as populações serranas. Isto significou que na região de Fundación por exemplo, se seguiu com o cultivo de *cannabis* e em Aracataca o de coca como única possibilidade de manter a quebrada economia camponesa (MOLANO, 1988; ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 2).

Já falei antes como os resultados da época de colonização camponesa, estimulados pela necessidade de encontrar terras que possibilitassem a reprodução da vida, não tiveram no Estado um interlocutor necessário para comunidades carentes de meios para afrontar a exigente empresa de construir novos assentamentos. Com isto e os efeitos antes assinalados do fim da economia ilegal da *cannabis*, derivou a ampliação da pobreza rural, a deterioração de extensos territórios da fronteira agrícola e a expansão de conflitos (FAJARDO, 2002) que até hoje acompanham as comunidades serranas.

Como explica o professor Fajardo (2002), a expansão do tráfico de drogas nestas áreas deveu-se à tendência recessiva dos preços dos exportáveis de origem agrícola, induzindo a pequenos e médios produtores, em especial camponeses, limitados no acesso à terra e às tecnologias de mais elevada produtividade e carentes de subsídios, a competir com as exportações agrícolas dos países centrais com resultados ruinosos (FAJARDO, 2002). Assim, diante daquela precária realidade agrária, os camponeses viam como única possibilidade de subsistência a incorporação à produção de cultivos ilícitos.

A produção, processamento e comércio de maconha e cocaína afetaram diretamente regiões marginais com difícil acesso para as autoridades (FAJARDO, 2002) como de fato a geografia da SNSM era. Consolidaram-se neste ciclo de territorialização da violência, redes de poder com participação das autoridades e de distintos setores das comunidades locais. Para então, a estrutura fundiária regional sofreria novas mudanças pois seriam investidos nesse período muitos recursos na aquisição das melhores terras produtivas das planícies em municípios vizinhos como Pivijay e El Retén⁵⁶ dedicadas para gado extensivo e outros investimentos agrícolas, por parte de capôs e patrões locais. As terras adquiridas funcionaram como fachadas e mecanismos de lavagem de dinheiro dos “novos ricos” ou “novos latifundiários”, com efeitos na estrutura social, de poder político⁵⁷ e da propriedade rural das terras vinculadas ao capital nas planícies e arredores da Serra. Os “novos ricos” constituiriam uma classe com os “velhos latifundiários” para manter o poder político e econômico, em que o legal e o ilegal se cruzam em um emaranhado que é reproduzido até a atualidade.

No contexto da concentração fundiária e do surgimento de uma nova classe de latifundiários locais que contrastava com a quebrada economia campesina serrana que buscou nas economias ilegais o meio para suprir a ineficiente execução de políticas agrárias; foram evidentes as primeiras tensões, disjunções e contradições nas relações interculturais entre indígenas e campesinos na SNSM. A desorganizada fase de ocupação de colonos campesinos, a extensão dos cultivos ilegais e as fumigações da Polícia, e a aparição dos grupos de justiça privada e das guerrilhas; significou o deslocamento dos indígenas dos seus territórios ancestrais.

Como expressão desse conflito, o fortalecimento das organizações indígenas se promoveu com o objetivo de recuperar o controle dos territórios ancestrais e a reclamação do reconhecimento e respeito da autonomia e cultura. Esta trajetória organizativa seria corolário da acumulação dos anos de luta frente a presença da ordem Capuchinha no sul da SNSM entre 1916 a 1982, implantada por ordem do governo central para evangelizar indígenas arhuacos (BOSSA, 2015; DUARTE, 2018). Os arhuacos seriam a primeira etnia em constituir uma

⁵⁶Durante minha passagem como profissional social da Unidade de Restituição de Terras, tive conhecimento de casos de compras de terras de narcotraficantes nas planícies dos municípios El Retén e Pivijay, realizadas com recursos dos capitais acumulados pelo tráfico de *cannabis* e cocaína como mecanismo de lavagem de dinheiro.

⁵⁷ Tal como anota a Sala de Justicia y Paz do Tribunal Superior de Bogotá: “[...] *el dinero proveniente de la ‘bonanza marimbera’*, no sólo afectó la paz, la cultura y los valores de la sociedad samaria y guajira. También repercutió sobre la estructura del poder político en estos departamentos. Así, muchos capos marimberos se convirtieron en aliados electorales poderosos ya sea porque disponían de sus propias bases sociales o porque tenían vínculos familiares con los congresistas, alcaldes o gobernadores. Estas alianzas como se demostrará más adelante serían el preámbulo del fenómeno conocido como “la parapolítica”. (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, 2015, p. 567).

organização política entre os indígenas da Serra em 1931 quando formou a *Liga Indígena de la Sierra Nevada* (ULLOA, 2004).

Após, em 1974, nasceu o *Consejo y Organización Indígena Arhuaca* (COIA), o que em 1983 – um ano depois da saída dos Capuchinos - se converteu na *Confederación Indígena Tayrona* (CIT); organização até hoje representa aos arhuacos. Em 1987, a *Organización Gonawindúa Tayrona* (OGT) foi fundada entre a articulação de indígenas Kogui, arhuacos e wiwas, buscando interagir efetivamente com as instituições do Estado Colombiano e criar melhores canais de colaboração entre essas últimas e os *Mambos*⁵⁸ (ULLOA, 2004).

Ao final dos anos oitenta e começo dos noventa, emergiram duas organizações: a *Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona* (OWYBT) e a *Organización Indígena Kankuama* (OIK) (ULLOA, 2004). Além dos canais que se abriram entre o Estado e estas organizações, várias organizações não governamentais (ONGs) nacionais e internacionais também começaram a criar relações com as comunidades indígenas para acompanhá-las em suas demandas de legalização formal dos territórios ancestrais.

Neste contexto, as figuras territoriais de reserva florestal e indígena estabelecidas pelo Estado tomavam especial importância como mecanismo jurídico de proteção e oportunidade para a recuperação dos territórios ancestrais para os indígenas. A Lei 2ª de 1959, declarou como Parques Nacionais Naturais (PNN) as zonas que o governo nacional, por intermédio do Ministério de Agricultura, delimitou e reservou de maneira especial com o objeto de conservar a flora e a fauna da SNSM, lei que foi instituída em alguns territórios dos municípios de Fundación e Aracataca. Anos mais tarde, tais zonas foram reconhecidas como *Parque Nacional Natural de los Tayronas* (PNNT) (Resolução nº 2.929, de 18 de agosto de 1969) e *Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta* (PNNSNSM) (Resolução nº 230, de 19 de agosto de 1971)⁵⁹. Como me disse um dos antropólogos que entrevistei e que acompanhou as lutas indígenas desde os anos 1990, a criação dos parques naturais fundou uma relação importante destas iniciativas governamentais com as comunidades indígenas na SNSM pois sempre foi visto como um meio para a recuperação territorial (FUNCIONARIO 1).

Da mesma forma, como pode ser visto na tabela abaixo (Tabela 2), no marco da aparição de figuras jurídicas de conservação ambiental e de afloramento das organizações indígenas, se ativaram também os reconhecimentos legais por parte do Estado relacionados com as demandas

⁵⁸ Os Mambos são a principal figura espiritual das comunidades indígenas.

⁵⁹ O Parque Nacional Natural de los Tayronas (PNNT) está localizado em Santa Marta. Por sua vez, o Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta (PNNSNSM) se localiza em Santa Marta (Magdalena), e os municípios de Ciénaga, Aracataca e Fundación (Magdalena), Rioacha (Guajira), San Juan del Cesar e Valledupar (Cesar).

territoriais indígenas. Como mostro na seção sobre abordagens metodológicas, o constituído Resguardo Indígena Arhuaco sobrepõe-se nos municípios estudados nesta dissertação de Fundación, Aracataca (departamento. de Magdalena), mas se estendendo também a áreas dos municípios de El Copey, Valledupar e Pueblo Bello (departamento. Cesar).

Quadro 2 Figuras jurídicas de reconhecimentos legais dos territórios indígenas na SNSM - 1974 – 1999

AÑOS	ENTIDAD	RESOLUCION	NOMBRE	EXT. HAS	Zonas comprendidas
1974	INCORA	113 de 4 Dic.	Reserva Arhuaca	185.000	Correg. Pueblo Bello, San Sebastian y Atanquez (muni. Valledupar) e parte de municipio. Fundación e Aracataca.
1980	INCORA	109 de 8 Oct.	Resguardo Kogui – Malayo –Arhuaco	364.390	Municipios de Aracataca, Santa Marta, Ciénaga (Magdalena) e Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar (Guajira)
1983	INCORA	078 de 10 de Nov.	Resguardo Arhuaco y ampliación de reservas	Amp. 10.900 Total: 195.000	Correg. Pueblo Bello, San Sebastian y Atanquez (muni. Valledupar) e parte de municipio. Fundación e Aracataca con ampliación.
1994	INCORA	29 del 19 de Jul.	Resguardo Kogui – Malayo –Arhuaco	Ampliación.	Salida al Mar (rio Palomino y Don Diego) (Santa Marta)
1995	Ministerio del Interior (DGA)	837 de 28 de Ago. (ratifica res.000002 de 4 de En.1973)	Línea Negra	1.751.601	Limite del Territorio Ancestral Tradicional.
1996	Sem informação	Sem informação	Resguardo de Bunsichama	129	Municipio de Pueblo Bello
1999	Sem informação	Sem informação	Resguardo Kankwamo	31.333	Atanquez

Fonte: Elaboração própria, a partir da informação do documento de *Caracterización ambiental y generalidades de la cuenca del rio Aracataca*. 2014

Em contraste ao processo organizativo e às ligações incipientes com o Estado como interlocutor para as demandas indígenas, para os camponeses o Instituto Colombiano de la

Reforma Agrária (INCORA) só atendia aos programas relacionados com a reserva indígena e o saneamento do *Resguardo Arhuaco* (MOLANO, 1988). Apesar das manifestas deficiências desse saneamento, não só pela falta de recursos, mas também pelos intrincados requerimentos burocráticos e limitações de mobilização dos funcionários devido à guerrilha (MOLANO, 1988); para os colonos campesinos, as figuras jurídicas de reconhecimentos legais de reserva florestal e dos territórios indígenas na SNSM não eram muito claras e eram vistas como um tipo de afetação para eles, pois foram vistos como invasores da reserva florestal e indígena, o que na prática significou a falta de titulação e crédito.

Para esse momento se iniciaram em outras áreas do *Resguardo Arhuaco* da Serra do lado do departamento de Cesar, a estratégia de negociação ou compra de terras CAMPELINOS como mecanismo de recuperação territorial que se replicaria anos mais tarde nas áreas estudadas nesta pesquisa. Dita estratégia também involucrou a velhos latifundiários donos de terras na Serra que esperavam uma indenização do Estado para a ampliação do *Resguardo Arhuaco* da Serra.

... esta gente [colonos campesinos] venía siendo amenazada con un desalojo desde hacía varios años hecho que finalmente ocurrió comienzo de 1987. Las mejoras fueron compradas, en general a precios irrisorios y bajo presión, dando tiempo terminante para la desocupación de los predios; concluido este, los campesinos que aún permanecían en la tierra so que se había negado a negociar, fueron desalojados violentamente, sus cultivos macheteados y sus viviendas incendiadas por agentes del DAS, la policía y civiles, bajo órdenes personales de empleados de la familia Castro. De esta manera y haciéndoles firmar documentos de aceptación de la “negociación” muchos colonos fueron expulsados; otros resistieron la agresión, se organizaron y bajaron cerca de 80 personas a Valledupar donde se tomaron las oficinas del INCORA y presentaron ante el comando de policía las quejas sobre los atropellos ocurridos [...] A partir de entonces se abrió un dialogo con la familia Castro quien alegó que la parte de la finca que está dentro del Resguardo debe pasar a manos de los indígenas, previo pago de la indemnización correspondiente. Como es de conocimiento público el gobierno también está interesado en la recuperación de estas tierras para los Arhuacos, de tal manera que tanto los Castro como los colonos espera y creen que el gobierno lo hará próximamente [...] ante la necesidad de tierra el campesino no tuvo en cuenta si las tierras estaban dentro o no del resguardo indígena, a pesar que sus limite es públicamente conocido y existen además inmensos mojones (dese 1974) que la demarcan. (MOLANO, 1988, p. 108. Tradução própria).

O acima relatado pelo professor Molano (1988), fala sobre os surtos do conflito intercultural na SNSM para finais dos anos oitenta entre campesinos e indígenas pelo acesso e uso das terras em que o Estado começava a cumprir um papel fundamental. Nesse caso, os arhuacos da parte sul oriental da Serra iniciaram os tramites pertinentes com o INCORA. Entretanto, os colonos (135 no total) continuaram cultivando em 500 hectares café, milho, feijão, banana e frutas. Conta Molano que, “*los indígenas esperanzados en la recuperación de sus tierras por las vías legales, tratan de llegar a un acuerdo con los colonos, aceptando la*

permanencia de estos en sus territorios, mientras el Incora da la solución al problema, dada su condición de campesinos sin tierra” (MOLANO, 1988, p. 109).

Ante a falta de atuação do Estado na regularização de terras indígenas, o Resguardo Arhuaco da Serra a través da Confederação Indígena Tayrona começou a aquisição através de negócios informais de unidades ou chácaras campesinas com o desejo de ir comprando mediante negócios particulares aos ocupantes das distintas chácaras, como documentou Molano:

Con estas negociaciones simbólicas, pretenden ir asegurando la posesión de las diferentes fincas para cuando en Ministerio entregue definitivamente la hacienda Ariguani. Para esto, se utilizan pagares hechos a lápiz y en papel de cuaderno donde se estipulan precios que pueden oscilar, absurdamente, entre cuatro mil pesos y 4 millones por una mejora de 20 hectáreas. Los colonos son muy celosos de recibir esos papeles, pues lo negocios con los indígenas hoy por hoy se han vuelto muy delicados (dada la fiscalización de la guerrilla) pero cabe la posibilidad de que algunos de ellos puedan engañar al indígena con algún dinero vendiéndoles lo que no pueden [...] Un sentimiento general y manifiesto de todos los campesinos de esta vertiente de la Sierra Nevada y particularmente de estos invasores, es que cuando ellos entreguen a los indígena las fincas estos lo dejen perder, debido a su particular de estos las dejan perder, debido a su forma de la producción, la cual es en general, para una economía de subsistencia. Esto les ha merecido el calificativo de perezosos, además considera que el aborigen es un consentido del gobierno por las prerrogativas que suponen reciben, situación que comparan con su dura realidad. (MOLANO, 1988, p. 110).

Ao fim, a este contexto das diferentes fases e processos que experimentavam as territorialidades étnico-rurais na SNSM, em que se inaugurou um complexo mercado de terras na Serra entre subalternizados, destacou-se a pequena titulação de terras como padrão da posse nas zonas campesinas. Para dar um exemplo, nesse período, de 150 clientes em Pueblo Bello (em áreas do departamento de Cesar) da *Caja Agraria* - órgão encarregado de outorgar créditos agrários - apenas 30 tinham titulações de suas terras. Os demais estavam certificados com cartas de compra e vendas. Para os campesinos entrevistados por Molano, o requisito que eles nunca poderiam cumprir é o de fiador “*todos somos igual de pobres*” (MOLANO, 1988, p. 104). A crise social e econômica do campesinato também se exemplifica na descrição que Molano faz sobre os colonos que ocuparam o povoado de San Pedro de la Sierra. Para ele,

...el colono cafetero se siente, y está, al borde de la crisis [...] en conclusión, y tomando en cuenta la experiencia negativa que la mayoría de los colonos ha tenido con los bancos, como también los altos intereses (23%) de la Caja Agraria, las perspectivas económicas son desalentadora (MOLANO, 1988, p. 51).

4.3 ESCALAMENTO DA VIOLÊNCIA: AUGÉ E A CONSOLIDAÇÃO PARAMILITAR: (1996 – 2006)

“y que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que quede de las Farc”. Uribe señaló que era necesario tener las 'ganas' para terminar con esa guerrilla. También volvió a criticar a dirigentes que cuestionan el proceso con los 'paras' pero nunca hablan de la guerrilla. Álvaro Uribe Vélez dirigiéndose a Fredy Padilla de León. Consejo Comunitario, Magdalena. Abril 14 de 2007. (EL TIEMPO, 2007)

Depois de contextualizar como se territorializou a violência na região Caribe e nas áreas pesquisadas nestas dissertação, e esboçar alguns aspectos da configuração do conflito intercultural entre camponeses e indígenas sobre o uso e acesso à terra numa realidade agrária muito precária e ligada como consequência as lógicas ilegais do tráfico; explicarei como o cotidiano das populações étnico-rurais no Caribe Colombiano transformou-se definitivamente com o ciclo de difusão e o escalamento do conflito armado em anos em incrementou-se as violências sobre a população rural com efeitos devastadores sobre seus projetos de vida.

Por uma parte, as guerrilhas aumentaram seus ataques a uma série de fazendas de reconhecidas famílias ganadeiras, bananeiras e de palma de dendê⁶⁰ localizadas na zona rural da cabeceira municipal da Pivijay, Fundación, Aracataca e Ciénaga, nas imediações baixas das intersecções das estradas que conectam a entrada da Serra – onde se resguardavam - com o rio Magdalena e com a cidade Santa Marta.

Por outra parte, a resposta das elites locais foi promover a chegada de grupos de mercenários paramilitares, numa época de uma política de segurança nacional do estado colombiano fundamentada numa lógica contra insurgente determinadas pela política internacional de drogas e de segurança liderada por Estados Unidos. Dito cenário era comum para as imediações da Serra, nos departamentos do Cesar e La Guajira, e para região Caribe.

Em 1996, as práticas da violência aumentaram substancialmente com efeitos perversos sobre indígenas, camponeses e afrodescendentes. Nesse ano começou o período da incursão, a disputa e a consolidação paramilitar desde o centro do departamento do Magdalena em torno ao que foi reconhecido como as *Autodefesas Unidas de Colômbia*, o que daria origem ao chamado *Bloque Norte de las AUC*.

⁶⁰ De acordo com a informação do Ministério de Agricultura com base na Avaliações Agropecuárias, desde começos dos anos noventa aumentaram as áreas cultivadas e a produção de palma de dendê no marco da abertura econômica resultado das políticas de neoliberalização desses anos (Gráfica, x). Sobre este ponto me referirei no Capítulo 4.

Ameaças, assassinatos seletivos, estupros,⁶¹ confinamento, deslocamentos forçados, despojos, massacres se exacerbaram no contexto da guerra contra insurgente com profundos efeitos e danos na construção do espaço agrário de populações étnico-rurais, embora com resultados diversos entre eles em relação ao reconhecimento territorial por parte do Estado na Serra, como mostrarei no próximo capítulo.

Por enquanto, é fundamental entender as razões objetivas do escalamento e consolidação dos grupos de mercenarismo paramilitar através da repressão com métodos violentos, que guardaram relação entre a configuração paulatina de uma ordem estabelecida e imposta durante os anos da guerra contra insurgente (guerra como ação) que determinou a produção do espaço e sujeitos serranos resultantes (estado de guerra), com evidentes fragmentações nas populações subalternas em “*años donde todo se putió*”, como relatou um dos campesinos (ENTREVISTA CAMPESINO 8).

O contexto da reconfiguração e adequação da estratégia contra insurgente de meados dos anos noventa no Caribe, é resultado da acumulação de três períodos definidos nacionalmente por Franco (2009) assim:

- i) Entre as décadas dos anos 60 e 70 com *el Estatuto para la Defensa Nacional*, que fortaleceu a autonomia da instituição militar e a criação de um dispositivo paramilitar sobre a base da legalidade armando a população civil.
- ii) Entre 1978 e 1982, onde convergem distintos processos: o auge da mobilização social, a exacerbação da repressão militar, o trânsito da guerra imaginária à guerra real, o início da reorganização da força e a reestruturação do bloco contra insurgente através *del Estatuto de Seguridad*. Nesses anos se deu a aceleração da reprodução local do bloco de poder contra insurgente, a caracterização do inimigo, equiparando a população civil – movimento sindical, estudantil, campesinos, político - com a insurgência.
- iii) Entre 1989 e 1994, onde confluem o fim da Guerra Fria e a transformação de vários conflitos armados em América Latina. O nascimento de atual constituição com efeitos democratizadores, a institucionalização das organizações sociais, a jurisdição de uma ordem econômico neoliberal, o primeiro lapso do paramilitarismo, a reorganização da estrutura mercenária de luta contra insurgente e a multiplicação das violências (FRANCO, 2009).

Sobre essa cronologia ideológica da estratégia contra insurgente, a fases de escalamento, difusão e consolidação da guerra entre 1996 e 2006, definiu-se a partir da criação do inimigo interno e os procedimentos para confrontá-lo nos manuais militares. Com isto, se seguiu com a reconstrução da ordem tática da guerra, isto é, a reorganização da força armada. Este ciclo que

⁶¹ Sobre o caráter, a lógica e o impacto diferenciado da violência de gênero e a violência sexual dentro da guerra, ver CENTRO NACIONAL DE MEMÓRIA HISTÓRICA. “*Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano. Resumen*” Bogotá: CNMH, 2014.

começa a meados dos anos noventa é caracterizado por Franco (2009, p. 267) nas seguintes palavras:

El orden táctico se continúa organizando – en continuidad con el período anterior - sobre la base de la privatización, es decir, se transforma decididamente la guerra en un oficio privado, en un orden unitario de la violencia que, al evadir los límites que el derecho impone a la fuerza pública, intenta recuperar la eficacia coercitiva y con ella la ideológica. Dicha transformación se condensa en las organizaciones un mercenarismo corporativo regido por el albedrío de ilegalidad y sustentado en la reconfiguración del bloque de poder contra insurgente.

Antes de abordar a história da difusão territorial do paramilitarismo na sub-região norte do departamento de Magdalena, considero fundamental responder conceitual e analiticamente as seguintes questões fundamentadas nas discussões por Franco (2009) em seu livro “*orden contrainsurgente y dominación*”: quais foram os interesses e as motivações objetivas da mobilização contra insurgente? O que é e como caracterizar o bloco de poder contra insurgente no local e no nacional? Qual foi a definição do inimigo nesse contexto de escalamento e consolidação da guerra contra insurgente, e que efeitos tem nas populações do campo? Respondendo estas perguntas, quero discutir: qual é a (re)produção do espaço e sujeitos nos anos da guerra contra insurgente?

A continuação, tentarei responder estas perguntas relacionadas ao ciclo de escalamento e difusão da violência paramilitar nos anos da guerra contra insurgente a partir da perspectiva sociológica proposta por Vilma Liliana Franco Restrepo (2009). As explicações teóricas abordadas neste capítulo 4 ainda que não são o objetivo central da dissertação, servem de marco epistemológico na compreensão das explicações estruturais da violência contra insurgente e os efeitos na produção do dia a dia do espaço agrário no Caribe Colombiano e nas dinâmicas locais da sub-região estudada nesta dissertação a partir dos meados dos noventa. Essas confrontações e volatilidades do conflito armado, servem de fundo para a discussão central do segundo bloco desta dissertação.

Esta seção, serão abordadas explicações sobre as fontes objetivas da mobilização contra insurgente para o segundo ciclo da territorialização da violência (1996 – 2006). Também será caracterizado o *bloco de poder contra insurgente* e a criação por parte deste do inimigo interno. O anterior permite entender o tipo de sujeitos étnico-rurais que resultaram dos anos do escalamento paramilitar na SNSM e o Caribe Colombiano durante a aplicação da política contra insurgente promovida desde o Estado e as elites regionais e nacionais, com o único fim de neutralizar qualquer tipo de ação contenciosa que colocasse em risco sua hegemonia e seu

poder. Por fim, resumo os efeitos e as consequências da guerra contra insurgente sobre a sociedade civil e seus projetos territoriais.

4.3.1 Fontes objetivas de mobilização contra insurgente: dominação política e propriedade

A estrutura da mobilização contra insurgente a nível nacional emerge como desejo de conservação do poder. Ela é a motivação estruturante de guerra contra insurgente, sendo interesse objetivo desde o aparato estatal e às frações da classe dominante a quem ele serve (MEDINA GALLEGOS, 2005; FRANCO, 2009; GUTIERREZ, 2014). Desta maneira, num marco de ações militares das guerrilhas que focavam sua atenção nos empresários e as elites regionais, conformou-se uma *coalizão de repressão* (GUTIERREZ, 2014) ou um *bloco de poder contra insurgente* (FRANCO, 2009), que misturaria o acionar militar (legal e ilegal) através da violência exacerbada, para o benefício real de setores da classe política local, regional e nacional. Este bloco estaria representado em funcionários públicos, diferentes agremiações sociais e econômicas, e latifundiários donos de grandes extensões de terras.

Como sugerem alguns autores, o propósito dos anos do escalamento, difusão e consolidação da violência paramilitar que começou com maior força a meados dos noventa é produto da aliança de interesses políticos e econômicos dominantes, que excede a dimensão militar e se estrutura em um âmbito político e ideológico. (FRANCO, 2009; GUTIERREZ, 2014).

Para Franco (2009), o interesse é analisado desde dois âmbitos: um, o domínio da estrutura política e das práticas políticas; e dois, o interesse sobre a custódia da propriedade privada como expressão específica do desejo de conservação do poder. Abordarei essas duas áreas abaixo. Embora, antes é importante compreender que o conceito de interesse em relação ao poder e como fator que governa a ação bélica é entendido pela autora como interesse objetivo e relacional; ou seja, constituído no marco de relações conflitivas e desdobrado, por conseguinte, em relação com outros ou em oposição estratégica a outros. Situados nos âmbitos econômico, político e a guerra, os agentes procuram conseguir ou preservar tais interesses através do exercício do poder (FRANCO, 2009).

O território é entendido fundamentalmente como um espaço definido por e a partir de relações do poder (LOPES, 2003). A conservação destas relações e a configuração de uma ordem interior, estruturou a argumentação da justificação estatal, social e mercenária da guerra preventiva/punitiva do bloco contra insurgente. Nela reafirma-se o sentido de dominação política e a conservação de suas condições (propriedade privada, segurança, acumulação), em

reação a demandas de democratização política e económica, ações reformistas, oposição política e em geral, perspectivas ideológicas que, supostamente, afetam as estruturas, práticas, sistema de valores ou instituições sociais (FRANCO, 2009; GUTIERREZ, 2014).

Nesse sentido, a produção e reprodução do espaço no Caribe Colombiano e em várias regiões da Colômbia desse período, se deram, como explica Franco (2009), através de um conjunto de regularidades, normas e valores, como fonte e relações de mando e obediência que não só são consideradas legítimas, mas também justas em todas as suas formas de integração (e segregação) social.

A preservação da ordem da acumulação historicamente constituídas nas regiões onde se expendeu a violência mercenária como o Caribe, subjaz a defesa de uma forma de poder institucionalizado, que permite que os interesses dominantes e hegemônicos se objetivem e se apresentem como interesses gerais da sociedade. É desde esse poder institucionalizado que se legitimou a luta contra insurgente na procura da preservação e expansão tanto de relações de dominação-sujeição, como de recursos que constituem seu fundamento, em função da realização de interesses objetivos (políticos e econômicos) específicos (FRANCO, 2009)

É possível afirmar assim que as ideias dos interesses reais de justificação da guerra por parte da “coalizão de repressão” ou “bloco contra insurgente” (GUTIERREZ, 2014; FRANCO, 2009), se encontram articuladas às ideias morais que justificam a dominação. Como Franco retrata, a argumentação da justificativa da violência simboliza como interesses gerais os interesses corporativos, cumprindo assim funções ideológicas nessa luta.

Em sua lógica, se consideram imorais cada um dos meios ou expressões sociais, políticas ou culturais que contradizem esses interesses hegemônicos do “bloco de poder”; reclamando a defesa da ordem e da segurança como valores fundamentais da liberdade, da democracia e da paz (FRANCO, 2009).

Desta forma, nesse segundo ciclo da territorialização da violência, os princípios que apresentam como valores com pretensões “universalizantes” a respeito da propriedade privada, livre competência, individualismo, respeito aos homens de empresa, competência eleitoral como signo fundamental da democracia, entre outros; se constituem no centro ideológico das ações dirigidas a este propósito de preservação da acumulação do poder político e a acumulação da propriedade (FRANCO, 2009). Isso se materializa tanto no âmbito da estrutura política como nas práticas dos setores dominantes.

No entanto como funcionam o domínio da estrutura política e das práticas políticas, e o interesse sobre a custódia da propriedade privada como expressão específica do desejo de conservação do poder?

4.3.1.1 *Domínio da estrutura política institucionalizada e das práticas políticas*

Como indica a socióloga Franco (2009), no domínio da estrutura política se formula um dos propósitos políticos da luta contra insurgente. A salvaguarda do ordenamento institucional estatal é essencial como instância universalizante que governa a vida social no contexto de relações de dominação. Tanto funcionários públicos, como representantes das facções da classe dominante organizados em grêmios, grupos econômicos ou outras organizações subsidiárias, reclamam em igual sentido dessa institucionalidade estatal como se fosse um valor universal, e como parte de um dever patriótico e moral (FRANCO, 2009). Daí por que um dos traços fundamentais seja a defesa das Forças militares oficiais (Exército Nacional de Colômbia, Polícia Nacional, Polícia Judiciária) e suas práticas como pilares da nação e garantia da ordem e da paz daqueles que desafiam e ameaçam sua ordem.

A defesa da institucionalidade estatal não se enquadra como proteção de um ente autônomo, com interesses diferenciados, mas sim em sua correspondência com os interesses políticos das peças de classe dominante. Assim, o desdobramento do poder hegemônico fundamenta a defesa das duas funções de reprodução das relações de dominação e de simbolização do interesse geral, através do que Poulantzas (2003 *apud* FRANCO, 2009) denomina como *projeção ideológica mistificadora*. Se defende em suma, esse poder do domínio institucional desde planos diferentes, mas não contrapostos: “desde o aparato estatal e desde as frações da classe dominante que tem a seu favor a correlação de forças” (FRANCO, 2009, p. 147. Tradução própria).

A defesa do poder político institucionalizado e das funções do Estado se fundou na prevenção ou obstrução não apenas da guerrilha armada e de seus propósitos de tomar-se o poder, mas também e sobretudo, da organização política de setores subalternos, vistos como potenciais atores que colocam em risco a reprodução das relações de dominação e estabilização do regime de acumulação. Para Franco (2009), o exercício da defesa própria da segurança do Estado se deriva então da necessidade política da abolição do direito dos particulares à hostilidade, assim como o castigo de qualquer intento de ação política ou organizativa que potencialmente podem chegar a realizar os setores subalternos.

Portanto, a guerra contra insurgente se fundamenta na ideia de defesa em nome do poder institucional e das funções do Estado. A violência é usada como meio ou instrumento para a contenção de qualquer possibilidade ou intenção de demandas e ações políticas, que interpelem os interesses hegemônicos. Frente ao desafio do poder institucional que representa o poder da classe dominante, desde o Estado estruturou-se uma estratégia contra insurgente que expressa uma seletividade estratégica, entendida - seguindo a Poulantzas (2003) por sugestão de Franco (2009) - como um conjunto complexo de mecanismos institucionais e práticas políticas, de táticas e estratégias que servem para possibilitar e obstruir interesses de classe ou frações de classe (POULANTZAS, 2003). Esta seletividade estratégica efetua-se como prática hegemônica desdobrada através da unidade contraditória de legalidade e ilegalidade (FRANCO, 2009).

Franco (2009) esclarece magistralmente como por meio dos diversos dispositivos legais e ilegais, normais e excepcionais, militares e civis que integram a dita estratégia, poder e aparato estatal buscam garantir a estabilidade e unidade da ordem política baixo o domínio das classes privilegiadas, e de maneira específica, a reprodução da materialidade institucional e das relações de dominação política, a preservação do poder político e do direito (interno). Assim, a mobilização imperativa contra insurgente pela finalidade do poder institucional do aparato estatal propõe a evocação da autoridade como princípio que se traduz em repressão feroz, repressão que destrói e funda simultaneamente (FRANCO, 2009). Este último aspecto é fundamental para a compreensão deste período na região Caribe frente as consequências na produção do espaço agrário e de sua cotidianidade.

O esforço da luta se centra principalmente em dois aspectos, afirma Franco (2009): o controle territorial e o controle das populações desses territórios. Com respeito ao primeiro, o aparelho de estado desenhou como um dos objetivos da luta contra insurgente a recuperação do domínio territorial, nos espaços onde os insurretos puseram em questão a soberania dele. Em consonância com esse propósito, as forças paramilitares atuaram em conluio com as forças militares e policiais para esse fim. Em essência, como afirma Franco (2009), a guerra paramilitar foi estabelecida como forças irregulares de ocupação que substitui as forças estatais, com o propósito de “*“liberar”⁶² territorios de dominio insurgente y desempeñar la finalidad atribuida al Estado, esto es, la provisión de seguridad*” (Franco, 2009, p. 152. Tradução

⁶² “Declaración por la paz de Colômbia”, carta enviada al gobierno nacional por la dirección política y militar de las AUC, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, Autodefensas Campesinas de Cundinamarca y Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, 29 de noviembre de 2002; cuestionario realizado al Estado Mayor del Bloque Metro por la agencia de noticias Reuters en 2003.

própria). Nas palavras de Franco (2009, p. 152), a função dos paramilitares que se espalharam em diferentes regiões da Colômbia,

...es el aseguramiento de zonas de importancia militar, política, o económica en varias fases –despeje, mantenimiento y consolidación- y un esfuerzo aplicado de forma sucesiva, territorio por territorio, que defina cómo trayectoria un escalamiento localizado y encadenado [...] con el propósito deliberado de sustituir al Estado en las regiones donde la guerrilla había logrado quebrar la legitimidad institucional.

A recuperação paulatina do controle territorial nas fases de escalamento, difusão e consolidação, através de mecanismos coercitivos como simbólicos, se interpreta como uma forma de restabelecimento da autoridade política do Estado e dos interesses estratégicos que representa: as elites dominantes – regional e nacional - e o capital estrangeiro. Assim, o território, “*se controla simultaneamente como espacio de acumulación y segregación socioeconómica*” (FRANCO, 2009, p. 154).

No entanto, paralelo à liberação territorial das guerrilhas pelas forças irregulares ocorreu o disciplinamento dos setores subalternos (sindicatos, organizações camponesas, organizações étnicas, partidos de oposição, organizações ambientais etc.) que tentavam disputar a ordem estabelecida a partir de reclamações contenciosas. Com o controle do território e o disciplinamento dos setores subalternos, os propósitos destes grupos irregulares, resume Franco (2009), foi fornecer proteção às atividades de exploração de recursos renováveis ou não renováveis de maneira que não se afetem a produtividade e circulação; oferecer segurança aos investimentos nacionais e estrangeiros; assegurar a disposição de vantagens infra estruturais, entre outros. Porém, não só respondem aos interesses econômico-corporativos de ganadeiros, multinacionais, agroindustriais, industriais, etc. Também ao interesse político de assegurar condições extra econômicas de acumulação em conformidade com a autoridade estatal e a prevenção ou desativação das demandas de setores subalternos (FRANCO, 2009) de reclamações associadas à distribuição das terras, distribuição da riqueza, leis trabalhistas, proteção do meio ambiente, entre outras.

Além do território, o segundo traço institucional de controle da luta contra insurgente são as populações do campo e da cidade. Como afirma Franco (2009, p. 155), “*el dominio sobre [la población] no es distinto al dominio territorial, es decir, la lucha comprende además la disputa fundamental por la lealtad y obediencia [...]*”. Desde essa perspectiva, conta Franco (2009), a guerra como técnica bélica não se resolve apenas no plano puramente militar, mas também desde o apoio consentido ou repressivo das populações. Deste modo, não é suficiente

o controle das armas, mas é imperioso o controle da população que legitima a importância da luta contra insurgente, como bem supremo dos interesses da sociedade.

É na interseção do controle territorial e da população que Franco (2009) define o planejamento da estratégia contra insurgente. Estabelece-se assim uma relação dialética entre repressão e consenso como pilares da dominação. Frente à repressão, por exemplo, configuraram-se estratégias militares de persecução às guerrilhas insurgentes, à criminalização dos setores subalternos que fazem reclamações e o controle da população através de medidas policiais (legais e ilegais). Ela, a repressão, virou forma de administração das contradições e dos conflitos sociais, que garante a preservação das relações de dominação em dupla escala espacial local e nacional (FRANCO, 2009; GUTIERREZ, 2014).

Frente ao consenso, tem se favorecido a estratégia contra insurgente com a incorporação de medidas desenvolvimentistas ou programas de inversão social planejados, além de mecanismos de persuasão, com o fim de prevenir ou subtrair a influência rebelde, em estratégias projetadas desde os governos dos Estados Unidos como o beneplácito dos governos nacionais. Planos como o *Plan Colômbia*⁶³ (1999) ou o *Plan Patriota* (2004), executados nos anos do escalamento e a consolidação paramilitar. A partir destes programas de corte social à ênfase militar se somou à luta contra insurgente e a luta antinarcóticos, com o propósito de restabelecer os vínculos entre Estado-sociedade subalterna, para alcançar uma estratégia de integração social que não tocasse a estrutura de poder e que afastasse a possível influência comunista e insurgente. O planejamento do *Plan Colômbia*, por exemplo,

...como condensación de la estrategia legal contra insurgente, desde comienzos del nuevo milenio contemplaba una dimensión desarrollista nombrada como “fortalecimiento institucional y desarrollo social”, orientada a “reducir las causas y las manifestaciones de violencia”⁶⁴ y focalizada, bajo criterios de estrategia militar, en las regiones con “altos niveles de conflicto con bajos niveles de presencia del Estado”. Dicho componente se ha desglosado en varias líneas de acción e programas como proyectos productivos y de infraestructura, algunos de los cuales se han articulado a la estrategia cívico-militar para las zonas afectadas por la guerra o por cultivos de uso ilícito⁶⁵ (FRANCO, 2009, p. 157)

⁶³ O *Plan Colômbia* tem como antecedentes o *Plan Lazo* e *Plan Nacional de Rehabilitación (PNR)* levados a cabo a meados do século XX, no marco do fim da confrontação bipartidista, e no trecho de 1982 até 1994 respectivamente. Os programas se compõem de uma dimensão cívico-militar baseada no reconhecimento de que as condições da pobreza se converteram em terreno favorável ao comunismo, contra o que tinham que lutar através de programas sociais governamentais que articularam estratégias econômicas e sociais (FRANCO, 2009).

⁶⁴ Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, *Cambio para construir a paz: plan nacional de desarrollo. Bases 1998-2002*, Bogotá, DNP, 1998.

⁶⁵ Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, *Cambio para construir a paz: plan nacional de desarrollo. Bases 1998-2002*, Bogotá, DNP, 1998.

Em relação a população é imperante compreender que em particular os setores subalternos, entraram no campo da disputa das forças contra insurgentes (FRANCO, 2009). De um lado, se pretendia mantê-la ou recuperá-la das bases sociais da insurgência e dos projetos políticos alternativos. Do outro, integrá-la através de concessões materiais à unidade simbolizada da sociedade política ou impedir sua articulação a outro projeto político, além de fazê-la fonte de legitimidade, articulando-a a direção ideológica dos setores dominantes representados pela institucionalidade e a ideia de Estado (FRANCO, 2009). Em nome da soberania de Estado restabelecido através do mercenarismo contra insurgente, foi legitimado o aniquilamento do subalterno em função dos interesses dominantes, ainda que se valesse dele. Assim, como mostra Franco (2009), frações das classes dominantes instrumentalizou aos subalternos como setores de apoio, num contexto regional do Caribe de extrema pobreza e precariedade tanto no campo como na cidade.

Outra questão que assevera Franco (2009) é como a ideia de conservação do poder e da dominação política e econômica como fundamento da mobilização contra insurgente, se materializa não meramente na estrutura política, mas também no domínio das práticas políticas dos centros de poder econômico onde configurou-se paulatinamente uma coalizão de interesses entre industriais e o financeiro através de suas diferentes formas de organização⁶⁶; frações institucionais como as Forças Armadas, representantes políticos e outras franjas das distintas instâncias da burocracia estatal; frações de classes dominantes como ganadeiros, latifundiários, comerciantes através de suas formas gremiais ou de maneira independente; governos estrangeiros como o norte-americano e empresas multinacionais; poderes locais; e setores subalternos que têm servido de apoio à configuração da ordem interior através da repressão. Franco (2009), chama a essa coalizão como *bloco de poder contra insurgente*, ou, em palavras de Gutierrez (2014) *coalizão repressiva*. Esse *bloco de poder contra insurgente* ou *coalizão repressiva*, orientou-se ao controle de expressões pacíficas ou armadas de inconformidade política, que podem afetar as condições políticas da acumulação assim como a preservação do acumulado (FRANCO, 2009).

Em síntese, o contexto desse período de meados dos noventa coincidiu com o acréscimo no apoio militar oficial⁶⁷ paralelo ao espalhamento das forças contra insurgentes nas regiões.

⁶⁶ As formas de organização dos centros de poder industrial e financeiro se compõem de grêmios, meios de comunicação, sociedades acionárias, organizações não governamentais etc (FRANCO, 2009).

⁶⁷ Segundo Restrepo (2016), entre os anos 2000 a 2008 o exército Colômbiano aumentou o número das forças em terra como resultado de 104 milhões de dólares assignados por Washington. Também tem utilizado recursos para assessorar e capacitar a militares Colômbianos e incrementar o número de soldados profissionais de 20 mil efetivos, registrados em 1998, para 83 mil calculados em 2014 (RAMIREZ, 2017). Nesse mesmo sentido a *Fiscalía*

Isto representou a inter-relação entre a abertura democrática relativa e o auge da repressão contra insurgente, prática legada de décadas anteriores com o mostrei no começo desta sessão, baseada no amparo da legislação de exceção (FRANCO, 2009). A reforma constitucional de 1991, entendida como uma abertura de direitos fundamentais, a ampliação participativa, a modificações no sistema eleitoral e aos canais de acesso ao aparato Estatal, o reconhecimento étnico, entre outros, significou a esperança de um período de reformas de abertura política e de reivindicação dos partidos de oposição e das forças sociais subalternas. Esse ambiente de esperanças de cambio alimentou-se também pela sanção da Lei 160 de 1994 que tinha como propósito melhorar as restritas condições econômicas, sociais y culturais das populações rurais através da participação das organizações campesinas no marco de uma Reforma Agraria e do Desenvolvimento Rural Campesino. No entanto, o reverso das referidas reformas, com suas promessas e seus mecanismos de institucionalização de protesto social, foram paradoxalmente a consolidação e expansão da estrutura mercenária e o escalamento da guerra contra insurgente.

Pode-se afirmar então a partir do que foi levantado por Franco que os objetivos da repressão foram construídos sobre o argumento da “luta antissubversiva com fins de autodefesa” (FRANCO, 2009, p. 182. Tradução própria), esgrimido por combatentes, justificado por porta-vozes empresariais e validado por vozes governamentais, abarcando não só a cruzada contra guerrilheira, mas também, e fundamentalmente, a persecução daqueles que tinham sido classificados como “inimigo objetivo”. Isto é, líderes comunitários, políticos e sindicalistas, sobre o suposto de serem “atores do conflito que cumprem funções determinadas”⁶⁸ (FRANCO, 2009, p. 182. Tradução própria).

4.3.1.2 A custódia da propriedade: interesse e justiça

Outro dos interesses que mobilizam o projeto contra insurgente além do domínio da estrutura política é a defesa da propriedade privada. Em sua forma histórica, ela é o fundamento do poder que se procura conservar e acrescentar. Embora, como indica Franco (2009), não é apresentada assim à população ou à sociedade em geral. De fato, o interesse à defesa da propriedade se exhibe como a defesa da justiça, subordinado ao argumento da legítima defesa da propriedade que anima e justifica a guerra contra insurgente e, que faz dela um meio legítimo de proteção.

General de la Nación, máxima instituição do Poder Judiciário, tem recebido recursos no marco do Plano Colômbia por mais de 150 milhões de dólares entre os anos 2009 - 2013 (EE.UU. ESCRITÓRIO EM COLÔMBIA, 2014).

⁶⁸ Entrevista a Carlos Mauricio García Fernández, “Rodrigo Franco” o “Doble Cero”, en: *El Colômbiano*, Medellín, 15 de abril de 2002.

La defensa de la propiedad privada es el núcleo verdadero del argumento de la legítima defensa con el que se intenta justificar una guerra preventiva y punitiva; en ella reside el sentido de justicia de los grandes propietarios capitalistas. La defensa de la propiedad privada es tanto la motivación objetiva como la base ideológica de la guerra contra insurgente que atraviesa históricamente toda la estructura social, desde los grande hasta los pequeños propietarios. (Franco, 2009, p. 183)

Para o *bloco contra insurgente*, a propriedade privada está em risco tanto em face da impossibilidade de não dispor dela por causa das ações específicas da guerra, em particular pela agressão das guerrilhas. Mas também pela probabilidade de que o sistema da propriedade capitalista de corte neoliberal seja objeto de uma reforma ou transformação substantiva como cumprimento de objetivos políticos, tanto das forças rebeldes como das organizações de oposição política e de reivindicação, frente a função econômica do Estado, a riqueza e o ingresso (FRANCO, 2009). É por isso que, tanto medianos como grandes proprietários – territoriais, comerciais e industriais, nacionais e estrangeiros - perceberam esse tipo de ameaças contra a propriedade, e em consequência, se dispuseram a apoiar ou participar da guerra preventivo/punitiva.

Assim, a violência contra insurgente do Caribe Colombiano e outras regiões do país, com um sentido preventivo ou punitivo fez parte de uma estratégia de defesa da propriedade privada capitalista e de outros tipos de propriedade. Esta estratégia, relata Franco (2009), apontou nesse período a recuperação, região por região, do domínio territorial para o Estado, e a configuração de uma ordem interna como condição local de segurança para o retorno dos empresários e a progressão da acumulação e preservação do acumulado.

Um dos argumentos tomados pelo bloco contra insurgente, se fundamenta no credo ideológico e no programa reformista do “movimento contra insurgente”. Para Franco (2009) o anticomunismo que orienta a definição do inimigo interno (efetivo e objetivo) e grande parte da violência contra insurgente, começa do convencimento de que as ideias marxistas que estruturam a identidade ideológica da insurgência e das organizações de oposição de esquerda, “*no solo son contrarias a la religión, la familia, la moral Cristiana y el Estado sino ante todo son contrarias a la propiedad*” (FRANCO, 2009, p. 191).

O argumento ideológico do anticomunismo difundido profundamente por distintos meios desde os anos vinte do século XX⁶⁹, ocupa uma parte importante da justificação contra insurgente. Este como base ideológica das insurgências e dos partidos de esquerda foi

⁶⁹ Para uma trajetória das ideias anticomunistas e antiliberais na Colômbia desde os albos do século XX, ver Capítulo 3. *Fuentes objetivas de la movilización constrainsurgente: dominación política y propiedad*, pág. 191, FRANCO (2009).

considerado como uma das maiores ameaças ao sistema de propriedade que participam capitalistas industriais, banqueiros, latifundiários e até medianos proprietários. Mas também, o temor da sociedade dominante a que seus interesses econômicos fossem afetados residiu na objeção de uma reforma agrária que fizesse a redistribuição da propriedade territorial (FRANCO, 2009).

En el caso de los terratenientes y capitalistas agrários, el rechazo es a todo aquello – reformas legislativas o dinámicas organizativas - que propenda por una intervención sobre la distribución sobre la tierra que afecte en términos jurídicos la posesión sobre la misma, pero sobretudo que revierta la expropiación que se ha producido sobre el campesinado, que obstruía as estrategias de valoración de su monopolio, que interfiera en la apropiación de la renta del suelo y cambie los patrones de uso de éste.

Como mostra Franco (2009), tanto a lei (por exemplo, a legislação de exceção) para a proteção da grande propriedade territorial, como a cooptação, a divisão e a repressão, têm sido recursos de contenção das pressões organizadas sobre o monopólio da terra e a apropriação de sua renda, expressado desde os anos setenta no país. Desde esses anos, vários mecanismos foram aperfeiçoados para frear as demandas organizativas camponesas que colocavam em risco a conservação da propriedade e a concentração da terra. Estes mecanismos continuariam com o extermínio e com a violência na defesa da propriedade. Franco (2009, p. 198) resume a cronologia destes mecanismos nas seguintes palavras:

En la década de los setenta la legislación de excepción sirvió para castigar la organización campesina y sus principales repertorios de confrontación –tomas de tierra, paros, marchas campesinas, ocupación de oficinas públicas - y obstruir su politización; en los ochenta, la organización del mercenarismo contra insurgente sirvió al inicio de un proceso de exterminio o disgregación de organizaciones campesinas a través del asesinato selectivo y la desaparición forzada, que apuntaba a la configuración en la zonas de colonización de un orden interno favorable a la conservación y el reforzamiento de la estructura de tenencia de la tierra; el decenio de los noventa, fue la continuación de este exterminio o disgregación a través de la masacre, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado buscando la creación de un ambiente adverso a la fuerzas rebeldes, la expropiación a favor de grandes propietarios capitalistas, terratenientes, y mercenarios, y la habilitación de actividades económicas de adecuación de infraestructura, agroindustriales o de carácter extractivo.

É interessante observar também que a proteção da grande propriedade territorial através da exacerbação da violência não se dá apenas pela conservação da ganância, mas também na geração futura de condições para acumulação de capital e a apropriação de nova riqueza, através

da exploração de recursos naturais não renováveis por empresas multinacionais⁷⁰, a construção de infraestrutura econômica e expansão das explorações agroindustriais. Este padrão implica em certas condições, segundo Franco (2009, p. 202), *la construcción de un dispositivo de protección violenta en una tendencia privatizadora de la seguridad; la expropiación e apropiación de la tierra como fuente de riqueza, en primera instancia, y con ella la apropiación de la renta del suelo y los recursos naturales.*

A respeito do aparato estatal, fundamental na garantia da riqueza apropriada ou apropriável pelo grande capital, este orienta a militarização das zonas de interesse econômico e sua transformação em territórios de exclusão ou enclaves vigiados. Conta Franco que o papel das forças armadas na militarização dos territórios, além de tentar afastar as forças insurgentes que em seu reclamo ao Estado ameaçam com atentados as instalações econômicas e as atividades agroindustriais de grande escala, é também preventiva e punitiva contra os opositores políticos, ativistas sociais e exerce o controle da população em geral, para evitar denúncias sobre violações de direitos humanos, questionamentos sobre as concessões dos empreendimentos ou qualquer tipo de reclamação social, ambiental, política e cultural (FRANCO, 2009).

Como o que foi dito até aqui, pode-se concluir que o exercício da violência não é apenas proposto como um mecanismo de defesa da propriedade privada capitalista existente, mas também como condição de sua realização e base de seu progresso. Não é só custodiar a propriedade é garanti-la para sua reprodução nos territórios. Isto explica o crescimento nos municípios da parte norte do Magdalena da concentração da propriedade na fase pós-desmobilização como mostrarei acima através dos dados do IGAC (2012). De fato, a prática da violência contra insurgente e a militarização das zonas de influência das forças insurgentes, incluso onde não tem existido e onde os sentidos só percebem mata e pobreza, servem à configuração e constituição de uma ordem interior que se propõe como preconditione econômica para o desenvolvimento do capital e de suas necessidades de expansão no território determinado. Segundo Franco (2009, p. 2005),

⁷⁰ *Caso Drummond e empresas mineras na Guajira e Cesar. Ver Informes do Centro Nacional de Memória Histórica. Drummond Ltd. Colômbia es filial de la compañía norteamericana Drummond (con sede en Birmingham - Alabama, EEUU) y "[tiene] como objetivo esencial la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón [térmico]" con destino a los mercados de exportación. Su presencia en el país se remonta a 1985, año en que se funda la filial y "suscribe su primer contrato minero de carbón en Colômbia, que con el tiempo se [convertiría] en la Mina Pribbenow" en el Cesar: departamento en donde ampliaría sus operaciones con el transcurso del tiempo. Entre 1993 y 1995 establece sus operaciones, con el inicio de obras para la explotación de carbón térmico y su exportación por el puerto marítimo que la compañía tiene sobre el municipio de Ciénaga, Magdalena.*

Exterminio, expulsión o disciplinamiento de las poblaciones –sobre la base de la estigmatización, masacres, tratos crueles, desaparición y desplazamientos forzados, bloqueo alimentario, asesinato selectivo, bombardeo, etc.-, en un proceso percibido como una exigencia para atraer la inversión.

Nesse cenário, a parte alta, mais que um território para a exploração do capital, significou a garantia do controle territorial, de seus recursos (água) e de suas populações camponesas e indígenas para afiançar a adequação social e política da garantia da acumulação do capital e as estratégias de criação de formas de riqueza como a terra e os recursos naturais da planície. Nos anos 1990 em geral as populações subalternizadas da Serra e das planícies foram percebidas como um obstáculo para a sede de riqueza e a necessidade da proteção, a custódia e o avanço da propriedade privada capitalista consolidada nas partes planas. Assim passaram a ser vistas como *inimigo objetivo* – nas palavras de Franco (2009) - para legitimar sua expulsão ou aniquilamento.

4.3.2 Poder contra insurgente: estrutura e organização

Já falei antes como as fontes objetivas da mobilização contra insurgente avançaram desde meados dos noventa na região Caribe e outras regiões da Colômbia através de um *bloco de poder contra insurgente*, conceitualmente entendido como a rede e nodos de poder que determinam os objetivos políticos da confrontação. Dentro do contexto da guerra civil, ele aparece como propósito da estrutura de dominação política compondo-se como meio para a conservação do poder político e econômico, a acumulação da terra e a riqueza e as condições para seu crescimento (FRANCO, 2009). Ele é a articulação no poder da unidade política entre classes dominantes e aparato estatal⁷¹, caracteristicamente centralista, e coalizões politicamente dominantes, entendidas como relações orgânicas entre os centros de poder econômico com redes de poder político regionais, que atravessa os aparatos de Estado em suas diversas escalas, onde entram também setores subalternos articulados aos interesses dominantes (FRANCO, 2009).

Paro para explicar o bloco de poder porque ele retrata a expressão de um fenômeno nacional e regional que teve seus desdobramentos particulares em cada localidade. Assim, na escala nacional, a coalizão contra insurgente articulou em sua fase de escalamento os interesses

⁷¹ Franco (2009, p 302) retoma o conceito de bloco baseando-se em Poulantzas, que entende este como “*la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de la clase dominante, en su relación con una forma particular del estado capitalista*”. Nicos Poulantzas, *Clases sociales y poder político en el estado capitalista*, op. Cit., p. 302.

incorporados em grupos econômicos⁷², associações gremiais⁷³, o oligopólio dos meios de comunicação como aparato ideológico⁷⁴, empresas multinacionais com interesses específicos⁷⁵, governo norte-americano⁷⁶ e Estado nacional⁷⁷, que mantém a ficção de legalidade durante o desenvolvimento do conflito.

Por sua vez, na escala local, a manifestação desta coalizão de repressão foi reproduzida através da articulação de vários atores: mercenários nacionais e estrangeiros, redes de poder político ou coalizões políticas dominantes na regional, autoridade policial (brigadas do Exército Nacional e comandos de polícia), comerciantes (distribuidores ou intermediários), empresários do transporte, empresários de exploração mineira, camponeses ricos, ou empresários (cafeteiros, floricultores, arroteiros, bananeiros, palmeiros, canavieiros etc.), latifundiários, narcotraficantes, vítimas da violência insurgente, e agentes paupérrimos em procura de sobrevivência (FRANCO, 2009; GUTIÉRREZ, 2014).

Franco chama a atenção para entender que na escala local do bloco de poder, faz-se mais evidente os mecanismos da ilegalidade, ou melhor, da unidade dialética entre legalidade e ilegalidade, no marco de uma estratégia de coerção e consenso desdobrada pelo *bloco contra insurgente*. Como afirma Franco (2009, p. 224),

[la escala menor] es el lugar de la reproducción porque allí la guerra permite y se alimenta de la manifestación de los conflictos locales; allí se recluta y accede a la información y los recursos que permiten ejercer el control de la población; ella es el lugar de producción de la movilización contra insurgente.

⁷² Grupo Empresarial Bavaria, Organización Ardila Lulle, Organización Sarmiento Angulo, Sindicato Antioqueño. Ver: Franco (2009), p. 223.

⁷³ Alguns exemplos dados por Franco (2009) são: Fedegan, SAC, AUGURA, Fedearroz, Asocaña, do setor agrário; Andi e Fedemetal, setor industrial; Fenalco, do setor comercial; Asobancaria, setor financeiro. Conta Franco (2009), que segundo as denúncias públicas, os que pertencem à fração agrária e comercial têm se vinculado, através de seus filiados, mais ativamente na reprodução dos operadores ilegais da guerra contra insurgente.

⁷⁴ RCN (televisão e rádio), Caracol Televisión e Caracol Radio e outros meios de propriedade familiar como El siglo, El País, El Colombiano y El Tiempo.

⁷⁵ Algumas empresas estrangeiras que foram denunciadas por algum tipo de participação na luta constrainsurgente (legal e ilegal) citadas por Franco (2009) são: British Petroleum, Oxy, Occidental Petroleum Corporation, Rpsol, Drummond Ltda., Drummond Inc., Cemex, Ladillera Santafé, Holcim, Muriel Mining Corporation, Chiquita Brands International, Dole, Texas Petroleum Company, Union Fenosa, Coca Cola, Glencore-Xrta, Anglo America, BHP Billinto, etc. Empresas como a Texas, DynCorp e Mosnanto, fsao exemplo daquelas que fizeram lobby para a destinação de recursos estadunidenses no Plano Colômbia de luta antinarcóticos e constrainsurgente. (FRANCO, 2009:223).

⁷⁶ Bem sinala Franco (2009) que a participação dos Estados Unidos no bloco constrainsurgente foi feita através de organizações como: U.S. Agency for International Development, Central Intelligence Agency, delegados e unidades militares as corporações de serviços militares como DynCorp Aerspace Operation o Northrop Grumman Corporation que apoiam a condução de operações, dão assessorias e treinamento entre outras. (FRANCO, 2009:223).

⁷⁷ Poder executivo, força pública, membros da burocracia judicial e representantes políticos do poder legislativo.

Em primeiro lugar, a função que cumpre o Estado capitalista de salvaguardar os interesses das classes dominantes, encaminha à organização desse bloco sobre a base da articulação do aparato de Estado com o apoio paradoxal de setores das faixas subalternas da sociedade, que podem chegar a ser estruturados como agentes organizados no âmbito da ilegalidade (FRANCO, 2009). O aparato estatal cumpre um papel preeminente e sobressalente nesta coalizão de poder, dadas suas funções de organização da hegemonia de classe e desorganização dos setores subalternos.

Na função organizadora do bloco de poder contra insurgente e de desorganização e fragmentação dos setores subalternos (campesinos, indígenas, sindicalistas, opositores políticos, ambientalistas, entre outros), com demandas contenciosas de democratização política, o aparato estatal orienta a configuração de um complexo e por vezes contraditório conjunto de mecanismos institucionais e práticas contra insurgentes para enfrentar os *dilemas da insegurança do poder* (FRANCO, 2009). Esse princípio da guerra contra insurgente descansa na intersecção de uma unidade de legalidade-ilegalidade (FRANCO, 2009) que faz parte da mesma estrutura institucional e o mesmo funcionamento estrutural do Estado.

Franco dá luzes para compreender como o funcionamento estrutural de Estado durante a guerra contra insurgente se expressou de diferentes maneiras. A primeira, foi a organização militar da população civil na função das instruções policiais e militares numa prática realizada desde meados do século XX, e que se acrescentou desde meados dos noventa (FRANCO, 2009). Baseado neste princípio, o ciclo de difusão paramilitar organizou a população no local como uma das funções primordiais das forças armadas do Estado, mantendo uma relação de cooperação e assistência de “apoio civil” à causa contra insurgente, que intercede na prevenção dos processos de transformação revolucionária e de reformas democráticas na escala local.

Uma segunda função do aparato de Estado na organização do bloco contra insurgente se desdobra através do poder executivo porque nele se concentra o poder da fração hegemônica e o papel dominante do Estado. Franco (2009) define a tessitura orgânica nessa época entre o poder executivo com empresários e grêmios da indústria, na redefinição da função do Estado. Em particular, o uso dele na formulação da política macroeconômica na perspectiva da liberdade de empresa e competência, a regulação estatal da reorganização da propriedade e sua proteção, a participação nos novos mercados criados pelo Estado (saúde, segurança social, serviços públicos, educação, telecomunicações etc.) e a participação em contratos e licitações (FRANCO, 2009).

Além disso, a responsabilidade organizativa do executivo em matéria de luta contra insurgente é em vários campos que Franco resumem no seguintes: o tratamento específico do inimigo interno (assunto ao qual darei atenção especial mais tarde); a concepção e implementação das políticas de segurança; a combinação ou complementaridade destas iniciativas em matéria de política criminal; a reclamação do monopólio sobre a guerra em cada conjuntura no marco da luta pela legitimidade; e o aumento do gasto militar e o estabelecimento de relações de cooperação militar (por exemplo, o *Plan Colômbia*), entre outras. Sobre este último tópico, por exemplo, numa das veredas estudadas nesta dissertação, a vereda Santa Clara do município de Fundación, foi criado o *Batallón de Alta Montaña n.º. 6* mediante a disposição n.º. 010, de 7 de maio de 2004 (EL INFORMANTE, 2019)⁷⁸.

Como terceira medida que caracteriza a coalizão da repressão, Franco analisa a função do Poder Legislativo e o aparato do Poder Judiciário como outros geradores de condições institucionais para o desdobramento da estratégia contra insurgente. O Poder Legislativo estruturou e validou a ordenamento jurídica que orientou parte da luta contra insurgente desde o congresso da República. Por sua vez, o Poder Judiciário promoveu e garantiu a criação de condições na escala local, na medida em que desde os escritórios da *Fiscalía General de la Nación*⁷⁹, a ação penal na fase da pesquisa foi se convertendo em um dos principais meios da impunidade a respeito da criminalidade contra insurgente e da política criminal orientada pelo Executivo (FRANCO, 2009; IPC, 2010).

Sobre a impunidade sistemática que existe em várias regiões colombianas, eu pude verificar durante meu trabalho na *Fiscalía General de la Nación* as dimensões desse fenômeno. Trabalhando diversos casos de populações que sofreram violência política e deslocamentos forçados, além de homicídios, massacres, ameaças, entre outros delitos, na região de Urabá - noroeste da Colômbia - um dos mecanismos de vitimização que conseguimos identificar com a equipe interdisciplinar direcionado contra as populações subalternas (sindicalistas, camponeses, opositores políticos, líderes comunais, líderes ambientais etc.), era a impunidade exercida desde os escritórios administradores de justiça local (IPC, 2010). De fato, nesse sentido, pode-se afirmar que umas das sequelas da guerra contra insurgente nas populações de diferentes regiões com as que comparti vários diálogos durante minha experiência profissional, é o sentimento de angústia e desconfiança frente à situação adversa de que os escritórios encarregados de

⁷⁸ Disponível em: https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/325-el-informador-61-anos/especiales-61-anos/209916-batallon-de-alta-montana-no-6-15-anos-contr-el-crimen-organizado-en-la-sierra-nevada?__cf_chl_jschl_tk__. Acesso em: maio 20 de 2020.

⁷⁹ A *Fiscalía General de la Nación*, foi criada pela Constituição Política de 1991 para o cumprimento de funções de pesquisa e acusação. Essa instituição é a principal responsável pela execução da política criminal.

administrar justiça estivessem garantindo a impunidade dos agressores: fossem mercenários paramilitares, empresários financiadores, latifundiários acumuladores de terras ou agentes do aparato estatal, entre funcionários e membros das forças armadas⁸⁰.

A garantia de impunidade e o modelamento da política criminosa, afirma Franco, facilitaram a consolidação dos operadores legais e ilegais durante os anos da violência contra insurgente. Isto alcançou êxito através de um conjunto de práticas institucionais hegemônicas de funcionários públicos determinantes no estabelecimento dos sistemas de pensamento. As práticas institucionais se desdobraram em diversos cenários da vida regional, oscilando entre legalidade e ilegalidade, entre ação e omissão. Os dois tipos de práticas agrupadas nas “práticas administrativas” e “práticas processuais”⁸¹, não aparecem como falhas, mas como conjuntos de ações dirigidas a impedir e distorcer o castigo judicial e a criminalidade burocrática e irregular contra insurgente (FRANCO, 2009; IPC, 2010).

Também é importante destacar que dentro das práticas administrativas, Franco identifica a perseguição, sanção, traslado ou destituição de funcionários em razão das pesquisas que desenvolviam ou por decisões adotadas⁸².

Resumidamente, as práticas criminais constituíram um sistema de condições para o avanço da violência paramilitar ambientando uma ordem em diferentes escalas da vida cotidiana das populações subalternas, onde a impossibilidade da justiça para elas por parte das instituições de Estado sobressai como traço da dominação (FRANCO, 2009). Desaparição ou ocultamento de provas, a celebração de acordos clandestinos de não persecução criminal, a duplicação das declarações de testemunhos, o uso de testemunhos falsos, a modificação de atas de inspeções e alteração do crime e o entrega de informação aos grupos ilegais (paramilitares), entre outras, foram alguns dos mecanismos ou práticas de funcionários de Estado no local na implantação das condições para a difusão da guerra contra insurgente.

⁸⁰ Sobre o tema da impunidade em urabá, consultar *Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación Jurídica Libertad, “Memoria de la impunidad en Antioquia. Lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo.* 2010. Medellín.

⁸¹ A respeito das “práticas processuais”, Franco (2009) identifica a modificação da tipificação dos delitos; dilatação na investigação até provocar o fechamento das pesquisas; ditar resoluções de preclusão de maneira irregular; desestimar o acervo probatório; dar credibilidade a informação procedente de reinserido ou informante; ceder funções de indagação ou polícia judiciária a agentes de inteligência militar; operar em instalações militares; obstruir a compilação de provas solicitadas pela parte civil; omitir as denúncias recebidas ou negar sua recepção; ser negligente na preservação da cadeia de custódia; dentre outras.

⁸² Só para dar um exemplo, lembro-me do caso de um funcionário judicial do escritório da Fiscalía General de la Nación em Santa Marta com quem tínhamos feito uma articulação para a troca de informação. Ele me relatou em várias ocasiões como foi perseguido e trasladado pela busca da verdade sobre a violência paramilitar na região do Magdalena e como vários de seus amigos foram assassinados por seu trabalho (DIARIO DE CAMPO).

Como quarto aspecto, pode-se dizer que nesse contexto de geração de condições sociais para o desdobramento ilegal e legal da estratégia contra insurgente, os governos locais foram uma instância fundamental. É no âmbito local onde foram-se tecidas redes sociais que suportam a estrutura paramilitar: redes de informantes e vigilantes, apoios logísticos, contribuintes, entre outros (FRANCO, 2009). Aquelas redes do governo local permitiram o trânsito de uma fase de choque a uma de consolidação, seguindo seus próprios interesses privados (materiais ou políticos); ou pela afinidade ideológica com o sentido da luta contra a subversão armada e, as organizações e movimentos sociais. A generalização de apoio ou legitimação à causa contra insurgente nos âmbitos institucionais locais (que responde não aos interesses do Estado *per se*, mas sim aos que ele representa das fracções de classe dominantes), se propagou através de organizações de núcleos de apoio à causa, que permitiram o acesso à renda do Estado (entrega de contratação, desvios de recursos, cargos etc.) e a possibilidade de troca de benefícios eleitorais ou materiais para interesse próprio (FRANCO, 2009).

Um quinto assunto dessa coalização de repressão que a professora Franco (2009) desenvolve em seu livro são os beneficiários silenciosos da guerra contra insurgente: latifundiários e o grande capital, numa conjuntura onde a função do aparato estatal gerou as condições para sua valorização. Nas palavras de Franco (2009), isto foi traduzido em fornecimento de recursos financeiros ao mercenarismo contra insurgente por parte de grandes proprietários nacionais e estrangeiros industriais, fazendeiros de gado ou comerciantes, com base no argumento dos chefes paramilitares, da contribuição lógica “*porque ven constreñidas su inversión por el terrorismo y la barbárie de una guerrilla [...]*”⁸³ (FRANCO, 2009, p. 247).

Por último, a participação dos setores subalternos seria um sexto elemento da configuração do *bloco contra insurgente* com funções que na prática ajudaram na consolidação no contexto local da hegemonia da ordem paramilitar. Esta característica eram comuns nas visitas de campo ou nos trabalhos comunitários com as populações vítimas quando algumas delas relatavam sobre seu apoio (por coerção ou vontade como mecanismo de sobrevivência) às forças mercenárias para estabelecer o controle territorial na Serra e partes planas, aspecto que determinou desconfiças entre as populações (DIÁRIO DE CAMPO).

Como fala Franco (2009), é evidente que o processo de estruturação do *bloco de poder contra insurgente* não se compõe exclusivamente pelos setores predominantes da materialidade institucional e as fracções da classe dominante, mas também se integrou sobre a base de setores subalternos que na guerra serviram de apoio ao aparato estatal e ao bloco de poder, ajudando-

⁸³ Declaración de Carlos Castaño Gil en: *El Colômbiano*, Medellín, 7 de septiembre de 2000, p. 7

os na configuração da ordem interior através da repressão e a proteção violenta de interesses econômicos específicos (FRANCO, 2009).

Estes setores são representados pela autora por ex-militares, e setores da população subalternizada formada por frações miseráveis, não organizadas, não apenas destituídas de recursos econômicos, mas também desprovidas de consciência política e de classe, sendo, portanto, suscetíveis de servir aos interesses das classes hegemônicas e que terminaram como ladrões ou assassinos atraídos desde a delinquência organizada. Dissidentes da insurgência que nunca pareceram confiáveis ante sua nova organização, desempregados em procura de meios de subsistência, vítimas em procura de vingança, narcotraficantes em procura da proteção ou benefícios jurídicos, entre outros (FRANCO, 2009).

Sobre esses setores destaco finalmente que em meu tempo de funcionário na região nas entrevistas a alguns solicitantes de restituição de terras fizeram parte de grupos paramilitares da região norte do Magdalena como combatentes rasos pagos, frente à extrema pobreza, à capacidade de coerção contra insurgente que terminou lhes inserindo no bloco, ou também pelas possibilidades e benefícios que ela brindava (DIÁRIO DE CAMPO). Ainda que esses setores subalternos pareçam perseguir seus próprios interesses (defesa da agressão insurgente, extrair rendas, ostentar poder, construir monopólios de proteção etc.), os objetivos maestros ao que respondem na guerra são os das classes dominantes (FRANCO, 2009).

4.3.3 Definição política do inimigo

A instrumentalização das populações étnico-rurais nos interesses estratégicos dos diferentes grupos armados tem sido uma constante, com intensidades e dinâmicas diferentes segundo o período do conflito armado e a região da que se fale. Em geral, as ações armadas sempre foram acompanhadas de intentos de legitimação da violência frente às populações para conseguir seu apoio e aval.

Mostrei acima como durante a hegemonia guerrilheira (1982 – 1994) na Serra, os grupos insurgentes buscaram primeiro ganhar a confiança das populações campesinas e indígenas e, depois, impor sobre eles regras e normas de convivência e permanência nestes setores. Fosse por apoio ou por coerção, tanto a *Frente 19* das FARC-EP quanto o Frente de guerra *Francisco Javier* do ELN estabeleceram condições que, com o avanço dos grupos paramilitares, gerou uma mudança radical nessa instrumentalização por parte do bloco ou coalizão da repressão contra insurgente, baseada principalmente na definição política das populações como inimigas.

Um fato manifesto na Serra é que o controle cotidiano das populações serranas determinou a reprodução e a configuração, tanto material como simbólica, dos camponeses e indígenas. Esta fase do avanço, difusão e consolidação territorial da guerra contra insurgente, produziram efeitos devastadores sobre as populações étnico-rurais dado a exacerbação e o aumento das práticas da violência justificadas a partir da definição política do inimigo.

É o aparato estatal em estrita correspondência com os interesses do bloco do poder que representa, é que define formalmente quem faz parte o inimigo interno, e a quem é necessário combater para preservar a segurança e a ordem. Bem assinala Franco (2009) que a definição do inimigo não é apenas uma construção mecânica *de la Doctrina de Seguridad Nacional*, mas uma estrutura objeto do conflito no campo político interior e no diálogo com a política anticomunista da ordem mundial.

O reconhecimento do inimigo interno fundamenta-se no conhecimento da hostilidade. No entanto, afirma Franco (2009, p. 268), a hostilidade não é exclusiva de meros fatos de violência dos rebeldes, mas também se define “em relação com a existência de objetivos e interesses contrapostos ao interior de uma relação de poder”.

O território funciona como um campo de forças, uma teia ou redes do *bloco contra insurgente*, que a par de sua complexidade interna, como diz Lopes (1995, p. 86), “define, ao mesmo tempo, um *limite*, uma *alteridade*: a diferença entre “nós” (o grupo, os membros da coletividade ou “comunidade”, os *insiders*) e os “outros” (os de fora, os estranhos, os *outsiders*)”. O que faz ao outro existencialmente distinto são seus interesses e a identidade que eles delimitam, e suas implicações na configuração da ordem territorial que criam uma inimizada.

... son intereses que se configuran dentro de una dimensión espacio-temporal en el marco de las relaciones de poder, y que se revelan a través de la acción y el discurso, son intereses-e incluso valores- que determinan la búsqueda de objetivos incompatibles. Así, esa condición de ser otro se interpreta políticamente como enemistad cuando se considera que constituye una negación del propio modo de existencia,⁸⁴ una amenaza al logro y preservación de ciertos intereses. (FRANCO, 2009, p. 269).

Neste sentido, o reconhecimento do inimigo a partir dos interesses que ele pode afetar na escala local e nacional desata e anima não só a sua perseguição, mas o reforço do próprio poder, inclusive servindo-se de recursos ilegais:

O inimigo se reconhece e teme não tanto por seus meios [...] mas pelo que persegue através deles [...] pelos objetivos que o orientam, pois são eles os que verdadeiramente ameaçam um modo de existência (FRANCO, 2009, p. 269).

⁸⁴ Carl Schmitt, *El concepto de lo político*, op. Cit.

A autora propõe entender a divisão deste antagonista em dois: por uma parte, o inimigo efetivo, que corresponde aos grupos declarados em rebelião – as guerrilhas - dispostas a morrer e a matar por uma causa que funda sua identidade. Por outra, o inimigo objetivo, que é, aos olhos do aparato estatal e dos grupos que compõem o *bloco contra insurgente*, um portador de tendências. O primeiro dos antagonistas é inimigo armado, enquanto o segundo é a comunidade de legitimação. Nesse sentido, o inimigo objetivo ou inimigo imaginado é igualmente perseguido quando a suspeita de rebelião não é clara, acusando assim as organizações com reclamações contenciosas ou populações como obstáculo dos interesses dominantes do *bloco contra insurgente*, de participar do inimigo efetivo (as guerrilhas) com base em algum traço, circunstância ou comportamento para justificar sua perseguição e aniquilação (FRANCO, 2009).

Cabe destacar que para o Estado e o bloco de poder dominante, o inimigo é antes de tudo político e não um simples inimigo militar. Quer dizer - como mostra Franco (2009) - que não é só aquele que, baixo a estratégia guerrilheira, disputa o monopólio da força. É também aquele que, cujas reivindicações reformistas em um contexto espacial e temporal determinado, se opõe ao desejo de acumular e manter o acumulado, e pode chegar a alimentar a configuração de um projeto político oposto ao hegemônico.

O inimigo insurgente (ou inimigo efetivo) é concebido como um movimento organizado em diversas formas (uma delas de caráter civil) e disposto a mobilizar diferentes recursos para disputar o controle do aparato estatal para subverter a ordem existente. Desde os lugares de enunciação por políticos e operadores militares da luta contra insurgente, esse inimigo insurgente começou a ser reconhecido dentro da população, sobre o suposto reitor de que “*el enemigo puede estar en todas partes e a toda hora*” e “*el que no está conmigo o está contra mí*” (FRANCO, 2009, p. 275). Desde esta perspectiva,

...la existencia de la “dimensión civil” del enemigo interno, bien sea como apoyo activo o pasivo, es la clave de la guerra de guerrillas [...] De acuerdo con las directrices operacionales [de mandos militares y políticos de turno] que allí se infieren, la confrontación de la insurgencia no se reduce al intento de destrucción de la “fuerza táctica”, sino principalmente a la eliminación o neutralización del liderazgo del movimiento insurgente, los cuadros políticos locales y sus comunidades de legitimación. (FRANCO, 2009, p. 275)

Sobre esse princípio, configurou-se então um julgamento desde as instâncias da coalizão de repressão sobre os camponeses e camponesas da Serra como auxiliares ou simpatizantes da guerrilha, pelo fato de terem sido setores que esse grupo armado controlou e transitou desde a década oitenta. Este julgamento foi parte do processo de definição do inimigo que responde à responsabilidade política da definição e criminalização do inimigo político-militar que cai sobre o

aparato estatal. Isto, em razão de sua função de organização do bloco contra insurgente no poder e a desorganização dos setores subalternos que podem chegar a alterar a estrutura do poder ou socavar a qualquer medida a taxa de ganância.

Uma das premissas conclusivas que Franco oferece para entender esse período de difusão e escalada da guerra contra insurgente em meados da década de 1990 no Caribe Colombiano e particularmente nos setores estudados nesta pesquisa, é que a definição do inimigo da guerra contra insurgente determinou o uso exacerbado da violência não só exclusivamente sobre a insurgência, mas principalmente sobre as populações subalternas, com diferentes efeitos sobre as reconfigurações na produção do espaço e os sujeitos nos territórios serranos como veremos na continuidade.

4.4 EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA CONTRA INSURGENTE: RECONFIGURAÇÃO SÓCIO ESPACIAL DURANTE O ESCALAMENTO DA VIOLÊNCIA EM FUNDACIÓN E ARACATACA

Depois de revisar conceitualmente as fontes objetivas da mobilização contra insurgente, as características da estrutura e organização do bloco de poder também chamado coalizão de repressão, e a definição política do inimigo, prosseguirei para encerrar este capítulo com um dos elementos centrais na análise desta pesquisa: os efeitos e as consequências da reconfiguração territorial nesse contexto volátil de ciclos de violência nas populações da SNSM, particularmente as áreas de montanha de Fundación e Aracataca. Nesta última parte do Capítulo 4, além de algumas fontes documentais, estudos acadêmicos e dados oficiais sobre a violência, pretendo focalizar na escala local fazendo uso das entrevistas a profundidade que fiz com alguns campesinos dessas áreas, e das notas em campo realizadas durante os anos como funcionário público em temas de conflito armado e de restituição de terras.

O controle sobre as vidas das populações serranas se incrementou ao tempo em que a guerra escalava e virava mais cruenta. A violência se enquistou nas relações socioespaciais do dia a dia, nas formas de agir (e não agir), no controle sobre esses corpos, nas maneiras de se relacionar entre vizinhos e nas maneiras estratégicas de (sobre)viver em condições absurdamente adversas. Territorialidades rurais que seriam instrumentalizadas pelas lógicas cotidianas de uma produção (e destruição) do espaço numa lógica “amigo-inimigo”, onde se agudizou a associação dos campesinos serranos com a insurgência por parte de paramilitares mercenários e membros do Exército Nacional, a Polícia Nacional e as autoridades judiciárias. Sobre o fundamento da disputa do território e da legitimidade, a estratégia contra insurgente enfocou sua atenção em buscar estabelecer os próprios apoios e simpatias, ao tempo em que

destruía os da insurgência para construir a própria comunidade de legitimação, e assim, destruir e castigar o inimigo.

Já foi falado como a capacidade militar do Estado aumentou consideravelmente neste período do segundo quinquênio dos anos noventa e começo do milênio. O processo de militarização da Serra pelo aparato estatal e os paramilitares fazia parte da política de segurança nacional justificada na derrota da insurgência e na defesa dos interesses hegemônicos mediante a confrontação militar, contemplada nos governos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) e Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Figura 11 - Imagem jornal de circulação nacional “El Tiempo” sobre a guerra contra a guerrilha das FARC –EP.



Fonte: El Tiempo, 18 de agosto de 2002. Tomado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1381844>.

Os acordos de cooperação militar com os Estados Unidos *del Plan Colombia* e a guerra antinarcóticos, mais que acabar com a guerrilha e consolidar territórios em paz, acrescentou a violência, o deslocamento forçado, a espoliação, a violação de direitos humanos e a perda de liberdades civis e políticas das comunidades subalternas. A ascensão do poder militar expressou-se no incremento de soldados recrutados geralmente dos setores subalternizados, a implementação de armamento para o combate aéreo e fluvial, e a modernização das

comunicações. Neste período, foram destinados importantes recursos do orçamento nacional em detrimento do desenvolvimento de políticas sociais e agrárias (MORENO, 2012). Na nota de imprensa da imagem do presidente cercado por militares, por exemplo, se diz que com a chegada do novo governante, seria aplicado o *Estatuto Antiterrorista*, que operaria como um imposto ao patrimônio para 420 mil cidadãos, “*destinación inmediata de dos billones a las Fuerzas Armadas, crecimiento en 10 mil hombres del pie de fuerza de la Policía y de 30 mil en el Ejército*” (EL TIEMPO, 2002).

No período aqui estudado, a violência se espalhou como traço fundamental na (re)configuração socio territorial da SNSM e das áreas das planícies. Como eu mencionei antes, ela foi exercida a partir de um motivo político do Estado em função dos interesses dos participantes do bloco de poder, em nome da segurança, liberdade (de locomoção), propriedade e paz, em defesa do Estado e dos cidadãos de bem.

Sua intensidade foi tanto com as guerrilhas, mas sobretudo, contra colaboradores (voluntários ou constrangidos) e simpatizantes das guerrilhas; como contra organizações e movimentos sociais e defensoras de direitos humanos que faziam reclamações contenciosas local ou nacional, contra organizações políticas opositoras, e em geral contra aquele que fosse visto como obstáculo para o avanço e consolidação dos interesses das elites regionais, comerciantes, empresários, políticos etc. (FRANCO, 2009).

Paulatinamente, a configuração violenta do espaço para prevenir e castigar, para disciplinar e desorganizar, para estabilizar e regular, apresentou-se em dois períodos denominados por Franco (2009) como: a “guerra como ação” e o “estado de guerra”.

Os mecanismos de reprodução e as formas adotadas da violência exacerbada no tempo da “guerra como ação”, determinaram a aparência do “estado de guerra”. O primeiro, responde ao momento do escalamento das infrações e as violações dos direitos humanos; o segundo, após à exacerbação da violência, ou seja, a fase dos efeitos resultantes nas populações da SNSM. Como aponta Franco, a violência exercida sobre a base da impunidade exhibe os resultados de sua missão de desorganização e, portanto, sua função de estabilização e regularização.

Sobre o tempo e o espaço do “estado de guerra” pensarei com maior atenção no Capítulo 5. Por enquanto vou estudar neste final deste capítulo a maneira como se reconfiguraram os territórios e os sujeitos étnico rurais na SNSM a partir do estabelecimento da violência e da “guerra como ação”.

Durante a “guerra como ação” em várias regiões da Colômbia, a confrontação armada foi aberta e evidente, com ciclos de escalamento e difusão com diferentes intensidades sobre a

base do extermínio e a intensificação do uso da violência extrema. Neste ciclo no Caribe, além das forças insurgentes como objetivo fundamental, a guerra se focalizou na população organizada e semi-organizada vistas como fonte de apoio e legitimidade da estratégia contra insurgente. Acima de tudo, o objetivo era o controle e a vitimização destes setores para garantir sua destruição como sujeito em sua subjetividade e na perspectiva da dominação (FRANCO, 2009).

A produção de terror nas cotidianidades dessas territorialidades rurais na SNSM foi central na mobilização dos anos da guerra contra insurgente porque serviu, como mostra Franco (2009), de comunicação e propaganda para os sobreviventes sobre as consequências de proceder com os rebeldes ou contra os interesses dominantes. “Matar não é suficiente”, cita um dos relatos colhidos por Franco (2009) na sua pesquisa. A destruição do sujeito, da subjetividade e das noções de coletividade decorreu como um dos principais efeitos nas trajetórias territoriais das populações subalternas, através de práticas de assassinatos, desaparecimento forçada, massacres, deslocamento forçado e despojo de suas terras.

No caso particular do Caribe e da SNSM, entre 1996 e 1999 as primeiras comissões de grupos de mercenários de ordem paramilitar, se expandiram por meio de ações bélicas em aliança com grupos de segurança privada emergidos na época *bonanza marimbera*. Iniciou-se então uma campanha de extermínio de supostos colaboradores e auxiliadores da guerrilha nas zonas baixas e medias da Serra, e em geral, na região Caribe. “*La mayor parte de las comunidades fue considerada por éstos (los paramilitares) como colaboradores de la guerrilla debido a la hegemonía guerrillera que imperó por casi 10 años*” (ENTREVISTA CAMPESINA 2), afirmou uma das campesinas entrevistadas da área de Fundación.

Depois de incursionar com massacres e assassinatos seletivos no centro do departamento (CNMH, 2017), planejados em parte por fazendeiros e latifundiários de essas áreas que estavam no foco das ações da insurgência; milicianos das forças irregulares assentaram-se na área urbana de Aracataca e Fundación através de vários assassinatos seletivos. Em seguida, vários comandos armados ampliaram sua violência em Santa Rosa de Lima, onde fixaram um acampamento (ENTREVISTA CAMPESINA 3), e também em Ballevista e Loma de Balsamo, pontos de entrada da Serra controladas pelas FARC-EP.

O avanço destes comandos ativou o acionar armado da insurgência contra as estações de polícia e escritórios das instituições locais, incrementando-se assim o número de combates entre as FARC-EP e a coalizão das forças de mercenários com as forças armadas do Estado. Essas primeiras incursões foram relatadas pelos campesinos nos seguintes termos:

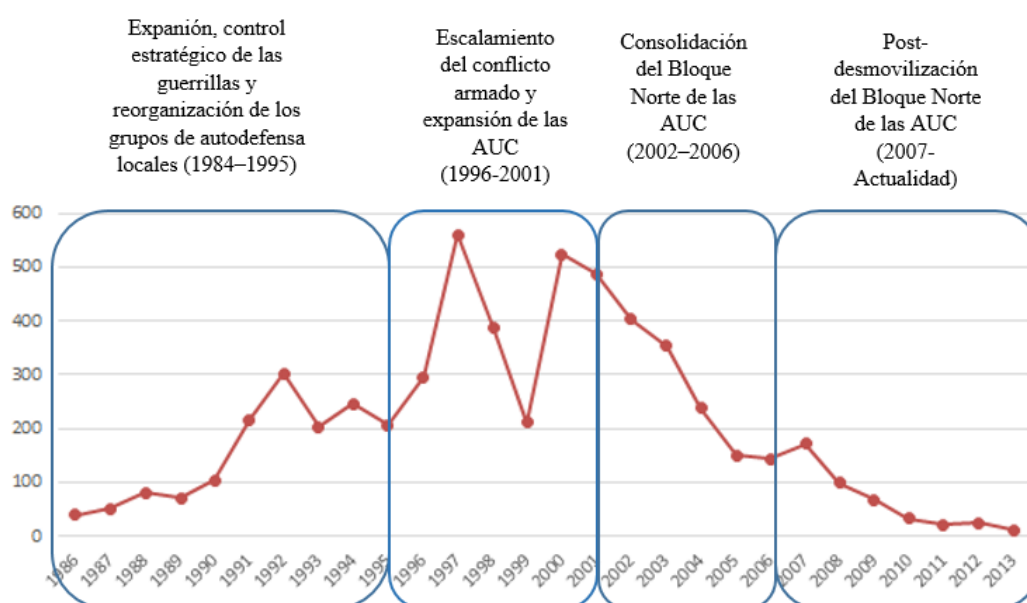
la primera masacre que hubo aquí en este sector fue en Monterrubio que mataron 12 os 14 juntos. Yo recuerdo que la Loma del Bálsamo amanecía llena de ejército decía uno, la loma amaneció llena de ejército, y vamos a ver que eran paramilitares porque es que era que el ejército andaba con los paramilitares, y yo lo digo porque en la finca llegaron los paramilitares revuelto con el ejército porque en el ejército iban unos pelaos conocidos míos que estaban prestando el servicio y cuando los paramilitares me tenían rodeado que me retupiaban esos fusiles, en el momento llegaron esos pelaos y me saludan señor [...] como está, ellos se quedaron mirando cómo así, de pronto eso fue una de las cosas que salvaron a mí". (ENTREVISTA CAMPESINA 3).

...venían junto con el ejército y no se podían diferenciar. En esa ocasión interrogaron a los campesinos usando maltrato verbal y físico, usando cabuya para amarrarlos, poniéndolos de rodillas, mostrándole la machetilla, intimidándolos y tratándolos como guerrilleros y colaboradores. (ENTREVISTA CAMPESINO 4).

Os primeiros anos do desenvolvimento do mercenarismo corporativo significou uma fase de escalada para o controle territorial da Serra e suas populações étnico-rurais para restabelecer – seguindo Franco (2009) - o *imperium* do poder estatal. O escalamento foi localizado e paulatino, território por território até a recuperação do domínio e restabelecimento da ordem tanto na parte plana como na Serra, fase que deixou atrás uma dinâmica de baixa intensidade do primeiro ciclo aqui estudado (1975-1995). Ela consistiu na exacerbação da disputa gradual pelo domínio territorial em áreas de influência ou domínio insurgente, corredores militarmente estratégicos ou áreas de proteção e interesse econômico atual ou futuro (FRANCO, 2009).

Pese as dificuldades no acesso à informação oficial sobre os municípios de Aracataca e Fundación, no seguinte gráfico se resume a dinâmica de escalação dos homicídios no município vizinho de Ciénaga em quatro fases, ligadas às dinâmicas sub-regionais da parte ocidental da SNSM: i) hegemonia guerrilheira e reorganização de grupos de autodefesa locais (*combos marimberos*); ii) escalação do conflito armado e expansão das Autodefesas Unidas de Colômbia (AUC); iii) consolidação do bloque norte das AUC; e iv) post-desmobilização do Bloque Norte das AUC.

Gráfico 5 Homicídios município vizinho de Ciénaga (1986 – 2013)



Fonte: Construção própria a partir dos dados da *Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV)*. *Red Nacional de Información*.

Como se observa no gráfico anterior sobre os homicídios, nesse período da expansão dos paramilitares deu-se o maior esforço bélico das forças irregulares contra insurgentes e das forças armadas do aparato estatal, como parte da estratégia de expansão territorial e o crescimento dos combates relativos ao reforço das forças armadas estatais contra os rebeldes e à vitimização das populações subalternas.

A coalizão contra insurgente, explica Franco (2009), alcança o controle das populações e seus territórios sobre a base do extermínio e da expulsão, para abrir caminho para o ciclo de manutenção e consolidação que corresponde ao “estado de guerra”, correspondente aos períodos de consolidação e desmobilização do Bloque Norte das AUC. O trânsito de um tempo a outro, quer dizer, da “guerra como ação” ao “estado de guerra”, tem a sua vez várias fases como:

concentración de fuerzas, establecimiento de contactos locales y cooptación de autoridades locales, destrucción de comunidades de legitimación de la insurgencia y exterminio del enemigo objetivo, organización de unidades locales con pobladores, ocupación del área, control de la población, y establecimiento de un orden de subordinación [...] es el tiempo [...] en el que la confrontación directa es evitada aunque no significa que no se presente; y se intensifica la violencia física o directa o el uso de formas de violencia extrema contra el enemigo efectivo y objetivo. “Las matanzas más grandes

fueron cuando estábamos metiendo la inteligencia”.⁸⁵ (FRANCO, 2009, p. 499)

Nas vésperas das eleições para prefeitura (2003) em Aracataca “*se recrudeció el conflicto y había enfrentamientos del ejército y paramilitares en contra de la guerrilla, eso día y noche se escuchaban los helicópteros bombardeando los caños y las montañas*” (ENTREVISTA CAMPESINA 7). Em Rio Piedras, as forças mercenárias levaram a cabo um massacre no qual foram torturados e assassinados quatro campesinos (CINEP, sem ano). Além disso, continuaram as indicações para a população civil, os combates, eventos de detenções arbitrárias, sobrevoos e algumas ameaças diretas, que levaram a vários abandonos da terra (ENTREVISTA CAMPESINO 6).

Nesse ano, as forças de mercenários depois chamadas e auto reconhecidas como *Bloque Norte* das AUC, logrou penetrar as partes altas da SNSM nas áreas tradicionais de retaguarda da Frente 19 das FARC-EP, o que coincidiu com operativos militares e emboscadas por parte da Frente 19 (EL TIEMPO, 2003). Além da vitória militar, se consolidaram as alianças políticas das forças contra insurgentes irregulares em Aracataca, Zona Bananera, El Retén e Fundación.

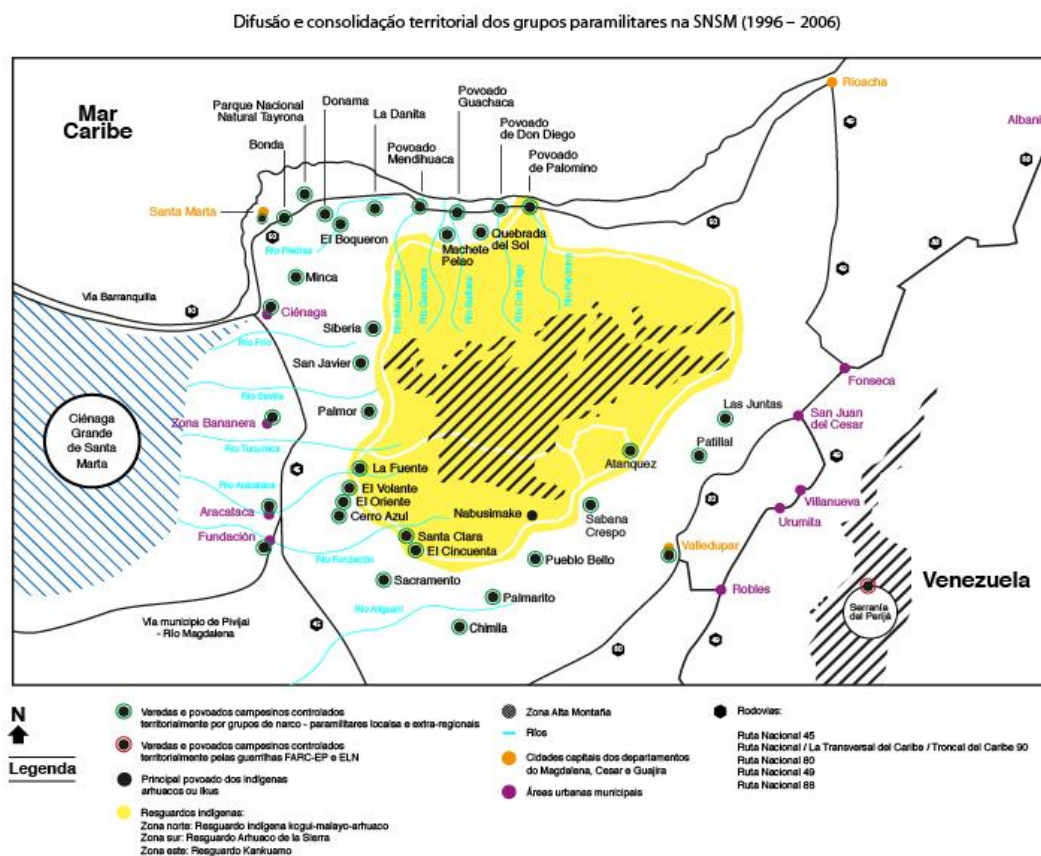
...habría hecho un pacto con este grupo para ganar las elecciones en octubre de 2003 a cambio de darles participación burocrática y económica en su administración. Para esas elecciones se presentaron tres candidato [...] En ese entonces, el más opcionado era Pedro, pero días antes del debate electoral se retiró de la contienda al parecer por presiones de 'Carlos Tijeras'. (EL TIEMPO, 2011)⁸⁶

O seguinte mapa, resume a (re)acomodamento dos grupos armados na SNSM com a consolidação paramilitar alimentada por uma política contra insurgente de Estado, em territórios de montanha antes controlados e dominados pelas guerrilhas.

⁸⁵ Entrevista a combatiente del Bloque Metro por Juan Diego Restrepo E., Medellín, agosto de 2000 (FRANCO, 2009).

⁸⁶ *El Tiempo*. Capturan a ex alcalde de Aracataca por presuntos nexos con 'paras'. 6 de abril de 2011.

Mapa 11 - Difusão territorial de grupos paramilitares na SNSM (1996-2006)



Fonte: Elaboração própria com entrevistas a campesinos das áreas estudadas e os dados da DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD -DAV, Regional Magdalena. Centro Nacional de Memória Histórica-CNMH. “BLOQUE RESITENCIA TAYRONA (BRT)”. Sem ano⁸⁷.

Contudo, no sentido que aponta Franco (2009), as formas da violência da guerra contra insurgente na Serra e na região Caribe, podem-se compreender a partir de cinco aspectos fundamentais: i) não pode ser ganhada só com a aplicação da força, de operações psicológicas, operações cívico-militares, propaganda, mobilização política, entre outras; ii) raramente envolve confronto militar direto entre exércitos uniformados; iii) o objetivo das partes é afetar a simpatia e as percepções da legitimidade e da obediência; iv) cada conflito é diferente e requer um conjunto de procedimentos operacionais específicos; v) as atividades militares estão fortemente circunscritas a considerações políticas, na qual as forças militares jogaram um papel menos importante que os organizadores políticos e pessoal não militar na determinação do resultado da guerra.

⁸⁷ As informações do mapa se baseiam principalmente nos dados qualitativos das localidades dos departamentos de Magdalena e departamento do Cesar. Respeito às localidades serranas do departamento da Guajira, são poucos os dados encontrados nas fontes documentais utilizadas nesta dissertação.

Na Serra a afetação das simpatias e percepções de camponeses e indígenas durante “guerra como ação” durante a expansão das forças paramilitares, foi uma das características centrais que afetou as vidas de milhões de pessoas. A legitimidade e obediência das populações rurais e urbanas foram invadidas através da exacerbação da violência. Tanto indígenas como camponeses e em geral, a fração de populações subalternas do campo e nas pequenas áreas urbanas⁸⁸, foram jogados à sorte da competição pela permanência em seu território de vida: ou jaze com eles (com bloco contra insurgente) ou está contra eles, ou segue as normas e valores morais hegemônicos impostos no cenário de guerra, ou como consequência será perseguido/a, exterminado/a, arrasado/a.

Estes mecanismos de coerção próprios dos anos dos escalamentos da violência se atualizam nos corpos dos camponeses e camponesas dos territórios serranos. Era evidente que nas jornadas e encontros no marco da execução da política de restituição de terras na que trabalhei, aparecessem relatos que falam dessas realidades em que as populações foram confrontadas entre elas pela sobrevivência num contexto volátil da guerra.

Yo era presidenta de la Junta Campesina y me dijeron que me querían matar, hasta que llegaron un día y me sacaron de la finca amarrada, los paramilitares quienes me llevaron a la vereda Tucurínca y charlando con ellos, me soltaron y me dieron oportunidad de salir de la zona, desde esa época salí desplazada para Valledupar (ENTREVISTA CAMPESINA 7).

Ja falei como uma das doutrinas da contra insurgência é que o incitamento armado guerrilheiro é primordialmente político, antes que atividade propriamente armada. A finalidade essencial da estratégia contra insurgente consistiu em identificar o inimigo entre a população

⁸⁸ Nos anos em que morei em Santa Marta e que falei com populações que foram deslocadas forçadamente e terminaram morando nas áreas urbanas da sub-região norte do departamento do Magdalena (Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Pivijay) e em geral em várias cidades da Costa Caribe, ouvi relatos do controle das percepções sociais e culturais impostas durante a fase de escalamento e consolidação sobre homossexuais, trabalhadoras sexuais, consumidores de alucinógenos, jovens metaleiros, entre outros. Conheci dois casos lembrados nas notas de minha caderneta de campo: o primeiro foi o de um amigo de uns 40 anos que trabalhava num bar do centro da cidade e que levou nos anos de escalamento e consolidação um tiro pelos paramilitares que controlavam o Mercado Central e lugares da cidade e da Serra. A justificativa dessa ação violenta, que era comum contra várias comunidades de jovens que faziam parte destas cenas musicais e sonoras urbanas, partia do estigma, estereótipos e imaginários sobre roqueiros e metaleiros através da denominada “limpeza social” numa sociedade maioritariamente católica e evangélica. O segundo caso lembrado em minha caderneta de campo foi o de um solicitante de restituição de terras que tinha sido combatente raso dos paramilitares, e que entrevistei. Em uma de suas falas ele me relatou como no momento de sua desmobilização foi morar na área urbana de Fundación e foi perseguido por seu consumo recreativo de maconha como parte de uma prática moralmente estigmatizada durante o período do estado de guerra. Sobre aqueles temas, o coletivo de antropólogas Casa Tachuelas da cidade de Santa Marta tem um trabalho orientador sobre as memórias narrativas sonoras e audiovisuais do Rock em Santa Marta no contexto da guerra contra insurgente, problematizando a naturalização desses imaginários por parte da cidadania como mecanismos de seguridade e controle urbano. Disponível em: <https://casatachuelas.wixsite.com/colectivo/red-de-memoria>. Acesso em 20 de agosto de 2020.

para exterminá-lo, entendendo que é a base social guarda simpatias ou cumplicidades com a insurgência. Franco desenvolve esta ideia no seguinte parágrafo. Para ela,

...el objetivo fundamental de la estrategia contra insurgente no son directamente las fuerzas rebeldes –de las que se ocupa centralmente el ejército oficial a través de operaciones de combate o persecución penal- sino la población (organizada y semi organizada) que cumplen alguna función en la guerra, bien sea a favor de la estructura propiamente militar, o en la política como parte orgánica o comunidad de legitimación. La doctrina señala: “El objetivo primario de los insurgentes es la población; por tanto, la contra insurgente tiene que separar la insurgencia de la población y sus recursos” [...] la doctrina orienta aplicar el principio de “quitar el agua al pez”, es decir, aniquilar a las bases sociales (simpatías y complicidades) para destruir a los insurgentes⁸⁹”. (FRANCO, 2009, p. 502)

Assim, considerando que redes de apoio, base social, estruturas ou quadros políticos e combatentes estão entre a população, não se diferenciam dela. Dessa maneira, ela torna-se centro de gravidade da guerra contra insurgente: “*es simultáneamente escenario y objeto de las hostilidades* (FRANCO, 2009). Para Franco, a população tem sido centro de gravidade,

...porque la guerra en su dimensión estratégica es tanto disputa por dominios territoriales como disputa por la legitimidad. Los es, además, porque está en juego el mantenimiento de la dominación política de clase, y la lucha contra los rebeldes se convierte en pretexto para sojuzgar todo aquello que sea signo de desorden, que muestre inconformidad o que sea obstáculo para el progreso del capital. Así, es centro de gravedad en un doble sentido: primero, como condición de reproducción de la guerra y fuente de legitimación, y segundo, como objeto de control y victimización (FRANCO, 2009, p. 504)

De fato, várias famílias campesinas e indígenas na Serra foram deslocadas com base nesse princípio sustentado no marco da guerra, em que distintas violências recaem tanto sobre o inimigo efetivo como sobre inimigo objetivo. Deste último, fazem parte as comunidades organizadas com fins reivindicatórios ou políticos, consideradas “*población civil constrainsugente*” (FRANCO, 2009, p. 508). Porém, também pessoas que indicam a possibilidade de que em certos contextos estejam cumprindo funções na guerra a favor das guerrilhas, ou pessoas que tiveram alguma interação casual ou consistente com membros da insurgência e que não compartilhem a causa ou apoio logístico dela, mas que moram nos setores estratégicos para esses grupos, como a SNSM. Também, afirma Franco (2009), pessoas que não integram a estrutura de nenhum conflito, isto é, que não se consideram sujeitos de interesse, e são escolhidas aleatoriamente em zonas em disputa, de influência ou domínio guerrilheiro (FRANCO, 2009).

⁸⁹ US Army Combined Arms Center Fort Leavenworth, *Counterinsurgency Operations FMI 3-07*, op. cit., pp. 3-2.

Esse esforço por subtrair a população das guerrilhas como parte da disputa pela legitimidade também é exercido pelas forças oficiais em procura de lealdade ao aparato institucional e o apoio dos objetivos militares. A população foi convertida em objetivo de operações cívico-militares e em particular, como mostra Franco (2009), de operações psicológicas através da propaganda e o terror que buscam afetar opiniões e valores, modificar comportamentos e transformar a subjetividade.

La población, afirma nesse sentido Franco (2009, p. 507), “*es importante como fuente de apoyo y legitimidad de la estrategia contra insurgente, pero sobretudo lo há sido como objeto de control y victimización para garantizar la destrucción como sujeto, en su subjetividad y en la perspectiva de la dominación*”. Isto tem se dirigido tanto para obstruir o funcionamento das forças guerrilheiras e impedir os vínculos das populações com elas, como para dissuadir a participação de ações coletivas e intenções organizativas de populações subalternas.

O assassinato de inocentes desde a perspectiva que ilustra Franco (2009), significou na Serra duas funções políticas: um, comunicar aos seus parentes e vizinhos que, independentemente da inocência ou culpabilidade, qualquer pode ser vítima. Dois, incutir medo disciplinante para simular a eficácia na perseguição do inimigo insurgente. Um dos rasgos que mais me marcaram durante as falas campesinos e campesinas da Serra e em geral vítimas do conflito armado no departamento de Magdalena, foi a capacidade de produção do terror e de medo desses tempos da “guerra como ação” que ainda se mantém e se reproduz continuamente depois de vários anos.

Várias entrevistas individuais ou em oficinas coletivas, os/as solicitantes de restituição de terras ficaram calados/as ou incomodados/as com algumas perguntas que fizemos com a equipe social durante as jornadas de campo, sobretudo coisas relacionadas com as expropriações das terras. Várias vezes pediram-nos privadamente ao final das entrevistas ou dos exercícios sociais, que queriam falar em voz em *off* em um canto onde não fôssemos vistos, dada a dimensão do medo a ser ameaçado por seus agressores, com os que ainda convivem, por falar e denunciar sobre a histórias de violência que experimentaram junto com suas famílias anos atrás.

Certamente, o efeito dessas práticas de territorialização da guerra e o estabelecimento das forças armadas contra insurgentes (legais e ilegais), sua persistência no tempo, e os resíduos que deixam depois de uma fase de escalamento em cada povo regional, constitui um instrumento fundamental na prática da dominação (FRANCO, 2009).

A produção do medo e do terror resultado das fases da guerra é uma das consequências que Franco (2009) apresenta dessa coexistência das vítimas com os conhecidos perpetradores que mantém viva a memória do terror e, por conseguinte, o medo que recomenda esquecer, silenciar. Sendo geralmente vizinhos de suas vítimas, a convivência com os agressores conserva a desconfiança como parâmetro que guia as ações e o comportamento cotidiano dessas populações.

Pode-se afirmar então que a reprodução do espaço agrário serrano, assim como as áreas urbanas e rurais das planícies, é resultado dessa configuração da territorialização da violência e da convivência das vítimas com os agressores nas diferentes fases da guerra. Isso significou uma territorialização do medo que levou em muitos casos à prevenção de qualquer forma de associação com finalidades contenciosas.

As violências desses anos com fins punitivos e preventivo, afirma Franco (2009), ao tempo em que veda a população da influência das guerrilhas ou a desencorajá-la de se organizar em torno de reclamações, mantém a configuração da ordem porque aponta em longo prazo a difusão do medo e, portanto, da destruição de sujeitos e subjetividades (FRANCO, 2009).

El propósito de la violencia ejercida sobre aquellos que se pretende dominar reside –según Kalyvas– en la creación intencionada de miedo: la violencia es un medio, no un fin; un recurso, no el producto final. La violencia es entonces una herramienta para moldear el comportamiento individual [y colectivo] mediante la imposición de un costo sobre acciones particulares. Esto es frecuentemente llamado terror⁹⁰ (FRANCO, 2009, p. 515).

A violência expressiva de terror ao serviço de interesses objetivos e políticos, se fundamentou num processo de instrução em técnicas de assassinato, tortura e desaparecimento focados em matar e destruir no outro a sua subjetividade, através da provocação metódica de sofrimento. Nesse sentido, Franco assegura que as vítimas diretas do terror são simultaneamente sujeito e objeto, sendo uma das qualidades fundamentais do contexto da guerra na Serra, no Magdalena e em geral na região do Caribe Colombiano.

Aquelas vítimas diretas do terror da violência durante o escalamento e difusão da guerra contra insurgente, são o mecanismo para advertir a outros grupos da população as consequências de auxiliar (por vontade ou coerção) insurgência, ou por não coincidir com os interesses da ordem hegemônica do bloco de poder. Num dos relatos de uma camponesa expressam-se os efeitos do terror, o medo e a dominação: *“Estaba sola con dos niños porque a mi esposo lo habían asesinado. Esas tierras nunca las trabajé porque me dio miedo del*

⁹⁰ Stathis N. Kalyvas, “‘New’ and ‘Old’ Civil Wars: Is the Distinction Valid?” [en línea], *op. cit.*,

conflicto. A mi esposo ya lo habían matado y yo estaba sola. No me quise meter por allá” (ENTREVISTA CAMPESINA 5).

Matar ao outro parece não ser um mal eficaz e suficiente⁹¹, diz Franco (2009). Do que se trata é de causar o maior padecimento físico e degradação à vítima, como propaganda com capacidade de comunicação para os outros. As disciplinas através do medo que resulta dessa produção na fenomenologia do terror (SUAREZ, 2007). O massacre, o assassinato seletivo, o desmembramento de cadáveres, a ritualização e a construção de cenas de morte buscam deixar claras as consequências de prestar apoio ou ser simpatizante da insurgência, participar de reclamações contenciosas, ser opositor político, possuir o que querem os grandes proprietários (SUARES, 2007; FRANCO, 2009) ou simplesmente se localizar em zonas estratégicas para a consolidação do bloco contra insurgente.

Infligir sofrimento não é o objetivo último, mas é meio para assegurar o disciplinamento das comunidades subalternas que termina eliminando em elas a capacidade de ações estratégicas no âmbito político (FRANCO, 2009; BLAIR, 2004).

Por exemplo, a desapareição forçada (individual e coletiva) suscita entre familiares e pessoas próximas inquietação e transtorno porque não têm certeza de vida ou morte, o que termina por reprimir a restauração da potência de obrar.

Os massacres, por sua vez, como assinala Blair baseada em Sofsky⁹² (2004), quer frenar o tempo, prolongar a agonia e diversificar a violência, daí a necessidade de inventar sempre novas atrocidades. Assim, a difusão do medo com efeitos subjetivos e sociais como a dissolução de laços coletivos, foi epicentro desses anos, se instalando sobretudo, na memória coletiva não sempre narrada (BLAIR, 2004). Como explica Franco (2009), o massacre se monta na memória de cada povo regional onde o passado se atualiza uma e outra vez para amputar a vontade de reclamação, transformação ou resistência, para manter a indignação silenciada, para garantir o confinamento no mundo privado.

Por sua vez, o deslocamento forçado ou a desterritorialização configurou uma situação de desarraigo, desproteção legal e extrema pobreza. O deslocamento forçado ou a

⁹¹ “No se trata sólo de dar muerte: matar al Otro no parece ser un mal eficaz y suficiente para el logro de los fines de la guerra que muchas veces los mismos perpetradores –venidos de los sectores miserables- [...] no entienden a plenitud. De lo que se trata en este tipo de contienda bélica es ocasionar el mayor sufrimiento físico y degradación a la víctima, justificar ese trato ante comunidades interpretativas (bajo la inculpación de guerrillero o colaborador), garantizar un auditorio (de parientes y vecinos) para el horror, y generar en ellos el mayor terror y humillación. El mal radica allí más que en la sola muerte. Ésta es un mal, pero, como esgrime Arendt, es un mal limitado y morir no es precisamente lo peor.” (FRANCO, 2009, p. 522).

⁹² SOFSKY, Wolfgang, *Traité de la violence*, París, Gallimard, 1998.

desterritorialização das comunidades da Serra e em geral da região Caribe, é resultado de atos violentos que semeiam terror na população regional, e da destruição dos meios de vida pela dinâmica da guerra. A reconfiguração regional provocada pela violência na Serra e povoados das partes planas e as cidades, se constituiu a partir do desarraigo e a espoliação das terras de famílias camponesas, algumas das quais não tem conseguido retornar à terra das que foram deslocados/as, passando a ser parte dos bairros periféricos das cidades ou povoados da costa Caribe.

Os deslocados, afirma Franco (2009), depois de desterrados dos seus eixos de referência, ou seja, de suas órbitas de existência, de seu lar e de seus meios de vida, não têm no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros (FRANCO, 2009). Tudo se converte em procura de emprego e esforço para manter a vida biológica nos contínuos lugares de refúgio. Nos sucessivos sítios de resguardo essas populações experimentam a desproteção legal, o abandono e a extrema pobreza experimentados como perda de provisões e garantias, que afeta conseqüentemente qualquer intenção organizativa de reclamações contenciosas frente à dominação:

...compromete su supervivencia, hiere su identidad como miembros de los pueblos regionales, los reduce a una mayor miseria, y los expone tanto a l discriminación como a la persecución criminal. Los desplazados no sólo están excluidos de la sociedad útil con respecto a la ganancia sino también con respecto al trabajo. (FRANCO, 2009, p. 525)

...éstos [los desplazados], que son los más pobres entre los pobres como dice Korn⁹³ que son parias y sospechosos en los centros urbanos de su propio país, experimentan un sentimiento de inevitabilidad del sufrimiento que luego hace tránsito a la resignación sufriente. La combinación de empobrecimiento y transformación subjetiva se convierten en condición del ejercicio y mantenimiento de la dominación, en el sustrato material de la sumisión. (FRANCO, 2009, p. 526)

Sobre este elemento, entre 1998 e 2001, por exemplo, alguns dos colonos de Aracataca contou que tentaram permanecer nos seus territórios mesmo depois de terem sido vítimas de diferentes danos dos atores armados (ENTREVISTA CAMPESINA 7). No entanto, o enfrentamento pelo controle dos territórios serranos, seus recursos e habitantes, tocou o ponto mais alto entre 2000 e 2001, anos em que se representam as mais altas taxas de deslocamento forçado cadastrado para esse município: 1549 e 2952 vítimas respectivamente (UARIV, 2016).

⁹³ David AKorn, *Exodus within Borders: An Introduction to the Crisis of Internally Displacement*, Washington, Brookings Institution Press, 1999.

Mesmo as cifras oficiais não representando o universo geral de vítimas, dada a ausência de denúncias por medo de ser vitimizado ou frente a uma mirada crítica ao desempenho do Estado (GUETIERREZ, 2017), os dados da Rede Nacional de Informação⁹⁴ evidenciam uma massividade de abandonos e deslocamento forçado no contexto de ameaça e violência contra insurgente, a ameaça e o recrutamento por parte das FARC-EP, além das execuções extrajudiciárias por parte do *Batallón Córdoba* (VERDADABIERTA, 2015)⁹⁵.

Em seis anos (2000 até 2006) foram deslocados forçadamente em Aracataca 14.706 pessoas. Ainda que nos três anos seguintes (2007-2009) pós-desmobilização das forças mercenárias diminuiu a média, foram registradas ainda 4.710 habitantes deslocados. Os números de Fundación são ainda mais alarmantes: entre os anos de 2000 e 2006 foram cadastradas 37.060 pessoas deslocadas em um município com 52.796 habitantes (CENSO; 2005), quer dizer, 70% de sua população. Nos três anos seguintes ainda 7.341 pessoas foram registradas num período de medo, soçobra, desconfiança institucional e fragmentação das populações.

4.5 CONCLUSÃO

Até este ponto, no Capítulo 3 e Capítulo 4 tenho caracterizado os fatores principais da configuração sócio territorial da região Caribe e da SNSM. Esta primeira parte da dissertação foi um esforço para trazer até à tona aspectos sócio-históricos fundamentais que configuraram os territórios estudados nesta dissertação.

Por um lado, expus os principais elementos de dois problemas agrários e fundiários, fundamentados numa restrita reforma agrária, mas num modelo de políticas que beneficiaram as nascentes elites regionais e estrangeiras com terras e apoios para a consolidação de um modelo agroindustrial e agroexportador ligados ao mercado internacional. Com base neste contexto fundiário, mostrei como na metade do século XX, num período de violência bipartidista que produziu uma importante mobilidade no país, iniciou a formação socio territorial dos territórios campesinos estudados nesta pesquisa, em áreas abertas à ampliação da

⁹⁴ “En el artículo 153 de la Ley de Víctimas se estableció a la RNI como el instrumento que garantiza al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas [...] [de] información nacional y regional sobre las violaciones a los DDHH y DHI de la población víctima en el país. La RNI es la encargada de coordinar y articular los diferentes sistemas de información de las entidades SNARIV nacional y territorial además de otras organizaciones [...] entidades que pertenecen a la Red Nacional de Información: SNARIV – Nivel nacional: 35 entidades; SNARIV – nivel territorial: 1.070 entidades; NO SNARIV: 18 entidades; Organizaciones no gubernamentales y/o privadas: 22 entidades” (UARIV, 2011).

⁹⁵ <https://verdadabierta.com/victimas-de-ejecuciones-no-quieren-impunidad/>

fronteira agrária em territórios historicamente habitados por indígenas ou áreas de reivindicação territorial destas comunidades.

Por outro lado, analisei outros dos elementos fundamentais na formação territorial do Caribe Colombiano e da SNSM: a violência e o contexto político volátil que se deu em dois ciclos principais desde meados de 1970 até meados da década dos anos 2000. O argumento principal desta característica transversal da geografia serrana se concentra no período de escalamento e difusão da guerra contra insurgente, cujas fontes objetivas de mobilização foram o domínio da estrutura política institucionalizadas, das práticas políticas e da custódia e garantia da reprodução da acumulação, através do que denominei a partir da proposta conceitual de Franco (2009) e Gutierrez (2014) o *bloco de poder contra insurgente* ou *coalizão de repressão* caracterizado pela deformação do legal-ilegal.

Fundamental destacar sobre este segundo momento da primeira parte da dissertação como as populações estiveram no centro da disputa da guerra contra insurgente. Assim, desde a perspectiva de Franco (2009), definiram-se uns contornos para as populações subalternizadas motivados pela *coalizão de repressão* a partir da lógica “ou está comigo ou está contra mim”, com efeitos na permanência e sobrevivência de muitas das comunidades étnico-rurais na SNSM. Nesse contexto a construção do inimigo interno pelo *bloco de poder contra insurgente* orientou suas ações militares de homicídios, massacres, desaparecimentos, deslocamentos forçados, despojos/despejos/esfoliação, mais que contra os rebeldes, especialmente contra as populações relacionadas como apoios da insurgência, ações que no fundo, buscavam interromper qualquer possibilidade de reclamações contenciosas dos movimentos e organizações sociais que colocassem em risco com outros modelos a ordem hegemônica de acumulação dos segmentos das classes dominantes representadas através do aparato estatal.

Em suma, a subjugação das sociedades regionais a um estado de medo e miséria pela exacerbação da violência, forçou o esquecimento coletivo para garantir a dominação política e reduzir a resistência frente a expansão do capital, que se instala no presente e se atualiza constantemente.

... su radicalidad reside en que en lugar de desvanecerse se instala en el presente, se aloja de un modo tal que no es posible establecer una línea divisoria entre pasado y presente. Después de la aniquilación, después del castigo, el miedo permanece recalcitrante e irreductible en el seno de cada sobreviviente, de cada pueblo regional [...] los eventos de ayer son fuente de ciertas consecuencias, que usualmente nombremos como legado del pasado. Lo que pasó [...] no desaparece. Más bien sufre una transformación [...] los viejos patrones sin embargo sobreviven, reteniendo su capacidad de influenciar el presente. (FRANCO, 2009, p. 528).

O que foi explicado até agora dá a possibilidade de entender como a crueldade, como expressão da violência, está dada pela pressa de destruir a possibilidade de resistência ou de posição política, a vontade de transformação e a probabilidade de reclamação de justiça (FRANCO, 2009). O anterior acontece num contexto em que a justiça transicional como modelo jurídico estatal começava a se posicionar através da *Ley de Justicia y Paz* do ano 2005, como estratégia do governo para adiantar o trânsito da guerra para a paz, ativando uma série de mecanismos jurídicos sobre a base da impunidade num ciclo caracterizado pela diminuição da intensidade da violência, mas a generalização do “estado de guerra” numa geografia do despojo.

Como mostrarei no segundo segmento desta dissertação nos capítulos 5 e 6, o despojo e a expropriação não é um fato que passou no tempo. Ele se atualiza no presente, tanto para indígenas como campesinos que produzem as territorialidades serranas, mas com efeitos inesperados na relação intercultural que se expressa nas possibilidades de permanência no território ou no avanço das demandas territoriais de uns sobre outros durante o período do máximo ciclo de violência e a desmobilização dos paramilitares (2002 – 2012).

Ainda que as ações violentas da guerra contra insurgente tenham afetado tanto a indígenas como campesinos, elas tiveram efeitos diferentes entre uma e outra população do campo na SNSM. As *articulações espaciais da diferença* que se configurou com a Constituição de 1991 (BOCAREJO, 2015), se fundamento em representações destas duas populações como diferentes e opostas entre si, a partir da construção de imagens contrapostas entre um lugar indígena e um campesino (BOCAREJO, 2015).

No contexto volátil do estabelecimento da ordem e a segurança como se fosse o interesse geral, é possível afirmar que, a violência exacerbada do ciclo de escalamento e difusão da repressão contra insurgente produziu uma modificação transcendental do sentido de vida na sociedade política da Serra e o Caribe “*porque, uma vez cometid[a], es irreversible*” (FRANCO, 2009, p. 528), embora que afete de maneira diferenciada alguns campesinos das partes altas dos rios Fundación e Aracataca.

5 “ESTADO DE GUERRA”, “GEOGRAFIAS DO DESPOJO” E “HISTÓRIAS DA DIFERENÇA” NA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA. COLÔMBIA

Yo no aparezco como desplazado, nunca declararé por el miedo a que me estuvieran vigilando, como me había volado, que por la declaración me encontrarán y no valiera de nada haber dejado todo tirado y volver a caer en mano de ellos (los paramilitares) (ENTREVISTA CAMPESINO 1).

Tener la autonomía de crear una organización, un sindicato, una asociación, es muy difícil y es muy difícil [por] el tema de la criminalización que hay. En este momento es un delito organizarnos y se ha demostrado todo el tiempo con los asesinatos [...] entonces no hay garantías para la organizada, la gente le da miedo organizarse, siente miedo y fuera de eso el gobierno plantea otras formas de organización para la dispersión (ENTREVISTA CAMPESINA 7).

A senhora Matilde⁹⁶ é uma mulher campesina negra de uns 45 anos que passou por muitas coisas em sua vida. É grande e com sua voz vigorosa nos contou orgulhosa de seus dois filhos. Desde cedo falamos na sala do primeiro andar, ela, o advogado e eu sobre sua solicitação de restituição de uma terra na Serra Nevada de Santa Marta no Caribe Colombiano, interposta anos atrás no escritório da Unidade de Restituição de Terras. Seria uma entrevista a uma vítima do deslocamento forçado mais das que diariamente fazia de não ser pela fala da Sra. Matilde enquanto entrávamos na sala no que me advertiu, com um sorriso em sua cara e com um tom meio sério meio brincando, que sofria de epilepsia e que tínhamos que estar atentos porque podia acontecer hoje.

Nas primeiras trocas de ideias ela respondeu de um jeito tranquilo as perguntas: de onde era, com quem vivia, e como e quando tinha chegado em sua terra localizada em alguma das vertentes desse grande maciço. A conversa era calma, como nos “típicos” dias de atenção a uma vítima como funcionários ou operários institucionais, mas começou a mudar quando pisamos os calos da memória dos anos da guerra contra insurgente, que evidentemente seguiam presentes na existência de dona Matilde.

Desde o começo eu estava incomodado com o jeito tosco e ruim de perguntar do advogado onde deixava bem claro com seus gestos e atitudes, seu lugar de burocrata de Estado na região: “mas qual foi o fato de seu deslocamento?! Qual foi o fato específico? Em que ano?!”

⁹⁶ O nome da solicitante de restituição foi mudado assim como não foi revelado o lugar da terra solicitada em restituição para preservar o anonimato da vítima.

– perguntou insistentemente o advogado. Qual foi ameaça concreta? Pode nos dizer – perguntou uma vez mais.

A desconfiança de dona Matilde com o Estado vinha de tempos atrás depois de várias denúncias dos fatos de violência na *Fiscalía General da Nación*, *Personeria Municipal*, *Acción Social* e agora, a *Unidad de Restitución de Tierras*, apesar do que isso de denunciar significava para a segurança dela e da sua família. A desesperança desses reclamos não mexeu na motivação desse dia, em que uma vez mais procurava uma resposta de um órgão estatal para reclamar justiça no deslocamento forçado e o despojo da sua terra que sofrem junto com seus filhos e outras famílias desde o começo dos anos dos mil.

Tentei tranquilizar a agitação que já começava a aparecer no corpo dela... contudo era a violência atualizada que ainda lhe afetava ao falar do estupro e a coronhada que sofreu na presença de seu filho por um paramilitar na primeira metade dos anos dois mil e que lhe deixou várias sequelas físicas e emocionais, sendo a mais notória a epilepsia.

Durante as duas horas e pouco que dura nossa conversa, o que mais me surpreende é a expressão de medo e terror da Sra. Matilde quando fala sobre o contexto de soçobra das áreas onde está sua terra que reclama em restituição, lugar em que ainda existe um domínio territorial das mesmas redes de paramilitares e grupos de mercenários que controlavam esses territórios na década de 2000 e que foram as responsáveis pela vitimização dela e seus filhos.

Os nervos dela se manifestam no corpo e a fala, entre idas e voltas frente a decidir denunciar e falar. ou silenciar-se. Tudo o que acontecia durante a entrevista com a Sra. Matilde era um presságio sobre o que estava por vir nas seguintes três horas desse dia no escritório de terras: acompanhar o estado catártico e de adrenalina da senhora Matilde (CADERNO DE CAMPO).

O caso antes falado foi um dos que mais me questionou e me indignou desde meu lugar de burocrata de Estado que ficava na cotidianidade da escuta e leitura de relatos sobre o contexto da guerra. Por uma parte, era a evidência da atualização e continuidade do terror e do medo do ciclo da guerra contra insurgente que não só se evidenciava no caso de Matilde, mas também nos encontros com outras vítimas; memórias que muitas vezes ativávamos com nossas práticas institucionais, levando a novos cenários de revitimização. E por outra parte, era a expressão da tensão e das contradições do processo de restituição de terra na Serra entre indígenas e campesinos, frente à incerteza da reparação a través da restituição de suas terras dada a falta de um título de propriedade, a localização destas em áreas de reserva florestal e das pretensões de ampliação da reserva indígena.

Depois de fazer uma linha de tempo do avanço paramilitar, seus interesses e fontes objetivas de mobilização, quero me perguntar na segunda parte desta dissertação: que tipo de sujeitos e de espaços resultaram da exacerbação da guerra contra insurgente nas partes montanhosas dos rios Fundación e Aracataca na SNSM? Como operou nesses espaços reconfigurados pela violência as fronteiras e jurisdições criadas no marco da Constituição de 1991 das histórias da diferença entre indígenas e campesinos no ciclo da pós-desmobilização? Quais são essas outras expressões do conflito agrário além (paralelo) do capital? Que tipo de estratégias territoriais se apresentaram nesses contextos de violência na Serra? Que implicações teve o multiculturalismo operativo Colombiano no processo de restituição de terras da lei 1448 de 2011?

5.1 O TEMPO DA GUERRA COMO ESTADO: INTERIORIZAÇÃO DO MEDO E ORDEM NAS GEOGRAFIAS DO DESPOJO

Como verdade judicial, se sabe que entre o ano 2002 e 2006 consolidaram-se dois grupos de mercenários nas planícies e veredas das caras norte e ocidental da Serra agrupados no que se conheceu como o grupo *William Rivas*⁹⁷ e o *Frente Resistencia Tayrona* (SENTENCIA, 2015). Ao mesmo tempo, começaram nesses anos as negociações de paz entre o governo entrante de Álvaro Uribe Velez e as distintas forças paramilitares a escala nacional.⁹⁸ Isto terminaria no ano 2006 com um questionado processo de desmobilização, que daria lugar a uma reconfiguração de estruturas paramilitares em territórios abertos ao controle de rentas e redes logísticas de economias ilegais e legais. Assim, Entre janeiro e fevereiro do ano 2006 foram criadas três (3) zonas de localização temporal na Serra para adiantar a desmobilização dos membros dos grupos irregulares correspondente ao que se dominou como *Bloque Norte de las AUC*: uma, na *vereda Quebrada El Sol* em Santa Marta, cara norte da serra, e as outras duas na parte sul nas áreas montanhosas que se interconectam o departamento do Magdalena e do departamento de Cesar⁹⁹.

⁹⁷ O nome de William Rivas Hernández, alias Cuatro Cuatro, foi um dos comandantes dessa estrutura de mercenários que tiveram controle sobre a via Ciénaga – Santa Marta com a missão de perseguir o que eles consideravam ladrões e auxiliares ou presuntos auxiliares da guerrilha em Guachamito y Orihueca (SENTENCIA, MANGONEZ, 2015).

⁹⁸ Ley 782 del 23 de diciembre de 2002. Ver también HRISTOV, JASMIN. “*Legalizing the Illegal: Paramilitarism in Colombia's 'Post-Paramilitary' Era.*” *NACLA Report on the Americas*. 2009. Página 12.

⁹⁹ Ver resolución 008 del 17 enero 2006, resoluciones 017 de enero 26 y 041 del 17 de febrero de 2006 em Observatorio de Procesos de Desarme, desmovilización y Reintegración, Universidad Nacional de Colombia.

A través de los decretos 128 de 2003 y 4488 de 2005¹⁰⁰ se regularizaron además de otras cuestiones, los beneficios socioeconómicos, educativos, de empleo y de adquisición y titulación de tierras para paramilitares reinseridos tanto comandantes como combatientes rasos que se acogieron al proceso de desmovilización¹⁰¹. Aunque, más que una reinserción a la sociedad civil de los miembros del *Bloque Norte de las AUC*, organizados en su mayoría por población pobre de la región, y del tránsito del conflicto armado a la consecución de la paz; experimentaron nuevas lógicas en la región asociadas con la reorganización y el surgimiento de nuevos grupos de mercenarios también denominados como *neo-paramilitares*. En esta categoría, como dice Reyes, el prefijo “neo”, refiere a las rupturas y cambios que experimentó el fenómeno del paramilitarismo después del proceso de negociación; sin embargo que “paramilitares” engloba a muchas continuidades que tienen con las antiguas AUC, entre ellas las conexiones con los militares, y los intereses de políticos y empresarios representados por el Estado (REYES, 2012).

Así, después de la “guerra como acción”, donde se intensificó la violencia en sus diversas formas y funcionalidades, se instauró la “guerra como estado” (FRANCO, 2009), en años de narrativas institucionales de paz y tranquilidad de la región a través del cuestionado proceso de desmovilización de las fuerzas mercenarias.

Mesmo que las cifras de la violencia revelan un descenso desde el año 2002 (GRAFICO, 6), la guerra en el Caribe y en la sub-región estudiada no terminó, se reconfiguró. En efecto, el desmantelamiento de los grupos de mercenarios a escala nacional, fue marcado por una serie de inconsistencias que al final desembocaron en el surgimiento y el fortalecimiento de grupos armados ilegales en las zonas que eran consideradas de influencia de las recién desmovilizadas AUC. Entre las fallas de este proceso fallido de desmovilización estuvieron:

las violaciones del cese de hostilidades por parte de las AUC, las falsas desmovilizaciones evidenciadas por los exjefes paramilitares, el reclutamiento como estrategia de continuación paramilitar, las cifras como

¹⁰⁰ A través de estos decretos se reglamentó la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002 encaminadas a establecer el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Para ver en detalle las diferentes modificaciones de los artículos, ver: Observatorio de Procesos de Desarme, desmovilización y Reintegración, Universidad Nacional de Colombia.

¹⁰¹ En el marco del proceso de desmovilización se hizo parte de un equipo de dicha normatividad estableció que con base en una previa evaluación del Ministerio del Interior, el reintegrado tendría acceso a un beneficio económico condicionado a la formación en oficios y, educación técnica en labores agrícolas y tecnológicas para el campo. El Estado colombiano diseñó un mecanismo en el que, de manera coordinada entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Ministerio del Interior, se instauró una bolsa de empleo y contratación para vincular a los reintegrados al mercado laboral vinculándolos con gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios como fuerza de trabajo. A este marco normativo, se sumó la sanción del decreto 4488 del 5 de diciembre de 2005 el cual, en consonancia con la Ley 160 de 1994, instauró un programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas a la vida civil, en el que el Incoder junto con otras instituciones, seleccionaría a los beneficiarios de los subsidios de tierras.

elemento legitimador del proceso y los vínculos prevalentes con sectores políticos, económicos y militares, así como los factores contextuales que llevan a la reincidencia de los desmovilizados. [...] se parte aquí del reconocimiento que cierto número de paramilitares dejaron las armas y se reintegraron de manera exitosa a la vida civil. Sin embargo esto no fue suficiente para que los vínculos con sectores políticos, económicos y militares que prevalecieron durante la existencia de las AUC se desarticularan de modo tal que los intereses de los grupos ilegales reincidentes o nuevos se asociaran exclusivamente al lucro económico y a la delincuencia común (REYES, 2012; 72 -73).

No caso concreto da SNSM foi manifesto em alguns informes de instituições públicas como grupos de mercenários pós-desmobilização¹⁰² persuadiram a camponeses e camponesas com afetos a sua política contra insurgente a ocupar algumas chácaras da vertente ocidental que por sua localização resultavam estratégicas para exercer controle sobre as trilhas de mobilidade na parte intermedia, e assim contra restar a avançada da insurgência que frente a expectativa da desmobilização incrementaram sua presença com o propósito de recuperar o controle territorial perdido (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2006)¹⁰³.

Levando em consideração a análise anterior, é possível afirmar então que o “estado de guerra” não é um novo começo do ciclo da violência. Apesar de que as cifras oficiais sobre homicídios, desaparecimentos forçados e deslocamentos forçados baixaram consideravelmente desde o ano 2002 nos municípios de Aracataca e Fundación, e os municípios vizinhos de Ciénaga, El Retén e Zona Bananera, com concisas escaladas entre 2006 e 2007 (não por acaso); a guerra contra insurgente não acabou com a redução da escalada do conflito armado e a desmobilização dos paramilitares para começar uma fase de “paz”, marco comumente assumido por alguns funcionários e funcionárias das entidades oficiais como a data em que finalizou a violência na região Caribe e outras regiões do país¹⁰⁴.

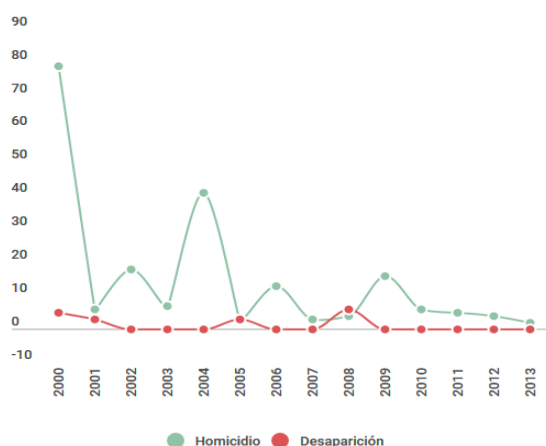
¹⁰² De acordo a vários informes oficiais, pesquisas académicas e notas de prensa, na sub-região das planícies e as vertentes norte e ocidental, surgiram quatro estruturas: *Los Paisas, Bloque Nevado, Los Mellizos, e Aguilas Negras*. (EL TIEMPO, 2007; VERDAD ABIERTA, 2008; DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2009; REYES, 2012)

¹⁰³ DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe de riesgo (SAT) No. 023-06 defensoría del pueblo. SAT

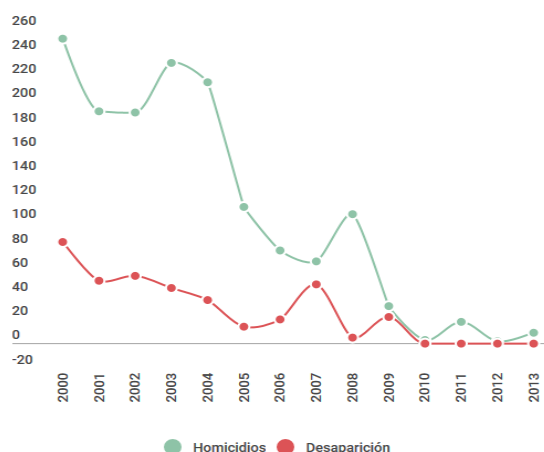
¹⁰⁴ Uma das verdades judiciais mais comuns entre advogados e advogadas das entidades do Estado nas que trabalhei é considerar que o conflito armado acaba no ano 2006 com a desmobilização dos paramilitares. De novo uma reunião como o equipo se consideram como vítimas aqueles que foram deslocados antes desse ano. Tudo abandono, despojo de terras, compra-vendas de terras de anos posteriores não são tidos como vítimas da violência porque se assume que já não existe conflito armado em contraste com a reconfiguração das estruturas irregulares (Nota de campo, 2016).

Gráfico 6 - Cifras de homicídios e desapareição forçada nos quatro municípios da sub-região da vertente ocidental ciclo de consolidação e pós-desmobilização grupos irregulares (2000 -2013)

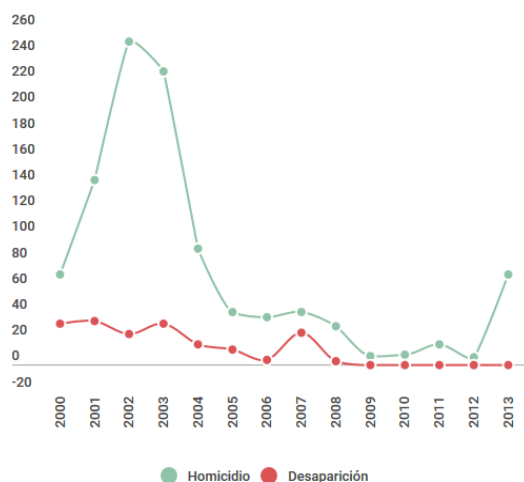
Homicidios - Desaparición El Retén (2000-2013)



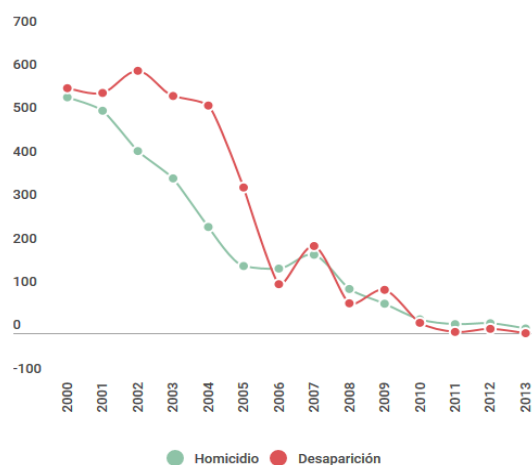
Homicidios - Desaparición Fundación (2000-2013)



Homicidios - Desaparición Aracataca (2000-2013)



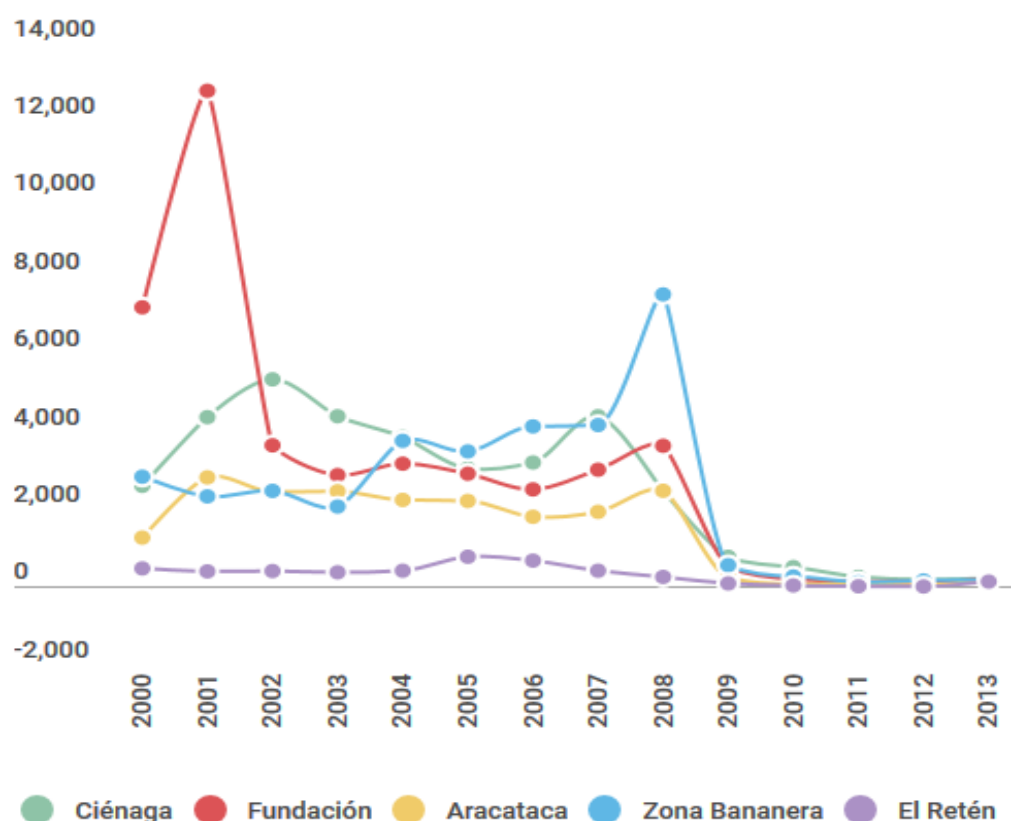
Homicidios - Desaparición Cienaga (2000-2013)



Fonte: Elaboração própria com base em dados da *Red Nacional de Información*.

Gráfico 7 - Cifras de deslocamento forçado nos quatro municípios da sub-região da vertente ocidental ciclo de consolidação e pós-desmobilização grupos irregulares (2000 -2013).

Desplazamiento Forzado (2000-2013)



Fonte: Elaboração própria com base em dados da *Red Nacional de Información*.

A queda das cifras da violência e o ano pós-desmobilização mais que o fim da guerra marcaram a continuidade para instaurar um contexto de “estado de guerra”; tempo de estabilização de uma série de mecanismos de despojos/espoliações entendidos, não apenas como perda de bens ou propriedades, mas como formas violentas que se inscrevem e sedimentam no espaço, mecanismos e formas cotidianas que resultam em sua produção e incessante atualização (OJEDA, 2016). Esta perspectiva de Ojeda dialoga como o ponto de vista de Franco ao explicar como entre a “guerra como ação” e a “o estado de guerra”, *“existe una línea de continuidad que nos indica que el pasado de terror se actualiza en el presente de*

la sujeción y sumisión” (FRANCO, 2009; 535). Desde a perspectiva espacial e etnográfica de Ojeda é possível compreender então as geografias ou paisagens do despojo resultado da violência exacerbada e do “estado de guerra”, através da maneira na que o despojo produz espaços (simbólicos e materiais) e sujeitos concretos, assim como estuda-lo em suas formas cotidianas nas que se faz possível e se atualiza.

...propongo desde una perspectiva espacial y etnográfica¹⁰⁵ [...] entender el despojo a través de la manera en la que produce espacios y sujetos concretos. Asimismo, permite estudiar las formas cotidianas en las que este se hace posible y se actualiza. A lo largo del artículo doy cuenta de la necesidad de estudiar los paisajes del despojo y cómo estos deben ser entendidos desde su constante producción tanto simbólica como material. (OJEDA, 2016, p. 20).

Mas como compreender e “estado de guerra”? A memória de terror da violência contra insurgente se recicla e renova no presente. Isto era manifesto durante as conversas, entrevistas e reuniões como vítimas do conflito armado. É a presença de uma ordem do medo estabelecido nas vidas como a da Dona Matilde ou as de outras populações étnico-rurais da Serra, não obstante de que os fatos haviam ocorrido vários anos atrás. Por suas formas -assegura Franco (2009) - essa violência dos anos do escalamento e difusão das forças irregulares destruí os elementos que ameaçam a propriedade e refunda “um estado de guerra”, uma ordem hegemônica dos interesses dominantes.

...de un lado, excluye los “elementos desordenados” lo que amenaza la propiedad, lo que es contrario a lo dominante, lo que obstruye la realización de intereses dominantes, en otras palabras elimina o somete (mediante empobrecimiento, represión y propaganda) lo que sería fuente de subversión del orden (burgués); y del otro, mantiene en pie la dominación política de clase, conserva (porque estabiliza y regula) y reconfigura (en los territorios de refugio y resistencia) un orden que se ratifica así como la objetivación de los intereses dominantes, un orden en el que se tiene certeza de lo que no se puede hacer sin temer la muerte o el destierro, en el que se ha internalizado el castigo, un orden donde el miedo de los “pacificados” es la fuente de certidumbre de la sociedad útil. (FRANCO, 2009; 535).

O medo opera como princípio efetivo, assegura Franco (2009). A ordem renovada, implantada através do medo para apaziguar e acalmar os temores dos poderosos de perder a capacidade de realizar seus interesses particulares que socava a renda, o acumulado ou a capacidade por acumular; apresenta-se, claro, num contexto da neoliberalização dos mercados

¹⁰⁵ Este artículo recoge elementos de mis investigaciones en el parque Tayrona y su zona de amortiguación (2009-2011) y en Montes de María, particularmente en los municipios de María la Baja y Ovejas (2013-2016). Ambas se han enfocado en las transformaciones de los medios de sustento y las formas de vida campesinas tras la implementación de proyectos agrarios. Las investigaciones han sido realizadas a partir de trabajo de archivo y trabajo de campo basado en observación participante, entrevistas semiestructuradas, recorridos etnográficos y talleres de cartografía social.

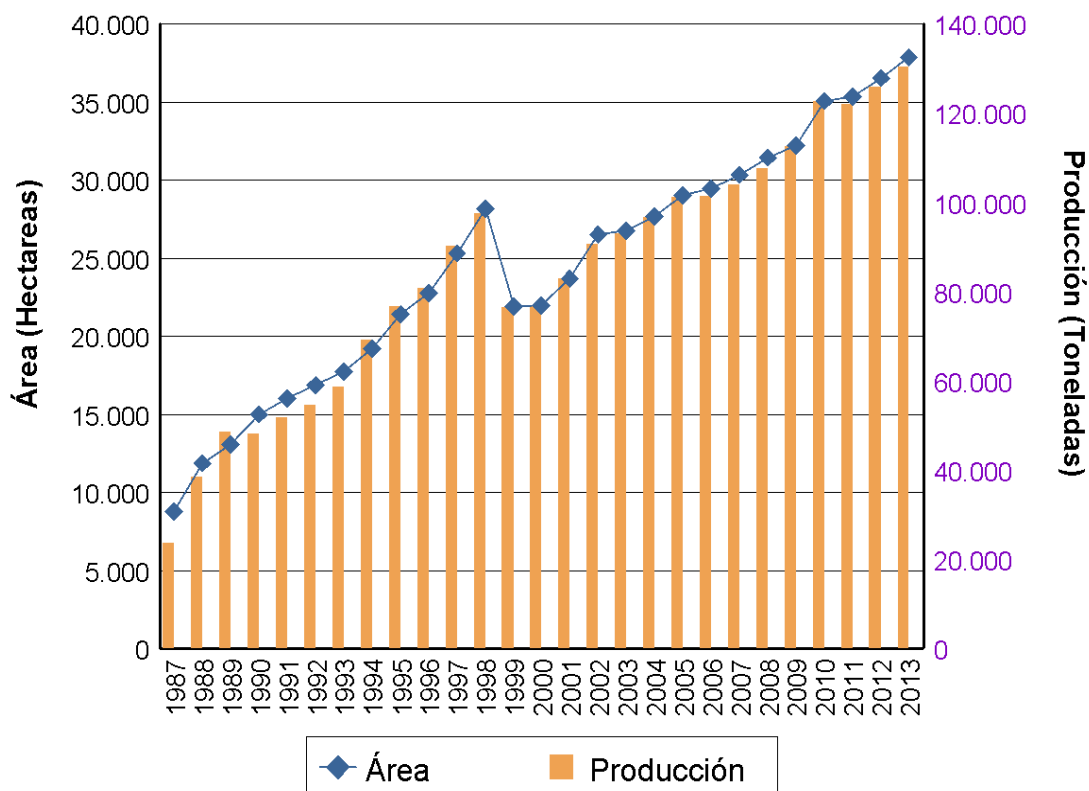
de incentivos estatais ao agronegócio de palma de dendê (*Elaeis guineenses*). Durante esse período foram assinados vários acordos de livre comércio, entre eles com os Estados Unidos, estabelecendo vários compromissos do setor agropecuário do país através de programas fraudulentos como Agro Ingreso Seguro¹⁰⁶ (SENTENCIA, 2014; 3)¹⁰⁷. Paralelo a internalização do medo e do terror de uma faixa da população, entregaram-se incentivos principalmente a empresários do agronegócio de palma de dendê, cujo cultivo estava se espalhando desde finais dos noventa nas planícies que circundam a Serra nos departamentos do Magdalena¹⁰⁸ e do Cesar, e que não paravam de crescer, inclusive nos anos posteriores à desmobilização dos paramilitares (2006) (GRÁFICA 9).

¹⁰⁶ Ministério de Agricultura foi a entidade encarregada de implementar o programa. Essa entidade tramitou e celebrou com a Oficina em Colômbia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, os convênios especiais de cooperação técnica e científica através dos quais se outorgaram créditos ao setor da palma de dendê por mais de USD 2 bilhões (RUEDA, 2015). Nesse mesmo sentido, em 2008 através do Conpes 3510, se configurou um documento de política orientada a promover a produção sustentável de biocombustíveis em Colômbia, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento económico e social que ofereciam os mercados emergentes de biocombustíveis (RUEDA, 2015).

¹⁰⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL, Sentencia contra Andrés Felipe Arias Liévano Rad. SP9225-2014 Rad. Interno 37462, del 16 de julio de 2014, M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. Magistrada ponente. Página 3.

¹⁰⁸ No documento sobre o cultivo da palma da *Agencia del gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y su programa Más Inversión para el Desarrollo Sostenible (Midas)*, são nomeadas várias empresas de palma de dendê na Costa Caribe que participaram em 2008 de alianças produtivas entre pequenos produtores e grandes indústrias de palma argumentando que “*hay gente ocupada en actividades ilícitas que hay que recuperar para el trabajo lícito [...] el país tiene que evitar la expansión de las economías ilícitas*”, estas foram: C.I Tequendama, el Grupo Daabon, Gradesa, Palmariguaní, Palmeras de la Costa, Palma, de Aceite, Frupalma, Hacienda Las Flores, Indupalma, El Pórtico, Palmeras de San Pablo y Simití, Cordeagropaz y el operador en La Sombra, el C.I. El Roble. (USAID, 2008).

Gráfico 9 - Produção de palma de dendê no departamento de Magdalena 1986 – 2013.



Fuente: Elaboró Agronet con base en las Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Nesse quadro de uma ordem renovada que auxilia os interesses dos poderosos de conservar o acumulado e a capacidade por acumular, a lei imposta se erige sobre os medos do passado, “*se alimenta de ellos, se mantiene gracias a ellos y se prolonga la condición de su actualización*” (FRANCO, 2009; 536). A violência sistemática que estabeleceu o medo como ordem através do terror, garantiu a extirpação da capacidade das populações vítimas na SNSM e em várias regiões do Caribe da construção das reclamações políticas ou sociais contenciosas por medo do castigo -que em efeito- beneficiou os interesses do bloco de poder. A mensagem de terrou anulou em muitas destas comunidades a subjetividade e por tanto a vontade de transformação e mudança social através da anulação dos sujeitos que sobreviveram. Como afirma Franco,

[se] produce un estado de aprehensión [...] aseguran una resignación sufriente entre sobrevivientes que constituye una anulación del sujeto y el estrangulamiento de la subjetividad; contienen o suprimen allí la voluntad de rebelión y transformación [...] e garantizan el alineamiento con el proyecto de los dominadores y el desarrollo de una sociedad policiva. (FRANCO, 2009; 536).

Es decir, en ese orden que se conserva o constituye, que se refunda, el apaciguamiento de unos temores –a la rebelión y al cambio- se logra sobre la base de la generación y exacerbación de otros: de una parte, el miedo al

castigo por tomar parte de reclamaciones políticas o sociales contenciosas, por apoyar o simpatizar con la rebelión, que somete voluntades; pero también, el miedo a los rebeldes y a la oposición izquierdista representados como la absoluta negatividad, que alimenta el odio [...] En ese orden que se refunda, la seguridad de uno es la inseguridad de otros. (FRANCO, 2009; 536).

Com a “interiorização da repressão” (FRANCO, 2009) não é preciso conservar a violência massiva porque com a simples antecipação do castigo, basta para definir ações ou omissões para regularizar práticas políticas ou reivindicatórias de setores subalternos. Isso explica a diminuição das cifras da violência. Uma vez conseguida a “internalização do medo” (GARAVITO, 2005) não é imprescindível a violência de manifesto dado que, no tempo do “estado de guerra”, o medo como uma marca indelével da repressão, continua exercendo uma função de regulação e disciplinamento, medo que aparecia uma e outra vez nos diálogos com as vítimas que entrevistei como a senhora Matilde.

O seguinte depoimento de um paramilitar entrevistado por Franco ajuda a esclarecer como o medo foi utilizado durante as épocas eleitorais: *“Llega um momento en que no toca mostrar las armas para constreñir a la gente, porque ya han sufrido mucho los rigores de la guerra. Se vuelve innecesario encañonarlos para que voten. Simplemente se les da la orden y ellos acatan”*.¹⁰⁹ (FRANCO, 2009; 538).

A essência da violência contra insurgente indica que é preciso que as pessoas conservem uma dose de medo, que é alcançado através de uma sistemática dosagem de ameaças e estímulos, de prêmios e castigos, de atos de assédio moral e mostras de apoio condicionado (BARÓ, 2000). Como afirma Franco (2009), a memória da infâmia, a que é uma “memória ferida” (RICOEUR, 2000), *“se instrumentaliza: se provoca un retorno al pasado doloroso no para sanarlo sino para mantenerlo vivo”* (FRANCO, 2009; 539).

¹⁰⁹ Declaração livre do chefe paramilitar Ever Veloza García, alias “HH”, ante los fiscales de Justicia y Paz, Medellín, 4 de septiembre de 2008.

Figura 12 - Fotografia de casa campesina nos territórios campesinos da cara ocidental da SNSM



Fonte: Foto própria em visita de campo com campesinos durante os anos de trabalho na SNSM

A fotografia ilustra o retorno a esse passado numa vereda na SNSM na que existe um grafitti ameaçante assinado por um ex-comandante conhecido das estruturas paramilitares que fiz presença nas áreas de montanha, alias “5.5”, grafitti feito numa das casas nas que improvisamos uma jornada comunitária de coleta de informação com campesinos e campesinas, na que os silêncios cúmplices entre os solicitantes de restituição de terras eram óbvios respeito a certos temas sobre o conflito armado.

No contexto do “estado de guerra”, o medo se desdobra e se renova no tempo e como consequência, anula a intenção da ação e a mobilização política das vítimas dessa repressão que experimentaram fatos traumáticos que se inscreveram como rastro na memória individual e coletiva dessas comunidades serranas com consequências contraditórias, como mostrarei na última parte deste capítulo, entre indígenas e campesinos pelos menos frente a permanência no território.

... [el miedo es] una tristeza inconstante que disminuye la potencia de pensar y obrar, que anula las facultades de decisión y el raciocinio” (FRANCO, 2009; 537).

“[El miedo] provocado por la represión [...] de militares de organizaciones [legales e ilegales] [...] penetra en sus parientes y luego en franjas más amplias de la población, y como resultado se impide la movilización del grupo y se frena la acción colectiva (HERMANT, 2005 citado por FRANCO, 2009, 538).

[l]os hechos traumáticos se inscriben como una huella particularmente nítida en la memoria de la gente, resistiéndose al olvido de forma pertinaz y manteniéndose los efectos psicosociales 20-25 años después de sufrido el trauma. (CABRERA, 2006; 110).

Agora bem, deixarei de lado a explicação do “estado de guerra” para passar a explicar como a usurpação e o despojo através de meios violentos e fraudulentos se instaurou como princípio durante os anos da guerra contra insurgente. Esta dissertação parte da necessidade de entender os processos e as dinâmicas do deslocamento forçado e o despojo na Serra a partir de sua espacialidade; quer dizer, das formas violentas onde se inscrevem e sedimentam no espaço, e que resultam em sua produção (OJEDA, 2016).

Os casos que analisa Ojeda ajuda na minha análise, um deles da cara norte da SNSM. Para ela existem dois tópicos principais para entender a categoria do despojo nesse território: 1) sua capacidade de reconfigurar violentamente o espaço; e 2) sua dimensão gradual e ordinária. A partir destes dois tópicos, Ojeda define o despojo como “um processo violento de reconfiguração socioespacial e, em particular, socioambiental, que limita a capacidade que tem as comunidades de decidir sobre seus meios de sustento e suas formas de vida” (OJEDA, 2016, p. 21).

Acertadamente Ojeda (2016) compreende o despojo não apenas como a privação, acumulação de recursos e dinâmicas de concentração. O despojo como espoliação não é apenas a perda por meios violentos da posse ilegal de um bem por parte de atores armados.

...más que un evento particular, el despojo es el resultado de procesos violentos de expoliación, explotación y exclusión que se acumulan en el espacio y que entretejen múltiples escalas espaciales y temporales. Desde esta perspectiva también se hacen visibles su carácter inacabado y las diversas estrategias de resistencia frente a él. (OJEDA, 2016, p. 22).

As geografias do despojo são resultado das articulações específicas com a violência e a desigualdade (OJEDA, 2016). Como falei acima, desde esta perspectiva o despojo é entendido a través da maneira na que produz espaços e sujeitos concretos, ao tempo que constitui formas cotidianas que ele faz possível e se atualizam. Entre o ciclo da consolidação da guerra contra insurgente (2002) e o ciclo de desmobilização das forças irregulares (2006), se constituíram vários mecanismos de despojo que resultam na produção (e destruição) do espaço através de práticas cotidianas que ele faz possível e se atualiza.

Mesmo que vários estudos do despojo contam com uma tradição acadêmica nos trabalhos sobre a questão agrária, “desde uma perspectiva que problematizam as disputas pelo acesso aos recursos, além de um problema de classe e de poder político (ESCOBAR, 2010;

RESTREPO, 2004, ULLOA 2008; LEAL e RESTREPO, 2003)” (OJEDA, 2016, p. 25); esta pesquisa coloca o foco nos outros mecanismos do despojo que estão silenciados e que pouco são abordados nas pesquisas acadêmicas e nos cenários dos escritórios institucionais pelos que passei. São estes dispositivos do despojo que vão além da lógica da expropriação para acumulação, mas que também envolve ao Estado numa produção constante tanto simbólica como material com uma marginalidade que chega ser em extremo paradoxal com consequências políticas diferenciadas entre indígenas e campesinos, com efeitos inesperados nas comunidades étnico-rurais, como mostrarei a continuação.

Algumas pesquisas recentes aportam a discussão abordando nas complexidades do despojo em contextos concretos. Ojeda (2016) ressalta três linhas de trabalhos que permitem compreender as dinâmicas do despojo e deslocamento forçado na Serra: i) Estudos sobre o papel do Estado nos processos de despojo de recursos naturais em várias regiões do país. Confluência da violência estatal e paraestatal, as políticas de desenvolvimento a concentração de recursos naturais; ii) compreensão de modalidades paulatinas e menos visíveis do despojo. Distintos despojos e as transformações socioespaciais que resultam destes. Efeitos da agroindústria da palma de dendê sobre as vidas cotidianas das mulheres em Montes de Maria; e iii) os processos de despojo em nome da natureza. Estudos como o de Roosbelinda Cárdenas (2012) no Alto Mira, Carlos de Cairo e Ivan Montenegro (2015) no Guaviare e Maria Camila Gonzalez (2014) no Parque Tayrona prestam atenção a como as políticas da conservação, o ecoturismo e a expansão de monocultivos para a produção de agro combustível tem se traduzido na expropriação e a exclusão de comunidades locais (OJEDA, 2016, p. 26).

Quais têm sido as possibilidades para indígenas e campesinos para assegurar sua permanência nos territórios nesse “estado de guerra”? Como o multiculturalismo operativo em Colômbia se implementa no contexto da guerra contra insurgente na Serra e que consequências têm sobre as populações rurais? Quem define a vocação de um território e de sua população? Como essa definição pode ter repercussões territoriais diferentes nas comunidades étnico-rurais na Serra nesses contextos intestáveis?

5.2 DESENHAR FRONTEIRAS: HISTÓRIAS DA DIFERENÇA EM TERRITÓRIOS AMBIENTAIS INDÍGENAS E TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO CAMPESINO

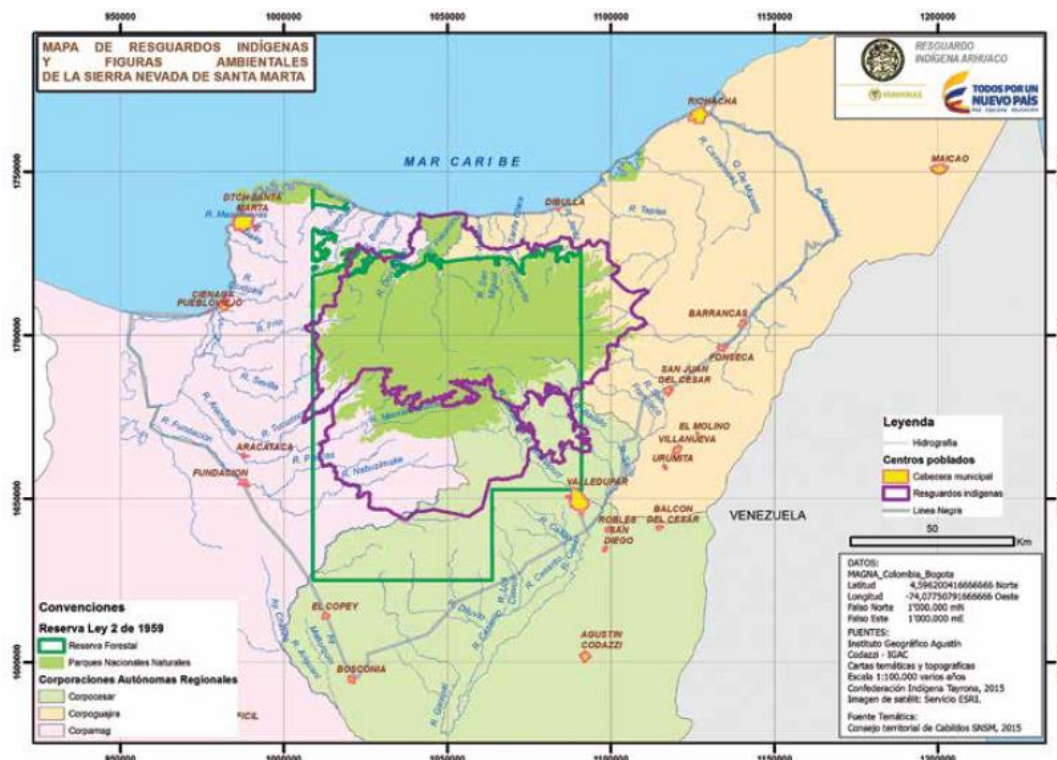
Uma das maiores confusões e debates entre os funcionários e funcionárias do escritório da Unidade da Restituição de Terras eram as fronteiras e contornos que sobre a Serra existem. Os mapas feitos pela equipe cadastral composta por geógrafas/os, agrimensores e

engenheiras/os ambientais eram temas de debates entre as equipes sobretudo se a terra solicitada em restituição está dentro do resguardo indígena, fora dele, mas em zona de ampliação do resguardo, também em áreas do Parque Nacional Natural, e em geral, sobre os contornos da Linha Negra. Era o caso da senhora Matilde: campesina com uma terra dentro da zona de resguardo indígena, do Parque Natural e por tanto, entendidas consequentemente como zonas de reserva ambiental.

Essas sobreposições nos mapas configuravam uma série de tensões na compreensão e na leitura dos territórios nas práticas da execução da política de reparação territorial, contudo difíceis de entender ou perceber quando se caminhava ou se andava pela Serra nos recorridos dos trabalhos de campo ou nas caminhadas que por conta própria fiz. Como fala Bocarejo (2015), a Serra mais que o resultado de um plano estatal de “convivência” ou do enlaçamento simétrico de jurisdições, o que se evidencia é, como falou um campesino da Serra entrevistado por ela: “*la incoherencia histórica del Estado*” (BOCAREJO, 2015, p. 145).

Como aponta Bocarejo (2015), as divisões da SNSM apresentam uma realidade muito complexa. Dividida administrativamente em três departamentos (Magdalena, Cesar e a Guajira) e onze municípios; dois parques nacionais; uma zona de reserva ambiental; um parque arqueológico; uma reserva de biosfera da Unesco; três resguardos indígenas; e reconhecimentos de propriedade de terras individuais a campesinos que geralmente nunca aparecem nos mapas oficiais como o seguinte construído entre uma empresa mineradora e os indígenas arhuacos. (MAPA, 12).

Mapa 12 - Resguardos indígenas e figuras ambientais da SNSM



Tomado de *Guia de relacionamiento y diálogo entre el sector minero-energético y el Pueblo Arhuaco*, 2015.

Essas jurisdições se sobrepõem em diferentes pontos, portanto, entender o direito a posse e o uso da terra entre as comunidades étnico-campesinos torna-se um problema, situação comum no dia a dia da restituição de terras. A definição das fronteiras está estreitamente ligada à atuação das instituições estatais e as não estatais como ONGs ambientalistas e indigenistas, que constituem programas e planos de gerenciamento do território que correspondem ao o que cada instituição e organização da sociedade civil considera deve ser o futuro da Serra. Frente a essa diversidade de contornos que sobre a Serra se constroem, cabe-se questionar como a professora Bocarejo sugere: a Serra é um reservatório natural? Uma despesa agrícola? Um resguardo indígena? Um empório turístico? (BOCAREJO, 2015, p. 145).

A discussão central desta dissertação está em reconhecer, como explica Bocarejo (2015), como essas fronteiras, esses mapas, essas resoluções do campo jurídico das diferentes instituições estatais e da escala global, têm implicações e determinações no futuro das vidas de milhares de habitantes da Serra; além de definir, reconhecer e significar a identidade, as expressões sociais e os termos em que as pessoas interatuam entre eles. Pode-se afirmar então que a importância destas jurisdições como ilustra a antropóloga colombiana, está em compreender como os anseios de milhões de habitantes são definidos ou truncados pelo poder

desses mapas e resoluções que traçam possibilidades de imaginar um futuro na Serra. Em suma, esses contornos aparecem como importantes questões das comunidades étnico-campesinos frente a seus projetos territoriais de vida.

Las jurisdicciones como construcciones legales no son importantes a priori, el problema radica, como afirma Greenhouse, en reconocer cómo estas jurisdicciones se construyen, se significan, y se convierten en elementos importantes para la “identidad, las expresiones sociales y los términos en los que las personas interactúan una con otras” (Greenhouse 1997,7)” ¿por qué importan entonces las jurisdicciones de la Sierra? Porque las añoranzas de miles de habitantes se definen o se truncan por el poder de aquellos mapas y resoluciones que trazan las posibilidades de vivir e imaginar un futuro en la Sierra. Porque muchos habitantes se preguntan constantemente sobre las posibilidades que tienen de habitar en las áreas de parques naturales y, en muchos casos, tienen que adivinar por dónde pasan los límites geográficos de dichas áreas. Muchos también se preocupan por los usos y el manejo de aquella zonas superpuestas entre los resguardos y los parques, o se cuestionan por las posibilidades de ampliación territorial de los resguardos o esperan sin certeza saber si las tierras en los que llevan viviendo décadas algunas vez van a ser legalizados o despojados (BOCAREJO, 2015, p. 145).

Antes que analisar os usos e manejos daqueles contornos no marco dos processos de reparação territorial no escritório da Unidade de Restituição de Terras, tópico a ser abordado no último capítulo desta pesquisa; vou tentar explicar como essas incertezas dos habitantes da Serra se manifestam de maneira contraditória entre campesinos e indígenas no marco do multiculturalismo Colombiano instaurado com a Constituição Política de 1991. A posse da terra, como fala Bocarejo, tornou-se um meio e objeto de luta que redefiniu o quadro de diferenciação social e política entre campesinos e povos indígenas da Serra onde “marcar” a certos sujeitos têm envolvido “desmarcar muitos outros” (BOCARAJEO, 2015). Neste panorama, esses contornos e desenhos que sobre a Serra existem jogam um papel fundamental na definição dos projetos de vida dos grupos étnico-campesinos.

Frente as dificuldades que os povos indígenas tiveram para negociar com o Estado a ampliação dos resguardos, estes encontraram na aquisição e compra de terras um mecanismo de cambio da posse desta em função das pretensões territoriais de seu grupo étnico, porém, em detrimento dos campesinos deslocados pela cruenta violência, “*de tal forma que el espacio ganado, tanto físico como simbólico, no ha sido el de las elites regionales ni el de los grandes inversionistas* (BOCAREJO, 2015, p. 146)”.

A seguir, analiso a forma como a implementação recente de políticas de conservação neoliberal baseadas no marco multicultural da CP91, deu forma a construção na serra nos municípios de Aracataca e Fundación de 10 povos culturais através do Programa Cordón Ambiental e Tradicional da SNSM (CATSNSM), num contexto paradoxal de “estado de

guerra” numa geografia do despojo, onde o mercado de terras foi um dos focos centrais do programa. Dita mobilização do mercado de terras também aconteceu em relação as operações de programas de saneamento e ampliação dos resguardos. Ditos casos nesse contexto do mercado de terra na Serra, auxiliam no entendimento de outras formas de despojo e de espoliação que vão além da expropriação e usurpação em função da acumulação e da terra como capital, materializadas em formas do despojo silenciadas e justificadas em nome de uma narrativa indigenista e ambiental nas negociações cotidianas pelos recursos (OJEDA, 2016), que, em suma, tornam o acesso desigual e diferenciado entre indígenas e campesinos ao uso, manejo e planejamento territorial da SNSM.

5.3 PROGRAMA CORDÓN AMBIENTAL E TRADICIONAL DE LA SNSM NO CONTEXTO DA MILITARIZAÇÃO DA SERRA E A AQUISIÇÃO DE TERRAS CAMPESINAS PELO RESGUARDO INDÍGENA ARHUACO

É notório e pouco estudado como paralelo ao avanço da guerra contra insurgente sobre a Serra, com base em seus benefícios no campo geoestratégico militar frente à possibilidade de manter a planície em função da concentração, acumulação e articulação ao mercado internacional; o territórios de montanha serviram de repositório de políticas e programas estatais fundamentados na conservação ambiental com efeitos inesperados nas populações locais. Durante os anos do estrito controle e consolidação paramilitar que definiu as formas e os meios de acesso aos recursos das populações Serranas e suas imediações, ao tempo que reforçou-se os regímenes de acumulação da propriedade dos círculos das elites locais; configurou-se umas tensões e conflitos pelo acesso à terra nos territórios onde convivem indígenas e campesinos no contexto da materialização de um tipos de expropriação e despojo em anos da execução de programas de conservação ambiental que vale a pena revisar.

Como analisaram Bocarejo e Ojeda (2015) no artigo “*Violence and conservation: Beyond unintended consequences and unfortunate coincidences*”, as articulações entre violência e conservação nas áreas do Parque Nacional Tayrona durante os primeiros anos da década 2000 na cara norte da Serra, operaram nos discursos e práticas de conservação que traduziram-se em formas violentas de despojo mediante o apagamento das comunidades locais de campesinos por parte de ações estatais em nome do ambiente, da segurança e o desenvolvimento (BOCAREJO e OJEDA, 2016). Como analiso nesta dissertação, ditas articulações reproduziram-se também nos setores de Fundación e Aracataca, não em função do

turismo mas sim na criação de povoados indígenas conhecidos como Povos Talanquera ou Povos Culturais.

A execução do programa da construção dos Povos Talanquera desde a perspectiva do de Ojeda (2016), seria a expressão de outros mecanismos do despojo além dos eventos e fatos da concentração da propriedade, que são dados de maneira sustentada através de modalidades e mecanismos menos visíveis, mas também violentos que são pouco estudados. Assim, os discursos e as práticas da conservação reproduzem umas formas violentas de despojo mediante o apagamento das comunidades locais de campesinos e campesinas vítimas do conflito armado, apagamento que têm incluído sua criminalização, expulsão, ameaças de morte e assassinatos, assim como o deterioro de suas estratégias de sustento. Isto tem contribuído para que, principalmente os campesinos, apareçam nos discursos públicos como depredadores ambientais e invasores da área protegida (OJEDA, 2016).

Mesmo que as duas comunidades viveram as atrocidades da violência contra insurgente, as políticas e planos sobre a Serra nos anos da consolidação dos grupos paramilitares, sua desmobilização e anos posteriores (2002 – 2011), levantaram um cenário desigual frente o acesso à terra entre as comunidades locais com efeitos devastadores para os campesinos e campesinas dessas áreas de montanha. No volátil contexto político e social das disputas territoriais e da legitimidade das populações na Serra pelos atores armados, os Povos Talanquera seriam um ponto de inflexão para os indígenas dos setores de Fundación e Aracataca.

A proximidade entre os arhuacos e o exército ocorreu a través das coincidências que possibilitam os contraditórios contextos das guerras, em que se instrumentaliza as populações subalternas no campo das disputas territoriais entre atores armados legais e ilegais. Com o assassinato de uma das autoridades tradicionais, o mamo Mariano Suarez Chaparro por parte do Frente 19 das FARC, considerado pela insurgência como colaborador do Exército e promotor da criação dos assentamentos indígenas através do programa dos Povos Talanquera (OMCT, 2004); uma liderança indígena denunciou nacionalmente a morte do mamo mais importante para os arhuacos de Aracataca e Fundación, chamando a atenção do presidente da república. No seguinte depoimento um dos antropólogos que tem atuado junto com os indígenas, relatou a coincidência de interesses que apresentou-se nesse período, que favoreceu os fines das políticas contra insurgentes que o governo da época estava implementando: *“entonces el man arma bulla con la vaina y [el presidente] Uribe le cogió la caña de una,*

ósea... enseguida se la pilló... ¿ah sí? esta es la oportunidad para yo entrar a la Sierra con todo” (FUNCIONARIO, 1).

Uma das lideranças arhuacas com quem conversei explicou que com a morte do mamó Mariano, desligaram-se da guerrilha e falaram com o presidente Álvaro Uribe Vélez em cabeça do líder do resguardo da zona do Magdalena, para fazer um trabalho conjunto e permitir que o território ficasse só em mãos dos indígenas da Serra (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 2, 2019). Os Povos Talanquera eram fundamentais para esse propósito.

yo sé que para la época más que todo, increíble pero cierto, con el tema de Uribe... tuvo un apoyo de él... digamos que fue como el periodo para algunos muy azotado para otros más organizado... hay como un debate ahí pero digamos que los pueblos indígenas a pesar de todas las situación fue donde mayor apoyo hubo [...] fue donde se pudo avanzar a través de Acción Social, fue que se pudo avanzar en la construcción de los Pueblos Talanquera (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 1, 2019)

O processo da implementação dessas políticas de conservação desde um marco neoliberal a través do Programa Cordón Ambiental y Tradicional de la SNSM (CATSNSM), em pleno contexto da guerra contra insurgente, aconteceu desde finais do ano 2002 quando o governo nacional e o Consejo Territorial de Cabildos CTC, organização que reúne os quatro grupos indígenas da SNSM, assinaram um acordo onde se estabeleceu a necessidade de *“recoger, potenciar e impulsar el ordenamiento territorial indígena, el fortalecimiento de su gobierno propio y la consolidación de su territorio, la recuperación y conectividad de los lugares de origen y sitios sagrados”* (DPS, 2012; 15). Nesse ano também foram realizados acordos entre a CTC e a *Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente; la Corporación Autónoma Regional del Cesar* (CORPOCESAR), *la Corporación Autónoma Regional de La Guajira* (CORPOGUAJIRA) y *la Corporación Autónoma Regional del Magdalena* (CORPAMAG) (DPS, 2012).

O argumento do projeto se sustenta na detenção do avanço da ocupação da parte alta da Serra por campesinos, promovendo esses territórios como *“santuário de paz”* (DPS, 2012; 2), e também, proporcionando médios para a fortaleza da *“estratégia de consolidación territorial [indígena] a través de la ampliación y saneamiento del resguardo y el acceso y manejo de los sitios sagrados”* (Ibid).

O plano de salvaguarda do povo arhuaco mantém a mesma linha pois os Povos Talanquera são indicados como uma estratégia de preservação frente a ameaça e o risco de fora, *“un guardián estratégico para preservar y resguardar el patrimonio”* (CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAIRONA, 2015). Expressamente, para a organização indígena, aqueles povoados

foram pensados nas partes baixas da SNSM “*donde la presencia campesina tiende a hacerse cada vez mayor en contravía con las aspiraciones de los pueblos indígenas de recuperar su territorio ancestral*” (IBID). A CIT resume este processo dos Povos Talanquera em varia localidades da Serra, entre elas as partes altas dos ríos Aracataca e Fundación.

... *[Los pueblos talanquera] fueron criados en territorio Arhuaco, con el apoyo del gobierno nacional, los pueblos talanqueras de: Gunmaku en la cuenca del río Aracataca; Kunkawarwa, en la cuenca del río Fundación; Kuntínurwa, en la cuenca del Río Ariguani; Seykún, por la vía de Mariangola hacia la Sierra; Umuriwa, cuenca del Río Azúcar Buena; y “Chimila” por la vía de Caracolicito arriba, en jurisdicción del Municipio de El Copey (CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAIRONA, 2015, p. 28).*

Entre 2004 e 2009, durante o ciclo do que categorizei o “estado de guerra”, o Estado, acompanhado de algumas lideranças das organizações indígenas dos quatro povos indígenas, instituiu, através do departamento de Acción Social depois conhecido como Departamento de Prosperidad Social (DPS), os programas *Cordón Ambiental y Tradicional da SNSM* (CATSNSM) e o programa *Familias Gurdabosques, Corazón del Mundo* (FGCM). Enquanto na parte plana o aparelho estatal servia como representante dos interesses das classes dominantes e hegemônicas estabelecendo projetos de empreendedorismo com a palma de dendê como mostrei no final do anterior capítulo; na SNSM seriam criados os 10 povos talanquera, três deles localizados nas zonas de influência das veredas dos municípios de Aracataca e Fundación: *Gunmaku, Kankawurwa e Kantinarwa* (ACTUALIDAD ETNICA, 2009). Para as instituições encarregadas do programa, o CATSNSM se constituiu como

...*un puente de encuentro donde se engrana el deber cultural de los pueblos indígenas con una política de Estado para cumplir con su obligación de conservar y mantener la biodiversidad [...] También responden a políticas del Estado Colombiano en su obligación de atender a los pueblos indígenas de la SNSM* (DPS, 2012; 12).

Mapa 13 - Localização dos *pueblos talanqueras* (2004 – 2009)



Fonte: Atualidade Étnica 25 de março 2009.

O mapa referência os primeiros cinco povos talanquera que nasceram entre 2004 e 2009, entre eles, *Gunmaku*, *Kankawurwa* e *Kaninarwa* na cara ocidental da Serra. Foi desse modo como os vínculos entre violência e conservação materializaram-se através dos Povos Talanquera. A construção e implementação destes foi liderada pelo *Centro de Coordinación de Atención Ambiental* (CCAI), integrado pelas entidades do governo Colombiano que “*complementan y apoyan la recuperación militar del territorio*”, ao tempo que executam “*programas sociales y económicas, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social*” (DPS; 2012; 14). Até membros do exército estadunidense que financiavam vários dos programas que se implementavam na Serra,

aparentemente participaram da execução. Um dos entrevistados falou sobre esse momento nos seguintes termos:

En épocas do Plan Patriota, Uribe se crea una gerencia para la Sierra y viene a la Sierra hablar con Fabio, porque los otros cabildos... no, no, no, no, con ese hijueputa [de Uribe] ni mierda y Fabio es el que trae a Uribe y le plantea de que las solución es la recuperación de tierras para los indígenas y la manera de constituir pueblos de este tipo. Entonces Uribe se inventa una gerencia para que el Director de Acción Social, y crean una gerencia para la Sierra, Edward Álvarez, que ahora el asesor de los Yukpa. 05:00 Entonces llega Edward acá y llega con militares. En la Primera División nombre a un oficial que sea el encargado de armar toda la seguridad para poder hacer los pueblos. En todas las reuniones un mayor, y ahí comienza una relación entre indios y ejército que se mantiene, esa relación es muy fuerte. El Ejército va con mucha frecuencia a casa indígena. Y después... yo estaba aún en casa indígena, y me acuerdo... a mí nunca me invitaron a esas reuniones y si me invitaban yo tampoco iba ir... pero nunca me invitaron, y las hacía Fabio. Cuando un día de esos paso y veo una reunión y... ¿oficiales gringos? ¡Jueputaaaaa! Claro venían a ver cómo estaban invirtiendo su billete (FUNCIONARIO 1).

Figura 13 – Foto povoado Kankawarma. Projeto "Plan de vida en comunidad Arhuaca de Kankawarwa" da Universidad del Magdalena



Fonte: Coletado do site da Universidad del Magdalena sobre o projeto: “Redescubriendo La Sierra: Plan de vida en comunidad Arhuaca de Kankawarwa”, 2021. Site: <https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/VerNoticia/150093>.

Nesse marco dos Povos Talanquera, ao mesmo tempo seriam criados em 2004 na vereda Santa Clara da bacia do rio Fundación o *Batallón de Alta Montaña No 6* e o batalhão *El Cenizo*, na entrada à Serra nos setores do rio Aracataca, perto da *Troncal del Caribe* que conecta todo o Caribe com as brigadas correspondentes à *Primera División del Ejército Nacional* cujo posto de mando fica na cidade de Santa Marta. *El batallón El Cenizo*, seria levantado durante o começo da construção de povoado *Gunmaku* por solicitação dos indígenas arhuacos à Agência Presidencial para a Ação Social. Com a criação do Povo Talanquera *Gunmaku*, a CTC propõe ao presidente apoiar a construção de 6 povoados mais cuja execução se estenderia até o seguinte período presidencial de Juan Manuel Santos Calderon (2010-2014) (DPS, 2012).

Ou seja, ao tempo que se dava uma aberta convivência do Exército Nacional com grupos irregulares de paramilitares fundamentado pela política contra insurgente do governo da época, as figuras de ordenamento territorial garantiram a presença no território dos Povos Talanquera sobre a base de um discurso da conservação. De fato, “*al tempo que construye el Pueblo [de Gunmaku] se monta la base militar El Cenizo*” (FUNCIONARIO, 1). A função principal de *El Cenizo* seria a formação dos soldados em táticas de contra insurgência: “*ahí se forma toda la contraguerrilla pal Caribe [...] toda la Primera División, ahí forma su gente de contraguerrilla*” (FUNCIONARIO 1). Os jornais da época documentam a aparição da base de Sacramento e o nascimento de *Gunmaku* da seguinte maneira:

...el Ejército Nacional, mediante la Disposición No. 010 del 07 de mayo de 2004, firmada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, decidió activar una importante unidad militar, la cual se llamó Batallón de Alta Montaña No.6 ‘Mayor Robinson Daniel Ruíz Garzón’, orgánico de la Segunda Brigada adscrita a la Primera División [...] Los diseños y ejecución de las instalaciones de este cuerpo militar, fueron adelantados por el Batallón de Ingenieros No.2 ‘General Francisco Vergara y Velasco’, ubicando su puesto de mando en la vereda Santa Clara, municipio de Fundación, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta (EL INFORMADOR, 2019)¹¹⁰.

Este sábado, cuando se cumplen dos años y cuatro meses del asesinato del mamo Mariano, los Arhuacos inauguran -con la presencia del presidente Álvaro Uribe y ministros de despacho- Gunmanku, el pueblo indígena de la Sierra Nevada en que el Gobierno Nacional invirtió 2.000 millones de pesos e hizo realidad el sueño del anciano indígena y de un pueblo que está en medio de una guerra ajena [...] El pueblo se encuentra en la vereda El Blanco, en Aracataca (Magdalena), parte alta del río Aracataca, en un área de ocho hectáreas, a casi una hora de la Troncal de Oriente y a casi cuatro horas a pie [...] Aquí, en ocho meses, se construyó un puesto de salud, entregado por la Embajada de Estados Unidos por valor de 317 millones de pesos, un

¹¹⁰ Batallón de Alta Montaña No. 6: 15 años contra el crimen organizado en la Sierra Nevada <https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/325-el-informador-61-anos/especiales-61-anos/209916-batallon-de-alta-montana-no-6-15-anos-contra-el-crimen-organizado-en-la-sierra-nevada>

colegio, acueducto, 39 viviendas indígenas rurales, el mejoramiento de la vía y un comedor para los niños (EL TIEMPO, 2007)¹¹¹.

Partindo da ideia de que o *Ministério de Ambiente y Desarrollo Sostenible* e outras instancias ambientais regionais reconhecem aos povos Arhuaco, Kogui, Kankuamo e Wiwa da Serra como os mais idôneos para garantir a conservação da Serra, o programa de CATSNM se planeja e executa sobre o argumento da garantia da diversidade biológica e cultural, a conservação e o manejo sustentável para salvaguardar a água que alimenta as planícies produtivas da região. A ideia do mandato de origem que os quatro povos receberam para o cuidado do “coração do mundo” (DNP, 2012) aparece como justificção da instalação dos Povos Culturais para instituições do Estado e organizações locais, de ordem nacional e internacional através das ajudas humanitárias.

A diferenciação do uso do solo entre indígenas e campesinos como justificativa para a instalação dos povos culturais foi fundamental em sua materialização. No informe de avaliação do programa, a palavra Talanquera foi explicada como um conceito trabalhado pelos mamos em sítios sagrados e pontos específicos da SNSM, “*para impedir que suban las enfermedades de afuera hacia los territorios indígenas*” (DPS, 2012). Nesse mesmo sentido, “*se utilizó la denominación de pueblos talanquera o pueblos fronterizos, contruidos para impedir que siga subiendo la colonización y el uso y manejo del territorio con modelos exógenos que no garantizan la sostenibilidad*” (DPS, 2012). Para o caso do povoado indígena Kankawarwa em Fundación, por exemplo, se assume que “*el uso y manejo que dan los colonos al territorio [...] se sale de los mandatos de la ley de origen*” (DPS, 2012).

Por outra parte, dito programa dos Povos Talanquera na Serra entrou a respaldar as fases de ampliação e saneamento dos resguardos (reservas) indígenas, para avançar na consolidação dos territórios destas comunidades no *território ancestral* delimitado pela linha simbólica chamada Línea Negra (Mapa 13). Na prática, parte da consolidação territorial dos indígenas no marco de uma regularização fundiária foi destinar o 70% dos recursos de transferências estatais através do *Sistema General de Participación* (SGP)¹¹² para a compra de terra de pequenas propriedades e posses campesinas, algumas das quais ante à violência decidiram vender.

¹¹¹ Hoy nace Gunmaku, el pueblo que soñaron los Arhuacos. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3514190>

¹¹² Constitución de 1991, se dio inicio a dos mecanismos a través de los cuales las entidades territoriales recibirían recursos por parte del gobierno central, el situado fiscal en el caso de los departamentos (incluyendo al Distrito Capital y los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) y las participaciones municipales (BONET, PÉREZ, RICCULLI; 2018)

Desde 1993 os resguardos indígenas recebem recursos de transferências do Estado que só se tramitam e canalizam através dos municípios. O funcionamento para uso destes recursos, se dá por meio de convênios no marco anual que definem os governadores indígenas ou cabildos, num comitê onde participam também o prefeito e o secretário de governo. É nesses espaços que se decidem os projetos nos que vai investir cada grupo indígena atualmente. No caso dos arhuacos, assegura Bocarejo, “...han decidido utilizar alrededor del 70% de los recursos en compras de tierra” (BOCAREJO, 2015, 147).

A compra de terras dentro do documento de avaliação do programa dos Povos Talanquera, foi uma das questões que acompanhou como parte da articulação para a consolidação territorial dos indígenas.

[El programa CATSNSM] fortalece esta política [de compra de tierras con recursos do SGP] implementada por los pueblos indígenas, la complementa y articula esfuerzos para lograr una consolidación territorial que favorece tanto a los pueblos indígenas como al interés nacional, pues se evidencia la garantía de la sostenibilidad en el manejo de la SNSM y se crean las condiciones para que en las partes bajas puedan plantearse proyectos competitivos de la región, en la medida que se cuenta con fuentes de agua protegidas (DPS, 2012).

Otro de los hallazgos de las entrevistas es la afirmación de que los pueblos culturales son un avance hacia la consolidación del territorio hasta la Línea Negra. En ningún momento las autoridades indígenas renuncian a sus aspiraciones de tener gobernabilidad en el cuerpo completo del territorio que les encargaron cuidar y proteger. Por eso la discusión en la manera de nombrar estos pueblos, concluyó en que deben ser nombrados como pueblos de permanencia cultural o pueblos culturales, y no pueblos talanquera o fronterizos (DPS, 2012; 55).

Do outro lado, é interessante observar também como no marco do *Programa de familias Guardabosques* (FGBCM) se realizaram vários convênios que se materializaram entre 2009 e 2011 em mais de 10 mil milhões de pesos Colombianos¹¹³ destinados particularmente à compra de terras. O programa se vinculou ao processo de criação do Povos Talanquera na fase dois, onde começava a aquisição de terras de pequenas propriedades ou posses dos campesinos e campesinas.

En esta fase debe comenzar el proceso de compra de predios alrededor de los pueblos culturales para que las familias que se designe a habitar el pueblo cultural tenga un lugar en el que puedan cultivar. Este subproceso está apoyado por el Programa FGBCM, diseñado específicamente para la SNSM, el cual se compone de varios pasos, a saber, identificación de predios disponibles con voluntad de venta por parte del propietario dentro de la Línea Negra y cercanos al pueblo cultural, definir el estado legal del predio,

¹¹³ Aproximadamente 13.801.500 milhões de Reais.

priorizar predios para su compra, avalúo del predio, negociación con el propietario del predio, y por último la compra (DPS, 2012; 36).

Tabela 3 – Convênios e recursos para compra de terras do *Programa Famílias Guardabosques Corazón del Mundo* (FGBCM) (2009-2011)

Número de Convenio	Fecha de Firma	Pueblos Culturales	Firmantes	Monto
041	14 de abril 2009	• Gunmaku • Kankawarwa • Dumingueka • Seywiaka	• Corpoguajira • Acción Social • Organización Gonawindua Tayrona	2.900.000.000
018	22 de julio de 2010	• Dumingueka • Seywiaka	• Corpoguajira • Departamento de la Guajira • Resguardo Kogui Malayo Arhuaco	3.099.426.000
096a	23 de julio de 2010	• Kantinurwa • Kankawarwa • Gunmaku • Seykun	• Acción Social • FONADE • Resguardo Arhuaco	1.000.000.000
002bis	23 de julio de 2010	• Achintuhkua	• Corpoguajira • Organización Wiwa Yugumain Bunkuanarrua Tayrona	2.060.000.000
125	10 de diciembre de 2010	• Makugueka	• Acción Social Resguardo Kankuamo	310.000.000
025	28 de junio de 2011	• Kantinurwa • Kankawarwa • Gunmaku • Seykun	• Acción Social • Departamento del Cesar • Resguardo Arhuaco	1.100.000.000

Fuente: Elaboración Econometría

É claro como uma das estratégias do governo para exercer presença nos territórios ocorreu através da política de *Famílias Guarda bosques* na que uns dos beneficiários foram as comunidades arhuacas das partes altas de Aracataca e de Fundación cuja população, desde a lógica do programa CATSNSM, deviam incrementar o número de famílias nas partes medias e baixas ao redor da criação dos povoados *Gumakú* (2006), *Kankuawarua* (2007) e *Kantiwuarua* (2007) através da consolidação da compra de terras de camponeses.

El análisis de los hallazgos etnográficos, de entrevistas y de cartografía social le permiten a esta evaluación afirmar que: el tema de vivienda está directamente relacionado con el acceso a tierra; que se requiere continuar con la compra de tierras alrededor de los pueblos para lograr incrementar el número de familias instaladas en las partes medias y bajas, favoreciendo su acceso a vivienda con predio para el autosostenimiento; que existe una apreciación generalizada de que el Programa CATSNSM ha contribuido con la compra de predios a mejorar el acceso a la vivienda para las familias que pueden establecerse y desarrollar actividades productivas que garanticen su sostenimiento (DPS, 2012; 49).

O programa CATSNSM foi justificado como a execução de uma política que atrelou os esforços do Estado e os povos indígenas para consolidar a paz, a convivência, a sustentabilidade e a governabilidade da SNSM (DPS, 2012), através do privilégio das demandas territoriais indígenas aprontadas com narrativas de segurança e pacificação da Serra; mas sobre o silêncio das outras realidades do campesino deslocado e expropriado durante o contexto volátil de militarização da Serra. Não é casual que as relações entre a agência da Presidência para a Ação Social (hoje DPS) e os quatro povos indígenas foram vista pelas instituições estatais como a possibilidade de articulação interinstitucional para dinamizar “*procesos que han aportado en la pacificación de la Sierra*”, sobre o pretexto da conservação e o respeito a diversidade cultural num “*territorio de gran importancia por su posición geopolítica y por ser un enclave ecosistémico que produce agua para toda la región*” (DPS, 2012; 11), água que em efeito, é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio das partes planas.

De fato, a presença das forças militares são ressaltados no informe de avaliação do programa como um aspecto positivo no estabelecimento das relações entre o Estado e as comunidades indígenas, e a consolidação das forças militares no território.

En la recuperación de la seguridad del territorio, las Fuerza Militares, jugaron un papel muy importante en el marco de la Política de Consolidación. En eventos de presencia de Grupos Armados ilegales en la región, la presencia de las FFMM debe mantenerse particularmente en términos de asegurar la región, propiciando el diálogo sobre los tema de seguridad entre las comunidades indígenas y las FFMM sobre la base de dos principios que deben garantizarse: a) la posibilidad de ingreso de las FFMM a todo el territorio nacional, y b) el respecto a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas (DPS, 2012, p. 119).

É importante ressaltar que dito caráter militarista detrás da construção dos povoados indígenas da cara ocidental da Serra, é problematizado também por outros grupos de líderes indígenas arhuacos e das outras comunidades que habitam na Serra e que desde o começo opuseram-se ao projeto de CATSNSM pois protege outros interesses da mineração e megaprojetos. Para eles e elas, na política de Estado nos programas dos Povos Talanquera,

hay intereses ocultos de parte del Estado al apoyar esta estrategia del CATSNSM, intereses que consisten por una parte en garantizar el control militar del territorio y así proteger intereses de explotación minera y de construcción de megaproyectos que afectan la integridad del territorio, y por otro en convertir estos pueblos en escenarios para el turismo (DPS, 2012; 11). Para mi es propuesta del Gobierno era innegociable. El gobierno quería hacer asambleas para el Auto por departamentos. Sim embargo, nosotros queremos que se haga por pueblos, y en ese sentido queremos que se haga por pueblos de la Serranía de Perijá, a los Chimilas ey a los Yukpas. Y es que hay problemas muy claros en el territorio, los pueblos talanquera, la

militarización, los megaproyectos, los proceso de rearme (Ponencia de Leonor Zabalera en la reunión realizada entre las organizaciones indígenas y el Ministerio del Interior y de justicia en Besotes, territorio Arhuaco, septiembre de 2009) (MORA, NAANJO, RODRIGUEZ, SANTA MARIA, 2010).

Com tudo, é possível afirmar que paralelo ao marco da perseguição da insurgência e a tudo aquele que ameaçasse os interesses de acumulação fundamentado nas políticas contra insurgentes e políticas económicas de curte neoliberal, instauraram-se os programas CATSNSM e FGBCM, os dois sobre a base do discurso da conservação e o fortalecimento das demandas territoriais indígenas. Nessa conjuntura na que os discursos e as práticas de conservação estatal ampararam a instalação dos Povos Talanquera em nome do ambiente, a segurança militar e a estabilização territorial indígena, se materializaram outras formas violentas de despojo mediante o apagamento do sujeito campesino local. As compras de terras a campesinos no marco dos dois programas, assim como também aquelas feitas com verba do SGP e de ONGs internacionais para a consolidação territorial indígena, contrastam num cenário em que a categorização dos campesinos como não étnicos instaurou uma desigualdade que acrescentou sua marginalização num contexto de uma geografia do despojo no “estado de guerra”.

5.4 MERCADO DE TERRAS NA SERRA DESDE A PERSPECTIVA DOS SOLICITANTES CAMPESINOS E CAMPESINAS DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS

Durante o tempo que trabalhei no escritório de restituição de terras, foi encomendada a um colega da área social a labor de tramitar e acompanhar um grupo de casos de solicitações de restituição de terras campesinas localizadas em Fundación. Ditos territórios serranos tinham sido priorizados para ser trabalhados desde o ano 2012. Com tudo, depois de 4 anos de intervenção, seguiam sendo uma das áreas mais complexas no marco da restituição de terras.

O tipo de casos e dinâmicas de deslocamento forçado e despojo da Serra em nada correspondiam com o padrão de compra de terras em função da concentração da propriedade, da territorialização do agronegócio e do conflito com o desenvolvimento manifesto primordialmente nas planícies que circundam a Serra.

Semelhante ao que acontecia nos outros setores campesinos da Serra nos que trabalhei, as heterogêneas dinâmicas da guerra e as práticas do mercado de terras em Fundación fugiam da compreensão exclusiva de uma abordagem da acumulação via espoliação. Naquela época, me questionava profundamente sobre como nos casos das áreas da SNSM onde trabalhei, e nas

áreas de Fundación e Aracataca assignados a meu colega, havia indígenas comprando terras a campesinos deslocados pela violência? Como poderia se interpretar isso? Tempo depois, esta questão tomaria novas formas interpretativas sobre os silenciamentos de outras formas violentas de despojo.

A excessiva atenção das pesquisas acadêmicas e das ONG ao despojo e as dinâmicas territoriais em suas expressões do agronegócio, mesmo que fundamentais, têm esquecido essas outras realidades do campo que também se teceram no contexto da violência, mas que pouco são estudadas e que podem chegar a silenciar ainda mais a marginalidade.

A expressão oculta para mim da dinâmica do mercado de terras do anterior relato que me encontrei nos anos do escritório de restituição de terras, motivou vários dos questionamentos desta dissertação. Pese a que em geral a reconfiguração violenta do acesso aos recursos foi por meio “*del rifle y el título*”, a expropriação e o deslocamento forçado não se reduzem, exclusivamente, à apropriação e acumulação de terras por empresários e elites regionais (OJEDA, 2016). Mesmo que esse seja o padrão da configuração da estrutura agrária em Colômbia, considero que sobre os bordes do capital, nas terras menos aptas para a espoliação que foram relegadas às comunidades historicamente subalternizadas, também se configuram uma série de conflitos territoriais que marginalizam ainda mais algumas dessas comunidades que demanda uma atenção especial.

Nesse contexto do “estado de guerra”, enquanto nas planícies os negócios de terras aconteciam maioritariamente em função do capital e das elites de poder político e econômico; na Serra, forma outros os tipos de fenômenos de compras de terras inesperados entre comunidades subalternas de indígenas a campesinos¹¹⁴.

Nesse sentido, Bocarejo (2015) argumenta sobre como a posse da terra em alguns setores da SNSM têm se convertido num meio e objeto de luta redefinida no marco da diferenciação social e política entre campesinos e indígenas na Serra. Para ela, mais que ser simples procedimentos formais que incluem conseguir os recursos, negociar e organizar todos os requerimentos necessários para a ampliação das terras indígenas na área; o contexto no qual se levam a cabo as transações é muito mais complexo devido às condições sócias e políticas da região (BOCAREJO, 2015).

¹¹⁴ Outras compras também se deram nas partes mais baixas da Serra foram as compras de terras entre campesinos, pobres vítimas do conflito da guerra contrainsurgente. Ainda que essas transações não serão abordadas neste escrito é preciso chamar a atenção a outra das expressões do mercado de terra nas Serra pouco estudado mas que também evidencia os paradoxos da marginalização na Serra e suas manifestações no mercado de terras além do padrão “compra por expropriação e acumulação”.

Os conflitos pela terra nas partes altas da Serra -como ocorreu desde os processos de colonização campesina de 1940 e 1970- se cruzam com a ocupação tradicional dos territórios do povo arhuaco em Aracataca, Fundación e zonas do departamento do Cesar, e seus progressivos exercícios de autonomia que se expressam nas pretensões territoriais que tem começado a descer das partes altas. Nesse marco, as lideranças e ativistas arhuacos em Santa Marta e Valledupar iniciam a compra de minifúndios campesinos dessas regiões como parte de um processo iniciado –segundo é relatado pelos indígenas- desde os anos setenta pela *Organización Gonawindwa Tayrona* (OGT) como parte da estratégia de ampliação dos resguardos.

Nas partes altas dos rios Fundación e Aracataca e outras sub regiões montanhosas se entrecruzam as histórias de indígenas e campesinos com a importância geoestratégica e militar da Serra, num complexo contexto pelo acesso à terra. Aqui um relato de exemplo sobre uma dessa localidades: *la vereda El cincuenta*.

...hay una comunidad que para mí es súper importante y es El Cincuenta, es que ¡El Cincuenta sí es frontera frontera!, es frontera en todos los sentidos. Primero es un Cerro tiene una importancia estratégica: entonces, el que corona ese Cerro ¡corona media Sierra! Es un cerro así, con un pico ni el hijueputa donde tú tienes una visual de 360 grados donde controlas dos departamentos [Magdalena y Cesar]... ¡tú desde ahí eres el capo! por eso ahí hubo tanta mierda y sigue habiéndola, o sea, eso no ha parado. Y es un sitio donde tú ves indios y campesinos mezclados todo el tiempo, todo el tiempo. Yo desde que subo allá desde los ochenta eso siempre ha sido un mierdero y ahorita es peor porque es mucha gente... yo la última vez que fui dije 'no joda! esta vaina está grandísima! [...] Ahí sí que hay mierderos de tierras... ahí hay de todo [tramitadores, indígenas, campesinos, comerciantes] o sea, El Cincuenta es un laboratorio tremendo para poder tratar de resolver cosas.
(ENTREVISTA FUNCIONARIO 1)

Nos anos da hegemonia guerrilheira esse grupo administrou o mercado de terras e proibiu algumas compra-vendas como parte de seu controle territorial. Mesmo a baixa intensidade nas transações dela, alguns campesinos saíram deslocados forçadamente em terras que eram entregues pelo grupo insurgente a outros campesinos da região (ENTREVISTA CAMPESINA 7). Por sua vez, um dos indígenas contou que os guerrilheiros “*tomaban decisiones sobre las tierras, sobre a quiénes se le compraba e a quiénes no [...] decían 'a ese señor no se le compre porque es un infiltrado, tiene nexos con los paras o con el ejército, no se le paga, vamos a sacarlo'*” (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA, 2).

Ainda que durante esses anos se apresentaram deslocamentos forçados, muitos campesinos permaneceram em suas terras dada as expectativas de titulação pelo INCORA e a relativa calma imposta pela ordem dos grupos insurgentes (ENTREVISTA CAMPESINA 7).

Embora, durante a escalada da guerra contra insurgente e a desmobilização dos paramilitares, as compras de terras se intensificaram. Como acima mostrei, um dos marcos das compras de terras foi a criação do programa estatal da construção de 10 povos indígenas denominados Povos Talanquera ou Povos Culturais; mas não seria o único cenário deste fenômeno.

Paralelo a sua criação, as compras de terras de campesinos deslocados pela violência aumentou por parte das lideranças e ativistas arhuacos quem desde os anos noventa administraram recursos em função da ampliação territorial dos resguardos indígenas. Desde essa época, um dos líderes arhuacos entraria em contato com a ONG conservacionista estadunidense, *The Nature Conservancy* (TCN), cofinanciada paradoxalmente por três empresas enormemente contaminantes (General Motors, Chevron e American Electric Power) (CARRERE, 2010), para a gerenciamento de fundos para a compra de terras na cara norte de Serra, articulação que seria mantida anos depois para a aquisição de terras em Aracataca e Fundación.

...ahí Fabio [el líder indígena] conoce un man Jerry Dubal, un gringo canadiense que manejaba dentro de TNC manejaba un programa que se llamaba "Dona un acre". TNC es de la ONG ambientalista de las petroleras. Sus grandes financiadores son es la OXXO, la MOBILE y el partido Republicano, ósea es una ultraderecha gringa, ¡son unos hijueputa!. Es de la ONG ambientalistas más grandes del mundo. Yo me averigüé y le dije 'no joda Fabio, esos manes son el demonio' ¡me importa un culo!, tienen un programa donde dicen los gringos ricachones dona un acre, ¡qué donen acres pa' acá! [...] [es] un millón de dólares pa' comprar tierras huevon! ¡Hay plataaa! eso fue como en el 98, que es un primer momento donde se compran una buena cantidad de tierras. Allá para Aracataca y Fundación no tanto, se compró más pa' este lado [...] pero allá sí se compraron tierras con TNC, en Fundación sí hubo compras, para Aracataca por La Fuente, arriba de Tucurínca, ahí se compraron tierras con plata de TNC. ¡Era billete! después le sacaron más plata, no sé cuánto más. Ahí Fabio ¡un millón de dólares! (risas) coronaron negocio buenísimo (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1, 2019).

Além do falado Sistema General de Participações (SGP) em que o Estado transfere recursos para os resguardos indígenas a través das prefeituras, e das doações da ONG TNC; a aquisição de terras se alimentou também de outras fontes de agências internacionais que aportaram e aportam recursos para os estúdios ou compra de prédios como a *Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo* (AECID) (DPS, 2012).

Em Aracataca, conta um dos atores de dentro da organização indígena, as compras de terras eram mais organizadas que em Fundación, *“donde se ha comprado, que uno aquí que uno allá [...] tener una lógica no ha sido tan fácil, sin embargo se ha podido hacer en algunas*

partes” (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1). O processo de retomada e ampliação não têm se feito de forma ordenada, sem localizar necessariamente as fronteiras dos resguardos. Do lado do Cesar, por exemplo,

Las fincas [tierras] se han comprado en diversos lugares de la Sierra, en la mayoría de los casos muy apartados de los resguardos constituidos. Wilmer es uno de los líderes [en el Cesar] más importantes a la hora de definir las tierras por comprar, conoce como pocos la Sierra, Wilmer y conoce muchos de los campesinos que ofrecen sus fincas. De manera conjunta, Wilmer, el cabildo gobernador, y algunos líderes de la directiva de la CIT toman las decisiones sobre las fincas que se van a comprar. (BOCAREJO, 2015, p. 149).

Os processos de delimitação territorial fundamentados na aquisição de minifúndios campesinos, incluem a participação ativa dos líderes e mamos indígenas, que são –como diz Bocarejo (2015) - os “leitores do espaço”; ou seja, quem delimitam, traduzem e definem a área da Linha Negra e aqueles lugares sagrados, muitos deste localizados, em particular, ao borde de sua fronteira (BOCAREJO, 2015). Os mamos, orientavam quais áreas recuperar, “*entonces se priorizaba y se metía uno por essa quebrada a comprar*”, conta um dos ativistas que participou desses processos (ENTREVISTA FUNCIONÁRIO 1).

Neste sentido, desde a lente da consolidação territorial indígena, a Linha Negra fundamenta suas pretensões territoriais. Essa figura é o que Estado mesmo reconheceu simbolicamente como território delimitado que abarca toda a montanha, desde o mar e as partes baixas até os picos nevados. (MINISTERIO DE GOBIERNO, 1973).

Mesmo que essa resolução é um primer exemplo no qual se reconhece estatalmente na Serra uma conceptualização indígena ampla do território, esse reconhecimento simbólico é difícil de aplicar na prática, pois apenas essa consolidação se exerce sobre os campesinos pobres, deslocados pela guerra das partes meias da Serra, e não sobre os latifúndios das planícies que pertencem às elites regionais que acumulam o controle político e de terras na região, terras que não são compradas por que –como diz um líder- quem pode comprar essas terras? (BOCAREJO, 2015).

A estratégia territorial dos arhuacos nos rios Fundación e Aracataca através da compra de terras campesinas, no ciclo da consolidação e pós-desmobilização paramilitar, é resumida nas seguintes palavras:

¿Qué han hecho los indios? Pa' ellos su objetivo es coronar el cerro [del Cincuenta], ¡todo! conquistarlo íntegro. ¿Qué están haciendo? la misma estrategia de los paracos, se vinieron por abajo. Los están cercando a los campesinos allá arriba. [...] Los pretenden aislar. P: ¿empezaron a comprar predios desde abajo hacia arriba? R: exacto y van por toda la orilla del río y ya van abajo; ósea, ya pasaron Santa Clara. [...] pero por abajo de toda la

orilla del río. Ya hay dos comunidades arhuacas ahí. ¡Tres! con Kankawarwa [...] hay un Coordinador de tierras en el resguardo. El lío pa' campesinos es la reserva forestal... ahí los campesinos no tienen nada. (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

Entonces ¿qué hicieron los indios? Primero comprarle a los campesinos que estaban dentro del resguardo pero empezaron a moverse por acá abajo e igual por el otro lado, que es o que te lleva para Sacramento [...] P: ¿cuándo se activa el mercado de tierras? R. Antes no se podía porque la violencia no dejaba... ahí hubo órdenes de que no se vendía ni un hijueputa pedazo de tierra, ¡a nadie! por lado y lado, tanto de indígenas como campeneses...el lío fue que entró también el Ejército... y eso es lo otro, parte del Cerro lo tiene el Ejército [...] [eso se activa] estos últimos 5 años que eso se empezó a mover... o fue un poco antes... como 2007 por ahí [...] ahí hay una pelada que ahorita maneja eso que es..., ella es Arhuaca, [...] Claro que ella si no es por orden de Fabio, ella no puede hacer nada. [...] sobretodo Aracataca y Fundación es donde más le han metido el diente pa' comprar tierra (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

As negociações e compras das terras eram feitas nas casas indígenas dos arhuacos em Santa Marta e Valledupar nos “escritórios” do *Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira* SNSM (CAMGSNSM) e a *Confederación Indígena Tayrona* (CIT) respectivamente. Os escritórios de cada grupo arhuaco, são compartilhados junto com os escritórios dos cabildos Kogui, Wiwa e Kankuamo.

Na casa indígena de Santa Marta existem diferentes salas para aulas, algumas das quais são destinadas a reuniões com diferentes instituições oficiais ou organizações não estatais. Em algum momento participei de algumas reuniões nessas salas como antropólogo funcionário da URT para tratar os temas relacionados com as compras de terras na Serra.

No térreo, depois de passar a recepção onde estão as vendas das artesanais indígenas, está o escritório do cabildo governador dos arhuacos das áreas dos departamentos de Magdalena e Guajira. É aí onde alguns campesinos contaram ter efetuado os negócios com as lideranças indígenas de suas terras.

Enquanto isso, em Valledupar além da sala do cabildo governador, também estão algumas das instalações de *Wintukwa* (o Instituto prestador de serviços de saúde –IPS indígena), e alguns espaços de armazenamento para café ou alimentos que chegam de *Bienestar Familiar*, entidade do Estado responsável da política para as crianças. No escritório do cabildo governador, o processo de aquisição de terras na área de Valledupar é descrito por Bocarejo da seguinte maneira:

Tres cajones llenos de ofertas de predios campesinos reposan hoy en un archivador de la oficina. En ocasiones, dichas ofertas incluyen: cartas escritas a mano por los campesinos explicando su propuesta de venta, un minucioso recuento de las mejoras de las fincas; detalles sobre la producción agrícola;

copia de las escrituras, títulos de posesión o registros de libertad y tradición. Día tras día estas ofertas encuentran un nuevo espacio en la oficina: en la basura o en la impresora, cuando el papel escasea (BOCAREJO, 2015, p. 150). Estas son constantes, y para que Wilmer proceda a la compra de un prédio [de uma terra] hay muchos factores a tener en cuenta. Uno de los temas más importantes es definir la tierra comprar y con cuánto dinero se cuenta. Los recursos de transferencias no son los únicos fondos utilizados para la compra de tierra, por el constante trabajo de los líderes indígenas en negociación de rubros destinados a este propósito a través de varias ONG (WW, Nature Conservancy, Tchadunkua, icci eta ailleurs) o por medio de acuerdos de cooperación internacional y donaciones privadas realizadas por extranjeros (la mayoría de Estados Unidos, Francia Gales y España). (BOCAREJO, 2015, p. 148).

Sobre a aquisição das posses nas áreas estudadas nesta dissertação, por ser mais baratas que as terras com título, são mais recorrentes numa região com uma alta informalidade na tenência e poucas titulações como revelei na parte da formação socio territorial campesinas na SNSM. Alguns indígenas dizem que os campesinos começaram a procurá-los para lhes dizer “*yo necesito irme, ¿cuánto me paga por la finca?*” (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 2), aludindo a necessidade de não perder a terra e anos de trabalho frente a conjuntura de violência e o “estado de guerra”. Eles colocavam o preço e com os recursos do SGP e outras fontes de cooperação internacional, os indígenas realizavam as negociações com os campesinos. Para os indígenas, as compras “*las hicimos bien, formal, bajo el avalúo [...] porque ¿quién iba a trabajar en esa zozobra? y ¿quién más iba a comprar? ¡Nadie!*” (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 2).

A compra-venda de terra segue sendo então, o caminho pelo qual os arhuacos procuram ampliar seu acesso ao território. São dois os critérios os que tomam em conta as compras de terras, cita Bocarejo (2015) através de uma de suas entrevistas aos líderes arhuacos: “*Esas áreas son lugares sagrados, importantes culturalmente, pero también son esenciales para mantener la sustentabilidad económica del grupo*” (BOCAREJO, 2015, p. 149). Assim, os líderes indígenas dão peso, às terras localizadas em “*zonas de cultivo de café o con buenas condiciones para la agricultura*” (BOCAREJO, 2015, p. 149).

5.5 COMO INTERPRETAR O MERCADO DE TERRAS NA SNSM?

Para alguns/as profissionais do escritório de restituição de terras em que trabalhei, que executaram essa política nestes territórios interculturais, a pergunta sobre por que os campesinos e campesinas vendem suas pequenas terras era explicada desde a lente da

consolidação territorial indígena. “*Es que ellos están recuperando sus territorios ancestrales, además pagaron el precio justo del avalúo catastral*¹¹⁵”, afirmaram alguns dos funcionários e funcionárias entrevistadas.

Minha indignação crescia cada vez que escutava esse tipo de respostas nas reuniões entre as equipes interdisciplinares pois contrastavam evidentemente com os relatos e a histórias de marginalização histórica e de múltiplas violências dos camponeses e camponesas que estavam solicitando o restabelecimento de seus direitos territoriais.

É comum que entre líderes indígenas, ativistas e funcionários/as dos órgãos encarregados dos temas étnicos, como podem ser as equipes étnicas da URT em Santa Marta, Valledupar e Bogotá; as compras de terras a camponeses se assumem a partir de três explicações: a primeira, explica que estas são um processo de recuperação de terra indígena; a segunda, que os camponeses não estão obrigados a vender (BOCAREJO, 2015); e a terceira, são terras pagas ao preço da valorização do cadastro. Na linha proposta pela professora Bocarejo (2015), os três argumentos, ainda que não explicam as razões de porque os camponeses e camponesas vendem suas terras, manifestam que as compras de terras são, por uma parte, um logro no processo de recuperação territorial indígena; e por outra, que é “*un proceso regulado por la mano invisible del mercado de bienes raíces, en el cual los campesinos quieren vender y los indígenas comprar, con lo cual cada grupo, finalmente, maximiza sus intereses*” (BOCAREJO, 2015, p. 151).

Mesmo que a fundamentação da recuperação ancestral dos territórios indígenas seja excepcional em si mesma, dado a história da desapropriação, desterritorialização e saque aos indígenas num colonialismo que ainda se reproduz; o outro lado do processo experimenta um absoluto silêncio. Como bem caracteriza Bocarejo (2015), para muitas pessoas que se autodenominam a si mesmas “indigenistas” (intelectuais pró indígenas, ativistas, trabalhador/as em entidades estatais, entre outros), que na maioria dos casos habitam nas cidades, assumem que a compra de terra indígena é um processo que confronta as elites regionais de latifundiários. Embora, na realidade, a maioria de terras compradas são de pequenos produtores que tem vivido, eles também, a marginalização do Estado e que tem experimentado como sinalizei no anterior capítulo, histórias complexas de deslocamento e violência no âmbito da guerra contra insurgente que estabeleceu um estado de guerra que continuamente se atualiza. Como aponta Bocarejo, “*si existe alguna porción de la población que está “ganando” [con ese mercado de*

¹¹⁵ O Avalúo Catastral em Colômbia é a determinação oficial do valor das terras rurais obtido a partir da pesquisa socioeconômica para conhecer o mercado imobiliário.

tierras] son las elites locales, que no han visto sus tierras comprometidas por proceso alguno” (BOCAREJO, 2005, p. 151).

Agora, com relação às reivindicações de um mercado de terras livre e consentido, as problemáticas chegam a ser muito mais evidentes. Este tipo de argumento era comum nos contextos do escritório de restituição de terras. Afirmava-se que o processo de negociação de compra e venda de terras na Serra, parecia de entrada ser uma expressão do livre arbítrio de compradores e vendedores. No entanto, como aponta Bocarejo (2015), o contexto social e político desses territórios que carregam histórias de violência por guerrilhas, paramilitares e Estado, evidencia uma complexa situação de abandono estrutural das populações locais na Serra, que não se pode subestimar e esquecer no âmbito da compreensão das transações de terras desses anos na SNSM.

Como foi mostrado, a situação de extrema marginalização ligada ao estabelecimento de um estado de guerra e de ordem hegemônico imposto pela violência, regulou nesses anos a intenção de venda de muitos e muitas para preservar suas vidas e as de suas famílias. Nesse sentido, afirma Bocarejo (2015, p. 152) *“bajo estas circunstancias, lo que significa un “mercado libre” debe ser reconsiderado, tanto para entender la venta de estas tierras como para comprender el ímpetu de compra de los indígenas”*.

Foram vários os casos de compras e vendas de terras campesinas que conheci na Serra durante o ciclo da consolidação e pós-desmobilização, nas que foram explícitas as histórias de despojo e espoliação das comunidades que as habitavam, o que evidencia a complexidade do contexto da aquisição. A cronologia da marginalização estrutural dos campesinos na Serra que passaram pelos rigores do escalonamento da violência, num contexto de limitada regularização fundiária e do acesso a programas agrários, junto com a ausência da prestação de serviços básicos de saúde, educação, alimentação (PLANOS DE DESENVOLVIMIENTO FUNDACIÓN e ARACATACA, 2009), significou na maioria dos casos campesinos as motivações dos deslocamentos forçados e em alguns casos, as vendas de suas terras.

Isto é explicado nos depoimentos coletados durante o trabalho de campo de fevereiro de 2019. Por exemplo, uma campesinas contou que na vereda que ela morava perto do río Aracataca, *“la mayoría de los vecinos se fueron [...] mi vecino la vendió [la tierra] a los indios, éramos muy pobres y el Estado nunca se preocupó por nosotros, ni luz, ni carreteras, ni créditos, ni escuelas ¡nada!”* (ENTREVISTA CAMPESINA 7). Afirmou também que outro de seus vizinhos além de seu irmão, venderam suas terras aos indígenas pela presença dos atores

armados: “ellos vendieron por la misma presencia de los grupos armados, desde esa época los indios andan comprando” (ENTREVISTA CAMPESINA 7).

Outra campesina que sofreu um fato de violência sexual diz que “la tierra quedó abandonada, y se metió un indio [...] cuando el primer colono cogió esas tierras, eso era resguardo Indígena. Ellos han estado peleando esas tierras [...]” (ENTREVISTA CAMPESINO 8).

Por sua parte, numa das veredas altas dos setores do río Fundación, um dos campesinos afirmou que depois de seu deslocamento forçado, vendeu sua terra a um indígena, como também aconteceu em outras terras que foram vendidas para os indígenas. Uma das campesinas assegura que “por todo lo que había pasado yo me vi en la obligación de vender [...] se la vendí de boca, no firmamos nada [...] ¿qué iba esperar, a que nos mataran? Ahí en esa vereda no había nada (ENTREVISTA CAMPESINA 3).

Em outro depoimento uma das vítimas campesinas dessas bacias narra que seu deslocamento se deu no contexto de matanças das pessoas, onde pegavam as coisas dos campesinos, os animais e estupravam as mulheres. “Después había bombardeos del ejército, y todos los campesinos quedábamos en medio de ellos” (ENTREVISTA CAMPESINO 2). Depois de se deslocar com sua família a outro povoado do Caribe Colombiano, voltaram na terra, mas tinham roubado tudo. Meses depois, os paramilitares chegaram na estação onde chegavam os carros e assassinaram a várias pessoas; “nuevamente decidimos irnos de allí para proteger nuestras vidas” (ENTREVISTAS CAMPESINO 2). Quatro anos depois, em 2009, a esposa da vítima foi à casa indígena em Santa Marta para falar com os indígenas do Resguardo Arhuaco para realizar a valorização da terra para ser vendida. Segundo contou o campesino, não lhe pagaram a terra (ENTREVISTAS CAMPESINO 2).

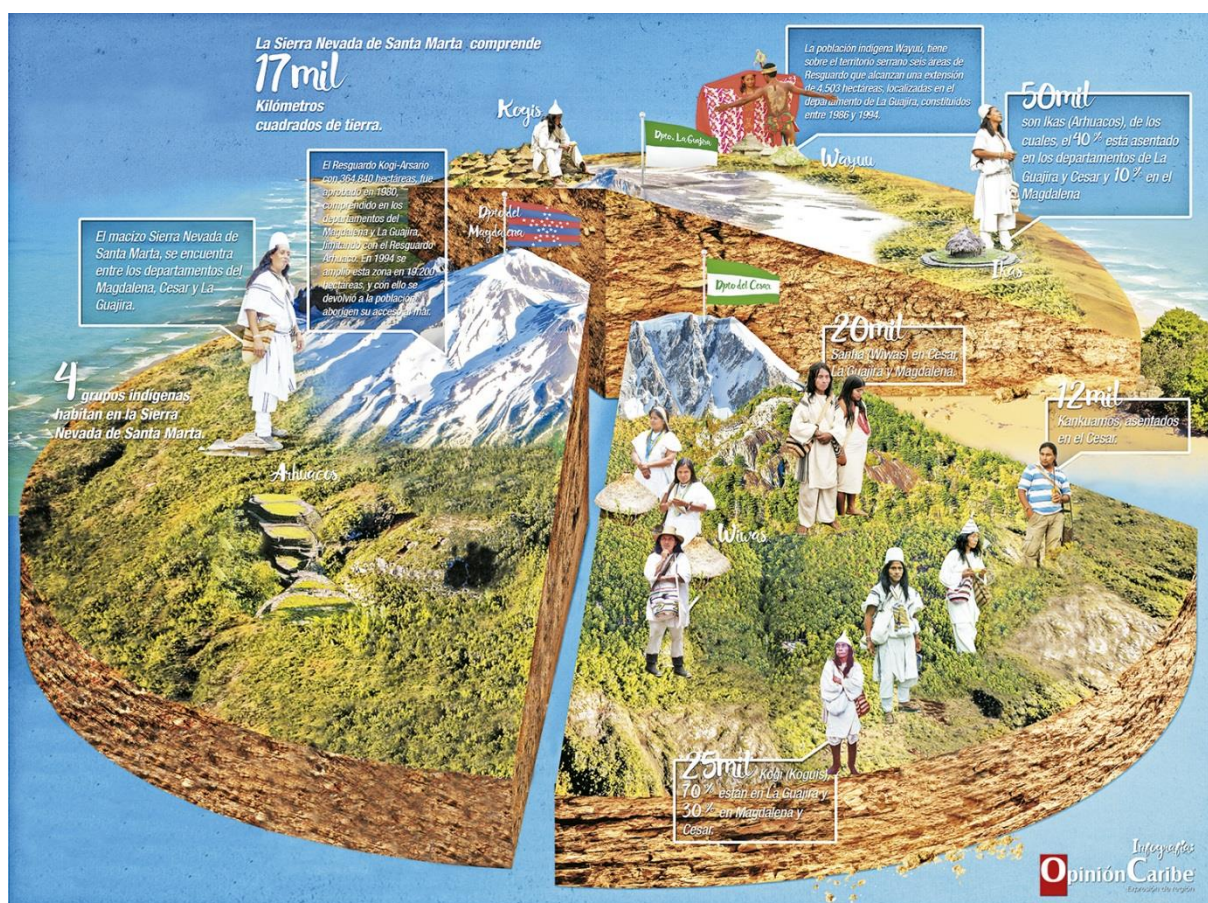
Pode-se dizer sem dúvida, que ao desencanto compartilhado dos campesinos pela marginalização e esquecimento do Estado, juntaram-se os resultados da reconfiguração violenta da Serra que afetou tanto a campesinos como a indígenas durante as fases da guerra contra insurgente. A perda de toda esperança, da subjetividade, com consequências organizativas e políticas para fazer reclamações contenciosas, forçaram em últimas a venda de sua terra no contexto de medo causado pelo trauma e pela incerteza no futuro. É por isso que resulta difícil sustentar a ideia de que as transações de terras entre indígenas e campesinos desses anos foram uma decisão livre e voluntária das vítimas.

Como antes mostrei, o processo de compra de terras ocorreu paralelo à implementação de programas de políticas para a Serra fundamentadas nas narrativas “verdes” referentes à

conservação, mas relacionadas com estratégias militaristas da época para ganhar o controle territorial da SNSM. Lembro uma reunião com lideranças campestinas da vertente ocidental da Serra nos anos como funcionário do escritório de restituição de terras, na que um deles me expressava seu descontento frente a quantidade de programas e planos das instituições estatais sobre a Serra que contemplam primordialmente as questões dos territórios indígenas, descartando os sonhos e planos de vida campestinos. *“Ellos nos quieren sacar de nuestras tierras y los programas y proyectos del Estado y varias organizaciones del mundo les están ayudando”* (CADERNO DE CAMPO). É como falou um campestino da cara suoriental à Bocarejo (2015): *“[nosotros] nunca hemos sido parte del Estado y aun si creyéramos en el potencial de nuestra comunidad nosotros no somos incluidos como parte del pueblo Colombiano”* (BOCAREJO, 2015, p. 154).

As compras de terras na serra acontecem sobre a base de um contexto de imagens que sobre a Serra são construídas frente ao processo de constituição dos indígenas como *outros* etnicamente distintos, e sua consolidação territorial a partir da figura da Linha Negra. Dentro das formas de conceber, narrar e desejar um lugar como a SNSM (BOCAREJO, 2015), as territorialidades campestinas algumas das quais venderam outra se deslocaram forçadamente, não são levadas em consideração. Uma imagem de um jornal local, sintetiza como é habitualmente concebida, narrada e desejada a SNSM.

Figura 14 - Imagem jornal local Opinión Caribe. ¿Qué es la línea negra?



Fonte: Opinión Caribe, ¿Qué es la Línea Negra? Septiembre de 2018. Ver: <https://www.opinioncaribe.com/2018/09/12/que-es-la-linea-negra/>

Desde essa perspectiva, as imagens que se constroem da Serra como repositório natural e indígena, ideal para o ecoturismo e as experiências extremas, na que participam diferentes atores estatais e não estatais, contrastam notoriamente com as imagens desoladoras que conheci do despojo e da violência que se continuamente se atualizam. Imagens silenciadas e apagadas dos sujeitos camponeses e de seu sentido de comunidade, num contexto onde sobressai as incapacidades para a construção coletiva de reclamações contenciosas dado os efeitos que deixou na população o “estado de guerra” que em ultimas, motivou a venda de suas terras em alguns casos. Afirma Bocarejo nesse sentido que,

... la marginalidad que se vive [...] en la Sierra se construye a través de historias de olvido, expectativas incumplidas, deseos truncados y, paradójicamente, falta de deseo. Como explicaba Appadurai (2004), uno de los significados más complejos de la pobreza se asocia precisamente con la incapacidad de “aspirar”. Esta incapacidad está ligada, en el caso de muchos de los habitantes de la Sierra, con los complejos contextos de violencia y de hegemonía paramilitar (BOCAREJO, 2015, p. 154).

Los campesinos explican su “extrema necesidad de vender” por las diversas arremetidas paramilitares en área de la Sierra [...] Muchos campesinos

vendieron sus tierras y algunos de ellos hoy en día agradecen abiertamente a los líderes indígenas por haberles comprado. Las historias de horror, asesinato y persecución en el área se evidencian en el paisaje desolado que quedó tras la huida de los campesinos. Sólo unos pocos están volviendo a “reorganizar la casa”, con sus familias heridas y sin aquellos a quienes perdieron. Los que huyeron quedan con la desolación de haber vendido [...] a pesar de la convicción de que “tenían que hacerlo”, queda un sentimiento de arrepentimiento “porque perdimos todo nuestro trabajo y nuestras vidas en nuestra tierra, y todavía tenemos deudas, tal vez la situación mejore del todo o el pico de violencia vuelva (BOCAREJO, 2015, p. 156).

Sobre o terceiro argumento que legitima as compras de terras campesinas a partir dos pagos ao preço estabelecido pelo valor venal de um bem rural, o que na Colômbia se conhece como *el avalúo catastral*, cabe dizer que além de estar numa região com sérias afetações agrícolas pela presciência dos atores armados o que causou uma baixa no nível dos preços das terras (HOLLINGER, 1999)¹¹⁶; uma das reclamações campesinas tem a ver com as discordâncias frente aos pagos da terra que ao final terminaram recebendo muito pouco.

En el año 2007 fui conversar a la ciudad de Santa Marta con los indígenas arhuaco para venderles mi tierra. El avalúo fue por [...] y los indígenas quedaron en pagar la finca cuando tuvieran plata, pero hasta la fecha no hemos recibido dinero por parte de ellos, y estamos pasando necesidades (ENTREVISTA CAMPESINA O3).

porque le bajaron el precio y luego está la comisión, y las mejoras no son consideradas y ellos le dan valor [...] adicionalmente, si la tierra campesina se compra con dineros que provienen de transferencias del Estado, manejados por la Alcaldía, entonces se requiere otro gasto en “burocracia, papeleo, y más impuestos por pagar” (BOCAREJO, 2015, p. 156)

Por outra parte, cabe destacar que o contexto de compras de terras na SNSM aconteceu numa perda do sentido de comunidade e da capacidade organizativa como fundamento para as reclamações e as demandas territoriais campesinas, o que acabou interrompendo as possibilidades e os médios de organização política local para garantir os direitos territoriais dessas populações. Dito aspecto próprio da SNSM se contrapõe com outras sub regiões do Caribe como Montes de Maria ou a Serranía do Perijá onde se identificam, mesmos a escalada da violência contra insurgente, processos organizativos com planos e pretensões territoriais¹¹⁷ para a constituição das Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

¹¹⁶ Sobre a dinâmica dos preços no conflito armado, Hollinger (1999) aponta que num estudo sobre o impacto da violência no setor agropecuário [BEJARANO, 1997] demonstra, com base em entrevistas a proprietários da Costa Atlântica, que a presença dos grupos guerrilheiros causa uma baixa no nível dos preços e que pese aos narcotraficantes -o INCORA é o único comprador nestas zonas-. Com a aparição de grupos paramilitares e seu controle das zonas, os preços se recuperam. (HOLLINGER, 1999).

¹¹⁷ A região do noroeste de Montes de Maria, no Caribe Colômbiano constitui, historicamente uma das regiões de maior aprofundamento da guerra no país. Embora, a região tem sido ao mesmo tempo o epicentro de ações coletivas, muitas vezes lideradas pelas organizações sociais e comunitárias, onde tem se desenvolvido respostas

Nos últimos tempos, na Serra, são notórios os contrastes entre a incapacidade organizativa campesina, resultado das histórias do terror e da interiorização do medo pela violência contra insurgente, e o dinamismo da aquisição de terras no marco do fortalecimento das organizações indígenas a escala nacional e internacional. Pese as diferenças e as divisões internas, a organização arhuaca tem logrado enfrentar com grande ímpeto no contexto da guerra contra insurgente e a hegemonia paramilitar, a compra de terras na Serra através de negociações com o Estado e com recursos internacionais (BOCAREJO, 2015, p. 158). Como mostrarei no Capítulo 6, dita configuração das histórias das diferenças tomariam uma relevância no marco das políticas de reparação.

É importante lembrar também que aos programas dos Povos Talanquera e a compra de terras numa conjuntura claramente adversa para os campesinos vítimas de deslocamentos forçados, somou-se a ocorrência do Conselho Territorial de Cabildos da SNSM (CTBSNSM) que apresentou em dezembro de 2011 perante o então Instituto Colombiano de Desenvolvimento Rural (INCODER anteriormente INCORA e atualmente Agência Nacional de Terras), o documento de proposta de ampliação de resguardo dos povos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa no qual propõe-se, dentre outros, ampliar o Resguardo Arhuaco da Serra para 178.710 Há nos setores suroriental e ocidental da Serra (ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDWA TAYRONA, 2011).

sustentáveis e mais democráticas aos conflitos. Uma das experiências foram trabalhadas pelo CINEP com líderes dessas comunidades nos Montes de Maria num texto onde se sintetizam os processos organizativos e da luta pela terra na região do Montes Maria. Ver: (PARDO, BARAJAS, HENAO, HUERTAS; “*Aprendizajes de construcción de paz em Montes de Maria*”. Centro de investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), Bogotá, 2018. Na região montanhosa da Serranía del Perijá, por exemplo, na zona de fronteira com a Venezuela, nos departamentos de Norte de Santander, Cesar e La Guajira, algumas comunidades campesinas estão organizadas na Asociación Campesina de la Serranía Del Perijá Norte (ASOPERIJÁ), cuja organização faz parte da Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), na que defendem a Zona de Reserva Campesina (ZRC) amparado na lei 160 de 1994, como um exercício de territorialidade que garanta não só preservar sua identidade campesina, mas também as diferentes formas de produção e diversas características de ordem social e político, assim como também poder acessar de forma legal as terras ocupadas historicamente (ANZORC, 2018) (<https://prensarural.org/spip/spip.php?article13898>).

Quadro 3 - Proposta de ampliação dos resguardos indígenas da SNSM

Departamento	Área Hectáreas
CESAR	185.588
Ampliacion Kankuamo	58.358
Ampliacion Kogui Malayo Arhuaco	1.456
Ampliacion Arhuaco	125.774
LA GUAJIRA	83.500
Ampliacion Kankuamo	739
Ampliacion Kogui Malayo Arhuaco	82.761
MAGDALENA	128.829
Ampliacion Kogui Malayo Arhuaco	75.893
Ampliacion Arhuaco	52.936
Total general	397.917

Fonte: ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDWA TAYRONA, 2011.

A solicitude se fundamentou na tramitação anterior de ampliação do resguardo Kogui Malayo Arhuaco (1994), a extensa regulamentação de acordos, decretos e leis¹¹⁸ e na constituição do acordo com o governo nacional em 2005 onde se “*establece el compromiso de disminuir la presión ambiental en las partes altas de las Sierra Nevada de Santa Marta, bajo el mecanismo de reubicación de la población indígena en las partes medias y bajas de las cuencas hidrográficas del Resguardo*” (ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDWA TAYRONA, 2011).

¹¹⁸ 1) Resolução 02 de 1973 e 837 de 1995 do Ministério Interior, pelo qual se demarca a *Línea Negra* das comunidades indígenas da Sierra Nevada de Santa Marta; 2) Resolução 0109 de 1980 (INCORA) pela qual se constitui como resguardo indígena; 3) Resolução 0621 do Ministério Ambiente 2002 – Lineamentos de planificação e gestão ambiental para as três Corporações, incorporando os processos de Governo indígena na SNSM; 5) Acordo CTC – Governo Nacional 2003, pelo qual se estabelece como garantia de conservação ambiental de toda a SNSM em benefício de toda a população que dela depende, se faz prioritário e se deve recolher, potenciar e impulsar o ordenamento territorial tradicional indígena; 6) Acordos e compromisso da CAR 2005, por meio do qual se estabelece planos de ordenamento de áreas do rio no marco da elaboração da visão ancestral indígena; 7) Lei 160 de 1994: pela qual se estabelecem as condições para a proteção e restabelecimento dos territórios indígenas no país ((ORGANIZACIÓN INDÍGENA GONAWINDWA TAYRONA, 2011).

No marco da solicitude de ampliação do Resguardo Arhuaco da Serra, o INCODER arquitetou o convenio N° 637 com a Agencia de Cooperación Acdi/Voca e a Agencia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para realizar a ampliação do Resguardo Arhuaco da Serra no marco do acordo cooperativo N° AID-514-A-11-00004 para executar o Programa para Afrodescendentes e Indígenas (ACDI/VOCA, 2013)¹¹⁹. Conta uns dos que participou do processo de ampliação, que de acordo aos compromissos adquiridos com a organização indígena CTC em várias reuniões entre a comunidade arhuaca, o diretor do *Programa Presidencial para la Formulación de Acciones y Estrategias para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia* PPDIIPI, o INCODER e a ONG norte-americana Acdi/Voca (INFANTE, 2017); além de terras compradas pelo próprio resguardo, a ampliação incluía terras do *Fondo Nacional Agrário*, priorizadas pelos indígenas em diferentes áreas do sul da Serra incluídas as bacias dos rios Fundación e Aracataca¹²⁰.

Finalmente, em julho de 2013 se assina um novo convenio entre ACDI/VOCA e o *Cabildo Arhuaco da Serra* para realizar a visita técnica, a elaboração do estudo socioeconômico, jurídico e de posse. Embora que o processo de ampliação do Resguardo Arhuaco da Serra em sua fase de titulação e legalização de terras não tem se cumprido, dado que o contrato entre e o programa dentre a agencia internacional e o INCODER foi cancelado em dezembro de 2014 (INCODER; ACDI/VOCA, 2014; ENTREVISTA FUNCIONÁRIO 1); as expectativas sobre as terras campesinas permanecem vigentes. Inclusive, é importante dizer que algumas das compras a campesinos por parte do Resguardo seguem se apresentando inclusive em fevereiro de 2019 quando fiz o trabalho de campo.

O seguinte mapa resume várias das problemáticas que enfrentam atualmente os campesinos deslocados forçadamente pela violência. Os pontos pretos correspondem às solicitudes de restituição de terras campesinas na emergente lei de vítimas 1148 de 2011. Em amarelo estão as áreas de Reserva Indígenas *Resguardo Arhuco de la Sierra Nevada* e *Resguardo Kogui-malayo-Arhuaco*. Embora eu não tenha conseguido a camada da zona de ampliação dos resguardos, ela se expande entre outras, nas veredas El oriente, Água Bendita,

¹¹⁹ Esse convenio teve foi do 25 de setembro de 2012 ao 31 de dezembro de 2013. Na região Caribe se investiram pelas duas agências internacionais 6.353.617.776 pesos Colômbianos enfocados em três componentes: i) formalização de territórios étnicos; ii) desenvolvimento de projetos produtivos e soberania alimentaria; iii) sistematização de informação da Direção Técnica de Assunto Étnicos de INCODER. (ACDI/VOCA, 2013)

¹²⁰ As terras priorizadas eram: 1.-Zona Oriental, cuenca del río Guatapuri, 13.000 hectáreas; 2.-Zona Suroccidental, cuenca del río Los Clavos, 7.000 hectáreas; Zona Suroccidental, cuenca de los ríos Diluvio y Ariguanicito; y Zona Occidental, cuenca de los ríos Fundación y Aracataca. Con esta ampliación se legalizarían con el carácter legal de resguardo aproximadamente 37 predios del Fondo Nacional Agrario, 91 predios adquiridos por el resguardo, 3 predios a nombre de la Gobernación del Cesar y 1 predio a nombre de Corpocesar” (INFANTE, 2017).

5.6 CONFLITOS E TENSÕES INTER-ÉTNICAS NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS ESTATAIS E DE ORGANIZAÇÕES NÃO GUBERNAMENTAIS.

Como foi mostrado até aqui, a articulação dos indígenas arhuacos com instituições nacionais e internacionais para a consolidação territorial, ocorreu basicamente através de três frentes: i) a construção dos Povos Talanquera; ii) a compra de terras como recursos SGP e de ativistas; e iii) a solicitação de ampliação da reserva indígena. Ditos processos aconteceram durante um período de surgimento e figuração das lideranças indígenas como “*representantes legales*”¹²¹, chamados Cabildos Gobernadores. “*A través del representante legal le da autonomía a cada cabildo para que pueda tener autonomía en la selección de estos recursos de acuerdo a la necesidad de cada comunidad*” (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 1).

É claro como, em contraste com este marco de gestão de recursos das rendas estatais e da cooperação internacional controlado por um grupo de líderes arhuacos, está a situação de marginalidade das comunidades campesinas e seus processos coletivos frente ao acesso e uso da terra. Pode-se ver como as diversas formas de diferenciação social como as de raça e etnicidade, no marco dos sistemas de direitos diferenciais que promove o multiculturalismo, estão ancorados em complexos arranjos espaciais que podem chegar a definir de maneira desigual o acesso a rendas e recursos entre as comunidades rurais. No entanto, cabe se perguntar: o que é o que acontece ao interior das dinâmicas organizativas indígenas frente a esse modelo fundamentado no multiculturalismo?

A fala de um dos funcionários da equipe étnica que entrevistei e que tem acompanhado as lutas políticas e territoriais dos indígenas na SNSM, ajuda a responder em parte à pergunta pois explica numas palavras o processo de visibilidade e promoção de uma das lideranças arhuacas e as multiplex articulações em diferentes escalas, nesse contexto da gestão de recursos e de relações com o Estado e as ONG.

...llegó un momento en que Fabio empieza a gustarle lo del billete y se empieza abrir y a moverse ya él solo y se abrió [...] un día empezó ya a meterse en negocios de café, tierras [...] en Aracataca y Fundación, [...] él se las conoce íntegras (risas) ... claro, el man decide, ¡nooo! ya este tema de educación qué hijueputas! yo que escuela ni que mondá!. Eso es plata que viene de SGP, regalías, Incoder, cooperación internacional, Natural Conservancy [TNC], una ONG cipotuda¹²² [...] él hizo una negociación de un millón de dólares. Ósea, Fabio pa' negociar es bueno, bueno. (ENTREVISTA FUNCIONÁRIO 1).

¹²¹ Dentro da estrutura organizativa do povo arhuaco uma das instâncias de autogoverno é a Diretiva Geral conformada pelo *Cabildo Gobernador*, quem é o representante legal; O Secretário Geral; o Tesoureiro Geral; O Fiscal Geral, Delegados da zona e as Autoridades Centrais de Nabusímake quem convoca e preside a Assembleia Geral. Dependente de estes estarão os encarregados das áreas de comissão de terras, justiça própria (direitos humanos), economia própria, saúde, educação e história, centro de informação, temas que são competência da organização (CIT, 2015).

¹²² *Cipotúda*: palavra que no contexto do Caribe Colômbiano refere a um adjetivo de robustez.

¿Fabio? le gusta la plata como un hijueputa! Fabio si tiene que hacer alianza con la ANUC hoy, la hace... cero escrúpulos. Su ética es aprovechar la alianza con quien sea. Yo no le voy a meter tiza si es de derecha si es de izquierda, eso a él le vale huevo, él es arhuaco, él no tiene nada que ver con ese otro mundo. [...] que todo ese moralismo del Kankuamo... ay, el Mais [Movimiento Político de izquierda] y va uno a ver... corruptos también los hijueputas! entonces no hablen cagá! (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

Como resultado, ainda que em geral não se prejudicam as pretensões territoriais dos quatro povos indígenas da SNSM, criaram-se controvérsias internas entre os povos indígenas e suas organizações pelas disputas ao acesso dos recursos estatais e da cooperação internacional que quero apenas resenhar nesta última parte do capítulo 5. Ditas controvérsias internas acontecem em parte pela transformação dos resguardos indígenas como jurisdições legais criadas desde o Estado multicultural em entidades territoriais. Em sua inserção no projeto de descentralização os fez “legíveis” e comparáveis com as demais entidades administrativas e políticas que conformam o Estado Colombiano capazes de “rendição de contas” (BOCAREJO, 2015); o que na prática tornaram mais complexas as negociações e interações ao interior dos contextos dos povos indígenas da Serra, fragmentando em últimas as lógicas coletivas da ação por resguardo ou povo étnico.

Em particular, algumas divisões entre lideranças da organização arhuaca emergiram no marco da pugna pela administração dos recursos dos programas com enfoque indígena. Como falou uma líder indígena: *“realmente el problema es el de manejar los recursos”* (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 1).

Cabe ressaltar que os convênios e articulações feitas por algumas lideranças com o Estado e seus governantes, e alguns setores econômicos das elites regionais ou o mercado internacional, não são bem vistas por outros líderes arhuacos.

Os resguardos se estabeleceram então como entes administrativos equivalentes à prefeitura ou entidades administrativas estatais. Isto, moldou uns representantes indígenas baixo o nome do cabildo governador com poder como gestores constantes e eficientes na procura de fundos para a consolidação territorial, as vezes, a través de articulações e interações que podem chegar a ser contraditórias e paradoxais. Os recursos entregados para a compra de terras, por exemplo, através dos programas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e mineração sustentável de empresas multinacionais como a Drummont ou a Prodeco, cujos interesses evidentes são a espoliação de recursos naturais como o carvão, indústria acusada de financiamento a grupos paramilitares que seguravam sua operação, são algumas destas articulações paradoxais.

É também o caso de rentas de ONG de conservação como TCN que, como mostrei antes, são financiadas por empresas petroleiras multinacionais altamente contaminantes. Nessas relações contraditórias, o papel da terra nessas áreas da Serra é central para a consolidação de algumas lideranças arhuacas, que não necessariamente beneficia a maior parte dos arhuacos e arhuacas.

Toda la política de tierras de la Organización estaba en manos de Ramiro pero cuando empezó, esto, que empezó a moverse billete, [...] entonces Fabio dice noooo. En Aracataca y Fundación, nooo, ese es mi territorio, ahí no entras tú [...] tú maneja pal lado tuyo [na cara norte] [...] que es salida al mar y esa vaina y esos es un verguero. Entonces le quitó mucho poder a Ramiro. [...] Él no construía buenas relaciones con Koguis, con Wiwas mientras que Fabio sí, es un diplomático del putas. El man se mueve en 20 aguas al tiempo, muy hábil. [...] seduce a ONU y al tiempo está hablándote con la Drummont y después habla con Prodeco y habla con Juan Manuel Santos y con todos se da besos y abrazo y a todos les saca! [...] él no maneja la plata pero te la consigue toda. Afuera él se hace dos o tres viajes al año... entonces va a Francia, va Bélgica, se sienta en la Unión Europea con la señora Federica [...] Ha ido a Japón pa' negocios de café, el café que se toman en los trenes de alta velocidad en Japón son de él... te pone dos container al año para la empresa de ferrocarriles. Entonces claro, él necesita tierras pa' poder mantener estos otros negocios. (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

Deve ser lembrado que atualmente o decreto autonômico para que os recursos de Estado cheguem diretamente aos resguardos indígenas sem passar antes pelas prefeituras municipais, significou novas controvérsias interétnicas entre os povos indígenas da Serra que derivou na criação do *Cabildo Arhuaco Magdalena y Guajira* (2016). Dita organização se separaria da *Confederación Indígena Tayrona* – CIT (1983), com o fim de administrar, encaminhar e destinar as diferentes fontes de recursos diretamente ao grupo de arhuacos destes setores de Fundación e Aracataca, das áreas de saída ao mar nas bacias dos ríos Palomino e Don Diego, na cara norte da SNSM.

Na escala nacional em espaços como a *Mesa Permanente de Concertación Nacional* (MPC)¹²³ integrada por membros do Govenio Nacional, delegados/as das organizações

¹²³ *La Mesa Permanente de Concertación Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas está integrada por miembros del Gobierno Nacional y por delegados de las organizaciones indígenas. Adicionalmente, la Mesa cuenta con tres veedores: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Conferencia Episcopal de Colombia. Por los pueblos indígenas: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización de los pueblo indígena de la Amazonía Colombiana (OPIAC); Confederación Indígena Tayrona (CIT); Cinco (5) delegados por cada macro regional; Los ex constituyentes Indígenas: Alfonso Peña Chepe, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry; Los senadores Indígenas; Son invitados permanentes: Autoridades tradicionales indígenas de Colombia- Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO). Por el Gobierno Nacional: El Ministro del Interior o su delegado; El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado; El Ministro del Medio Ambiente o su delegado; El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado; El Ministro de Minas y Energía o su delegado; El Ministro de Salud o su delegado; El*

indígenas e órgãos internacionais, a representatividade do povo arhuaco é feita pela CIT. No entanto, na escala local, o grupo de arhuacos de Magdalena e Guajira, separou-se do grupo da zona do departamento de Cesar, através de um acordo: “*ya han hecho acuerdo que ellos van a manejar su billete [dinheiro] aparte y lo están haciendo. Se están moviendo en forma y andan sueltos*” (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1). Essa divisão dos arhuacos e os conflitos interétnicos gerais motivados pelo aceso e manejo daqueles orçamentos de diversas fontes estatais e de ONGs ambientalistas para a compra de terras campesinas, são explicados na seguinte fala.

El resguardo arhuaco tiene dos jurisdicciones administrativas: una hacia al Magdalena y otra en el Cesar [...] el resguardo arhuaco solamente tiene dos municipios que es Cesar-Magdalena... municipios de Fundación, Aracataca y Valledupar. [...] internamente el Resguardo arhuaco tiene un cabildo para cada departamento. Para el Cesar estaría el cabildo que es el señor José María Arroyo y del lado de Magdalena, que está en dos municipios, Aracataca y Fundación, que es el señor Fabio Mejía. P: ahí cada uno gestiona con las alcaldías de esos municipios los recursos de SGP? R: exactamente [...] se canalizan los recursos través de las gobernaciones, alcaldías, los proyectos, donaciones, todo lo que vaya encaminado a recursos a intereses de la comunidad, ahí, a través de ellos. P: ¿fuentes de recursos? R. SGP, Regalias, está TNC, está las fuentes financiadoras. Gobernaciones, las corporaciones, CorpMagdalena, CorpoCesar y CorpoGuajira, Parque Naturales, está también el tema de la presidencia hay un apoyo... también... bueno... han habido muchas a nivel local, nacional y también ha habido apoyo internacional. También el Programa Mundial de Alimentos- ACIDI/VOCA, DNP también. Hay muchas instituciones que no han estado apoyando. [...] ¿Esos recursos entran y se destinan para qué? R. el tema de compra de tierras, para el tema de saneamiento del resguardo, o el tema de ampliación o de recuperación de territorio, el tema de educación, salud, el tema productivo..., para el tema de fortalecimiento cultural, se les apoya a los mamos para el tema de los encuentros con los jóvenes. (ENTREVISTA LÍDER INDÍGENA 1).

a esos resguardos les dieron dinerooo y zaaaaz, derechito! ¡Y eso es un billete mano!, entonces por ese billete ahorita hay una muñequera (briga), en estos momentos las divisiones más grandes son Arhuacos y Kankuamos. [...] Al interior de los Kankuamos están estos tres grupos dándose duro pa' ver quién se queda con el billete y en el caso Arhuaco también hay como tres o cuatro grupos de ellos [...] Hay un combo de aquí que es Fabio Mejía [Aracataca, Fundación y Santa Marta], el combo de aquí [del Magdalena]” (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

Nesse processo de contradições interétnicas consequência do modelo multicultural, ao mesmo tempo que apareceu o *Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira*, nasceu a associação de produtores Asoarhuaco, como parte de um projeto produtivo e comercial de café, cacau, panela e artesanato, organização liderada pelo cabildo governador dos setores de Fundación e Aracataca onde se cultiva o café para o manejo de mais recursos. Ele conta que Asoarhuaco nasce “*para exportar los productos que tenemos en Europa y en Estados Unidos o donde*

Ministro de Educación Nacional o su delegado; El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; El Consejero Presidencial de Fronteras o su delegado; El Consejero Presidencial de Política Social o su delegado.

corresponda [...] de hecho nosotros comenzamos fuertes con el café, ya estamos entregando a Italia unos contenedores, el cacao no lo está comprando un representante de Alemania, la panela hay pedidos en Alemania” (ENTREVISTA LÍDER ARHUACO, 2019).

A associação começou esse projeto através de Pro-colômbia, a entidade do Estado encarregada de promover turismo, a inversão estrangeira em Colômbia, as exportações minero energéticas e a imagem do país, através do que se conhece como *Marca País Colômbia*. Os parceiros atuais aparecem no site da associação:

Asoarhuaco ha participado en proyectos, programas de gobierno y de Cooperación Internacional con entidades como la embajada de Japón; la Agencia de Renovación del Territorio – ART; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC y Agricultural Cooperative Development International – Volunteers in Overseas Cooperative Assistance – ACDI / VOCA. Actualmente con ECOPETROL, CENIT y UNODC se suscribió un convenio para apoyar el desarrollo de la agroindustria panelera (ASOARHUACO, 2021)¹²⁴.

Por fim, mais recentemente, o conflito entre o povo arhuaco parece ter afetado também os processos de autonomia territorial na Serra dos demais povos wiwas, koguis e kankuamos frente aos projetos desenvolvimentistas para ser executados na SNSM. É o caso da administração do Parque Tayrona que o governo de Ivan Duque Márquez pretendeu ceder em concessão a empresas privadas das elites regionais e nacionais para implementar projetos desenvolvimentistas, chamados pelo ex presidente da ultra direita Colômbiana Álvaro Uribe Vélez, o mesmo que impulsionou os Povos Talanquera, como “o novo petróleo de Colômbia” (EL TIEMPO, 2019)¹²⁵; apontando aos negócios de ecoturismo em grande escala nos que ele tem interesses.

Un grupo de arhuacos que se mueve solito y que tienen cercanías con la derecha, y en concreto con Uribe, así que ahí hay unas contradicciones muy fuertes entre arhuacos y de los arhuacos con los demás pueblos porque ‘eché, ¿cómo fue que ustedes dejaron que esa mierda pasara?, les dicen los demás pueblos y nos están reventando. Por ejemplo, toda la discusión frente al tema del Parque Tayrona, que fue un proceso de varios años y apareció al final el combito este [...] y que ‘ni mierda, a nosotros nunca nos consultaron qué tal que no sé qué’ Entonces es traumático y peligroso. Ha sido peligros porque toda esta discusión del Parque Tayrona y tal, estos manes se atravesaron y aprovechó Uribe y el Ministro de Ambiente y frenaron esa vaina. Y en este momento no hay plan de manejo de Parque Sierra ni de Parque Tayrona que estaban ya listos, nada más era la firma del ministro que eran súper vácacos, ósea de poder participar y de tomar el control [indígena] sobre los parques y

¹²⁴ Sitio web ASOARHUACO <https://www.asoarhuaco.com/aliados/>. Visitado o 02 de setembro de 2021.

¹²⁵ <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/alvaro-uribe-arremete-contra-parques-naturales-por-restricciones-en-areas-protegidas-367382>

esos hijueputas aliados con los Dávila, se atravesaron llave y la concesión la quieren ellos y reventaron el proceso (ENTREVISTA FUNCIONARIO 1).

5.7 CONCLUSÕES

Na região do Caribe Colombiano desde finais dos anos noventa se viveram formas cruentas de violência. Durante o trânsito do ciclo da “guerra como ação” nas fases do escalamento e consolidação da guerra contra insurgente, as consequências foram dramáticas sobre o uso e o controle dos recursos, o que significou uma contrarreforma agrária sem precedentes. Deste processo resultou um “estado de guerra”, caracterizado por dois tópicos relacionados entre si: i) a memória de terror e de medo que continuamente se recicla e se atualiza no presente, e ii) a extirpação e o apagamento dos processos organizativos camponeses e a capacidade destas populações para fazer reclamações contenciosas.

O paradoxo das construções das jurisdicciones e fronteiras étnicas na Serra paralelo à neoliberalização dos Estados (BRIONES, 1998; ULLOA, 2005; BOCAREJO, 2015) com manifestos incentivos ao agronegócio na sub região norte do Magdalena -garantidos dentro da ordem renovada do medo e o terror produzido pela guerra contra insurgente-, teve consequências diferenciais nas comunidades subalternas que habitam a SNSM em contextos políticos e sociais voláteis. Mesmo que as duas comunidades viveram as atrocidades da violência guerrilheira, paramilitar e das forças militares; as políticas e planos que sobre a Serra se estabeleceram, evidenciaram um cenário desigual frente a permanência e o acesso à terra entre as comunidades locais, com efeitos devastadores para os camponeses e camponesas. Isto se enquadra no que tenho denominado como conflito intercultural.

As geografias do despojo da SNSM, e em geral do Caribe Colombiano, são entendidas não apenas a partir das formas de concentração da propriedade diretamente associadas à violência paramilitar. Mas também desde as negociações cotidianas do acesso à terra e seus recursos, possibilitam a observação de outras formas do despojo comumente silenciados que devem ser entendidos desde suas constantes produção tanto simbólica como material (OJEDA, 2016).

O caso das áreas montanhosas de Fundación e Aracataca confirmam como no marco do multiculturalismo, as marcas de certos sujeitos têm significado “desmarcar” muitos outros (BRIONES 2001; BOCAREJO, 2015), que em contextos sociais e políticos voláteis significaram novas formas de vitimização e marginalização. Essas diferenciações têm sido determinantes nas pretensões organizativas e territoriais de indígenas e camponeses na Serra. A

constituição política de 1991 em Colômbia brindou uma oportunidade aos movimentos indígenas de acessar a logros antes inalcançáveis, entrando a participar em esferas nacionais e internacionais. No entanto, também criou certos marcos de representação destas comunidades que a sua vez definiu uma representação dos campesinos como seu reflexo oposto, que nos contextos de violência exacerbada e de marginalização histórica estatal que experimentaram estas comunidades na Serra, denotou em muitos casos o deslocamento forçado e a venda de suas terras aos líderes indígenas. Este mercado de terras foi reproduzido por programas e políticas estatais que sobre a Serra foram feitos em nome do cuidado ambiental e a retomada indígenas sobre as áreas campesinas mas com manifestos interesses geoestratégicos no militar definido desde uma política contra insurgente do Estado.

Atualmente, como propõe a professora Bocarejo (2015), muitos dos desejos e projeções sobre a Serra estão enraizadas em representações contrapostas do que se imaginam é um lugar indígena e um campesino. A geografia imaginada da Serra, se estrutura na ideia de *“el lugar indígena se equipara con una conjunción social y natural que constituye un paisaje de conservación ambiental, mientras que uno campesinos prima el desarrollo agrícola”*. (BOCAREJO, 2015, p. 159).

No processo de retomada territorial indígena através dos programas dos Povos Talanquera, as compras autônomas de terras com recursos estatais e de ONG, ou a solicitação formal ao INCODER (atual Agência Nacional de Terras) da ampliação do *Resguardo Arhuaco da Serra* em detrimento dos campesinos, a geografia imaginada da Serra é utilizada como ferramenta fundamental de aliança política entre as organizações indígenas e instituições como o parques naturais, Departamento de Prosperidade Social (DPS) da presidência da República, grupos ambientalistas (Natural Conservancy, España, etc) e muitas outras pessoas que ajudam difundir e consolidar processos de compra de terra indígena. Como Bocarejo assinala,

Son muchos los mecanismos de representación que producen y reproducen una oposición espacial de la diferencia entre indígena e campesinos; mapas, derecho, sentencias de la Corte Constitucional, fotografías y documentos visuales y escritos. Todas aquellas instituciones que han atribuido dichas características “verdes” a la tenencia indígena de las tierras se han convertido en escenarios cruciales para fomentar las demandas indígenas de expansión de sus territorios. Tanto los espacios indígenas como los campesinos son excesivamente simplificados bajo las rúbricas del “cuidado ambiental” y del “desarrollo agrícola” (BOCAREJO, 2015, p. 159).

Assim, a representação de um território ambiental ou a de um agrícola se vinculam de uma maneira necessária com a imaginação do que deve ser um indígena ou um campesino (BOCAREJO, 2015). Tentei mostrar neste capítulo como a través das imagens fixas do uso da terra, pelo qual a posse e o uso se fundem facilmente nas representações dos indígenas como

nativos ecológicos; se fortaleceram as alianças destes com entes estatais e não estatais para impulsar suas demandas territoriais.

Em suma, sob esse relacionamento estreito entre indígenas e a proteção do meio ambiente, fundamento próprio de programas e projetos estatais e não estatais, pouco espaço queda para as demandas territoriais futuras dos camponeses afetadas pelo contexto político e social que (re)configurou essas territorialidades através da violência. Em síntese, as consequências políticas que afetam os processos e ações coletivas da territorialidade camponesa na Serra contrastam com as consolidações organizativas e territoriais indígenas, que, em últimas, não afeta os grandes latifúndios das elites locais e regionais.

No entanto, esse modelo de gestão das diferenças através do multiculturalismo neoliberal também concebeu conflitos do tipo interétnico, frente ao controle dos recursos estatais e das ONGs ambientalistas, e a representação de certos projetos desenvolvimentistas que buscam se implantados na Serra através de relações contraditórias com elites regionais e nacionais, e em alguns casos, empresas locais ou estrangeiras dedicadas a exploração mineral que destinam recursos para programas de Responsabilidade Social Empresarial sobre o discurso e as narrativas verdes e ambientais que procuram esconder os efeitos ambientais e sociais reais de sua intervenção.

Na linha dos autores com que tenho trabalhando (BOCAREJO, 2015; DUARTE, 2015), é importante dizer que meu análise não se fundamenta nas demandas reformistas do Estado e de seus instrumentos jurídicos que precisamente têm fragmentado e hierarquizado as comunidades étnicas e rurais através do multiculturalismo paradoxal frente aos interesses das elites regionais e empresários da ordem internacional.

Apesar de que cobram relevância os processos de formalização e titulação de terras das comunidades camponesas, os programas de projetos produtivos, amparados na normatividade vigente da Lei 160 de 1994 para garantir a pervência de suas formas sociais, culturais e produtivas; esta dissertação aponta mais à necessidade atual da construção de um diálogo intercultural entre as diferentes populações étnico-camponesas de indígenas, negros e camponeses, como caminho de resistência territorial frente à territorialização do modelo agroexportador, da mineração e do ecoturismo dessas sub regiões.

As pretensões mineiras, as barragens na Serra e em geral, as proteções de exploração do agronegócio na região Caribe, demandam -como afirma Bocarejo, 2015) - a quebra desse círculo vicioso no qual se cala ou se legitima uma ou outra voz das comunidades subalternas

dependendo dos governos de turno, das diversas agendas econômicas e ambientais e do poderio paramilitar na área.

Compreender os conflitos territoriais apenas desde a reprodução ampliada do capital do modelo agroindustrial e mineiro de exportação com as comunidades subalternas, não é suficiente. É preciso também atingir os desafios que se apresentam na atualidade respeito aos diálogos e consensos interculturais como ferramenta da criação de processos territoriais entre as comunidades subalternas da Serra e de outros muitos territórios latino-americanos, que supere essas representações fixas construídas, para dar passo a criação de planos conjuntos de desenvolvimento sustentável que contemple indígenas, afro descendentes e camponeses como sujeitos de resistência e de enfrentamento aos avanços históricos e atuais do capital.

Uma das principais conclusões desta dissertação fundamentasse no análise aos conflitos constituídos na Serra resultado das políticas multiculturais e de desenvolvimento baseadas na neoliberação do Estado, fundamentados na reprodução simplista de oposições binárias entre indígenas e camponeses, que acabou favorecendo os interesses de latifundiários representados pelo Estado que não vem em perigo a lógica de acumulação da propriedade, da riqueza e do poder político. No contexto de estado de guerra, grêmios econômicos, Estado e ONGs, têm impedido ao máximo a negociação de acordos políticos entre indígenas e camponeses. O resultado? A fragmentação e divisão social e política das comunidades subalternas, através da violência exacerbada, políticas neoliberais e a construção e execução de políticas fundamentadas no multiculturalismo que no final, asseguram e mantêm a ordem hegemônica nos territórios dos detentores locais e internacionais de poder político e econômico. Nesse complexo quadro de desigualdade social e marginalidade, se faz necessário a criação de territórios com planos de vida consensuais que mudem a segregação histórica dos povoadores da Serra, sejam camponeses ou indígenas.

6 ESCRITÓRIO DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS NA TERRITORIAL MAGDALENA (2012-2019).

“una cosa es la restitución de tierras, que es solamente “la tierrita campesina” y otra cosa son la restitución de derechos territoriales étnicos, que abarca todos los derechos que están ligados al territorio: que es el derecho a la salud, a la cultura, a la autonomía del gobierno propio, al goce y el uso del territorio y a las prácticas culturales. Eso en el marco del decreto ley 4633 y 4635 que es el de afros, negros y palenqueros” (CADERNO DE CAMPO).

“Entonces, esa compra de territorios campesinos estuvo... bueno, marcada en principio de oportunidad [del conflicto armado], sí, pero también por la necesidad de retomar lo que les correspondía ancestralmente a los indígenas” (FUNCIONARIA 2).

O escritório da Unidade de Restituição de Terras para o departamento de Magdalena, também conhecido como a territorial Magdalena, localiza-se num pequeno prédio de dois andares, em um dos bairros mais tradicionais das elites brancas *samarias*¹²⁶ construído durante a época do auge bananeiro para os empregados norte-americanos da *United Fruit Company* (VILORIA, 1998).

Entrando no prédio, depois da recepção, pousa um pequeno cubículo cheio de pilhas de pastas, envelopes e ofícios onde se maneja a correspondência do escritório própria dos trâmites da política de restituição de terras no Magdalena. Em frente, um pequeno espaço para crianças adequa-se para tomar entrevistas ou falar com as vítimas, advogados/as ou entregadores que chegam ao escritório a fazer seus tramites. Depois das escadarias que levam ao primeiro andar, está uma pequena sala de espera com alguns bancos e uma pequena tela pendurada na parede na que passam o dia todo instruções sobre o trâmite da restituição e propagandas dos casos *exitosos* da política de vítimas e restituição de terras, política bandeira do governo do liberal de Juan Manuel Santos.

No final do espaço de espera, uma porta na esquerda leva a uma sala com 4 cubículos para a atenção das vítimas e demais interessados no processo, atendidos por uma equipe de advogadas, advogados e pessoal da área cadastral. São quem recebem geralmente as denúncias

¹²⁶ Palavra com a que se reconhecem as pessoas nascidas na cidade de Santa Marta.

de despojo ou abandono de suas terras. A porta da direita, onde o acesso é exclusivo para funcionários e funcionárias, leva a um espaço em que está uma xerox cheia de cópias em papel ao redor, utilizada por todos o escritório. Uma porta conduz ao arquivo documental das vítimas de restituição no Magdalena; outra, à sala da grupo encarregado do arquivo e de alguns temas administrativos. Uma porta mais, serve de espaço para o pessoal contratado pelos organismos internacionais que acompanham a implementação da restituição e da lei de vítimas nesta sub-região do Caribe.

Subindo ao primeiro andar, existem mais quatro salas nas que laboram as equipes da área cadastral, as advogadas coordenadoras da implementação da política, e membros da parte administrativa. Uma sala mais serve de espaço de reuniões internas como externas. Num quarto espaço está a cozinha do prédio, na que comumente estão as duas mulheres *samaritas* que ajudam com a faxina do lugar e com o preparo do café diário. Na área comum desse primeiro andar, está a plotadora do escritório para impressão dos mapas em diferentes escalas da restituição.

Subindo no segundo andar, há um grande terraço como vista para a rua principal do prédio; há uma sala de reuniões da territorial que está junto com o gabinete da diretora ou diretor do escritório; e está uma grande sala, cheia de postos de trabalho para advogadas/os (que são a maioria), agrimensores, geógrafas/os, sociólogas/os, antropólogas/os, politólogas/os, entre outras profissões. Ai se localizavam a maioria das equipes interdisciplinares que levam a cabo a intervenção da política restituição de terras nas sub regiões priorizadas pelo escritório no departamento de Magdalena. Com exceção de algumas reuniões com vítimas, tanto o primeiro como o segundo andar, são espaços exclusivos aos funcionários do escritório.

Esse dia, estávamos reunidos na sala do segundo andar, três profissionais da área social (da qual eu fazia parte), quatro do direito, dois da área cadastral, três da área étnica e a coordenadora jurídica das equipes. O objeto da reunião era discutir os avanços sobre alguns casos de restituição de terras de uma zona na SNSM. Em concreto, se indagava sobre a possibilidade de que esses casos estudados, localizados em áreas de sobreposições de terras de restituição campesinos com zonas de resguardo e de pretensão ampliação do mesmo, fossem iniciados para começar as diferentes fases administrativas do processo de restituição dessas terras de campesinos e campesinas.

O desencanto profissional com os bons propósitos da política de reparação territorial crescia nas elocuições de alguns funcionários e funcionárias que participavam da reunião, nas que apontavam a desconhecer as expectativas de restituição das terras de alguns campesinos e

campesinas da Serra que tinham sido vítimas do deslocamento forçado e do despojo, e com quem havíamos feito jornadas de trabalho comunitário, apelando em seus argumentos para no iniciar o trâmite de restituição às múltiplas fronteiras jurídicas que sobre a Serra existem: *“Ese caso de la señora Ramira no lo inicié porque ahí hay Ley segunda y eso es territorio protegido por Parques Naturales, no hay manera de iniciarlo”*. *“Ahí creo que se decide no iniciar esa solicitud de restitución, ¿es una tierra sin título cierto? o ¿está dentro del resguardo?, sí es así entonces no hay como legalmente iniciarlo o mucho menos inscribirlo”*. (CADERNO DE CAMPO).

A insatisfação e indignação era tal que não compreendia como essas histórias de barbárie e de exacerbada violência acumulada nas histórias das famílias campesinas dos setores serranos que nesse momento eu trabalhava, não iam a ter uma reparação territorial por parte da entidade que precisamente nasceu para restituir os direitos territoriais das populações vítimas de abandono e desapropriação de terras.

O anterior constitui os rastros de algumas das práticas e discursos dos funcionários e funcionárias desde onde se determinam o futuro das vidas de milhares de habitantes da SNSM no Caribe colombiano. Nesse sentido, neste último capítulo analiso os processos de construção das diretrizes dos casos de solicitações de restituição de terras campesinas em áreas do resguardo arhuaco e áreas de pretensão de ampliação, e sua aplicação na prática e os discursos dos funcionários e funcionárias do escritório da Unidade de Restituição de Terras da regional Magdalena que entrevistaram nas sub-regiões de Fundación e Aracataca entre 2012 e 2019.

As três fases de execução dessa política correspondem ao momento em que iniciou a ação da URT nessas áreas montanhosas, particularmente na bacia do rio Fundación, o último ano em que eu trabalhei nesse órgão (2017), e o ano em que eu fiz o trabalho de campo da dissertação (fevereiro 2019), momento em que estavam cerrando a etapa administrativa do processo de restituição de terras. Neste marco temporal, me pergunto: quais são as consequências e implicações políticas que na prática resultam destas diretrizes sobre os milhões de habitantes da Serra? Como as fraturas organizativas e de tecidos social afetou o processo de restituição nas zonas altas dos rios Aracataca e Fundación? Como é restituir terra em “estados de guerra”? Como as fronteiras e os contornos que sobre a Serra existem terminaram sendo paradoxalmente utilizados como argumento para a negação dos direitos campesinos no marco do processo de restituição na SNSM? De que maneira as imagens opostas e sedimentadas de ser indígena e de ser campesino fundamentadas no multiculturalismo operativo em Colômbia, operam nas práticas e discursos dos funcionários do escritório local de restituição de terras?

Como a burocratização estatal incidiu no processo de restituição de terras e territórios? Que resultados na reparação territorial a vítimas existem depois de 9 anos de criada a Lei 1448 em Fundación e Aracataca?

Antes de responder estas perguntas, cabe esclarecer que o fato de privilegiar neste último capítulo a voz do pessoal das equipes interdisciplinares do escritório de restituição, é resultado do temor e medo que confessaram a maioria dos campesinos solicitantes de restituição de terras das partes altas de Fundación e Aracataca para falar sobre seus processos de restituição que ainda repousam no escritório sem que até a data do trabalho de campo (fevereiro de 2019) tinham recebido uma resposta formal frente a sua expectativa de reparação. Deles e elas, apenas 5 acederam a falar comigo sobre suas histórias de vida, mas não sobre seu processo de restituição de terras. Por isso, este capítulo se baseia principalmente em material de arquivo público, as entrevistas feitas durante o trabalho de campo ao pessoal das equipes do escritório que adiantaram processos de restituição nas áreas montanhosas de Fundación e Aracataca, e as notas de campo que fiz durante meu passo com antropólogo da área social desse escritório no marco do trabalho com vítimas da violência reclamantes de restituição de terras. Este capítulo é um aporte fundamental à reflexão que o país deve fazer sobre o balanço que deixa uma crítica construtiva às ações no marco da política de restituição de terras, que permita projetar qual será a perspectiva futura desta política adiada até agosto de 2030 (EL TIEMPO, 2019) e num contexto de um novo governo de corte progressista.

6.1 RESTITUIR DIREITOS TERRITORIALES EM “ESTADO DE GUERRA”

Figura 15 - Fotografia periódico local da cidade de Santa Marta. Magdalena.



Fonte: Fotografia tirada num mercadinho de bairro da cidade de Santa Marta durante o trabalho de campo em fevereiro de 2019.

A Lei 1448 de 2011 denominada ‘Lei de vítimas e restituição de terras’, se instituiu em Colômbia como parte de uma série de medidas para a atenção e reparação integral das vítimas do conflito armado através de uma série de procedimentos. Nesse marco legal, a ação da restituição de terras foi concebida como um mecanismo encaminhado a restituir material e juridicamente as terras das pessoas que em ocasião do conflito armado foram despojadas e expropriadas de suas terras, ou se viram obrigadas a abandoná-las. Com dita lei, o estado

colombiano buscava reparar de forma integral todos os direitos violados em ocasião do abandono ou despojo causado no marco da guerra civil.

A lei 1448 está dividida em duas etapas: a fase administrativa e a fase do processo judicial. Na primeira fase, as vítimas que desejam reclamar seus direitos de uso, posse e/ou propriedade sobre uma terra, deve acudir a Unidade de Restituição de Terras (na diante ‘URT’), entidade anexada ao Ministério de Agricultura, para adiantar labores de verificação dos requisitos exigidos pela lei para acudir à ação de restituição, labores de micro focalização (como se chamam às áreas de ação pela URT) e identificação da terras reclamadas, e a caracterização das pessoas que o habitem, chamados “*segundos ocupantes*”.

Uma vez que essas tarefas são concluídas, a URT inscreve aos/às solicitantes e suas terras no *Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente* (em adiante o ‘Registro’ ou ‘o RTDAF’). Com isso se subtrai a terra do comercio e se habilita aos/às solicitantes para que os juízes civis especializados de restituição de terras tramitem esses casos. Desta forma, cumprido o trâmite administrativo, começa a etapa judicial em que os/as juízes decidem se devem ou não restitui e retornar o terreno ou chácara solicitada na URT ao autor/a da reclamação.

Me concentrarei principalmente na fase administrativa, pois nos casos das bacias altas dos rios Fundación e Aracataca abordados, nenhum chegou até a etapa judicial ou inclusive, alguns nem mesmos foram iniciados para realizar o estudo de caso da solicitude para avançar na fase administrativa, o que torna visíveis os poucos avanços na reparação territorial na SNSM do lado do departamento de Magdalena e em geral em todo o país com cifras reduzidas de inscrições no RTDAF, e por tanto poucos casos em etapa judicial (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019).

Nos territórios serranos do rio Fundación o processo de restituição começou com a mesma entrada em funcionamento do escritório da URT territorial Magdalena. De 50 casos de solicitudes de restituição campesina em 2012, passou a ter 263 solicitudes em 2014. Em janeiro desse ano, a equipe começou a construção de um plano de intervenção para essas áreas montanhosas no que foi denominado como a segunda fase de intervenção de Fundación. “*Desde octubre de 2013 se había avanzado en un trabajo arduo que produjo avances como organizar y delimitar las elevadas cifras de solicitudes recibidas y convertirlas en solicitudes plenamente identificadas y ubicadas físicamente en terreno*” (FUNCIONARIO 12).

Desde o início da intervenção da URT foi claro que as solicitações campesinas nas áreas de justaposições com territórios indígenas ou de pretensão de ampliação destes, pouco avançavam em razão da dificuldade na maneira de identificar concretamente as terras solicitadas em restituição. Alguns funcionários que documentaram e adiantaram casos nesses primeiros anos de execução da política nesses territórios, lembram que “*hubo un estancamiento durante un año y medio, cero decisiones de fondo*¹²⁷; *a diciembre de 2013 habían sólo 12 decisiones de fondo de 236 solicitudes*”. (FUNCIONÁRIO 12).

A segunda fase de implementação da política buscava superar o enfoque individual do caso a caso como havia sido trabalhado até 2014. Um dos servidores que acompanhou a estratégia de ação em Fundación do escritório de restituição em 2014, conta que nesse momento partiram de um enfoque em que se entendia “*el territorio y campesinado como sujeto colectivo*”. (FUNCIONARIO 11).

O plano contemplava uma discussão de quatro questões para ser superadas. A primeira, era passar do olhar o fato do despojo como um fenômeno isolado para cada família campesinos, a “*indagar por las estrategias de despojo históricos en los que se enmarca el hecho, sus actores, intereses y beneficiados en una escala regional*” (FUNCIONARIO 11). A segunda era transitar de olhar uma terra campesina “*como una figura geométrica cerrada*”, a vê-la “*como parte orgánica de un mundo de relaciones humanas más complejo que entendemos como territorio*”. (FUNCIONARIO 11). A terceira questão, era sobre articulação com as outras instituições do Estado e organizações da sociedade civil; e por último, ressaltar a importância das possibilidades de trabalhar no âmbito da justiça de transição e o enfoque “*transformador*” da reparação integral das famílias campesinas vítimas de deslocamento forçado e despojo. Para o pessoal entrevistado, nesse momento “*era un sendero poco explorado, pero con inmejorables potencialidades para elevar la calidad de la justicia y la verdad que merecen las personas víctimas del conflicto*” (FUNCIONARIO 11).

Para esse ano da implementação da segunda fase da estratégia de intervenção nos territórios campesinos das montanhas de Fundación, a equipe realizou algumas provas sociais com as comunidades vítimas de solicitantes, provas que faziam parte dos requisitos legais dentro do processo de restituição para a inscrição ou não no RTDAF. Jornadas de ampliação das relatos das denúncias das vítimas, localização das terras, e a jornada massiva de intervenção

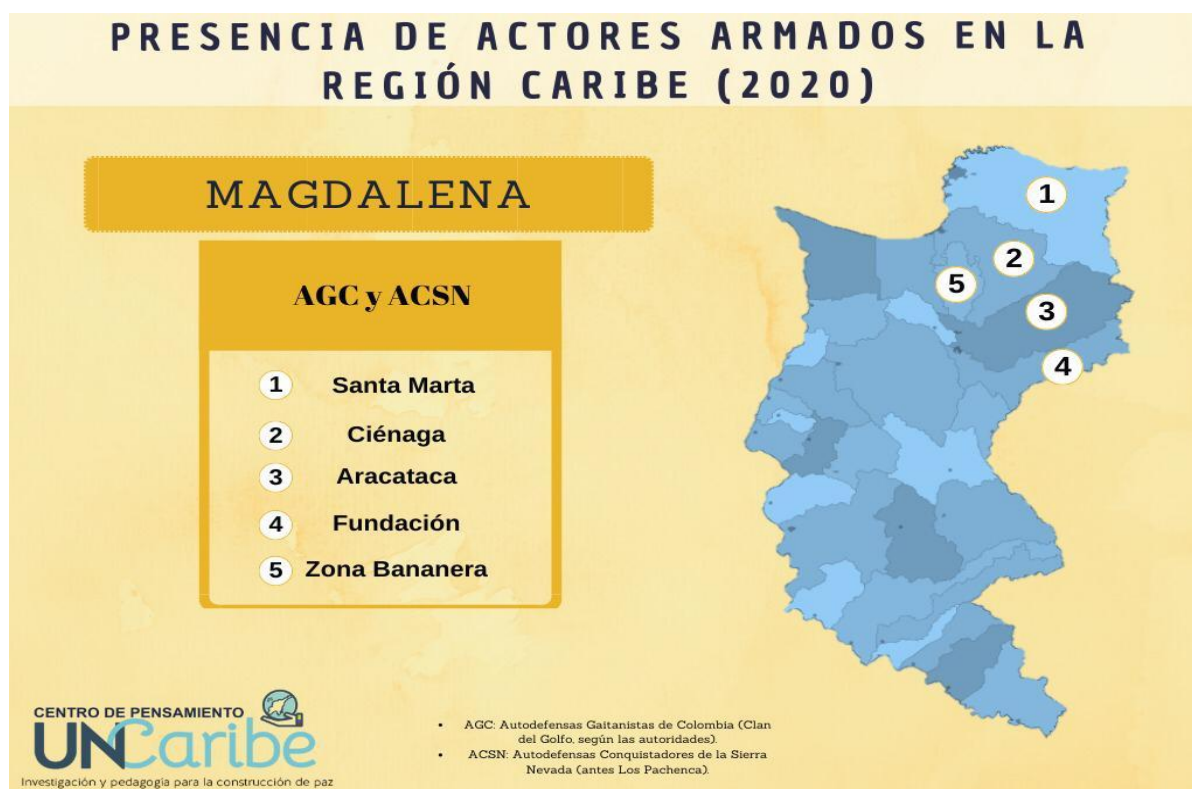
¹²⁷ As decisões de fundo são aqueles atos administrativos feitos pela Unidade de Restituição de Terras que decidem, entre outras, o início ou não início de um caso de restituição de terras, e a inscrição ou não de uma terra campesina no registro XXX. Segundo a Lei depois de superar a etapa administrativa na que a URT pesquisa e documenta os casos.

comunitária com mais de 100 solicitantes campesinos que compreendiam a realização dos exercícios metodológicos de linha de tempo, cartografia predial terra a terra, cartografia social e recolecção de dados e informações comunitárias dos solicitantes campesinos (FUNCIONÁRIO 11).

Para o grupo de profissionais, aqueles resultados dos primeiros exercícios em campo mostrou-lhes duas situações para esse momento: um, que alguns casos podiam ser parte de outros casos coletivos de deslocamento forçado maiores que compreenderia várias solicitações terras mas que não estavam sendo reclamadas pelas vítimas.

A segunda situação, o contexto da memória do medo em que avançou nos primeiros 3 anos, o processo de restituição de terras para os campesinos e campesinas reclamantes e suas famílias, paralelo a reconfiguração do controle militar e armado de atores estatais e organizações ilegais que ainda para o ano 2020, momento em que foi escrita esta dissertação, se mentem nos municípios da parte norte do departamento de Magdalena dentro dos que estão Fundación e Aracataca, como se vê no seguinte mapa (Mapa 18) (TREJOS, BADILLO, 2020).

Figura 16 - Presencia de actores armados nos cinco municípios do norte do departamento de Magdalena (2020)



Fonte: Centro de pensamiento UN Caribe, Investigación y pedagogía para la construcción de paz. Universidad del Norte.

Sobre a segunda situação identificada pela equipe, cabe referir de novo o conceito “estado de guerra” proposto pela professora Franco (2009) e que abordei no capítulo 5, e sua relação com a implantação de uma memória de medo e de terror interiorizado nas comunidades étnico-rurais, ajuda na compreensão dos efeitos na construção coletiva, nos processos comunitários organizativos, econômicos e da identidade do sujeito camponês que afetaria, claro, sua participação no processo de restituição.

A perda da terra, conta uma das funcionárias, as perdas humanas de familiares e vizinhos conhecidos que motivaram o deslocamento forçado, os fatos de violência sexual e de gênero, a perda da relação tradicional com a terra, e os novos desafios que enfrentavam as vítimas nos lugares de moradia para onde migraram forçadamente,

...permanencia como tinta indeleble en la memoria y los recuerdos de esos campesinos que solicitaban su tierra, quienes dolorosa y crónicamente, en algunos casos, recuerdan todo lo que fue sin que se hubieran realizado duelos. Eso me acuerdo que en esas primeras participaciones dentro del ejercicio comunitario, la gente de esos sectores de la parte alta, media y baja del río Fundación siempre estuvieron recordando los eventos violentos, expresando en cada oportunidad los miedos de ser perseguidos y/o la intranquilidad de que el proceso de restitución ponga en riesgo sus vidas [...] esos campesinos eran, o son, poblaciones de extrema vulnerabilidad y era lo que nosotros nos encontrábamos en esas jornadas. Muchos de esas familias de campesinos no tenían cómo incorporarse a los ciclos económicos en los lugares donde se han asentado, temporal o permanentemente. Allí los saberes tradicionales de uso del suelo, ciclos ambientales y climáticos, periodicidad del cultivo y recolección de la cosecha, de cría de animales domesticables indispensables e imprescindibles en la economía campesina y agraria le son aplicables y inútiles donde se encuentran. Ese desarraigo de esas poblaciones campesinas terminó rompiendo esa relación con la tierra y pues también todo el tema cultural camponês. Muchas de esas nuevas actividades económicas que llegaron hacer en los pueblos o ciudad a donde se desplazaron eran muchas veces humillantes para lograr satisfacer sus necesidades básicas y no dejarse morir de hambre, mucha frustración resultado de todas esas situaciones y pues por tanto poca organización. (FUNCIONARIA 12).

Agora bem, sobre o mercado de terras, os exercícios de cartografia social com camponeses e camponesas reclamantes de terras mostravam desde então os conflitos de direitos que começavam se apresentar no marco do processo de restituição de terras. Ainda que não sejam tema central nesta dissertação, vale a pena mencionar as compras e vendas de terras entre os camponeses pobres, vítimas também do contexto volátil da guerra, chamado no contexto da Lei de "segundos ocupantes". Durante a segunda fase, apareceram várias solicitações de uma mesma terra por uma cadeia de camponeses deslocados que anos mais tarde seria uma das problemáticas mais evidentes do processo de restituição mas que não são abordadas nesta dissertação. A funcionária entrevistada conta que acharam para esse momento, uma população de 100 famílias que foram deslocados de outros municípios do norte do Magdalena e que compraram terras de camponeses que foram deslocados dessas áreas montanhosas.

Em resumo, a segunda fase de intervenção da equipe do escritório de restituição de terras nos setores montanhosos do rio Fundación, evidenciava três problemáticas principais em 2014 que de maneira geral, retratam a situação atual dos solicitantes que se animaram a reclamar ao Estado as terras que perderam durante a guerra: i) a falta de interesse de retorno às terras abandonadas e a perda da vocação campesinos; ii) a constante vitimização das instituições estatais de estigmatizar aos sobreviventes da violência como auxiliadores das guerrilhas; e iii) as debilidades formativas, organizativas, de exigibilidade de direitos individuais e coletivos, e indenitárias das famílias campesinas que estavam reclamando sus terras. O anterior, é retratado no seguinte relato de uma das funcionárias:

...eran muy pocos los solicitantes que expresaban su interés y deseo de retornar a la tierra y establecer un proyecto a largo plazo de vocación de la vida campesina. La mayoría de solicitantes decían que dado su avanzada edad; la desconfianza en el Estado para dar garantías de retorno dignas; a las deplorables condiciones de salud, sumado a la desintegración familiar y social; y el evidente miedo por los hechos de violencia; y los posibles problemas de seguridad con los que tenían la tierra o los grupos ilegales que operan en la zona [...] era normal ver cómo la institucionalidad regional tenían un discurso prejuicioso y excluyente heredado del periodo del control social y político del paramilitarismo, pues siguen estigmatizando y revictimizando a los campesinos pues como eso fueron zona estratégicas de las guerrillas, siguen condenando a los sobrevivientes del conflicto a ser señalados por la sociedad civil como victimarios, y por lo tanto, como no merecedores de los derechos propios de las personas víctimas del conflicto armado (FUNCIONARIA 11).

6.2 NASCIMENTO DA EQUIPE ÉTNICA NO ESCRITÓRIO MAGDALENA: METAS E SUPERPOSIÇÕES DE SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO DE CAMPELINOS EM RESGUARDOS E ÁREAS DE PRETENSÃO TERRITORIAL ÉTNICA

O artigo 189 do decreto lei 4633, criou a Direção de Assuntos Étnicos (DAE) da URT. Como contou um dos advogados que participou desde a criação dessa direção desde Bogotá, as funções dela eram pouco claras dado que basicamente falava-se de construir e elaborar os planos do componente de reparação coletiva étnica, no entanto de entrada, “*ahí no aparece nada claro sobre restitución*” (FUNCIONÁRIO 3).

Eso se intentó concretar aunque no del todo bien, en el 4401 de 2011 que fija la estructura. Allí pusieron una función general que terminó siendo básicamente retórica porque en la práctica no transformó nada, y es que la dirección de Asuntos étnicos tenía la función de implementar esa cosa gaseosa que nadie sabe qué es, "el enfoque diferencial étnico", en todas las dependencias de la unidad que incluían el nivel central y el nivel territorial. Allí, lo que había era una serie de declaraciones muy generales, pero nada concreto frente a o que la Dirección hacía. Eso vino dándose más en la práctica (FUNCIONÁRIO 3).

O protagonismo da DAE ocorreu em razão da demanda que assumia frente aos casos de restituições étnicas não assumidos pelos escritórios regionais, concentrados maioritariamente em trabalhar as demandas de terras campesinas, agrupadas na Lei 1448. A falta de experiência dos/as profissionais do direito das regionais nos sistemas de direitos diferenciais étnicos, a ausência de diretrizes claras para levar esses casos, e a abundante quantidade de trabalho, terminaram por deixar a responsabilidade à DAE, que desde Bogotá planejavam e faziam as ações. (FUNCIONARIO 3).

Lembro que no momento em que eu ingressei no escritório de restituição de terras em na cidade de Santa Marta em começos do ano 2015, as expectativas das organizações de vítimas que tinham lutado pela aparição da Lei 1448 como política de atenção e reparação do conflito armado interno, incrementou a quantidade de solicitações de restituição na região e na escala nacional. Isso significou a presença de 27 escritórios de restituição em diferentes regiões do país (UAEGRTD, 2016), que a sua vez, promoveu a abertura de outras zonas de intervenção (áreas microfocalizadas), momento em que fomos contratados vários profissionais de diferentes disciplinas para executar a política no departamento de Magdalena.

Nesse marco, a entidade lançou um plano estratégico institucional denominado *mega-metas*, nome bombástico para exhibir os grandes compromissos na reparação das vítimas de uma das políticas mais importantes do governo liberal que ostentava o poder e que sofria ataques dos partidos de ultradireita que não aceitavam, por uma parte, as intenções de perder as terras espoliadas e adquiridas pelas vias ilegais no marco da contrarreforma agrária que deixou o conflito armado, e por outra, as negociações de paz que estavam em curso entre o governo Colombiano e a Guerrilha das FARC-EP. Como resultado dessa ação das *mega-metas*, a entidade estimava que em 2021 as vítimas de abandono e despojo pelo conflito armado teriam recuperado seus direitos sobre as terras e territórios. Num documento de gestão, se resume a missão e a visão da URT desde a lente das *mega-metas*.

Al 2018 y a juicio de las víctimas reclamantes de tierras, la UAEGRTD estará cumpliendo su papel histórico definido por la Ley 1448 alcanzando el reconocimiento social. Será considerada como una experiencia exitosa e innovadora en su cumplimiento misional, y ejemplo de una actuación y técnica que ofrece la debida protección y legitimidad de los derechos de las víctimas que fueron despojadas de sus tierras y territorios". Para el cumplimiento de este propósito se establece la misión "Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la gestión administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de sus derechos sobre los mismos, y con esto aportar a la construcción de la paz en Colômbia" y visión "Para el año 2021, las víctimas de abandono y despojo por el conflicto armado han recuperado sus derechos sobre las tierras y territorios gracias a una acción articulada, legítima e irreversible liderada por la Unidad,

contribuyendo a la reparación integral como base de procesos de reconciliación (UAEGRTD, 2016).

Nesse marco das *megas-metas*, enquanto as territoriais concentravam seus esforços em atender a grande demanda de solicitações individuais de restituição campestinas, uma das primeiras estratégias da DAE na implementação da política desde o enfoque étnico, foi a realização de acordos e convênios com organizações indígenas e instituições acadêmicas em diferentes regiões do país. No entanto, a burocratização do processo administrativo, o padrão técnico dos produtos e formatos, a falta de formação e o controle do manejo de recursos, acabou por enfraquecer as relações entre a URT e as organizações e movimentos indígenas, como aconteceu, por exemplo, nas relações entre a URT e os/as indígenas arhuacos da SNSM.

...eso terminó siendo desastroso porque los productos técnicos eran casi que deficientes, porque esas organizaciones financieramente no tenían cómo legalizar bien y ejecutar como estaba en el marco del convenio. Entonces muchos de eso convenios terminaron en sede judicial porque la Unidad demandó. Con lo arhuacos, por ejemplo, ud no me legalizó 60.000.000 millones de pesos, me los devuelve por favor. Los Arhuacos ¿pero de dónde putas me voy a sacar 60 millones? ¡Entonces demándeme! ¡Pues lo demando! y entonces, es una contradicción. La caracterización malísima. La gente sin acceder a la Justicia Transicional, los indios; La Organización indígena demandada; la relación política fracturada Ósea, de ahí no salió nada! (FUNCIONARIO 3).

Com o fracasso da experiência dos convênios, estimulou-se a descentralização das funções da DAE com a criação das equipes territoriais dedicadas exclusivamente aos assuntos étnicos. Os primeiros espaços de capacitação e formação em que participamos aqueles de nós que tínhamos ingressado na URT naquela época, eram para explicar, entre outras, os procedimentos do trâmite administrativo para as solicitudes campestinas e o novo papel das equipes étnicas na territorial Magdalena fundamentados nos decretos 4633 e 4638, cujo procedimento ainda não era muito claro. Ao princípio, nesse marco de altas demandas de trabalho pelas famosas *mega-metas*, os diretores de cada escritório receberam as equipes mas não sabiam o que fazer com elas:

eso fue un desgaste con los directores territoriales porque ellos siempre están colgados con las metas, entonces cualquier mano que ayude pues: bienvenido venga y me ayuda [...] por eso al principio los manes recibieron los equipos pero los pusieron a hacer otras cosas pero después aceptaron [...] les dijimos que 'pilas que ustedes pueden estar violando la ley, pueden estarse metiendo en problemas disciplinarios, fiscales, esos manes [del equipo étnico] están sólo pa' eso (FUNCIONARIO 3).

Entretanto, o problema das superposições das solicitações de restituição de terras campestinas em territórios indígenas titulados ou com pretensões de formalização por estas

comunidades, começou a ser evidente em várias regiões do país depois de 6 anos da implementação da lei. Ainda que no começo não era claro para mim, com o tempo entendi que durante a execução da política, o processo de restituição canalizou caminhos jurídicos diferenciais em procedimentos burocráticos para tratar os casos campestinos por um lado, e indígenas e comunidades negras, pelo outro, desconhecendo uma mirada intercultural do território. Desde o início o tipo de intervenção foi fragmentada e como fala o funcionário da DAE de Bogotá que entrevistei, as equipes regionais estavam perdendo de vista os problemas que começavam a surgir em territórios locais onde apareceram superposições entre as solicitudes de restituição aos direitos territoriais campestinos e as solicitudes de restituição de direitos territoriais indígenas, temas aos que não se prestava muita atenção.

Como estaban tan consumidos en cumplir las tales mega metas nunca se preocuparon... y miraban pa' el otro lado cuando les decíamos: pilas que se están cruzando los polígonos de restitución individual y colectiva. ¡Nooo!, eso los acumulamos judicialmente pero eran respuestas rápidas para evitar el problema, no para resolverlo (FUNCIONARIO 3).

Nessa perspectiva, configurou-se um conflito intercultural no marco da reparação territorial do Estado Colombiano. Ao tempo em que avançavam com dificuldade os procedimentos das fases administrativas das diretrizes campestinas, se realizavam ações por parte das equipes étnicas, muitas vezes em atuações que se davam sobre os mesmos territórios. Deste modo, aconteceu a aparição paulatina da justaposição de solicitações de direitos de reparação territorial de campestinos em terras indígenas a escala nacional:

...las demandas étnicas ya presentadas empezaban a ser como una barrera para muchas de las solicitudes individuales campesinas que estaban traslapadas. Empezaron a decir ¿qué hacemos? ¡Necesitamos lineamientos! ¡Esa vaina se nos cruzó, se nos estalló. Estamos hablando de 2016 y 2017. [...] traslapes que tenían efectos jurídicos y les frenaba sus metas, fue en el 2016 de manera masiva (FUNCIONARIO 3).

En 2014 tuvimos un primer estallido de eso, pero como no siguió remitiéndose, entonces quedó olvidado. El primer estallido de cruces de individual campesina con solicitud colectiva fue un caso que se llamaba Caño Ovejas en Mapiripán, en El Meta. Cerca de 58 solicitudes campesinas traslapadas en zona no micro con la solicitud del Resguardo. No tuvo mucho eco porque fue solo ese problema y no reventó más. Pero en 2016 sí empezó en forma a cruzarse una cosa con las otras: tanto en los territorios de los indígenas como los de los negros. Porque con lo de los negros eso es otro verguero. Eso no está tanto allá en el norte, pero en todo el litoral pacífico, en Putumayo, Urabá, esa vaina es tremendo. Eso empezó a reventar en todo lado. Incluso los que decían... no, yo aquí no tengo ese problema: les reventó (FUNCIONARIO 3).

No avanço da configuração desse conflito intercultural, desde a lente de alguns camponeses e camponesas, as ações de restituição étnicas eram vistas como uma estratégia para removê-los de suas terras: *“se irradiaba un paradigma de que la Unidad sacaba gente, de que la Unidad sacaba campesinos [...] era una condición ya desigual porque ya éramos representantes de los indios [...] Entonces los [campesinos] nos veían con desconfianza”* (FUNCIONARIO 3). Nas diferentes regiões do país incluída a SNSM, os conflitos interculturais entre camponeses e indígenas pelo reconhecimento no marco da política de restituição de terras eram evidentes enquanto avançava esta política bandeira do governo nacional. Para um dos funcionários,

...eso ha sido muy fuerte, en unas regiones más que en otras. La peor de todas es la Orinoquia porque es donde hay más gente metida en los territorios indígenas y donde el patrón de la discriminación está más visible, en los campesinas pero es una cosa de la discriminación que ya trasciende es al desprecio mano. Entonces cuando llega que ese mal oliente indígena tiene un derecho mejor que el mío... eso es una cosa tenaz. Está el tema de Nariño, allá tiene gente de esos resguardos indígenas Awa pero a la lata y está el tema de la Sierra; ¿qué me dices del Catatumbo? [...] en muchos de esos lugares nos tocó decirles claramente que nosotros nos los íbamos a tratar como despojadores (FUNCIONARIO 3).

Frente à ausência de diretrizes e de procedimentos para resolver os conflitos de direitos pelo acesso à reparação territorial das comunidades étnico- rurais, a equipe dos temas étnicos se amparou nas maneiras de ler e compreender os territórios desde uma lente multicultural, que detrás guardava um paradoxo de hierarquizar o acesso à reparação com consequências inesperadas para os camponeses, como mostrarei mais na frente nos casos de restituição da Serra. Conta o funcionário que entrevistei que

Nosotros pensábamos: ¡vamos restituir a los étnicos y estamos cumpliendo la misión! Pero después nos fuimos dando cuenta que el territorio es complejo, que hay más gente, que hay otras relaciones... entonces nos fuimos dando cuenta de eso cuando ya teníamos o demandas puestas o caracterizaciones en curso y los campesinos ¡alborotadísimos! (FUNCIONARIO 3).

Nestas circunstâncias, foi contratada a equipe interdisciplinar étnica do escritório encarregado da intervenção no departamento de Magdalena, cuja labor *“consistía en hacer estudios preliminares de los temas indígenas y negros, hacer caracterizaciones de afectaciones territoriales y apoyar a los abogados en formulación de demandas de derechos de restitución de derechos territoriales indígenas”* (FUNCIONARIO 2). O panorama para ese momento era estabelecer os planos de trabalho da equipe: *“lo que se hacía era coger informes de Defensoría y también basados en el conocimiento de uno de nuestros compañeros que ya había trabajado con los indios de la Sierra antes, mirábamos qué casos podrían ser importantes para poder*

trabajar en ellos” (FUNCIONARIO 2). Para então, uma das profissionais que chegou nesse momento à equipe étnica da territorial Magdalena, descreve que se havia avançado num processo com os indígenas *ette naka* das partes planas do meio Magdalena, no município de San Angel.

Por sua vez, em relação aos povos indígenas da SNSM, se iniciou um processo de restituição na zona de Tugeka na parte norte da Serra com os povos kogui. *“Como el resguardo era tan grande la URT no iba a coger todo el resguardo, sino que se iban a empezar a priorizar territorios. Entonces se prioriza a los Koguis de Tugeka y después seguían los Wiwas de la cuenca del Ranchería. Esa era el acuerdo con la DAE”*. (FUNCIONARIO 2).

Com os arhuacos, foi feita uma ruta de trabalho que incluía as partes altas dos ríos de Fundación e Aracataca, *“La Lengüeta [en la cara norte de la Sierra] y un proceso que se estaba haciendo en Valledupar que era con el Resguardo arhuaco de la Sierra. La idea era esa en 2015”*. (FUNCIONARIA 2).

Como era de se esperar, com a constituição e o início das ações de restituição da equipe étnica, tornou-se manifesto na SNSM o conflito intercultural que já era evidente em outras regiões da Colômbia relacionado com as justaposições de reclamações de restituição de terras campesinos em resguardos (reservas) indígenas, em contextos de históricos conflitos interculturais entre essas comunidades.

El caso de Tugeka tuvo el mismo problema. [...] son 400 hectáreas, la mitad titulada a campesinos por el INCODER y la otra mitad al resguardo. Pero entonces es una adjudicación a 34 familias campesinas dentro del resguardo. Los campesinos dicen que le quieren vender a los indígenas, pero tenemos el problema que tenemos que esperar 11 años para poderles vender. Los koguis dicen que esto fue una violación a los derechos porque nunca les entregaron a los campesinos a las tierras entonces eso generó muchos conflictos, además la entrada de los paramilitares. Cuando empezamos en Tugeka los campesinos empiezan con la solicitud individual a nombre de las 34 familias para decir que les restituya el predio. Entonces está el tema indígena y el tema de los campesinos; nosotros con los indígenas [kogui] y los campesinos con la territorial Cesar-Guajira. (FUNCIONARIA 2).

Por fim, nesta história da criação das equipes étnicas no marco da estratégia de intervenção da URT das *megas-metas*, aparece a solicitação realizada pelo povo arhuaco em novembro de 2016 para a restituição seus direitos territoriais no marco das disposições contempladas com o Decreto Lei 4633 de dezembro de 2011, argumentando as providencias judiciais como o Auto 04 de 2009. Referem a gravidade dos impactos do deslocamento forçado sobre os direitos diferenciais indígenas. Deste modo, às solicitudes de restituição individual campesinas das bacias altas do rio Fundación, se somou em 2016 a demanda do tramite de

medidas cautelares para começar o tramite de restituição do *Resguardo Arhuaco da Serra* como cabeça de representação dessa etnia ante o Estado Colombiano, e particularmente ante a URT territorial Magdalena.

Foi relatado até aqui o começo da intervenção da política de restituição campesinos em Fundación no marco de muitas expectativas das vítimas e de um contexto de “estado de guerra”, e o surgimento das equipes étnicas num cenário da estratégia da política nacional de restituição de terras (mega-metas) no contexto da configuração do conflito e confrontação de direitos entre as comunidades indígenas e campesina pelo acesso a reparação territorial. Embora, como numa reunião de sala de casos eram analisados estes casos de justaposição na Serra por parte dos funcionários e funcionárias do escritório de restituição de terras? Que interpretações eram feitas pelos profissionais sobre as compras de terras por parte do resguardo indígena numa das reuniões de análise para a decisão da restituição? Como se constituem as maneiras sedimentadas de pensar os direitos das comunidades étnico-rurais do campo?

6.3 “TIERRITA CAMPELINA” VERSUS “DERECHOS TERRITORIALES ÉTNICOS”: PARADOXOS NAS NARRATIVAS DE FUNCIONARIOS E FUNCIONARIAS DA RESTITUIÇÃO DE TERRAS

A reunião de *sala de caso* havia sido agendada várias semanas atrás. A grande demanda laboral da cotidianidade no escritório forçou o adiamento do compromisso em várias ocasiões. Aquele dia éramos várias e vários profissionais na reunião. A mesa estava composta por nove (9) profissionais: duas (2) advogadas cuja função, entre outras, era a de construir as demandas das solicitações de restituição nessas áreas serranas a partir dos requisitos estabelecidos na Lei 1448 de 2011 para que sejam incluídas ou não no ‘Registro’ ou ‘RTDAF’; três (3) profissionais sociais entre os que eu estava, cujo encargo era orientar metodologicamente a coleta de dados nas as jornadas com as comunidades campesinas, assim como analisar as provas sociais (informes de linha de tempo, cartografias sociais, entrevistas a profundidade, entre outras) para a construção de um documento sobre o contexto social, político, económico e cultural da guerra civil, que servira de insumo nas decisões de inscrição ou não inscrição dos casos de solicitações de terras. Também participavam três (3) integrantes da equipe étnica (advogada, cientista política e antropólogo), cuja presença nesse momento era representar os povos indígenas e articular um olhar desde a perspectiva étnica. Por fim, estava a coordenadora jurídica (1) que supervisiona e apoia o trabalho dos/as advogados/as das diferentes zonas intervindas em todo o Magdalena.

Reuniões como essa, foram introduzidas pelas coordenadoras da área jurídica para ser implementadas de maneira periódica com o fim de analisar e estudar entre as equipes interdisciplinares, as características dos casos de restituição de terras campesina de um determinado território de intervenção. Neste dia em particular, o propósito era analisar a solicitações de reparação de campesinos e campesinas de algum setor da SNSM que até então não avançava por falta de equipe para fazer essa tarefa, mas também, pela situação nas condições de segurança para as vítimas solicitantes e as equipes técnicas com a intervenção do escritório Restituição de Terras do departamento de Magdalena nesses territórios¹²⁸.

Após de alguns informes gerais, as equipes apresentaram as particularidades dos casos sob sua responsabilidade, buscando determinar se, com base nas exigências da Lei 1448, si o caso tinha vocação ou não para ser inscrito no *Registro*. Logo depois de duas horas, apareceram na reunião vários relatos de solicitações de restituição de terras de famílias campesinas localizadas em áreas do limite com a reserva indígena e territórios pretendidos para serem retomados. Entre esses eventos estava o da família Arciniegas¹²⁹, que pediu a restituição de um terreno de 8 hectares. A reclamação foi feita pela senhora da casa e de acordo com o depoimento que lemos durante a reunião, chagaram nessa terra por uma compra e venda de uma terra que fez seu esposo a um colono campesino que tinha ocupado e estabelecido aí desde os anos sessenta. Dentro dos documentos entregues ao escritório da URT havia uma compra e venda do ano 1983 de uma terra que não tinha sido titulada pela autoridade de terras. Não tinha cadastro nenhum.

Na história lida por Pedro da área social para todas e todos nós que participávamos da reunião, a senhora relata que abandonou suas terras à força junto com sua família depois de que seu esposo fosse assassinado na época do conflito entre forças irregulares de paramilitares locais e extra regionais, ao começo dos anos dos mil, momento em que também tentaram recrutar a dois de seus filhos. Dias depois, a senhora Arciniega, suas duas filhas e os três homens saíram deslocados forçadamente, se assentando nos bairros periféricos da cidade de Valledupar no departamento do Cesar. Dois anos depois, vendeu sua terra ao resguardo indígena por um preço que para ela não era justo mas que “*era la única opción, tenía mucho miedo*” (CADERNO DE CAMPO).

Como a história da família Arciniegas houve vários casos que foram lidos. Num momento da reunião, um dos profissionais sociais toma a palavra e sugere que em seu critério,

¹²⁸ Não se especifica a zona de trabalho para não expor aos solicitantes dessas áreas.

¹²⁹ Os nomes das pessoas tem sido mudados para conservar o anonimato.

um grupo de reclamações de restituição campesinas, dentro dessas a da família Arciniegas, não deviam ser iniciadas formalmente dentro do trâmite administrativo de restituição, o que indicaria que esses casos não entrariam naqueles que são estudados ou analisados à profundidade pelos/as profissionais da URT. Ou seja, o caso não seria tramitado.

Nessas, a coordenadora jurídica o interrompe e questiona sobre os argumentos para não iniciar o processo de restituição daquelas terras. A resposta do colega da área social se fundamentou em três argumentos: o primeiro, se baseia numa diretriz que surgiu nesse momento que indica que toda compra de terra que tivesse sido feita com consentimento dos solicitantes e de boa fé, se podia considerar um não início de estudo do caso; isto é, que essa solicitação dessa terra não chegaria a ser restituída. O segundo argumento falava da ausência de interpretação desses casos como parte de uma concentração de terras pois o comprador das terras era o Resguardo Arhuaco. E o terceiro, que as terras estão em áreas de resguardo indígena, zonas de ampliação ou áreas de proteção ambiental. Em certos momentos, as falas do profissional social eram consentidos com a cabeça pela profissional da equipe étnica.

Entretanto, outro dos fundamentos utilizados na reunião apelou ao não início da tramitação administrativa dos casos de reclamação de terras o da família campesina Arciniegas que estavam dentro da zona de reserva e áreas de ampliação do mesmo, pois para a Corte Constitucional de Colômbia, o deslocamento forçado está causando um *“impacto diferencial sobre las comunidades indígenas. No es lo mismo el desplazamiento de una familia campesina o de cualquier persona, al desplazamiento de toda una comunidad o de un pueblo indígena de una etnia, el tema cultural es más relevante.* (CADERNO DE CAMPO).

Minha indignação e desconforto frente aos tipos de respostas que escutava durante a reunião e que questionavam o início do processo de reparação territorial de um grupo de famílias campesinas que tinham sido escutadas nos exercícios comunitários e em cujas memórias subjetivas ainda se mantêm atualizada a interiorização do terror e o medo em seus corpos, eram os primeiros traços dos paradoxos que esconde o processo de restituição em vários desses territórios constituídos interculturalmente em todo o país. No apontes da minha livreta de campo desse anos me questionava sobre como é desconsiderado o contexto de violência como uma das razões fundamentais pelas quais os campesinos e campesinas terminaram vendendo suas terras? Essa pergunta, anos depois, terminou trazendo um questionamento mais elaborado durante o processo de escrita do mestrado: como as ideias sedimentadas sobre o que ser indígenas ou sobre o que ser campesino na Serra incide nas decisões finais de restituição de terras dos funcionários e funcionárias do escritório de Magdalena?

Frente aos pontos de vista do profissional social e da equipe étnica, outro colega e eu refletíamos que, de acordo com a revisão dos relatos e informação de pesquisas sobre o conflito armado e relatórios das ONGs, várias destas vendas foram num momento no qual os enfrentamentos armados e o medo que produziu nas vítimas estavam latentes, o que incentivou que os campesinos tomaram a decisão de vender suas terras. Com a experiência que conheceu em outras sub-regiões do Caribe, meu colega argumentava: ditas compra e vendas de indígenas a campesinos podem ser analisadas como um tipo de concentração de terras num contexto volátil de violência.

Para a gente, independente de que as compras tinham sido feitas pelo resguardo indígena, o contexto de violência, as razões da venda e o valor das negociações deviam ser estudadas e analisadas, pois claramente estava-se afetando o direito das comunidades campesinas que tinham explorado a terra por mais de 30, 40 ou 70 anos. Ante esta postura, um membro da equipe étnica respondeu; *“sí, pero la tierra es de los indígenas. Ellos llegaron primero, están recuperando lo que se les quitó. Además les pagaron lo justo, lo que el avalúo decía”*. (CADERNO DE CAMPO).

A coordenadora jurídica escutava atentamente o debate. Mais tarde, o pessoal da equipe étnica toma a palavra e um de seus membros argumenta que aquelas compras são parte do interesse de ampliação e consolidação territorial indígena, transações feitas com dinheiro de recursos de cooperação internacional. Ficou no ar um silêncio que incomodava a todos/as nós que participamos da reunião. Nesse momento me perguntei: que implicações podem ter algumas posturas como as que acabamos de escutar para a reparação territorial de uma família como a Arciniegas? (CADERNO DE CAMPO).

A conclusão da reunião mais que certezas sobre quais caminhos selecionar para esses casos de justaposição de reclamações de direitos campesinos em resguardos indígenas e áreas de pretensão de ampliação deste, deixou muitas dúvidas sobre como atuar nessas zonas e os efeitos que podem recair sobre as vidas de milhões de habitantes da Serra. A reunião termina com uma asseveração de uma das pessoas da equipe étnica que revela os paradoxos e as violências que podem chegar a esconder a política de restituição fundamentada no bloco dos direitos diferenciais étnicos, como mostrarei a continuação, que terminaram hierarquizando as populações do campo com consequências adversas para as populações campesinas ao não ser consideradas como portadoras de “verdadeiros” direitos territoriais.

Una cosa es la restitución de tierras, que es solamente "la tierrita campesina" y otra cosa son la restitución de derechos territoriales étnicos, que abarca

todos los derechos que están ligados al territorio: que es el derecho a la salud, a la cultura, a la autonomía del gobierno propio, al goce y el uso del territorio y a las prácticas culturales. Eso en el marco del decreto ley 4633 y 4635 que es el de afros, negros y palenqueros (CADERNO DE CAMPO).

Minha desilusão e a de alguns colegas era evidente. A coordenadora agradeceu a participação de todos e todas e programa uma nova reunião para analisar os casos afirmando que é preciso aprofundar nesse análises, enquanto termina sua frase dirigindo-se ao advogado dos caos campesinos para lhe perguntar: *¿Para cuándo puede tener los actos administrativos que usted se comprometió en este mes?* (CADERNO DE CAMPO).

6.4 BUROCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS E DIRETRIZES PARA TRAMITAR CASOS DE SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO CAMPESINA EM ÁREAS DO RESGUARDO ARHUACO E ZONAS DE AMPLIAÇÃO TERRITORIAL INDÍGENA

As mesas de trabalho dos funcionários e funcionárias nas salas do escritório da URT em Santa Marta permanecem lotadas de pilhas de expedientes, arquivos e documentos ao redor do computador. As gavetas, outro pouco de arquivos e pastas se acumulam, e no chão, caixas da altura da cadeira nas que circulam os expedientes dos casos de restituição que se arquivam na sala do primeiro andar da que falei no começo deste capítulo. É um caos.

Sempre havia pessoal de arquivo passando pelos postos de trabalho perguntando pelos tempos de empréstimo dos expedientes que utilizamos para documentar os casos. Era um mercado de expedientes e documentos que iam e vinham cotidianamente. Na maioria dos casos, o expediente e os documentos aí arquivados, são o único meio que tem o pessoal jurídico para relacionar-se com as vítimas de desterro dessas áreas.

No, no conocí procesos campesinos... creo que no. Hasta donde me acuerdo no. Mi trato con esa zona de Fundación fueron carpetas sobretodo y eso también es un indicador de todo lo de la burocratización. La mayoría de la relación que uno tiene con estos casos trágicos de historias humanas son carpetas de cartón y fotocopias. Y el poco trato humano que tuve fue o vía teléfono y sobre todo para averiguar datos de la familia, para pedir documentos de identificación, es decir, ni siquiera para tener un trato humano, no sino documento de identificación para llenar un formato de excel del procedimiento tal, de la guía x, del procedimiento administrativo del sistema. Y muy pocos casos que pude hacerles entrevistas. Yo creería que ¿inclusive de haber tenido... yo creo que tuve como 60 casos de Fundación hasta 70, yo creo de todos esto casos que pude conocer pude entrevistar por ahí unas 7 personas o 10 pero no creo que más. Eso es grave, no? P. Fue a territorio? R. No, nunca fui a Fundación. (FUNCIONARIA 6).

A excessiva burocratização do trâmite administrativo de restituição no contexto das mega-metas é o ambiente de altas demandas laborais dado a quantidade de solicitações, se

reflete no acúmulo de pastas e papéis em cada espaço da mesa de trabalho de cada servidor público. O reduzido contato com as vítimas do conflito armado se diluía nas minuciosas lógicas das práticas de operação dos trâmites burocráticos da lei de terras que operava primordialmente desde o escritório de Santa Marta. Como aclarou uma das companheiras, ao comparar seu passo pela URT com outros trabalhos:

Yo con la Defensoría estuve en contacto directo siempre con las comunidades para cualquier trabajo, socialización yo tenía siempre que concertarlo todo con las comunidades, con las autoridades... en la Unidad, como interventora, ya el trabajo fue de oficina... lo que había que hacer era como núcleos familiares, el tema de meterlos a una matriz, hacer unas prelações y ya, eso fue básicamente lo que yo hice, era todo más operativo (FUNCIONARIA 5).

Nas paredes das salas do escritório, estão colados alguns mapas com informações sobre as zonas intervindas (ou zonas *microfocalizadas*) pelas as equipes em todo o Magdalena. Nos mapas da Serra, por exemplo, além da informação geográfica sobre os rios, rotas nacionais de transporte, ou o revelo, se mostram os múltiplos contornos estatais que sobre a Serra se justapõem: os limites das áreas intervindas pela Unidade de Restituição de Terras; as solicitações de restituição de terras campesinos especializadas pela área cadastral marcadas com um número de identificação; a lei florestal (Lei 2 de 1959); os resguardos indígenas e as áreas de ampliação; a Linha Negra e áreas sagradas; as áreas com solicitudes de exploração mineira, entre outras.

Coladas nas paredes também se vem cartografias sociais feitas durante os exercícios comunitários realizados pela área social nas jornadas de trabalho com a comunidade solicitante. Os mapas, pode-se dizer, são comumente no escritório de terras uma das principais fontes de interpretação e leitura sobre os territórios e as territorialidades Serranas, que guardam detrás, as percepções, imaginários, ou intenções dos servidores públicos que os trabalham.

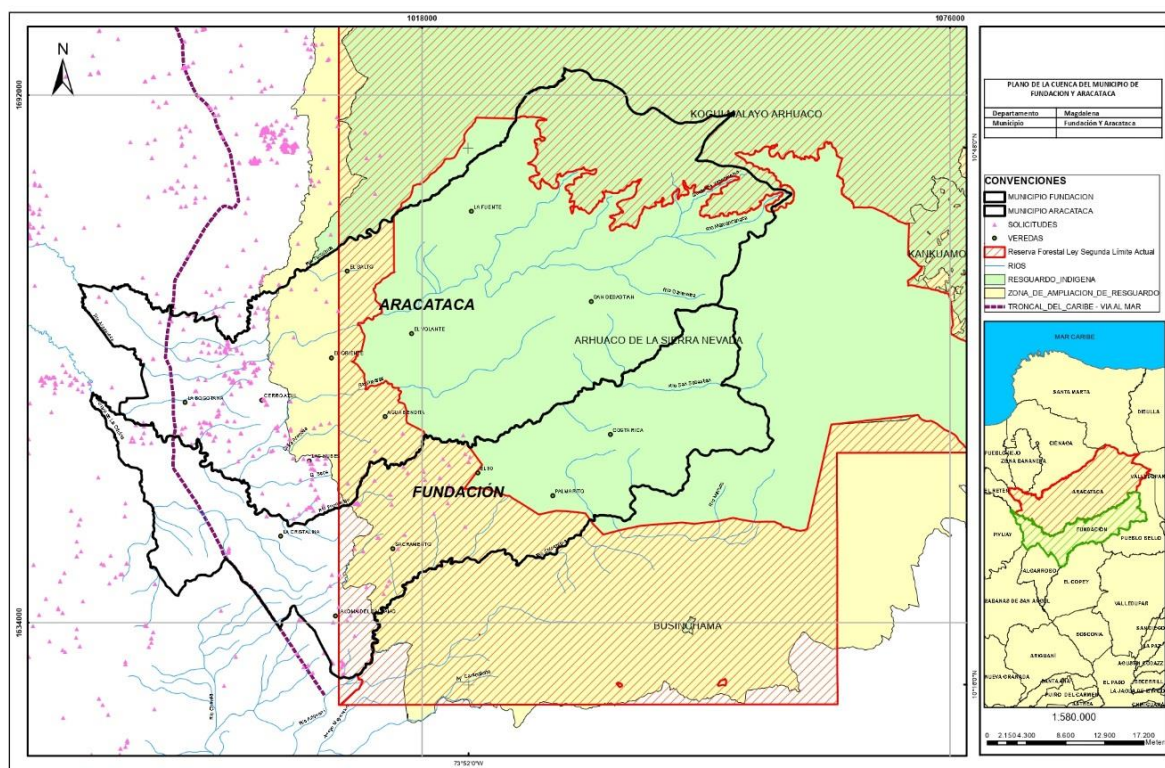
De hecho uno tiene una idea de cómo es Fundación y Aracataca, y sus zonas y las veredas por los mapas. Pero en esos dos años que llevo en la Unidad nunca he ido que sería bueno, sería interesante de haber ido en este tiempo y saber de qué se trata más en carne propia (FUNCIONARIO 4).

Os tempos do tramite burocrático da etapa administrativa e a complexidade para resolver os casos normalmente não coincidiam. Era muito pouco o tempo para responde a alta demanda de solicitações de restituição. Nesse contexto, a reunião de sala de análises de casos em setores da Serra em outras áreas das sub regiões de Fundación e Aracataca das que falei antes, exemplifica as divisões de critérios que partem das noções sedimentadas do que é ser campesino e do que é ser indígena na Serra como opostos que se fundamentam no Estado

multicultural. Mas, como num ambiente de alta burocratização como o trâmite de restituição foram estabelecidos os argumentos e fundamentos utilizados pelo pessoal das equipes para interpretar as compras de terras do resguardo arhuaco a indígenas deslocados e desterradas no contexto de violência?

A realidade do conflito intercultural entre campesinos e indígenas pelo acesso à reparação territorial através da Lei de Terras, é sintetizada no seguinte mapa dos municípios de Aracataca e Fundación. Como pode ser visto, na parte das veredas montanhosas de Sacramento, Palmarito, El Cincuenta (Fundación), e em outras veredas de Aracataca e o município de Ciénaga, cujo limite não aparece no mapa mas que se localiza ao norte de Aracataca, se justapõem as áreas do Resguardo Arhuaco de la Sierra e o resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco; a Zona de Ampliación do Resguardo; a Reserva Florestal de Lei 2da; e as solicitações de restituição de terras campesinas (pontos roxos).

Mapa 15 – Fronteiras e contornos das figuras territoriais legais fundamento para negação de direitos de reparação territorial campesinos nas bacias dos rios Fundación e Aracataca na SNSM



Fonte: Elaboração e construção durante a entrevista com funcionário da URT territorial Magdalena.

A terceira fase (2016) da intervenção do escritório de restituição de terras do Magdalena em Fundación e alguns setores serranos de Aracataca, é descrita por um dos

funcionários da área social que entrevistei e que atuou nas fases iniciais do trâmite administrativo “*donde uno hacía el primer análisis para ver si los casos de campesinos tenían vocación de inicio o de no inicio*” (FUNCIONARIO 6).

Yo tenía unos 50 o 60 casos de restitución de tierras campesinas en Fundación. Recuerdo que éramos dos sociales cada uno con la mitad de los casos y ese número de casos que eran 100, los tenía un abogado. Luego los pocos casos que se iniciaron los pude trabajar con una abogada, como dos años después. En Aracataca eran como 50 casos y allá eran varios abogados para las partes bajas, medias y altas da Serra (FUNCIONÁRIO 6).

Desde um princípio, a designação das reclamações de terras nesses setores da Serra eram vistas como problemáticas pelos profissionais, dado as excessivas marcas e contornos que sobre a Serra existem que dificultavam os avanços e as respostas às vítimas no emaranhado da burocratização estatal.

Ahí eran los conflictos que tenían esos predios, que yo creía que no se había avanzado mucho porque casi todo era reserva forestal y eso era todo un trámite que cambió; incluso primero era una forma y luego de otra, todo el trámite para la sustracción de los predios. Me acuerdo que, en un principio tocaba solicitar la sustracción del predio como para iniciar, o para inscribir. Entonces se le solicitaba a un resto de casos y los expedientes quedaban quietos esperando que el Ministerio de Ambiente resolviera la sustracción, pero después usted veía los casos y no tenían vocación de inscripción, o eso decían ellos. Cambió el procedimiento a que no se pidiera la sustracción de los predios cuando ya iban a ser inscritos. Eso retrasó el estudio y el avance de muchos de los casos (FUNCIONARIO 6).

No contexto próprio da dinâmica e a burocracia estatal, foram construídas as diretrizes desde nível central como marco interpretativo para trabalhar os casos de campesinos que venderam suas terras ao Resguardo Arhuaco em Fundación e Aracataca. A tarefa ficou a cargo da Direção de Assuntos Étnicos (DAE) que desenhou, depois de cinco anos de funcionamento da lei, as instruções para abordar os casos de solicitações de restituição de terras de campesinos em zonas de resguardo e ampliação, partindo da lente de um sistema de direitos étnicos diferenciais do Estado multicultural, respaldadas em diferentes instâncias jurídicas dos órgãos de escala nacional, regional latino americanos e globais.

Partindo das experiências dos processos de restituição de outras regiões colombianas onde se enfrentaram abertamente os direitos territoriais das comunidades étnico-rurais, a equipe da DAE se perguntava: como considerar a esse campesino solicitante como proprietário, posseiro ou explorador de terras da união quando a terra está no território coletivo? Que medida de restituição deve ser implementada a favor do sujeito campesino de especial proteção, tendo em conta que as medidas poderiam afetar os direitos das comunidades étnicas, as quais também têm sido vítimas do conflito armado? Como proceder tanto na etapa administrativa como

judicial nesses casos? Quais direitos devem prevalecer, os coletivos ou os individuais, quando num e outro espectro se trata de vítimas do conflito armado interno?

Algumas das respostas a ditos questionamentos foram tema durante uma capacitação feita pela equipe étnica local para funcionários e funcionárias da URT Magdalena. Naquele dia, os primeiros slides mostravam que desde esta compreensão, mesmo que se falasse brevemente sobre campesinos como sujeitos de direitos, a maior visibilidade e ênfase está nos aspectos principais da normatividade legal e constitucional colombiana sobre a noção do território para as comunidades étnicas, a ideia da ocupação ancestral simbólica indígena, a normatividade relevante sobre os territórios coletivos, sua posse ancestral e tradicional, os resguardos coloniais e republicanos, as reservas indígenas, os territórios das comunidades negras, e o direito a consulta prévia das comunidades étnicas frente as medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afeta-as.

Desde o começo da capacitação eram expressos os traços e contornos do multiculturalismo como construção legal para entender a posse e o uso da terra na Serra dos milhões de pessoas que a habitam. A explicação da equipe étnica encarregada de fazer a formação baseasse nos pronunciamentos da Corte Constitucional de Colômbia (CCC), quem se ampara na Constituição de 1991, para definir a noção de território para as comunidades étnicas. A sentença T-698 de 2011 é referenciada para tratar o reconto jurisprudencial dos principais pronunciamentos arredor do significado que tem o conceito de território para as comunidades indígenas fundamentado na ancestralidade, o reconhecimento do território como parte essencial da cosmovisão dos povos indígenas, e a importância de sua sobrevivência destas comunidades para a Nação colombiana.

El reconocimiento de las dificultades a las que conduciría asimilar la noción de territorio de las comunidades étnicas a la visión tradicional de propiedad regulada en el ordenamiento civil llevaron a la Corte a adoptar una visión más amplia de la propiedad colectiva de estas comunidades que, siguiendo los parámetros fijados por la jurisprudencia y la doctrina, le da más importancia a la ancestralidad que a los títulos de dominio (SENTENCIA T-698 de 2011).

*En efecto, su reconocimiento no se circunscribe únicamente al título de propiedad colectiva [...] **sino también al concepto de posesión ancestral como fundamento de sus territorio, y al uso de los recursos no renovables del mismo**; elementos que no dependen en estricto sentido de reconocimiento estatal (SLIDES 2017).*

Ficou claro para mim tempo depois como o argumento principal das diretrizes apresentadas pela equipe étnica que orientavam como trabalhar a justaposição de solicitações de restituição onde convivem indígenas e campesinos, estava encaixado no multiculturalismo

operativo Colombiano. Os pronunciamentos do alto tribunal de salvaguarda de direitos indígenas garantidos como expressão da diversidade étnica e cultural da Nação consagrada na constituição de 1991, são citados como referentes jurídicos das orientações da intervenção do escritório da URT na Serra, em atenção da “*obligación internacional que adquirió el Estado con la ratificación del Convenio 169 de la OIT*” (FUNCIONARIO 3).

Desde esse ângulo, as premissas multiculturais indicam que o Estado Colombiano tem a responsabilidade de proteger os direitos dos povos indígenas, fazendo ênfase na proteção da figura da Linha Negra (1973) e a importância que ela tem para os quatro povos indígenas da Serra. Nesse mesmo sentido, se cita também a Sentencia T-849 de 2014 na que a corte “*concluye el deber de protección ambiental prima sobre esta zona de la Línea Negra*” (SLIDES 2017).

La Corte ha enfatizado que la protección reforzada de las tierras que conforman la “Línea Negra” debe versar sobre la totalidad del espacio georreferenciado sin que sea posible que ciertas áreas del interior de esta extensión territorial se sustraiga de este amparo [...] en este sentido, el reconocimiento de la existencia de un territorio ancestral denominado “Línea Negra” por parte del Estado Colombiano implica que su protección debe integrar los principios de libertad, igualdad y solidaridad. (SENTENCIA T-634 de 1999).

...dicha perspectiva en el análisis propuesto debe ser seriamente considerada, en tanto su desconocimiento podría atentar contra los principios de participación e pluralismo, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, el principio de respeto de la diversidad étnica establecido en el artículo 7º constitucional y el principio de igualdad entre culturas (Const., 1991, art 70), en virtud de los cuales no resulta válido desconocer las cosmovisión de dichos sujetos de especial protección (SLIDES UAEGRTD, 2017).

Para a equipe étnica os conflitos de ocupação em territórios interculturais se compreendiam a partir do que a corte identificou como “*el riesgo de supervivencia de los pueblos indígenas en Colômbia*” (Auto 004 de 2009). Dita asseveração torna-se fundamental, como mostrarei, na resolução do processo de restituição nas áreas serranas em detrimento dos campesinos. A maneira como é percebido o problema da sobrevivência indígena na SNSM vê os campesinos como invasores e como parte do grupo de atores com interesses econômicos sobre as terras e recursos. A sobrevivência indígena é frente “*i) la ocupación de colonos que invaden su territorio y ii) el despojo cometido por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y los recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas*” (CADERNO DE CAMPO).

No mesmo sentido, as diretrizes dadas o dia da formação das equipes sobre esses temas aludem claramente também à preservação dos territórios coletivos de pretensões de titulação ou áreas de ampliação de resguardos indígenas, da compra e restituição de terras de “*personas*

ajenas a las comunidades indígenas baseados nos artículos 141 e 107 dos decretos Lei 4633 e 4635 de 2011” (SLIDES 2017).

Além de outros elementos, se explica que não podem ser sujeitos de titulação, compra e venda ou restituição em benefício “*de personas ajenas a la comunidades indígenas*”, as terras adquiridas com recursos próprios das comunidades indígenas, sendo o caso do mercado de terras campesinas em Fundación e Aracataca. Uma das citações destacadas nos slides está escrito “*el derecho de restitución de las comunidades étnicas, no se afecta por la posición actual de terceros*”. Segundo o artículo 141 citado do decreto 4633,

*...no podrán ser objeto de **titulación, adjudicación, compra o restitución** en beneficio de personas ajenas a las comunidades. [...] los resguardos indígenas constituidos o ampliados; **Las tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos de titulación o ampliación de resguardos indígenas** [...] **Las tierras adquiridas a cualquier título con recursos propios por entidades públicas, privadas o con recursos de cooperación internacional en causas que motivaron su reubicación** (ARTÍCULO 141, DECRETO 4633 de 2011).*

los mismos artículos señalan que el derecho de restitución de las comunidades étnicas, no se afecta por la posición actual de terceros o por la pérdida de los territorios por causa y con ocasión de los señalado en el artículo 3° del presente decreto, ni por la exploración productiva por actuales tenedores [...] los procesos de restitución de tierras que se adelanten en el marco de la Ley 1448 de 2011, el contenido del fallo no podrá recaer en ningún caso sobre los territorios de las comunidades indígenas, sin perjuicio del derecho a la compensación que pudiera corresponder a los terceros de buena fe. (ARTÍCULO 141, DECRETO 4633 de 2011).

As alternativas para resolver os conflitos interculturais das solicitações de terras compradas pelo resguardo arhuaco para a DAE, se resume em quatro níveis de análises que explicarei a seguir: 1) *cuando el territorio está formalizado*; 2) *territorios ancestrales sin formalizar*; o 3) *en trámite de formalización antes la autoridad de tierras*; e 4) *predios adquiridos con recursos propios o de entidades públicas o privadas o de cooperación internacional, o adquiridos con recursos del Fondo Nacional Agrario en beneficio de las comunidades étnicas* (SLIDES, 2017).

Respeito ao análises das “*solicitudes individuales [campesinas] de restitución de personas ajenas a las comunidades étnicas, que versan sobre predios [tierras] ubicados en territorios [indígenas] formalizados*” (SLIDES 2017), tipo resguardos, reservas indígenas convertidas em resguardos ou terras tituladas das comunidade negras; uma alternativa era analisar se a terra campesina solicitada em restituição teve um título de propriedade formal entregue pela autoridade de terras, anterior a constituição do resguardo indígena ou a um

território coletivo negro. Algo pouco improvável na Serra como já tenho explicado. Também se afirmava que para que operasse o início ou inscrição *“en el registro”* de uma reclamação de restituição campesina, devia se seguir a regulamentação da Lei 70 de 1993 (para os povos negros) e a Lei 160 de 1994 (para o caso dos povos indígenas), *“en las que determinan que estos territorios se consideran inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme a lo señalado no artículo 63 de la Constitución”* (SLIDES 2017).

Para a equipe étnica, ainda que expõem razões para iniciar um processo de restituição de terras de campesinos e campesinas no registro, a efeitos de permitir o acesso das vítimas de despojo e abandono a administração de justiça; é um juiz da república que deve fazer a análise correspondente, *“teniendo en cuenta y poniéndole de presente que en estos casos la función del antiguo Incoder en el proceso de constitución del resguardo era realizar el saneamiento de título colectivo”* (SLIDES 2017). A base do argumento para ser exposto ante o juiz se sustenta no conflito do “direito adquirido” dos indígenas das áreas de resguardo e a “simples expectativa” das famílias de ocupantes campesinos a quem o Estado não formalizou as terras mas que as exploram buscando sua formalização.

En cuanto a los ocupantes ajenos a las comunidades étnicas, que pretenden la adjudicación de un predio que se encuentra en un territorio formalizado, se estima pertinente destacar que los explotadores de tierras baldías no cuentan con un derecho adquirido sino con una expectativa para que el Estado les adjudique las tierras que vienen explotando. Pero esta expectativa es plenamente amparada por el ordenamiento jurídico [...] tanto así que la Ley 1448 de 2011 reconoce el derecho a la restitución en cabeza de quienes se encontraban ocupando un baldío y fueron obligados a abandonarlo, perdiendo de esta manera la posibilidad de su adjudicación. **Sin embargo, pese a la protección reforzada que se ha concedido a la expectativa de adjudicación, respecto de la misma no puede predicarse el nivel de garantía de los derechos adquiridos, precisamente porque no se trata de una situación jurídica consolidada, de manera tal que no resulta procedente obvia las normas que velan por la protección de los territorios colectivos, concretamente las adjudicaciones en territorios colectivos, en favor de personas que no pertenecen a las comunidades étnicas establecidos en los mismos** (SLIDES 2017).

Sobre esse primeiro eixo de análise, a alternativa é que quando as solicitações são de campesinos ou campesinas que não têm um título, a equipe sugere que esses casos não podem ser inscritos para restituição. Como se lê na diretriz interna, as solicitações campesinas de restituição localizadas em territórios formalizados ou titulados aos indígenas,

...en principio existen fuertes elementos de juicio para considerar que dichos territorios han constituido el hábitat de comunidades étnicas y/o los sitios en que las mismas han estado establecidas, tanto así que fueron objeto de

reconocimiento oficial, de manera tal que para que las personas que no pertenecen a ellas, se trata de territorios inadjudicables, y por ende, conforme a las consideraciones expuesta, no había lugar a la inscripción en el RTDAF (SLIDES 2017).

Outra das recomendações que apresentou a equipe étnica era tramitar as solicitações campesinas no marco do processo étnico. Nesse sentido, *“se sugiere, si es factible, propender porque las reclamaciones individuales y colectivas ordinarias arriba mencionadas se tramiten en el marco del proceso de restitución étnica.* (SLIDES 2017). Nessa ordem, se recomenda a negação da inscrição de uma terra campesina de um proprietário (quer dizer titulado) nos seguintes termos:

Partiendo de las leyes 160 de 1994 y 70 de 1993, dichos territorios se consideran tierras con destino exclusivo a la constitución de resguardos o comunales, de acuerdo a lo señalado en el articulado 63. En esta hipótesis desde una perspectiva de garantía de los derechos colectivos, existen mayores reparos para predicar la procedibilidad de la inscripción de solicitudes individuales en el RTDAF, en tanto la constitución de la propiedad privada después de formalizados los territorios contraria al carácter inalienable, inajenable imprescriptibles e inembargable de estos (Cons., 1991, art. 63).

Apesar de reconhecer as titulações de terras a campesinas que o Estado chegou a fazer numa região com uma alta informalidade da tenência, a diretriz coloca um acento em anuir aos indígenas como legítimos donos desses territórios, deixando em certa medida aos sujeitos do campo não marcados com esses traços étnicos, com menos direito ao acesso à reparação territorial. Os poucos direitos de domínio que puderam ter ganhado famílias campesinas em territórios indígenas formalizados, são negados através de uma compensação pois *“constituirá una carga que no deben soportar las comunidade étnicas, que bajo las circunstancias expuestas deban aceptar un error estatal totalmente contrario a sus derechos colectivos, que tienen como consecuencia la pérdida de una parte de su territorio”* (SLIDES 2017). De aparecer esses casos, a equipe de funcionários e funcionárias teriam que titular para formalizar o resguardo:

- a. *Inscribir al solicitante individual en el RTDAF para garantizar sus derechos fundamentales, pero no con el fin de obtener la restitución material del predio, sino el saneamiento del título colectivo conforme las disposiciones del Decreto 1071 de 2015, advirtiéndole que el acto que lo constituyó como propietario es irregular, en tanto afectó el territorio colectivo [...] se podrá solicitar la medida adicional del saneamiento por parte de la ANT, garantiza los derechos de la comunidad étnica como de la víctima individualmente considerada, o la compensación a cargo de la unidad.*
- b. *Informar, en la demanda claramente al Juez advirtiéndole que se inscribe un “predio” del que se duda de la validez jurídica del acto que otorga el derechos particular y*

c. *Advertir igualmente que independiente de la vía ordinaria que pueda elegir la comunidad étnica para la recuperación de esta parte del territorio, al restituir al particular este predio, en la práctica se están positividad en el derecho al particular y creando expectativas sobre el mismo, lo cual rompe lo que se predica en la constitución y la ley sobre los territorios colectivos ya formalizados (SLIDES 2017).*

Frente ao segundo eixo de análises sobre as solicitações de restituição para as vítimas campesinas em terras que se encontram “*en territorios no formalizados*” (SLIDES 2017), chamados como áreas de ampliação das zonas de resguardo indígena, a equipe parte da ideia constitucional de que esses são de entrada territórios indígenas e não analisa o processo de interações no campo com aqueles não indígenas.

Se reitera que a pesar de que dichos territorios no cuenten con reconocimiento oficial, ello no constituye un impedimento para que se predique respecto de los mismos los estándares constitucionales y legales de protección, en tanto pueden estar estrechamente relacionados con las condiciones de existencia, el ámbito cultural y el contexto en el que desarrolla su vida social una comunidad étnica; sostener lo contrario implicaría condicionar la garantía de los derechos colectivos a una manifestación de la voluntad de la administración pública. (SLIDES 2017).

Nesses casos a DAE sugere inscrever *en el registro* as solicitações campesinas tituladas mas colocando do presente para o juiz a situação em conflito nesses territórios “não formalizados” para as comunidades étnicas. Para os casos de terras campesinas não tituladas, as indicações apontam a negar a inscrição para a reparação territorial campesinos mediada por uma localização frente à força constitucional que protege às comunidades étnicas. Essas indicações se resume nas seguintes citas dos slides da apresentação.

1. *Propietarios¹³⁰ y poseedores¹³¹, situación de derechos adquiridos que el Estado debe respetar, por tal razón se estima que debe inscribirse los predios reclamados, a efectos de permitir el acceso de las víctimas de despojo y/o abandono a la administración de justicia, y por consiguiente que un juez de la república realice el análisis correspondiente entre el derecho a la restitución y las normas que protejan el territorio, en donde se armonicen sus derechos. Incluso*

¹³⁰ No marco da lei 1448 de 2011 os titulares sao *Son aquellas personas que tienen una escritura pública, una resolución del Incoder o del Incora o una sentencia de un juez que luego fue registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Es decir para que una persona sea propietaria debe cumplir dos requisitos: tener un título y registrarlo.* (Cartilha Preguntas frecuentes sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas, 2012).

¹³¹ No marco da lei 1448 de 2011 os poseedores sao “*las personas que se creen y actúan como dueñas de un predio, y por tanto lo usan, explotan o incluso arriendan a otros, pero no tienen el título de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos*” (Cartilha Preguntas frecuentes sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas, 2012).

solicitar la presencia de la Agencia Nacional de tierra para poder garantizar los derechos de la comunidades.

2. *En cuanto a las solicitudes de inscripción en el RTDAF elevadas por ocupantes¹³² ajenos a las comunidades étnicas, las peticiones serían improcedentes, en atención a que lo pretendió hacer parte de un territorio que para los mismos ha sido inadjudicable, desde que se ejerció la ocupación. En ese orden de ideas, habría que remitir los casos a las autoridades competente para que adopten frente a la población vulnerable las medidas de atención a que haya lugar, verbigracias, la reubicación (SLIDES 2017).*

Por fim, em relação ao terceiro e quarto nível de análises “*se aplicarán las mismas directrices de actuación en las fases administrativa y judicial frente a los territorios titulados colectivamente (primer nivel de análisis), independientemente que se haya surtido o no el proceso de inscripción del título ante la Oficina de Registro de instrumentos Públicos*” (SLIDES 2017). Isto significa que para a DAE em sua diretriz, as solicitações de restituição de uma terra campesina adquirida com diferentes recursos pelos resguardos indígenas, deve ser estudada desde a lente dos direitos diferenciais étnicos que amparam a Corte Constitucional e a Constituição de 1991.

Como mostrarei, no fundo, estes fundamentos, confrontam paradoxalmente os direitos das comunidades étnico-rurais, hierarquizando as populações do campo com consequências inesperadas na reparação dos direitos territoriais das populações campesinas deslocadas forçadamente no contexto de violência que venderam para o resguardo arhuaco.

Respecto a la existencia comprobada de un territorio colectivo, formalizado o no, en el cual se predicen las garantías normativas y jurisprudencialmente previstas, verbigracia la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, con la misma importancia deben considerarse aquellas disposiciones de orden nacional y supranacional (por el Convenio 169 de la OIT), que en el contexto de protección de derechos colectivos, reconocen la obligación de respetar los derechos adquiridos con arreglo a la ley, y que las medidas que se adoptan para proteger aquellos derechos, deben armonizarse bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta

¹³² No marco da lei 1448 de 2011 os poseedores são *Son las personas que viven o explotan directamente un terreno baldío. Los terrenos baldíos son aquellos que pertenecen a la Nación, razón por la cual el Estado a través de Incoder puede adjudicarlos. Para que una persona tenga derecho a que se le adjudique un terreno baldío debe haber trabajado la tierra por lo menos durante cinco años.* (Cartilha Preguntas frecuentes sobre la Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas, 2012).

las condiciones propias de cada zona, sin recaer por supuesto en el menoscabo de los derechos colectivos (SLIDES 2016).

El hecho de que en virtud de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 del mismo años, no sea procedente la inscripción en el RTDAF de algunos sujetos de especial protección, verbigracia, ocupantes en situación de vulnerabilidad, en manera alguna significa que sus derechos no puedan ser protegidos mediante otras vías y por otras entidades, por ejemplo, aquellas que permitieron que habitan en zonas de territorios colectivos y/o que no han implementado estrategias de reubicación, a quienes deberá informarse de los casos en concreto para que proceda de conformidad con sus competencias (SLIDES 2016).

6.5 NEGAÇÕES DE DIREITOS DE REPARAÇÃO TERRITORIAL DE CAMPESINOS E CAMPESINAS DA SERRA: FRAGMENTAÇÕES TERRITORIAIS NO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO SOBRE TERRITÓRIOS INTERCULTURAIS.

A terceira fase da intervenção do escritório da URT em territórios serranos habitados por indígenas e campesinos em Fundación, evidenciou os dilemas da política de restituição durante esses anos nessas zonas da SNSM. O centro do debate nesta dissertação está em analisar as geografias do despojo na Serra e o Caribe Colombiano, não apenas pelas formas de concentração da propriedade resultado da violência paramilitar; mas também desde as negociações cotidianas do acesso à terra e seus recursos, leitura que possibilita a análise e a observação de outras formas do despojo comumente silenciados que devem ser entendidos desde sua constantes produção tanto simbólica como material (OJEDA, 2016) que se reproduzem no marco do processo de restituição de terras.

No capítulo 6 desta dissertação, mostrei que muitos dos desejos e projeções sobre a Serra estão enraizados em representações contrapostas do que se imagina é um lugar indígena e um campesino. Nessa geografia imaginada, “*el lugar indígena se equipara con una conjunción social y natural que constituye un paisaje de conservación ambiental, mientras que uno campesino prima el desarrollo agrícola*”. (BOCAREJO, 2015, p. 159).

Desde essa mirada, as terras abandonadas pelas famílias campesinas e as que foram compradas pelo resguardo arhuaco em Fundación e Aracataca, foram interpretadas a partir dos fundamentos de um sistema de direitos diferenciais entre comunidades étnico-rurais, que inspirou as instruções e as diretrizes para a atuação das equipes da URT nesses territórios, e que paradoxalmente envolve uma hierarquização oculta entre as vítimas, próprio desse contexto da Lei de Vítimas como fala a antropóloga Roxani Krystalli no *Seminario ‘Pasado, presente y*

futuro de la Ley de Víctimas’, organizado pelo centro de estudios jurídicos y sociales Colombiano Dejusticia¹³³.

Nas geografias reconfiguradas pelo deslocamento forçado e do despojo em um contexto de “estado de guerra” que se atualiza constantemente, mantem uma espécie de distinção das violências, que nas áreas analisadas nesta dissertação, afetam principalmente aos processos coletivos e comunitários das comunidades campesinas. Nesse sentido, a seguintes questões feitas no encontro sobre a Lei de Víctimas, tornam-se relevantes: o que significa ser uma “boa” vítima? Como participam os mecanismos da justiça transicional nesta construção de hierarquias? Como participam as mesmas vítimas? e Que implicações tem isto?

É manifesto como em alguns relatos das equipes interdisciplinares, o impacto do conflito armado na SNSM é visto de maneira diferencial entre indígenas e campesinos. Desde a lente da extinção e o extermínio cultural étnico que ampara a Corte Constitucional, se assume de entrada que as afetações da violência extrema, o desarraigo territorial, as afetações coletivas como sujeitos políticos, a pobreza e a marginalização, tem afetado de maneiras diferentes as comunidades étnico-rurais. Para uma das advogada da equipe, por exemplo, a explicação foi que

La Corte en el Auto 004 que es de seguimiento a la sentencia T-025 [...] lo que dijo es que el desplazamiento forzado está causando un impacto diferencial sobre las comunidades indígenas. Lo que dijo es que: 'no es lo mismo el desplazamiento de una familia campesina o de cualquier persona, al desplazamiento de toda una comunidad o de un pueblo indígena de una etnia. Ese Auto 004 es muy bueno, es muy chévere. [...] la corte dice que el desplazamiento forzado por el conflicto armado es generalizado y que ha impactado de manera específica y diferencial a los pueblos indígenas del país. P: ¿y usted qué piensa de eso, usted cree que es así? S: ¡totalmente! porque encontró la corte que muchos pueblos estaban en esa situación estaban en riesgo de desaparición y exterminio físico y cultural porque las comunidades se estaban desintegrando, la gente estaba saliendo de sus territorios y se estaban implantando en esos territorios prácticas como cultivos de uso ilícito. Además las condiciones históricas de pobreza y de aislamiento de esos pueblos indígenas están exacerbados por causa del conflicto armado [...] no es lo mismo las afectaciones colectivas de una comunidad o de un pueblo... [...] había que hacerlo diferenciales [...] para eso [la Corte Constitucional] creó unos planes de salvaguarda étnica para unos pueblos [...] para los pueblos de la Sierra ordenó crear de salvaguarda étnica eso lo están haciendo con los koguis, arhuaco, wiwas, koguis (FUNCIONARIO 5).

Cabe aclarar que não estou negando as afetações do conflito armado na comunidades indígenas na SNSM. No entanto, assim como as comunidades indígenas em muitas regiões do

¹³³ Seminario ‘Pasado, presente y futuro de la Ley de Víctimas’. Centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia. Marco de 2020. Escutar fala da antropóloga Roxani Krystalli. Link, min. 1.25:00 a 1.46:00. <https://www.youtube.com/watch?v=OBXbcu5Kws>

país estão sendo ou foram deslocadas forçadamente, com manifestas afetações em seus processos territoriais, também é certo que os tecidos sociais e comunitários, e os processos políticos campesinos das partes montanhosas da cara ocidental da Serra, têm sofrido muitas consequências em suas demandas e processos territoriais que contrastam com o ímpeto da organização arhuaca.

Se tem algo que foi evidente nos anos que passei pelo escritório de terras é da exacerbação da violência que afetou em geral às populações do campo mas com consequências pontuais para as famílias campesinas serranas que tiveram que deixar suas terras algumas delas, vendendo ao resguardo arhuaco.

O problema da estrutura do Estado multicultural e multiétnico presente na execução da política de restituição em territórios interculturais da SNSM, é que opera a partir das marcações seletivamente racializadas que produzem desigualdades através da invisibilidade daqueles que não estão incluídos no que se define como “normas” (BRIONES, 2005). Seguindo a antropóloga argentina Briones, neste modelo a *aboriginalidad* enaltece as dinâmicas e os efeitos da relação colonial com distâncias culturais, temporais e espaciais, mas também tem significado hierarquizar horizontal e verticalmente ao conjunto de cidadãos “normais” /normalizados e aos definidos como outros (em este caso, indígenas, aborígenes, índios, etc.). Para ela, aquela hierarquização dos cidadãos tem se constituído em base a

Dispositivos de totalización e individuación que inscriben campos de visión diferenciados para cada cual (Corrian y Sayer, 1985), según estrategias de espacialización, temporalización y substancialización (Alonso, 1994), que atribuyen dispares consistencia, porosidades y fisuras a los contornos (auto) descriptivos (BRIONES, 2005: págs.: 15, 16).

A maneira como a Lei de Restituição de Terras foi concebida, assim como as diretrizes para analisar os territórios com justaposições de reclamações de restituição indígenas e campesinos, significou uma fragmentação na intervenção da política de restituição de terras num mesmo território que na prática significou que a equipe dos casos campesinos estivesse desarticulada da equipe étnica: “*Hay un problema estructural que es que la ley 1448 dialoga con sí misma y el decreto [diferencial] también dialoga con sí mismo*” (FUNCIONARIO 3). Isto também é falado por uma das profissionais sociais da equipe étnica:

Creo que el proceso no está diseñado para dialogar con la 1448. El proceso está diseñado para yo [como funcionario étnico] me voy en mi Estudio Preliminar, en mi Caracterización y si llego a encontrar solicitudes individuales pues le cuento al Juez y que el Juez decida [...] Nosotros lo que hacíamos en la Caracterización era eso: un cuadrito de solicitudes individuales, ponerlas en un mapita y el juez veía cómo solucionaba. Entonces nosotros no hablábamos. El proceso no está hecho para que uno

dialogue [...] Ósea el Decreto no contempló que iba a haber todos esos campesinos dentro del territorio étnicos (FUNCIONARIO 2).

Desde Bogotá, as diretrizes buscavam estabelecer mecanismos para a restituição campesina em Fundación e Aracataca mas desde critérios muito difíceis de cumprir dada a marginalização histórica dessas comunidades frente a formalização de suas terras e ao acesso a direitos fundamentais que dentro de um sistema de direitos étnicos diferenciais, relega ao campesinato a um sujeito sem direitos. Esse debate de tecnicismos jurídicos sobre as dificuldades da magnitude da reparação campesina nestes territórios é explicado por um dos funcionários no seguinte relato:

Si uno fuera riguroso con los estándares internacionales y constitucionales prácticamente la solicitud de ningún campesino de esos podía tramitarse. Porque hay un principio básico y es que la propiedad colectiva étnica existe así no haya un título proveniente del Estado que la reconozca, existe por una cosa que es la ocupación ancestral. Entonces si uno si aplicara ese estándar... pues al carajo todo el mundo porque la ocupación ancestral de esa gente quién la va a controvertir [...] Entonces dijimos desde Bogotá: eso no es razonable porque entonces los campesinos se quedan sin restitución. Entonces dijimos no. Un factor clave, aunque no sea conforme al estándar, es el momento de constitución del título colectivo. Quien llegue después de la constitución del resguardo colectivo, no tiene derecho a la restitución. Quien haya llegado antes, tiene derecho a la restitución. Y esa restitución puede ser en doble vía: el campesino tendría derecho a la restitución por equivalencia, si el predio queda totalmente ubicado en el resguardo. Si queda parcialmente traslapado pues tendrá derecho a la restitución material de una parte y la restitución por equivalencia [...] Ahí viene un argumento que es de conveniencia y no es jurídico y es que en un sólo caso podía haber 200 campesinos y ¿de dónde sacaba la unidad para restituir 200 campesinos? Allá en la sierra que la tierra vale millonadas. O en el Valle. Entonces... no hay plata para eso. Empezaron a decir... sí, pero yo no puedo darle, no puedo ponerme a compensar a todos esos campesinos. ¿Qué hacemos? En un momento dijeron... no, no, no podemos. Tocar igual restituir y si el juez da la orden de compensar que se haga cargo la Agencia de Tierras, no nosotros [...] Esa articulación se hizo con el director jurídico (FUNCIONARIO 3).

O paradoxo do multiculturalismo e o legalismo frente ao manejo estatal da Serra, colocou a funcionárias e funcionários das equipes de trabalho da “rota indígena” e “rota campesina” numa confrontação de direitos territoriais com consequências nos projetos de vida de milhares de pessoas que habitam na Serra. “*El respaldo de los estándares internacionales y los mismos constitucionales. [...] opera como regla general y opera como punto de partida y es lo que quisiera la Constitución, porque dice que la nacionalidad colombiana se fundamenta en la diversidad étnica*” (FUNCIONARIO 3. Desde esta perspectiva, as imagens que sobre a Serra se constroem estatalmente desde a lente multicultural, enfrenta em últimas as solicitações

das populações étnico-rurais vítimas do conflito armado, onde o campesinato pobre e desarraigado de sua terra, terminou ainda mais marginalizado.

Ese tema de los ocupantes campesinos es de gente en la mala, que se metió ahí y no tenía nada que ver. Pero entonces se comenzaron a mezclar unas cosas con otras. [...] Hubo un marambo¹³⁴ conceptual porque nadie sabía cuál era la frontera entre una cosa y otra. [...] Entonces si no había visto lineamientos para eso de las solicitudes de restitución traslapadas pues menos iba a haber para eso campesinos vulnerables, que no tenían derechos sobre la tierra que toca es atenderlos porque están en la mala, entonces imagínate el problema tan berriondo que había (FUNCIONARIO 3).

Desde la Unidad fue un poco menos civilizada la cosa, porque sí hubo que situar a todo el equipo jurídico en un escenario en el que el territorio no es la tierra. Entonces llevarlos a ellos a entender que el indígena no vivió ahí, pero eso seguía siendo territorio ancestral, fue muy difícil. Porque explicarles esa visión amplia de territorio, de cómo entiende el indígena de que él [campesino] puede estar ahí y a mí no me incomoda pero lo que yo necesito es que lo cuide y lo proteja [...] cuando se presenta esa dicotomía entre defendemos el derecho del indígena o defendemos el derecho del campesino, sí hubo a veces como más intransigencia de parte de la 1448 que de la 4633. Decían... el equipo étnico, tienen un caso, y nosotros tenemos 9000 casos, entonces ahí, ahí empezaba como la balanza... no se media en ¿cuánto territorio tengo yo en este caso? sino cuántas solicitudes tengo yo en este caso. Entonces ese diálogo fue complicado en su momento [...] para la unidad entender eso era mucho más difícil. Fueron largas discusiones en el equipo jurídico (FUNCIONARIO 2).

A fragmentação nas práticas institucionais para trabalhar com indígenas e campesinos habitantes da Serra, apresentou-se num momento em que não se promoveu e incentivou o diálogo entre as equipes para construir a política de reparação territorial das vítimas desses setores. Já foi falado como a perspectiva da intervenção territorial partia de uma compreensão da Serra como um espaço da diferença entre aqueles sujeitos marcados etnicamente e os que não, que fragmentou as maneiras de ler e analisar essas localidades montanhosas da Serra por parte dos funcionários e funcionárias do escritório.

Em geral, o pessoal entrevistado assegurou não ter trabalhado entre as equipes encarregados dos casos campesinos e a equipe encarregada dos casos indígenas, observando inclusive que nos produtos e trabalhos próprios do processo de restituição como “*documentos de contexto y de pruebas sociales, no existe información sobre los conflictos interculturales de compras de tierras entre indígenas y campesinos*” (FUNCIONARIO 6).

¹³⁴ Confusão, desorganização, bagunça.

P. ¿Había gente de la 1448 participando de la construcción de esas demandas étnicas en casos de traslapes indígena y campesinos? R: no, nunca lo hubo... Y es el deber ser, pero nunca lo hubo porque nunca hubo interés en lo étnico, también y tenemos que asumir culpa nosotros, porque seguramente no promovimos una apertura suficiente para debatir el tema. El enfoque que hubo en algún momento de cerrarse y volverse una isla. Y también por la dinámica de la entidad porque un abogado de esos hermano no le quedaba tiempo de tomarse un tinto menos de venir ayudar hacer la demanda a nosotros para que esa demanda, integrara y articulara su demandita pequeña del campesino [...] Entonces el man [abogado] no se iba a dedicar apoyarnos a nosotros en una zona no micro cuando él tenía desbordado el estante con sus otras demandas. [...] Es una serie de ingredientes de distinta naturaleza, de distinto orden que hacían que cada uno fuera por su lado [...] hay una lectura fragmentada del territorio [...] absolutamente, que la propició la URT en algún momento y que intentó resolverla después pero que no pudo (FUNCIONARIO 3).

Eso era así: los temas étnicos eran los temas étnicos y los temas de la 1448 de campesinos pues eran muy separados. Entonces yo siento que nunca hubo ese diálogo y que hubiera sido mucho más provechoso. Y después de un tiempo se decidió sacar al equipo étnico de ahí sabiendo pues el contexto de una territorial como el Magdalena que tiene cuatro pueblos indígenas (FUNCIONARIO 6).

Agora bem, sobre as áreas de pretensão territorial indígenas ou áreas de ampliação, os argumentos da equipe étnica e de alguns funcionários das equipes campesinas era que, ainda que tivessem sido terras campesinas constituídas nos processos de ocupação da primeira metade do século XX, essas áreas de ampliação são parte da restituição histórica legítima para comunidades indígenas, embora que de fato, deslocadas forçadamente pela exacerbação da violência dos anos da guerra contrainsurgente foram as famílias campesinas.

Ainda quando a fundamentação da recuperação ancestral dos territórios indígenas seja excepcional em si mesma, tendo na conta as memórias históricas de desapropriação, desterritorialização e saque aos indígenas num colonialismo que ainda se reproduz; o outro lado do processo experimenta um absoluto silêncio. O problema agrário histórico das áreas de ampliação do resguardo arhuaco, ainda que se reconhece, em algumas análises, comunmente são vistas “*primeramente, [según] el argumento jurídico [...], [como] una tierra susceptible de restitución pa’ los indios porque el decreto [4633 de 2011] les da el derecho de pedir restitución sobre esas tierras. Pero no tiene el efecto jurídico agrario de sacarlas del comercio*” (FUNCIONÁRIO 3). Essas áreas para o pessoal das equipes étnicas tanto nacional como regional, “*se entendía al final [...] como resguardo porque no era una ‘mera expectativa’ sino que ya se consideraba territorio indígena*” (FUNCIONÁRIO 2).

Nesse sentido, as compras realizadas nas áreas de ampliação pelo resguardo arhuaco a campesinos deslocados pela violência, são entendidas como parte do processo de recuperação

territorial indígena desconsiderando em muitos momentos as razões de porque os campesinos venderam suas terras. Como falou um dos membros da equipe étnica do escritório, a explicação para atender esses casos era a partir de três níveis da ancestralidade indígena que paradoxalmente silencia o fato de que a maioria de terras compradas são de pequenos produtores que têm vivido, eles também, a marginalização do Estado e que tem experimentado histórias complexas de deslocamento e violência no âmbito da guerra contra insurgente que estabeleceu um tempo da guerra como estado que constantemente se atualiza. Para a funcionaria, esses três níveis são:

i) el territorio que ocupas y en el que vives que sería la zona del resguardo; ii) otro es el territorio que garantiza tu subsistencia, que tienes una conexión ancestral, en el que siembras, en el que transitas, el que garantiza tu supervivencia física y cultural, y iii) el otro ahí sería el territorio ancestral que comprendería la Línea Negra. [...] A esos tres niveles territoriales había que garantizarles el acceso y la protección [...] pero la zona de resguardo y la zona de ampliación tienen que comprenderse como territorio que era de ellos [los indígenas] y que había que mirar cómo se tramitan esas solicitudes. Ellos dijeron, nivel central, enviaron un concepto donde decían que debíamos evaluar cada caso, si era una ocupación antes de la constitución del resguardo, antes de la solicitud de ampliación, bla bla bla... (FUNCIONARIO 2).

Precisamente, durante a terceira fase da intervenção em Fundación, como contou uma líder indígena do resguardo arhuaco, existiram algumas reuniões entre o resguardo arhuaco com a equipe étnica e o diretor do escritório da URT Magdalena para “*plantear cuál es la situación y cuál es la visión de los pueblos indígenas hacia la ampliación de resguardo. Cuales es el polígono de ampliación... se conversó eso... los detalles es viable o no es viable, ya eso ha sido un escenario de responsabilidades institucionales como es el caso del Gobernador y en cabeza del CTC*” (LÍDER INDÍGENA 1).

As reuniões da equipe étnica da URT no Magdalena com a organização arhuaca buscou dentro do trâmite da “rota indígena” do decreto 4633 de 2011, uma ordem de ampliação do resguardo, propondo que a autoridade de terras comprara as terras de solicitantes campesinos vítimas que abandonaram seus territórios pela violência para que elas fizeram parte finalmente de ampliação do resguardo sobre essas geografias arrasadas pela violência.

Cuando logramos demostrar las dos cosas, que había vínculo del indígena y el territorio y que habían sido afectados los indígenas por el conflicto armado, entonces pedíamos la restitución de esto, pero lo que buscábamos era una orden de ampliación. No buscábamos la anulación del título individual. Porque a título de qué si el pobre campesinos también... ¿él qué culpa tiene? Entonces pedíamos la orden de ampliación y venía aparejada a un proceso de compra de esos predios individuales. Nooo, nos objetaba, eso vale mucha plata y además eso es una cosa babosa ahí porque entonces si la persona no quiere vender entonces el INCODER tampoco puede ampliar. [...] Ahí venían las contradicciones. Nosotros sólo llegamos hasta eso (FUNCIONARIO 3).

O Problema não é menor. Para os funcionários e funcionárias étnicos o processo de assentamento das famílias campestinas da primeira metade do século XX é interpretada como invasão a territórios ancestrais. É por isso que a retomada termina sendo legítima, não importa os meios. Essas contradições do processo são relatadas por um dos entrevistados que participou das primeiras demandas étnicas em outras regiões do país que avançavam mais rápido que o procedimento de restituição campestino, nas que solicitavam o cancelamento dos títulos campestinos porque eram vistos como invasores.

Nosotros si lo hicimos en algunas de esas demandas primeras y eso fue irresponsable mano, decir no, que se anulara todos esos títulos porque esos señores [campestinos] eran despojadores y en la región había conflicto. Y nos encontramos con los campestinos en mesas de trabajo alborotadísimos y dijimos no mano, ¡la embarramos!” (FUNCIONARIO 3).

A questão emerge do entendimento do processo de assentamento e formação dos territórios campestinos na SNSM como parte do perigo de extinção para os povos indígenas, o que termina por legitimar as compras de terras do resguardo, apesar de que foram feitas num contexto volátil e exacerbado de violência. O deslocamento forçado, desarraigo e espoliação, delito que principalmente afetou nessas áreas às comunidades campestinas, é colocado pelos funcionários da equipe étnica como se tivesse consequências e efeitos diferenciais entre as comunidades étnico-rurais, desconhecendo no fundo as relações econômicas, sociais, culturais e com a natureza das comunidades campestinas. O seguinte relato exemplifica dita situação.

Uno tiene que entender varias cosas, y es que el indígena no se va, el indígena no se desplaza. Porque si se va es como si estuviera dejando a la mamá y ¿de qué va vivir? Lo primero que te dicen los indígenas es ... yo en mi territorio, tengo comida, tengo mi familia, tengo mi comunidad, tengo mi lengua, tengo todo lo que me identifica como ser humano, no me veo como un individuo sino como parte de una colectividad. El campestino no, el campestino sí se va y el campestino y campestina pues tienes otras lógicas del relacionamiento con la tierra que es más en términos productivos, entonces yo sí puedo coger mi pedazo de tierra y vendérselo al indio porque el indio como no se va ir, entonces le sirve más a él, yo tengo mi platica y puedo irme para otra parte. El indígena no lo ve así, el indígena no puede vender la tierra porque es su territorio, es como su mamá. (FUNCIONARIO 2).

De outro lado, os territórios de pretensões de ampliação territorial indígena que tomam como referencia a Linha Negra, desde a perspectiva da DAE, o campestino solicitante da reclamação da terra deve ser tratado “no como despojador sino como propietario; que le diga: ud es propietario ¿cuánto vale su finca? que lo llamen como un señor con derechos legítimos que por lo tanto pueden ser comprados” (FUNCIONARIO 3). No entanto, a ponderação de direitos desde uma perspectiva étnica de subsistência e preservação dessas comunidades se mantém, com a proteção simbólica territorial da Linha Negra como território indígena que

deixou finalmente aos campesinos numa situação de desvantagem respeito às expectativas da reparação de seus direitos territoriais. Essa controvérsia aparece em alguns dos relatos:

Una corriente que decía que las solicitudes que estaban sobre la Línea Negra se tenían que tramitar como las solicitudes en zonas de resguardo. O como si fueran reserva forestal, territorios protegidos. ¡Pero había otros que decían no! [...] para nosotros era difícil hacerles entender ese concepto amplio del territorio era muy difícil [...] hasta que ellos [en la Dirección de Asuntos Étnico] llegaron a las conclusiones de que las solicitudes en la Línea Negra se podían tramitar siempre y cuando se le hiciera la salvedad al Juez que estaba la Línea Negra y había un sitio sagrados para que se permitiera el acceso al sitio sagrado (FUNCIONARIO 2).

...empezamos a decir fue: pues el indígena tiene un derecho prevalente, eso sí es claro. [...] como pasa con todas las democracias constitucionales: los campesinos participan en un juicio de ponderación, él tiene que ir a una ponderación constitucional a ver cuál de los dos puede tener más peso, siendo ambos legítimos. En esa ponderación... si el campesino tiene que salir, cuál es el cuerpo de derechos que el campesino vería limitados? y si el indígena tuviera que salir, cuál es el cuerpo de derechos que se verían limitados. Normalmente este cuerpo [el indígena] es más amplio pero sobretodo aquí se está jugando la pervivencia. (FUNCIONARIO 3).

A hierarquização de vítimas que se apresentou durante a intervenção da URT na Serra, entende que o indígena sem terras desaparece coletivamente, afirmação que mesmo sendo certa, distingue violentamente essa mesma condição do outro lado do processo dos campesinos deslocados pela violência. A noção de sujeito coletivo para os campesinos claramente afetada pelo contexto volátil de violência, não é reconhecida nesse processo de ponderação, assumindo que uma territorialidade campesina pode se refazer em outra terra diferente da que foi desarraigada pela exacerbada violência. Como relatou um dos funcionários que trabalhou nessas áreas de montanha de Fundación e Aracataca:

Usted sabe que un indio sin tierra desaparece colectiva e individualmente. En Cambio, esta persona, que también es vulnerable, puede no solo subsistir sin tierra, porque lo puede hacer teóricamente, o puede subsistir en otra tierra... en cambio este señor [indígena]. Porque el territorio no es solo un ámbito geográfico, el territorio es, sobre todo, un ámbito cultural y esa cultura uno no la va a recrear en otro lado, no! eso está ligado con los sitios sagrados, con la historia de poblamiento, con los sitios de pagamento, con los cementerios (FUNCIONARIO 3).

Agora, com relação à questão das compras de terras com dinheiros próprios do Sistema General de Participaciones (SGP) ou de organizações internacionais em áreas de pretensão de ampliação do resguardo arhuaco, “se asume que el resguardo los compró y ya. [...] P: ¿se asumía que esas tierras no tenían ningún tipo de vicio en el mercado de tierras? R: sí, se entendía que estaban ya comprados en una compra-venta legal. (FUNCIONARIO 5). eram afirmações de um mercado de terras livre e consentido, sem condicionantes no processo de

transação, são problemáticas. Mesmo que entendem que “*no se trata desconocer derechos de particulares*” (FUNCIONARIO 5), as decisões finais mostram que os casos campesinos nesses setores da Serra não avançaram. “*Creo que en Fundación o Aracataca en algún momento estuvo suspendida la micro por ese tema: porque era resguardo, porque era ley segunda, yo no sé si eso se reactivó o se quedó así*” (FUNCIONARIO 5).

De fato, as múltiplas justaposições das camadas das fronteiras e contornos constituídos pelas figuras jurídicas sobre os territórios da SNSM, os interesses de ampliação e pretensão territorial indígena, o ímpeto destas organizações, e a associação dos campesinos com uma imagem de desflorestadores, determinou a negação de acesso ao processo de restituição para campesinos deslocados pela violência. As versões das equipes étnicas refletem as divergências nas maneiras de interpretar e analisar as compras de terras do resguardo arhuaco a campesinos deslocados pela violência. Por uma parte, desde Bogotá, a DAE entende que os indígenas

...comenzaron a ocupar el rol del despojador porque pagaban a tres pesos. El campesino apurado vendía y después el indígena es señalado de despojador. Es un absurdo pero en los contornos abstractos de la ley el indígena ocupa el lugar de despojador, que era sus territorios ancestrales, que él no estaba articulado con los armados, pero hermano se está sacando provecho de una situación tenaz para el campesino [...] Eso lo hemos detectado y con mucho dolor hemos tenido que decir: pues llámelo como despojador [...] porque ¿qué más?” (FUNCIONARIO 3).

Así se hizo en Magdalena y me preguntaron varias veces y yo tuve que responder así, como funcionario público. Siempre la pensé así desde el tema político y en las organizaciones de los indígenas, pero en los contornos de la ley, en lo que la ley reguló ese es un negocio que fue consecutivo de despojo. Eso sucedió sobretodo en la Sierra. En las tres vertientes. En todo lado los indígenas comprando... como empezaron a recibir plata de trasferencias, de cooperación internacional pues los manes decías: nuestra agenda es la agenda del territorio. Y si tenemos plata... y si el INCODER siempre nos aduce que no tienen plata, pues entonces nosotros compramos [...] que después miramos cómo adelantamos el procedimiento pa' que eso formalmente entré a formar parte de la ampliación del resguardo (FUNCIONARIO 3).

Por outra parte, desde a região, para a equipe étnica do escritório da URT em Santa Marta, se questionava a postura do pessoal de Bogotá. “*¡Es complicado! Porque desde nivel central sí estaba la lectura de que los indígenas se habían aprovechado de la situación de violencia en ese momento para comprar las tierras de los campesinos*” (FUNCIONARIO 2). O paradoxo do multiculturalismo, evita fazer evidentes as realidades que existem detrás dessas compras de terras de famílias campesinas nessas geografias do despojo. O peso político frente às organizações indígenas que pode significar entende-as como comunidades que se

aproveitaram do contexto de violência, se converte no argumento para não adiantar os processos de restituição campesinas ao desconhecer o contexto dessas compras.

Eso Joaquín [de la DAE] lo dijo alguna vez en una reunión. Mientras nosotros estábamos defendiendo la postura de 'no restituya en zonas de ampliación'. Una lectura de ese tipo ponía a los indígenas como que habían tomado ventaja del conflicto armado para poder ampliar sus territorios. Entonces eso ya nos ponía una lectura bastante complicada porque aumentaban el estigma de los arhuacos de haber sido colaboradores de uno u otro grupo. Nosotros siempre pensamos que era políticamente incorrecto plantearlo en esos términos” (FUNCIONARIO 2).

Nesse sentido, por exemplo, o pessoal da equipe étnica do escritório em Santa Marta via as compras do resguardo nos territórios interculturais de indígenas e campesinos na cara norte da Serra em Tugeka como legítimas.

Es que la ampliación se puede hacer con predios privados que compra el mismo resguardo o que compran agencias de cooperación para que sean aplicados al resguardo o que dona particulares. [...] [en la demanda] se identifican cuáles son los predios solicitados para ampliación. P: ¿ustedes hablan con los campesinos dueños de esos predios para hacer ese ejercicio de la caracterización? R: no. Se asume que el resguardo los compró y ya. [...] P: ¿se asumía que eso predios no tenían ningún tipo de vicio en el mercado de tierras? R: sí, que estaban ya comprados en una compra-venta legal. (FUNCIONARIO 5).

Com tudo, as negações de restituição de terras para campesinos em Fundación foram uma realidade. A marginalização destas comunidades serranas das políticas agrárias que se reflete na falta da regularização fundiária de suas terras, entrou em conflito com a declaratória da zona de reserva florestal da Lei 2 de 1959, a constituição do resguardo arhuaco (1983), a área de ampliação e Linha Negra que terminou cortando na prática o processo de reparação territorial de famílias campesinas. Nesses casos, para o momento da entrevista (2019), segundo relata o advogado dos processos campesinos,

...la mayoría de los predios desafortunadamente en esa zona son baldíos. Entonces no se puede proceder a iniciar o inscribir para los que tienen la vocación. En ese caso lo que había que hacer es por parte del grupo AMEI, que es un grupo de la Unidad que maneja los temas ambientales y de afectación mineras y de hidrocarburos, solicitar una sustracción al Ministerio del Medio Ambiente, eso no se ha adelantado. Entonces digamos que los casos de Fundación se iniciaron, se comunicaron, el siguiente paso se midieron (georeferenciación) y tienen ITP, de ahí debemos esperar de esos casos que tienen la vocación clara de inscripción a que se haga ese trámite ante Ministerio de Ambiente que no se ha podido. Entonces esa es una de las cosas digamos que ha impedido la intervención real de la Unidad en esa zona para los casos de baldíos. De baldíos que tiene vocación clara de inscripción (FUNCIONARIO 4).

Mais que nada, umas das frustrações profissionais como membro da área social era escutar a negação ao acesso a reparação territorial de uma vítima do conflito armado. Na prática, na conjuntura da burocratização da restituição de terras, as negações dos inícios de um processo, tornaram-se as decisões de fundo para mostrar avanços dessa política nessas áreas, através de algumas modificações jurídicas que facilitaram o uso das jurisdições e fronteiras que sobre a Serra existem, para negar o direito a reparação principalmente dos camponeses.

En el 440 están las causales de no inicio que se modificaron porque se incluyeron esos temas ambientales y de afectación. Pero en términos generales, qué es lo que dice: si está afectado con Resguardo Indígena constituido como tal y el predio es baldío, ahí no hay nada que hacer. Eso no tiene lugar a inscripción en el registro. ¡Se niega! Si tiene ampliación de resguardo, tienes que ver que los hechos de violencia sean posteriores a la ampliación, se niega, pero si son anteriores, no tiene afectación (FUNCIONARIO 4).

De fato, num informe apresentado ante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pelo incumprimento da reparação as vítimas despojadas de suas terras em Colômbia (2019), se explica o avanço lento da política de restituição em todo o país. Para o ano em que foi feito o trabalho e campo da dissertação, tinham se logrado sentencias de restituição em menos de 350 mil hectares quando o problema do despojo se calculava inicialmente em 6 milhões, e a URT tem negado a mais de 63% das vítimas o acesso ao procedimento judicial. (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019) Entre outras, o informe assegura que os reclamantes enfrentam obstáculos como “*la negación al derecho de restitución si fueron desplazadas forzadamente y despojadas de tierras al interior de áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y zonas de reserva forestal*” (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019).

Como me foi falado por uma das funcionárias, uma das estratégias da terceira fase de intervenção do escritório de restituição de terras em Fundación foi inicialmente priorizar “*todas las negaciones, ya fueran de no inicio o de no inscripción [...] Ya después de esa estrategia se pasó ya a las inscripciones que ya tenían la vocación definida [...] hubo varias negaciones de no inicio o de no inscripciones porque el predio tenía esas afectaciones de resguardo indígena*” (FUNCIONARIO 4). Nessa fase da etapa administrativa, conta outro dos funcionarios que trabalhou nesses territórios, os advogados e advogadas “*sacan los más fáciles por el tema de las mega-metas y lo más fácil para cumplir con las metas, es negar los derechos*”. (FUNCIONARIO 6).

A participação de um dos servidores da área social na terceira fase, como narrou, foi num momento de crescimento de solicitações e de muitas pressões para mostrar resultados o que significou num empobrecimento na qualidade das provas realizadas com camponeses e camponesas desses setores.

Llegué después de las mega-metas de 2015, yo llegué en 2016. Yo lo que entendí es que necesitaban mostrar gestión. La URT se creó, se generaron expectativas importantes de las víctimas y se llenó de muchas solicitudes y luego no tenía como acatar esa gestión. Pero por darle avanzar a mucho en número se le dejó de dar prioridad a la calidad de la prueba. Cuando yo llegué me acuerdo que todo mundo hablaba de las mega-metas. Lo que según era igual con esos esfuerzos pues las metas seguían muy bajas (FUNCIONARIO 6).

Nesse mesmo sentido, outro funcionário conta que em Fundación se apresentaram muitas negações de início dos processos de restituição camponesa.

Se han presentado muchas negaciones por las ventas entre camponeses que es el lineamiento como base para ese tipo de casos [...] eso fue un lineamiento interno de la Dirección Jurídica [...] [el] concepto de la unidad, dicen es que se debe analizar la venta desde varias perspectivas y determinar si existe o no despojo [...] con base en eso se decide la inscripción o no en el registro. (FUNCIONARIO 4).

Precisamente, o informe “*Cumplir metas, negar derechos*” (CCJ, 2018), em que se faz um balance a implementação do processo de restituição em sua fase administrativa, é explicado como *cumplir metas* referindo à conjuntura das mega-metas na política de restituição, se converteu numa gestão com aparência exitosa. A relação entre a negação de solicitações de inscrição de terras no ‘Registro e o cumprimento de metas nesses anos, aconteceu com o aumento das não inscrições, os não inícios formais de estudo e as retiradas das solicitações por parte dos camponeses. Como está apontado no informe,

...a implementación del RTDAF no ha sido gradual, progresiva, ni sostenida en el tiempo. La gestión de la URT en el trámite de solicitudes de inscripción en el RTDAF ha sido cambiante, en especial en su rendimiento comparado entre los periodos 2012-2014 y 2015-2017. Ese cambio le ha permitido a la entidad reportar avances significativos en el cumplimiento de sus metas. Sin embargo, como se ha evidenciado, el avance reportado en la implementación del RTDAF se debe, principalmente, al cambio de indicadores y metas de la entidad, a algunas reformas normativas que afectaron su procedimiento y, en especial, a un cambio en la tasa de inscripción de solicitudes en el RTDAF que coincide con el aumento en la productividad de la entidad. Este último aspecto parece haber sido determinante en el reporte de cumplimiento de metas. (CCJ, 2018).

Nessa ordem, como bem assinala a Comissão Colombiana de Juristas, é preciso analisar como foi o comportamento em cada período das decisões de negação da entidade com relação ao cumprimento de metas, “*y qué consecuencias trae ese comportamiento en materia*

de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado del país” (CCJ, 2018). O informe explica que, contrário ao que o governo de turno mostrava sobre os avances e cumprimento da política de restituição de terras e reparação das vítimas do conflito armado, o reporte de cumprimento de metas responde, “sobre todo, a ajustes hechos en los planes de acción de metas e indicadores de la entidad, así como a la disminución de la tasa de inscripción de solicitudes y el correlativo aumento de las negaciones de inscripción en el RTDAF” (CCJ, 2018).

A pesquisa trabalhada com informações apresentadas pela Comissão Colombiana de Juristas, e as informações oficiais da Unidade de Restituição de Terras do portal web mostram que para dezembro de 2017 foram negados 63% dos casos de restituição (40.253) de vítimas aos que lhes foram fechadas as possibilidades de reparação sem a claridade frente as razões dessas negações.

El último de los problemas que merece revisarse es el alto nivel de negaciones de las solicitudes de las víctimas en la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, pues en el 63% de los casos que se presentaron no se dio trámite al proceso de restitución. Precisamente, este informe se concentra en ese 63% de negaciones a las solicitudes de restitución de tierras, pues llama la atención cómo de 88 489 solicitudes de inscripción en el registro de tierras despojadas habilitadas por razones de seguridad para proseguir en el trámite, solo 22 711 han sido inscritas de forma efectiva. Son 40 253 los casos en los que a las víctimas reclamantes se les ha cerrado la puerta para acceder al proceso de restitución de tierras, sin que se pueda precisar en detalle las razones por las cuales fueron negados, y sin que las víctimas que reclamaron contaran con todas las garantías de contradicción y defensa que les permitieran atacar estas negaciones (CCJ, 2018).

Una comparación entre los periodos 2012-2014 y 2015-2017 de la gestión de la entidad respecto al trámite administrativo de solicitudes de inscripción en el registro da cuenta de esta realidad. Mientras que en el primer periodo, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la urt reportó resultados negativos en comparación con sus metas de procesamiento de solicitudes, en el segundo periodo, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la entidad reportó avances de más del 100% en el cumplimiento de sus metas. Un análisis de las razones que pueden explicar esta diferencia de gestión entre ambos periodos sugiere que el cambio se debe, principalmente, a dos factores: 1. Modificaciones en las metas e indicadores de la entidad; y 2.El cambio en la tasa de inscripción/negación de solicitudes en el RTDAF [...] De este modo, al analizar las cifras de gestión de la entidad, se observa que bajo este nuevo indicador aumentan de forma significativa los actos administrativos de no inicio formal del estudio, aquellos que decretan el desistimiento de la solicitud y los actos administrativos de no inscripción en el rtdaf, los cuales tienen un impacto determinante en el total de solicitudes procesadas por la entidad a diciembre del 2017.(CCJ, 2018).

Nesse cenário, a facilidade que brindou o conflito armado ficou num segundo plano para analisar os casos de campesinos e campesinas que venderam suas terras aos indígenas e outros mais que abandonaram suas terras nos territórios altos do rio Fundación. “*Lo que sí conocí fue muchos no inicios por razones de la venta*” (FUNCIONARIO 6), relata um dos profissionais da área social que participou nas tramitações de caso nesses setores montanhosos. Sobre as compras de terras que mais lembra nessas áreas, são as “*compraventas entre campesinos, pero las que más me acuerdo era las de indígenas a campesinos*” (FUNCIONARIO 6). A diretriz da URT era recusar “*los casos donde se comprueba que los campesinos a voluntad propia habían vendido o donde reconocía que había vendido*” (FUNCIONARIO 6).

Em alguns casos, afirma, a entrevista do campesino chegou a parecer dirigida intencionalmente pelo advogado do caso, para interpretar a venda como “consentida”. Não que isto viesse de uma intenção de infringir a lei ou privilegiar aos indígenas mas sim de mostrar resultados de gestão da política de restituição de terras despojadas e abandonadas forçadamente, medida pela quantidade de resoluções feitas. Deste modo, se determinava o não início do processo restituição da terra campesina.

Ese abogado citaba a los solicitantes y no le avisaba a uno. Le tomaba los testimonios, llevaba a la entrevista a que a los campesinos dijeran que habían vendido a decir que habían vendido sin tener en cuenta el contexto de violencia y eso dio pie a que se archivarán muchos casos de restitución de tierras (FUNCIONARIO 6).

O consentimento sobre a venda do campesino ao resguardo arhuaco, fortalecia então a projeção da negação dos inícios dos pedidos de restituição de campesinos e campesinas, omitindo contexto de violência. Para o colega entrevistado, “*el man (abogado) sabía que la fácil era que consintieron la venta pues como que dirigía la conversación hacia allá y con base en eso hacían las resoluciones de no inicio de todos esos casos*” (FUNCIONARIO 6). A exigência de resultados na política de restituição de terras, em ultimas, incidia para que nas decisões dessas compras, se omitisse o contexto de violência. Enquanto um pensava que eram legítimas as compras como parte da retomada territorial dos indígenas arhuacos, outro argumentava que se estava excluindo da análise o contexto das compras.

¡Sí claro! Claro porque... lo que primaba era poder argumentar cómo se podía justificar el no inicio un caso campesino más que tener certeza de todo el contexto de los hechos, de todo el contexto de violencia, de cuáles eran las afectaciones y demás [...] prácticamente se le quita el contexto de la violencia a las compras de tierras entre campesinos e indígenas (FUNCIONARIO 6).

Eran una etapa muy preliminar de estudiar esos casos. El argumento de Pedro era que ese tema de ampliación era parte de una recuperación legítima de los indios. Yo decía que no, que ahí no se estaba tomando en cuenta el contexto de esas compras. Lo mismo el abogado, para él esas compras no se estudiaban. Ahí la que me defendió en una de esas reuniones fue Magdalnea, la coordinadora porque ella entendía que ese contexto de violencia pues podía determinar esas ventas (FUNCIONARIO 6).

Os preços irrisórios que receberam os campesinos e campesinas por suas terras, por parte do resguardo arhuaco (CAMPEÑO 3; FUNCIONARIO 6; BOCAREJO, 2015), contrastam com os argumentos de funcionários da equipe étnica sobre o pagamento das terras em relação ao valor da venal de um bem rural ou *avalúo catastral*. Um dos argumentos dos funcionários da equipe étnica coincidiam como o que me contou o líder do resguardo quando perguntei sobre as terras compradas pelo resguardo arhuaco: “*no hay información que puedan decir los campesinos que nosotros lo amenazamos o que lo presionamos para que venta sino son voluntarios. Hoy en día solicitan restitución, pero pues no nos parece porque [...] ellos recibieron la plata y los avalúos que corresponden en su momento. Lógicamente puede variar los precios*” (LÍDER INDÍGENA 1). No entanto, conta um membro da equipe social que trabalhava com os campesinos que nos casos que ele conheceu, “*a duras penas lo que les pagaban los indios por esas tierras le daba pa’ el trasteo. No se reconocían las mejoras*” (FUNCIONARIO 6).

Desde a equipe étnica do escritório em Santa Marta a leitura das compras pelo resguardo arhuaco, eram interpretados “*desde una lectura de resistencia y territorialidad y conexión con el territorio. Ósea, ellos consideran que eso era suyo por derecho porque sus ancestros vivieron ahí [...]*” (FUNCIONARIOS 2). Assim, as imagens construídas e justapostas sobre a Serra faziam parte do cotidiano da restituição de terras para vítimas no contexto de guerra. O seguinte relato evidencia esses paradoxos da justificação das compras de terras de campesinos pelo resguardo indígena non contexto de alta confrontação armada e multiplex violações aos DDHH e DIH.

Esa compra de territorio estuvo... bueno, marcada por principio de oportunidad, sí, pero también por la necesidad de retomar lo que les correspondía ancestralmente. Entonces uno lo ponía en términos de: estamos resistiendo a los actores armados y pues... pues vimos la oportunidad histórica (risas) de retomar esas tierras, pero también ellos decían, nosotros tenemos todos los libros de la contabilidad de esos predios y a ninguno le compramos por debajo del precio, para precisamente evitar de confusiones en el futuro. Entonces ellos tenían: ustedes pueden entrar en los registros de cómo se han comprado todas esas tierras y ninguna se hizo por debajo de lo que el avalúo nos dijera" [...] ¡Porque claro! la intención no era tampoco aprovecharse del campesino que tenía que salir [...] Puede que sí haya ciertas

coincidencias entre la compra de algunos predios en la zona de ampliación y el momento en que la gente tiene que salir pero yo no creo que ponerlo en ese lenguaje sea lo más apropiado (FUNCIONARIO 2).

O problema da linguagem que fala a colega entrevistada para pensar ditas compras no contexto de violência é o que as vezes não coincide com as imagens que se projetam sobre os indígenas na SNSM desde diferentes atores institucionais, acadêmicos, das ONGs, etc. A estranheza que causa pensar nas compras de terras entre subalternos, terminou por ocultar o contexto de guerra nos casos das decisões de restituição de terras campesinas. A ideia aqui não é fazer uma ligação dos indígenas com os grupos armados, populações que, junto com campesinos sofreram multiplex violações de direitos humanos na SNSM. Isso é claro. No entanto, é analisar os efeitos do modelo multicultural de hierarquizações entre o povo étnico-campesino, na cotidianidade da execução da política de restituição de terra em Fundación, com vista procurar caminhos de diálogo e concertações do tipo intercultural nesses territórios diversos. Para um dos funcionários entrevistado,

...el contexto, y me refiero a una zona con un momento donde el conflicto armado escaló a tal punto que ya no había una persona en el corregimiento que no hubiera sido afectada, todo el mundo había sido ya víctima y en ese afán de querer salir se le compraba por precios irrisorios. Ese contexto siento que no se abordó tanto. Sino era más poder ver la veracidad y la legitimidad que tenían las compras que habían hecho los indígenas que claro que la tienen (FUNCIONARIO 6).

Agora bem, outro dos mecanismos de negação de restituição das terras campesinas foi a figura de reserva florestal da Lei 2 de 1959. O artículo 1º do Decreto 440 de 2016, contém um parágrafo intitulado “*Decisión sobre el no inicio formal de estudio de solicitud*”. Segundo este parágrafo, a URT

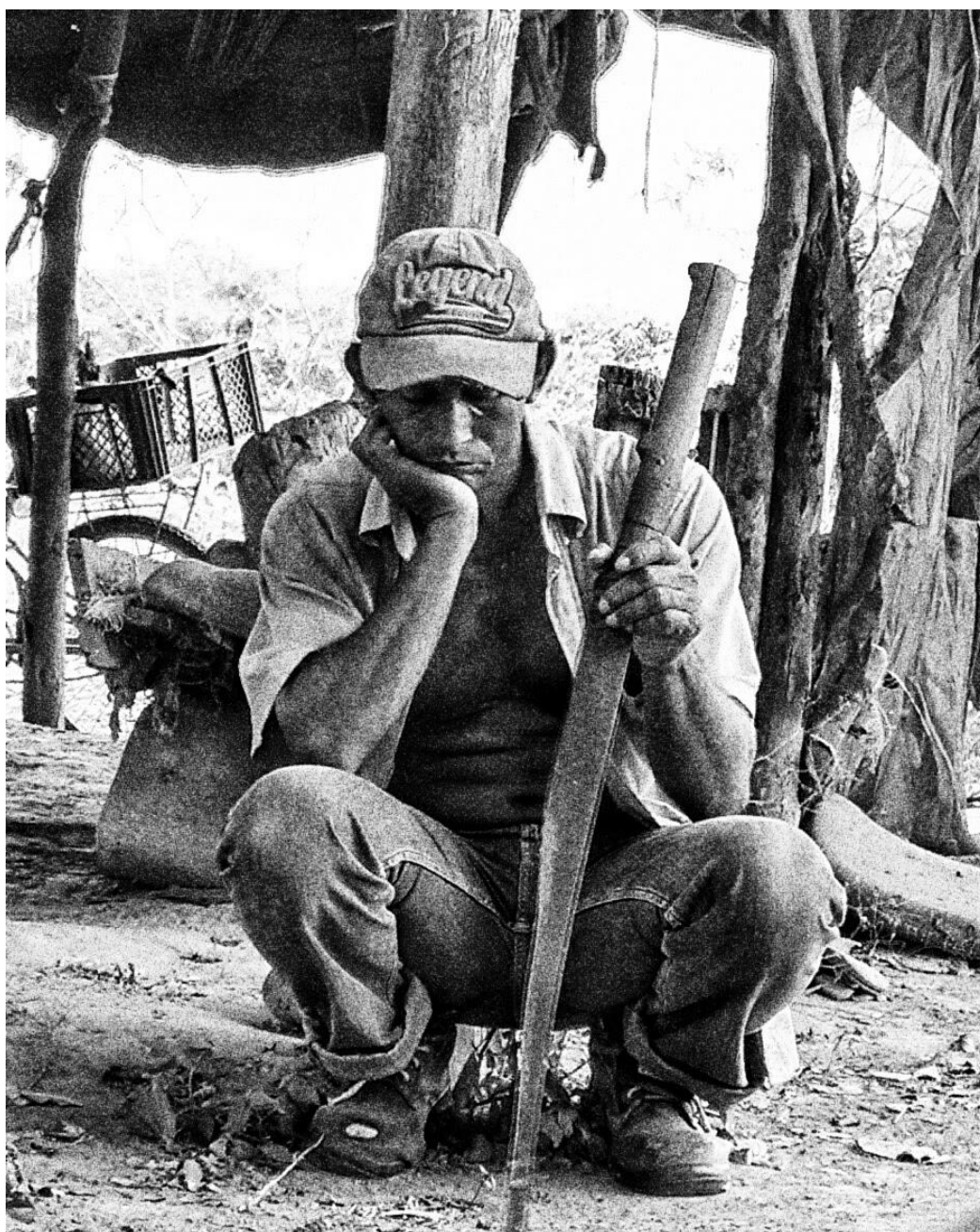
se abstendrá de inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente aquellos predios de origen baldío que están sobre terrenos protegidos por la Ley 2ª de 1959. Esto solo en caso de que de forma previa la autoridad ambiental, Ministerio de Ambiente o Corporación Autónoma Regional, se haya negado a sustraer dicha protección para que una familia pueda explotar el predio (COMISIÓN COLÓMBIANA DE JURISTAS, 2019).

É claro que a URT deve cumprir a Lei e proteger o meio ambiente, aspecto em que as vezes terminou sendo mais flexível com a exploração mineira e agroindustrial, embora mais rigorosa com os campesinos pobres sem títulos. Se a autoridade ambiental nega a subtração da proteção (requisito que dificilmente foi cumprido nas áreas de estudo, segundo as falas de alguns funcionários), que vai suceder com as famílias deslocadas e obrigadas a viver nessas zonas protegidas e que reclamam a restituição? Para o decreto, não poderão ser restituídas pois

nem se quer a solicitação pode ser iniciada (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019), como de fato, aconteceu nos casos de Fundación e Aracataca.

Nesse sentido, numa das falas se assegura que as diretrizes do decreto de 440 para avançar na tramitação da restituição campesina é *“una de las grandes críticas de la Unidad, porque la unidad fue mostrando año a año ruta campesina que cumplían metas y que estaba resolviendo un montón de solicitudes, pero cuando empezaron a ojear eso eran todas resoluciones negativas. El 440 vino a facilitar eso y a veces sin mucho rigor (FUNCIONARIO 3).*

Figura 17 - Fotografia trabalhador campesino sem-terra da SMSM



Fonte: Fotografia de arquivo do colega Jesús David Huertas, 2017

Pode-se concluir até este ponto que, a marginalização histórica dos campesinos, sua imagem como invasor dos territórios ancestrais indígenas e explorador dos recursos ambientais, somado as fronteiras e contornos que sobre a Serra existem (zonas de resguardo indígena, áreas de ampliação e pretensão de titulação indígena, áreas do parque natural, zona de reserva ambiental, ou Linha Negra), enfatizaram esta hierarquização resultado do sistema diferencial de direitos que determinou em conclusão, as negações de acesso ao direito de restituição e reparação de campesinos e campesinas vítimas do conflito armado que saíram forçadamente de suas terras. Quando perguntei a um advogado se tinha inscrito a algum campesino ou campesinos considerada como ocupante, sem título e em territórios indígenas ou de ampliação de resguardo, a resposta foi direta: *“No, yo no he inscrito a nadie. Si uno dice es ocupante, uno dice tiene mínimo ley segunda. [...] sí en Fundación son muchos casos de zona de campesinos en tierras indígenas. [...] lo primero es saber si la tierra es privado, si es privado no hay problema, lo puedes inscribir pero pocos son privados ahí porque no hay títulos”* (FUNCIONARIO 4). Nesse sentido, o colega entrevistado da área social fechou a entrevista como o seguinte relato sobre os casos campesinos de Fundación:

No hubo casos inscritos [...] Yo tengo el presentimiento que todos eso casos de compras de tierras seguro no los iniciaron porque la mayoría de casos que estaban iniciados a los que yo les hice entrevista era de verdad casos complejos y casos que se notaba a la fija que tenían todos los requisitos para ser inscritos. En general es una tendencia dentro de la unidad de restitución de tierras, seguramente no los iniciaron. Por eso no los pude conocer a profundidad. (FUNCIONARIO 6).

Observa-se como a negação do início do processo de restituição e reparação nesses setores serranos, ou a não inscrição de uma restituição de uma terra campesina, eram tomados como um tipo de resultado na conjuntura da política de restituição de terras.

Lo importante es mostrar resultados de solicitudes que están resueltas. Temas de fondo. El asunto es que sí había una exigencia de mostrar resultados y en últimas hay una presión sobre los profesionales jurídicos que son los que realizan las resoluciones. La restitución era como una fábrica de panes, el pan son las resoluciones, lo que cuentan en las cifras y una presión todo el tiempo también sobre cuántas resoluciones tiene que entregar a fin de mes, que en últimas hace que desde lo individual pues las personas con tal de tener con qué comer y alimentar a su familia y demás, pues priorizan... los casos más fáciles de resolver para el abogado. En esas yo creo que muchas veces la más fácil era pues no iniciar un caso. Yo creo que ese afán individual pero que cuando uno lo analiza en colectivo en la Unidad tiene un porcentaje más o menos de un 70% de negación de casos y un 30% de casos positivos (FUNCIONARIOS 6).

Por fim, a implementação da política de restituição de terra em Aracataca e Fundación até o momento do trabalho de campo (2019), terminaram sendo problemáticos e sem saída. A situação de frustração do que se poderia denominar como o paradoxo campesino, com deslocamento e sem restituição, acontece num momento em que a URT já não recebe mais solicitações e a Lei de Vítimas terminará em poucos anos. Como é corroborado no seguinte relato:

Esos casos terminaron siendo un bucle sin salida. En los dos momentos que yo estuve esos casos no avanzaron. Como los casos tenían todos esos chicharrones (problemas) de ley segunda [...] como tenía todo eso, el tema de las ventas que después de un tiempo que eso cambió. Primero era la directriz en la unidad que la venta campesina era consentida entonces no se iniciaba. Y luego se dieron cuenta de la cagada que era o si fue una traba judicial y les tocó echar pa' atrás esa directriz, Entonces ahí si les tocaba a los abogados analizar las compraventas. Eso casos se quedaban ahí porque eran muy jodido entonces como que no avanzaba. Yo vi muy pocos inscritos antes de irme pero aquellos que era claro que era una situación que cumplía los criterios de la ley 1448 y que tenía la vocación con toda. Pero el resto le mamaban gallo y los dejaban ahí en ese bucle donde no avanzaban. Porque dos años quieto y cuando yo los cogí estaban casi que en las mismas (FUNCIONARIO 6).

6.6 CONCLUSÕES FINAIS: O PARADOXO CAMPESINO, SEM RESTITUIÇÃO E DESLOCADO FORÇADO

O passo da Unidade de Restituição de Terras nas áreas Serranas de Fundación e Aracataca mostra uns discretos resultados em termos de restituição territorial integral às famílias campesinas e indígenas. Isto numa circunstância crucial para essa política: a fixação do decreto 1167 de 2018 que determinou o fim da recepção das solicitações firmado pelo ex presidente Juan Manuel Santos antes de sair de seu cargo no executivo e quem argumentou que as vítimas se lhes havia respondido “*de manera eficaz, rápida, oportuna y creciente*”. No entanto, apesar de que não existe um consenso sobre qual é a dimensão do despojo, algumas pesquisas afirmam que foi de mais de 6 milhões de hectares de terra despojadas ou abandonadas que se estima existem em Colômbia. Dessas, a URT apenas tem restituído 338.362, o que não representa nem o 6%. (SANCHEZ, 2019). Outras cifras afirmam que são oito milhões de hectares as usurpadas, das quais, não têm se conseguido restituir nenhuma quarta parte (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019).

No informe entregue à CIDH por parte das 12 organizações nas quais se examinou a verificação o nível de cumprimento e satisfação dos direitos das vítimas no momento em que a Corte Constitucional de Colômbia exigiu a extensão da vigência da Lei 1448 (EL

ESPECTADOR, 2019), a conclusão é clara: *el Estado Colombiano no ha cumplido con la garantía del derecho a la restitución de comunidades campesinas y étnicas*” (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019).

Mesmo que a política de restituição de terras tem sido de muita importância para o restabelecimento dos direitos de propriedade das vítimas no contexto de conflito armado do país, assim como dos direitos territoriais dos povos étnicos, e da construção de paz, como é falado pelas organizações que participaram da construção do informe; os esforços do governo estão encaminhados a mostrar resultados formais e não substanciais, instrumentalizando a restituição de terras e *“dar por superado el capítulo del despojo en Colômbia. La agenda política transita hacia la llamada “seguridad jurídica para los inversionistas” donde todas las reformas normativas y de política agrária están orientadas a hacer un borrón de la historia de despojo a sangre y fuego”* (COMISIÓN COLÔMBIANA DE JURISTAS, 2019).

Por uma parte, os arhuacos representados na *Confederación Indígena Tairona* (CIT), fizeram uma solicitação de restituição coletiva baixo o decreto 4633 que apenas chegou a sua primeira etapa: o estudo preliminar (FUNCIONARIO 2; FUNCIONARIO 4). A atuação da URT com os líderes arhuacos foi feita de maneira separada entre o escritório de Santa Marta e o escritório da cidade de Valledupar, que atua nos territórios orientais da Serra. Nas áreas altas de Fundación e Aracataca, se assegura que *“se llegó el estudio preliminar con los arhuacos, porque en Valledupar ellos tienen otras cosas con la Unidad de Restitución que no sé qué en qué terminaron [...] ese estudio preliminar y esas medidas nunca se terminaron, por lo tanto, nunca se presentaron al juez”* (FUNCIONARIA 5).

O processo de restituição solicitado pelo grupo de líderes arhuacos do lado ocidental da Serra que foi acompanhado pela equipe étnica do escritório da URT do departamento de Magdalena, nunca se terminou. Uma das funcionárias da equipe étnica assegura que *“nunca le pusieron atención eso y se quedó ahí, eso está en el aire, ahí no hay nada. [...] Ese estudio preliminar no se terminó [...] no hay una decisión frente al tema, nunca se le dio respuesta a la medida cautelar ni a la solicitud de la cuenca del Fundación y Aracataca* (FUNCIONARIO 2). Para o ano 2017 a equipe étnica foi acabada sem que se desse tramite nessa solicitude coletiva tramitada pelo decreto 4633.

Por outra parte, a situação campesina resultou ainda mais marginalizam-te. A diferença das populações indígenas, quem também padeceram os rigores da guerra, mas que tiveram um maior sucesso em suas pretensões territoriais durante os anos da guerra contras-insurgente, um número importante de campesinos e campesinas foram deslocadas forçadamente, perdendo sua

vocação como agricultores. Por exemplo, das 15 famílias campestinas que contatei para esta dissertação que abandonaram suas terras e venderam para os indígenas nos territórios serranos da bacias dos rios Fundación e Aracataca, todas moram para o ano do trabalho de campo (2019) em outros povoados ou cidades do Caribe, Bogotá ou Venezuela, e nenhum tinha sido sujeito de reparação por parte do escritório de restituição de terras do Magdalena. Conta um dos funcionários da área social que participou da execução da política de restituição em Fundación, que

...hasta cuando yo estuve ahí no hubo avances en los derechos de las comunidades campesinas. La mayoría de los solicitantes con los que uno hablaba pues terminaron volviéndose personas desplazadas en Fundación o en Santa Marta, otros en Bogotá o en Venezuela, en muchos lados. Ya después terminaron haciendo sus vidas ahí perdiendo su vocación campesina, con la excepción de alguna persona ya vieja y demás y eso, casi todos terminaron convirtiéndose en desplazados de las zonas urbanas, perdiendo sus fincas o vendiéndose por esos precios y muchos sin poder volver a ellas en algún momento [...] como que eso entró en un bucle ahí de un sin salida porque no se sabía bien qué decisiones tomar y además las pruebas estaban muy flojas. Yo antes de irme de la URT me asignaron casos de Fundación y varios estaban después de dos años en el mismo estado de avance (FUNCIONARIO 6).

En el avance de la política de restitución esas zonas no se tienen procesos concluidos. Campesinos tienen algunos, pero no es muy notorio. En términos de la ruta étnica no va a pasar nada. [...] No esos casos no las van a retomar ya (FUNCIONARIA 2)

Apesar da importante labor e o compromisso político de muitas pessoas das equipes de trabalho no processo de reparação territorial das famílias campestinas solicitantes de restituição de terras, ditos esforços não foram suficientes para reparar e restabelecer os direitos territoriais dessas comunidades. Inclusive, como se observa no seguinte relato, em alguns casos a participação nos cenários institucionais de restituição de terras para vítimas do conflito armado, significou a abertura das feridas das histórias de violência com expectativas na reparação que nunca chegou, o que terminou sendo um acerta revitimização. Isso é bem explicado no seguinte relato:

Ahí es donde también hago la reflexión ahora, más que reparadora es revictimizadora porque se les creó una expectativa importante, lo que hizo la URT fue ir, hurgarles en las heridas, y negarles. Los resultados de negación como resultado, entonces todo eso constituye al final es el solicitante. Va a la unidad, cuenta la historia, se le resuelven los sentimientos, lo invitan a una jornada comunitaria y los mismo, luego una ampliación, la plata cuanta ... hasta que después [...] Sí, como que viéndolo ahora en perspectiva y que llevan más de 10 años de trabajo y demás si uno analiza la implementación de esa política tanto desde dentro como desde fuera, pero hablo sobre todo desde la oportunidad de estar adentro, si uno mira todas las solicitudes que se trabajaron y el porcentaje de casos que efectivamente fueron reparados,

pues yo si pienso que es una política que más que buscar ese espíritu reparador, de verdad, de justicia transicional completa, lo que terminó convirtiéndose fue en un asunto de revictimización donde no se le dio respuesta. No se cumplió con la reparación de todas esas personas que fueron afectadas y que siguen siendo afectadas por el conflicto armado allá en esas zonas. Pero en general en todo el país, la cifras estas del 70% - 30% son nacionales. Casi que se puede decir que es una política nacional que ha hecho eso. No se puede desconocer que hay muchos casos que efectivamente se niegan, pero yo no creo que lleguen al 70%. (FUNCIONARIO 6).

Como foi mostrado pela Comissão Colômbiana de juristas, as metas que excedem o 100% de operação para o dezembro de 2017, “*se fundan en una alta negación de las solicitudes a las víctimas que se presentaron ante la entidad a fin de reclamar la restitución de tierras, lo que implicaría un exilio formal frente al fracaso sustancial*” (CCJ, 2018). De fato, desde a lente da Comissão, se recomenda a revisão da legalidade das decisões de negação e de desistência de participar do processo de restituição.

A frágil organização campesina e construção coletiva e política que vinha afetada desde os anos da guerra contra insurgente, terminou prejudicando também as fases de intervenção da URT em Fundación e Aracataca, isto em detrimento do impulso organizativo dos indígenas arhuacos. Como foi falado nas entrevistas, finalmente essas políticas da justiça transicional nem repararam as vítimas materialmente com as terras solicitadas em restituição, nem muito menos repararam a dimensão do campesinato como sujeito coletivo, uma das medidas de reparação territorial que se colocava a lei 1448 de 2011.

Una de las cosas que uno ve del conflicto en el Caribe y especialmente en la Sierra es como todo este tema de la incursión paramilitar y esa política antisubversiva que se implementó en el Caribe pues también atacó mucho los sujetos colectivos: todo lo que fuera organización, juntas de acción comunal, lo que fuera como sindicato, cooperativas, todo lo que fuera sujetos colectivos en pro del campesinado y demás, fueron atacados por el paramilitarismo y mucho sobrevivieron pero, sobre todo en esta zona, uno no reconoce. Los pocos como que fueron atacados. Muchas veces estas políticas reparadoras y de justicia transicional son una ventana de oportunidad para que se pueda recuperar ese sujeto colectivo o eso cree uno ... que sea la excusa esto de crear uno [...] Lo que pensaba es que la forma como se fueron haciendo esas pruebas colectivas a toda velocidad priorizando como el resultado, más que la calidad, pues no permitieron lograr esa consolidación y cuando se solicitó volver hacer, se murió por completo la posibilidad que tiene estas políticas reparadoras de fomentar que surgen estos sujetos colectivos o que si existían se fortalezcan y vuelvan a funcionar. (FUNCIONARIO 6).

Cabe destacar que os processos organizativos campesinos dos territórios estudados nesta dissertação diferem com os de outras sub regiões do Caribe Colombiano que tem maior coesão política que reflète em suas demandas contenciosas frente a defesa de seus direitos territoriais, que contrasta com o ímpeto das organizações indígenas frente ao avanço de suas

pretensões territoriais. Isto é bem assinalado pelo funcionário da DAE na Bogotá e uma funcionária do nível local.

En el tema de la Sierra, el campesino de la Sierra es otros campesinos. Es un campesino menos beligerante y a mí me parece que menos con el sentido organizativo que sí tienen estos manes del Catatumbo. ¡Esos manes tienen un proceso político ni el hijueputa! Entonces uno [como Estado] no llega allá a improvisar ... no allá a uno le toca llegar preparado al garrotazo porque la gente allá lee lo estructural y dice acá usted no me viene a ... [...] En el Perijá es distinto, allá hay un nivel mayor de cohesión política alrededor de la tierra. (FUNCIONARIO 3).

R. Sí, es así. Los arhuacos son la única... ellos tienen la CIT que es el único pueblo que tiene su propia confederación en la Mesa Permanente de Concertación. [...] Entonces ellos sí tienen un poder... no un poder, una representación política mucho mayor que otros pueblos de Colômbia. [...] ellos han sabido leer los momentos políticos ha hechos que se posiciones. Además son indios, vienen con su gorrito, etc. [...] Yo no conocí ningún movimiento campesino fuerte ni representativo que pudiera hacerles contra peso a los indígenas. En la experiencia que estuvimos allá nunca se presentó como alguien tan organizado como lo están los indígenas (FUNCIONARIA 2).

Esta problemática acontece no meio de umas excessivas práticas de trâmites administrativos e burocráticos. Como me falaram, um dia no escritório de terras do Magdalena para as equipes que entrevistei, se dá entre as análises e o estudo próprio dos casos, e a excessiva documentação da burocracia do trâmite de restituição. A falta de interesse sobre a vocação reparadora da lei, envolvida na burocratização das metas para mostrar resultados sobre essa política, dificultou a interação com os campesinos vítimas do conflito armado, pouco preparados organizativamente e como medos que em muitos casos ainda permanecem abertos.

Un 50% a sentarse analizar un caso de restitución, empezar a sustanciarlo, a resolverlo, a pedir las pruebas, si como tal; y el otro 50% considero yo que es para diligenciamiento de formatos, traslados documentales, temas de forma dentro del trámite que un solicitante o una víctima nunca va a saber y que no incide en la decisión para la víctima (FUNCIONARIO 4).

Muchas veces no se tenía en cuenta las personas que asisten, entonces, campesinos sin escolaridad, que nunca han pasado por una escuela, señoras tímidas que son las que están solicitando porque sus esposos murieron en la guerra y ahora eran ellas solicitando (FUNCIONARIO 6).

Além da burocratização, é manifesto que o olhar a partir da lente multicultural é o que terminou legitimando o argumento favorável para as compras de terras de campesinos pobres deslocados pelo resguardo arhuaco durante os anos da guerra contra insurgente como parte da recuperação territorial dessas comunidades. Desde essa perspectiva não é considerado o contexto volátil de violência, pelo que se decidiram várias negações de direito de inícios dos

processos de restituição e de inscrição de terras campesinas solicitadas em restituição. Mais que uma leitura intercultural desses territórios, o que primou foi um modelo baseado nas marcas de certos sujeitos étnicos que sugeriu “desmarcar” muitos outros com efeitos políticos inesperados (BRIONES 2001; BOCAREJO, 2015) que seria manifesto no marco das práticas e discursos da reparação da lei de restituição.

Em suma, a intervenção da política de restituição nas partes altas da Serra nos rios de Fundación e Aracataca pouco ajudou na reparação territorial material e dos tecidos sociais dessas comunidades, com um maior prejuízo sobre os territórios campesinos. As representações fixas do uso e da posse de imagens contrapostas do que é um lugar indígena e um campesino, operou como argumento para entender as compras de terras a campesinos como parte da recuperação dos territórios ancestrais indígenas.

A reconfiguração socioespacial que deixou os anos de recrudescimento da violência que limitou a capacidade que têm as comunidades campesinas de explorar seus meios de sustento e suas formas de vida, contrastou com os processos de retomada dessas terras por parte do resguardo arhuaco. Dita realidade era tomada como um fato certo e imodificável.

Eso era lo que nunca entendía Pedro el catastral, ya es un hecho cumplido, ya están esos pueblos indígenas ahí. Ya cambia la lógica y la dinámica de cómo se va mover todo lo de tierras en la región. Y para los campesinos ya los indios se les metieron, ósea ya no tienen chance. Entonces ¿cómo se hace aquí un proceso de restitución? Si no es en una lógica de acuerdo entre la gente, no. Y si desde la Unidad no manifestamos esa realidad, que el mapa oficial... el mapa oficial vale copa! en Colômbia todos valen copa! Hay otras cartografías que son las reales (FUNCIONARIO 1).

Por fim, cabe lembrar que ditos conflitos interculturais no marco da execução da política de restituição de terras de fato apareceram inclusive nas reuniões das construções dos programas rurais e agrários para a construção dos *Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial* (PDET) ou o avanço do *Plan de Catastro Multipropósito* como uma das ações de formalização no marco dos acordos de paz¹³⁵. A seguinte cita exemplifica as realidades campesinas depois do passo do escritório da URT em Fundación e Aracataca: “*P ¿en términos de restablecer los derechos territoriales de esa comunidades de Aracataca y Fundación, la ley de restitución consiguió su objetivo? R: Ni mierda... eso lo veíamos en las reuniones de los PDET’s... comunidades fragmentadas*” (FUNCIONARIO 1). A falta de acordos entre as comunidades fragmentou suas agendas comuns frente ao manejo da construção dos PDET’s, inclusive, entre os líderes arhuacos. “*El PDET lo trabajaron en cabeza de Valledupar y pasaron por encima de*

¹³⁵ No marco dos acordos de paz entre o Estado Colômbiano e as guerrilhas das Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia - Exercito do Povo (FARC) – EP) 170 municípios e Catastro multipropósito.

nosotros y nosotros no quedamos dentro del PDET. Es decir, sinceramente no sé cómo será porque se supone que debe contemplar todas las poblaciones indígenas que están en Fundación, en Aracataca, que están en el departamento del Magdalena, pero eso lo dejaron allá [en Valledupar]” (LIDER INDIGENA 1).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

As relações e interações históricas das comunidades étnico-rurais na América Latina tem sofrido uma serie de transformações dinâmicas e contingentes, que envolvem diferentes contextos e conjunturas que as explicam e as definem. Com a relação colonial e posterior advento das formações jurídicas do que se conhece como os Estados-Nação, as formações territoriais se estruturaram e organizaram, por uma parte, a partir das contradições do modelo de desenvolvimento que privilegiou a concentração da propriedade, da riqueza e dos recursos; e por outra, a partir da acumulação da miséria que com o passo de tempo configuraram nodos de disputas e conflitos entre os historicamente subalternizados e marginados, conflitos alimentados e produzidos em muitos casos pelas esferas estatais.

Em geral, no início desta pesquisa foram propostas quatro questões para desenvolver:

- Quais são os contextos agrários regionais em que surgiram os conflitos territoriais que existem entre as comunidades campesinas e os povos indígenas da SNSM?
- Que tipos de sujeitos, de organizações e de espaços agrários resultaram do surgimento do conflito armado e em particular dos anos da violência contra insurgente na SNSM?
- Quais são as implicações sociais, políticas e territoriais dos conflitos territoriais entre as comunidades campesinas e os povos indígenas do multiculturalismo operativo na SNSM no contexto de deslocamentos forçado e nas geografias do despojo?
- Que implicações políticas e territoriais tiveram as diferenciações étnicas do multiculturalismo neoliberal em Colômbia durante os anos da intervenção da política de restituição de terras, levando-se em conta o contexto atual da região?

Para reponde-las foi desenvolvida uma pesquisa de escala local, concretamente nas partes altas dos rios e municípios de Aracataca e Fundación, departamento do Magdalena, no norte da Colômbia, mas levando em conta que se trata de um problema de ordem regional e até mesmo nacional. Vários destes conflitos se apresentam em diversas regiões da Colômbia com intensidade e implicações diferenciadas.

7.1 QUAIS SÃO OS CONTEXTOS AGRÁRIOS REGIONAIS EM QUE SURGIRAM OS CONFLITOS TERRITORIAIS QUE EXISTEM ENTRE AS COMUNIDADES CAMPESINOS E OS POVOS INDÍGENAS DA SNSM?

Em primeiro lugar, se observou que hoje na Serra Nevada de Santa Marta acontecem alguns conflitos interculturais pelo reconhecimento ao acesso, uso e posse da terra que respondem a dois tipos de conflito inter-relacionados: um conflito da ordem agrária e outros, conflitos da ordem territorial que envolvem diversos agentes sociais.

Como observado nesta dissertação, identificar as razões estruturais destes conflitos exigiu estudar, por uma parte, os traços dos processos de formação sócio territoriais da sub-região das planícies e as zona montanhosas da vertente ocidental da SNSM a partir de um modelo de concentração fundiária e da reprodução do capital; e por outra, a reconstrução sócio histórica das diversas temporalidades e trajetórias dos campesinos e as disjunções e confrontos que se constituíram com os povos indígenas das partes altas dos rios de Aracataca e Fundación na SNSM.

Por uma parte, os conflitos agrários que me aproximei, estão relacionados aos problemas vinculados à posse, acesso, uso e propriedade na ordem local, regional e nacional. Em geral, tem a ver com confrontações relacionadas com o mecanismo de acumulação e desenvolvimento econômico, estreitamente ligados à concentração fundiária e o papel do rural. Neste sentido, demonstrei como a estrutura agrária da região norte do departamento de Magdalena fez parte dos processos comuns da Colômbia em que se formaram as regiões a partir da concentração de terras por meios ilícitos, como a usurpação, levada a cabo em complexos contextos de guerras civis e com a aquiescência e a tolerância das autoridades que iniciou logo depois das guerras independentistas (FAJARDO, 2005) e que se estendeu até entrada da década de 1940, com o advento da república.

Pode-se afirmar então que este tipo de conflito tem a ver com a terra e seus recursos, delimitado por relações da posse e o controle da terra, fundamentado na legislação voltada à defesa da propriedade privada e as políticas de desenvolvimento do modelo moderno/colonial que promoveu a expansão do capital em América Latina (SOLÁ, 2017). Tanto no município de Fundación como Aracataca, e em geral em toda a sub-região norte do departamento de Magdalena, se configurou uma estrutura agrária fundamentada na concentração da propriedade e a acumulação da riqueza pelas elites regionais, ligada aos mercados internacionais.

No entanto, por outra parte, os problemas territoriais envolvem uma dimensão maior do que a terra, entendida como fator produtivo. (RINCON, 2013). Nesse sentido, entender os

problemas territoriais têm origem no território, envolvendo elementos da ordem cultural, social, política, economia e ambiental. Estes elementos estão interligados nas perspectivas de arranjo territorial e do exercício do poder no território (RINCON, 2013); da materialidade e idealidade; que acontecem numa complexa relação tempo – espaço (HAESBAERT, 2007), entre os agentes envolvidos no processo de produção territorial impõem ou negociam.

Com relação aos agentes envolvidos neste tipo de conflitos, no caso das partes altas dos municípios de Aracataca e Fundación, estão os confrontos pela posse e o uso da terra que surgiram com o processo de constituição das tessituras, nodosidades e redes de colonos que criaram vizinhanças, acessos, convergências da territorialidade campesina, mas no marco das disjunções, rupturas e distanciamentos (RAFFESTIN, 1980) com outros povos também marginalizados como os indígenas do povo arhuaco.

Cabe destacar que existem em outros casos, mesmo que não estudados nesta dissertação, outros tipos de confrontos-relações entre campesinos, afro Colombianos com indígenas arhuacos, koguis e kankuamos. Em alguns casos, existem conflitos interétnicos ao interior dos 4 povos indígenas principalmente pelas representatividades e o controle de recursos, produto das relações com as instituições do Estado Colombiano e organizações da ordem local, nacional e internacional. E também, conflitos interétnicos entre indígenas com comunidades negras.

Em geral, campesinos, afrodescendentes e indígenas se confrontam com empresários nacionais e internacionais e com o Estado e suas diversas entidades, sejam civis ou militares, ainda que nos casos aqui estudados, estas terminem incidindo nas confrontações mais do tipo intercultural, especificamente campesinos e indígenas. Usualmente, estes agentes encontram-se envolvidos em conflitos de ordem agrária e de ordem territorial.

Além destas explicações, em específico, tentei mostrar como com a formação das territorialidades campesinas com o processo de colonização na Serra de meados do século XX, configurou-se as confrontações e disputas com as comunidades indígenas pelo uso e posse da terra nas áreas dos solos menos produtivos e de menos interesse pelo capital internacional.

Por fim, outro dos conflitos de ordem territorial que abordei, correspondeu aqueles derivados do conflito armado interno e da geopolítica, que necessariamente exacerba os conflitos interculturais e interétnicos. Neste sentido, é possível afirmar como falam vários autores que existem conflitos entre vizinhos étnicos e não étnicos; conflitos derivados do conflito armado interno e da guerra entre agentes armados pelo controle territorial; assim como conflitos territoriais entre grandes investidores financeiros e sujeitos étnicos (HOFFMANN, 2002; RINCÓN, 2013; DUARTE, 2015).

7.2. QUE TIPOS DE SUJEITOS E DE ESPAÇOS AGRÁRIOS RESULTARAM DO SURGIMENTO DO CONFLITO ARMADO E EM PARTICULAR DOS ANOS DA VIOLÊNCIA CONTRA INSURGENTE NA SNSM?

Precisamente, o segundo processo explicado na primeira parte desta dissertação foi o que denominei como territorialização da violência nas cotidianidades étnico-rurais da SNSM. Esta se expressa na forma como se desenvolveu o processo de conflito armado na região relacionado com a localização geopolítica, as rendas das economias ilegais, e a proteção à acumulação da propriedade e da riqueza de latifundiários regionais e elites nacionais.

A compreensão dos ciclos da violência na SNSM, em concreto, os de meados dos anos noventa durante a escalada e a difusão das forças de mercenários paramilitares, me permitiu entender a reconfiguração cotidiana da acumulação no espaço dos sujeitos étnico-rurais das áreas serranas das baciadas hidrográficas dos rios Fundación e Aracataca.

Desde a aparição dos grupos armados ilegais dos *combos marimberos* em função do tráfico de *cannabis* e de coca; a chegada das guerrilhas; e a difusão e consolidação da dos grupos paramilitares em convivência com as Forças Armadas do Estado para combater os grupos insurgentes; a violência se constituiu como mecanismo de poder e disputa entre atores armados legais e ilegais pelo controle geopolítico do território e de suas populações.

Expus como os conflitos de ordem territorial relacionados ao conflito armado interno na Colômbia, foram mais complexos a meados dos anos noventa. Com a promoção de uma política de segurança nacional fundamentada numa lógica contra insurgente, que emerge como desejo de conservação do poder; o interesse objetivo do aparato estatal se concentrou na defesa das frações da classe dominante (FRANCO, 2009; GUTIERREZ, 2014), o que se manifestou numa contrarreforma agrária no Caribe Colombiano.

No caso da sub-região e dos municípios analisados nesta dissertação, expliquei que o interesse –desde a perspectiva de Franco (2009) - é analisado desde dois âmbitos: um, o domínio da estrutura política e das práticas políticas; e dois, o interesse sobre a custódia da propriedade privada como expressão específica do desejo de conservação do poder. A compreensão das razões estruturantes da violência contra insurgente brindou elementos para compreender como ela é produto da aliança de interesses políticos e econômicos dominantes, representados pelo Estado, que excede a dimensão militar e se estrutura em um âmbito político e ideológico. (FRANCO, 2009; GUETIERREZ, 2014).

Por sua vez, o controle cotidiano das populações serranas por atores armados terminou sendo parte dos interesses estratégicos que junto as ações armadas, buscaram a legitimação da violência frente às populações étnico-rurais para conseguir seu apoio e aval. Foi analisado como durante os anos do avanço, difusão e consolidação territorial dos grupos paramilitares, dito controle se acrescentaria produzindo efeitos devastadores sobre essas populações.

O aumento das práticas de violência foi justificado a partir da definição política do inimigo da guerra contra insurgente, própria da mecânica da *Doctrina de Seguridad Nacional* que se estruturou nesse período, de acordo com os objetos do conflito no campo político interior e no diálogo com a política anticomunista da ordem externa (FRANCO, 2009).

A definição política do inimigo não somente contemplou os meros fatos de violência da insurgência (inimigo efetivo), mas também todo aquele que pudesse afetar ou ameaçar na escala local e nacional os interesses de concentração e acumulação hegemônicos das elites regionais e nacionais. Nesse caso, o inimigo objetivo ou inimigo imaginado (FRANCO, 2009). O primeiro dos antagonistas é inimigo armado, enquanto o segundo é a comunidade de legitimação. Nesse sentido, na Serra como em diferentes sub-regiões do Caribe Colombiano, o inimigo objetivo foi igualmente perseguido quando a suspeita de rebelião não é clara, acusando assim a organizações com reclamações contenciosas ou populações como obstáculo dos interesses dominantes do bloco contra insurgente, de ser parte do inimigo efetivo com base em algum traço, circunstância ou comportamento para justificar sua persecução e aniquilação.

É manifesto que para o Estado e o bloco de poder dominante o inimigo é antes de tudo político e não simplesmente inimigo militar (FRANCO, 2009). Quer dizer que não é só aquele que, baixo a estratégia guerrilheira, disputa o monopólio da força. É também aquele que, cujas reivindicações reformistas em um contexto espacial e temporal determinado, se opõe ao desejo de acumular e manter o acumulado, e pode chegar a alimentar a configuração de um projeto político oposto ao hegemônico.

Desde meados dos noventa se reforçou a ideia de que tudo o que se opusesse ou fosse obstáculo para a consolidação dos interesses do bloco contra insurgente, passou a ser visto como inimigo ferozmente perseguidos durante o escalamento e a difusão das forças irregulares. Sobre esse princípio, configurou-se então um julgamento sobre os campesinos serranos e alguns indígenas como auxiliadores ou simpatizantes da guerrilha, dado o fato de terem sido setores que esse grupo armado controlou e transitou desde a década oitenta. A evidencia empírica sugere então que com o escalamento da violência, a ideia afiançada de que nas áreas urbanas – zonas historicamente controladas pelo mercenarismo contra insurgente que começavam a se

agrupar no denominado *Bloque Norte de las AUC* – o campesino serrano era guerrilheiro pelo fato de morar nesses setores. Isto, foi determinante na definição do campesinos como inimigo potencial ao ocupar em áreas geopoliticamente estratégicas para a defesa dos interesses hegemônicos.

O terceiro processo explicado foi como, de fato, a violência se enquistou nas relações socioespaciais do dia a dia, nas formas de agir (e não agir), no controle sobre esses corpos, nas maneiras de se relacionar entre vizinhos e nas maneiras estratégicas de (sobre)viver em condições absurdamente adversas. As territorialidades rurais seriam instrumentalizadas pelas lógicas cotidianas de uma produção (e destruição) do espaço numa lógica “amigo-inimigo”, onde se agudizou a associação dos campesinos serranos com a insurgência por parte de paramilitares mercenários e membros do Exército Nacional, a Polícia Nacional e as autoridades judiciárias; em suma, do bloco contra insurgente.

Sobre o fundamento da disputa do território e da legitimidade, a estratégia contra insurgente focou sua atenção em buscar estabelecer os próprios apoios e simpatias com efeitos inesperados entre as populações subalternas.

Foi explicado também como a configuração violenta do espaço para prevenir e castigar, para disciplinar e desorganizar, para estabilizar e regular, se estabeleceu em dois momentos: a “guerra como ação” e o “estado de guerra” (FRANCO, 2009). Os mecanismos de reprodução e as formas adotadas da violência no tempo da “guerra como ação”, definiram o “estado de guerra”. Neste último, a violência exercida sobre a base da impunidade exhibe os resultados de sua missão de desorganização e, portanto, sua função de estabilização e regularização (FRANCO, 2009).

Deste modo, a produção de terror nas cotidianidades dessas territorialidades rurais na SNSM, sobre a base da repressão e a exacerbação das práticas violentas com o fim de derrotar o “inimigo efetivo” e “inimigo objetivo”; serviu de comunicação e propaganda para os sobreviventes sobre as consequências de proceder com os rebeldes ou contra os interesses dominantes. Em suma, pode-se afirmar que nos territórios montanhosos dos rios de Aracataca e Fundación, a destruição do sujeito, da subjetividade e das noções de coletividade, se constituiu como um dos principais efeitos nas trajetórias territoriais das populações subalternas, através de práticas de assassinatos, desaparecimento forçada, massacres, e deslocamento forçado.

A reprodução do espaço agrário serrano, assim como as áreas urbanas e rurais das planícies, são resultado dessa configuração da territorialização da violência e da convivência das vítimas com os agressores nas diferentes fases da guerras. Isso significou uma territorialização

do medo que levou à prevenção de qualquer forma de associação com finalidades contenciosas. Em síntese, as violências com fins punitivo e preventivo, afirma Franco (2009), ao tempo em que veda a população da influência das guerrilhas ou a desencorajá-la de se organizar em torno de reclamações, mantém a configuração da ordem porque aponta em longo prazo a difusão do medo e, portanto, da destruição de sujeitos e subjetividades (FRANCO, 2009).

Desta maneira, o escalamento e consolidação dos grupos de mercenarismo paramilitar através da repressão com métodos violentos no ciclo denominado como “guerra como ação” (FRANCO, 2009), teve efeitos singulares sobre a produção do espaço e dos sujeitos étnico-rurais da SNSM configurados a partir de um processo de desterritorialização ou deslocamento forçado tanto simbólico, com a destruição de símbolos, marcos históricos, identidades; quanto concreto, material – político e ou econômico, pela destruição de antigos laços/fronteira econômico-política de integração (HAESBAERT, 1995).

A desterritorialização e os aglomerados de exclusão para Haesbaert (1995), se associa ao “não regulado/ordenado, onde a imprevisibilidade é uma condição essencial e fica difícil conviver [...] com a lógica da geografia das redes e territórios” (HAESBAERT, 1995, p. 185). Num sentido mais abstrato, “o aglomerado compreenderia os grupos marginais no sentido de exclusão social de fato, o que significa a própria exclusão do circuito capitalismo explorador, típica desterritorialização que as redes das classes sociais hegemônicas promovem no espaço dos miseráveis (HAESBAERT, 1995, p 185).

Pode-se interpretar então as realidades campesinas da Serra como aglomerados de exclusão, marcados pela desterritorialização extrema e pela instabilidade e a insegurança constantes, principalmente em termos de condições materiais de sobrevivência, pela violência frequente e pela mobilidade destruidora de identidades (HAESBAERT, 1995). Para o autor, estes são espaços sobre os quais os grupos sociais dispõem de menor controle e segurança, material e simbólica.

Agora bem, na SNSM e na região Caribe depois da “guerra como ação”, nos anos do escalamento da violência em suas diversas formas e funcionalidades, se instaurou uma “guerra como estado” (FRANCO, 2009), cuja principal característica foi ter sido um ciclo onde desceram as cifras mas numa fase onde não acabou a guerra. Esta fase denominada de pós desmobilização dos paramilitares se deu no contexto do processo de paz entre os grupos de paramilitares relacionados com o tráfico de drogas e o controle de economias ilegais, e o governo de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Nesse percurso de tempo, mais que terminar a violência, se reconfigurou a disputa desses territórios entre grupos de paramilitares locais e extra regionais,

numa cotidianidade de comunidades indígenas e camponesas atravessadas pelo passado de terror e de medo que continuamente se atualizam no presente dessas territorialidades.

A dominação e o controle desses sujeitos e espaços resultantes de altos ciclos de violência, fizeram desse território étnico-rurais uma geografia constituída sobre a base do medo e do terror do passado (FRANCO, 2009). Com a “interiorização da repressão” ou “internalização do medo” (GARAVITO, 2005) não foi imprescindível a violência de manifesto, pois durante o “estado de guerra” o medo funciona como marca indelével da repressão, regulação e disciplinamento.

O medo e o terror como disciplinamento operou, sem dúvida alguma, como uma das características organizativas fundamentais para compreender as territorialidades camponesas das partes montanhosas de Aracataca e Fundación. A anulação da intenção da ação e a mobilização política das vítimas dessa repressão que experimentaram fatos traumáticos que se inscreveram como rastro na memória individual e coletiva dessas comunidades serranas, teve consequências contraditórias e diferenciadas entre camponeses e indígenas da SNSM respeito aos conflitos pela posse e uso da terra e os territórios que aconteceram desde a aprovação da Corte Constitucional de 1991, e que motivou novas chances para o exercício da territorialidade indígena, “mas também novos conflitos, misturados com velhos problemas, evidenciando a mudança de identidades e sua instrumentalização para a transação de recursos sociais, políticos e econômicos” (RINCON, 2013, p. 283).

De outro lado, estudei como em meio da mobilização contra insurgente pela defesa da propriedade, a usurpação, desapropriação ou despojo de terras através de meios violentos e fraudulentos, se reconfiguraram os espaços e territórios marcados e atravessados pela crise dos deslocamentos forçados e a desterritorialização. No entanto, um dos pontos centrais da análise desta dissertação foi mostrar como ditos despojos ou desapropriações não são meramente a privação ou acumulação de recursos e dinâmicas de concentração da propriedade como comumente se entende no marco legislativo Colombiano, ONGs e entidades de corte internacional.

Uma das discussões centrais desta dissertação foi a de entender o despojo não é apenas a perda por meios violentos da posse de um bem por parte de atores armados. Mais que um evento particular, é resultado de processos violentos de espoliação e exclusão que se acumulam no espaço e que se entrecruzam em múltiplas escalas espaciais e temporais. Assim, o despojo nas partes montanhosas de Aracataca e Fundación na SNSM, é compreendido através das formas cotidianas que continuamente se atualizam. Entre o ciclo da consolidação da guerra

contra insurgente que denomino “guerra como ação”, e o ciclo de desmobilização das forças irregulares, “estado de guerra” (FRANCO, 2009), se constituíram vários mecanismos de despojo que resultam na produção (e destruição) do espaço através de práticas cotidianas, mecanismos que em alguns casos são silenciados.

Pode-se afirmar então, a partir da experiência como funcionário de Estado, das falas das comunidades camponesas e indígenas, das falas dos grupos de funcionários do escritório de restituição, e do material documentário de arquivo utilizado nesta pesquisa que, o que se configurou na SNSM foram uma geografia do despojo e do deslocamento forçado (OJEDA, 2016). Todavia, com consequências e implicações políticas entre as comunidades étnico rurais das áreas pesquisadas que chega a ser em extremo paradoxal.

7.3 QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E TERRITORIAIS DOS CONFLITOS INTERCULTURAIS ENTRE AS COMUNIDADES CAMPESINOS E OS POVOS INDÍGENAS NO MULTICULTURALISMO OPERATIVO NA SNSM NO CONTEXTO DE DESLOCAMENTOS FORZADOS E AS GEOGRAFIAS DO DESPOJO?

Existem alguns resultados do despojo geralmente silenciados e pouco abordados. As geografias resultantes da reconfiguração da violência em contextos de extrema marginalidade, terminaram com algumas complexidades concretas. O papel do Estado nos processos de despojo não exclusivamente a partir da confluência da violência estatal e para estatal, se deu não apenas com as políticas de desenvolvimento e a concentração de recursos naturais, mas também a través de modalidades paulatinas e menos visíveis do despojo como aqueles feitos em nome da natureza a través das políticas de conservação e o ecoturismo (CÁRDENAS, 2012; CARIO, MONTENEGRO, 2015; OJEDA, 2016).

Nos vários cenários, casos e lugares abordados neste trabalho de dissertação tiveram como objetivo principal mostrar outras facetas do despojo, a espoliação e o abandono, focado nas transformações socioespaciais que resultam em territórios com velhos problemas agrários e manifestos conflitos interculturais entre camponeses e indígenas pela permanência, o acesso e o uso das terras, e o reconhecimento territorial por parte do Estado e diversos atores multiescalares, em contextos de violência política.

Uma das ideias que desenvolvi na segunda parte da dissertação, a partir do quinto capítulo, se dedicou a problematizar o dia a dia no trabalho com camponeses e indígenas na SNSM no escritório de restituição de terras. Particularmente, discuti sobre as fronteiras e contornos que sobre a Serra existem fundamentados no multiculturalismo operativo que com a

aprovação da Constituição de 1991 na Colômbia, reconheceu aos indígenas direitos de múltipla índole, entre eles direitos territoriais e jurisdição especial indígena sobre aqueles territórios que em contextos de multiplex violações de direitos humanos, tomariam algumas formas inesperadas de marginalização.

Dividida política e administrativamente em três departamentos (Magdalena, Cesar e a Guajira) e onze municípios, a SNSM tem dois parques nacionais, uma zona de reserva ambiental, um parque arqueológico, uma reserva de biosfera da Unesco e três resguardos indígenas, além de algumas titulações de terras individuais a camponeses que nunca aparecem nos mapas oficiais. Estas divisões jurisdicionais da SNSM apresentam uma realidade muito complexa. Como construções legais que são elas, têm implicações e determinações no futuro das vidas de milhares de habitantes camponeses e indígenas da Serra e nos jeitos em que entre eles interatuam (BOCAREJO, 2015), num complexo “estado de guerra” numa geografia do despojo e do deslocamento forçado.

Enquanto a Constituição Política de 1991 reconheceu direitos territoriais e políticos entre outros de diversa índole das comunidades indígenas; os camponeses sofreram uma desvalorização como comunidade sócio territorial (RINCON, 2013; DUARTE, 2015). O complexo e volátil contexto sociopolítico das áreas montanhosas se aprofundou com as *articulações espaciais da indianidade* ou *da diferença*, logo após da aprovação da Constituição que criaram sedimentações discursivas com efeitos políticos tanto para indígenas como para não indígenas (BOCAREJO, 2015).

As marcações étnicas promovidas com o articulado legal de 1991, criou relações assimétricas entre as comunidades étnico-rurais. Assim, dito sistema de direitos diferenciais étnicos definiu a administração das diferenças e contornos políticos da relação entre indígenas e camponeses (BOCAREJO, 2015; DUARTE, 2015). As *articulações espaciais da diferença* resultado do multiculturalismo liberal, logo da aprovação da Constituição, configurou umas representações opostas sedimentadas através de duas imagens contrapostas do espaço: o espaço indígena, pensado como um repositório ambiental; e o espaço camponês, como símbolo de desenvolvimento agrário (BOVAREJO, 2015). As formações tanto de sujeitos indígenas como de camponeses estão encorados em práticas e prestações específicas de “seu” espaço que se materializa nuns conflitos territoriais entre camponeses e indígenas.

O jogo histórico de sedimentações de marcas nas quais emergem as formações nacionais de alteridade da Constituição Política de Colômbia de 1991, evidenciam complexas articulações entre sistemas econômicos, estruturas sociais, instituições jurídico-políticas e

aparatos ideológicos prevalentes nos respectivos países (BRIONES, 2005). Os contextos e processos de formação de grupos alterizados com base nos marcadores seletivamente raciais e étnicos, propostos desde lugares de poder, guardam detrás a produção de desigualdades (BRIONES, 2005), com manifestas implicações políticas para os não indígenas que repercutem em seus planos territoriais de vida na SNSM.

Como mostrei, o anterior pode ser corroborado nos programas e planos de gerenciamento estatal que sobre a Serra se executaram na época da desmobilização dos grupos paramilitares de meados dos anos dos mil. o programa de construção dos Povos Talanquera ou Povos Culturais, chamado oficialmente *Programa Cordón Ambiental y Tradicional de la SNSM*, e o programa Familias Guardabosque, Corazón del Mundo (FGCM). Ditos projetos se levaram a cabo em nome da conservação ambiental e a ampliação territorial dos indígenas do Resguardo Arhuaco da Serra, paradoxalmente em áreas de campesinos deslocados forçadamente pela violência paraestatal dos anos da guerra contra insurgente.

As articulações entre violência e conservação já eram comuns anos atrás nas áreas do Parque Nacional Natural Tayrona – PNNT. Desde então, foram manifestos como os discursos e práticas de conservação se traduziram em formas violentas de despojo mediante o apagamento das comunidades locais de campesinos como parte de ações estatais em nome do ambiente, da segurança e o desenvolvimento em programas de turismo (OJEDA, 2016).

Nesta lógica, os territórios das partes altas dos rios Aracataca e Fundación, durante o transito da pós-desmobilização dos grupos paramilitares, experimentaram articulações semelhantes mas não voltadas para o desenvolvimento do turismo –como no caso do PNNT -, mas para a formação dos Povos Talanqueras (ou Povos Culturais) e o controle militar desses territórios, sobre a base do raciocínio do discurso da conservação e a preservação, e os marcadores étnicos do multiculturalismo operativo Colombiano da Constituição de 1991.

A construção dos povoados indígenas e a implementação destes programas sociais em várias localidades da Serra, seria liderado pelo *Centro de Coordinación de Atención Ambiental* (CCAI), integrado pelas entidades do governo Colombiano que “*complementan y apoyan la recuperación militar del territorio*” (DPS, 2012; 14), baixo a coordenação do **Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social**. Eram os anos do *Plan Patriota* financiado pelo governo dos Estados Unidos na ofensiva do Exército Colombiano na guerra contra o narcotráfico e a recuperação dos territórios que estavam baixo a influência das guerrilhas. Desta forma, nos territórios campesinos da Serra nos municípios de Aracataca e Fundación, nasceram os Povos Talanquera de *Guanmaku, Kankawuarwa e Kantinarwa*; ao

tempo que se constituíram os Batalhões de Alta Montanha No 6 e o batalhão *El Cenizo*, onde os esquadrões de contraguerrilha do Exército Nacional eram formados.

Paradoxalmente, o programa se executou através das compras de terras de camponeses provavelmente deslocados pela violência e historicamente marginados das políticas agrárias e sociais. O avanço da criação dos povos se fez sobre as geografias do despojo que resultaram da acumulação de anos e anos de violência. A través do argumento da conservação e das imagens fixas do uso da terra, pelo qual a posse e o uso se fundem facilmente nas representações dos indígenas como nativos ecológicos, se fortaleceram as alianças destes com entes estatais e não estatais para fortalecer suas demandas territoriais. Esse relacionamento estreito entre indígenas e a proteção do meio ambiente, fundamento de programas e projetos de atores estatais e não estatais, deixou pouco espaço para as demandas territoriais futuras dos camponeses afetadas pelo contexto político e social que (re)configurou essas territorialidades através da violência.

Outro importante elemento que abordei foi o fato do crescimento das compras de terras por canais informais feitos pelos indígenas com recursos de órgãos estatais e de ONGs internacionais aos camponeses que experimentavam os rigores da guerra e que frente as pressões dos atores armados, terminaram vendendo a baixos preços. O ímpeto da ampliação territorial indígena desses anos, contrastava com as geografias do despojo e do deslocamento forçados de milhares de famílias camponesas, numa sub região onde o modelo latifundiário baseado na concentração da propriedade se aprofundava cada vez mais.

O paradoxo das construções das jurisdições e fronteiras étnicas na Serra paralelo à neoliberalização dos Estados (BRIONES, 1998; ULLOA, 2005; BOCAREJO, 2015) com manifestos incentivos ao agronegócio na sub região norte do Magdalena -garantidos dentro da ordem renovada do medo e o terror produzido pela guerra contra insurgente-, teve consequências diferentes nas comunidades subalternas que habitam a SNSM em contextos políticos e sociais voláteis. Mesmo que as duas comunidades viveram as atrocidades da violência guerrilheira, paramilitar e das forças militares, as políticas e planos que sobre a Serra se estabeleceram evidenciou um cenário desigual frente o acesso à terra entre as comunidades locais com efeitos devastadores para os camponeses.

Assim, no marco do multiculturalismo, as marcas de certos sujeitos significou “desmarcar” muitos outros (BRIONES 2001; BOCAREJO, 2015), configurando conflitos entre comunidades étnico-rurais que em contextos sociais e políticos voláteis, foram mais manifestos. Essas diferenciações têm sido determinantes nas pretensões organizativas e territoriais entre indígenas e camponeses na Serra.

É verdade que a constituição política de 1991 em Colômbia brindou uma oportunidade aos movimentos indígenas de acessar a logros antes inalcançáveis, entrando a participar em esferas nacionais e internacionais (RINCÓN, 2013). No entanto também é certo que criou certos marcos de representação destas comunidades, que a sua vez definiu uma representação do campesino como seu reflexo oposto (BOCAREJO, 2015). Isto, nos contextos de violência exacerbada e de marginalização histórica estatal como as que experimentaram várias famílias campesinas na Serra, significou em muitos casos, o deslocamento forçado e a venda de suas terras aos líderes indígenas.

O velho conflito agrário em que se erigiu o conflito entre campesinos e indígenas pelo uso e posse da terra, numa região aberta as políticas de desenvolvimento dos mercados mundiais tanto legais como ilegais; se agravou nos anos da guerra e anos posteriores do que denominei como “estado de guerra”, com consequências inesperadas na Serra amparadas nos traços do Estado multicultural e neoliberal. Sobre o argumento da conservação e a representação de um território ambiental, diferentes instituições de escala local e nacional, entregaram recursos que foram destinados para as compras de terras de famílias campesinas pelo Resguardo Arhuaco da Serra, representado pela Confederação Indígena Tayrona (CIT).

As consequências políticas nos planos coletivos dos exercícios de territorialidade da comunidade campesina na Serra, com efeitos profundos nas tessituras sociais, comunitárias e organizativas pelos anos da guerra contra insurgente, contrastam com a consolidação organizativa e territorial indígena. Programas como os Povoados Talanquera, as compras de terras com recursos de órgãos nacionais e ONGs internacionais, e a solicitação da regularização das áreas de resguardo pela CTI em 2011 ante a autoridade de terras, se enfocou paradoxalmente nas geografias do despojo e o deslocamento forçado das famílias campesinas, situação que não afetou os grandes latifúndios das elites locais e regionais.

O elemento principal de disputa nas partes altas dos rios Aracataca e Fundación, se relaciona com o processo de ampliação, saneamento e clarificação da propriedade no interior dos resguardos (reservas indígenas), adiantado pelas organizações indígenas. Isto, paradoxalmente se enfocou sobre as afetadas territorialidades campesinas, quem terminaram vendendo à CIT frente a falta de possibilidades de reprodução de meios de vida, com fatos traumáticos que se inscrevem como um rastro particularmente nítido na memória das pessoas (CABRERA, 2006), num contexto volátil de confrontações armadas pelo controle territorial da Serra.

Em suma, os instrumentos jurídicos diferenciais baseados nas políticas multiculturais que incidiram sobre os planos e programas estatais e de algumas organizações ambientalistas internacionais, fragmentaram e hierarquizaram as relações interculturais entre camponeses e indígenas frente a luta pela transformação e desconcentração fundiária na região. A crítica aos conflitos constituídos na Serra desde a perspectiva das políticas multiculturais e de desenvolvimento baseadas no neoliberalismo do Estado, fundamentados na reprodução simplista de oposições binárias entre indígenas e camponeses, tem favorecido aos interesses de latifundiários representados pelo Estado que não vem em perigo a lógica de acumulação da propriedade, da riqueza e do poder político (BOCAREJO, 2015).

Esta dissertação é uma proposta para compreender os conflitos territoriais não apenas desde a reprodução ampliada do capital do modelo agroindustrial e mineiro de exportação com as comunidades subalternas. É preciso também atingir os desafios que se apresentam na atualidade respeito aos diálogos e consensos interculturais como ferramenta da criação de processos territoriais entre as comunidades subalternas da Serra e de outros muitos territórios latino-americanos, que supere essas representações fixas construídas, para dar passo a criação de planos conjuntos de desenvolvimento sustentável que contemple indígenas, afro descendente e camponeses como sujeitos de resistência e de enfrentamento aos avanços históricos e atuais do capital.

A diferença de outras regiões onde atores organizados disputam o exercício da territorialidade como estratégia racional e política de controle do seu território ou do território que aspiram (RINCON, 2013; DUARTE, 2015); na Serra, os efeitos da reconfiguração da violência afetou maioritariamente os projetos de vida, comunitários e políticos das famílias camponesas deslocadas forçadamente que terminaram vendendo suas unidades a Confederação Indígena Tayrona (CIT) do povo arhuaco, cujas aspirações territoriais se enfocaram sobre as geografias do despojo, num complexo quadro de desigualdade social e marginalidade.

7.4 QUE IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E TERRITORIAIS TIVERAM AS DIFERENCIAÇÕES ÉTNICAS DO MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL EM COLÔMBIA DURANTE OS ANOS DA INTERVENÇÃO DA POLÍTICA DE RESTITUIÇÃO DE TERRAS, LEVANDO-SE EM CONTA O CONTEXTO ATUAL DA REGIÃO?

Por último, no 6º Capítulo mostrei, como os sistemas de direitos diferenciais étnicos do multiculturalismo operativo da Constituição Política de Colômbia de 1991, aparecem na cotidianidade de algumas das práticas e discursos dos funcionários e funcionárias estatais da Lei 1448 de 2011 conhecida como a lei de restituição de terras ou lei de vítimas. Frente às

dificuldades metodológicas de entrevistar aos solicitantes de restituição de terras dado o medo e o terror de falar sobre seus processos de restituição de terras, terminei por analisar pontualmente as práticas e discursos das equipes interdisciplinares que trabalharam casos de restituição campesinas e indígenas nas partes altas de Aracataca e Fundación.

Analisei então nesse último capítulo os processos de construção das diretrizes dos casos de solicitações de restituição de terras campesinas em territórios do resguardo arhuaco e áreas de pretensão de ampliação deste, e sua aplicação na prática e os discursos dos funcionários e funcionárias do escritório da Unidade de Restituição de Terras da regional Magdalena que intervieram nas sub-regiões de Fundación entre 2012 e 2019. Como expliquei, ditas diretrizes, se fundamentaram em grande medida nas “articulações espaciais de indianidade” (BOCAREJO, 2015) dos sistemas diferenciais de direitos étnicos da Constituição de 1991, com manifestas implicações políticas no reconhecimento campesino frente ao direito a reparação territorial dessas comunidades.

Os desejos e projeções sobre a Serra, enraizados em representações contrapostas do que se imaginam é um lugar indígena e um campesino, foram manifestos nas discussões das equipes e das decisões destas dentro do processo de restituição de terras nas áreas pesquisadas. Por uma parte, a solicitação coletiva de restituição territorial dos povos de indígenas arhuacos representados pela CIT, apenas chegou a sua primeira etapa. Mas, por outra parte, a reparação e restituição de direitos territoriais resultou ainda mais marginalizam-te para os campesinos.

A diferença das populações indígenas, quem também padeceram os rigores da guerra, mas que tiveram alguns sucessos em suas pretensões territoriais como a constituição dos Povos Talanquera, as compras de terras e a instauração da solicitude de ampliação do resguardo indígenas; as populações campesinas terminaram se convertendo em população deslocada forçadamente, sem vocação campesina, sem ferramentas organizativas e sem restituição dos direitos territoriais. Sobre o argumento de ser terras com expectativas de regularização para os indígenas e ser áreas de conservação ambiental, num contexto de uma alta burocratização estatal, as compras de terras de campesinos deslocados forçadamente foram interpretadas maioritariamente pelas equipes de funcionários e funcionárias como parte da recuperação dos territórios ancestrais indígenas, deixando de lado o contexto de violência nas que foram feitas as vendas.

Fundamentado na jurisprudência multicultural da Constituição Políticas de 1991, as diretrizes criaram mecanismos jurídicos no marco da lei de restituição de terras, nos que pouco espaço queda para as demandas territoriais dos campesinos afetadas pelo contexto político e

social que (re)configurou essas territorialidades através da violência. As compras de terras campesinas por parte da organização arhuaca foram lidas desde a lente do relacionamento estreito entre indígenas e a proteção do meio ambiente, sendo tomadas como um fato cumprido desconhecendo e silenciando outras formas do despojo como as de as comunidades campesinas de Aracataca e Fundación.

A intervenção da política de restituição de terras nas partes altas da Serra nos rios de Fundación e Aracataca, pouco ajudou na reparação territorial material e dos tecidos sociais das comunidades campesinas. Pelo contrário, incentivou os olhares dessas realidades territoriais das comunidades do campo desses setores a partir das ideias sedimentadas de o que é ser indígena ou o que é ser campesino na Serra com consequências devastadoras na reparação e restituição dos direitos territoriais campesinos.

Ao fim, os planos, programas e políticas desde onde se determinam o futuro das vidas de milhares de habitantes da Serra, se estabeleceram a partir do paradoxo das construções das jurisdicciones e fronteiras étnicas na Serra, paralelo à neoliberalização dos Estados e o fortalecimento das políticas de desenvolvimento centradas nas atividades de exportação reguladas pela economia global e a concentração fundiária.

O multiculturalismo operativo na Colômbia teve consequências diferentes nas comunidades subalternas que habitam a SNSM em contextos políticos e sociais voláteis. Mesmo que as duas comunidades viveram as atrocidades da violência guerrilheira, paramilitar e das forças militares, as políticas e planos que sobre a Serra se estabeleceram evidenciou um cenário desigual frente o acesso à terra entre as comunidades locais com efeitos devastadores para os campesinos; paradoxos que se ampliariam aos cenários institucionais da política de restituição de terras que terminaram negando na maioria dos casos o acesso a reparação territorial dessas comunidades.

REFERÊNCIAS

ABRAMS, Philip; GUPTA, Akhil; MITCHELL, Timothy. Antropología del estado. Traducción Marcela Pimentel. Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2015 [2006])

ACTUALIDAD ÉTNICA.COM, Pueblos talanquera: muralla de preservación cultural o cerco de aislamiento. Marzo 2009. Disponible en: <http://www.actualidadetnica.com/actualidad/paz-ddhh/7489-pueblos-talanquera-muralla-de-preservacion-ambiental-o-cerco-de-aislamiento.html>. Acceso en: marzo 2020.

AJA, Lorena. Tesis de grado. Agua, territorio y poder: representaciones, significados, usos y manejos del agua en la Sierra Nevada de Santa Marta. Noviembre de 2010.

ANDRADE, Lara E. A. de; DANTAS, Marcelino S.; NILSSON, Maurice T. “**Etnomapeamento da Terra Indígena Entre Serras Pankararu**”. Salvador: Anaí, 2016. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/pud00033.pdf>. Acesso em: novembro 2019.

AGNEW, J. “**The New Geographies of Power**” en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) **Human Geography Today**. London: Cambridge: Polity Press. 1999.

AGNEW, J. **Geografía del conocimiento en la política mundial**, en Tabula Rasa No. 4. p. 49-58, Bogotá. 2006.

ANZORC - Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Declaración política de la Asamblea Nacional de Anzorc. 2 mar 2016. Disponível em: <<http://prensarural.org/spip/spip.php?article14581> > Acesso em 3 set 2017.

BARTH, F. **Los grupos étnicos y sus fronteras**, en Nuria Fernández (coord.) **Lecturas de etnología: una introducción a la comparación en antropología**. Madrid: UNED. (2007 [1976]).

BASTIEN, Bosa. “Volver: el retorno de los capuchinos españoles al norte de Colômbia a finales del siglo XIX”. *Revista de Historia Regional y Local, Historelo*. Vol. 7, No. 14. Julio – diciembre 2015.

BECERRA, Carmen; OYAGA, Fabián. **Desplazamiento forzado y despojo de tierras en Chibolo: la comunidad campesina de la vereda El Encanto, que enfrentó la alianza entre el paramilitarismo y los procesos de adjudicación de tierras**. ILSA, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Bogotá, 2011.

BRIONES, c. “Formaciones de alteridad: Contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En *Cartografías Argentinas. Políticas Indigenistas y Formaciones Provinciales de Alteridad*, Editorial Antropofagia. Buenos Aires. 2005.

BLAIR, Elsa. Mucha sangre y poco sentido: la masacre. Por un análisis antropológico de la violencia. **Boletín de Antropología Universidad de Antioquia**, v. 18, n. 35, p. 165-184, 2004.

BOCAREJO, S. Diana. **Historias de diferencia: lugares ambientales indígenas y lugares de desarrollo campesino en Tipologías y topologías indígenas**. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2015

_____. Gobernanza del agua: pensar desde las fluctuaciones, los enmarañamientos y políticas del día a día. *Revista de Estudios Sociales*, no 63 (2018): 111-118. <https://doi.org/10.7440/res63.2018.09>.

CAETANO DA SILVA, José Luís. Conflitos fundiários e étnicos entre Pataxó e ‘sem-terra’ no extremo sul da Bahia. *Revista Antropológicas*, v. 14, n. 1, p. 1-28, 2003. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaantropologicas/article/view/23606> Acesso em: 2 de Março de 2020.

CASTREE, Noel. Differential geographies: place, indigenous rights and ‘local’ resources. *Political geography*, v. 23, n. 2, p. 133-167, 2004.

CECEÑA, A. **Renunciar al bien común: extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina** – 1ª. Ed. –Buenos aires, Mardulce, 2012.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR – CINEP- Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Sin año.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH – La Política de reforma agraria y tierras en Colômbia. Esbozo de una memoria institucional. **Imprenta Nacional de Colômbia**, 2013.

COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colômbia*, 2015.

CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. **Documento madre de la línea negra-Jaba Séshizha-de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta**. 2015.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLÔMBIA. **Sentencia T-005/16**. Corte Constitucional.

COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, **La reintegración. Logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas**. II informe de la comisión nacional de reparación y reconciliación. Bogotá, agosto de 2010.

COLÔMBIANA DE JURISTAS. **Cumplir metas, negar derechos. Balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017**. Bogotá, Colômbia. 2018.

MARCA PAÍS COLÔMBIA, “El arhuaco que lidera la exportación de productos indígenas”, 2019. Sitio web: <https://www.Colômbia.co/pais-Colômbia/talento-de-Colômbia/rogelio-mejia-el-arhuaco-que-lidera-la-exportacion-de-productos-indigenas/>. Visitado 12 de dezembro de 2020.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. **La política de reforma agraria y tierras en Colômbia. Esbozo de una memoria institucional.** Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.

_____, **Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano.** Resumen. Bogotá, 2014.

_____, **La maldita tierra: guerrilla, paramilitares, mineras e conflicto armado en el departamento de Cesar.** Bogotá, 2016.

_____, **Campesinos de tierra y Agua: memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe 1960 – 2015.** Campesinado en el departamento de la Guajira, Bogotá, 2017.

_____, **Campesinos de tierra y Agua: memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe 1960 – 2015.** Campesinado en el Magdalena, Bogotá, 2017.

CRISTANCHO GARRIDO, Hellen Charlot. Estrategias de territorialización campesina: encrucijadas entre el reconocimiento político y la autonomía territorial: constitución y funcionamiento de zonas de reserva campesina en Colômbia. 2016.

C. T. I. **Documento general de la propuesta de ampliación de los resguardos indígenas de la los pueblos kogui, arhuaco, kankwamo y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.** 2011.

CONVENIO CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS- AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ASDI. **Monografía EL Magdalena Grande. Proyecto de seguimiento a los procesos de negociación y diálogo entre grupos armados irregulares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.** 2005.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo No. 0077. 2002.

DELANEY, D. **Territory. A short introduction.** Oxford: Blackwell Publishing. 2005

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. **Censo nacional agropecuario 1970-1971.** Bogotá: Talleres DANE, 1974

_____. **Censo populacional 2005.**

_____. **Censo populacional. 2018.**

_____. **Comunidades Negras, AfroColômbianas, Raizales y Palenqueras.** Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/informe-resultados-comunidades-narp-cnpv2018.pdf>.

DEJUSTICIA. *Seminario 'Pasado, presente y futuro de la Ley de Víctimas'*. Bogotá, marzo 2020. Link de acceso: <https://www.youtube.com/watch?v=OBXbcsu5Kws>. Visitado em junho de 2020.

DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL (DPS). **Evaluación de los resultados que ha tenido la construcción y puesta en funcionamiento de los diez pueblos indígenas culturales del cordón ambiental y tradicional de la sierra nevada de santa marta, así como las operaciones de la fase dos del programa que consiste en el saneamiento y ampliación de los resguardos**. Informe Final. Econometría Consultores. Bogotá. 2012.

DUARTE, juliana. “Expulsión de los Misioneros Capuchinos por la Comunidad Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta- 1982”. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana. 2018.

REICHEL-DOLMATOFF, G. Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta. **Revista Colombiana de Antropología**, v. 1, p. 17-122, 1 ene. 1953.

DUARTE, C. **Desencuentros territoriales: la emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca**. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2015.

DUARTE, C. NEIRA, M. **Dossier “Interculturalidad, convivencias y gobernanzas territoriales”**. Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y del Instituto de Estudios Interculturales IEI de la Javeriana Cali. Número 205. 2015.

ESCOBAR, A. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? en Edgardo Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. **Buenos Aires: Flacso**. 2000.

_____. *Más allá del tercer Mundo. Globalización y diferencia*. **Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia**. 2005.

_____. Sentirpensar con la tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. **AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana**, v. 11, n. 1, p. 11-32, 2016.

_____. *Territories of difference. Place, movements, life, redes*. Duke University Press. 2008.

ESTRADA, J. **Territorios campesinos: la experiencia de las zonas de reserva campesina**. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, 2013.

FAJARDO, D. **Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra**. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia. 2002.

_____. *Tierra, poder político y reforma agraria y rural*”. En Cuadernos Tierra y Justicia, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA. 2002.

FERNANDES, B. M. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioterritoriais e movimientos socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”. **Revista Nera**. Presidente Prudente: UNESP. 2005.

_____. Sobre a tipologia de territórios. En: Saquet, Aurélio Marcos; Sposito, Eliseu Savério (org). **Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos e conflitos**. São Paulo: Expressão Popular. 2009.

FRANCO, V. L. y RESTREPO, J. Empresarios palmeros, poderes de facto y despojo de tierras en el Bajo Atrato”, en: ROMERO, Mauricio (ed.). **La economía de los paramilitares: redes de corrupción, negocios y política**. Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris - Random House Mondadori, 2011.

FRANCO, V. Orden. **Constrainsurgente y dominación**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Instituto Popular de Capacitación, 2009.

FUNDACIÓN PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, Historia y geografías Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá, 1991.

FUNDACIÓN CULTURA DEMOTRÁTICA. Cuando la Madre Tierra llora: crisis en derecho humano y humanitario en la Sierra Nevada de Gonawindúa (Santa Marta). Coordinación editorial, Álvaro Villarraga Sarmiento, 2009.

GARCIA, J.P. Los aportes epistemológicos del pensamiento antropológico sobre el Estado moderno y las etnografías sobre sus prácticas cotidianas. **univ.humanist**. n.82, pp.105-134. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uh82.aepa>. Acesso: 2 de Março de 2020

GONZÁLEZ-PLAZAS, Santiago. **Pasado y presente del contrabando en la Guajira aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región**. Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD). Facultad de Economía. Bogotá: Universidad del Rosario, 2008.

GUPTA, A. *Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State*. American Ethnologist Vol. 22, No. 2, pp. 375-402 (28 pages), May, 1995.

GUTIÉRREZ F. El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: **IEPRI: Debate**, 2014.

HANSEN, T. B. y STEPPUTAT, F. (2001). **States of imagination. Ethnographic Explorations of the Postcolonial State**. Durham: Duke University Press, 2001.

HARVEY, D. **A produção capitalista do espaço**. Coleção Geografia e Adjacências, Annablume, São Paulo. 2005.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. **Império**. Tradução Alcira Bixio. Edições Paidós Ibérica S.A., Barcelona. 2005.

HAESBAERT. Rogério. Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão. In: CASTRO, I. E. de.; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (Org.). **Geografia: conceitos e temas**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 165-205.

_____. O mito da desterritorialização: Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HERZFELD, Michael. 1992. The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy. Chicago: The University of Chicago Press.

HOLLINGER, F. Del mercado de tierras al mercado de reforma agraria. en: SUAREZ, Ruth y MACHADO, Absalón (coordinadores). **El Mercado de Tierras en Colômbia ¿Una alternativa viable?**, Colômbia, Tercer Mundo Editores en coedición con el CEGA y el IICA, 1999.

HOYOS CASTAÑEDA, Patricia. **La inversión extranjera y la conformación de la Zona Bananera en el Departamento del Magdalena, 1880-1920**. 1982. Tese de Doutorado. Tesis de Grado, Departamento de Historia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

HOYOS, P. **La inversión extranjera y la conformación de la Zona Bananera en el Departamento del Magdalena, 1880-1929**, Tesis de grado. Departamento de historia, Pontificia Universidad Javeriana. 1982. Bogotá.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Subdirección de Agrología: Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras: departamento del Magdalena, escala 1:100.000. Bogotá: Imprenta Nacional de Colômbia, 2009.

_____, Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colômbia. El Instituto, Bogotá: Imprenta Nacional de Colômbia, 2012.

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN – IPC, Memoria de la Impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo. Editor Corporación Jurídica Libertad. Medellín, 2010. Disponible en el siguiente link: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colômbia/ipc/20170809051132/pdf_763.pdf. Visitado en febrero de 2020.

JABARDO, V. “Dinámicas socioterritoriales en la Amazonía Boliviana. El territorio indígena mojeño-ingaciano como estudio de caso”. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 2013.

SOUSA, Boaventura; RODRIGUEZ, César. Capítulo 1. “El derecho, la política y los subalterno en la globalización contrahegemónica”. Páginas 7 a 28. En: El Derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita. Anthropos; México: Cuajimalpa, 2007.

SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre o espaço e poder, autonomia e desenvolvimento (pág. 77 – 116) In CASTRO, Iná et al (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

MANTILLA VALBUENA, Silvia Cristina. Seguridad y narcotráfico en el gran caribe: geopolítica, integración regional y otros dilema asociados. En **Papel Político**, vol. 16, núm. 1, 269-297, 2011, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colômbia.

MEDINA GALLEGOS, Carlos. La economía de guerra paramilitar: una aproximación a sus fuentes de financiación. En: *Análisis político* n° 53, Bogotá, enero-marzo, 2005.

MEDINA GALLEGOS, CARLOS. FARC-EP y ELN. Una historia política comparada (1958-2006). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia. Trabajo de grado presentado para optar por el título de Doctor en Historia, 2010.

MORENO, Aurora. Seguridad democrática y militarización en Colombia: más allá del conflicto armado. *Urvio: Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*. Departamentos de Asuntos Públicos – FLACOS Sede Ecuador. No.12. Diciembre 2012.

MORA, Alexandra; NARANJO, Edgar; RODRÍGUEZ, Gloria; SANTAMARÍA, Ángela. Conflictos y judicialización de la política en la Sierra Nevada de Santa Marta. Editorial Universidad del Rosario. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de jurisprudencia. Bogotá, octubre 2010.

GALLEGOS, CARLOS. Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado. Buenos aires: CLACSO, 2012.

MEJÍA, C. Las tensiones tras la zona de reserva campesina del catatumbo, **Verdad Abierta** 2017. <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/6522-las-tensiones-tras-la-zona-de-reserva-campesina-del-catatumbo>. Acceso 15 de Octubre de 2017

MENDEZ, Y. A. “Derecho de los campesinos al territorio, justicia y Zonas de Reserva Campesina, la experiencia del Valle del río Cimitarra”. **Bogotá: Antropos**. 2014.

MIGNOLO, W. Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Ediciones Akal, S.A. Traducción de Juanmari Madariaga, Cristina Vega Solís. Madrid, 2003.

MIGNOLO, W. Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade. Tradução de Marco Oliveira. **Revista Brasileira de Ciências Sociais** - Vol. 32. N° 94. Junho de 2017.

MILLAN Z. S. Efeitos da guerra civil Colombiana nas trajetórias dos agricultores do município de maría la baja. **Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul**. 2015.

MOREIRA, R. A formação espacial brasileira. **Contribuição crítica aos fundamentos espaciais da geografia do Brasil**. Editora Consequência. 2012.

MOLANO, A. **Contribución a una historia oral de la colonización de la SNSM, Diagnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta**. Fundación Pro Sierra Nevada. 1988.

MOLANO, A. Coca. Conferencia de Ciencias en Bicicleta. Parque Explora. Medellín. 2011.

MOLANO, A. “A Lomo de Mula. Viajes al corazón de las Farc”. Aguilar. Bogotá (2016).

MONTAÑEZ, G. Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional en **Cuadernos de Geografía**. Vol. VII. Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 1998

MORALES D, G. **El libro de los Mamus: Apuntes sobre la historia, la geografía y la sabiduría de una cultura de paz y armonía en la SNSM**. Chía. 2015.

MÚNERA, Leopoldo. **Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988**, Bogotá: Cerec, Iepri y Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 1998.

Municipio de Fundación, Magdalena. Plan básico de ordenamiento territorial 2000-2009

Municipio de Aracataca, Magdalena. Plan básico de ordenamiento territorial 2000-2009.

NARVÁEZ RODRÍGUEZ, Junis. Conflictos agrarios en el sur del departamento del atlántico, 1958-1974. (Tesis de pregrado de Historia) Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 2015. Consultado en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/51170/1/72347105.2015.pdf> acceso 15 de Outubro de 2017

OCAMPO Q. “Catatumbo: ¿territorio intercultural? Discusiones frente al aplazamiento de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo”. <http://viva.org.co/cajavirtual/svc0394/articulo08.html>, 2015. Acceso 2 de outubro de 2017.

OLIVEIRA, A. U. A geografia agrária e as transformações territoriais recentes no campo brasileiro. In: CARLOS, Ana F. A. (Org.). **Novos caminhos da geografia**. São Paulo: Contexto. 1999.

OLIVEIRA, A. U. Geografia agrária: perspectivas no início do século XXI. En: OLIVEIRA, Ariovaldo U. de; MARQUES, Marta Inês Medeiros (Org.). **O campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da justiça social**. São Paulo: Casa amarela; Paz e Terra. 2004.

OLIVEIRA, Jacson; SANTOS, Josefa. **O Monocultivo de eucalipto como expressão capitalista da busca de territórios de consumo**. Questão agraria e conflitos territoriais. Outras expressões, São Paulo, 2016.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. Documento de trabajo para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en **Colômbia Libia Grueso**. 2009.

OSLENDER, U. Espacio, lugar y movimientos sociales hacia una "espacialidad de resistencia en **Scripta Nova** n°. 6.115 p1, 2002

OLAYA, C. E. **Territorios interculturales. Hacia un reconocimiento jurídico de acuerdos territoriales entre indígenas, afros y campesinos**. Grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2017).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA

PALACIOS, M. El café en Colômbia, 18mica, social y política. 4a edición corregida y actualizada, Mexico, El colegio de México, 2009.

_____. **¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930.** Universidad de los Andes. Bogotá, Colômbia. 2011.

POULANTZAS, N. **Clases sociales y poder político en el Estado capitalista.** México, Siglo XXI, 1969.

POULANTZAS, N. **Hegemonía y dominación en el Estado moderno.** México, Siglo XXI, 1977.

PNUD. Perfil productivo. Municipio de Aracataca, Maldonado Atencio (coord.) Ministerio del Trabajo, Red Ormet, p. 11. Disponible en <http://www.redormet.org/documento/perfil-productivo-aracataca/>

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. Tradução: Maria Cecília Franca. Editora Ática S.A. 1993.

RAMOS, Eraldo D.; MITIDIERO, Marco A.; SOUZA, Lainy R. Questão agrária e conflitos territoriais. 1º edição. Outras Expressões São Paulo – 2016.

REYES QUEZADA, LUISA. El desmonte parcial de las AUC y la reconfiguración del fenómeno paramilitar”. Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Sociología. Bogotá: **Universidad Nacional de Colômbia**, 2012.

RINCÓN, J. Territorialidade e conflito entre indígenas e campesinos no departamento do Cauca, Colômbia. 1991 – 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência, Geografia). Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, 2013.

ROMERO, Julio. “Movilidad social, educación y empleo. Los retos de la política económica del departamento del Magdalena”, em Documentos de trabajo sobre economía regional, núm. 74, Cartagena de Indias, Banco de la República, junio de 2006.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2002.

SÁ, A. J. O Brasil e as geografias do medo: sim, a história da barbárie humana se repete! Revista de geografia, Programa de Pós-graduação da UFPE. v. 22, n. 1. 2005.

SACK, R. D. **Human territoriality: its theory and history.** CUP Archive. 1986.

SALAZAR, L. ¿Cuántos somos los negros en Colômbia ?. Africa Fundación Sur, fevereiro 2020. Disponível em; <http://www.africafundacion.org/cuantos-somos-los-negros-en-Colômbia-por-licencia-salazar>. Data de acesso: 3 de setembro de 2020.

SANCHEZ, N. Los proceso de paz de los Baris, *El Espectador*. 2016. <https://Colômbia2020.elespectador.com/territorio/los-procesos-de-paz-de-los-baris>. Data de acesso: 15 Outubro.

SANCHEZ, N. La interculturalidad el tema de discusión para la zona de reserva campesina. *La Opinión*. 2015. Disponível em: <https://www.laopinion.com.co/region/la-interculturalidad-el-tema-de-discusion-para-la-zona-de-reserva-campesina-97876#OP>. Data de acesso: 15 de Outubro de 2017.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. 3.ed. São Paulo: Hucitec. 1999.

SAQUET, M. Por uma abordagem territorial. En: **Territórios e territorialidades**. São Paulo: Expressão Popular. 2009.

_____. Contribuições teórico-metodológicas para uma abordagem territorial multidimensional na geografia agrária Em: **Territorialidades e diversidades nos campos e nas cidades latino-americanas e francesas**. Org. Marcos Aurélio Saquet, Júlio Cezar Suzuki e Glauci. Outras Expressões. 2011.

SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL, Conferencia Episcopal de Colômbia, DEFENSORIA DEL PUEBLO. **Informe de seguimiento. Situación en derechos humanos y derecho humanitario de la Sierra Nevada de Santa Marta**. Fundación Cultura Democrática. 2006.

EPISCOPAL DE COLÔMBIA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de la comisión de observación de la crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Diciembre de 2003.

SANTOS, Milton. *A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção*. Hucitec, São Paulo, 1996. (3ª edição: 1999).

SILVA VALLEJO, FABIO. Memorias de violencia: bonanza marimbera en la ciudad de Santa Marta durante la década del setenta al ochenta. Santa Marta: Universidad del Magdalena. Grupo de investigación sobre oralidades, narrativa audiovisual y cultura popular en el caribe Colombiano, 2012.

_____. Reconstrucción de la memoria oral de los desmovilizados y desplazados en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira entre 1980 y el 2009. Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2011 (Doc. PDF).

SOJA, S. “*Thirdspace: Expanding the Scope of Geographical Imagination*” en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press. 1999

SOUSA SANTOS, Boaventura y RODRÍGUEZ, Cesar. **El derecho y la globalización desde abajo**. Bogotá: Antrhopos. 2007.

SOLÁ, M. **R-Existências Dos Campesinos/As Do Que Hoje É Suape: Justiça Territorial, Pós-Desenvolvimento E Descolonialidade Pela Vida**. Universidade Federal de Pernambuco. Centro De Filosofia E Ciências Humanas Departamento De Ciências Geográficas Programa De Pós-Graduação Em Geografia, 2017.

SUÁREZ, Ruth. (1999). De una política de reforma agraria hacia una de reforma rural. En Machado y Suárez (compiladores). **El mercado de tierras en Colômbia, ¿una alternativa viable?** Bogotá: CEGA, IICA, Tercer Mundo Editores.

TAUSSIG, Michael. "Maleficio: state fetishism" In *Fetishism as cultural Discourse*, edited by Emely Apter and William Pietz. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1993

TOBON, G. J. **Autonomías territoriales. Experiencias y desafíos.** Bogotá. Ed. Pontificia universidad Javeriana, Bogotá. 2012.

TREJOS, L.; BADILLO, R. Los. **Cuatro conflictos del Caribe Colombiano: Balance de la confrontación armada durante el primer semestre del 2020.** Centro de pensamiento UNCaribe. Universidad del Norte. Barranquilla. 2020.

VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta.** Bogotá. Marzo de 2006.

ULLOA, Astrid. La construcción del nativo ecológico. Instituto Colombiano de antropología e Historia – ICANH- Colciencias, Bogotá, 2004.

UPRIMNY, RODRIGO Y MAURICIO GARCÍA VILLEGAS. Corte Constitucional y emancipación social en Colômbia. En *Emancipación social y violencia en Colômbia*, editado por Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, 463-514. Bogotá: Norma. 2004. USAID, Programa MIDAS – ACCIÓN SOCIAL. Siembra de 543 ha de Palma Africana en El Retén Magdalena, Logros del proyecto y gestiones para la sostenibilidad. Convenio A-00079-06 C.I. EL ROBLE S.A. Septiembre 2010.

USAID, Programa MIDAS. cultivo de palma de aceite con el apoyo de Usaid-Midas: un ejemplo de desarrollo alternativo en Colômbia. En *Palmas*, Volumen 20 No Especial. Disponible en:
2008<http://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/viewFile/1377/1377> Acceso: 2 de Setembro de 2020.

VILORIA, de la Hoz. Historia empresarial del Guineo: Empresas y empresarios bananeros en el departamento del Magdalena, 1870 – 1930, en **Cuadernos de Historia Económica y Empresarial.** No. 23, Cartagena: Banco de la República, 2014.

ZIBECHI, R. Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes antiestatales Barcelona, 2007.

APÊNDICE A - ENTREVISTAS

- BERNAL, A.F. Entrevista Campesino 01. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesino 02. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesina 03. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesino 04. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesina 05. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesino 06. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesina 07. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Campesino 08. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionario 01. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionaria 02. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionaria 03. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionaria 04. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionario 05. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionario 06. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Funcionario 07. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Lider Indígena Resguardo Arhuaco setores Aracataca e Fundación 01. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Lider Indígena Resguardo Arhuaco setores Aracataca e Fundación 02. Magdalena, Colômbia, fevereiro de 2019.
- _____. Entrevista Lider Indígena Resguardo Arhuaco setores departamento do Cesar 03. Cesar, Colômbia, fevereiro de 2019.